

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**

**FACULTAD DE DERECHO**



**TESIS DOCTORAL**

**Competencia judicial internacional para daños civiles asociados a  
daños ambientales**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

**Pía Monserrat Moscoso Restovic**

Director

Francisco Pinilla Rodríguez

**Madrid, 2014**

**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset**



**COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL  
PARA DAÑOS CIVILES ASOCIADOS  
A DAÑOS AMBIENTALES**

Tesis de investigación presentada en conformidad a los requisitos  
para optar al grado de

**Doctor en  
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales**

Programa de Doctorado en  
Derecho Internacional y Relaciones Internacionales

---

Presentada por:

***Doña PÍA MONSERRAT MOSCOSO RESTOVIC***

Dirigida por:

Dr. Francisco Pinilla Rodríguez

*Madrid, España*

*2013*



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN  
ORTEGA Y GASSET



COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA DAÑOS  
CIVILES ASOCIADOS A DAÑOS AMBIENTALES

Tesis doctoral que presenta la Licenciada D.E.A y Máster en Derecho

**Dña. PÍA MONSERRAT MOSCOSO RESTOVIC**

Bajo la dirección del Prof. Dr.

**Dn. Francisco Pinilla Rodríguez**

Director de Departamento  
Titular de Derecho Público, Administrativo y Ambiental  
Universidad Central de Chile

Madrid, abril de 2013

© Pía Moscoso Restovic, 2013



**UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID**  
**Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset**

**COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA DAÑOS  
CIVILES ASOCIADOS A DAÑOS AMBIENTALES**

**Tesis presentada por la Licenciada en Ciencias Jurídicas, Magister en Derecho de Minas, subespecialidad Aguas y Medio Ambiente, doña Pía Monserrat Moscoso Restovic, para la obtención del título de Doctor en Derecho, especialidad en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Elaborada bajo la dirección del Doctor don Francisco Pinilla Rodríguez, profesor titular de la Universidad Central de Chile.**

**Madrid, abril del 2013**

**Tesis elaborada conforme:**

1.- A las directrices y recomendaciones señaladas por el Programa de Doctorado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, para Tesis doctorales presentada para ante la Universidad Complutense de Madrid.

2.- International Standarization Organization (ISO) 690-2 norm, para Memorias de Grado, Tesis y notas al pie de página. Utilizado para citas al pie de página y bibliografía, excepto en lo referente a la locación geográfica de las obras.

A mi familia.

Por ese amor infinito que  
comprende tiempos y distancias.





### **Agradecimientos:**

A la Universidad de Atacama de Chile, por permitirme cursar estudios de postgrado en España. En concreto a la Facultad de Ciencias Jurídicas, y muy especialmente a su Decano, don Mario Maturana Claro, por su apoyo, gestión y disposición de tiempos y recursos para el buen desarrollo de este trabajo.

Al Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset-Marañón, a su Programa de Doctorado de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, especialmente Director, profesores y personal administrativo, por la calidad, afabilidad y cercanía que permiten el cultivo de la disciplina. Agradezco especialmente la beca de matrícula recibida para el segundo año del Diploma de Estudios Avanzados, 2009-2010.

A la profesora Soledad Torrecuadrada García-Lozano, por la solución siempre eficiente en la no menos compleja labor administrativa con presteza solícita.

A los profesores de Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado en España, y entre ellos, en especial a los profesores don Miguel Unceta Laborda y doña Marina Vargas Gómez-Urrutia. Al profesor de Derecho Procesal y Letrado del Tribunal Constitucional de España don Jesús María González García. A quien fue mi tutora en la tesina de Diploma de Estudios Avanzados doña Ana Crespo Hernández. Asimismo a todos los profesores que me hicieron aportaciones en forma anónima, siendo por esa razón grandes maestros. Todos los anteriores, entregaron su tiempo sin condiciones, en forma gratuita y apostando por el nuevo conocimiento, sin preconceptos.

Finalmente a mi buen Director de Tesis Doctoral don Francisco Pinilla Rodríguez. El que goza de una virtud muy especial: no conocer de *reservatio mentalis* ni de *iocandi causa*. Viviendo y enseñando el cultivo de la disciplina y del Derecho en general con perspectiva generosa.



## SIGLAS

B.M.	Banco Mundial
C.D.I.	Comisión de Derecho Internacional
C.E.P.A.L.	Comisión económica para América Latina y el Caribe.
C.I.J. (I.C.J.)	Corte Internacional de Justicia (International Court of Justice)
C.N.U.D.M.I. (UNCITRAL)	Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (United Nations Commission on International Trade Law)
F.N.U.A.P.	Fondo de Naciones Unidas para la Población
O.M.C.	Organización Mundial de Comercio
ONG	Organización no gubernamental
P.N.U.D.	Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
T.E.D.H.(E.C.H.R.)	Tribunal Europeo de Derechos Humanos (European Court of Human Rights)
T.J.U.E. (C.J.E.U.)	Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Court of Justice of European Union)
U.N.C.C.	United Nations Commission Compensation
U.N.E.S.C.O.	Organización Científica, Educativa y Cultural de Naciones Unidas
U.E.	Unión Europea
U.N.E.C.E.	United Nations Economic Commission for Europe



## ACRONIMOS

BOE	Boletín Oficial del Estado español
CJCI (CJI)	Competencia judicial civil Internacional (Competencia judicial internacional)
DOUE (antes DOCE)	Diario Oficial de la unión Europea (antes Diario Oficial de las Comunidades Europeas)
ILC Report	International Law Comission Report to the General Assembly
La Ley	Revista Jurídica española La Ley
MAC	Método abierto de Coordinación
PIB	Producto Interno Bruto
REEI	Revista Electrónica de Estudios
ROJ	Rol ordinario Judicial del Tribunal Supremo español
RSA	Recueil des Sentences arbitrales, Nations Unides Internacionales
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional español
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas
STJUE	Sentencia del Tribunal de justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo español
Tratado CE (TCE)	Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (actual Tratado de funcionamiento de la Unión Europea)
Tratado UE (TUE)	Tratado constitutivo de la Unión Europea
UNRIAA	United nations reports of international arbitral awards



## ABREVIATURAS

Art.	artículo
C.	código
cap.	capítulo
C.C.	Código Civil
cfr.	confróntese
C.P.	Código Penal
D.F.L.	Decreto con Fuerza de Ley
D.L.	Decreto Ley
D.S.	Decreto Supremo
Ed.	Editorial
et. al.	y otros.
eds.	editores
F.M.	Fallos del Mes
G.J.	Gaceta Jurídica
G.T.	Gaceta de los Tribunales
ib.	ibídem, en el mismo lugar
loc.cit.	loco citato, lugar citado
Nº	número
ob.cit.	obra citada del mismo autor
p.	página
pp.	páginas
s.a.	sin año
s.d.	sin dato
s.l.	sin lugar de edición
sec.	Sección
ss.	siguientes
T.	tomo
v.gr.	verbi gratia, por ejemplo
Vol.	volumen





## ÍNDICE GENERAL

Dedicatoria.....	7
Agradecimientos.....	9
Siglas.....	11
Acrónimos.....	13
Abreviaturas.....	15
Índice General.....	17
Prefacio.....	23
 ABSTRACT.....	 31
I. Introduction. ....	31
II. - Object of Study. ....	32
1. - General Objective. ....	33
2. - Objectives of the First Part. ....	33
2.1. - Specific Objectives of Chapter I. ....	33
2.2. - Specific Objectives of Chapter II. ....	34
2.3. - Specific Objectives of Chapter III.....	34
3. - Objectives of the Second Part.....	34
3.1. - Specific Objectives of Chapter I.....	34
3.2. - Specific Objectives of Chapter II.....	35
3.3. - Specific Objectives of Chapter III.....	36
4. - Conclusions.....	36
 I.- INTRODUCCIÓN.....	 45

## I PARTE

### COMPETENCIA JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL POR DAÑO AMBIENTAL

#### CAPÍTULO I. OBJETO DE ESTUDIO

I.- Objeto de estudio.....	63
i.- Planteamiento general del problema fáctico.....	63
ii.- Justificación del tema.....	66
iii.- Planteamiento del problema jurídico.....	68
iv.- Limitaciones. ....	73

II.- Estructura de la tesis. ....	76
III.- Objetivos.....	80
1.- Objetivo general. ....	80
2.- Objetivos de la Primera Parte.....	80
i.- Objetivos específicos del Capítulo I.....	81
ii.- Objetivos específicos del Capítulo II.....	82
iii.- Objetivos específicos del Capítulo III.....	82
3.- Objetivos de la Segunda Parte.....	83
i.- Objetivos específicos del Capítulo I.....	84
ii.- Objetivos específicos del Capítulo II.....	85
iii.- Objetivos específicos del Capítulo III.....	86
IV. Metodología.....	86
V.- Marco Referencial.....	91
i.- De una Visión publicista a una visión privatista de la responsabilidad extracontractual por daño ambiental.....	92
ii.- De la visión iusprivatista de la responsabilidad internacional a un sistema europeo de competencia judicial internacional: el Reglamento (UE) No. 1215/2012.....	100
VI.- Marco Teórico.....	105
i.- Del problema de las interpretaciones restrictivas en materia ambiental: la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema.....	110

## **CAPÍTULO II. PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

1.- Del <i>soft law</i> a la positivización de principios.....	119
2.- Principio garante de tutela judicial efectiva. Fundamento jurisprudencial para la flexibilización de los fueros de competencia.....	128
3.- Principio de soberanía sobre los recursos naturales y responsabilidad de no causar daño al medio ambiente de otros Estados o de zonas fuera de la jurisdicción nacional.....	138
4.- Principio de cooperación internacional en materia ambiental.....	139
5.- Principio de cooperación internacional en materia de jurisdicción. Convenios especiales de jurisdicción.....	143
6.- Principio el que contamina paga.....	148
7.- Principio de la responsabilidad común pero diferenciada de los Estados.....	150
8.- Conclusiones.....	151

### **CAPÍTULO III. SISTEMA EUROPEO DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA DAÑOS CIVILES ASOCIADOS A DAÑOS AMBIENTALES**

1.- De la obligación internacional extracontractual por daño ambiental.....	155
2.- De la determinación del foro en razón de un delito o de un cuasidelito civil. Crítica desde la noción de “obligación extracontractual” .....	163
3.- Cooperación judicial y cooperación administrativa para el ejercicio de acciones civiles internacionales por daño ambiental.....	169
4.- Lo “delictual y cuasidelictual” en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 .....	177
5.- La “proximidad razonable”: marco para la categorización de los fueros de competencia judicial internacional.....	182
6.- Conclusiones.....	194

## **SEGUNDA PARTE**

### **FOROS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA DAÑOS CIVILES RELACIONADOS A UN DAÑO AMBIENTAL**

#### **CAPÍTULO I. DEL HECHO DAÑOSO Y DE LA REGLA DE UBICUIDAD**

1.- Antecedentes.....	201
2.- Del foro general: domicilio del demandado.....	204
3.- Del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.....	209
4.- Concepto de hecho dañoso.....	214
5.- La Regla de Ubicuidad. ....	220
6.- Problemas para aplicar la Regla de ubicuidad: concurrencia de daños civiles y daños ambientales.....	230
7.- Regla de ubicuidad: evolución jurisprudencial en el TJUE.....	238
8.- Pauta para determinar la extensión de los daños internacionales civiles y ambientales: la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo..	244
9.- Problemas ocasionados de la disociación espacial entre el hecho generador y el daño. ....	247
9.1.- Del riesgo del <i>forum shopping</i> .....	248
9.2.- <i>Forum necessitatis</i> y foros de protección.....	255
9.3.- Problemas con la doctrina del <i>forum non conveniens</i> .....	263
9.4.- Prohibición de <i>anti-suit injunctions</i> . ....	274
10.- Interpretación extensiva del fuero especial para delitos y cuasidelitos.	

Principio <i>favor laesi</i> .	277
11.- La “parte más débil” de la relación internacional: jurisprudencia y análisis para daños ambientales.	282
11.1.- Asunto <i>FBTO Schadeverzekeringen NV</i> (STJCE, C-463/06).	287
11.2.- Asunto <i>Vorarlberger Gebietskrankenkasse</i> (STJC -347/08).	290
12.- Conclusiones.	294

## **CAPÍTULO II. DEL HECHO GENERADOR.**

1.- Planteamiento del problema. Relación con la Regla de Ubicuidad. Importancia.	301
2.- De la atribución de responsabilidad para un demandado plurilocalizado.	315
3.- Artículo 8.1 Reglamento (UE) No. 1215/2012. Unidad de acción en empresas transnacionales. Diferencias con la simple conjunción de demandado múltiple.	323
4.- Sentido y alcance del Artículo 8.1 Reglamento (UE) No. 1215/2012 para demandado plurilocalizado y para demandado múltiple.	329
4.1.- Vinculación estrecha entre las demandas.	329
4.2.- Lo oportuno y lo conveniente en la tramitación y sentencia de demandas vinculadas.	334
5.- Pluralidad de Demandados. Jurisprudencia del TJUE.	336
6.- Grupos de sociedades.	346
6.1.- Hecho generador en los grupos de sociedades.	347
6.2.- Hecho generador y las relaciones de dominio, control e influencia en Grupos de Sociedades.	352
7.- Conclusiones.	357

## **CAPITULO III. DEL DAÑO.**

1.- Antecedentes.	362
2.- Distinciones entre daños ambientales, daños ecológicos y daños civiles.	369
3.- Del daño civil transnacional.	374
4.- Diferencias entre daño civil y daño ambiental.	382
4. 1.- Daño significativo. Matices entre daños ambientales y daños civiles.	382
4. 2.- Certidumbre del daño.	387
5.- De la extensión del daño. Daños directos y daños indirectos.	390
5. 1.- Criterio de la equivalencia de las condiciones	400

5. 2.- Criterio del vínculo de proximidad.....	404
5. 3.- Criterio según el riesgo incrementado.....	409
6.- Conclusiones.....	417

## **CAPÍTULO FINAL**

### **CONCLUSIONES GENERALES**

1.- Síntesis descriptiva.....	419
2.- Hallazgos y valoraciones finales.....	420
3.- Propuesta para una modificación al Reglamento (UE) No. 1215/2012.....	442

## **BIBLIOGRAFÍA**

1.- Libros. ....	447
2.- Artículos de Revistas. ....	459
3.- Documentación. ....	485
3.1.- Convenios de Derechos Humanos seleccionados. ....	485
3.2.- Tratados multilaterales de origen no comunitario sobre Derecho Internacional Privado. ....	485
3.3.- Convenios multilaterales de origen comunitario y no comunitario con incidencia en la protección del medio ambiente.....	486
3.4.- Tratados multilaterales sectoriales de responsabilidad civil por daño nuclear, hidrocarburos y sustancias peligrosas.....	487
3.4.1.- Tratados multilaterales en materia nuclear.....	487
3.4.2.- Tratados multilaterales en materia de hidrocarburos.....	488
3.4.3.- Tratados multilaterales en materia de sustancias peligrosas.....	489
3.5.- Tratados comunitarios.....	490
3.5.1.- Tratados constitutivos de la Unión Europea.....	490
3.5.2.- Convenios comunitarios sobre Competencia Judicial Internacional.....	490
3.6.- Directivas comunitarias citadas.....	491
3.7.- Reglamentos comunitarios citados.....	491
3.8.- Documentación oficial de organismos internacionales.....	492
3.8.1.- Documentación oficial de organismos comunitarios.....	492
3.8.2.- Documentación oficial de organismos internacionales no comunitarios...	493
3.9.- Libros Verdes de convenios y reglamentos comunitarios.....	496
3.10.- Leyes nacionales de Estados europeos y no europeos citadas.....	497
4.- Jurisprudencia. ....	498
4.1.- Corte Permanente de Justicia Internacional.....	498

4.2.- Corte Internacional de Justicia.....	498
4.3.- Tribunal Europeo de Derechos Humanos.....	498
4.4.- Jurisprudencia y conclusiones del Tribunal de Justicia europeo.....	498
4.4.1.- Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.....	498
4.4.2.- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.....	502
4.4.3.- Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas. ....	503
4.5.- Tribunales arbitrales internacionales. ....	504
4.6.- Jurisprudencia de Tribunales nacionales.....	505
4.6.1.- Tribunales españoles. ....	505
4.6.2.- Tribunales de Estados comunitarios sin incluir a España.....	506
4.6.3.- Tribunales de Estados extracomunitarios.....	507
4.7.- Acuerdos extrajudiciales .....	508

## PREFACIO.

El Estado que se desarrolla desde principios del s. XXI y la sociedad civil post-contemporánea <sup>(1)</sup> se desenvuelven internacionalmente a través de relaciones interdependientes entre si <sup>(2)</sup>.

En este sentido, las políticas públicas nacionales creadas para el desarrollo económico de los Estados se han convertido un producto –a veces en reacción - de los ciclos y de las crisis económicas internacionales. Por otro lado, el Estado continúa estando sujeto a las demandas internas, que crecen, presionan y exigen mayor bienestar y justicia social. En este contexto, muchas veces, las políticas públicas nacionales son incapaces de alcanzar - por si solas - los objetivos de bienestar, justicia social, crecimiento económico y desarrollo sustentable, tal como demandan sus ciudadanos.

A principios del siglo XXI, uno de los mayores desafíos guarda relación con un objetivo cuya consecución depende en gran medida de acuerdos en la comunidad internacional: alcanzar un alto nivel de protección ambiental y sostenibilidad del sistema económico, político y social. Sin embargo, este objetivo se debe alcanzar en modelos de desarrollo económico nacional que, cualitativamente, son tan plurales como países existen en el planeta. En efecto, existen Estados con economía de

---

<sup>(1)</sup> Mitos y críticas a la denominación en: Sánchez Lorenzo, Sixto, Estado democrático, postmodernismo y Derecho Internacional Privado, Revista de Estudios Jurídicos, Número 10, Segunda Época, Universidad de Jaén, 2010.

<sup>(2)</sup> De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel, “Luces y sombras de la Globalización”, en *Derecho Internacional y Cunitario ante los retos de nuestro tiempo*: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia. Coord. por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, Marcial Pons, España, 2009, pp. 159-176. Fernández Pons, Xavier, “El Derecho Internacional público ante el “trilema” de la globalización”, en *Derecho Internacional y Cunitario ante los retos de nuestro tiempo*: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia. Coord. por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, Marcial Pons, España, 2009, pp. 233-272. Fernández González, Miguel Ángel, “Globalización: Rol del Derecho Público y Transformación del Estado”, *Revista Chilena de Derecho*, Número especial, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998, pp. 45-50.



mercado, Estados con economía social de mercado y Estados con economía de planificación indicativa que mirados en conjunto se enfrentan al mismo problema de desarrollo sostenible desde sus distintas estrategias. Todos sus modelos tratan de asegurar las variables económicas básicas, en la medida que sus posibilidades lo permiten. Con todo, en la mayoría de los Estados (salvo los Estados de economía centralmente planificada) los objetivos que se dirigen al sector privado no son legalmente ejecutables; sino que operan en base a la movilización sistemas de premios y de castigos que se articulan en la delicada ecuación sobre protección ambiental y desarrollo económico-social.

Todo lo anterior constituye un cuadro de referencia para el Derecho Internacional, el que no puede actuar ajeno a los mecanismos, procedimientos y evolución de los agentes económicos y sociales internacionales. Son los comienzos del Derecho Global, el que se desenvuelve entre normas cooperativas (o no vinculantes) algunas de las cuales están redactadas con vaguedad, otras con fines exhortatorios y otras aun utilizando básicamente la diplomacia y la negociación para dotarse de eficacia.

El escenario jurídico es complejo, y lo es aún más en temas ambientales; donde siguen pendientes tareas tales como armonización, uniformidad y unificación de los ordenamientos jurídicos. Sólo desde la Unión Europea, parece desarrollarse en forma más responsable un proceso dirigido hacia el ideal del “Imperio de la Ley internacional”, en el cual encontramos normas y organismos de Derecho Internacional Público jugando roles jurídicos fundamentales <sup>(3)</sup>. Sin embargo, y según se viene advirtiendo desde hace tiempo, aún pervive el escepticismo frente a la idea de un Derecho común internacional <sup>(4)</sup> única garantía absoluta en materia de interpretación y eficacia jurídica.

---

<sup>(3)</sup> Ver comentarios en: Laporta, Francisco J., “Globalización e Imperio de la ley. Algunas dudas Westfalianas”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Número 9, 2005, pp.177 y ss.

<sup>(4)</sup> Austin, John, *The Province of Jurisprudence Determined*, Londres, 1861, p. 127.

En efecto, todavía nos encontramos lejos de un Derecho Transnacional o Global, lo cual resulta paradójico sobre todo si se considera que los principales actores de nuestro siglo son las empresas transnacionales y los sujetos individuales con capacidad jurídica internacional. En lugar del Derecho Transnacional o Derecho Global tenemos normas de conflicto y tratados internacionales que han seguido multiplicándose exponencialmente. Todo lo anterior demuestra la complejidad y la intensidad que existe en las relaciones internacionales. Esta situación obliga a reposicionar la importancia del problema de la eficacia del Derecho a través del imperio de la ley y de la interpretación judicial.

En efecto, las relaciones jurídicas internacionales siguen teniendo respuestas insuficientes desde la perspectiva del Derecho nacional; por lo que resulta necesario proponer nuevos puentes tendientes a integrar los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.

Estamos consientes que crear las bases de un sistema jurídico es una tarea compleja y que no corresponde a una sola disciplina, aun cuando estimamos que el Derecho Internacional Privado es el área más idónea en el Derecho para la articulación de regímenes nacionales e internacionales. No obstante, en la mayoría de los países del mundo, salvo en la Unión Europea, el Derecho Internacional Privado sigue funcionando en base a principios de Derecho interno y sigue estando influenciado por intereses nacionales, subsistiendo al amparo normas de Derecho Público interno. En este panorama, el Derecho Internacional Privado es una disciplina de Derecho Interno.

Sin perjuicio de lo anterior, el siglo pasado ha demostrado que el Derecho Internacional ha ido desarrollándose en base al fortalecimiento de un Derecho Internacional basado en la persona más que en el Estado. En tal contexto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha estado configurando un conjunto de principios que tienen como finalidad al *empowerment* de las personas naturales y de las ONGs sobre los problemas ambientales. De esta forma el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha jugado un rol fundamental en el juicio sobre la eficacia

de las normas de Derecho Internacional Público. Sin embargo, y no obstante este nuevo Derecho Internacional basado en las personas, encontramos que la persecución jurídica internacional y la eficacia de los principios internacionales de protección ambiental siguen encontrándose con grandes barreras. Una de las más importantes barreras consiste en determinar la competencia y la legislación aplicable para relaciones jurídicas extracontractuales internacionales por daño ambiental. En efecto, la solución política estatal suele ser una vía ineficiente para la persecución de responsabilidades ambientales internacionales atribuibles a los privados <sup>(5)</sup>.

Actualmente, la apuesta por un “Derecho internacional jurisdiccional” pone el énfasis en la importancia de la interpretación jurídica, de tal modo que el tradicional Derecho estatal, de impulso nacional, viene a resultar un poco anacrónico. En muchos casos los daños ambientales demandan claridad en las relaciones jurídicas internacionales obligando a la reinterpretación del Derecho Internacional. De este modo resulta necesario esclarecer, caracterizar y categorizar las relaciones jurídicas horizontales (más que las verticales), en el nacimiento de los nuevos hechos susceptibles de responsabilidad. Hablamos de la necesidad de un Derecho que necesita adaptarse a la evolución permanente de las disciplinas especialmente técnicas y cuyos medios de solución de controversias se caractericen por ser rápidos,

---

<sup>(5)</sup> Ejemplo de ello se encuentra en las contaminaciones por derrame de hidrocarburos, lo que si bien corresponde a normativa sectorial y por ello escapan de nuestro trabajo, son un ejemplo del debate que venimos presentando. Revísese: Huerta Viesca, María Isabel y Rodríguez Ruiz de Villa, Daniel, *Responsabilidad Civil por Contaminación marina por vertido de hidrocarburos a propósito del Prestige*, Universidad de Oviedo, 2004. Juste Ruiz, José, “El accidente del Prestige y el Derecho Internacional de la prevención fallida a la reparación insuficiente”, *Revista española de Derecho Internacional*, número 55, Vol. 1., 2003. Del Olmo García, Pedro y Pintos Ager, Jesús: “Responsabilidad Civil por vertido de hidrocarburos. ¿Quiénes deberían pagar los daños causados por el Prestige?”, *InDret*, número 111, 2003. Arroyo, Ignacio: “Problemas jurídicos relativos a la seguridad de la navegación marítima (referencia especial al caso Prestige)”, *Anuario de Derecho Marítimo*, Vol. XX, 2003, pp. 23-62. Ezeizabarrena, Xabier: “El naufragio del buque Prestige: algunas perspectivas jurídicas”, *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 4, 2003, pp. 267-273. Pueyo Losa, Jorge, Lirola Delgado, Isabel, y Jorge Urbina, Julio: “En torno a la revisión del régimen jurídico internacional de seguridad marítima y protección del medio marino a la luz del accidente del Prestige”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Número 1, Vol. LV, 2003, pp. 43-78. Rams Ramos, Leonor: “El reparto competencial en los casos de catástrofes marítimas por vertido de hidrocarburos: el caso del Prestige”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Año CXLIX, Número 4, 2002, pp. 617-641.

eficientes y eficaces en la resolución del conflicto, para evitar una extensión aún mayor del daño principal y prevenir o mitigar los efectos de los daños colaterales.

De esta forma, instrumentos como el arbitraje en materia ambiental se opone a la burocracia judicial y a la positivización normativa propia de los sistemas nacionales, las que resultan lentas e ineficaces. Asimismo, la burocracia judicial y la positivización legislativa constituyen un riesgo político-económico que será asumido por el gobierno de turno, debido al incremento de las presiones sociales asociadas a las catástrofes por daños ambientales internacionales.

Por otra parte, en materia de jurisdicción internacional y de Derecho aplicable, el profesor THOMAS KADNER GRAZIANO sostiene la opiniones que - en el fondo de su argumentación- consideran que el problema de la eficiencia y de la eficacia de la protección ambiental radica en el ámbito del Derecho Público, más que en el ámbito de Derecho Privado <sup>(6)</sup>. En este debate, la autoridad con competencias ambientales es un actor relevante en la determinación de las responsabilidades ambientales y por esta razón gran parte de la responsabilidad es administrada desde el Derecho Público. En efecto, la autoridad ambiental es la llamada a establecer las condiciones y las autorizaciones por medio de las cuales se desarrollará una actividad con posible impacto ambiental. Asimismo, la autoridad administrativa también está llamada a perseguir administrativa y judicialmente todas las responsabilidades administrativas del caso. Lamentablemente, la falta de un poder de supervigilancia de naturaleza judicial-civil, que sea jerárquicamente superior a la autoridad administrativa competente, ha colocado a las víctima privadas en situación de indefensión frente a catástrofes ambientales debido a que las víctimas civiles se encuentran en la imposibilidad de recurrir ciertas instancias que están reservadas a la iniciativa de la autoridad pública.

---

(<sup>6</sup>) Kadner Graziano, Thomas, "The law applicable to cross-border damage to the environment. A commentary on article 7 of the Rome II Regulation", in *Yearbook of Private International Law*, Vol. IX, Germany, 2007.

Por esta razón los conflictos por daño ambiental, en los que interviene un elemento internacional son conocidos por tribunales y autoridades nacionales, muchas veces, sin la experiencia ni la formación en responsabilidad internacional. Es más, los asuntos sobre daños ambientales que son conocidos por tribunales extranjeros han venido a considerarse en algunos casos como “enjuiciamientos” de los actos de la autoridad público-administrativa de un país.

Desde esta perspectiva, el problema consiste en determinar si la autoridad competente para conocer de un daño ambiental internacional ha desarrollado un acto *iure imperii* o más bien un acto *iure gestionis*. En caso de que se concluya de qué estamos hablando de actos *iure imperii*, entonces el Derecho Internacional Privado carece de importancia.

Por nuestra parte, apoyados en opiniones conciliadoras como las de las profesoras NURIA BOUZA VIDAL y MÓNICA VINAIXA MIQUEL (<sup>7</sup>), consideramos que existe compatibilidad entre los sistemas nacionales e internacionales de responsabilidad para casos de daño ambiental transfronterizo y para casos de daño transnacional. Incluso más, consideramos que el Derecho Internacional Privado es la vía más idónea para abordar el problema del “daño transnacional” cuando esta clase de daño no reúne la calidad de “daño transfronterizo”, es decir, cuando alguno de los elementos de la responsabilidad es internacional pero sin existir necesariamente un fenómeno natural transfronterizo. En todos estos casos, la vía privada resulta eficiente, en la medida que excluye el juicio valorativo de la actividad público-administrativo de un determinado Estado, para poner el énfasis en los sujetos privados y en los daños.

Por esta razón, nos posicionamos en el Derecho Internacional Privado, porque consideramos que es un área desde la cual es posible desarrollar un marco normativo internacional para materias ambientales. En concreto, abordaremos específicamente

---

(<sup>7</sup>) Bouza Vidal, Nuria y Vinaixa Miquel, Mónica “La responsabilidad por daños ambientales transfronterizos: Propuesta de regulación europea y Derecho Internacional Privado”, en *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, Tomo III, Madrid, 2003, pp. 75-106.

la competencia judicial civil internacional por daño ambiental (CJCI o competencia judicial internacional CJI).

Es importante aclarar, que nuestra perspectiva, no desconoce la importancia interpretativa que los tratados internacionales otorgan a las normas instrumentales de Derecho Internacional Privado. Tampoco desconocemos la importancia de las directrices que emanan de organismos públicos internacionales, instituciones, foros o mecanismos formales. Por el contrario, tales acuerdos multilaterales alcanzan plena eficacia cuando se logran articular con mecanismos privados de conocimiento, reconocimiento y ejecución judicial internacional. Asimismo, tenemos que la articulación de las esferas pública y privada es capaz de promover nuevos acuerdos políticos en base a mejores estándares de prevención y de responsabilidad ambiental internacional.

Sin embargo, y parafraseando a la Comisión de Derecho Internacional (CDI), en su informe sobre fragmentación del Derecho en el año 2006 <sup>(8)</sup> tenemos que, la existencia de distintos ordenamientos jurídicos obedientes a diferentes intereses políticos y económicos existentes en los respectivos Estados desencadena regímenes especiales de Derecho Internacional con resultado de amenaza a la estabilidad del orden jurídico internacional <sup>(9)</sup>. Por esta razón consideramos indispensable la existencia de más trabajos sobre armonización judicial en base a la uniformidad interpretativa de los principios.

En razón de lo anterior, hemos optado por abordar una vía de solución de conflictos que se caracteriza por ser: privada, apolítica, internacional y jerárquicamente reglamentaria.

---

<sup>(8)</sup> A/CN.4/L.682. 13 de abril de 2006. Fragmentación del Derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. Informe del Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional, elaborado por Martti Koskenniemi.

<sup>(9)</sup> Sobre los desafíos de la fragmentación desde una perspectiva latinoamericana: Rodiles, Alejandro, “ La fragmentación del Derecho internacional. ¿riesgos u oportunidades para México?”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, IX, 2009, pp. 373-413, disponible en : <http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/9/art/art12.htm#P117> [revisado 27 de diciembre del 2011].



## ABSTRACT

### I. INTRODUCTION.

A company is defined as an “international company” in so much as it acquires comparative advantages in the production, financing and commercialization of its products, taking advantage of a pluri-localization of productive factors, capital assets, funding, and trading on the stock market or in the place where there is demand for the goods it produces and/or commercializes. International companies that operate in a territorially de-localized manner make up close to 2/3 of world commerce. In this context, the diversification of production to a global scale, these companies tend to be located in countries with weak environmental protection.

One way of minimizing *environmental dumping*, without having to adopt international agreements between States, is by reducing the “increased international cost” due to the international traffic of legal relations. The principal function of Private International Law should be reoriented to the securing of a “just and flexible legal order” of international legal relations and situations that are in permanent evolution. It is necessary to take charge of the principles and fundamentals that spur the redistribution of the costs of international litigation.

The reduction of these costs is directly proportional to the de-formalization of the recognition and execution of foreign judicial rulings, as well as to the adoption of points of connection with the courts and the applicable legislation that take into consideration the protection of the weakest party of the international legal relationship.

As far as it is concerned, the flexibility of the system should not be in conflict with the goals of certainty and inevitability in all systems of distribution of judicial or legislative jurisdiction. Nevertheless, this panorama makes it necessary that the model of Private International Law that is adopted be capable of internalizing all the principles in play and making them compatible with each other. It is for this reason that we refer to a “just and flexible legal order” of international legal relations and



situations. This capacity for internationalization and compatibility is what some authors refer to as “the principle of efficiency” in the new Private International Law. Once the goals of this new Private International Law, as applied to legal relations in which environmental damage or the risk of such exists, are articulated, in this work we will present the “justice of globalization” in three levels.

In the *first level* are the tools of Private International Law that tend towards legal security or predictability of connecting links.

In the *second level* are the material values that inspire the solutions of Private International Law in environmental matters, such as: the principle that “he who pollutes, pays” and the principle of *favor laesi*.

Finally, in the *third level* is the flexibility of the system. By flexibility, we no longer only refer to argumentative adaptability but also to the exclusive and characteristic tools of Private International Law. In this third level we will find tools such as the *rule of ubiquity of the harmful event*, and the *autonomous concepts* of Private International Law.

## **II. - Object of Study.**

Within environmental damage the two legal categories of damage (civil damage and environmental damage) are brought together. This has to do with the fact that the same event gives rise to environmental damage as well as civil damage.

The “event giving rise to the damage” is a concept that began in Europe thanks to the European rules of international jurisdiction and that serves to deal with the problem of civil jurisdiction without the need to proceed through the intricate theories about the causality between civil damage and environmental damage.

For its part, qualifying and quantifying the civil damage “derived” from an occurrence of ecological damage turns out to be a complex task and, according to what we will see in the second part of this work, constitutes an error of appreciation.

For this reason, we prefer to deal with civil damage as a “damage associated” with an occurrence of environmental damage instead of a “damage derived” from an occurrence of environmental damage.

This method of approaching the problem is new, dynamic, and constitutes an original proposal for the simplification of the system for designating jurisdiction.

As such, the principal topic of investigation is:

*The legal interpretation of the “harmful event” (damage and the event giving rise to it) in the determination of international civil jurisdiction for environmental damage: is a system in favor of the victim of environmental damage possible in the European system of jurisdiction distribution?*

In this way, and focusing on real cases of international environmental contamination, this work seeks to comparatively analyze cases of international civil lawsuits with an emphasis on the criteria of international jurisdiction which have been recognized by the Court of Justice of the European Union.

We have chosen this topic because we consider that the reason for the lack of international civil lawsuits for environmental damage arises from the following problems: having reduced the reality of “international environmental damage” to “transboundary damage” and having considered that civil damage is a category of damage “derived” from environmental damage.

## **1. - General Objective.**

The general objective of this work consists of critically analyzing the integrity and coherence of the European communitarian system for designating international jurisdiction in cases of international civil damage associated with an occurrence of environmental damage, proposing a distribution of risks and procedural burdens in harmony with the values and principles that regulate the European system of environmental responsibility, which we believe to be in favor of the “weaker party”.

## **2. - Objectives of the First Part.**

### **2.1. - Specific Objectives of Chapter I.**

1. - Present the Object of Study. Explicitly state the limits of the research describe the factual and legal problems and indicate the specific objectives of the research, methodology, and structure.

2. - Explain the Referential Framework, using Private International Law to present an innovative perspective that differs from the classical perspective of Public Law in order to determine liability for environmental damage.

3. - Explain the Theoretical Framework based on the problems of restrictive interpretations. Establish the principle of legal security and predictability of the system.

## **2.2. - Specific Objectives of Chapter II.**

1. - Determine whether or not environmental principles exist that are recognized in community normative bodies and if these principles are brought together or not in the norms of Private International Law.

2. - Determine if principles exist that affect the legal authority of international jurisdiction, or that serve as an argumentative foundation that justifies the interpretation of the legal authority in favor of the civil victim of an occurrence of environmental damage.

## **2.3. - Specific Objectives of Chapter III.**

1. - Describe, analyze, and comparatively categorize the competent foro for environmental damage.

2. - Determine the meaning and scope of the principle of judicial cooperation and administrative cooperation in the exercising of civil actions for environmental damage.

## **3. - Objectives of the Second Part.**

### **3.1. - Specific Objectives of Chapter I.**

1. - Determine the meaning and scope of the established legal authority in Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012 of 12 December 2012.

2. - Identification of the problems associated with the interpretation of the “harmful event” status for environmental issues and the determination of the possibilities that the victim of an occurrence of environmental damage or of an occurrence of civil damage related to an occurrence of environmental damage has in order to be favored in the determination of the competent court.

3. - Description and analysis of the meaning and scope of the “rule of ubiquity” for environmental issues.

4. - Analysis of the extension of the rule of ubiquity for cases of transnational tort (complex issues of transnational tort that may not involve bordering States).

5. - Analysis of the criteria that rids the Luxembourg Court of Justice of jurisprudence based on the legal authority established in Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012 and its predecessors.

6. - Analysis of the *forum shopping* in courts of jurisdiction for environmental damage. Determination of the meaning, risks, and scope of the *forum shopping malus*.

7. - Analysis and valuation of the “weaker party” concept in international non-contractual relation and analysis of its protection in cases of international environmental damage.

### **3.2. - Specific Objectives of Chapter II.**

1. - Determine whether it is possible to assimilate the place of the operative event to the defendant's place of residence.

2. - Analyze the relationship that exists between the legal authority established in Article 4 and the legal authority established in Article 7.2, both of Regulation (EU) No. 1215/2012 of 12 December 2012.

3. - Analyze and identify the place of the event giving rise to the damage in the case of international legal entities.

4. - Analyze if it is possible for solidarity to exist between the societies pertinent to the transnational company or to the group of societies, in reference to the competent forum.

5. - Analyze the relationship that exists between the legal authority established in Article 8.1 and the legal authority established in Article 7.2, both of Regulation (EU) No. 1215/2012.

6. - Analysis of the application of the rule of ubiquity in cases of firms pertinent to a transnational company or a group of firms.

### **3.3. - Specific Objectives of Chapter III.**

1. - Describe and categorize types of trans-boundary civil damage, differentiating them from transnational civil damage.
2. - Analyze the causal criteria that seek to link the civil damage to the existence of an occurrence of environmental damage.
3. - Dogmatically and jurisprudentially analyze the scope of the civil damage and its corresponding categorization as “direct damage” or “indirect damage”, for the purpose of determining the extension of the international jurisdiction of a court.

### **4. - CONCLUSIONS.**

1. - When the jurisprudence of the Court of Luxembourg created “the rule of ubiquity” it had to resolve two situations: *the first*, determining the “harmful event” without entering into the debate about the causality between damage and the event giving rise to it, and *the second*, dealing with the problem from a phenomenological perspective (that of the environmental damage) without going into commenting on the relationship between environmental damage and civil damage.

We conclude that this method of dealing with the problem is inefficient for the protection of the civil victims of international environmental damage, because until today, except for the judgment pronounced in the case *Bier vs. Minas de Potasio de Alsacia*, there have not been any issues that involve environmental damage and that have come to the knowledge of the Court of Luxembourg.

The reason for the lack of international lawsuits associated with an occurrence of environmental damage is due to the fact of having reduced the legal reality of international environmental damage to the category of “transboundary damage”, leaving aside the notion of “transnational civil tort”.

2. - The option for a “dispositive and possible” international procedure for the civil plaintiff obliges the consideration of the interests directly involved. This means

that the judge called to preside over his international jurisdiction should not take into consideration the public interests of the State where the court is located.

In this way, from existing limitations, such limitations cannot consist in a restrictive interpretation of the legal authority established in Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012.

For environmental matters, the prioritization of the notion of “harmful event” over the notion of “illicit”, makes Private International Law manage to take charge of the problem “from their effects”, more than from the punitive judgment that an imputable action deserves.

3. - At the European level no regimen of jurisdiction exists that deals with environmental matters. In effect, except for the special norms that regulate matters relative to pollution by hydrocarbons, oil spill, nuclear energy or the transport of hazardous materials, we have that Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012, applicable to civil delict and quasi-delict, should replace all other gap.

For these reasons, and even when no express norm exists that establishes a special legal authority for environmental delict and quasi-delict, the act of maintaining an interpretation of the legal authority of Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012 that promotes the greatest possible environmental protection is possible and coherent with the system of environmental protection that the European Union has given.

On the other hand, the victim of the civil damage is also protected by the same beneficial interpretation of the environmental principles. There are two reasons for coming to this conclusion:

a) The principles highlighted in the indicated community norms make no distinctions, and

b) We recognize as environmental protection the fulfillment of the goal of full redress in which the directly associated civil damage is certainly involved.

4. - International Environmental Law is characteristically programmatic and is composed, in good part, by norms of *soft law*. This feature makes the plaintiffs are devoid of guarantees for access to jurisdiction.

Through this situation we have seen ourselves have the need to associate the analysis of the principles of International Environmental Law with the analysis of the fundamental right to effective judicial protection. This principle-right is capable of influencing the interpretation of international environmental principles, giving them greater concretion. For this reason, appealing to it is possible in the teleological interpretation of international environmental principles such as: a) the principle of ecological interdependence, b) the principle of equity, c) the principle of common but differentiated responsibility and c) the principle of shared border resources, all of which were developed in this work.

Additionally, we conclude that the flexibility of the legal authority must be in strict compliance with respect to the right to effective judicial protection

5. - This work has taken charge of the debate generated in the doctrine of the *favor laesi* principle, established in benefit of the civil victim of an occurrence of environmental damage.

Although the jurisprudence of the Court of Luxembourg has not expressly accepted the *favor laesi* principle, we conclude that one cannot fail to recognize that the right of *optio fori* that the Court of Luxembourg has established in favor of the plaintiff (through the application of the rule of ubiquity) has arisen through the act of considering the plaintiff as “the weaker party” of the international relationship.

Without prejudice to the limitations that the Court has established for the *forum actoris*, we consider that, whether by means of giving applicability to the *favor laesi* principle or by means of the creation of a *forum actoris*, it is possible and convenient to establish a special legal authority for cases of environmental damage.

6. - The experience of the national courts has demonstrated:

a) the need to prove the relationship between the injurious result and the event giving rise to it, avoiding as such the problems generated by the meaning and reach of the rule of ubiquity,

b) the utilization of a perspective of probabilistic calculation, in order to link the damaging result to the event giving rise to it, which is found to be in agreement with the criteria utilized by the Theory of Increased Risk.

c) the inclination to adopt a greater punitive judgment when the “predictability” with which the defendant could have behaved is recognized.

All of these precedents demonstrate that the preventive criteria has come to describe the punitive judgment of the civil defendant for environmental damage, more than any other type of civil defendant. Therefore, the responsibility of the internationality is altered, against the defendant proposing an understanding of the defendant in a case of environmental damage as “the weaker party” of the international relation and, therefore, subject to greater protection.

7. - After the Court of Luxembourg pronounced over the first and most important case of transboundary pollution, *Bier/Minas de Potasio de Alsacia*, a rule of ubiquity was established, which permitted the concurrence of courts of law, for instance: the forum of the place of the damaging result and the court of the place of the event giving rise to the damaging result. The rule of ubiquity is exercised below the wide umbrella granted by the “place of the harmful event” status indicated in Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012.

We consider that the solution that the ECJ gave to the case *Bier/Minas de Potasio de Alsacia* is applicable to simple issues of international environmental responsibility, because they present an occurrence of environmental damage with “unity and action and unity of consequence.”

Nevertheless, the rule of ubiquity when applied to complex cases of international pollution (such as that which we identify as “transnational tort”) raises a series of questions in relation to two big themes:

a) The distinction between civil delict and quasi-delict, on one hand, and delict and quasi-delict on the other; and

b) The distinction between direct civil damage and indirect civil damage.

8. - For the reason of the principle of judicial cooperation and of administrative cooperation, we see that it is not necessary for damage to be materialized in order for it to be included in the expression “place where the harmful event had occurred or could occur”. The place where a measure will be practiced will



differ according to if the damage is civil or environmental, and also if the damage has materialized or if it is potential.

As such, the court before which a precautionary or preventative civil prejudicial order is requested cannot excuse its competence with the pretext that:

a) another court is better situated to know the issue and therefore the preventative measures that are requested, because it cannot be absolutely certain, or

b) it alleges that the “harmful event” status for preventative measures only corresponds to the place where the “damage” is verified, because civil damage is different than environmental damage, or

c) it orders that a cause-and-effect relationship, be recognized between an occurrence of environmental damage and of civil damage, be recognized, because this requirement would not be necessary for the objectives pursued by the precautionary or preventative measures.

9. - We propose a concept of *forum shopping malus* that is capable of illustrating to the judge the possible reasons to refuse a motion to contest jurisdiction. This is what we propose as a concept of *forum shopping malus*:

*“An abuse of the right of choice on the part of the plaintiff, who bases his interest on a change in the connecting link; with eventual prejudice for the defendant, when such prejudice generates an alteration in the predictability of the title of jurisdiction, and denies the useful effect and uniform application of Regulation (EU) No. 1215/2012, beneath the teleological interpretation of the objectives predicted by the constituent and by the community legislator”.*

10. - The problem about the determination of the “event giving rise to the damage” has led us to analyze if it is possible to understand the “event” as not only the place where the physical action occurred that gave rise to the pollution, but to go further and decide if it is possible to consider the “event giving rise to the damage” as the defendant’s place of residence.

As much for natural or physical persons as for legal or moral persons, the place of the event giving rise to the damage is that where the action whose consequences have triggered environmental damage has initiated.

The place where the action initiates can be determined by the phenomenological reality of the physical acts or, as it occurs in our case, can comply with the legal reality of the operation of the transnational company.

Such a situation clearly occurs with the corporate orders that are imparted by means of data transmission in offices located thousands of kilometers away from the place of the damage.

In this way, the interpretation of the special legal authority of Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012 should understand that the “place of the harmful event” integrates: the place where the damage originated as much as the defendant’s place of residence.

Finally, when a company is made up of several firms, the determination of the place of residence is a matter of test and of autonomous determination according to those considering Articles 15 and 16 of Regulation (EU) No. 1215/2012.

11. - En cases of pollution produced by transnational companies, the lawsuit remains based in the defendant’s place of residence for application of the legal authority established in Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012, in relation to:

a) Article 4, b) Article 8.1 and c) Article 63, all from the same regulation.

In this way, the application of the rule of ubiquity will permit the plaintiff of environmental damage (and of direct civil damage) to present the lawsuit to his local court: or in the place where the damage was manifested or in the place of the defendant’s residence.

12. - When the defendant is an international legal person, it is probable that we will find multiple firms that form one transnational company or group of international firms. All of these firms can have a distinct level of participation in the perpetration of the unlawful international civil act.

If we want to distinguish between the meaning and scope of Article 8.1 of Regulation (EU) No. 1215/2012 in contrast with Article 7.2 of the same Regulation, we should take into consideration that Article 8.1 refers to “multiple defendants”, while Article 7.2 refers to one single defendant. In the case of transnational companies there is only one defendant, but is composed of various firms distributed

in distinct States; said firms act in such a way that maintain economic unity and comply with the same corporate objectives.

In this case, the practical utility of considering a transnational company as a singular defendant is based on the possibility of applying Article 7.2 of Regulation (EU) No. 1215/2012 and concretely applying the rule of ubiquity.

13. - When we find ourselves facing multiple firms that operate on the basis of an alteration in the organizational structure that demonstrates the exercise of a “unitary economic management” we then have the place where the decisions are taken that may or may not coincide with the place where the disaster is suffered. The head office, the owner, the controller, or the firm that performs the unitary economic management takes part in the responsibility in the negative externalities of the subsidiaries or associated firms in the case of verifying an occurrence of environmental damage.

14. - We don’t share the *a priori* opinion about the indirect nature of civil damage in relation to environmental damage. We estimate that the same event gives rise to civil damage as well as environmental damage; and that, for such a reason, the rule of ubiquity benefits the direct victims of environmental damage and the direct victims of civil damage.

In effect, the victim of international civil damage associated with an occurrence of environmental damage should not be exposed to the same limitations as the ordinary international civil victim. The cause of his harm is the altering of a good (the environment) that by its innate nature is involved in the development of all human activities. The protection of this superior good will be more efficient, from the civil perspective, to the extent that civil jurisdiction takes charge of the final interpretation of the norms of environmental protection. To that end we propose that the costs of international litigation not be passed to the civil victim, allowing him to appeal to a court with jurisdiction in the place where he experiences direct harm, whether or not said place coincides with the place of the environmental damage.

Additionally, we propose a differentiation between both categories of victims (civil and environmental), in order that the judgment about the direct and indirect aspects of the link is made separately.

Another topic to be considered is that we believe it necessary to open a debate about a concept whose content has not sufficiently been made clear: the concept of “transnational civil damage”.

15. - We have concluded that interest for establishing the differences between both categories of damage (civil and environmental) exists; because when they are confused they foster an unclear perspective of the rule of ubiquity.

On the other hand, we cannot deny that the accumulation in only one competent court is convenient for reasons of procedural efficiency. However, to be unaware of (or to deny) the objectives of environmental justice vs. the objectives of civil justice, that are inherently found in the civil pretense, can produce notable differences between the court with competence to recognize the environmental damage and the court with competence to recognize the civil damage.

We believe it to be possible to apply the objectives of environmental justice in benefit of the civil plaintiff, without confusing the treatment of civil damage with the treatment of environmental damage.

16. - We propose an extensive interpretation of the rule of ubiquity, in such a way that includes “direct civil damages” and ensures the fulfillment of the following objectives:

- a) Ensuring the best place for the development of the judicial procedures promoted by civil plaintiffs.

- b) Establishing just criteria in the distribution of the costs of negative externalities and risks assumed in the development of an environmentally damaging activity (retributive justice), neither wanted nor assumed by the civil victims, and

- c) Ensuring preventative protection for threat of international civil damage in case of the existence of risk (preventative justice).

17.- For the purposes of extensively interpreting the rule of ubiquity in favor of the civil victim and configuring *forum actoris* in any place where the civil victim

experiences “direct damage”, we have considered it necessary that there be an accompanying test that serves to:

a.-) Establish *a connecting link between the civil damage, the environmental damage and the competent court*, in such a way that only the “direct civil damages” benefit from the *forum actoris*.

b.-) *Ensure the protection of the plaintiff of environmental civil damage, for the reason of being considered the “weaker party”*.

18.- Although no special regimen exists for the victims of civil damage and of pure environmental damage (also called “ecological”), in the case that such a regimen does exist, it should be in accordance with *optio legis* as established in legislative material applicable to Regulation 864/2007 Rome II. This regulation does recognize the plaintiff of environmental damage and of associated civil damage as the weaker party. This we propose is a coherent interpretation of *lege ferenda*.

No matter the proposed motion to contest international jurisdiction, according to the Court of Luxembourg, in making his decision the judge should consider:

- a) The proper administration of justice,
- b) The possible lack of coherence between the judicial resolutions dictated in different States,
- c) Keeping watch for the enforceability of his decisions; and above all,
- d) Resolving the dispute with justice as the objective if, and only if, he is “legally better situated” to have knowledge of the issue.

## I.- INTRODUCCIÓN.

La internacionalización de la vida de las personas ha alcanzado niveles sin precedentes en la historia jurídica. Corresponde al fenómeno de la globalización, el que sigue sin agotarse en los estudios de Economía, Filosofía, Sociología o Derecho <sup>(10)</sup>. Este proceso corresponde a una alta concentración de poder económico en las empresas privadas, las que han venido a promover el desarrollo de una nueva forma de regulación jurídica nunca antes alcanzada ni por los esfuerzos de los Estados o por los esfuerzos de organismos internacionales <sup>(11)</sup>.

Hablamos de una época caracterizada por la unidad de intereses económicos en la cual los mercados actúan en forma interconectada influyéndose unos a otros y financiados por capitales que circulan alrededor del mundo posicionándose en aquél lugar dónde se encuentre la inversión más rentable.

No obstante lo anterior, la globalización presenta algunas controversias en lo relativo a la “evolución” del Derecho Internacional Privado. En efecto, la disciplina ha sido oscilante en torno a la concreción de sus fines. En la actualidad se habla de la despolitización o privatización plena en el Derecho Internacional Privado. Todo lo cual responde al crecimiento que la disciplina ha experimentado en ámbitos integrados del Derecho como ocurre en el caso europeo, en los cuales el espacio común europeo se asienta en pilares de cooperación judicial y libre circulación de sentencias judiciales.

---

(<sup>10</sup>) Izquierdo Sans, Cristina, “Algunas respuestas del Derecho internacional a la globalización”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp.151-176. Fernández Pons, Xavier, “El Derecho Internacional Público Ante El “Trilema” De La Globalización”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009, pp. 233-272.

(<sup>11</sup>) Carrascosa González, Javier, “Globalización y Derecho Internacional Privado en el siglo XXI”, *Anales de Derecho*, Colex, número 22, 2004, pp. 17-58. Verdeguer Puig, Enrique, Álvarez Alonso, Leticia, *La globalización*, Acento Editorial, Madrid, 2001, pp. 15-17. Illescas Rafael, “Derecho mercantil y globalización”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp.79-94. Martínez Gonzalez-Tablas, Angel, “Economía de la globalización”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp.17- 40.

Sin embargo, esta “privatización” del Derecho Internacional Privado, entendida como la priorización de los intereses de privados en las relaciones internacionales, puede asimilarse al despegue que la disciplina experimentó en el siglo XIX <sup>(12)</sup>. En dicha oportunidad, la presencia del Estado liberal permitió que los particulares articularan con mayor facilidad la jurisdicción competente y la legislación aplicable, reduciendo el “coste internacional” de los litigios.

Todo esto resulta un poco contradictorio si consideramos que el más grande exponente de esta época y personaje sustancial para el Derecho Internacional Privado, desde el análisis de la relación jurídica ha sido Savigny. En efecto, Savigny articuló en conjunto con la Escuela Histórica del Derecho una disciplina jurídica que no era obra del legislador sino más bien creación del alma o “espíritu de un pueblo” (el Volkgeist de Hegel) <sup>(13)</sup>. Decimos contradictorio, porque en el caso de la creación de las normas Derecho Internacional Privado, el *leit motiv* gira más en torno a la protección y reconocimiento del efecto útil de la contratación mercantil internacional, que al alma o espíritu del pueblo.

En dicha época como ocurre en nuestros días, los poderes reconocidos a los privados no se fundaron tanto en la dogmática de los derechos humanos o en el derecho de tutela judicial efectiva, sino más bien en la necesidad de entregar a los particulares las herramientas para agilizar el comercio internacional con la posibilidad de resolver los conflictos en forma apolítica, a través de un sistema dotado de certeza y de seguridad jurídica respecto de la localización del punto de conexión capaz de atribuir jurisdicción y de determinar la legislación competente.

---

<sup>(12)</sup> Savigny, M de F.C., *Sistema del Derecho romano actual*, M.Ch. Guenoux (trad. del alemán), Comares, 1º ed., Granada, 2005, 1882 p. González Campos, Julio, *Derecho Internacional Privado*. Parte especial, en colaboración con J.C.Fernández Rozas et al., 6ª edición rev., Eurolex, Madrid, 1995.

<sup>(13)</sup> Gerhard, Kegel, *Derecho Internacional Privado*, Vol. 1. 4ta. Ed.1982, 876 p.Zimmerman, Reinhard, *Estudios de Derecho Privado*, Civitas, Madrid, 2000.

La diferencia con la llamada “tercera globalización” (<sup>14</sup>), radica en la participación de un individuo informado y titular de derechos colectivos que articula sus intereses en solitario o a través de organizaciones representantes. La diferencia entre la tercera globalización y su predecesora radica en el hecho de que en el siglo XX el Estado social y democrático de Derecho fue capaz de influir sustancialmente en la interpretación de los Derechos nacionales, y entre ellos, muy especialmente en el Derecho Internacional Privado. En efecto, aunque nos encontrábamos en la órbita de las relaciones entre particulares, el Derecho Internacional Privado del siglo XX está fuertemente influido por valores constitucionales interpretados en perspectiva nacional vgr. defensa del consumidor, igualdad entre hombres y mujeres, protección del trabajo, protección de los menores, favorecimiento a las minorías, etc. (<sup>15</sup>). Durante este período el Derecho Internacional Privado pierde en certeza jurídica pero gana en argumentación sobre los fines de justicia preventiva, retributiva y distributiva.

Sin embargo a fines del siglo XX, la globalización es un fenómeno que está caracterizado por el uso de nuevas tecnologías y de medios de comunicación, que sirven en primer lugar al desarrollo del comercio internacional y al flujo de capitales. En esta etapa, los sujetos individualmente considerados tienen acceso al conocimiento y mejor información que en épocas pasadas, sin embargo, no por ello adquirieron un poder real de negociación en igualdad de condiciones y más aún siguen careciendo de capacidad decisoria para la determinación o proyección futura de sus intereses más

---

(<sup>14</sup>) Desde la perspectiva de individuo, este período de la globalización ha venido a llamarse “la tercera Globalización” ver: Friedman, Thomas L., *La tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI*, Ediciones Martínez Roca, 2006. Robertson, Robbie, *Tres olas de globalización historia de una conciencia global*, Alianza editorial, España, 2005.

(<sup>15</sup>) Mesa-Moles Martel, María Paz, *Génesis y Formación del Derecho Internacional Privado (Una Aproximación Histórica)*. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2007, pp. 363-385. García, Guillermo, *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Euro-Mediterranean University Institute, Universidad Complutense de Madrid, número 33, 2012.



importantes: salud, previsión social, vivienda, crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, etc. <sup>(16)</sup>).

En este contexto, la sobreexplotación del medio ambiente ha venido a poner una alarma en los intereses personales de los individuos y a reposicionar el debate sobre el modelo de desarrollo económico y social. El medio ambiente se ha posicionado como “un objeto de protección” (en casos más radicales ha sido esbozado como un “sujeto de derechos”) lo que justifica la participación de organismos internacionales sin fines de lucro en la tutela del mismo, sea en razón de considerarle un bien jurídico per sé o sea por considerarle un derecho colectivo económico, social y cultural. De esta forma, el medio ambiente ha dejado de ser considerado como un factor productivo y pasa a formar parte en las agendas internacionales sobre desarrollo, comercio y derechos humanos.

Así es como tenemos que el individuo conocedor de las posibilidades reales ecológicas de su entorno, adquiere una conciencia a escala planetaria y ha venido a cautivarse con la idea de adquirir un poder de influencia sobre su realidad más inmediata a sabiendas de las probables consecuencias en la economía mundial. En efecto, el individuo personalmente o colectivamente representado denuncia y ejerce sus derechos de protección con miras a un cambio de paradigma en relación con el uso y protección de los recursos naturales.

De aquí nace la importancia de abordar el problema de la protección del medio ambiente desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado; porque resulta necesario ubicarnos desde la perspectiva de un marco normativo de rango internacional, para poder recoger lo mejor de la experiencia del siglo XIX (en cuanto a los fines de previsibilidad y seguridad jurídica del sistema internacional) sin olvidar el reconocimiento de las conquistas sociales más importantes del siglo XX (en cuanto concretaron valores materiales de justicia social) a fin de responder la pregunta

---

<sup>(16)</sup> Arnaud, André-Jean, *Entre modernidad y globalización: siete lecciones de historia de la filosofía del Derecho y del Estado*, Nathalie González Lajoie (trad.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, 290 p. Rondo Cameron, Larry Neal, *Historia económica mundial Desde el Paleolítico hasta el presente*, Miguel Ángel Coll Rodríguez (trad.), Ed. Alianza, 4ta. Edición, España, 2005.

pendiente sobre la protección eficiente y eficaz del medio ambiente en un sistema occidental neoliberal.

Por otra parte, relacionado con el rol que desempeñan los actores internacionales más relevantes en la configuración del orden económico internacional, tenemos que es necesario abordar la situación de las empresas internacionales, como grandes protagonistas del fenómeno de la globalización y como destinatarias directas de la regulación internacional.

En efecto, las empresas transnacionales no sólo han logrado adaptarse al escenario global, sino que han promovido la expansión de los mercados. Han diversificando sus estructuras operacionales, deslocalizando y fragmentando sus unidades de producción y han sido pioneras en la utilización de tecnologías de comunicación de punta para la toma de decisiones en operaciones plurilocalizadas.

Por estas razones, las actuales empresas internacionales se encuentran en condiciones inigualables, en relación con cualquier otra época, en el ejercicio de un poder internacional que les permite operar y dirigir sus actividades en varios países a la vez, llegando a determinar incluso el crecimiento económico de los países en los que se encuentran ubicadas sus operaciones.

En efecto, una empresa se define como empresa internacional, en la medida adquiere ventajas comparativas para la producción, financiación y comercialización de sus productos, aprovechando una plurilocalización de factores productivos, bienes de capital, financiación, transacción en bolsa o lugar donde se demanda los bienes que produce y/o comercia <sup>(17)</sup>. De esta forma, las empresas transnacionales han venido no sólo a competir en todos los mercados del planeta, sino que además, han podido articular economías de escala con las cuales han eliminado la competencia de agentes económicos menores, la mayoría agentes de subsistencia, los cuales sólo tienen capacidad para moverse a nivel nacional, local o incluso regional <sup>(18)</sup>.

---

<sup>(17)</sup> Velázquez Becerril, César y Pérez Pérez, Gabriel, “Las transformaciones del Estado-nación en el contexto de la globalización”, *Política y Cultura*, 2010, número 34, pp. 107-127.

<sup>(18)</sup> Sampedro, José, *El Mercado y la Globalización*, Madrid, 2002 Luis, Castells, Manuel, “Globalización, Estado y sociedad civil: el nuevo contexto histórico de los derechos humanos”,

En esto consiste la globalización para las empresas internacionales: en una unidad económica que favorece la oferta y demanda de bienes y servicios a escala global. De tal suerte que la fragmentación jurídica del sistema internacional se ha visto en la necesidad de evolucionar para la eliminación de todas las barreras que existan a la libre circulación de bienes, personas, servicios, trabajadores y capitales<sup>(19)</sup>.

Las empresas transnacionales que actúan territorialmente deslocalizadas representan cerca de los 2/3 del comercio mundial. Es así como en la actualidad términos tales como: *International Out-Sourcing*, *Downsizing* y *Re-Engineeering* han pasado a ser de uso frecuente en la jerga jurídica. Todo lo cual se debe, en parte, al matiz tecnocrático en el que se encuentra imbuida la actividad legislativa nacional y comunitaria<sup>(20)</sup>. En efecto, reglamentos y decretos nacionales obedecen a una forma de legislar materias técnicas por cuya vía se gestan importantes cambios en la economía de un país. Tal es por ejemplo la regulación de las normas y estándares internacionales ISO, caracterizados por su permanente evolución y especialidad, los que son recogidos por normas jurídicas de inferior jerarquía con las cuales puede restringirse una actividad o incluso eliminar a ciertos actores económicos que no se han adecuado a los nuevos procedimientos o que no han adoptado nuevas tecnologías.

Por otra parte el matiz tecnocrático va mucho más allá de las normas instrumentales de menor rango, posicionándose incluso en los debates legislativos nacionales -y por cierto también en los debates a nivel comunitario- en los cuales con mayor claridad por el escaso margen de participación ciudadana pueden advertirse los

---

*Isegoría*, número 22, 2000, pp.5-17. Lerman Alperstein, Aída, “Globalización-Regionalización. El debate actual”, *Producción Económica 2005*, UAM-Xochimilco, México, 2010.

<sup>(19)</sup> Carrascosa González, Javier, “Globalización y Derecho Internacional Privado en el siglo XXI”, *Anales de Derecho*, Colex, número 22, 2004, pp. 17-58.

<sup>(20)</sup> Mercado Pacheco, Pedro, “Estado y globalización. ¿Crisis o redefinición del espacio político estatal?”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp.127-150. Laporta Francisco J., “Globalización e imperio de la ley. Algunas dudas westfalianas”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp. 177-198. Teubner, Gunther, “Globalización y constitucionalismo social: alternativas a la teoría constitucional centrada en el Estado”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp. 199-225.

grandes *lobbies* de empresas transnacionales en búsqueda de posicionamiento y resguardo de sus intereses en el sistema jurídico.

La participación ciudadana es mínima en cualquiera de estos casos, lo que se debe en gran parte a lo específico y tecnocrático de ciertas materias y en parte a la poca maniobrabilidad que el ciudadano medio tiene respecto de las decisiones sobre capitales que no le pertenecen. En algunos casos y cuando los grandes inversionistas son las empresas administradoras de fondos de pensión, la especulación sobre las utilidades hace que el sistema se alinee en una sola dirección: la mayor rentabilidad posible de la empresa o grupo de empresas transnacionales <sup>(21)</sup>.

En este contexto, la diversificación de la producción a escala global, suele ubicarse en países con protección ambiental débil, haciendo que los recursos naturales sean un factor productivo más, cuya utilidad se encuentra en función del alto nivel de explotación y regeneración del recurso.

Lamentablemente la especialidad de los bienes demandados no sólo pone en riesgo la diversidad biológica del planeta, sino que también genera un círculo vicioso caracterizado por la sobreexplotación de recursos naturales en aquellos países que promueven la inversión extranjera en base a la subvaloración de sus recursos naturales renovables y no renovables. Este *dumping ambiental* suele verificarse en países del Tercer Mundo pero afecta en mayor medida a los productores localizados en países con alta protección ambiental <sup>(22)</sup>.

Una forma de minimizar el *dumping ambiental*, sin tener que adoptar acuerdos internacionales entre los Estados, pasa por la reducción del “coste internacional incrementado” debido al tráfico internacional de las relaciones jurídicas. Hablamos de “coste internacional incrementado” o de “costes en la litigación internacional”,

---

<sup>(21)</sup> Para profundizar el tema ver. Pigrau i Solé, Antoni, “La responsabilidad de las empresas transnacionales por daños graves al medio ambiente explorando la vía de la Alien Tort Claims Act”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009, pp. 517-570.

<sup>(22)</sup> Iglesias Vila, Marisa, “Justicia global y derechos humanos: hacia una ética de las prioridades”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005, pp. 41-70.

cuando a raíz de la globalización que experimentan las situaciones jurídicas y las relaciones entre privados se hace más oneroso perseguir la responsabilidad de los infractores internacionales. En efecto, incrementado el número de relaciones jurídicas en las que interviene un factor internacional, existe un número potencialmente mayor de situaciones jurídicamente complejas en las que pueden intervenir legislaciones y jurisdicciones de distintos Estados.

Por esta razón la función principal del Derecho Internacional Privado debe reorientarse a la obtención de un “orden jurídico justo y flexible” de relaciones y situaciones jurídicas internacionales en permanente evolución. De esta forma, no sólo obtenemos un Derecho Internacional más acorde con la dinámica evolutiva de las materias ambientales, sino que también van quedando en el pasado las nociones de un Derecho Internacional Privado como mero distribuidor de competencias judiciales o legislativas, muchas de ellas interpretadas con una perspectiva nacionalista.

En efecto, es necesario comenzar a hacerse cargo de los principios y fundamentos que inspiran la redistribución de los costes de litigación internacional o costes internacionales incrementados.

La reducción de estos costes está en directa proporción con la desformalización en el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, así como también con la adopción de puntos de conexión con el foro y con la legislación aplicable que estén en consideración con la tutela de la parte más débil de la relación jurídica internacional.

Por su parte, el mutuo reconocimiento de las sentencias entre los Estados, no sólo es una virtud que deba predicarse de países comunitarios, como el caso europeo, sino también respecto de países extracomunitarios. En efecto, el reconocimiento de las sentencias extranjeras –entendiendo por reconocimiento a un conjunto de reglas uniformes acordadas entre los Estados – viene a hacerse cargo de dos fenómenos: por una parte, hace más eficiente y coherente el sistema internacional, dota de seguridad jurídica, el sistema adquiere previsibilidad y aumenta la proximidad al foro y al derecho aplicable. Por otra parte, el reconocimiento de las sentencias extranjeras se

hace cargo de los problemas que pueden afectar las relaciones entre los Estados a causa de conflictos entre privados <sup>(23)</sup>.

De esta forma, los particulares, individualmente o colectivamente organizados, que suelen tener menor maniobrabilidad y menor capacidad de anticipación en los riesgos ambientales, son los que se ven obligados a asumir los costes de la litigación internacional en contra de las grandes corporaciones y grupos de empresas.

En efecto, vienen a ser los particulares que no están en condiciones de soportar el coste de la litigación internacional, los que deben recurrir a la representación del Estado o de organizaciones no gubernamentales reconocidas y habilitadas para la defensa de sus derechos. En tales circunstancias, los mecanismos jurídicos para el tráfico judicial internacional se convierten en barreras materiales de acceso a la tutela judicial efectiva de los derechos ambientales.

Por su parte, la flexibilidad del sistema no debiera estar en pugna con los fines de certeza y de previsibilidad de todo sistema de distribución de competencias judiciales o legislativas. Sin embargo, todo este panorama hace necesario que el modelo de Derecho Internacional Privado que se adopte sea capaz de internalizar y compatibilizar todos los principios en juego.

Por esta razón hablábamos de un “orden jurídico justo y flexible” en las relaciones y situaciones jurídicas internacionales. A esta capacidad de internacionalización y de compatibilización es a la que se algunos autores se refieren como “principio de eficiencia” en el nuevo Derecho Internacional Privado <sup>(24)</sup>.

---

<sup>(23)</sup> Ortiz Vidal, María Dolores, “Espacio Judicial Europeo y Tratado de Lisboa: Hacia un nuevo Derecho Internacional Privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010, pp. 376-402.

<sup>(24)</sup> Ver: Carrascosa González, Javier, “Globalización y Derecho Internacional Privado en el siglo XXI”, *Anales de Derecho*, Colex, número 22, 2004, pp. 17-58. Cfr. con la noción de eficacia en las obras de los siguientes autores: Sánchez Lorenzo, Sixto, *Derecho Privado Europeo*, Ed. Comares, Granada, 2002. Paz-Ares, Cándido, “Principio de eficiencia y Derecho Privado”, *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor M. Broseta Pont*, T.III, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995, pp. 2843-2900. Polinsky, Michell, *Introducción al análisis económico del Derecho*, Trad. Español J.M. Álvarez Flores, Ed. Ariel, Barcelona, 1985, p.19 y ss. Hinojosa Martínez, Luis Miguel, “A favor del análisis

Por otra parte, algunos autores <sup>(25)</sup> han señalado que imputar el coste de la litigación internacional a los protagonistas de la globalización (entiéndase por protagonistas a las empresas internacionales) es “ineficiente”, en el sentido que tales sujetos se verían motivados a no entablar relaciones jurídicas internacionales cuando el coste total para ellos fuera excesivo, esfumándose de esta forma los efectos positivos de la globalización. No estamos de acuerdo con esta aseveración, porque la imputación de los costes de la litigación internacional obedece en realidad a la necesidad de redistribuir los costes por externalidades negativas producidas y no asumidas por ciertas empresas internacionales.

Distinto es el caso de la ineficiencia asociada al “síndrome de la multiplicación de los foros o de la multiplicación de las leyes aplicables”, porque en este caso la ineficiencia guarda relación con la falta de certeza en la determinación del punto de conexión que vincula los hechos con un tribunal determinado o con un Derecho determinado.

No obstante lo anterior, el tráfico internacional ha demostrado que el problema de la multiplicación de los foros y la multiplicación de la legislación aplicable se produciría con mayor frecuencia en espacios económicos integrados, sin embargo, estos espacios suelen coincidir con sistemas judiciales coordinados o con iniciativas que buscan evitar los problemas por la falta de certeza en el tribunal competente y en la legislación aplicable.

---

económico del derecho internacional y de la renovación metodológica”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badía Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009, pp. 407-426. Burgos Silva, Germán, “Derecho y Desarrollo Económico: de la Teoría de la modernización a la nueva economía institucional”, *Revista de Economía Institucional*, segundo semestre, Año 4, número 007, Universidad Externado, Colombia, pp. 174-199. José Ramón García Menéndez, “Globalización de la Economía Internacional”, *Revista de Estudos Sociais*, Año 5, número 9, 2003, pp. 155-183.

<sup>(25)</sup> En este sentido la crítica apunta a promover “una unidad en la ley aplicable” o “*World-Wide Effect*” a fin de dotar al Derecho Internacional Privado de eficacia intrínseca. Sin embargo, al promover esta eficacia no se hace cargo del problema en los sistemas judiciales no integrados o en las relaciones con terceros Estados no europeos, ver: Carrascosa González, Javier, “Globalización y Derecho Internacional Privado en el siglo XXI”, *Anales de Derecho*, Colex, número 22, 2004, pp. 17-58.

Por tanto, el verdadero problema se produce *ad extra* de los sistemas judiciales no integrados, es decir, fruto de las relaciones entre privados, cuando uno o más de ellos está domiciliado en un país que no reconoce la jurisdicción o el Derecho extranjero. En este caso, el riesgo por denegación de justicia o por falta de tutela judicial efectiva de derechos conculcados se convierte en un problema económico, social y político mayor.

Para terminar, y una vez enunciado los fines de este nuevo Derecho Internacional Privado aplicado a relaciones jurídicas en las que existe daño o riesgo de daño ambiental, presentemos a la “justicia de la globalización”.

Hablar de justicia en asuntos internacionales exige que pongamos nuestro interés en tres niveles de actuación en el Derecho Internacional Privado, con miras a este nuevo “orden jurídico justo y flexible”.

Estos niveles que serán desarrollados a lo largo de este trabajo, y preferentemente expuestos para la competencia judicial internacional, aluden principalmente a la interpretación de los fines y principios del Derecho Internacional Privado, en los casos en los que interviene un daño ambiental. Estos niveles son:

En un *primer nivel*, y sin forma de jerarquía respecto de los siguientes, tenemos que el nuevo Derecho Internacional Privado se caracteriza por entregar herramientas que propenden a la seguridad jurídica o previsibilidad de los vínculos de conexión. De esta forma, tanto demandante como demandado están en condiciones de conocer *a priori* cuál será la jurisdicción y cuál será el Derecho aplicable, en caso de que ocurran daños ambientales y daños civiles asociados. Este nivel de protección jurídica es el más conocido y utilizado por los actores internacionales, porque basta conocer las normas nacionales vigentes en el lugar donde se produce el daño ambiental.

Por su parte las empresas transnacionales utilizan esta información para ponderar los costes y sostener alguna faena productiva o extractiva en determinado territorio. Este nivel de actuación en el Derecho Internacional Privado debe trabajar



coordinadamente con los otros dos niveles, a fin de evitar interpretaciones nacionalistas de los fueros de competencia judicial o del Derecho aplicable.

En un *segundo nivel*, se encuentran los valores materiales que inspiran las soluciones de Derecho Internacional Privado. A modo de ejemplo, en materias ambientales tenemos: el principio contaminador pagador y el principio *favor laesi*.

En este nivel nos encontramos con los valores y principios de rango comunitario, constitucional y legal que inspiran la interpretación de normas jurídicas jerárquicamente inferiores. Siendo indisponibles para las partes, suelen asociarse con los principios de Orden Público. No obstante, por tener el carácter de principios y de valores del sistema jurídico se caracterizan por ser generales, redactados en forma abstracta y ser evolutivos en el tiempo. Este nivel tiene la virtud de acercar el Derecho Internacional Privado a las normas de Derecho Internacional Público y de Derecho nacional de Orden Público en los Estados, convirtiéndolo en un Derecho integrador y complejo en caso de que se presenten lagunas y vacíos de competencias jurisdiccionales y/o de legislación aplicable. La aplicación de este nivel sin el correspondiente apoyo de los otros dos niveles genera criterios vagos, imprecisos y que privan al sistema de distribución de competencias de la certeza jurídica y de la previsibilidad razonable que debe tener todo sistema jurídico debe preciar. Asimismo, la falta de las características que aporta este nivel priva al sistema de fundamentos jurídicos evolutivos en la redistribución de costes y en la prevención de amenazas al orden económico y social.

Finalmente en el *tercer nivel*, tenemos el aporte del Derecho Internacional Privado de la Globalización: la flexibilidad del sistema con miras al menor coste posible para los particulares. En este caso cuando hablamos de flexibilidad, ya no sólo nos referimos a la adaptabilidad argumentativa a la que se refieren los principios y valores que inspiran el sistema. En este caso nos referimos a herramientas propias y exclusivas del Derecho Internacional Privado, capaces de influir en la determinación de los foros de competencia y en la legislación aplicable de acuerdo a un fin tuitivo y

protector de la parte más débil en la relación jurídica internacional. Sin este criterio, los fundamentos para la protección y redistribución de costes sólo tendrían en consideración el orden económico y social internacional, regional o nacional. En este nivel en cambio, se trata de reconocer en el individuo un poder de actuación suficiente para superar los costes de la litigación internacional y llevar el conocimiento del asunto internacional a la esfera local, sin tener que alterar los elementos de la responsabilidad internacional que se encuentren en juego. En este tercer nivel encontramos herramientas como la *regla de ubicuidad del hecho dañoso*, y los *conceptos autónomos* del Derecho Internacional Privado. Todos ellos determinan la competencia judicial o el derecho de opción que se reconoce al demandante de daños ambientales para elegir la legislación aplicable.

Como se observa, la sinergia entre estos niveles en el Derecho Internacional Privado otorga herramientas con valor argumentativo que superan el positivismo y la dogmática tradicional. Asimismo, se gana en la autocomposición de los litigios internacionales y en el reconocimiento de un sistema autónomo y eficiente en la tutela de los derechos; y a la vez práctico, económico y asequible a todas las partes.



## **PRIMERA PARTE**

### **COMPETENCIA JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL POR DAÑO AMBIENTAL.**



*“La amenaza a nuestro medio ambiente nos ha enseñado que el privilegio y la prosperidad no pueden proteger a ninguna nación mientras la pobreza y la contaminación destruyen a otra”.*

Kofi Annan

(Secretario General de Naciones Unidas. Brindis en la comida para jefes de Estado y de Gobierno participantes de la decimonovena sesión especial de la Asamblea General. Nueva York, 23 de junio, 1997. SG/SM/6270)



## **I PARTE**

### **COMPETENCIA JUDICIAL CIVIL INTERNACIONAL**

#### **POR DAÑO AMBIENTAL**

### **CAPÍTULO I**

#### **OBJETO DE ESTUDIO**

##### *Sumario:*

I.- Objeto de estudio. i.- Planteamiento general del problema fáctico. ii.- Justificación del tema. iii.- Planteamiento del problema jurídico. iv.- Limitaciones. II.- Estructura de la tesis. III.- Objetivos. i.- Objetivo general. ii.- Objetivos de la Primera Parte. iii.- Objetivos de la Segunda Parte. IV. Metodología. V.- Marco Referencial. i.- De una Visión publicista a una visión privatista de la responsabilidad extracontractual por daño ambiental. ii.- De la visión iusprivatista de la responsabilidad internacional a un sistema europeo de competencia judicial internacional: el Reglamento (UE) No. 1215/2012. VI.- Marco Teórico. i.- Del problema de las interpretaciones restrictivas en materia ambiental: la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema.

---

#### **I.- Objeto De Estudio.**

##### **i.- Planteamiento general del problema fáctico.**

El medio ambiente es una realidad compleja en la cual la caracterización jurídica del daño civil asociado al daño ambiental, se encuentra con problemas jurídico-metodológicos. En efecto, la ciencia de las hipótesis-deductivas no es eficiente en la explicación sobre la relación que existe entre los daños civiles y los daños ambientales. Afortunadamente, y resultando muy útil para nuestros efectos, existe una circunstancia fáctica en el daño ambiental que es capaz de aglutinar ambas categorías de daños (daños civiles y daños ambientales).

Tal circunstancia fáctica consiste en que ambas clases de daño (daño ambiental y daño civil) provienen del mismo “hecho generador”.



El hecho generador es un concepto que nació en Europa gracias a las reglas de competencia judicial internacional europeas y que nos sirve para abordar el problema de la competencia judicial civil sin necesidad de pasar por las intrincadas teorías que existen sobre la causalidad entre daños civiles y daños ambientales.

Esta posibilidad viene a simplificar el trabajo que debe desarrollar un juez al momento de determinar su competencia judicial internacional. En efecto, calificar o cuantificar el daño ecológico resulta ser una tarea en sí misma compleja. Por su parte, calificar y cuantificar el daño civil “derivado” de un daño ecológico, resulta aún más complejo y, según veremos en la segunda parte de este trabajo, constituye un error de apreciación para casos de daños civiles.

La simplificación en esta forma de abordar el daño civil, como “asociado” a un daño ambiental - en lugar de “derivado” de un daño ambiental - abre posibilidades exponenciales a la protección de los intereses privados afectados, siempre que pueda acreditarse que dichos intereses están relacionados con el “hecho generador” de un daño ambiental.

Esta forma de abordar el problema es nueva, dinámica y constituye una propuesta original para la simplificación del sistema de atribución de competencias judiciales.

Por otra parte, y repasando a POPPER (<sup>26</sup>), consideramos que esta investigación aborda el conocimiento con objetividad en base al diagnóstico de la realidad jurídica, económica, social y cultural en relación con las ciencias ambientales.

En este caso, nuestra investigación aborda problemas de hecho que pueden ser verificados empíricamente. Tales problemas están representados principalmente por los costes incrementados en la litigación internacional que son asumidos por el demandante civil de un daño ambiental debido a la falta de una norma de competencia judicial especial y a falta de una interpretación favorable a la apertura de

---

(<sup>26</sup>) Popper, Kart, *La Sociedad Abierta y sus enemigos*, Buenos Aires, Paidós, cap.23, 1957, p. 398.

foros de competencia judicial internacional para casos de daños civiles asociados a daños ambientales.

Por esta razón, el tema de este trabajo aborda la interpretación judicial. El tema principal de investigación es:

*La interpretación judicial del “hecho dañoso” (con sus dos vis hecho generador y daño) para la determinación de la competencia judicial civil internacional por daño ambiental, ¿es posible un sistema a favor de la víctima de daño ambiental en el sistema europeo de distribución de competencias judiciales?*

De esta forma, y orientados a casos reales de contaminación internacional se pretende analizar comparativamente casos de demandas civiles internacionales con énfasis en los criterios de CJCI, conocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (ó TJUE) sucesor del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas (TJCE). Desde ya anunciamos que existen pocos casos de demandas civiles internacionales asociadas a daños ambientales. Por el contrario, se advierte una proliferación de conceptos autónomos propios del Derecho Internacional Privado y criterios evolutivos en la jurisprudencia del TJUE.

Analizado el asunto, anticipamos que la escasez de sentencias no corresponde con la realidad de la contaminación producida por empresas internacionales. Todo lo cual es parte sustancial del problema fáctico que exponemos.

En efecto, ante un problema de contaminación ambiental existe pluralidad de intereses civiles que cruzan transversalmente a los Estados del planeta. Sumado a lo anterior, encontramos daños ambientales graves cada vez mejor documentados y mayormente denunciados. Por tanto, no existen razones para que la víctima civil asuma los costos de la litigación internacional, porque todo esto redundará finalmente en irresponsabilidad por daño ambiental.

Ante este problema, consideramos que la razón de la falta de demandas civiles internacionales por daño ambiental obedece al siguiente problema: haber reducido la

realidad del “daño ambiental internacional” al “daño transfronterizo” y haber considerado que los daños civiles son una categoría de daño “derivada” del daño ambiental.

En este panorama, nos encontramos con que sólo existen acciones civiles internacionales en los casos en los cuales la magnitud del daño alcanza niveles catastróficos. El número de casos se reduce, aún más, si consideramos que las mayores catástrofes medioambientales están asociadas a contaminación marítima por derrame de hidrocarburos y a contaminación por radiación nuclear. Sin embargo, estos temas están regulados por normativas sectoriales especializadas que escapan a la vocación universalista de las normas sobre competencia judicial internacional.

## **ii.- Justificación del tema.**

Abordamos el tema motivados por la escasa doctrina hispanohablante especialista en materia de competencia judicial civil internacional (CJCI) por daño ambiental <sup>(27)</sup>.

Los estudios existentes suelen abordar profusamente la legislación aplicable, más que dedicarse a abordar los problemas de la CJCI.

Por otro lado, la doctrina ha dedicado notables esfuerzos al estudio de casos por daño ambiental transfronterizo, dejando de lado el problema del daño civil transnacional. En efecto, el daño ambiental transfronterizo es el caso más claro de daño internacional en la materia; porque entrega una base irrefutable en la producción de daños civiles, y porque su naturaleza hace que el daño sea un fenómeno que claramente se relaciona con el territorio de dos o más países. De esta forma, los daños transfronterizos son los daños internacionales por excelencia.

---

<sup>(27)</sup> Ver observaciones en el mismo sentido en: Crespo Hernández, Ana, *La Responsabilidad Civil derivada de la contaminación transfronteriza ante la jurisdicción estatal*, Eurolex, Madrid, 1999, pp. 39-40.

Sin embargo, el problema de la CJI para daños civiles asociados a daños ambientales es más amplio. En efecto, el daño ambiental puede encontrarse localizado en dos o más países si es que el daño es o no es transfronterizo; sin embargo, el daño civil puede estar localizado en tantos países como lugares hayan verificado un daño patrimonial extracontractual asociado a la ocurrencia del daño ambiental.

A su vez, el funcionamiento de la empresa transnacional del s. XXI nos obliga a replantearnos el sentido y alcance del concepto: “lugar del hecho generador”, el cual puede encontrarse a miles de kilómetros del lugar donde se manifiesta físicamente un daño ambiental.

Por su parte, la forma tradicional de abordar el problema de la CJI para daños ambientales puede explicarse, en parte, por la perspectiva pública con la que suelen abordarse los daños ambientales. En efecto, el Derecho interno se ha nutrido fundamentalmente de Derecho Administrativo nacional. Asimismo, en el plano internacional se ha dejado todo el peso de la elaboración de las directrices de responsabilidad internacional al consenso que se manifiesta en normas de Derecho Internacional Público Ambiental.

Creemos que la fuerte influencia homogeneizadora que ejerce el Derecho Comunitario Europeo y el debate previo a las adopciones de Directrices y Reglamentos comunitarios <sup>(28)</sup> nos obliga a replantear la eficacia con la que se pueden abordar los problemas expuestos anteriormente.

Por esta razón, consideramos que el presente trabajo constituye un verdadero aporte en el acercamiento a la noción de daño civil asociado a daño ambiental en una relación jurídica “transnacional”, esto es, aquella relación jurídica cuyos elementos se encuentran en dos o más Estados sean o no sean Estados vecinos.

---

<sup>(28)</sup> En nuestra materia también destaca el debate previo a la adopción del Reglamento CE 864/2007 Roma II.

### iii.- Planteamiento del problema jurídico.

La jurisprudencia del TJCE (actual TJUE) ha señalado que los fueros especiales constituyen *numerus clausus* <sup>(29)</sup>. Atendida la interpretación restrictiva de los fueros especiales tenemos que, para determinar si un foro es competente, será necesario contar con una adecuada tipificación legal establecida con anterioridad a la ocurrencia de los hechos. Por tanto, y *a priori*, mal podríamos esperar un desarrollo exclusivamente jurisprudencial que determine el contenido del fuero de competencia.

Sin embargo, parte de la doctrina <sup>(30)</sup> ha señalado que el hecho de que los vínculos de conexión estén tipificados, no impide que exista un desarrollo jurisprudencial posterior en base a la interpretación judicial analógica <sup>(31)</sup>. Somos de la misma idea.

Puestos en la circunstancia de que los daños ambientales no tienen un fuero especial, tenemos que, interpretar el fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 en forma estricta iría en contra del carácter proteccionista propio de las materias ambientales. En efecto, en materia ambiental, el Derecho se encuentra en permanente desarrollo según el avance del conocimiento de las ciencias especializadas y mal podría supeditarse su eficacia al consenso y procedimientos propios de la técnica legislativa o de una interpretación restrictiva.

Por otra parte, la forma como se ha redactado el foro especial de competencia, para los delitos y cuasidelitos civiles del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, entrega al juez un amplio margen en la determinación de las dos hipótesis en las cuales se funda, a saber: “lugar donde se hubiere producido o pudiere

---

<sup>(29)</sup> STJCE C-261/90 asunto *Reichert y Kokler vs. Dresdner Bank*

<sup>(30)</sup> Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Francisco, Francisco, *Derecho Procesal Civil Internacional*, 2da. Edición, Thomson Civitas, 2007, p.133.

<sup>(31)</sup> Sobre las diferencias entre la competencia judicial y la competencia legislativa ver: González Campos, Julio, “Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé”, *Recueil des Cours de l'Académie de Droit international de la Haye*, T. 156, 1977-III, p. 303.

producirse el hecho dañoso”. Por esta razón, existe la necesidad de determinar qué vacíos presentes en la tipificación de los vínculos de conexión impiden determinar el sentido y alcance de los vínculos existentes. Tal trabajo de análisis debe estar en armonía con los principios y modelo de responsabilidad ambiental que se hayan otorgado los Estados.

Algunos autores han puesto de manifiesto la existencia de problemas en la tipificación del vínculo en un mundo globalizado, donde las ideas de orden y seguridad jurídica, se encuentran con la necesidad de incluir valores y principios evolutivos por definición <sup>(32)</sup>. Coincidimos en lo anterior y por esta razón encontramos pertinente que el análisis de la competencia judicial internacional incluya un análisis sobre los principios que informan el sistema de CJCI para daños ambientales.

Por su parte, el debate sobre la CJCI para ilícitos civiles asociados a daños ambientales internacionales, se produce a raíz de conflictos en los cuales tanto el hecho generador como el resultado lesivo (tanto daño civil como daño ambiental) se encuentran en distintos Estados, es decir, cuando el daño está *plurilocalizado* <sup>(33)</sup>.

A este fenómeno es al que denominaremos daño transfronterizo o daño transnacional según si el daño afecte o no a intereses situados en Estados vecinos <sup>(34)</sup>.

De esta forma, hablaremos de hechos que constituyen ilícitos a distancia, en todos los casos en los cuales el hecho generador del daño y el resultado lesivo se encuentran localizados en Estados distintos <sup>(35)</sup>.

---

<sup>(32)</sup> Fernández Rozas, José Carlos, “Comunitarización del Derecho internacional privado y Derecho aplicable a las obligaciones contractuales”, *Revista Española de Seguros*, número 140, 2009, pp. 595-616. Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Castellanos Ruiz, Esperanza (Dir.), *La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización*, Madrid, 2008, pp. 421-431. Enríquez Rosas, José David, *Derecho Internacional Económico. Instituciones y críticas contemporáneas*, México, Porrúa, 2006. Carrascosa González, Javier, “Globalización y Derecho Internacional Privado en el s. XXI”, *Anales de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia*, número 22, 2004, pp. 223-237.

<sup>(33)</sup> El concepto esencial de “daño plurilocalizado” ha sido suficientemente desarrollado gracias a la autoridad de los estudios del profesor Pierre Bourel. Ver: Bourel, Pierre, “Nota a la STJCE 30 noviembre 1976, *Bier/ Mines de Potasse d’Alsace*, as. 21/76”, *Review Critique du Droit International Privé*, III, 1977, p. 568. Asimismo el tema es desarrollado en esta tesis con mayor profundidad en los epígrafes: 2 del Capítulo II y 1 del Capítulo III, de la segunda parte de este trabajo.

<sup>(34)</sup> Ver epígrafes 2 y 3 del Capítulo I, de la segunda parte de este trabajo.

Para estos casos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), antes Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) <sup>(36)</sup> señaló que la determinación del tribunal competente basada en el *forum causa* (o lugar donde se originaron los hechos) no era compatible con los objetivos declarados por el Convenio de Bruselas de 1968 <sup>(37)</sup>. En efecto, tanto el espíritu del Convenio de Bruselas de 1968 como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo apuntaban a señalar que el foro competente era aquél donde los hechos habían manifestado sus consecuencias.

No obstante lo anterior, desde el año 1979, el Tribunal de Justicia estableció una *regla de ubicuidad* que permite al demandante elegir el lugar donde presenta su demanda: a) ante el tribunal del lugar de origen del daño (*locus delicti*) o b) ante el tribunal donde se verificó el resultado daño (*locus damni*).

Para tales casos, consideramos necesario hacer un análisis pormenorizado de los criterios de atribución de competencia judicial internacional.

En efecto, referirnos a la CJCI, equivale a recurrir a una noción que es tributaria del sistema occidental de tradición romano-germana, que materializa la jurisdicción que ejerce un Estado, en un tribunal determinado, en razón de un supuesto de hecho que es de naturaleza privada e internacional y que se encuentra fundado en un presupuesto legal que atribuye responsabilidad extracontractual <sup>(38)</sup>.

---

<sup>(35)</sup> Carrillo Carrillo, Beatriz, “El debate sobre los ilícitos a distancia: Comentario a la STJCE (Sala Segunda) de 10 Junio 2004, Kronhofer, C- 168/02”, *Anales de Derecho*, Número 22, Universidad de Murcia, 2004, pp. 357-363. Gaudemet-Tallon, Hélène, “Note a la STJCE 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, C- 220/88”, *Review Critique du Droit International Privé*, II, 1990, p. 372.

<sup>(36)</sup> Prácticamente la totalidad de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo que se presente en este trabajo provendrá del Tribunal de justicia de las Comunidades europeas (TJCE), esto es, el antecesor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

<sup>(37)</sup> STJCE C-364/93 asunto *Marinari*.

<sup>(38)</sup> Antecedentes sobre la influencia en el Derecho internacional privado del sistema occidental de tradición romano-germana en comparación con el sistema de *Common Law* en: Aguilar Benítez, Lugo, *Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacional*, Universidad de Sevilla, España, 2002, p. 19. Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Carrascosa González, Javier, *Práctica Procesal Civil Internacional*, Comares, España, 2003, p.3. Rodríguez Jiménez, Sonia, *Competencia Judicial Civil Internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, p.20. Silva Silva, Jorge Alberto, *Derecho Internacional sobre el proceso. Procesos civil y comercial*, MacGraw-Hill, México, p. 75. Contreras Vaca, Francisco, “La Competencia Judicial en

En este sentido, existe un problema que se produce por la falta de un sistema de distribución de competencias judiciales que actúe coordinadamente para la mayoría de los países. En efecto, salvo en la Unión Europea, la falta de un sistema uniforme para el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales con los Estados extracomunitarios y entre estos mismos, viene a ser el origen de la mayoría de los conflictos internacionales sobre competencia.

La falta de comunicación y de coordinación entre los Estados deriva en conflictos por cúmulo de competencias. A la inversa, la ausencia de tribunales que se declaren competentes para conocer de un asunto, también genera conflictos, como el denominado “caso multinacional apátrida” <sup>(39)</sup>.

Los efectos nocivos por esta mala coordinación estatal suelen ser asumidos tanto por la víctima de daño ambiental, como por la víctima de daño civil. De aquí que determinar el sentido y alcance de los principios que ilustran la interpretación judicial para casos de competencia internacional por responsabilidad extracontractual adquiere gran importancia en los casos que se refieren a daños ambientales.

El mayor desarrollo normativo a nivel global sobre CJCI para obligaciones extracontractuales se encuentra en la experiencia europea. El sistema europeo funciona en base al Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Es sucesor del Reglamento 44/2001 (Bruselas I) de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

A su vez, el Reglamento 44/2001 tiene como antecesor al Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, celebrado al amparo del artículo 220, cuarto guion, del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea relativo a la

---

México y en la esfera internacional a nivel interamericano”, *JUS*, Ciudad Juárez, México, 1986, p. 357-358.

<sup>(39)</sup> Boggiano, Antonio, Curso de Derecho Internacional Privado, de las relaciones privadas internacionales, Abeledo-Perrot, Argentina, 2001, p.47.



competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil <sup>(40)</sup>. El Reglamento (CE) No. 44/2001 sustituyó al Convenio de Bruselas de 1968 en los territorios de Estados miembros en los que se aplica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, excepto Dinamarca <sup>(41)</sup>.

El Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 es el cuerpo vigente que determina en el artículo 7.2 el foro competente para obligaciones que nacen de delitos y cuasidelitos civiles. A falta de un ordenamiento especial, este cuerpo normativo se utiliza para determinar la CJCI en caso de daños ambientales.

Reconociendo que en la realidad jurídica del daño ambiental internacional pueden participar multiplicidad de causas, actores y efectos; advertimos que en este trabajo nos referiremos al daño civil extracontractual internacional con especial énfasis en el daño civil transnacional.

Entendemos por daño civil transnacional aquél que es resultado de decisiones, acciones y efectos que involucran a dos o más Estados no necesariamente fronterizos. Por su parte, el daño ecológico es el vector fenomenológico aglutinante y definidor por antonomasia del lugar del hecho dañoso.

Considerando que la competencia judicial internacional para el conocimiento de daños civiles puede estar separada de la competencia judicial internacional para conocer del daño ecológico, hemos considerado que en este trabajo sólo nos referiremos a la perspectiva civil del daño.

---

<sup>(40)</sup> El Convenio de Bruselas fue modificado por los convenios de adhesión de nuevos Estados miembros, el 16 de septiembre de 1988. Dichos Estados eran miembros de las Comunidades Europeas y algunos pertenecían a la Asociación europea de libre comercio. El convenio resultante fue el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Convenio de Lugano de 1988).

<sup>(41)</sup> Dinamarca celebró un acuerdo especial aprobado mediante Decisión 2006/325/CE del Consejo, en virtud del cual se aplicó el Reglamento No. 44/2001. Asimismo, el Convenio de Lugano de 1988 fue revisado por el Convenio de Lugano del 30 de octubre del 2007, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. En este Convenio intervinieron la Comunidad europea, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza.

En efecto, el daño ecológico puede diferir del daño civil en la titularidad activa (vgr. Estados, personas, asociaciones sin fines de lucro, etc.) Asimismo, el daño ecológico puede perseguir distintos fines (vgr. reparación *in natura* y más discutiblemente indemnización del daño moral colectivo).

En general, reflejar las características del daño ecológico ambiental no nos ayudará en la caracterización y categorización del daño civil internacional. Por esta razón, el daño civil no puede ser considerado como una adenda, una prolongación o un efecto del daño ecológico. De otra forma, existiría el riesgo de asumir que todo daño civil es por esencia un daño *indirecto*.

Difiriendo la perspectiva que ha considerado al daño civil como un daño derivado del ambiental y justificados por los costes que debe enfrentar la víctima civil transnacional, hemos venido a presentar un estudio que ofrece evidencias y argumentos jurídicos que buscan aportar a la construcción de un Derecho Procesal Internacional Ambiental.

Al término de este trabajo esperamos que el lector concluya como sí era necesaria una investigación que instrumentalizara los principios de Derecho Internacional Público en normas de Derecho Internacional Privado con vocación universal, y que resuelva el problema de los costes de litigación internacional sufridos por víctimas civiles de daño ambiental transnacional.

#### **iv.- Limitaciones.**

Este trabajo se posiciona en la perspectiva del Derecho Internacional Privado para abordar la competencia judicial civil por un daño internacional; por esta razón, dejaremos de lado las experiencias reguladas en cuerpos normativos sectoriales <sup>(42)</sup>,

---

<sup>(42)</sup> Convenio de París, sobre responsabilidad civil en materia nuclear de 29 de julio de 1960, publicado en BOE español, número 28, Madrid, el 2 de febrero de 1967; y Convenio Internacional de Bruselas, sobre responsabilidad civil por daños debidos a la contaminación por hidrocarburos de 29 de noviembre de 1969 publicado en el BOE español, número 58, Madrid, el 8 de marzo de 1976. Asimismo, en este último ámbito se encuentra el Convenio de Bruselas de 1969 y el de 1971 sobre constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos (BOE, No 60, Madrid, 11 de marzo de 1982). Ambos convenios tienen protocolos

esto es, dejaremos de lado el análisis de normativa especializada que está destinada a regular casos de contaminación por hidrocarburos y por radiación nuclear.

También quedan fuera del análisis, las fases del proceso judicial internacional que no guardan relación con la determinación del tribunal competente. Es decir, quedan fuera: el desarrollo del proceso internacional y la fase de reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera.

Por otra parte, también se excluye el arbitraje. En este caso, debe hacerse una mención especial: entre el arbitraje y la vía judicial ordinaria debe existir una relación comunicativa y eficiente que evite la pérdida de recursos y de tiempo por la suspensión de procedimientos o por el desarrollo de procedimientos paralelos. Se excluye el arbitraje porque así ha sido expresamente señalado en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012.

En materia de arbitraje el nuevo Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil viene a confirmar el criterio establecido por su predecesor, esto es, que la competencia judicial establecida mediante contrato de arbitraje puede ser reconocida por el juez ordinario. De esta forma, los tribunales nacionales pueden declararse incompetentes. Además, los tribunales nacionales están llamados a examinar la validez y la eficacia de los convenios arbitrales de acuerdo con su legislación nacional <sup>(43)</sup>. El artículo 73.2 del nuevo Reglamento señala tal como sus antecesores, que no afecta la aplicación del Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales.

---

complementarios celebrados en Londres el 27 de noviembre de 1992. Publicados respectivamente en: BOE español, número 225, Madrid de 20 de septiembre de 1995 y BOE español, número 244, Madrid, de 11 de octubre de 1992.

<sup>(43)</sup> Ver también considerando 12 del Reglamento (UE)1215/2012 del 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicado en el diario oficial de la UE el 20 de diciembre del 2012.

Por otro lado, considerando tanto la propuesta de la Comisión Europea recibió para la modificación al Reglamento 44/2001 Bruselas I (<sup>44</sup>), como también el considerando 12 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, abordaremos brevemente la impugnación de la competencia judicial en virtud de la existencia de un convenio de arbitraje, a propósito de los problemas en la determinación de la CJCI (<sup>45</sup>).

Habiendo sentado las principales limitaciones de nuestro trabajo, consideramos pertinente exponer en este mismo acápite que la línea de investigación se desarrolla en búsqueda de la comprensión de la naturaleza jurídica del “hecho dañoso”.

Para conseguir este propósito, abordamos el problema del “hecho dañoso” desde sus dos perspectivas: “hecho generador” y “resultado lesivo” (o “daño” *strictu sensu*).

Detrás del hecho dañoso se encuentra la opción del legislador comunitario y la interpretación del Tribunal de Luxemburgo, en torno a dotar de importancia al elemento “daño internacional”, en detrimento de los otros elementos de la relación extracontractual. Este aspecto es especialmente importante, porque en nuestro tema hablaremos de dos clases de daños diferentes pero asociados entre si: daños civiles y daños ambientales.

En este trabajo no se abordarán los otros elementos de la relación jurídica extracontractual, sino en la medida que estén en función de la determinación del hecho dañoso. En este sentido, los elementos de la relación internacional extracontractual: daño y causalidad ocupan un lugar fundamental en el desarrollo de la investigación. Sin embargo, y como veremos a propósito del estudio del “hecho generador” (<sup>46</sup>), resulta que la determinación de la identidad del demandado

---

(<sup>44</sup>) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Bruselas, COM(2010) 748 , 2010.

(<sup>45</sup>) Ver epígrafe 8 del Capítulo Primero de la Segunda parte.

(<sup>46</sup>) Ver epígrafes 1 y 2 del Capítulo II, de la Segunda parte.

internacional también ocupará parte importante del Capítulo II de la segunda parte. Esto se explica por qué haremos un análisis sobre el fuero “domicilio del demandado” y la relación que existe entre los conceptos: “domicilio del demandado” y “lugar del hecho generador”.

Por otro lado, buscamos desarrollar la evolución del Derecho competencial extracontractual en la Unión Europea, en base al análisis jurisprudencial. Por esta razón, contextualizar, conceptualizar y caracterizar el hecho dañoso, serán tareas que destinarán buena parte del trabajo.

Finalmente, para entender la funcionalidad de la base competencial establecida en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 tendremos siempre como trasfondo la aplicación de principios de Derecho Internacional del Medio Ambiente y los modelos del Derecho Internacional Privado vigentes en la Unión Europea.

## **II.- Estructura de la Tesis.**

La tesis está estructurada en base a una Introducción, dos Partes y un Capítulo Final.

**La Primera Parte** tiene como objetivo presentar el trabajo de investigación desde sus fundamentos y motivaciones. En su primer Capítulo se expone el Objeto de Estudio. Asimismo, se han desagregado los elementos que definen el objeto de la investigación a fin de ayudar en la comprensión del lector.

Este Primer Capítulo también enuncia los objetivos que posteriormente serán confrontados a la luz de las conclusiones de cada una de las partes y las conclusiones generales de la investigación.

El acápite destinado a la metodología no sólo presenta los métodos y las técnicas de investigación, sino que también aborda tangencialmente el debate sobre el método en la disciplina del Derecho Internacional Privado.

Finalmente, en este Capítulo destaca la presencia del “Marco Referencial” o exposición de los pilares subyacentes en la investigación. La exposición explícita del Marco Referencial, apoyado en gran medida por el Derecho Internacional Público, no sólo hablan de la formación jurídica de esta investigadora, sino que además nos ayudará a no dar por obvias las ideas que en última instancia fundan el *leit motiv* de una propuesta que armoniza y da coherencia a los sistemas de protección ambiental en los ámbitos público y privado.

En los Capítulos II y III de la Primera Parte, de este trabajo se exponen teorías, conceptos y definiciones, que explican el fenómeno de la competencia judicial civil internacional, cuando esta competencia asocia daños civiles a daños ambientales.

Esta Primera Parte constituye en si misma un gran “Marco Teórico” para la investigación. En efecto, sustentada sobre los pilares básicos que fueron señalados en el “Marco Referencial”, la Primera Parte viene a cerrar el Marco Teórico presentado en el Primer Capítulo. La exposición de teorías que nutren el sistema de distribución de competencias, demuestran que en su seno se encuentran las claves para la interpretación y reinterpretación de los fueros de competencia judicial que se abordarán en la Segunda Parte de esta investigación.

La Primera Parte, presenta la posibilidad de “la universalización de las normas europeas sobre competencia judicial internacional”.

De esta forma, consideramos estar presentando un aporte real con acciones decididas a la creación de un “Derecho Global” real; que sea eficiente en la eliminación del *dumping ambiental* y que sea coherente como sistema internacional de distribución de competencias judiciales.

El plan expositivo de esta parte hace necesario que se divida en tres capítulos que son complementarios entre si. Todos ellos cumplen con un fin descriptivo basado en el sentido y alcance de los principios internacionales que afectan la determinación de la competencia judicial para asuntos de daño ambiental.

No obstante lo anterior, el Capítulo Tercero no sólo cumple con una función descriptiva, sino que además instrumentaliza los principios desarrollados en los dos capítulos anteriores a fin de poder alcanzar las condiciones que se necesitan para valorar el sistema europeo de distribución de competencias judiciales para daños ambientales.

**La Segunda Parte** presenta una técnica de exposición que utiliza un lenguaje más cercano a la tradición del Derecho Internacional Privado, más técnico y más compilativo. El trabajo gana en densidad y en profundidad.

Esto se debe a que cada capítulo desarrolla su propio “Marco Conceptual” y se propone resolver sus propias hipótesis.

La Segunda Parte es cuantitativamente más extensa que la Primera Parte. Ante la tentación de organizar el trabajo en base a partes cuantitativamente homogéneas, hemos preferido establecer una organización que demostrara gráficamente dónde se encuentra el objeto principal de la investigación, en una exposición que va desde lo general a lo particular. De esta forma, podemos ser capaces de llegar a temas específicos con la profundidad necesaria, sin descuidar el hilo principal.

Esta parte aborda la descripción de los fenómenos, la categorización de los criterios y el análisis crítico de los fueros.

La Segunda parte se estructura en base a tres Capítulos, todos los cuales se refieren a los foros de competencia que se anuncian desde el título de esta misma Parte.

Para ellos se ha elegido una exposición que disecciona el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012. Así, diseccionado el fuero, cada capítulo presenta las máximas posibilidades de análisis para los foros resultantes.

Finalmente, esta Parte, resuelve tanto en el Capítulo II (*del Hecho Generador*) como en el Capítulo III (*del Daño*), el núcleo fundamental de la investigación.

**El Capítulo Final**, presenta las conclusiones de la investigación. Tiene como garantía la existencia de un estudio aséptico, que se encarga de presentar a lo largo de la investigación todos los temas que se debaten en la doctrina, a favor y en contra, en la interpretación del sentido y alcance de las normas europeas de competencia judicial internacional.

A semejanza de los capítulos que le preceden, hemos querido dotar a las Conclusiones de una exposición ordenada traducida en forma de Capítulo de clausura. Este Capítulo se articula en base a la descripción, exposición de hallazgos y valoraciones de conjunto.

Recordemos que cada Capítulo tiene un acápite final en el que se exponen las conclusiones alcanzadas en dicho Capítulo. Este Capítulo Final tiene por sentido dar respuesta a los objetivos planteados en el Primer Capítulo de esta tesis, con una perspectiva general e integradora.

Por su parte, el Capítulo Final, no reproduce - cual copia compilativa - tales conclusiones. Por el contrario, en este Capítulo encontramos la valoración final y definitiva del trabajo de investigación con la perspectiva de un observador *supra* posicionado en el sistema de distribución de competencias.

El Capítulo Final termina con una propuesta de modificación al Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012.

Esta propuesta no estaba originariamente planteada como uno de los objetivos de la investigación, y tampoco inspiraba el hilo de la investigación. De forma tal que consideramos que la exposición, análisis y valoración de la tesis en las conclusiones finales, cumple acabadamente los objetivos propuestos.

Sin embargo, y casi como corolario en nuestra investigación terminamos con una propuesta de modificación al Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En efecto, la lógica de la exposición y la síntesis del análisis evidencia vacíos y riesgo que ameritan una modificación en el principal cuerpo normativo analizado.

De esta forma, la propuesta de modificación del Reglamento (UE) No. 1215/2012 viene a concretar en forma práctica las conclusiones de la investigación.



### **III.- Objetivos.**

#### **1.- Objetivo General.**

El objetivo general de este trabajo consiste en analizar en forma crítica la integridad y coherencia del sistema comunitario europeo de atribución de competencias judiciales internacionales, para casos de daños civiles internacionales asociados a un daño ambiental; proponiendo una distribución de riesgos y cargas procesales en armonía con los valores y principios que rigen el sistema europeo de responsabilidad ambiental. Sistema que a nuestro entender está en beneficio de la “parte más débil”.

Para el cumplimiento de este objetivo general, es necesario conocer los principios y valores del sistema europeo de responsabilidad ambiental, conocer el concepto de “parte más débil”, determinar el sentido y alcance del fuero para daños extracontractuales y determinar su aplicabilidad para daños civiles asociados a un daño ambiental.

Por esta razón los objetivos específicos que nos proponemos alcanzar en la investigación son:

#### **2.- Objetivos de la Primera Parte.**

Al comenzar esta investigación hemos visto conveniente exponer el Marco Referencial y el Marco Teórico en el que se sustenta. El Marco Referencial está compuesto por conocimientos generales, comúnmente aceptados, que no se debatirán en esta tesis por considerárseles “presupuestos del sistema”. Tales conocimientos, han sido estructurados en base a dos pilares: el marco normativo que otorgan los tratados internacionales sobre protección al medio ambiente y la interpretación en clave universalista de las normas comunitarias.

El Marco Teórico, en cambio, está compuesto por principios, teorías, doctrinas y normas que afectan al conjunto del sistema europeo de Competencia Judicial Internacional para casos de daños ambientales. Estos principios y normas serán analizados con profundidad, con miras a resolver el problema que nos hemos planteado.

La Primera Parte, desarrolla *in extenso* tres grandes temas:

En el Capítulo I, se expone el objeto de la investigación, justificación, los límites de la investigación y objetivos específicos. Destacan en este Capítulo la expresión del Marco Referencial y del Marco Teórico.

En el Capítulo II, se abordan temas relacionados con los principios que sustentan el sistema. En este capítulo se describen los principios de protección del medio ambiente a fin de que, conociéndolos, se apliquen a un análisis *in concreto* para casos de daños ambientales. En este Capítulo se abordan con profundidad los fines y principios propios de la competencia judicial civil internacional y se plantean las primeras interrogantes en torno a: la seguridad jurídica, derecho de tutela judicial efectiva y coherencia del sistema.

Finalmente, el Capítulo III aborda el sistema europeo de competencia judicial civil internacional, describiendo detalladamente la naturaleza de la obligación extracontractual internacional para daños ambientales internacionales. Este Capítulo hace un análisis crítico sobre la clásica noción de obligación civil internacional.

#### **i.- Objetivos específicos del Capítulo I.**

1.- Presentar el Objeto de estudio. Explicitar las limitaciones de la investigación y describir los problemas fácticos y los problemas jurídicos que lo motivan. Asimismo, señalar claramente los objetivos específicos de cada capítulo en la investigación, la metodología utilizada y la estructura de la tesis.

2.-Exponer el Marco Referencial, presentando la responsabilidad extracontractual desde una visión privatista, como innovación a la visión de la responsabilidad ambiental propia del Derecho Público.

3.- Exponer el Marco Teórico en base al problema de las interpretaciones restrictivas, cuando este tipo de interpretaciones afecta a las víctimas de daño ambiental. Sentar el principio de seguridad jurídica y previsibilidad del sistema.

## **ii.- Objetivos específicos del Capítulo II.**

1.- Determinar si existen o no principios ambientales reconocidos en cuerpos normativos comunitarios y si estos principios están recogidos o no en normas de Derecho Internacional Privado.

2.- Determinar si existen principios que afecten a los fueros de competencia judicial internacional, o que sirvan de fundamento argumentativo que justifique la interpretación del fuero en favor de la víctima civil de un daño ambiental.

Determinar si los vínculos de conexión entre el hecho dañoso y el tribunal pueden priorizar los intereses de la víctima.

De corroborarse un espíritu a favor de la víctima de daño ambiental deducible de los principios y tratados internacionales de protección ambiental que se analicen, entonces estaríamos en posición de presentar una excepción en la interpretación del fuero especial establecido para los delitos y cuasidelitos civiles para casos de daño ambiental.

## **iii.- Objetivos específicos del Capítulo III.**

1.- Describir, analizar y categorizar comparativamente los foros competentes en caso de daño ambiental. Para esto, realizaremos el análisis crítico en base a las categorías de fueros tradicionalmente establecidas para daños civiles.

2.- Analizar y describir la situación que ocurre frente al cumplimiento de órdenes y diligencias originadas en otros Estados en relación con daños ambientales internacionales. Determinar el sentido y alcance del principio de cooperación judicial y cooperación administrativa para el ejercicio de acciones civiles por daño ambiental.

### **3.- Objetivos en la Segunda Parte.**

En la segunda parte de esta investigación desarrollaremos el análisis crítico del concepto: “hecho dañoso”.

Habiendo desarrollado en la Primera Parte de este trabajo un estudio sobre los presupuestos normativos, principios y normas esenciales para el sistema de distribución de competencias judiciales internacionales para daños ambientales, estaremos en condiciones de aplicar dichos principios y criterios al sistema europeo de distribución de competencias judiciales vigente.

Esta parte, se divide en tres capítulos que dan cuenta de tres grandes temas:

En el Capítulo I, se realiza un análisis crítico sobre el “hecho dañoso” y la “regla de ubicuidad”. Este análisis se basa en la evolución jurisprudencial del artículo 5.3 del Convenio de Bruselas hasta nuestros días con la entrada en vigencia del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No.1215/2012.

El Capítulo II, aborda específicamente el primer elemento que integra el hecho dañoso, esto es, el “hecho generador”. En este capítulo se aborda por primera vez en la doctrina de habla hispana la aplicación del concepto de “hecho dañoso” para empresas transnacionales.

Finalmente, el Capítulo III aborda el segundo elemento del hecho dañoso, esto es, “el daño”. Este Capítulo hace un análisis sobre los foros competentes, según la extensión del daño.

## **i.- Objetivos específicos del Capítulo I.**

1.- Describir y analizar el fuero “hecho dañoso” para casos en los que interviene un daño ambiental. Esto es, determinar el sentido y alcance del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012.

2.- Identificación de problemas asociados a la interpretación del fuero “hecho dañoso” para asuntos ambientales y determinación de las posibilidades que tiene la víctima de un daño ambiental o de un daño civil relacionado con un daño ambiental para ser favorecida en la determinación del tribunal competente. Todo lo cual, expondrá el debate a favor y en contra de los *forum actoris* y del principio *favor laesi* para materias ambientales.

3.- Descripción y análisis del sentido y alcance de la regla de creación jurisprudencial denominada “regla de ubicuidad” para asuntos ambientales. Análisis comparado con otros cuerpos comunitarios como el Reglamento Roma II.

4.- Análisis de la extensión de la regla de ubicuidad para casos de daño transnacional (asuntos complejos de daño internacional no necesariamente fronterizo). Esto es, análisis de la regla de ubicuidad entre el hecho generador y el daño cuando estamos en presencia de un daño civil ubicado en un lugar que no coincide con el lugar donde está ubicado el daño ambiental.

5.- Análisis de los criterios que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en torno al fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 y sus predecesores.

6.- Análisis del *forum shopping* en foros de competencia judicial por daño ambiental. Determinación del sentido, riesgos y alcance del *forum shopping malus*.

7.- Análisis y valoración del concepto “parte más débil” en la relación internacional extracontractual y análisis de su protección en casos de daño ambiental internacional.

## **ii.- Objetivos específicos del Capítulo II.**

1.- Considerando que la regla general en materia de foros competentes es el domicilio del demandado, y que especialmente el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, ha establecido el fuero para delitos y cuasidelitos en el lugar del hecho dañoso, determinaremos si es posible asimilar el lugar del hecho generador al domicilio del demandado.

2.- Analizar la relación que existe entre el fuero establecido en el artículo 4º y el fuero establecido en el artículo 7.2, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012.

3.- Analizar y determinar dónde se localiza el hecho generador en el caso de las personas jurídicas internacionales, y especialmente en el caso de las empresas transnacionales, al estar estas últimas compuestas por una o más sociedades localizadas en uno o más Estados.

4.- Analizar si es posible que exista solidaridad entre las sociedades pertenecientes a la empresa transnacional o al grupo de sociedades, en lo referente al foro competente por daños ambientales.

5.- Analizar la relación que existe entre el fuero establecido en el artículo 8.1 y el fuero establecido en el artículo 7.2, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

6.- Análisis de la aplicación de la regla de ubicuidad en casos sociedades pertenecientes a una empresa transnacional o a un grupo de sociedades.

### **iii.- Objetivos específicos del Capítulo III.**

1.- Describir y categorizar los daños civiles transfronterizos diferenciándolos de los daños civiles transnacionales. Analizar cómo los daños civiles corresponden más a una categoría de daño transnacional y concluir las diferencias con el daño ambiental típicamente transfronterizo.

2.- Analizar los criterios causalistas que buscan vincular los daños civiles a la existencia de un daño ambiental y valorar la conveniencia y eficacia de esa relación para efectos de determinar la competencia judicial internacional.

3.- El problema de la extensión de los daños civiles asociados a daños ambientales, en un escenario de disociación entre el lugar del hecho generador del daño y el lugar donde se manifestaron las consecuencias, nos permitirá analizar dogmática y jurisprudencialmente el alcance de los daños civiles y su correspondiente categorización en “daños directos” o “daños indirectos”, para efectos de determinar la extensión de la competencia judicial internacional de un tribunal.

## **IV. Metodología.**

Toda realidad es interpretable a la luz de una teoría <sup>(47)</sup>. En nuestro caso, siendo esta una investigación jurídica, nuestra realidad está representada por la norma jurídica. Analizaremos la norma jurídica como una realidad que condiciona tanto el desarrollo de las actividades económicas como el régimen de responsabilidades. Así, mientras los datos empíricos, que en materia ambiental son muy importantes para

---

<sup>(47)</sup> Eco, Umberto, Como se hace una Tesis: Técnicas y Procedimientos de estudio, investigación y escritura, Gedisa, 6ª ed. 2001.

probar el daño, suelen admitir varias clases de interpretaciones (<sup>48</sup>); los datos jurídicos, en cambio, están condicionados por los criterios, elementos y límites que rodean la dictación de la norma. En este trabajo trabajaremos datos jurídicos.

En nuestro caso, es particularmente relevante cómo en la interpretación de principios jurídicos (vgr. principio *favor laesi*) intervienen criterios económicos y políticos. De esta forma, y más allá de la coherencia con la que se pretende dotar a sistema de distribución de competencias judiciales internacionales, el resultado es, muchas veces, ineficiente o insatisfactorio para los fines.

En materia ambiental, resulta evidente. En efecto, los fines que se persiguen en materia ambiental no son los mismos que aquellos que se persiguen en materia mercantil. Por esta razón la coherencia del sistema no puede analizarse desde una sola óptica.

Los fines de la competencia judicial para la libre circulación de las mercancías difieren de los fines de la competencia judicial ambiental. Estos últimos deben ser analizados a la luz de los principios ambientales en juego.

Todo esto demuestra que es necesario abordar conjuntamente: la descripción de la norma y la argumentación de los fines; de modo tal que, la teoría del sistema que se propone pueda servirse de un método jurídico adecuado (<sup>49</sup>).

---

(<sup>48</sup>) Crítica y planteamiento sobre el carácter mítico-simbólico de la metodología del Derecho: Salas, Minor E., Debate sobre la utilidad de la metodología jurídica: Una reconstrucción crítica de las actuales corrientes metodológicas en la Teoría del Derecho, *Isonomía Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, No. 27, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2007, pp. 111-142. Ver también: Espinar Vicente, José María, *Tratado Elemental de Derecho Internacional Privado*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, 2008, pp. 707-713.

(<sup>49</sup>) Crítica a una Teoría de Sistemas creado “desde arriba” y Teoría del Método creado “desde abajo” en Aguiló Regla, Joseph, *Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico)*, Ariel, Barcelona, 2000, pp.716 y ss. Otras distinciones entre Teoría de la norma y Derecho de la argumentación en: MacCormick, Neil, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon, 1978, pp. Xiv y ss. Atienza, Manuel, “El Derecho como argumentación”, en *Isegoría*, N° 21, 1999, pp. 37-47. García Figueroa, Alfonso, “El Derecho como argumentación y el Derecho para la argumentación”, *Cuadernos de Filosofía del Derecho DOXA*, Departamento de Filosofía del Derecho Universidad de Alicante, edición electrónica Espagracic, 1989, pp.7-15.



Por otra parte, y a diferencia de lo que ocurren en otros sistemas internacionales (vgr. el Derecho Internacional latinoamericano) en Europa existe una tendencia a la “practicidad” de las interpretaciones de Derecho Internacional Privado.

Las interpretaciones normativas prácticas han sido consideradas como “eficientes”. Esto ha significado un alejamiento de la disciplina jurídica clásica (aquella que en el Derecho Internacional Privado también es heredera de Savigny) para poner énfasis en los “efectos prácticos” de las resoluciones judiciales. Si bien el volcamiento al estudio jurisprudencial ha contribuido a un mayor diálogo judicial internacional, existe un debate sobre los fundamentos que aún permanece pendiente <sup>(50)</sup>.

Este trabajo explora y describe la competencia judicial internacional para casos de daño ambiental con fundamentación dogmática. En efecto, el sistema de competencia judicial en materia de responsabilidad extracontractual internacional, pudo abordarse exclusivamente desde la *praxis*; sin embargo, no ha sido así.

Si bien trabajamos en un área especialmente práctica y ciertamente nos interesan los efectos de las resoluciones judiciales, nos hemos propuesto abordar el difícil campo de la interpretación normativa. Desde esta perspectiva, no sólo nos interesa que la resolución judicial tenga efectos, también nos interesa que los efectos guarden relación con los “fines últimos” del Derecho Ambiental Internacional.

Por esta razón, el lector podrá advertir un espíritu de universalismo que se desarrolla a lo largo de este trabajo, el cual subsiste no obstante la existencia de normas vigentes y a veces en ausencia de positivización.

Consideramos que la eficiencia de un estudio, no puede medirse exclusivamente por la eficacia de una resolución judicial circunscrita a un determinado territorio jurisdiccional, cual si fuera una *conditio sine qua non*. Creemos que la eficiencia de un estudio debe propender a los fines de la resolución judicial estructurados en base a principios y en base a los valores universales sobre los cuales se sustenta un sistema

---

<sup>(50)</sup> Prologo de Dr. Sixto Sánchez Lorenzo, a la obra de Espinar Vicente, José María, *Tratado Elemental de Derecho Internacional Privado*, Servicio de Publicaciones de Universidad de Alcalá de Henares, Madrid, 2008.

internacional. En este trabajo, el fundamento jurídico ha sido desarrollado cual “marco normativo” en la I Parte de la investigación.

Por otra parte, metodológicamente, se han considerado las modernas tendencias sobre construcción, interpretación y valoración judicial de derechos subjetivos; de modo que el presente estudio presenta un aporte al debate sobre los criterios en la atribución de competencia judicial internacional por daño ambiental, con miras a una futura normativa especial sobre el tema.

Las reglas metodológicas usadas, destacan una conjugación de métodos inductivo y deductivo (<sup>51</sup>).

El *primero*, para el análisis en concreto, propio de las actividades descriptivas y gnoseológicas desarrolladas a propósito de la caracterización y categorización del daño internacional.

El *segundo*, principalmente para el análisis de la validación de la regla de Derecho propuesta para la competencia judicial civil internacional y en la interpretación de principios internacionales.

El método también se sirve de un componente heurístico; es decir, la investigación incorpora nuevos conceptos y establece nuevas categorías de vínculos de acuerdo a criterios novedosos.

Por otra parte, este trabajo se motiva en la sistematización de los criterios que han podido asistir al juez a la resolución sobre la extensión de su competencia para casos de daño civil internacional, cuando ese daño civil está asociado a un daño ambiental. De aquí que, la sistematización de criterios que se presenta al final del trabajo (<sup>52</sup>), pone de manifiesto que el silogismo judicial utilizado para la determinación del foro competente no debe satisfacerse con el mero análisis de la

---

(<sup>51</sup>) Basados en el precedente casuístico, algunos autores han propuesto el método inductivo en la orientación de la legislación posterior. Paradigmático en los casos: Minas de Potasio de Alsacia, Amoco Cádiz y Chernobil. Crespo Hernández, Ana, *La Responsabilidad Civil derivada de la contaminación transfronteriza ante la jurisdicción estatal*, Eurolex, Madrid, 1999, pp. 41.

(<sup>52</sup>) Epígrafes 5 (1, 2 y 3) del Capítulo III, de la Segunda parte.

economía procesal internacional - como suele suceder en la práctica - sino que, por el contrario, debe hacerse cargo de los principios de protección ambiental y de la protección de la parte afectada, temas todos que inspiran la normativa internacional sobre el tema.

Estimamos necesario que se reconozca que la interpretación de las normas jurídicas sobre competencia judicial internacional supone un juicio de valor. Si las pautas seguidas por el juez no son claras, o siendo casuísticas no se acomodan a pautas inferibles con coherencia del sistema, entonces tenemos como resultado:

a) soluciones distintas a casos similares y

b) la necesidad imperiosa de poner límites a la caja de Pandora que suele abrirse con cada interpretación judicial creadora del Tribunal de Luxemburgo.

Tales son los problemas que se encuentran alrededor del escueto artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; y que son ilustrados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas (actual Tribunal de Justicia de la Unión Europea) posterior al caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* de 1976 <sup>(53)</sup>.

Por otra parte, y como lo señala el profesor ESSE, una de las principales críticas que podemos realizar consiste en evidenciar que: “*la norma no es hallada interpretativamente partiendo del principio*, (como debiera suceder en todo sistema legalista occidental), *sino que es creada mediante síntesis inductiva judicial* (lo que resulta propio de un sistema de *common law*)” <sup>(54)</sup>.

Esta cuestión viene a abrir el debate sobre el modelo de interpretación del Derecho Comunitario que debe primar en el interior del TJUE, y la opción por una fundamentación judicial en base a principios.

---

<sup>(53)</sup> STJCE C-21/76, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* .

<sup>(54)</sup> Esse, *Gundsatz und Norm*, citado por Larenz Karl, *Metodología de la Ciencia del Derecho*, Biblioteca de Ciencia Jurídica, Editorial Ariel, Primera Edición española, 1980, España, p.149.

Por todo lo anterior, consideramos relevante no abandonar el pensamiento sistemático, según veníamos señalando, aún cuando el desarrollo de esta investigación se estructure principalmente en base a un modelo de pensamiento problemático, por ser este modelo más cercano a nuestra tradición legal y judicial.

Finalmente, todo lo anterior evidenciará que la riqueza de este trabajo, radica en la búsqueda de nuevas valoraciones, a veces más allá de la norma instrumental, sintetizando principios de Derecho Internacional Privado, - como hasta ahora no ha sido realizado por la doctrina -, con miras a un moderno y funcional Derecho Ambiental Internacional.

## **V.- Marco Referencial.**

En este trabajo, cada capítulo desarrolla su propio “marco conceptual”. No obstante esto, consideramos pertinente presentar en este punto el Marco Referencial.

Nuestro marco referencial está compuesto por los conocimientos que sustentan y que justifican la investigación. Tales conocimientos están estructurados en base a dos grandes pilares.

Un *primer* pilar, es el cuadro convencional internacional vinculante en materia ambiental. Este pilar actúa como guía en la creación de futuras normas instrumentales de Derecho Internacional Privado; a su vez, posibilita la interpretación de las normas instrumentales conforme a principios de Derecho Ambiental Internacional vigentes.

Un *segundo* pilar, es el sentido universalista con el que debe interpretarse la obligación internacional, a fin de que las normas aplicables al caso concreto tengan vocación extracomunitaria (en el caso de reglamentos de la Unión Europea) y vocación receptiva en los demás países del globo.

En razón de estos pilares abordaremos a continuación dos temas esenciales, que son el trasfondo de las normas que se analizarán en el cuerpo de la investigación. Si bien hablaremos de Derecho Internacional Privado para daños ambientales, hemos

considerado pertinente comenzar refiriéndonos al Derecho Internacional Público, por las razones que se expondrán en cada acápite. Tales son:

i.- La visión privatista de la responsabilidad extracontractual por daño ambiental.

ii.- La responsabilidad internacional en el sistema europeo que funda el sistema de competencias judiciales internacionales: *approach* al Reglamento (UE) No. 1215/2012.

### **i.- De una visión publicista a una visión privatista de la responsabilidad extracontractual por daño ambiental.**

La responsabilidad internacional tiene un principio básico alrededor del cual funciona un “concepto general” <sup>(55)</sup> y que consiste en: determinar tanto las consecuencias jurídicas de un ilícito como las condiciones conforme a las cuales se generarán las sanciones del Derecho Internacional <sup>(56)</sup>. Este trabajo abordará tales condiciones desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado. En particular, se analizarán las condiciones conforme a las cuales se determina un tribunal competente para conocer de la ocurrencia de un daño civil internacional asociado a un daño ambiental <sup>(57)</sup>. En efecto, más allá de preguntarnos cuál es la función del sistema de responsabilidad civil, nos preguntamos por la función del sistema internacional de

---

<sup>(55)</sup> Carrillo Salcedo, Juan Antonio, *Curso de Derecho Internacional Público*, Ed. Tecnos, Madrid 2001, pp.179 y ss. Sorensen, Max, “Principes de Droit International Publique”, *Recueil des cours de l’Academie de Droit International*, T.III., 1960, pp. 1-251.

<sup>(56)</sup> Precisiones sobre el término genérico “daño” como condición (a veces suficiente y a veces insuficiente) para la responsabilidad internacional, pública y privada en Crawford, James, *Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional del Estado*. Introducción, textos y comentario, Cambridge University Press, Dykinson, Madrid, 2003, pp. 361 y ss.

<sup>(57)</sup> El Derecho Internacional Privado ha jugado un papel fundamental en la creación de un espacio europeo de justicia. Para profundizar ver: Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización COM (2002) 654 final, de fecha 14 de enero del 2003. Disponible en: [http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002\\_0654es01.pdf](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2002/com2002_0654es01.pdf). [Revisado el 30 de marzo del 2012].

distribución de competencias para un tipo especial de daños: daños civiles asociados a daños ambientales <sup>(58)</sup>.

No obstante esta advertencia, encontrándonos en el ámbito de los daños ambientales internacionales, consideramos necesario hacer una breve referencia a la experiencia en las jurisdicciones de Derecho Público.

La jurisdicción de Derecho Público no ha sido una vía amistosa para las víctimas de contaminación transfronteriza o transnacional <sup>(59)</sup>. En efecto, la Corte Internacional de Justicia no es una sede posible para la comparecencia de privados y las pocas causas conocidas por su Sala Ambiental demuestran que los Estados no tienen interés en solucionar sus conflictos ambientales internacionales por esta vía <sup>(60)</sup>.

Extraordinariamente, existen precedentes en contrario; pero estos precedentes guardan relación con situaciones también extraordinarias para las cuales se han constituido tribunales *ad hoc*. Así ocurrió en la Guerra de Irak de 1991, cuando la United Nation Comission Compensation (UNCC) <sup>(61)</sup>, determinó compensaciones económicas por daño ambiental en beneficio de Estados y de particulares. En este

---

<sup>(58)</sup> Aproximación a la pregunta sobre la función de la responsabilidad civil frente a los daños ambientales en: Gema Díez-Picazo Giménez, “La responsabilidad civil derivada de los daños al medio ambiente”, en *La Ley*, número 4125, Madrid, 1996, pp. 1-4.

<sup>(59)</sup> Ver diferencia entre daño ambiental transfronterizo y daño ambiental transnacional en: Ballarino, Tito, “Questions de droit international privé et dommages catastrophiques”, *Recueil des Cours*, Vol. 220, T.I, 1990, p. 309.

<sup>(60)</sup> Observaciones en este sentido contemporánea al tiempo de instalarse The Special Environmental Chamber in the ICJ en: Fitzmaurice, Malgosia, “Environmental Protection and the International Court of Justice”, en *Fifty Years of International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Eds. Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, 1996, pp.296 y ss. En el mismo sentido: Fitzmaurice-Lachs, Malgosia, “The contribution of environmental law to the development of modern international law”, en *Theory of international law at the threshold of the 27<sup>th</sup> century: essays in honour of Krzysztof Skubiszewski*, Kluwer Law International, The Hague, Boston, Mass., 1996, p. 909-925. Más recientemente: Fitzmaurice-Lachs, Malgosia, *Contemporary Issues in International Environmental Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009. Viñuales, Jorge E., “The contribution of International Court of Justice to the Development of International Environmental Law: a contemporary assessment”, *Fordham International Law Journal*, N° 32, Fordham University School of Law, 2008, pp.232 y ss.

<sup>(61)</sup> United Nation Comission Compensation (UNCC). Constituida por Resolución N° 687 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

caso, las compensaciones fueron determinadas siguiendo un procedimiento que fue definido por la misma Comisión UNCC como *sui generis*. Por tanto, en este tipo de casos no podemos esperar que exista continuidad de procedimientos, ni podemos extrapolar los criterios que en su momento se adoptaron por parte de la UNCC.

Otro precedente en el Derecho Internacional Público, está representado por el caso *Trail Smelter* <sup>(62)</sup>. En este asunto hablamos de un tribunal arbitral internacional, en el cual el laudo arbitral invocó “principios del Derecho internacional”. En el caso *Trail Smelter* se acompañó evidencia convincente para establecer un “principio de Derecho Internacional” que opere como fuente de Derecho Internacional, en virtud del cual, ningún Estado tiene el derecho de causar injurias o daños en el territorio de otro Estado o en las propiedades de las personas que habitan en otro Estado. Aunque en el caso *Trail Smelter* el laudo se pronunció sobre la responsabilidad del Estado, resaltamos la importancia del razonamiento fundado en principios de responsabilidad internacional. Otro hecho interesante en el asunto *Trail Smelter* guarda relación con el hecho de que los principios que fueron abordados en la sentencia, fueron desarrollados con posterioridad por el artículo 21° de la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano <sup>(63)</sup>, el que señala:

**Principio 21°:**

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

La Conferencia mencionada estableció el “Principio de Soberanía sobre los Recursos Naturales y la Responsabilidad de no causar daño al medio ambiente en otros Estados o en zonas fuera de la jurisdicción nacional”. Los defensores de la aproximación del Derecho Público a los problemas de contaminación internacional

---

<sup>(62)</sup> Sentencia 11 de marzo de 1941, USA/Canadá, *Trail Smelter Arbitration*, R.S.A, Vol III, p. 1965.

<sup>(63)</sup> Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reunida en Estocolmo en junio de 1972 (Declaración de Estocolmo de 1972).

pueden sostener, con todo acierto, que una política de acuerdos entre los Estados es capaz de lograr los más importantes avances sobre la materia.

Sin embargo, y más allá de los grandes avances que pueden producirse desde la dinámica del Derecho Internacional Público, existen algunas críticas. Las principales críticas se asocian a las pocas oportunidades que se ofrece en la jurisdicción de Derecho Público para hacerse cargo de una materia tan técnica y en permanente evolución, como ocurre con los daños ambientales. En efecto, los daños ambientales no admiten la lógica tradicional de la responsabilidad internacional basada en *fait accompli* o hechos consumados <sup>(64)</sup>. Por el contrario, la responsabilidad internacional que se promueve para asuntos de daños ambientales es esencialmente preventiva.

Todo lo anterior obliga a reconsiderar como la jurisdicción de Derecho Privado otorga el marco normativo más completo para la solución de conflictos ambientales internacionales <sup>(65)</sup>. Además, no podemos perder de vista que son las actuaciones de los privados las que - en razón de un interés particular - terminan impactando en un bien público y colectivo como es el medio ambiente.

---

<sup>(64)</sup> Frente a los *fait accompli*, tanto la compensación integral como la determinación de indemnizaciones, han sido abordados por la doctrina y por las ONG ambientalistas principalmente para casos más graves relacionados con contaminación por derrame de hidrocarburos. Tal es el caso de del *Prestige* abordado desde una perspectiva iuspublicista y iusprivatista. Ver García Rubio, María Paz, “Los daños causados por el *Prestige*. Un largo y tortuoso camino en el logro de su reparación”, en *Derecho de Daños. Práctica*, No 24, Madrid, 2005, pp. 5-27. José Juste Ruiz, José, “El accidente del *Prestige* y el derecho internacional: de la prevención fallida a la reparación insuficiente”, *Revista española de derecho Internacional*, número LV-1, 2003, pp. 15-42. Sobrino Heredia, José Manuel, “Una Aproximación desde el Derecho Comunitario a la catástrofe del *Prestige*”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, número 8, 2004, pp. 853-874. Disponible en: <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2337/1/AD-8-47.pdf> [revisado 23 de julio del 2012]. Urbina, Julio Jorge, Lirola Delgado, Isabel, Pueyo Losa Jorge Antonio, “En torno a la revisión del régimen jurídico internacional de seguridad marítima y protección del medio marino a la luz del accidente del *Prestige*”, *Revista española de Derecho Internacional*, Vol. 55, número 1, 2003, pp. 43-78.

<sup>(65)</sup> Ianni, Ronald W., “International and Private Actions in Transboundary Pollution”, *Canadian Yearbook of International Law*, 1973, p. 269. Palao Moreno, Guillermo, *La Responsabilidad Civil por daños al Medio Ambiente*, Monografía Universitat de València, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 24-28. Martín Mateo, Ramón, *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. I., Trivium, Madrid, 1991, p. 95. Morales y Sancho, *Manual Práctico de Responsabilidad Civil*, Granada, Comares, 1995, p.649.



Por otra parte, detractores de la corriente privatista sostienen que la jurisdicción privada también actúa *a posteriori* de la ocurrencia del daño. Asimismo, se podría argumentar en contra de la jurisdicción privada el hecho de que las acciones civiles ponen primacía en los intereses privados de orden patrimonial por sobre los intereses públicos colectivos. Finalmente podría decirse que el sistema privado busca compensaciones patrimoniales que pueden no guardar necesariamente relación con las medidas de reparación y/o mitigación ambientales.

Sin desconocer los pro y los contra de la vía privada, consideramos que la jurisdicción de Derecho Privado tiene ventajas innegables. Tales ventajas concluyen en una solución al conflicto desde una perspectiva apolítica. Jurídicamente la jurisdicción de Derecho Privado tiene un amplio respaldo en el desarrollo legal, dogmático y jurisprudencial que ha experimentado la teoría de la responsabilidad civil extracontractual <sup>(66)</sup>.

En efecto, después del Coloquio de Osnabrück <sup>(67)</sup>, el Bureau Permanent de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado decidió incorporar (y aún mantiene con prioridad) en la agenda de la Conferencia <sup>(68)</sup> el trabajo para una futura Convención sobre conflictos de jurisdicción, Derecho aplicable y cooperación judicial y administrativa internacional con respecto a la responsabilidad por daño ambiental <sup>(69)</sup>. La Conferencia ha considerado que las materias del futuro convenio, sólo deberían circunscribirse a la ley aplicable dejando de lado el Derecho Procesal Civil Internacional. Se ha considerado también que el Derecho Procesal Ambiental

---

<sup>(66)</sup> Kiss, Alexandre y Shelton, Dinah, *International Environmental Law*, New York, Transnational Publishers y Graham & Trotman, 1991, p. 363.

<sup>(67)</sup> Coloquio “Hacia una Convención de Derecho Internacional privado sobre daños al medio ambiente”, dio como resultado los “Diez puntos de Osnabrück”, organizado por la Universidad de Osnabrück y la Conferencia de La Haya, abril de 1994.

<sup>(68)</sup> Conference on Private International Law, The World Organisation for Cross-border Cooperation in Civil and Commercial Matters, *Annual Report 2008*, La Haya, p. 31.

<sup>(69)</sup> Siqueiros, José Luis, “La Ley aplicable y Jurisdicción Competente en casos de responsabilidad civil por contaminación transfronteriza”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. II, 2002, pp. 188-189. Vinaixa Miquel, Mónica, *La Responsabilidad Civil por Contaminación Transfronteriza Derivada de Residuos*, Universidad de Santiago de Compostela, 2006, p.135.

Internacional debiera ser objeto de un acuerdo especial. De aquí que, resulta inestimable el rol de estudios sobre jurisdicción internacional en materia ambiental.

Finalmente sobre este punto, no debemos olvidar que la perspectiva *conflictualista* con la que se asocia tradicionalmente al Derecho Internacional Privado -y a la que usualmente suele reducirse- se ha ido enriqueciendo con normas materiales que han regulado progresivamente el tráfico de bienes, servicios y capitales en conformidad con el “fenómeno social” <sup>(70)</sup>. Por esta razón, existiendo un marco jurídico de Derecho interno al que se asocia un desarrollo progresivo de normas de Derecho Internacional Privado, unos y otros cada vez más imbuidos en los principios internacionales de protección ambiental, hacen que resulte necesario reconocer y potenciar la importancia de la jurisdicción privada.

Con este fin, estimamos imperativo que se devuelva a las partes el poder de autocomposición del conflicto por la vía de un proceso dispositivo <sup>(71)</sup> en materia ambiental, especialmente cuando los intereses que se conocen en juicio son intereses privados. El Estado, por su parte, perseguirá la recomposición del ecosistema que haya sido o no haya sido asociado a un interés particular, en la medida que persiga un fin público. El Estado, tendrá sus propias vías de persecución de la responsabilidad ambiental, que no deben constituir *per se* las únicas vías ni deben entrar en colisión con la vía privada. En efecto, la protección del medio ambiente no corresponde exclusivamente a los organismos públicos, ni se satisface con las vías administrativas o políticas.

---

<sup>(70)</sup> Sobre el fenómeno social en el Derecho internacional privado, ver: Carrillo Salcedo, Juan Antonio, *Derecho Internacional Privado*, 3ed., Tecnos, Madrid, 1983, p.113. Pecourt García, Enrique, Programa de Derecho internacional privado, Valencia, 1979. Fernández Rozas, José Carlos, “Sobre el Contenido del Derecho Internacional”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 38, 1986, pp. 69-108.

<sup>(71)</sup> Amores Conradi, Miguel Ángel, “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: artículo 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol XLI, N° 1, 1989, pp.117 y ss.

En suma, si debiera existir una limitación al principio dispositivo en el proceso civil, tal limitación debiera ser el más alto estándar de protección ambiental, en razón de las normas de orden público que pudieran rodear al conflicto.

Por otro lado, y sin perjuicio de las importantes diferencias que existen en materia de responsabilidad internacional cuando el sujeto internacional del que hablamos cambia de un Estado a un privado; entonces tenemos que, tanto en el Derecho Internacional Público como en el Derecho Internacional Privado pervive un sustrato común: la relevancia del ilícito como fundamento del juicio de responsabilidad internacional. En efecto, por una parte tenemos que la teoría clásica de la responsabilidad internacional de los Estados se refiere a la “violación de una obligación internacional” ocasionada por la acción de un Estado (ilícito de responsabilidad en el Derecho público) <sup>(72)</sup>; por su parte, en la teoría de la responsabilidad civil internacional extracontractual también nos encontramos con un “delito o cuasidelito internacional” (ilícito de Derecho Privado) <sup>(73)</sup>.

Más allá de la existencia de una figura común asociada a un reproche jurídico (“el ilícito”), las diferencias hacen que nos inclinemos hacia la judicatura de Derecho Internacional Privado por dos grandes características del sistema privado internacional: *primero*, el marco convencional internacional vinculante y *segundo*, el sentido de obligación internacional. Como anticipamos en el epígrafe de este apartado, ambos temas constituyen el marco referencial de este trabajo.

*Primero*, en ambas clases de responsabilidades existe un régimen convencional internacional previo, pero tales regímenes tienen objetivos muy distintos. Por una parte, la responsabilidad de los Estados en el régimen convencional

---

<sup>(72)</sup> Sobre concepto de obligación internacional, en casos de responsabilidad ambiental, ver los casos: a) *Factory at Chorzów*, Jurisdiction, 1927, Permanent Court of International Justice, Series A, N° 9, p. 21 y N° 17, p. 29; b) *Rainbow Warrior* (New Zealand vs. France), U.N.R.I.A.A., vol. XX, 1990, p. 251 y ss. El primero conocido por la Corte Internacional de Justicia y el segundo por un tribunal arbitral internacional.

<sup>(73)</sup> Ver Reglamento 44/2001 Bruselas I, artículo 5 número 3 y Reglamento 864/2007 Roma II, artículo 7.

internacional de Derecho público, tiene por objeto establecer claramente y con prioridad la existencia de una “obligación internacional” que vincule al Estado, respecto de otro u otros Estados. En el contexto privado, en cambio, el régimen convencional extracontractual no establece obligaciones (las que serán analizadas para cada caso en concreto por el juez competente) sino que busca prioritariamente armonizar la distribución de competencias judiciales y legales que recaen sobre un hecho cierto: el hecho dañoso <sup>(74)</sup>.

Esta diferencia adquiere algunos matices, porque la responsabilidad internacional privada tiene como eje fundamental la función jurisdiccional de los jueces nacionales cuya labor está determinada por las obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Esto refleja claramente la importancia de lograr acuerdos armonizadores de competencias judiciales entre los Estados con el objeto de establecer un sistema de distribución de competencias justo y eficiente.

En nuestro caso, la principal influencia del Derecho Internacional Público Ambiental en el proceso privado consiste en otorgar criterios de interpretación, tanto para las normas de fondo como para las normas procesales aplicables. Por tanto, la principal utilidad de los principios ambientales internacionales radica en la aportación de una dinámica evolutiva en la tutela del medio ambiente que alcance incluso a las normas procesales internacionales.

*Segundo*, en lo relativo al concepto de obligación internacional, encontramos que en el Derecho Público no existe responsabilidad internacional sin una obligación expresa y vinculante para las partes. En el área privada, en cambio, puede existir responsabilidad civil internacional sin una obligación expresa y consensuada entre las partes porque entra en juego el concepto de “obligación extracontractual internacional” <sup>(75)</sup>. En efecto, en la responsabilidad extracontractual internacional nos

---

<sup>(74)</sup> Aportaciones a esta noción y al concepto de daño en Reuter, Paul, *Droit International Publique*, Presses Universitaires de France, París, 1963, p. 134.

<sup>(75)</sup> Desarrollaremos esta idea en el epígrafe 1 del Capítulo III, de la primera parte.

encontramos con un “deber tácito de no causar daños”. La infracción a este deber será determinada por el juez competente <sup>(76)</sup>.

Por otra parte, atendida la heterogeneidad de conceptos sobre obligación extracontractual que existen en los ordenamientos jurídicos internos, el desarrollo autónomo por la vía jurisprudencial evidencia la idea de un concepto remanente respecto de la categoría de obligación contractual <sup>(77)</sup>.

Volveremos sobre este punto, al analizar el sentido y alcance de lo que entendemos por materia delictual y por materia cuasidelictual <sup>(78)</sup>.

## **ii.- De la visión iusprivatista de la responsabilidad internacional a un sistema europeo de competencia judicial internacional: el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012.**

La falta de una definición consensuada y vinculante entre los Estados sobre el concepto y contenido de obligación civil extracontractual internacional no debe ser considerada como una crítica sustantiva al sistema de Derecho Internacional Privado. En efecto, la determinación del tribunal competente se realizará igualmente en ausencia de un concepto de obligación extracontractual internacional, porque de todos los elementos de la relación extracontractual, uno de ellos es el definidor: el daño. Por esta razón el objetivo principal de este estudio consiste en desarrollar criterios para determinar los vínculos de conexión entre daños civiles y tribunal competente.

---

<sup>(76)</sup> Confr. Con el Considerando 11º del Reglamento (CE) 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), en armonía con el Reglamento (CE) 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) señala que obligación extracontractual es un concepto autónomo. Definición de obligación extracontractual o delito civil sin efectos jurídicos en: Comisión Europea, Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil, Glosario, disponible en: [http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary\\_es.htm#ObligNonContr](http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_es.htm#ObligNonContr) visitado 19 de abril de 2010.

<sup>(77)</sup> Ver STJCE, C-189/87, asunto *Athanasios Kalfelis c. Banque Schröder, Münchemeyer, Hengst y Cía. y otros*, 1988. Parte dispositiva.

<sup>(78)</sup> Ver epígrafe 3 del Capítulo III de la primera parte.

Así, a lo largo de este trabajo abordaremos el sistema de distribución de competencias judiciales vigente en la Unión Europea, esto es, el sistema establecido en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil para los casos de daños civiles internacionales o transnacionales asociados a un daño ambiental <sup>(79)</sup>.

Este Reglamento heredero y sucesor del Reglamento 44/2001 Bruselas I, es el objeto principal de nuestro estudio.

Algunas palabras sobre el Convenio de Bruselas de 1968 ilustran el contexto que inspira la creación comunitaria de normas de competencia judicial internacional.

El Convenio de Bruselas de 1968 nació y evolucionó en un contexto europeo caracterizado por el aumento en la circulación de bienes, inversiones, personas y capitales entre los Estados. El proceso de integración europea necesitaba cumplir sus objetivos mediante la agilización de muchas áreas, entre ellas -y como fundamental- el reconocimiento de sentencias judiciales extranjeras y la simplificación de las formalidades jurídicas.

Con anterioridad al Convenio de Bruselas, tanto el reconocimiento como la declaración de ejecutividad de las resoluciones judiciales y de los laudos arbitrales debían someterse a la celebración y conclusión de convenios internacionales

---

<sup>(79)</sup> El Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 es heredero del Reglamento 44/2001 del 22 de diciembre del 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I) y los demás cuerpos normativos relacionados, herederos y sucesores del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Asimismo, Estados parte del Convenio de Lugano del 16 de septiembre de 1988, celebrado entre Estados miembros y Estados de la Asociación europea de libre comercio (AELC) relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Asimismo Dinamarca, en virtud del Acuerdo CE/Dinamarca sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil del 23 de marzo de 2006. El Convenio de Lugano de 1988 también tuvo influencia en la elaboración de otras iniciativas, tales como: el Libro Verde sobre reparación del daño ecológico de 1988 y el Libro Blanco sobre responsabilidad civil ambiental, COM (2000) 66 final, Bruselas, 9 de febrero de 2000.

bilaterales o multilaterales entre los Estados miembros <sup>(80)</sup>. Con el Tratado de la Comunidad Europea de 7 de febrero de 1992 se introdujo la cooperación en los ámbitos de justicia y asuntos de interior <sup>(81)</sup>. Es así como nació una regulación específica en el Título VI artículo K, sobre cooperación en materia civil, la que posteriormente fue recogida por el artículo K.1 número 6.

Sin embargo, sería el Tratado de Ámsterdam del 2 de octubre de 1997, en el que mediante el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (en el Título IV sobre Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas) se daría el impulso definitivo a la cooperación judicial en materia civil <sup>(82)</sup>.

En efecto, la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia junto con el establecimiento de instrumentos legislativos para la consecución de la cooperación

---

<sup>(80)</sup> En razón de ello, el Artículo 293 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (anterior 220), señalaba. “*Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales:*

—*la protección de las personas, así como el disfrute y la tutela de los derechos, en las condiciones reconocidas por cada Estado a sus propios nacionales;*

—*la supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad;*

—*el reconocimiento recíproco de las sociedades definidas en el párrafo segundo del artículo 48, el mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de traslado de su sede de un país a otro, y la posibilidad de fusión de sociedades sujetas a legislaciones nacionales diferentes;*

—*la simplificación de las formalidades a que están sometidos el reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judiciales y de los laudos arbitrales.*

<sup>(81)</sup> Ver artículo B, apartado 4º del Tratado de la Comunidad Europea de 7 de febrero de 1992.

<sup>(82)</sup> Ver Artículo 65 del Tratado Constitutivo de la Comunidad europea: “*Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 y en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior, incluirán:*

*a) mejorar y simplificar:*

—*el sistema de notificación o traslado transfronterizo de documentos judiciales y extrajudiciales;*

—*la cooperación en la obtención de pruebas;*

—*el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, incluidos los extrajudiciales;*

*b) fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre conflictos de leyes y de jurisdicción;*

*c) eliminar obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles fomentando, si fuera necesario, la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.”*

judicial civil permitió que el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales pasaran de estar regulados mediante acuerdos entre Estados miembros a convertirse en un objetivo y en una competencia de la Unión Europea. De esta forma, el Tribunal de Luxemburgo adquirió un rol fundamental en la interpretación del Derecho Comunitario, viéndose en el deber de fundar sus resoluciones en base a los principios generales que rigen el sistema de la cooperación judicial.

Por estas razones, el Reglamento (UE) No. 1215/2012 no puede interpretarse como una norma comunitaria aislada, sino por el contrario, debe hacerse cargo de la unidad y de la coherencia del sistema comunitario.

Por su parte, en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 encontramos una noción de “daño” que se ha instrumentalizado hasta alcanzar tal grado de categorización que supera con creces la noción de daño civil, propia de la dogmática tradicional de la Teoría de la Responsabilidad. Así, hemos pasado de la noción de “daño” a la noción de “hecho dañoso” (al que se refiere expresamente el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012).

El “hecho dañoso” es concepto autónomo muy útil para efectos de determinar la competencia judicial civil internacional. En efecto, el hecho dañoso comprende tanto el lugar donde se origina el daño (lugar del hecho causal) como también el lugar donde produce sus consecuencias lesivas (lugar del daño propiamente tal). Como veremos más adelante, la evolución del concepto “hecho dañoso” dará lugar al nacimiento de la denominada “Regla de ubicuidad del hecho dañoso”, la que planteará serias dudas sobre la extensión de los daños por los cuales un tribunal es competente <sup>(83)</sup>.

Por todas estas razones la lógica del sistema de atribución de competencias judiciales internacionales, propia del Derecho Internacional Privado y aplicable a los delitos y cuasidelitos civiles, en un contexto de integración judicial como ocurre en le

---

<sup>(83)</sup> Desarrollo en todo el epígrafe 5 del Capítulo III, de la Segunda Parte.



caso europeo, constituye un gran aporte, por parte de la dogmática y legislación europea, a la creación y evolución jurídica del daño extracontractual internacional. En efecto, priorizándose la noción de hecho dañoso por sobre la noción de ilícito, encontramos que el Derecho Internacional Privado europeo ha logrado hacerse cargo del problema en forma más eficiente, porque aborda el tema desde la perspectiva de sus efectos más que desde la perspectiva del juicio de reproche que pueda merecer una acción imputable.

Finalmente, en materia de protección ambiental, es innegable que la opción europea resulta ser idónea a los fines de protección ambiental; porque la reparación, recuperación e indemnización se desarrollan mejor en el Derecho Privado. En efecto, incluso en el Derecho Público Internacional, hemos podido encontrar algunas voces que hablan de la “responsabilidad internacional objetiva”, para todos aquellos casos en los cuales no existe infracción de una norma internacional, sino simplemente la verificación de un daño imputable <sup>(84)</sup>.

De esta forma, aún en el contexto del Derecho Público Internacional nos encontramos con reconocimientos, tímidos pero concretos, de la existencia de responsabilidades que se califican por el resultado más que por el reproche a los comitentes o a la ilicitud de los hechos.

Por su parte, el Derecho Internacional Público, evidencia un retroceso en el proceso de “objetivación de la responsabilidad internacional”, estado que se viene arrastrando desde 1963. Recordemos que en esa fecha, la Comisión de Derecho Internacional (CDI), propuso – pragmáticamente - basar el juicio de responsabilidad internacional de los Estados en la “ilicitud de un hecho y en la imputabilidad a un sujeto determinado”.

Esta opción significó que, con el tiempo, fueran desapareciendo del marco fundamental de la Teoría de la Responsabilidad Internacional algunos propuestos del

---

<sup>(84)</sup> Dupuy, Pierre Marie, *La responsabilité internationale des Etats pour les dommages d'origine technologique et industrielle*, Pedone, París, 1976, pp.224-225.

futuro Proyecto de Responsabilidad Internacional de los Estados <sup>(85)</sup>. En efecto, es así como en la responsabilidad internacional de Derecho Público fueron desapareciendo dos de los pilares básicos del enfoque tradicional extracontractual de la responsabilidad: el *daño* y la *relación de causalidad*.

Por esta razón, consideramos que es en el ámbito del Derecho Internacional Privado europeo, donde podemos abordar los temas de responsabilidad, daño y causalidad con mayor desarrollo, suficiencia y profundidad.

De esta forma, el fenómeno del daño civil transfronterizo y del daño civil transnacional, cuando ambos están asociados a daños ambientales, tendrán mayor alcance dependiendo de la eficacia y de la capacidad evolutiva que se reconozca al sistema de responsabilidad ambiental europeo y al alcance que se reconozca a las normas instrumentales a nivel nacional y a nivel comunitario. Una de dichas instrumentalizaciones guarda relación con las normas sobre competencia judicial internacional <sup>(86)</sup>.

## **VI.- Marco Teórico.**

El principio de responsabilidad patrimonial (*alterum non laedere*) está subyacente en las obligaciones extracontractuales y dista en su naturaleza del principio de responsabilidad que funda las obligaciones contractuales. Tales diferencias también se trasladan a los vínculos de conexión que existen entre los hechos y el foro llamado a conocer de ellos.

En efecto, los fines y principios de la responsabilidad extracontractual operan como directrices interpretativas de las normas instrumentales y son utilizados con esa

---

<sup>(85)</sup> *Drnas de Clément, Zlata*, “Responsabilidad Internacional de los estados por violaciones a normas imperativas de Derecho Internacional General”, en Llanos Mansilla, H. y Picánd Albónico, Eduardo (coordinadores académicos) *Libro Homenaje al Profesor Santiago Benadava*, Ed. Librotecnia, Santiago de Chile, 2008. [Disponible en: <http://cl.vlex.com/vid/libro-homenaje-profesor-santiago-benadava-51184938> . Revisado 17 de enero del 2012]

<sup>(86)</sup> El tema será desarrollado en el epígrafe 5 del Capítulo III, de la Segunda parte, sobre imputación normativa en la determinación de la extensión de la competencia judicial civil internacional.

vocación en la síntesis de la dialéctica judicial. Por tanto, preguntarse sobre los fines de justicia perseguidos por el legislador comunitario, su correspondencia con los ordenamientos internos y las relaciones con otros Estados constituyen preguntas para una aproximación deontológica a los vínculos de conexión. Sin duda, esta aproximación excede con creces el presente trabajo. Sin embargo, como intérpretes no podemos desentendernos del criterio que se encuentra detrás de los vínculos de conexión para las obligaciones extracontractuales.

En efecto, si analizamos comparativamente el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil y el Reglamento 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), veremos cómo este último ha interpretado la opción del Tratado Constitutivo de la Unión Europea <sup>(87)</sup>, en relación con los principios ambientales señalando en su considerando 25:

*“25.-En cuanto a los daños medioambientales, el artículo 174 del Tratado, que contempla un elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga, justifica plenamente el recurso al principio de favorecer a la víctima. La cuestión de cuándo la persona que reclama el resarcimiento de los daños podrá elegir el Derecho aplicable debe determinarse de conformidad con la legislación del Estado miembro en que se somete el asunto al órgano jurisdiccional.”*

De esta forma, los principios ambientales de: a) cautela y acción preventiva, b) corrección en la fuente misma y c) quien contamina paga <sup>(88)</sup> justifican el recurso a un principio favorecedor de la víctima de daño ambiental.

---

<sup>(87)</sup> Ver artículo 191 del Tratado constitutivo de la Unión Europea, correspondiente al artículo 174 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

<sup>(88)</sup> Reglamento 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II), considerando 25: *“En cuanto a los daños medioambientales, el artículo 174 del Tratado, que contempla un elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga, justifica plenamente el recurso al principio de favorecer a la víctima. La cuestión de cuándo la persona que reclama el resarcimiento de los daños podrá elegir el Derecho aplicable debe*

¿Podemos concluir el mismo principio favorecedor desde la perspectiva del Reglamento (UE) No. 1215/2012? En otras palabras, los vínculos de conexión ¿deberán atender prioritariamente a los intereses de la víctima de daño ambiental?

Sin duda, resulta difícil extraer un principio interpretativo de la escueta lectura del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Por su parte, los cánones hermenéuticos, propios del Derecho Comunitario, nos hablan más de uniformidad y de la *ratio* del Reglamento en relación con la función de la norma, que de los fundamentos axiológicos y deontológicos que el juez debe tener en consideración al momento de valorar los vínculos de conexión.

En la responsabilidad extracontractual, la noción aristotélica de justicia correctiva establece la relación entre el autor del daño y la víctima como esencial para determinar el juicio de reproche que corresponda al primero. Sin embargo, el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, omite una alusión a la “relación extracontractual” y al correspondiente juicio de reproche, para posicionar su interés en el “lugar” donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. En efecto, los fueros de competencia establecen criterios para fijar los foros competentes. Sin desconocer este hecho, conviene plantearse si acaso un fuero de competencia judicial basado en el hecho dañoso es incompatible con el reconocimiento de la posición más débil que enfrenta la víctima del daño. Creemos que no, y que por tanto, es necesario reevaluar el fuero de competencia “lugar del hecho dañoso” para las víctimas civiles de daño ambiental.

En este sentido, estimamos necesario que los criterios interpretativos del Reglamento (UE) No. 1215/2012, se basen en un interés de justicia que se asocie más al hecho dañoso que a otros elementos de la responsabilidad extracontractual. Asimismo, otros criterios para la elección del vínculo tales como: criterios de economía procesal, uniformidad en la aplicación del derecho comunitario, imputación

---

*determinarse de conformidad con la legislación del Estado miembro en que se somete el asunto al órgano jurisdiccional.”*

de los riesgos o los criterios para la apertura de un foro de necesidad deberían estar al servicio del foro lugar del hecho dañoso.

Por otra parte, el problema sobre la existencia de un principio interpretativo a favor de la víctima de daño ambiental es un problema de calificación y la vez es un problema de valoración. Es un problema de *calificación*, porque obliga a determinar si los hechos justiciables forman parte de la materia delictual o cuasidelictual a la que se refiere el Reglamento (UE) No. 1215/2012. Sin embargo, una vez que hemos entrado en el ámbito de este Reglamento también debe calificarse si la víctima de daño ambiental es capaz de inspirar un beneficio a su favor. Por otro lado, la existencia de un principio interpretativo a favor de la víctima del daño también es un problema de *valoración*, porque supone haber superado en una instancia anterior el problema de la calificación de los vínculos, para después ponderar cuál de los intereses en juego es el más importante. Esto es, optar definitivamente en favor de una de las partes.

Por esta razón, en el Derecho Internacional Privado, encontramos que la ponderación de los intereses de las partes genera una necesidad argumentativa sobre los fines previstos por el legislador (nacional y comunitario) cuya decisión tiene incidencia directa en los foros especiales de competencia. Tales fines, están íntimamente relacionados con los fines que persigue la responsabilidad extracontractual.

La falta de un régimen de responsabilidad uniforme a nivel de las legislaciones internas de todos los países obliga a sopesar los bienes jurídicos relevantes que se encuentran en juego. En el Reglamento (UE) No. 1215/2012 la labor ha sido entregada a la jurisprudencia en defecto de regulación sobre la materia. Cosa similar ocurre con los otros conceptos del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en los cuales el carácter autónomo de los mismos - según declara el TJUE- se enfrenta con la necesidad fáctica de fortalecer (más que conducir) la práctica reflexiva sobre los fines y valores que orientan el derecho de la responsabilidad extracontractual en la Unión Europea.

Un ejemplo de esta necesidad interpretativa, se encuentra en materia de daños medioambientales. El artículo 191º (antiguo 174º del TCE) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, numeral 2º <sup>(89)</sup>, señala:

*“2. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente tendrá como objetivo alcanzar un nivel de protección elevado, teniendo presente la diversidad de situaciones existentes en las distintas regiones de la Unión. Se basará en los principios de cautela y de acción preventiva, en el principio de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, y en el principio de quien contamina paga. En este contexto, las medidas de armonización necesarias para responder a exigencias de la protección del medio ambiente incluirán, en los casos apropiados, una cláusula de salvaguardia que autorice a los Estados miembros a adoptar, por motivos medioambientales no económicos, medidas provisionales sometidas a un procedimiento de control de la Unión.”*

Por tanto, el Tratado de Funcionamiento de la UE, como el anterior Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, expresaron su adhesión a los principios ambientales de: a) cautela y acción preventiva, b) de corrección en la fuente, y c) principio quien contamina paga.

Esta directriz interpretativa, ha sido recogida e instrumentalizada por el Reglamento 864/2007 Roma II <sup>(90)</sup> según lo venimos anticipando. Sin embargo, en el caso del Reglamento (UE) No. 1215/2012, el fin último que se desprende de sus considerandos consiste en asegurar la libre circulación de las resoluciones judiciales. En efecto, en los considerandos 6º y 27º se lee:

*“Considerando 6º.- Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las normas relativas a la competencia judicial y al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones judiciales se establezcan en un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable”.*

---

<sup>(89)</sup> El numeral 1 del artículo 191 del Tratado de funcionamiento de la UE anticipa los principios que inspiran la estrategia comunitaria de protección ambiental, señalando los objetivos de la política ambiental, señalando: “1. La política de la Unión en el ámbito del medio ambiente contribuirá a alcanzar los siguientes objetivos: i) la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente, ii) la protección de la salud de las personas, iii) la utilización prudente y racional de los recursos naturales, y iv) el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente. y en particular a luchar contra el cambio climático.”

<sup>(90)</sup> Reglamento Roma II, considerando 25).

*“Considerando 27º.- A efectos de la libre circulación de las resoluciones judiciales, una resolución dictada en un Estado miembro debe reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro incluso si se ha dictado contra una persona no domiciliada en un Estado miembro.”*

De todo lo anterior resulta que los conceptos autónomos no definidos en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 siempre constituirán un problema. Por tal razón, y para una conveniente y armónica aplicación de criterios entre los cuerpos normativos que se refieren al tribunal competente y a la legislación aplicable es necesario incorporar en la interpretación del foro competente a los fines de justicia ambiental perseguidos por la política comunitaria. Tales fines de justicia ambiental deben interpretarse armónicamente con los fines de seguridad jurídica y de previsibilidad del sistema de distribución de competencia. A estos dos últimos fines nos referiremos a continuación en un acápite especial.

**i.- Del problema de las interpretaciones restrictivas en materia ambiental: la seguridad jurídica y la previsibilidad del sistema.**

Cuando hablamos de seguridad jurídica en las reglas de atribución de competencia, nos estamos preguntando por las mejores condiciones que garantizan mediana “previsibilidad” en la determinación del tribunal competente <sup>(91)</sup>. Todo lo cual, incide directamente en la interpretación de los vínculos de conexión, los cuales deberán su sentido y alcance a la interpretación más o menos uniforme del Derecho Internacional Privado y en especial a la interpretación de las normas de distribución de competencia judicial <sup>(92)</sup>.

Si la uniformidad ha sido alcanzada con éxito sólo en el Derecho interno, esto se debe gracias a la presencia de un tribunal superior jerárquico encargado de

---

<sup>(91)</sup> De Miguel Asensio, Pedro Alberto, “Pluralidad de Jurisdicciones y Unificación de las Reglas de Competencia: una visión trasatlántica”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LVIII, 2006, pp. 37-60.

<sup>(92)</sup> Crítica a la poca precisión de las normas sobre competencia judicial internacional en el Tratado de Ámsterdam y exposición de limitaciones a las normas de Derecho Internacional Privado como instrumento de integración en: De Miguel Asensio, Pedro Alberto, “La evolución del Derecho internacional privado comunitario en el Tratado de Ámsterdam”, *Revista española de Derecho Internacional*, Vol. L, número 1, 1998, pp. 373-376.

uniformar el sentido de la ley. En el ámbito internacional, en cambio, debemos seguir un derrotero distinto. En efecto, en un sistema integrado, como el europeo, tal función no sólo es desarrollada por el TJUE sino que también es desarrollada por la evolución a un régimen competencial altamente especializado <sup>(93)</sup>.

Sin perjuicio de lo anterior, en las relaciones con terceros países extracomunitarios, el carácter universal que se atribuye a los acuerdos de distribución de competencia juega un rol fundamental <sup>(94)</sup>. En subsidio de todo lo anterior, un alto grado de uniformidad también puede alcanzarse por la vía de los principios que sientan los criterios de buen funcionamiento en el sistema internacional de distribución de competencias en materia de responsabilidad civil extracontractual. Precisamente en este estudio llamamos a mantener identificados tales principios e informar su sentido y alcance, conforme rezan los principios de responsabilidad extracontractual y conforme ordena la tutela judicial efectiva del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

En efecto, una de las características más loadas del sistema europeo de distribución de competencias - en comparación con el sistema estadounidense - radica precisamente en la estabilidad y en la seguridad jurídica del sistema, por estar basado en la previsibilidad normativa y en la interpretación uniforme del TJUE. Sin embargo no por gozar de estas características puede caerse en el error de obviar los beneficios de sistemas flexibles de distribución de competencias como el norteamericano. En efecto, desechar *a priori* sistemas de distribución de competencias flexibles hace que el sistema europeo se arriesgue a ser reaccionario a las innovaciones del Derecho, satisfaciéndose

---

<sup>(93)</sup> Hatzimijail, N. y Nuyts, A., “Judicial cooperation between the United States and Europe in Civil and Commercial matters: an overview of issues”, Nuyts, A. y Watté, N., (Eds.) *International Civil Litigation in Europe with third States*, Bruselas, 2005, p. 5. De Miguel Asensio, Pedro Alberto, “Pluralidad de Jurisdicciones y Unificación de las Reglas de Competencia: una visión trasatlántica”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LVIII, 2006, pp. 49.

<sup>(94)</sup> Sobre la extraterritorialidad del Derecho de la Competencia y Teoría de los efectos en terceros mercados no comunitarios en: Otero García-Castrillón, Carmen, “El alcance extraterritorial del derecho de la competencia y su utilización como medida comercial”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, Marzo-Abril, número 212, 2001, pp. 34-56.



en la eficacia de la justicia del caso *in concreto*. Para tales riesgos es que deben intervenir tanto la normativa comunitaria como la función interpretativa del TJUE.

Por otra parte, el principio de realidad nos advierte que muchas circunstancias atentan contra la uniformidad de los criterios, aún en un sistema de corte legalista como el europeo. En este epígrafe, abordamos la seguridad jurídica como una condición en todo sistema de distribución de competencias internacionales por daño extracontractual. Nuestra perspectiva se sirve de la noción de “título de jurisdicción”; concepto al que se ha referido alguna jurisprudencia del TJUE <sup>(95)</sup>, y que en general hace referencia al vínculo de CJCI entre un tribunal y un asunto determinado. En esta perspectiva, el “título de jurisdicción” debe analizarse desde el interés del demandante. Por esta razón, el título de jurisdicción no puede desentenderse de los principios subyacentes en los vínculos de conexión, especialmente si se refieren a principios materiales como el de tutela del medio ambiente.

El denominado “título de jurisdicción” supone seguridad jurídica, objetivo difícil de alcanzar. El propio legislador del Reglamento (UE) No. 1215/2012, señaló programáticamente que las reglas de competencia judicial debían presentar “un alto grado de previsibilidad” <sup>(96)</sup> omitiendo así la referencia concreta a la seguridad jurídica.

Por su parte, esta deseable previsibilidad ha tenido múltiples interpretaciones. En efecto, apoyado en el principio de la previsibilidad ha existido la tendencia a radicar la CJCI en el domicilio del demandado (*actor rei forum sequitur*) <sup>(97)</sup>, a

---

<sup>(95)</sup> Ver Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi, presentadas el 24 de mayo de 2007, C-98/06, asunto Freeport Plc, 61-65 y 71, en el cual se utiliza reiteradamente el concepto “título de jurisdicción”: “71. No obstante, debo subrayar que a esta tesis parece oponerse la conclusión a que llegó el Tribunal de Justicia en la sentencia *Reisch Mont age*, citada *supra*, en la que excluyó que la inadmisibilidad manifiesta de la demanda interpuesta contra el demandado domiciliado en el Estado miembro del juez que conoce del asunto por efecto de una preclusión procesal prevista en el orden jurídico nacional pueda incidir en la posibilidad de invocar el título de jurisdicción recogido en el artículo 6, número 1, del Reglamento n° 44/2001 contra el demandado domiciliado en un Estado miembro distinto.”

<sup>(96)</sup> Considerandos 15°, 16° y 21° del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

<sup>(97)</sup> Reinoso Barbero, Fernando, “Foro de conveniencia, derecho de conveniencia y nulidad”, *Revista de Derecho UNED*, número 4, 2009, pp.327-334. Domingo, Ortega, Rodríguez-Antolín, y

objeto de no vaciar de contenido el artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012 (y del Convenio de Bruselas de 1968 y su sucesor Reglamento Bruselas I), en relación con los fueros especiales del artículo 7º) <sup>(98)</sup>.

El domicilio del demandado se determina de acuerdo a las normas internas del Estado miembro en el que se presentó la demanda, según el artículo 62.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en relación con el artículo 4º del mismo Reglamento. En este trabajo, utilizamos el término demandante para la persona que presenta una demanda por daños y perjuicios. No obstante lo anterior, debe tenerse presente que el demandante también podrá ser una persona o empresa que presenta una demanda declaratoria que busca constatar que no es responsable de ningún daño o perjuicio <sup>(99)</sup>.

Por otra parte, las excepciones de competencia, llamados “fueros especiales patrimoniales”, se han convertido - por su naturaleza - en la regla general. Así ha sucedido con los delitos y cuasidelitos civiles, ocasión en la cual se desplaza el fuero general, para establecer un régimen de conexión distinta. En efecto, en materia de delitos y cuasidelitos civiles el título de jurisdicción no está fundado en los sujetos (como sucede con el foro “domicilio del demandado”) sino que está fundado en el “hecho dañoso”. De esta forma, los regímenes especiales obligan a buscar el lugar donde se produjeron los daños, ponen el énfasis en las especialidades en sus

---

Zambrana, *Principios de derecho global. 1000 reglas y aforismos jurídicos comentados*, Navarra, 2006, p. 47.

<sup>(98)</sup> Ver STJCE C-256/00, asunto *Besix S.A.*, apartado 52, que señala: “En efecto, el sistema de atribución de competencias comunes establecidas en el título II del Convenio de Bruselas se basa en la regla general formulada en el artículo 2, párrafo primero, según la cual las personas domiciliadas en un Estado contratante estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado, con independencia de la nacionalidad de las partes. El carácter de principio general que reviste esta regla de competencia, que constituye la expresión del adagio *actor sequitur forum rei*, se explica por el hecho de que, en principio, permite al demandado defenderse más fácilmente.” Asimismo ver: STJCE asunto C-98/06, *Freeport plc* y *Olle Arnoldsson*, considerando 50. STJCE asunto C-412/98, *Group Josi*, Rec. p. I-5925, apartados 34 y 35.

<sup>(99)</sup> Así ha sido ratificado y reconocido por la Sentencia del English Court of Appeal, de 23 de julio del 2010, en el asunto *Cooper Tire and others versus Dow Deutschland and others*. Véase: Suderow, Julia, “Cuestiones de Jurisdicción Internacional en torno a la aplicación privada del Derecho Antitrust: *Forum Shopping* y demandas torpedo”, *Revista de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, Madrid, 2010, pp. 315-331.

diferentes categorías (civil y ambiental) y obligan al análisis sobre el impacto en la seguridad del título de jurisdicción.

Por todo lo anterior, podemos considerar que el TJUE se ha referido al principio de seguridad jurídica, en aspectos no necesariamente asociados al fuero domicilio del demandado. Así ha ocurrido en los casos en los cuales se ha querido poner énfasis en la idea de “uniformidad interpretativa” <sup>(100)</sup>. En otros casos, en cambio, encontramos referencia a la seguridad jurídica como sinónimo de estabilidad en las decisiones. En esta última perspectiva la seguridad jurídica se opone a la reapertura de procesos terminados, precluidos, prescritos o decididos <sup>(101)</sup>.

Por tanto, sin perjuicio de las distintas formas con las cuales el TJUE ha abordado el principio de seguridad jurídica, se advierte una determinación tendiente hacia la noción de seguridad jurídica asociada a la idea de “previsibilidad” <sup>(102)</sup>.

La previsibilidad es un principio que informa al sistema, pero en caso alguno es un fin alcanzado.

Corrobora esta conclusión el hecho que la doctrina del TJUE se haya fundado en razones de seguridad jurídica <sup>(103)</sup>, a fin de establecer interpretaciones restrictivas

---

<sup>(100)</sup> Ver ejemplo de lo señalado en: Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 8 de noviembre de 2006, C-292/05, asunto *E. Lechouritou*, apartado 28, que señala: “No obstante, las potestades públicas no agotan su actividad en esas materias, aunque las abordan con frecuencia; además, los adjetivos «fiscal», «aduanero» y «administrativo» comparten la autonomía conceptual de «civil» y «mercantil», por idénticas exigencias de uniformidad y de seguridad jurídica.”

<sup>(101)</sup> STJCE C-190/89, asunto *Rich*, Rec. p. I-3855.

<sup>(102)</sup> La previsibilidad es el argumento que se opone a la doctrina del *forum non conveniens*, y en general a toda puerta que abra un amplio margen de apreciación (al juez o a las partes) sobre las reglas de CJCI. Asociación a la previsibilidad en las sentencias : STJCE C-256/00 Rec. p. I-1699 asunto *Besix*, apartados 24 a 26; STJCE C-281/02 Rec. p. I-1383 asunto *Owusu* apartado 41. STJCE C-539/03, Rec. p. I-0000 asunto *Roche Nederland y otros* apartado 37 y STJCE C-4/03, asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT)*.

<sup>(103)</sup> Reinoso Barbero, Fernando, “Foro de conveniencia, derecho de conveniencia y nulidad”, *Revista de Derecho UNED*, número 4, 2009, pp.327-334.

(<sup>104</sup>) para las excepciones de “competencias especiales” (<sup>105</sup>), en circunstancias que ha utilizado los mismos argumentos de seguridad jurídica para las excepciones de “competencia exclusiva” (<sup>106</sup>), con el fin de fundar interpretaciones extensivas de los vínculos de conexión (<sup>107</sup>).

Sirva como atenuante para esta contradicción, el hecho que las competencias especiales complementan el fuero domicilio del demandado y las competencias exclusivas, en cambio, sustituyen dicho fuero. De aquí resulta que evitar el *forum shopping* es el leitmotiv en la ocurrencia de contradicciones.

Queda de manifiesto que, en los casos de daño ambiental transfronterizo y transnacional, razones de seguridad jurídica y de previsibilidad en el vínculo obligan a dilucidar el concepto de hecho dañoso y específicamente determinar la relación que existe entre el “hecho generador” del daño y el “resultado dañoso”. En efecto, la existencia de un derecho de opción en favor del demandante, a fin de que elija entre ambas clases de hechos, puede ser considerada como una puerta peligrosamente

---

(<sup>104</sup>) Conclusiones del Abogado General Geelhoed, C-334/00, asunto *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*. Conclusión 33 (extracto): “Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, debido al carácter general del principio contenido en el artículo 2, las excepciones al mismo deben interpretarse de manera restrictiva. Lo mismo cabe decir, naturalmente, del artículo 5, que permite que las personas domiciliadas en un Estado contratante puedan ser demandadas ante los tribunales de otro Estado contratante. La exigencia de una interpretación restrictiva significa que las reglas de competencia del artículo 5 no pueden aplicarse analógicamente, de manera que rijan en otros casos, además de los previstos por el Convenio de Bruselas.”

(<sup>105</sup>) Son competencias especiales en Bruselas I: en *strictu sensu* (arts. 5-7), seguros (arts. 8-14), contratos celebrados por consumidores (arts. 15-17) y contratos individuales de trabajo (arts. 18-21).

(<sup>106</sup>) Son competencias exclusivas en Bruselas I: *strictu sensu* (art. 22) y prórroga de competencia (arts. 23-24).

(<sup>107</sup>) Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, C-4/03, Asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT)* (extracto): “Considerando 5. Por el contrario, una interpretación amplia del artículo 16, apartado 4 (entiéndase actual artículo 22 apartado 4 del Reglamento Bruselas I), favorece la seguridad jurídica y disminuye el riesgo de resoluciones contradictorias. De este modo, es siempre el mismo órgano jurisdiccional quien tiene la competencia para determinar la validez de una patente. Aún más importante es el hecho de que no procede interpretar el artículo 16, apartado 4, en el sentido de que la decisión del demandante de interponer un recurso de nulidad o de declaración de no violación sea decisiva para determinar la competencia judicial. De este modo, se excluiría la posibilidad del *forum shopping*”.

abierta a la inseguridad jurídica; máxime si el Tribunal de Luxemburgo no nos ha dado conceptos autónomos de “hecho generador” o de “resultado lesivo”.

Reconociendo la importancia de la regla de ubicuidad establecida por el TJUE (entonces TJCE) en el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, consideramos que una mayor apertura en la base jurisdiccional, sólo puede referirse a casos en los cuales están asociados distintas categorías de daños, vgr. daños civiles y daños ambientales. En efecto, es necesario que la relación que existe entre el hecho generador y el daño sea estrecha de tal manera que no exista margen para la imprevisibilidad del título de jurisdicción; pero a su vez debe ser lo suficientemente respetuosa del derecho de la víctima, máxime si los daños civiles corresponden a una categoría que no podemos considerar como derivada, secundaria o indirecta.

Por otra parte, si bien la seguridad jurídica está asociada a un fin de “previsibilidad” en los vínculos de conexión, esta previsibilidad tiene vocación programática. Consideramos necesario distinguir aquí que, propendiendo a la previsibilidad, en modo alguno, seguridad jurídica significa fijeza o rigidez de las normas de competencia. De hecho la Unión Europea ha sido la primera en reconocer la importancia de la diversidad material, y propende a una armonización de mínimos, basando su unidad en reglas de distribución de competencia uniforme <sup>(108)</sup>.

Así, cubiertos los objetivos planteados por el constituyente del artículo 114.4 del TUE (anterior artículo 95.4 del TCE) <sup>(109)</sup> - entre los cuales destaca la protección al medio ambiente -, mal podemos oponer seguridad jurídica a protección del medio ambiente, cuando precisamente la previsibilidad de la seguridad jurídica debiera estar

---

<sup>(108)</sup> Iriarte Ángel, José Luis, “La armonización del Derecho internacional privado por la Unión europea”, *Boletín de la Academia Vasca de Derecho*, Año 4, número 9, 2006, pp-45-74.

<sup>(109)</sup> Art. 114.4 TUE: “Si, tras la adopción por el Consejo o por la Comisión de una medida de armonización, un Estado miembro estimare necesario mantener disposiciones nacionales, justificadas por alguna de las razones importantes contempladas en el artículo 36 o relacionadas con la protección del medio de trabajo o del medio ambiente, dicho Estado miembro notificará a la Comisión dichas disposiciones así como los motivos de su mantenimiento.”

en el hecho de existir una interpretación siempre conforme a la máxima protección ambiental posible.

En cuanto a los daños civiles asociados a daños ambientales, el principio de protección ambiental beneficia a la víctima civil. Es decir, el principio de interpretación conforme la protección ambiental no sólo beneficia a la víctima de daño ecológico puro sino también a la víctima del daño civil directo, pues una y otras sufren daños distintos, pero ambas se sirven del mismo hecho generador y del mismo bien jurídico afectado: medio ambiente.

Por esta razón el principio inspirador subyacente en las normas de CJCI para ilícitos civiles internacionales asociados a un hecho con implicancias ambientales, no puede tener el mismo prisma que el principio utilizado para ilícitos civiles comunes. En los ilícitos civiles comunes, la previsibilidad del título de jurisdicción está dada por el acuerdo de las partes <sup>(110)</sup> o por el alcance de la regla de competencia (en todo caso restrictiva). Para los ilícitos civiles asociados a un daño ambiental, en cambio, la regla de competencia restrictiva dejaría a la víctima civil en indefensión por el sólo hecho de asociar su daño civil a un daño ambiental. Esta circunstancia explica la poca presencia de demandas civiles motivadas en daños ambientales. No falta potencialidad de demandas civiles internacionales asociadas a daños ambientales, sino que existe temor ante el riesgo de que los daños civiles sean considerados daños indirectos del daño ambiental, con la consecuente exigencia de probar vínculos de conexión calificados. Asimismo, no existen muchos casos de demandas de indemnización ambiental, por percibirse que estas guardan relación con un titular colectivo, en guarda de un bien que por interesar a todos no es protegido por nadie.

La asociación extensiva en beneficio de la víctima de daños civiles directos, redundaría en un beneficio directo para la tutela ambiental.

---

( <sup>110</sup> ) Ver STJCE 339/86 asunto *Alsthom Atlantique SA. And Compagnie de Construction Mécanique Sulzer SA.*, Rec. 1991. Conforme al cual se analiza la repercusión de la autonomía conflictual y la incidencia de normas imperativas.



## CAPÍTULO II

### PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

#### *Sumario:*

1.- Del *soft law* a la positivización de principios. 2.- Principio garante de tutela judicial efectiva. Fundamento jurisprudencial para la flexibilización de los fueros de competencia. 3.- Principio de soberanía sobre los recursos naturales y responsabilidad de no causar daño al medio ambiente de otros Estados o de zonas fuera de la jurisdicción nacional. 4.- Principio de cooperación internacional en materia ambiental. 5.- Principio de cooperación internacional en materia de jurisdicción. Convenios especiales de jurisdicción. 6.- Principio: el que contamina paga. 7.- Principio de la responsabilidad común pero diferenciada de los Estados. 8.- Conclusiones.

---

#### **1.- Del *soft law* a la positivización de principios.**

El Derecho Ambiental Internacional ha tenido el mérito de acercar el concepto de “desarrollo sustentable” a la cultura jurídica. En la actualidad, encontramos la evolución de esta rama del Derecho, convertida en el llamado: “Derecho Internacional del Desarrollo sostenible” <sup>(111)</sup>.

En esta línea, algunos autores han señalado que los avances experimentados por el Derecho Internacional del Desarrollo sostenible se deben a la existencia de elementos procedimentales específicos, que han venido a establecer obligaciones al Estado. Las obligaciones asumidas por los Estados guardan relación con mecanismos respetuosos de los derechos económicos, sociales y medioambientales de las personas; en circunstancias que muchos de estos Estados no han suscrito obligaciones internacionales específicas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

---

<sup>(111)</sup> Ver Schrijver, N, Weiss, F., Eds., *International Law and Sustainable Development. Principles and Practice*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2004, p.13. Traducido por Rodrigo Hernández, Ángel, en el artículo “El principio de Integración de los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible”, de la *Revista Española de Derecho Internacional*, Marcial Pons, Vol. LXIV, 2, 2012, p. 136.



En efecto, la vía del desarrollo de los principios internacionales ha venido a constituir una fuente suficientemente vinculante para la interpretación judicial nacional, de modo tal, que la interpretación judicial aplica normas y directrices en armonía con principios de protección internacional <sup>(112)</sup>. De esta forma, las políticas y las decisiones sobre casos concretos, han encontrado un ámbito de diálogo bajo el paraguas de los principios de Integración y de Cooperación.

Por su parte, los principios que son aplicables a la CJCI, constituyen directrices interpretativas que recaen sobre el objeto y sobre el fin de las normas atributivas de competencia. Los principios de CJCI se aplican tanto a la competencia de origen convencional o reglamentaria, como a la competencia autónoma o voluntaria entre las partes. Como principios interpretativos deben analizarse en relación con los fines de justicia ambiental que han sido planteados por los Estados parte de un convenio de competencia judicial, al momento de regular un conflicto internacional.

En efecto, la construcción del concepto *desarrollo sustentable* y la valoración normativamente que se recoge de este concepto en multiplicidad de cuerpos europeos, obedecen a la evolución del Derecho Internacional; la que puede datar su origen recién en la década de los ochenta. En dicha época se creó la Primera Estrategia Mundial para la Conservación <sup>(113)</sup>. Por su parte, desde el Reporte “Nuestro Futuro Común” <sup>(114)</sup> hasta nuestros días ha existido preocupación por la efectividad del concepto *desarrollo sustentable* y más aún desde el Derecho Internacional Privado; circunstancia que obliga a elevar el compromiso con la protección ambiental. Finalmente, y a partir de la declaración de Río y del Plan Programa 21 se ha intentado articular un programa coordinando que de eficacia a la legislación medioambiental en todo los ámbitos <sup>(115)</sup>.

---

<sup>(112)</sup> Ver Declaración de Nueva Delhi en DOC. A/57/329 de 31 de agosto del 2002 de la Asamblea General de Naciones Unidas.

<sup>(113)</sup> Elaborada por la Unión Mundial para la Naturaleza, 1981.

<sup>(114)</sup> Informe Brundtland. Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de ONU de 1987.

<sup>(115)</sup> Desarrollo de los principios en: Kiss, Alexandre-Charles, *Droit international de l'environnement*, Pedone, 1988, pp. 30-32; Thomas, Christopher y Tereposky, Greg “The Evolving

Por otro lado, los antecedentes convencionales (binacionales, plurinacionales y multinacionales) <sup>(116)</sup> que establecen sistemas de responsabilidad ambiental y sistemas de responsabilidad civil derivada; sólo constituyen excepciones a la regla general en materia de protección ambiental; porque se encuentran asociadas, en gran medida, a regímenes internacionales especiales para el transporte terrestre y para el transporte marítimo de sustancias peligrosas o tóxicas, o se refieren a proyectos de energía nuclear, o a actividades de explotación en la Antártica. En estos casos, encontramos que más que distribuir competencias jurisdiccionales, en realidad se establecen modelos distintos de responsabilidad internacional, todos los cuales son de interpretación estricta <sup>(117)</sup>.

De esta forma, la soberanía de los Estados se encuentra limitada por la responsabilidad ambiental internacional. En efecto, tal como lo declara la Conferencia de Estocolmo (1972), y su Declaración sobre Medio Ambiente Humano, tenemos que el Principio 21 establece:

*“Los Estados tienen, de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas y los principios de Derecho Internacional, el derecho soberano para explotar sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales, así como la responsabilidad para asegurar que las*

---

Relationship Between Trade and Environmental Regulation”, *Journal of World Trade*, 1993, pp. 23-45.

<sup>(116)</sup> Convenio sobre contaminación del medio marino: a) Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a la Contaminación por hidrocarburos, de Bruselas 1969, sustituido por el Convenio de 1992; b) Convenio internacional de constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños causados por contaminación por hidrocarburos, de Bruselas 1971 y sus Protocolos de 1992 y de 2003; c) Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques, de Londres 2001 (BUNKERS 2001), d) Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996. Contaminación por daño nuclear: a) El Convenio de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, de París 1960, Protocolo de 1982; b) Convenio suplementario, de Bruselas 1963 y Protocolo de 2004; c) Convenios de la International Atomic Energy Agency (IAEA) de Viena 1963 y 1997.

<sup>(117)</sup> Ver Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos de 1977 y Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1992.

*actividades dentro de su jurisdicción o control no causen daño al medio ambiente de otros estados o de áreas más allá de sus límites jurisdiccionales”.*

Desde esta perspectiva encontramos que la regulación de la CJCI, basada en un modelo de soberanía, tampoco puede desconocer que existen limitaciones impuestas por el Derecho Internacional a los Estados por la vía convencional, o incluso a través del *soft law* (germen de costumbre internacional) en Declaraciones, Planes de Acción y Cumbres, que no constituyen convenios y que sin embargo articulan el sistema internacional de ventajas-oportunidades para un Estado en materia ambiental. De aquí que, un modelo de cooperación judicial en materia competencial civil se presente con mayor idoneidad en un modelo de justicia privada.

Es interesante constatar que para algunos autores el *soft law*, desempeña la función de principio general del Derecho operando como mandato de optimización para la maximización de resultados <sup>(118)</sup>. En nuestro caso, el intérprete de normas sobre CJCI que se encuentre frente a un daño ambiental debe estar en condiciones de identificar las normas de *soft law* que se aplican a la actividad y fallar en armonía con ellas. Esta consecuencia no es porque el *soft law* tenga fuerza de ley, que no la tendrá salvo que sea recogida por una norma de *hard law*, sino por el compromiso que el Estado ha asumido frente a otros Estados al aceptar un nuevo orden de situaciones jurídicas que se crearon por la puesta en marcha de los principios de protección ambiental. Esto ocurre generalmente cuando el Estado adopta acuerdos de cooperación en materia ambiental cuyos efectos son difíciles de determinar, evaluar o fiscalizar <sup>(119)</sup>. Así, cuando los privados son los que asumen el rol fiscalizador, adoptando la autorregulación y promoviendo la protección del medio ambiente en

---

<sup>(118)</sup> Sarmiento, Daniel, “La Autoridad del Derecho y la Naturaleza del Soft Law”, *Cuadernos de Derecho Público*, número. 21, 2007.

<sup>(119)</sup> Análisis crítico en: Özden, Malik, “Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. Situación actual y desafíos de los debates de la ONU en torno a las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos, Programa Derechos Humanos del Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), disponible en: <http://www.cetim.ch/es/documents/bro2-stn-A4-es.pdf> [revisado 31 de julio del 2012].

base a principios, entonces hablaremos de *soft law paccionado* <sup>(120)</sup>. En este caso, la adopción que hace la Unión Europea de principios de protección ambiental envuelve la voluntad de vincularse con tales principios. Así nace una herramienta dirigida a los jueces destinada a la integración de las dudas y lagunas en las leyes internas.

Este acercamiento a las relaciones público privadas, también constituye una manifestación del principio de subsidiariedad.

En efecto, la función del principio de subsidiariedad se ha referido tradicionalmente a la regulación de las relaciones entre los ámbitos público-privado, y sus distintos niveles <sup>(121)</sup>. Como principio organizativo prescribe que cada instancia esté en condiciones de desarrollar con libertad sus objetivos, según su capacidad. De esta forma, las instancias políticas superiores sólo suplen la incapacidad de los niveles inferiores en la medida de sus necesidades <sup>(122)</sup>. Tal es la función que ha venido desempeñando el Método Abierto de Coordinación (MAC) <sup>(123)</sup>.

---

<sup>(120)</sup> Rodríguez de Santiago, José María, *Los Convenios entre Administraciones Públicas*, Marcial Pons, Madrid, 1998, p. 347.

<sup>(121)</sup> Análisis crítico en: Teitelbaum, Alejandro, “El problema de la impunidad. Las violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, *El derecho a la equidad. Ética y mundialización social*, Terre des Hommes, Barcelona, Icaria, 1997, pp.117-155.

<sup>(122)</sup> Sobre el principio de subsidiariedad en la UE, ver: Estella de Noriega, Antonio, *El dilema de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el principio de subsidiariedad*, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000. Estella de Noriega, Antonio, “La paradoja de la subsidiariedad: reflexiones en torno a la jurisprudencia comunitaria relativa al artículo 3B(2) del Tratado de la Comunidad Europea”, *Revista española de Derecho Administrativo*, número 101, 1999, pp. 71-100. Chicharro Lezaro, Alicia, *El principio de subsidiariedad en la Unión Europea*, Pamplona, 2002, p. 33. Asimismo, confróntese el principio de subsidiariedad en materia ambiental en: Farnsworth, Nick, “Subsidiarity – A Conventional Industry Defence. Is the Directive on Environmental Liability with Regard to Prevention and Remedying of Environmental Damage Justified under the Subsidiarity Principle?”, *European Environmental Law Review*, número 13, 2004, pp. 176-185.

<sup>(123)</sup> Sobre el Método Abierto de Coordinación (MAC), ver: Chalmers, D. y Lodge, M., “The OMC and the European Welfare State”, *LSE Discusión Paper*, número 11, 2003; De Burca, G. y Scott, J., *Law and New Governance in the EU and the US*, Oxford & Portland, 2006; Ferrera, M., Matsaganis, M. y Sacchi, S., “Open Coordination Against Poverty: The New EU Social Inclusion Process”, *Journal of European Social Policy*, número 12, 2002; Trubek, D. y Trubek, L., “Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: The Role of the Open Method of Coordination”, *European Law Journal*, número 11, 2005; Zeitlin, J. y Trubek, D. (eds.) *Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American Experiments*, Oxford, 2003 y Zeitlin, J. y Pochet, P.

El MAC es una técnica de actuación comunitaria “desde las instancias nacionales”. Esta experiencia europea, tuvo como objetivo intervenir en las políticas de competencia de los Estados, donde sólo se ejercían poderes de coordinación.

En materia ambiental es del todo relevante, porque los Estados mantienen objetivos que varían de país en país, y sin embargo, con el MAC es posible hacer un juicio sobre el cumplimiento de objetivos en base a “parámetros” pactados entre las partes. La obligatoriedad de estos parámetros es nula, sin embargo constituyen una fuerza coactiva que recae en los Estados a la hora de medir sus niveles de cumplimiento.

En sintonía con los parámetros descritos, el esquema de eco-gestión y auditoría de la Unión Europea (EMAS), constituye una herramienta de gestión para las empresas que ejercer sus actividades en la Unión Europea o en el Área Económica Europea. Los sistemas de gestión medioambiental referidos en el EMAS, no son muy distintos de los exigidos por la norma ISO 14001, excepto porque exigen dos requisitos adicionales: proporcionar una declaración de desempeño ambiental y poner la información a disposición del público (<sup>124</sup>).

El resultado perseguido por estos instrumentos es conseguir el nacimiento de la necesidad en los Estados de alcanzar mejores cotas de cumplimiento en los objetivos pactados abriendo posibilidades para futuras negociaciones (sobre la base de subvenciones, préstamos, ayudas sociales, etc.) Todo lo anterior, impulsa una actuación armonizada que debe ser reconocida y potenciada a nivel judicial.

No obstante lo anterior, en las negociaciones comerciales internacionales pueden producirse efectos extracontractuales por daño ambiental y por el daño civil asociado (<sup>125</sup>). Esto ocurre porque el tráfico de bienes y servicios puede llevar

---

(eds.), *The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies*, Bruselas, 2003.

(<sup>124</sup>) Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.

(<sup>125</sup>) Algunos de los casos están protegidos por Convenciones Internacionales como: a) Convención para la Protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de América, de

asociado condiciones de responsabilidad ambiental. Por esta razón, consideramos que el Derecho Procesal Internacional necesita interpretarse en armonía con los principios de Derecho Ambiental Internacional, los cuales actuarán como directrices interpretativas dirigidas al juez e inspiradoras de la solución de fondo en el conflicto. Asimismo, los principios de Derecho Internacional Ambiental coadyuvarán en la determinación de la CJCI, según veremos más adelante.

Por otro lado, las jurisdicciones nacionales reciben demandas por daño ambiental, de tal forma que se constituyen en la vía más idónea -comparativamente con la jurisdicción que ejercen otros tribunales internacionales especiales- en el conocimiento de los conflictos ambientales. En efecto, salvo los tribunales arbitrales internacionales, la justicia internacional con competencia ambiental (vgr. La que conoce la Corte Internacional de Justicia y los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos principalmente) sólo se ocupa de la responsabilidad estatal, de modo que sólo sirve como vía indirecta para los intereses de privados.

De esta forma, la vía nacional goza de un estatuto de estabilidad, permanencia, imparcialidad y establecimiento a priori, que viene a asegurar el interés de los privados gracias a la fuerza obligatoria que sus resoluciones tienen al interior del Estado en el cual se dicta una sentencia. Tal fuerza obligatoria extiende sus efectos al exterior previo juicio de exequátur en los casos en los cuales no hay Convenios de reconocimiento de sentencias extranjeras. Asimismo, la vía nacional no está al margen de los principios de protección ambiental que desarrolla el estatuto de Derecho público en la Unión Europea.

El artículo 191º del Tratado constitutivo de la Unión Europea, recoge un alto nivel de protección ambiental; es informante de un sistema integrado que permea el

---

Washington 1940; b) la Convención que Reglamenta la caza de la ballena de Washington 1946; c) Convención la que regula el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de Washington de 1973; d) el GATT hoy Organización Mundial del Comercio (OMC); e) Convenios sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal de 1990); f) el Convenio de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación de Basilea 1989; finalmente g) Tratados de Libre Comercio y Cooperación.

Derecho derivado. Se funda en los principios de a) cautela y acción preventiva, b) corrección en la fuente misma y c) quien contamina paga. El artículo 191º mencionado “justifica plenamente el principio que favorece a la víctima del daño”, es decir, sirve de fundamento al denominado principio *favor laesi*. Así ha sido corroborado por el legislador comunitario en otro cuerpo normativo relacionado: el Reglamento 864/2007 Roma II <sup>(126)</sup>.

Los tribunales nacionales deben interpretar las normas comunitarias sirviéndose del artículo 191º del Tratado Constitutivo de la UE y reconociendo que existe una pléyade de principios de Derecho Ambiental Internacional que inciden en la determinación de la CJCI. Tales principios se encuentran relacionados con otros principios tales como: a) Soberanía y obligación de no causar daño en territorio de otro Estado, y b) Buena vecindad y c) Cooperación internacional. Todos los anteriores principios generan obligaciones legales internacionales basadas en la costumbre y su incumplimiento da lugar a responsabilidad internacional. Por tanto, junto con referirnos a los principios hablamos también de obligaciones internacionales para el Estado y consecuentemente para sus órganos jurisdiccionales <sup>(127)</sup>.

---

<sup>(126)</sup> Reglamento (CE) Nº 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»).

<sup>(127)</sup> Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law. Frameworks, Standards and Implementation*, Publisher: Cambridge University Press, Vol. I, 1995, p.184. Bergkamp, Lucas, “The Commission's White Paper on Environmental Liability: A Weak Case for an EC Strict Liability Regime”. *European Environmental Law Review*, número 9, 2000, pp.105-114. Bergkamp, Lucas, “The proposed environmental liability directive. 1st part”. *European Environmental Law Review*, Vol. 11, número 11, 2002, 294-314. Bergkamp, Lucas, “The proposed environmental liability directive. 2nd part”. *European Environmental Law Review*, Vol. 11, número 12, 2002, 327-341. Brunnée, Jutta, “Of sense and sensibility: reflections on international liability regimes as tools for environmental protection”. *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 53, número 2, 2004, pp. 351-367. Thieffry, Patrick, “Responsabilité environnementale des entreprises: les projets européens se précisent”, *Les Petites affiches*, Vol. 392, número 38, 2003 pp. 4-18. Wilde, Mark, “The EC Commission's White Paper on environmental liability: issues and implications”, *Journal of Environmental Law*, Vol. 13, número 1, 2001, pp. 21-37. Pascale Steichen, “La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux”, *Revue juridique de l'environnement*, número 2, 2003, pp. 177-191. De Sadeleer, Nicolas, “Les déchets, les résidus et les sous-produits: une trilogie ambiguë”, *Revue du droit de l'Union européenne*, número 3, 2004, pp. 457-497.

Para profundizar sobre “el cómo” integrar los principios ambientales internacionales en la interpretación judicial de tribunales nacionales, tenemos un ejemplo en el Tribunal Supremo español <sup>(128)</sup> que ha señalado:

*“El Motivo, habida cuenta las razones, incluso, de carácter sociológico y de protección de la Ordenación Universal al Medio Ambiental aducidas, precisa subrayar "ab initio" que, por parte de la Sala sentenciadora, se debían haber tenido en cuenta al evaluar el "quantum" indemnizatorio derivado de esa conducta transgresora, elementales deberes, incluso, subsumibles dentro de la órbita amplia de la responsabilidad aquiliana /extracontractual -ex art. 1902 C.c.-, por cuanto que los Tribunales, cuando fijan tras la ponderación de esa conducta negligente la cuantificación de los daños irrogados, han de contemplar esas circunstancias no sólo estrictamente jurídicas o de Derecho positivo emanadas tanto del Derecho Nacional como del Derecho Internacional e, incluso del Derecho Comunitario, sino las atinentes a los distintos elementos que cualquiera que sea su procedencia económica o profesional, cultural o sociológica, sean factores determinantes o coadyuvantes en la apreciación del hecho ilícito y, sobre todo, en la verificación de los resultados dañosos, (es sabido que en la completud del dato normativo dentro de la metodología integradora, la función determinante del ilícito emergente y su sanción, debe compulsar el conjunto estructurador de lo dado; presupuestos personales, sociales, económicos, culturales, ambientales, etc.). Y es indiscutible que, esa dualidad en toda su amplitud al emitir su "ratio decidendi" sancionadora, se tiene en cuenta por parte de los Tribunales, y en el caso de autos, caben argumentos tendentes a cuestionar su observancia en el razonamiento de la Sala "a quo".”*

A continuación daremos una relación y profundizaremos en ciertos aspectos de los principios ambientales que puedan guardar relación con la determinación de la CJCI.

Nuestro objetivo es informar el sentido de los principios de protección ambiental más importantes. No buscamos realizar un acabado desarrollo de cada principio, sino que pretendemos exponer el rol que juegan tales principios en casos en los cuales se alega una interpretación extensiva del fuero especial del artículo 7.2 Reglamento (UE) No. 1215/2012. En efecto, serán los principios internacionales de protección ambiental los que vengán a fundar la calidad de “partes más débiles” de la relación jurídica extracontractual internacional, otorgando al demandante ambiental y

---

<sup>(128)</sup> STS 646/2001. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid. número de Recurso: 72/1996. número de Resolución: 70/2001. Recurso de casación, que establece el quantum indemnizatorio de acuerdo a una interpretación a favor de la protección ambiental y protección de afectados, en relación con la tutela judicial efectiva.



también al demandante civil de un daño ambiental un beneficio en lo referente a la distribución de los costos de litigación internacional (<sup>129</sup>).

## **2.- Principio garante de tutela judicial efectiva. Fundamento jurisprudencial para la flexibilización de los fueros de competencia.**

El Principio Garante de la tutela judicial efectiva está relacionado con el Principio 10º de la Declaración de Río, sobre participación y acceso a los recursos jurisdiccionales (<sup>130</sup>):

*“Principio 10. "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes.”*

Este derecho está reconocido por los países parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (<sup>131</sup>) y cobra valor en los casos que amenazan vacío competencial internacional. Aunque en principio no existe vacío competencial en el

---

(<sup>129</sup>) Complementétese con los principios presentados en el Libro Blanco de la Comisión europea sobre responsabilidad ambiental en: García Cobaleda, Manuel, “Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental, 9 de febrero de 2000 COM(2000) 66 final”, *Gestión Ambiental*, número 19, 2000, pp. 14-20. Gomis Catalá, Lucía, “Estrategia comunitaria en materia de responsabilidad por daños al medio ambiente”. *Gestión Ambiental*, número 19, 2000, pp. 1-13. Pagh, Peter, “EU-direktiv om miljøansvar”, *Juristen*, n° 1, 2005, pp. 10-16. Pozzo, Barbara, “Verso una responsabilità civile per danni in Europa: il nuovo *Libro Bianco* della Commissione delle Comunità europee”, *Rivista giuridica dell’ambiente*, Vol. 15, número 5, 2000, pp. 623-665.

(<sup>130</sup>) Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro junio de 1992.

(<sup>131</sup>) Con las limitaciones que estableció la Observación general número 24, del Comité de Derechos Humanos, sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos, o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 52º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 187 (1994).

sistema europeo de distribución de competencias, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales (Reglamento (UE) No. 1215/2012), consideramos que es posible que se plantee un caso de indefensión respecto de la víctima civil de daños ambientales.

Por su parte, el principio de tutela judicial efectiva y su influencia en otros principios ambientales internacionales (tales como interdependencia ecológica, equidad, responsabilidad común pero diferenciada y recursos fronterizos compartidos) ha sido expuesto en foros internacionales <sup>(132)</sup>, conforme a los cuales, los sistemas jurídicos nacionales presentan notables diferencias en dicha garantía.

Asimismo, y en paralelo, el principio de acceso igualitario a la justicia, está lejos de ser plenamente aceptado, ni en el orden público internacional, ni como principio del derecho procesal civil internacional <sup>(133)</sup>. La interacción del derecho de tutela judicial efectiva y de la falta de uniformidad en el acceso igualitario a la justicia <sup>(134)</sup> hará que el demandante de daños ambientales internacionales (y por añadidura el demandante de daños civiles colaterales) se vea motivado a buscar la jurisdicción que mejor satisfaga sus intereses. De aquí que, los sistemas de distribución de competencias judiciales internacionales deban tomar en consideración la influencia por defecto de estos derechos, al momento de interpretar el vínculo de conexión. En efecto, tal interpretación

---

<sup>(132)</sup> Entre los que sobresale la OECD, ver: Potier, Michel y Tébar Less, Cristina, “Trade and environment at the OECD: Key issues since 1991”. *Working Paper on Trade and Environment*, número 2008-01, 2008, p. 11. OECD *Legal Aspects of Transfrontier Pollution*, Paris, 1977; Smets, Henri, “Legal Principles Adopted by the OECD Council”, *Environmental Policy and Law*, número 9, Bonn, 1982, pp. 110-116, Smets, Henri, *Revue Européenne du Droit de l'Environnement*, número 1, 2000.

<sup>(133)</sup> Boyle, Alan, “Los derechos ambientales y el Derecho Internacional”, en *Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Ambiental*, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, noviembre 2001, pp.36-93; Munro y Lammers, *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations*, Vol. XXI, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Grupo de Expertos sobre la Legislación Ambiental, Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff Publishers, Londres/Boston, 1986, p.88.

<sup>(134)</sup> Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo, se refirió por primera vez al principio de acceso igualitario a la justicia como un “principio emergente del Derecho Internacional” en la Carta de la Tierra.

puede arrojar la necesidad de flexibilización de los fueros, especialmente si no corresponden a un *forum actoris*. Más aún puede fundar la necesidad de abrir un *forum necessitatis* si correspondiere <sup>(135)</sup>.

Por otra parte, el Derecho Ambiental Internacional, de carácter programático y compuesto en su mayoría por normas de *soft law* <sup>(136)</sup>, se caracteriza por la falencia de garantías jurisdiccionales para el desarrollo del juicio de responsabilidad a fin de que constituya un imperativo jurídico <sup>(137)</sup>. De aquí, la necesidad de asociar los principios del Derecho Internacional Ambiental con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, en el entendido de que este último actúa como derecho civil y político reconocido en el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 <sup>(138)</sup>, razón por la cual si generará obligaciones de resultado.

Sin perjuicio de la necesidad de dotar a los derechos ambientales de las garantías jurisdiccionales que goza el derecho de tutela judicial efectiva, tenemos que, en el contexto europeo existen varios cuerpos normativos que dan sustento a las obligaciones internacionales contraídas por los Estados para la protección ambiental.

---

<sup>(135)</sup> El *forum necessitatis* permite iniciar una acción en aquellos casos en los cuales es la única forma de garantizar el acceso a la justicia. Ver ejemplo de positivización en el Reglamento (CE) Número 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, que señala: “Artículo 7. *Forum necessitatis*. Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo a los artículos 3, 4 y 5, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, conocer del litigio si un procedimiento no puede razonablemente introducirse o llevarse a cabo o resulta imposible en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha relación.

El litigio debe guardar una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que vaya a conocer de él”.

<sup>(136)</sup> Sobre el *soft law* en la unificación del Derecho de los negocios internacionales, directrices dinamizantes ver: Fernández Rozas, José Carlos, “Autorregulación y unificación del derecho de los Negocios internacionales”, *Comercio exterior* (J.V. González García, Dir.), Madrid, Iustel, 2009, pp. 83-137.

<sup>(137)</sup> Mayores avances en la positivización de este principio, en materia de: Transporte de sustancias tóxicas o peligrosas y en el desarrollo de actividades riesgosas asociadas a la energía atómica.

<sup>(138)</sup> Pacto Internacional de 1966 sobre Derechos Civiles y Políticos. Artículo 26º.

Entre estos convenios (cuya mayoría serán abordados con mayor profundidad en el capítulo siguiente) sobresale Convención de Aarhus.

La Convención para el acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materias ambientales (Convención de Aarhus) de 25 de junio de 1998 (<sup>139</sup>), enlaza derechos ambientales con derechos humanos.

Tenemos que la Convención propone un desarrollo sustentable en base a la participación de todas las partes interesadas, con gran protagonismo de la responsabilidad gubernamental (government accountability and environmental protection). En efecto, la Convención de Aarhus garantiza derechos públicos subjetivos (o acciones) que imponen a las partes obligaciones en relación con: a) el acceso a la información, b) participación pública y c) acceso a la justicia.

En efecto, la Convención de Aarhus, forma parte del “strumentario” (<sup>140</sup>) para el estudio del Derecho Ambiental. Uno de los aspectos relevantes de la Convención de Aarhus, sobre el cual la Corte de Justicia de la UE se ha pronunciado en el último tiempo, guarda relación con el acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente. La Convención presenta el tema desde una doble perspectiva: por un lado, desde el derecho de acceso a la tutela judicial y jurisdiccional para el caso específico en el que se deniega la participación en el procedimiento ambiental; y por otro lado, en forma más general, el acceso a la justicia en todos aquellos casos en los que existen relaciones a problemas ambientales. Por su parte, la UE, sólo se ha hecho cargo del primer aspecto señalado, en la Directiva 2004/35/CE.

Por su parte, la Corte de Justicia, ha tenido ocasión de pronunciarse durante el año 2011 sobre tres cuestiones prejudiciales relacionadas con el acceso a la justicia

---

(<sup>139</sup>) Comisión Económica para Europa, Comité de Política Ambiental. Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ECE/CEP/INFORMAL/1999/1. De fecha 15 de enero de 1999

(<sup>140</sup>) Baroni, Leonardo y D’Ancona, Stefano, “La Convenzione di Aarhus nella giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. del 2011”, *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, diretta da Mario P. Chiti e Guido Greco, Giuffrè Editore, 3-4, 2012, pp. 619-642.

consagrado en la Convención de Århus, en razón de las cuales es posible deducir un hilo conductor: la imposibilidad de acceder a la justicia por razones inherentes (<sup>141</sup>), las características de la jurisdicción (<sup>142</sup>) y la legitimación del recurrente (<sup>143</sup>).

De esta forma, la Corte de Justicia viene a pronunciarse sobre su competencia para interpretar la Convención de Århus (<sup>144</sup>), según había sido aprobado por Decisión Comunitaria (<sup>145</sup>).

Por otro lado, y no obstante el contexto que nos entrega la Convención de Århus, nos encontramos en el deber de posicionarnos en el debate sobre la colisión de los fueros exorbitantes (propios del *Common Law* y que en Europa serían inaplicables a la luz del Reglamento (UE) No. 1215/2012) y de los fueros de interpretación restrictiva (como ocurre en la propuesta europea).

En efecto, tanto el derecho a un juicio justo como el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocidos en los cuerpos normativos europeos más importantes, constituyen una serie de estándares mínimos que se extienden a los regímenes de CJCI (<sup>146</sup>). Veamos tales cuerpos normativos:

---

(<sup>141</sup>) Sentencia de 18 de octubre del 2011 (causa acumulada a C-128/09, C-134/09 y C-135/09, asunto *Antoine Boxus y otros vs. Región Wallone*).

(<sup>142</sup>) En el que se trató el acceso a la jurisdicción previa condición de existir un “interés general a la tutela ambiental”. Ver sentencia de 12 de mayo de 2011 (C-115/09 asunto *Bünd für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen y otros vs. Bezirksregierung Arnsberg*).

(<sup>143</sup>) Sentencia de 8 de marzo de 2011 (causa C-240/09 asunto *Lesoochránárske zoskupenie VLK vs. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky*).

(<sup>144</sup>) Competencia que se refiere a tres grandes materias: el acceso a la información, la participación pública en el proceso decisional y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

(<sup>145</sup>) Decisión 2005/370 de 17 de febrero del 2005, relativa a la conclusión, a nombre de la Comunidad Europea, de la Convención sobre el acceso a la información, la participación pública al proceso decisional y el acceso a la justicia en materia de medioambiente, JOCE L 124 de 17 de mayo del 2005.

(<sup>146</sup>) Sobre la dimensión constitucional del Derecho comunitario originario y el desarrollo de esta dimensión por parte del TJCE, ver: Sobrino Heredia, José Manuel, “La aportación jurisprudencial de los Dictámenes del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas”, *Anuario da Faculdade de Dereito da Universidade de A Coruña*, 2007. Pérez Carrillo, Elena, “Protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario europeo actual”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. VII, 2007, pp. 583-622.

Artículo 6.1 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Derecho a un proceso equitativo. *“Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.”*

Artículo 47. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. *“Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.”*

Artículo II-107. Constitución Europea. *“Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia.”*

Algunos autores han visto en este grupo de normas el fundamento para la proscripción del ejercicio abusivo del derecho de opción entregado al demandante y han abogado por la interpretación restrictiva de los fueros especiales en consideración exclusiva a la situación en la que se encuentra el demandado (<sup>147</sup>).

---

(<sup>147</sup>) De Miguel Asensio, Pedro Alberto, *ob cit*, p.52-54. Schlosser, Peter, "Jurisdiction in International. Litigation. The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to Brussels", *Revista di Diritto Internazionale*, Vol LXXIV, 1991, pp. 5-34.

Es menester preguntarnos si el cuerpo de normas que conforman el bloque constitucional europeo de garantías fundamentales, ¿pueden justificar también el derecho de la víctima de daño civil asociado a un daño ambiental a presentar una demanda a su arbitrio: a) en el lugar donde se produce el daño civil (coincida o no con el daño ambiental), o b) en el lugar del hecho generador, sin asociar la respuesta a la coincidencia eventual con el domicilio del demandado?

Al respecto, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido consistente con entregar el más alto grado de protección a la víctima de daño ambiental en razón de reconocerle “derechos efectivos, no ilusorios o teóricos”. El Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha garantizado una protección integral.

Así, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reprobado y sancionado la inactividad de las autoridades públicas frente a daños ambientales sufridos por particulares, agravados por la pendencia de procedimientos judiciales y/o administrativos (caso *López Ostra contra Reino de España*) <sup>(148)</sup>; ha sancionado la inactividad de las autoridades públicas frente a situaciones de alto riesgo ambiental (caso *Guerra contra Italia*) <sup>(149)</sup>; ha calificado la protección ambiental como de valor superlativo por sobre el bienestar económico de un país (caso *aeropuerto de Heathrow, varios contra Reino Unido*) <sup>(150)</sup> y ha hecho una férrea defensa al contenido del derecho

---

<sup>(148)</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 1994/496, de 9 de diciembre de 1994, caso *López Ostra contra Reino de España*, sobre si se había producido o no una infracción al artículo 8 del Convenio de Roma, relativo al derecho de toda persona a que se respete su vida privada y familiar, el Tribunal señala afirmativamente que “*la interesada y su familia vivieron durante años a doce metros de un foco de olores, ruidos y humos*” (parágrafo 42). Por otro lado la inactividad del Ayuntamiento u otras autoridades españolas (no excusable por la pendencia de un proceso contencioso-administrativo y un proceso penal por delito ecológico), pueden alegarse pues los dos procesos tenían objetos diferentes (parágrafos 37 y 38).

<sup>(149)</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 1998/875, de 19 de febrero de 1998, caso *Guerra contra Italia*, se refirió a los daños y riesgos medioambientales con resultado de vulneración de los derechos fundamentales. En la oportunidad se pronunció sobre perjuicios causados a cuarenta personas que residían a un kilómetro de una industria química de alto riesgo, con inactividad negligente por parte de las autoridades del Estado, reproduciendo la doctrina del caso *Ostra contra Reino de España*.

<sup>(150)</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 2001/567, de 2 de octubre de 2001, caso *varios contra Reino Unido, aeropuerto de Heathrow*, el tribunal señaló: “*en un campo tan sensible como el de la protección medioambiental, la mera referencia al bienestar*

a vivir en un medio ambiente sano garantizado por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como un “derecho efectivo, no ilusorio ni teórico” (caso *Moreno Gómez contra el reino de España*)<sup>(151)</sup>.

Por su parte, la estrategia de la Unión Europea para la tutela de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea queda también en evidencia en la Propuesta de modificación del Reglamento (UE) No. 1215/2012<sup>(152)</sup>, la que se inspira en el respeto a derechos enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular:

- a) el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47),
- b) protección de los consumidores (artículo 38), y
- c) protección de los trabajadores y de sus acciones colectivas (artículo 28).

En este sentido, la propuesta para la supresión del exequátur obliga a crear procedimientos especiales de revisión, destinados a garantizar que el demandado

---

*económico del país no es suficiente para imponerse sobre los derechos de los demás*". Asimismo señaló: "debe exigirse a los Estados que minimicen, hasta donde sea posible, la injerencia en estos derechos, intentando encontrar soluciones alternativas y buscando, en general, alcanzar los fines de la forma menos gravosa para los derechos humanos".

<sup>(151)</sup> Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 4143/02 de 16 de noviembre de 2004, caso *Moreno Gómez contra el reino de España*. Tras el rechazo del tribunal contencioso-administrativo y del rechazo del amparo por Sentencia del Tribunal Constitucional número 119/2001, de 24 de mayo del 2001, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, apoyándose en el artículo 8.1 del Convenio sobre la posible vulneración del derecho al respeto al domicilio por ruidos, emisiones, olores y otras injerencias, considera “innegable” la existencia de ruido nocturno, soportado por la demandante durante varios años, especialmente fin de semana, y señala: “exigir a alguien que habita en una zona acústicamente saturada, como en la que habita la demandante, la prueba de algo que ya es conocido y oficial para la autoridad municipal no parece necesario” (parágrafo 59). Asimismo, señala que “una regulación para proteger los derechos garantizados sería una medida ilusoria si no se cumple de forma constante, y el Tribunal debe recordar que el Convenio trata de proteger los derechos efectivos y no ilusorios o teóricos” (parágrafo 61).

<sup>(152)</sup> Ver exposición de motivos en la versión refundida de la Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I, en: Comisión Europea, documento COM(2010) 748, 2010. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. en materia civil y mercantil, pp. 1-12.



también disponga de una tutela judicial efectiva, de tal modo que no se atente contra su derecho a un juicio justo o a sus derechos de la defensa <sup>(153)</sup>.

No obstante lo anterior, y como también queda demostrado en la Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I que se presentó el año 2010 <sup>(154)</sup>, los cambios previstos en el ordenamiento jurídico internacional y que están dirigidos a mejorar el acceso a la justicia en la Unión Europea, protegiendo a los ciudadanos que tienen la calidad de “partes más débiles”, no pueden ir en oposición a otros derechos fundamentales reconocidos a las empresas.

En efecto, la eficacia general de la justicia entrega certeza y disminuye los costes de litigación internacional; pero además de certeza, el sistema debe estar en condiciones de reforzar la libertad de empresa reconocida en el artículo 16º de la Carta de derechos fundamentales. En este sentido se encaminan enmiendas tales como: a) la eliminación de la posibilidad de eludir un acuerdo de elección de foro <sup>(155)</sup> o b) el reconocimiento de los convenios de arbitraje <sup>(156)</sup>.

---

<sup>(153)</sup> Ver Considerando 27 de la Propuesta de la Comisión Europea del 2010 sobre modificación al Reglamento Bruselas I a propósito de la tutela de otros derechos fundamentales: “*El presente Reglamento debe asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva y el derecho a un juez imparcial consagrados en su artículo 47. Ninguna disposición del presente Reglamento debe afectar a la libertad de expresión y de información (artículo 11), al derecho a la vida privada y familiar (artículo 7), ni al derecho de los trabajadores y de los empresarios, o sus organizaciones respectivas, de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales, a negociar y celebrar convenios colectivos, en los niveles apropiados, y a emprender, en caso de conflicto de intereses, acciones colectivas para la defensa de sus intereses, incluida la huelga (artículo 28)*”.

<sup>(154)</sup> Ver exposición de motivos en la versión refundida de la Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I, en: Comisión Europea, documento COM(2010) 748, 2010. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. en materia civil y mercantil, pp. 1-12

<sup>(155)</sup> Ver considerando 19 de la Propuesta de la Comisión Europea del 2010 sobre modificación al Reglamento Bruselas I que decía: “*Procede mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes y de evitar las tácticas litigiosas abusivas. Conviene pues que el presente Reglamento dé prioridad al tribunal designado en el acuerdo para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le somete el asunto en primer o en segundo lugar*”.

Finalmente, cuando incorporamos los principios del Derecho Ambiental Internacional a la dialéctica del derecho de tutela judicial efectiva, entonces la respuesta lógica se inclina por interpretaciones favorecedoras al derecho de la víctima y por tanto motiva interpretaciones extensivas de los fueros especiales a favor de la misma. En efecto, una interpretación restrictiva de los vínculos de conexión puede justificarse en razón de las garantías para el demandado. Sin embargo, cuando interviene la variable ambiental, cambia la lógica interpretativa de los fueros, y permite que los costes de la internacionalidad sean asumidos por el demandado, asignándole un juicio de reproche calificado.

Desde esta perspectiva, resulta incoherente que la víctima de daño civil, sufra los costes de la interpretación tradicional, estricta y en beneficio del foro domicilio del demandado, por el solo hecho de demandar un daño civil, cuando su daño coincide con el hecho generador de un daño ambiental. En efecto, la víctima de daño civil estaría sufriendo un doble perjuicio: a) el hecho de ser considerada víctima indirecta y b) el hecho de aplicársele la interpretación restrictiva de los fueros especiales.

En esta dinámica, no existiría interés para la víctima civil (especialmente para la víctima de daño transnacional) en presentar su demanda, cuando los costes de la litigación internacional superan el beneficio esperado. El único favorecido con este sistema es el contaminador.

---

(<sup>156</sup>) Ver considerando 20 de la Propuesta de la Comisión Europea del 2010 sobre modificación al Reglamento Bruselas I decía: *“También debe mejorarse la eficacia de los convenios de arbitraje a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes. Así debería suceder, en particular, cuando la sede convenida o designada de un arbitraje se encuentre en un Estado miembro. El presente Reglamento debe incluir por tanto normas especiales destinadas a evitar los procedimientos paralelos y las tácticas litigiosas abusivas en esas circunstancias. La sede del arbitraje debe ser la sede elegida por las partes o a la sede designada por un tribunal arbitral, por una institución de arbitraje o por cualquier otra autoridad directa o indirectamente elegida por las partes”*.

### **3.- Principio de soberanía sobre los recursos naturales y responsabilidad de no causar daño al medio ambiente de otros Estados o de zonas fuera de la jurisdicción nacional.**

Expresado en la Declaración de Estocolmo (<sup>157</sup>), el Principio 21º, señala:

Principio 21º: *“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional”*.

Este principio se encuentra en relación con el Principio 2º de la misma Declaración (<sup>158</sup>) y con el Principio 2º de la Declaración de Río (<sup>159</sup>), que a su vez señalan:

Principio 2º, Declaración de Estocolmo: *“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”*.

Principio 2º, Declaración de Río: *“De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites de la jurisdicción nacional”*.

Tales principios van dirigidos a los Estados. Vinculan a los órganos judiciales competentes a objeto de que conozcan de un asunto de responsabilidad por contaminación, especialmente si el asunto se refiere entra en materia de responsabilidad internacional por contaminación transfronteriza y/o transnacional.

---

(<sup>157</sup>) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en junio de 1972.

(<sup>158</sup>) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en junio de 1972.

(<sup>159</sup>) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992.

Los jueces llamados a ejercer jurisdicción no pueden declinar su competencia sin considerar las consecuencias derivadas de estos dos principios <sup>(160)</sup>.

#### **4.- Principio de cooperación internacional en materia ambiental.**

El denominado Principio de Integración de los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible, tiene una doble perspectiva: una formal y otra material. La perspectiva formal, guarda relación con el debate sobre la fragmentación judicial. La perspectiva material guarda relación con el desarrollo sostenible.

Nos interesa la primera perspectiva, porque la aproximación judicial supone la existencia de relaciones inter-normativas entre distintos regímenes, sistemas y tradiciones jurídicas. En este contexto, el principio de integración es una técnica que contribuye a la “unidad del Derecho Internacional” <sup>(161)</sup>.

Esta unidad, no podría ser posible si no se le atribuye al Derecho Internacional la capacidad de condensar e informar los principios y valores subyacentes en las normas internacionales, las cuales deben aplicarse coordinadamente. En materia ambiental, el asunto resulta claro. La perspectiva holística con la que el juez debe enfrentarse ante un problema con características ambientales, le obliga a poner en marcha un gran número de disciplinas del conocimiento. El sólo concepto “desarrollo sustentable”, ya ofrece un lenguaje integrador y cooperativo entre las disciplinas, las instituciones y los procedimientos.

---

<sup>(160)</sup> Para profundizar el análisis crítico ver: Fernández Tomás, Antonio Francisco, “El principio de la soberanía permanente sobre los recursos y riquezas naturales entre la invocación retórica y la inaplicación judicial”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009, pp. 287-314.

<sup>(161)</sup> Rodrigo Hernández, Ángel, “El principio de Integración de los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Marcial Pons, Vol. LXIV, 2, 2012, pp. 133-163.

Este es el sentido con el que debe interpretarse el artículo 27° de la Declaración de Río, cuando habla de cooperación en la aplicación del Derecho Internacional en la esfera del medioambiental.

Expresado en el Principio 24° de la Declaración de Estocolmo (<sup>162</sup>), el principio de cooperación internacional en materia ambiental señala:

Principio 24°: *“Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados”*.

Como en los casos anteriores, este principio está en relación con la Declaración de Río (<sup>163</sup>), que en su Principio 27° establece:

Principio 27°, señala: *“Los Estados y las personas deberán cooperar de buena fe y con espíritu de solidaridad en la aplicación de los principios consagrados en esta Declaración y en el ulterior desarrollo del derecho internacional en la esfera del desarrollo sostenible”*.

Este principio llamado también de “buena vecindad”, está en relación con el artículo 74° de la Carta de las Naciones Unidas, en materia de cooperación ambiental internacional (<sup>164</sup>), que señala:

Artículo 74°: *“Los Miembros de las Naciones Unidas convienen igualmente en que su política con respecto a los territorios a que se refiere este Capítulo, no menos que con respecto a sus territorios metropolitanos, deberá fundarse en el principio general de la buena vecindad,*

---

(<sup>162</sup>) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en junio de 1972.

(<sup>163</sup>) Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992.

(<sup>164</sup>) Conocido a propósito del Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros, Hungría vs. Checoslovaquia, ante la Corte Internacional de Justicia, alegada que fuere cooperación de buena fe y el desarrollo progresivo del Derecho ambiental.

*teniendo debidamente en cuenta los intereses y el bienestar del resto del mundo en cuestiones de carácter social, económico y comercial.”*

Como podemos observar, la cooperación es esencial en el desarrollo de la comunidad internacional. Una forma concreta de cooperación está relacionada con el diálogo judicial internacional. Hablamos de diálogo judicial cuando, para casos de contaminación transfronteriza y/o transnacional, el aparato judicial actúa en forma coordinada y coherente a nivel internacional (<sup>165</sup>).

Por su parte, el Derecho Internacional Privado, aborda la CJCI como un ejercicio de jurisdicción que debe resolver eficientemente los problemas de interpretación territorial entre diferentes ordenamientos jurídicos. Por su parte, las relaciones bilaterales entre países de la Unión Europea y terceros Estados no comunitarios arriesgan caer en interpretaciones territorialistas que pueden entrar en colisión con los principios del Reglamento (UE) No. 1215/2012 y en última instancia, incluso, entrar en colisión con la forma como se protegen los bienes ambientales. En efecto, terceros países no comunitarios que no se ven obligados por los reglamentos comunitarios pueden seguir otros criterios de conexión. Por esta razón creemos que es necesario interpretar el Derecho Comunitario con vocación universalista; máxime si la cooperación ha sido uno de los pilares de la integración europea (<sup>166</sup>). Por su parte, la buena fe y la solidaridad que señala el artículo 27º de la Declaración de Río, apuntan en ese sentido, y se extiende a una base de países más amplia.

En este sentido, existen numerosos instrumentos vinculantes entre países europeos.

---

(<sup>165</sup>) Fach Gómez, Katia “The Law Applicable to Cross-Border Environmental Damage: From the European National Systems to Rome II”, en *Yearbook of Private International Law*, vol. 6, 2004, pp. 291-318.

(<sup>166</sup>) Betlem, Guerit y Hondius Ewoud, “European Private Law after the Treaty of Amsterdam”, *European Review of Private Law*, Netherlands, 2001, pp. 3-20.

Tal es el caso del “Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza”<sup>(167)</sup> que se encuentra en vigor desde 1979 junto con sus 8 protocolos identificando medidas que las partes (51 Estados europeos) han adoptado para procurar limitar y en lo posible gradualmente reducir las emisiones que provocan contaminación transfronteriza. El Convenio prioriza el desarrollo de políticas y estrategias para combatir la descarga de poluciones aéreas a través del intercambio de información, consultas, investigación y monitoreo en la región Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE).

Asimismo, en el marco del “Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo” de Espoo 1991, en vigor desde 1997 <sup>(168)</sup>, tenemos que los gobiernos deben notificarse y consultarse recíprocamente sobre todos los grandes proyectos que puedan tener efectos ambientales transfronterizos adversos <sup>(169)</sup>.

Por su parte, el Convenio UNECE del Agua de Helsinki de 17 de marzo de 1992 o “Convención sobre la protección y uso de cursos de agua transfronterizos y lago internacionales” tiene como objetivo fortalecer las medidas nacionales para la protección y la gestión ecológicamente racional de aguas superficiales y subterráneas transfronterizas. Esta convención obliga a las partes a establecer cuerpos conjuntos destinados a prevenir, controlar y reducir el impacto por el uso de agua transfronterizas de forma tal que su uso sea equitativo, razonable y asegure su manejo sustentable. Así como ocurre con los casos anteriores, el Convenio incluye

---

<sup>(167)</sup> Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza de 14 de noviembre de 1979. Incorporación del Convenio mediante Decisión 81/462/CEE: Decisión del Consejo, de 11 de junio de 1981, relativa a la celebración del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.

<sup>(168)</sup> Desarrollado por el Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente (EAE) de Kyiv (Ucrania) 21 de mayo de 2003.

<sup>(169)</sup> Con propuesta de decisión del Consejo relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la convención de Espoo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, COM/2008/0132 final - CNS 2008/0052 de 11 de marzo del 2008. Actualmente el Protocolo está en vigor desde el 11 de julio del 2010.

previsiones en base a monitorio, investigación, desarrollo de consultas, sistemas de riesgo y alarmas, asistencia mutua e intercambio de información <sup>(170)</sup>.

Asimismo, la “Convención sobre los Efectos Transfronterizos de Accidentes Industriales” de Helsinki marzo de 1992 fue diseñada para proteger a las personas y al medio de accidentes industriales, a fin de prevenirlos o reducir su frecuencia y severidad, mitigando sus efectos. De esta forma el Convenio promueve la cooperación internacional entre los Estados parte, antes, durante y después del accidente industrial. Esta Convención entró en vigor el 19 de abril del 2000. La participación de Estados europeos que no forman parte de la Unión Europea se manifiesta en el acuerdo adoptado en la 3ª reunión de la Conferencia de las Partes, la que adoptó un programa de asistencia a los países de Europa del Este, el Cáucaso, Asia Central y Europa Sudoriental en la aplicación de la Convención.

Finalmente, y dentro de la política de protección al medio a través de instrumentos de cooperación vinculables entre los Estados europeos, tenemos el Convenio UNECE de acceso a la información, participación pública en la decisión y acceso a la justicia en materias ambientales de Aarhus de 25 de junio de 1998.

El Convenio de Aarhus se perfila como el acuerdo ambiental más importante adoptado entre países europeos.

## **5.- Principio de cooperación internacional en materia de jurisdicción. Convenios especiales de jurisdicción.**

El asunto se plantea para el caso de los convenios especiales de jurisdicción entre países de la Unión Europea y terceros países no comunitarios. La importancia del tema radica en la necesidad de interpretar en forma armónica y coherente las normas de CJCI del Reglamento (UE) No. 1215/2012 con las normas contenidas en

---

<sup>(170)</sup> Este Convenio es complementado por el Protocolo sobre agua y salud de Londres del 17 de junio de 1999 y por el Protocolo de Responsabilidad Civil de Kiev del 21 de mayo del 2003.



Convenios bilaterales o colectivos sobre materias especiales <sup>(171)</sup>. Así cuando el tribunal es llamado a resolver sobre su competencia judicial internacional deberá resolver en primer lugar qué normas de conflicto son las que se aplican al caso concreto.

La colisión con convenios multilaterales sobre materias particulares celebrados y suscritos por Estados miembros está regulada por el artículo 71º del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que en esta materia equivale al artículo 57º del Convenio de Bruselas de 1968 <sup>(172)</sup> y por tanto hace aplicable la jurisprudencia del TJCE recaída sobre éste último artículo.

---

<sup>(171)</sup> Ver análisis y propuesta para la coherencia del sistema en: Garau Sobrino, Federico, “La Literalidad Interpretada desde la coherencia del Sistema. Las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y los Convenios sobre materias particulares según el TJUE”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 3, número 1, 2011, pp. 270-281.

<sup>(172)</sup> Artículo 57 del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. “*El presente Convenio no afectará a los convenios en los que los Estados contratantes son partes , o lo sean en el futuro , y que , en materias específicas , regulen la competencia judicial , el reconocimiento y la ejecución de resoluciones.*”

*No prejuzga la aplicación de las disposiciones que , en materias particulares , regulan la competencia judicial , el reconocimiento o la ejecución de las decisiones y que están o estarán contenidas en los actos de las instituciones de las Comunidades Europeas o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de estos actos”.*

Artículo 71 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. “1. El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los

*Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regulen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.*

2. Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará como sigue:

a) el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado miembro que fuere parte en un convenio relativo a una materia particular, pudiera fundamentar su competencia en dicho convenio, aunque el demandado estuviere domiciliado en un Estado miembro no parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 26 del presente Reglamento;

b) las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.

Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al procedimiento de reconocimiento y ejecución de resoluciones.”

Por su parte, el TJUE ha señalado que la aprobación de normas comunitarias aplicables a los Estados miembros les priva de facultad de celebrar, en forma individual o colectiva, obligaciones con terceros Estados que puedan afectar las normas comunitarias. De esta forma, sólo la UE puede asumir, ejecutar o denunciar obligaciones contraídas con terceros países. Sin embargo, cuando existen convenios bilaterales o colectivos celebrados con anterioridad por Estados miembros, entonces estos acuerdos son plenamente aplicables y deben ser reconocidos entre las partes que los suscribieron según lo prescribe el artículo 71º del Reglamento (UE) No. 1215/2012 (artículo 57º del Convenio de Bruselas de 1968). Por otra parte, aunque exista reglas especiales contenidas en convenios específicos y aplicables al caso concreto <sup>(173)</sup>, no pueden entrar en colisión con el principio de cooperación jurídica internacional que inspira el Reglamento (UE) No. 1215/2012 y sus antecesores <sup>(174)</sup>.

Así resulta, por ejemplo, en el caso de la regulación que recae sobre el río Rin, en el que existe un convenio especial en materia de jurisdicción suscrito entre países comunitarios que también son parte del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(175)</sup>. En este caso, si no puede determinarse dónde se ha producido el hecho dañoso, se ha planteado <sup>(176)</sup> la posibilidad de que sea plenamente aplicable el “Convenio revisado para la navegación del Rin” de 17 de octubre de 1868, el que reconoce competencia judicial al primer tribunal donde se presente la demanda.

---

<sup>(173)</sup> Vid *Informe Schlosser* sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia. DO. 1979, C 59, pp. 71 y ss.

<sup>(174)</sup> Ver crítica al *Informe Schlosser*, en el que se plantea que los foros de los convenios sobre materias específicas tienen carácter subsidiario a los foros contenidos en el Reglamento (UE) No. 1215/2012.

<sup>(175)</sup> La Convención revisada para la navegación del Rhin corresponde a los primeros instrumentos internacionales ambientales. Sobre este tema ver: Brañes, Raúl, *Manual de Derecho Ambiental mexicano*. México, FCE, 2000, p. 293.

<sup>(176)</sup> Convenio revisado para la navegación del Rin, de 17 de octubre de 1868, Protocolo de 17 de octubre de 1979, arts. 34.2.c) y 35 bis. Cfr. con : Fernández Fernández, Javier, *El futuro del transporte fluvial en Europa*. Documento de Trabajo, Col. Constatino Martínez Caverio, Ed. Parlamento Europeo, número 12, Luxemburgo, 1993.

El principio de cooperación judicial señala que aún en el caso de que la demanda se presentara ante el tribunal de un país que no es parte del Convenio especial, los Estados que sí son parte del Convenio especial deberán reconocer la competencia de este tribunal, en la medida que allí se configuren los supuestos para la aplicación del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En nuestro caso, las partes de Convenio revisado para la navegación del Rin deberán reconocer la jurisdicción de un tercer Estado que no es parte en la Convención: a) en la medida que dicho tribunal aplique el Reglamento (UE) No. 1215/2012, el que también vincula a los Estados parte del Convenio especial, b) porque el mismo Convenio revisado para la navegación del Rin establece que es competente el primer tribunal donde se presente la demanda y c) por referencia expresa del artículo 71° del Reglamento (UE) No. 1215/2012 (57° del Convenio de Bruselas de 1968).

Esta interpretación cobra importancia cuando el fuero del Reglamento (UE) No. 1215/2012 que se está aplicando es aquél establecido en el artículo 4°: domicilio del demandado. En efecto, el domicilio del demandado puede o no coincidir con el lugar donde se ha producido el daño o con el lugar donde se ha dado comienzo al mismo, arrastrando la competencia judicial internacional a un foro distinto de aquél lugar donde se han materializado los hechos.

Por otra parte, cuando la sentencia dictada por un tribunal competente según un convenio especial, pretende hacerse ejecutar ante el tribunal de un Estado que no ha sido parte en este Convenio particular, entonces corresponderá aplicar las condiciones de reconocimiento establecidas en los artículos 36° y siguientes Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(177)</sup> - si el Estado es parte del Convenio Bruselas I

---

<sup>(177)</sup> Ver Artículo 33 del Reglamento (UE) No. 1215/2012: “1.-) Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno. 2.-) Cualquier parte interesada podrá solicitar, de conformidad con el procedimiento previsto en la subsección 2 de la sección 3, que se dicte una resolución en la que se declare que no concurren los motivos de denegación del reconocimiento que se recogen en el artículo 45. 3.-) Si la denegación del reconocimiento se invoca como cuestión incidental de la que depende la conclusión de un

o aplica el Reglamento (UE) No. 1215/2012 - o por las normas de reconocimiento de las sentencias extranjeras establecidas en su legislación nacional.

Como se observa, la coherencia del sistema ha supuesto la conjugación de los siguientes principios de *cooperación jurídica internacional* <sup>(178)</sup> enunciados por el propio Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(179)</sup>:

- a.- Libre circulación de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (considerando 6º);
- b.- Alto grado de previsibilidad de los foros atributivos de jurisdicción y Principio de seguridad jurídica (considerando 15º);
- c.- Buena administración de justicia (considerando 16º);
- d.- Prevención de procedimientos paralelos y de resoluciones inconciliables (considerando 21º), y
- e.- Confianza recíproca en la justicia al interior de la UE (considerando 26º).

En efecto, el Reglamento (UE) No. 1215/2012 es considerado “piedra angular” de la cooperación judicial en materia civil en la Unión Europea <sup>(180)</sup>.

---

procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer de tal cuestión”.

<sup>(178)</sup> Son objetivos de la cooperación judicial internacional en materia civil en el Tratado de Lisboa: 1. Garantizar una tutela judicial efectiva y el desarrollo de métodos alternativos de resolución de Litigios, 2. Unificar las normas de Derecho internacional Privado de los Estados miembros y 3. Aproximar las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Cfr. con : Aguilar Grieder, Hilda, “La cooperación judicial internacional en materia civil en el tratado de Lisboa”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010, pp. 308-338

<sup>(179)</sup> Artículo 81.1. Del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 65 TCE): “La Unión desarrollará una cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, basada en el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales.

*Esta cooperación podrá incluir la adopción de medidas de aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.”*

<sup>(180)</sup> Ver exposición de motivos en la versión refundida de la Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I, en: Comisión Europea, documento COM(2010) 748, 2010. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. en materia civil y mercantil, pp. 1-5.

Por su parte, la jurisprudencia del TJUE ha señalado que los Convenios bilaterales o colectivos entre Estados miembros y terceros países no pueden invocarse en las relaciones entre los Estados miembros en detrimento de los objetivos del Derecho comunitario enunciados anteriormente <sup>(181)</sup>. Asimismo, el TJUE ha ratificado su competencia para interpretar convenios internacionales ratificados por la UE, porque una vez que han entrado en vigencia forman parte del Derecho Comunitario <sup>(182)</sup>. Finalmente, los Convenios internacionales celebrados por Estados miembros con terceros países, que en principio no son competencia del TJUE, pueden llegar a serlo cuando el texto tiene por objeto una materia que siendo ejercida por los Estados, pasa con posterioridad a ser competencia de la Unión Europea <sup>(183)</sup>.

## 6.- Principio: el que contamina paga.

Expresamente referido en el artículo 191.2 del Tratado constitutivo de la UE, y recogido en el Principio 16º de la Declaración de Río <sup>(184)</sup>, este principio, señala:

Principio 16º: “*Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de que el que contamina debe, en principio, cargar con los costos de la contaminación, teniendo debidamente en cuenta el interés público y sin distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales*”.

---

<sup>(181)</sup> STJUE 4 C-533/08, asunto *TNT Express Nederland*, ap. 52. STJUE 286/86, asunto *Deserbais*, Rec. 1988, p. 4907, ap. 18. STJUE C-241/91 P y C-242/91 P, asunto *RTE e ITP*, Rec. 1995, p. I-743, ap. 84. STJUE, C-473/93, asunto *Comisión/Luxemburgo*, Rec. p. I-3207, apartado 40. STJUE, C-301/08, asunto *Bogiatzi* (de casada Ventouras), Rec. 2009, p. I-10185, ap. 19.

<sup>(182)</sup> STJUE, C-533/08, asunto *TNT Express Nederland*, ap. 60; STJUE, 181/73, asunto *Haegemann*, Rec. 1974, p. 449, aps. 3 a 6; STJUE 12/86, asunto *Demirel*, Rec. 1987, p. 3719, ap. 7; STJUE, C-321/97, asunto *Andersson y Wåkerås-Andersson*, Rec. 1999, p. I-3551, ap. 26; STJUE, C-431/05, asunto *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos*, Rec. 2007, p. I-7001, ap. 31.

<sup>(183)</sup> STJUE, C-533/08, asunto *TNT Express Nederland*, ap. 62; STJUE, 21/72 a 24/72, asunto *International Fruit Company y otros*, Rec. 1972, p. 1219, aps. 10-18; STJUE, C-379/92, asunto *Peralta*, Rec. 1994, p. I-3453, ap. 16; STJUE, C-308/06, asunto *Intertanko y otros*, Rec. 2008, p. I-4057, ap. 48; STJUE, C-301/08, asunto *Bogiatzi* (de casada Ventouras), Rec. 2009, p. I-10185, ap. 25.

<sup>(184)</sup> Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992.

El principio contaminador pagador ha venido a materializarse, tanto en normas de fondo sobre responsabilidad civil, como en normas sobre responsabilidad por daño ambiental. Asimismo proponemos que sea reconocido expresamente en normas de distribución de competencias judiciales, como ocurre en materia de legislación aplicable. Uno y otro caso (competencia judicial y legislación aplicable) hablan de la redistribución de los costes de la litigación internacional en base a criterios de justicia ambiental <sup>(185)</sup>. El principal problema asociado a la CJCI consiste en determinar la extensión del principio contaminador pagador, es decir, cuáles son los costos por los cuales debe pagar el contaminador, y si en esos costes se encuentran los costos de la litigación internacional, conocidos como cargas de internacionalidad. De esta forma, por el principio contaminador-pagador se altera el vínculo de conexión, porque opera el principio *favor laesi*, es decir se crea un criterio establecido en razón de la especial situación que tiene el demandante.

El profesor SMETS <sup>(186)</sup> ha señalado que el asunto no ha sido pacífico en la doctrina, ya que la mayor o menor extensión del principio contaminador pagador hará más o menos viable las medidas de prevención, manejo, reducción y garantías de no repetición en favor del demandante. Por otro lado, estimamos que el principio incluye para el demandado el deber de asumir los costes privados, y los costes de la gestión pública judicial (y administrativa) en la recuperación del medio ambiente. En esto consiste realmente la carga de la internacionalidad, y por eso debe recaer sobre el

---

<sup>(185)</sup> Sobre el sentido y alcance del Principio quien contamina paga en materia de Competencia judicial civil internacional y de legislación aplicable, revisar y confrontar a los siguientes autores: Castroviejo Bolívar, Miguel “Quien contamina paga: un paso decisivo en su aplicación con la Directiva sobre responsabilidad ambiental”, *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, número 65, 2004, pp. 29-39. Thomas Larson, Eric, “Why environmental liability regimes in the United States, the European Community and Japan have grown synonymous with the polluter pays principle”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 38, número 2, 2004, pp. 541-575. Pirotte, Charles, “La directive 2004/35/CE sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux”, *L’Observateur de Bruxelles*, número 61, 2005, pp.viii-xi. Montenegro Arriagada, Sergio, Hervé, Dominique y Durán Medina, Valentina, *Los Tratados Ambientales: principios y aplicación en Chile*. Edic. Edición: Marie Claude Plumer Bodin. 1a. ed. Santiago de Chile: CONAMA, 2001.

<sup>(186)</sup> Smets, Henri, “Les exceptions admises au principe pollueur payeur The exceptions to the polluter-payer principle”, en *Droit et Pratique du Commerce International*, T. 20, número2, 1994, p. 211 y ss.

demandado de contaminación ambiental y sobre el demandado de daños civiles directos asociados (<sup>187</sup>).

## **7.- Principio de la responsabilidad común pero diferenciada de los Estados.**

Enunciado en el Principio 7º de la Declaración de Río y correspondiente con el Principio 23º de la Declaración de Estocolmo, señalan:

Principio 7º. Declaración de Río: *“Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen”.*

Principio 23º. Declaración de Estocolmo. *“Sin perjuicio de los criterios que puedan acordarse por la comunidad internacional y de las normas que deberán ser definidas a nivel nacional, en todos los casos será indispensable considerar los sistemas de valores prevaletentes en cada país y la aplicabilidad de unas normas que, si bien son válidas para los países más avanzados, pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en desarrollo”.*

Este principio es una manifestación de la *equidad* en el Derecho Internacional general. Existen Convenciones que han incluido este principio con carácter vinculante (<sup>188</sup>). Tiene especial relevancia en las relaciones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, en lo referente a la asunción de responsabilidades ambientales. En lo relacionado a la CJCI, juega un rol importante en la medida que Estados desarrollados que siguen la doctrina del *forum non conveniens*, y en cuyo mérito se declaran incompetentes de daños ambientales producidos en países en vías de

---

(<sup>187</sup>) A modo de ejemplo las cinco primeras empresas transnacionales reunidas: General Motors, Daimler Chrysler, Ford Motors, revistas Wal-Mart y Mitsui reportaron ingresos en 1998 del orden de: U\$ 708,9 billones de dólares. Fuente: Peter Utting, 2000 según *Fortune*, 1999 y el Banco Mundial, 1999b, publicado en UNRISD, *Mains visibles: assumer la responsabilité du développement social*, United Nations Research Institute for Social Development, Genève 2000.

(<sup>188</sup>) Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono de 1985 y el Protocolo de Montreal sobre Sustancias que agotan la capa de ozono de 1987; Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992 y sus Protocolos.

desarrollo. En efecto, es un hecho conocido que la inversión extranjera es promovida en los países del tercer mundo y en los países en vía de desarrollo a través del mantenimiento de legislaciones ambientales débiles. Los incidentes de competencia por negativa de jurisdicción en los países más desarrollados, permite el *dumping ambiental*.

Por esta razón, cuando un juez (preferentemente aquél del país del cual proviene la inversión extranjera) realiza un juicio sobre su competencia judicial internacional, debe tener también en consideración este principio, y sus conceptos: “recursos compartidos”, “patrimonio común de la humanidad” e “interés común de la humanidad”.

## **8.- Conclusiones.**

1.- En el Capítulo I de este trabajo, abordamos el problema de la seguridad jurídica de modo tal que la interpretación del título de jurisdicción no debía adolecer de falta de certeza y de falta de previsibilidad, afectando de esta manera el sistema de distribución de competencias judiciales europeo.

Sin embargo, al no existir una norma especial sobre CJCI en materia ambiental, la interpretación del fuero en favor de la víctima del daño no debe convertirse en un problema de seguridad jurídica. En efecto, en nuestro caso, optamos por privilegiar a una de las partes en la relación jurídica internacional. Esa opción se ha fundado en las características especiales del demandante de daños ambientales y de daños civiles asociados. En efecto, no puede alegarse falta de seguridad jurídica si el sistema es coherente con los principios de protección ambiental establecidos tanto por el constituyente como por el legislador comunitario.

Una interpretación extensiva del título de jurisdicción establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, a favor de la víctima de daño ambiental, resulta coherente con el sistema de protección ambiental de la UE y no afecta la previsibilidad del sistema.



Por tanto, el principio de seguridad jurídica y de previsibilidad en el sistema de distribución de competencias no debe fundar interpretaciones restrictivas cuando tales interpretaciones signifiquen asumir un coste de litigación internacional mayor al que la víctima de daño ambiental está en condiciones de soportar.

2.- En este capítulo hemos realizado una aproximación a los principios que informan el sistema de protección ambiental internacional, recogidos en convenios internacionales. Hemos advertido que muchos de ellos no llevan asociada una garantía de tutela judicial. En este sentido, los principios descritos obligarán a los Estados sólo en la medida que se suscriben convenios internacionales, como los referidos a lo largo de esta Parte, o en la medida que puede acreditarse la configuración de una costumbre internacional.

A nivel interno o nacional, existe una proyección de la situación que existe a nivel internacional relacionado con la falta de garantías judiciales.

Por esta razón, abordamos el derecho de tutela judicial efectiva, como una norma fundamental íntimamente asociada al ejercicio de la función jurisdiccional, de la que nos venimos haciendo cargo a lo largo de este trabajo.

Es así como desarrollamos un discurso que tiene como base la vinculatoriedad de este derecho fundamental y su relación directa con los preceptos establecidos en cuerpos normativos comunitarios sobre protección ambiental.

Por esta vía, ha posible encontrar el fundamento normativo para un eventual *forum necessitatis*, apoyar el debate a favor de un *forum actoris*, o incluso hacer un ejercicio en base al principio *favor laesi* para casos que envuelven daños ambientales.

En efecto, la tutela judicial efectiva está en estrecha relación con las consideraciones que se proponen para la flexibilización del fuero por delitos y cuasidelitos civiles a favor de la víctima de daño ambiental.

3.- Existen principios ambientales que están recogidos en cuerpos normativos de Derecho Internacional Privado. De todos los principios analizados tres de ellos están positivados en el Derecho comunitario:

- a) cautela y acción preventiva,
- b) corrección en la fuente misma y
- c) quien contamina paga.

Esta positivización se encuentra recogida en los considerandos 24º y 25º y en el artículo 7º del Reglamento 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

Por su parte, no existe un reconocimiento similar en forma expresa en el Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Al igual que su predecesor, el Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, tampoco se establecen normas de competencia especial para casos de daños ambientales.

Consecuente con la experiencia del entonces Tribunal de Justicia de las comunidades europeas, tenemos que a la fecha de dictación del Reglamento 44/2001 (Bruselas I), sólo había llegado al Tribunal de Luxemburgo un solo conflicto de competencia internacional: el asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* (STJCE C-21/76). Esta circunstancia pudo haber influido en que la fecha de la dictación del Reglamento Bruselas I no se incorporara un fuero especial para daños ambientales. Sin perjuicio de lo anterior, hasta esta fecha, y con la dictación del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, tampoco existe innovación sobre la materia.

4.- Sin perjuicio de lo anterior, a nivel de la Unión Europea, existe una evolución en el reconocimiento y positivización de los principios de protección ambiental.

Tales principios están recogidos en cuerpos comunitarios tales como el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Estos principios guardan conformidad con los principios del Derecho Internacional

del Medio Ambiente, señalados anteriormente. Por su parte, el Reglamento 864/2007 (Roma II), que es el cuerpo normativo más avanzado sobre la materia da cuenta de esta evolución.

Por estas razones y aún en el caso de no existir una norma expresa que establezca un fuero especial para delitos y cuasidelitos ambientales, es posible y es coherente con el sistema de protección ambiental que se ha dado la Unión Europea, el hecho de mantener una interpretación del fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 acorde con la mayor protección al medio ambiente.

En ese mismo sentido, se encuentra nuestra inclinación por el favorecimiento a la víctima de daño civil asociado a un daño ambiental, porque a nivel de principios no existe distinción entre ambas clases de víctima.

## CAPÍTULO III

### SISTEMA EUROPEO DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA DAÑOS CIVILES ASOCIADOS A DAÑOS AMBIENTALES

#### *Sumario:*

1.- De la obligación internacional extracontractual por daño ambiental. 2.- De la determinación del foro en razón de un delito o de un cuasidelito civil. Crítica desde la noción de “obligación extracontractual”. 3.- Cooperación judicial y cooperación administrativa para el ejercicio de acciones civiles internacionales por daño ambiental. 4.- Lo “delictual y cuasidelictual” en el Reglamento (UE) No. 1215/2012. 5.- La “proximidad razonable”: marco para la categorización de los fueros de competencia judicial internacional. 5.- Conclusiones.

---

#### **1.- De la obligación internacional extracontractual por daño ambiental.**

Analizados los principios del sistema de CJCI desarrollados anteriormente, corresponde en este capítulo abordar el funcionamiento del sistema propiamente tal. En efecto, modelo para la distribución de competencias judiciales, el sistema europeo también es coherente con una mayor receptividad a los principios internacionales de protección ambiental. Sin embargo, la falta de una normativa especial, nos obliga a analizar las implicancias y connotaciones del daño ambiental en el sistema general de competencias judiciales para obligaciones extracontractuales.

La proclamada “identidad europea”, necesita de un sistema jurídico unificado. Sin embargo, este presupuesto básico de unidad se enfrenta con otro presupuesto sobre el cual se ha estructurado la comunidad europea: la pluralidad <sup>(189)</sup>. En este

---

(<sup>189</sup>) Wilhelmsson, Thomas, “Private Law in the EU: Harmonised or Fragmented europeanization”, *European Review of Private Law*, 2002, pp.77-94. De Miguel Asensio Pedro Alberto, “El futuro del Derecho Privado uniforme en la unión europea: Nuevas tendencias y retos”, *Spanish Yearbook of International Law*, Vol. XI, 2005, pp. 1-25.

sentido la pluralidad de culturas jurídicas coexistiendo en la Unión Europea, es reconocida en el artículo 6.3º del Tratado constitutivo de la UE <sup>(190)</sup>.

Por otro lado, la evolución del Derecho comunitario ha generado una política de consensos y acuerdos sobre mínimos, cuya dinámica no es ajena al TJUE <sup>(191)</sup>. De aquí la importancia de los conceptos autónomos, que siendo una minoría relativa en comparación con los conceptos y definiciones nacionales termina demostrando esta política de consensos.

El TJUE ha entendido que las obligaciones extracontractuales son una categoría que, en principio, envuelve todas las relaciones jurídicas no contractuales <sup>(192)</sup>. Desde esta perspectiva el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 se aplica tanto a la responsabilidad extracontractual civil como a la responsabilidad extracontractual ambiental, entendiendo que esta última no está exceptuada de la aplicación del Reglamento, según se desprende del artículo 1º numerales 1 y 2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(193)</sup>, que señalan:

---

<sup>(190)</sup> Artículo 6.3. *Tratado Constitutivo de la UE*: “Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”.

<sup>(191)</sup> Sobre las relaciones entre el Derecho internacional privado y el Derecho comunitario, en materia del orden de las familias, ver: González Beilfuss, Cristina, “Relaciones e interacciones entre Derecho comunitario, Derecho internacional privado y derecho de familia europeo en la construcción de un espacio judicial común”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, T.IV, 2004, pp.117-190.

<sup>(192)</sup> Así ha sido reconocida en nutrida jurisprudencia del TJUE, entonces TJCE, en: STJCE C-189/87 Rec. p. 5565 asunto *Kalfelis*. STJCE 261/90 asunto *Reichert vs. Dresdner Bank (II)*, C-51/97 Rec. p. I-6511 asunto *Réunion européenne y otros vs. Consolidated Metallurgical Industries y otros*, as. C-96/00 asunto *Gabriel*, STJCE C-334/00 asunto *Tacconi*, STJCE C-167/00 caso *Henkel*. STJCE C-261/90, Rec. p. I-2149, apartado 15-16, asunto *Reichert y Kockler*.

<sup>(193)</sup> En el mismo sentido que el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, se encontraba el Reglamento 44/2001 Bruselas I, y se encuentran actualmente los Reglamentos N° 864/2007 Roma II y N° 593/2008 Roma I. Valoración sobre las semejanzas de los conceptos en todos los cuerpos normativos mencionados en: Francq, Stephanie, “Les champs d'application (matériel et spatial) dans les textes de référence. De la cohérence terminologique à la cohérence systémique. Faillon, Lagarde, Poillot (Dirs.), *La matière civile et commerciale socle d' un code européen de droit international privé*, París, 2009, pp.35-68. De Miguel Asensio, Pedro A., “El régimen comunitario relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales”, *Revista Española de Seguros*, número 140, 2009, pp. 695-726.

“1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera ni administrativa, ni a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (*acta iure imperii*)”.<sup>(194)</sup>

2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

- a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen relaciones con efectos comparables al matrimonio según la ley aplicable;
- b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores, y demás procedimientos análogos;
- c) la seguridad social;
- d) el arbitraje;
- e) las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;
- f) los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte.”<sup>(195)</sup>

Apoya esta idea, el hecho que el propio Reglamento (UE) No. 1215/2012 como su antecesor, el Reglamento 44/2001 Bruselas I, han regulado materias no calificables como “civiles” *strictu sensu* (tal es el caso de la competencia en materia de contratos individuales de trabajo) <sup>(196)</sup>. No habiéndose establecido por el Reglamento (UE) No. 1215/2012 un foro de competencia especial para el daño extracontractual ambiental, y encontrándonos con la noción genérica de delito o cuasidelito civil que enuncia el artículo 7.2, entendemos que, tanto daño civil *strictu sensu* como daño ambiental, están comprendidos en la especialidad del fuero aplicable a delitos y cuasidelitos.

Por su parte, la extensión del concepto “obligación extracontractual” asumida por el Reglamento (UE) No. 1215/2012 es de tal amplitud que, la elaboración de un

---

<sup>(194)</sup> En este número, el predecesor artículo 1.1. del Reglamento 44/2001 Bruselas I señalaba: “1. El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa”. Volveremos sobre este punto en el epígrafe sobre Cooperación judicial y cooperación administrativa para el ejercicio de acciones civiles internacionales por daño ambiental.

<sup>(195)</sup> En este número, el predecesor artículo 1.2. del Reglamento 44/2001 Bruselas I señalaba: “2. Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento: a) el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales, los testamentos y las sucesiones; b) la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos; c) la seguridad social; d) el arbitraje.”

<sup>(196)</sup> Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012. Sección 5.

concepto autónomo por parte del TJUE, ha incluido en esta categoría a todas las situaciones que no corresponden a un vínculo contractual en sentido estricto <sup>(197)</sup>, usando una técnica de exclusión caso a caso <sup>(198)</sup>, que ha dado como resultado la apertura de la dimensión extracontractual <sup>(199)</sup>.

Como el TJUE, no ha trabajado un concepto autónomo de obligación extracontractual en base a los elementos de la obligación, sino como un concepto remanente de las materias contractuales; es que nos encontramos con que el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 se aplica a “todas las relaciones no contractuales”. Así, se genera la duda legítima sobre la extensión (y en contrapartida la limitación) que afecta a las materias ambientales por reminiscencia de la dimensión civil.

Desde nuestra perspectiva, el problema tiene dos facetas.

*Primero*, la obligación extracontractual ambiental debe diferenciarse de la obligación extracontractual civil, reconociendo que tanto objeto como fin se fundan en la distinta naturaleza del daño (en un caso daño ambiental y en otro caso daño civil). De aquí que, habiendo señalado el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 que: “En materia delictual o cuasidelictual, (podrá demandarse) ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el *hecho dañoso*”. No podemos hacer coincidir las categorías de hechos dañosos (civiles y ambientales) aun cuando el hecho generador hubiera sido el mismo.

---

<sup>(197)</sup> Ver las restricciones a la responsabilidad contractual en STJCE C-96/00, asunto *Rudolf Gabriel* y en STJCE C-167/00, asunto *Verein für Konsumenteninformation y Karl Heinz (Henkel)*.

<sup>(198)</sup> Ver STJCE C-334/00, asunto *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA, conforme a la cual*, el TJUE, ha señalado que la acción mediante la cual se invoca la responsabilidad “precontractual” del demandado, caracterizada por la inexistencia de compromisos definitivos y representada por negociaciones e infracción a las normas jurídicas, también está comprendida en la materia delictual o cuasidelictual.

<sup>(199)</sup> Ver STJCE, C-51/97, asunto *Réunion européenne SA y otros*. Sobre asegurador subrogado al destinatario de mercancías que han sufrido daños en el transporte marítimo y terrestre. El TJUE, ha señalado que incluso terceros subrogados en los derechos del acreedor, por un contrato incumplido, gozan de una acción extracontractual contra el primitivo deudor. Críticas a la imprecisión del concepto en: a) Palao Moreno, Guillermo, *La Responsabilidad Civil por Daños al Medio Ambiente*, Monografía Universitat de València, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1998, pp. 47-48. Betlem, Gerrit, *Civil Liability for Transfrontier Pollution. Dutch Environmental Tort Law in International cases in the light of Community Law*, Londres y otros, Graham & Trotman Martinus Nijhoff, 1993, pp.89-91.

Esto que en principio parece elemental, resulta no serlo si el TJUE casa los daños civiles a los daños ambientales, considerando que los primeros son consecuencia de los segundos, cuando en realidad obedecen a categorías muy distintas. Más adelante veremos las diferencias que existen entre daños ambientales, daños ecológicos y daños civiles <sup>(200)</sup>.

*Segundo*, en materia de CJCI, se aborda con mayor claridad la compleja situación del daño internacional (especialmente cuando tiene las características de transnacional) gracias a la distinción entre hecho generador y resultado dañoso. Mal podría desentenderse esta diferencia precisamente allí donde presta mayor utilidad: en la diferencia competencial por concurrencia de daños civiles y daños ambientales. En efecto, la teoría de la responsabilidad extracontractual difiere, en este punto, con la dinámica propia del Derecho Internacional Privado, tanto para la determinación del foro competente como para la determinación del Derecho aplicable.

En nuestro caso, la teoría de la competencia judicial internacional reconoce la disociación entre hecho generador y resultado dañoso. Por su parte, en la teoría de la responsabilidad extracontractual el hecho generador está asociado a la acción del sujeto imputable. Así, la responsabilidad extracontractual de fondo ha convertido el problema de imputación objetiva (origen del daño) en un problema de imputación subjetiva (sujeto responsable).

Por otra parte, reconociéndose las diferencias entre daños civiles y daños ambientales, el tratamiento conjunto de ambas categorías de daño ha dado como resultado un tratamiento conjunto de todos los hechos generadores y de todos los resultados dañosos. El producto ha sido la simplificación de las relaciones causa – efecto. Así, nace la idea de que los daños civiles son una categoría secundaria y derivada del daño ambiental.

---

<sup>(200)</sup> Ver acápite 2 del Capítulo III de la Segunda parte de este trabajo.



Todo lo anterior, sólo ha venido a complicar la determinación del foro competente, porque el juez llamado a pronunciarse sobre la extensión de su competencia civil se ve en la necesidad de determinar la extensión del daño ambiental. En este caso, estimamos que el juez realiza un juicio que resulta propio de responsabilidad extracontractual de fondo, más que de atribución competencial.

Pero, ¿a qué puede atribuirse la falta de tratamiento competencial diferenciado? Quizás al hecho de que el TJUE no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre muchos casos en los que se vinculen daños civiles y daños ambientales. En efecto, salvo el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* <sup>(201)</sup>, el TJUE sólo se ha pronunciado sobre casos que podemos calificar de daños civiles *strictu sensu*.

En tales casos, el TJUE ha visto la necesidad de establecer límites a la regla de ubicuidad que nació en el asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* para el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012. En efecto, en tales casos, y no existiendo más que daños civiles en juego, resulta lógica la emblemática afirmación realizada por el entonces Tribunal de Justicia, conforme a la cual la regla de CICI establecida en el número 3º del artículo 5º (del entonces aplicable Convenio de Bruselas de 1968), que señalaba que: [el artículo no podía interpretarse] “...de manera tal que autorice a un demandante que invoque un daño que afirme ser la consecuencia del perjuicio sufrido por otras personas, víctimas directas del hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho ante los órganos jurisdiccionales del lugar en el que el propio demandante haya experimentado el daño en su patrimonio” <sup>(202)</sup>.

---

<sup>(201)</sup> STJCE C-21/76, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* .

<sup>(202)</sup> STJCE 220/88, asunto *Dumez Bâtiment y Tracoba vs. H. Landesbank*. Ratificada posteriormente por varias sentencias entre las que destaca STJCE C-51/97 asunto *Réunion européenne SA y otros*. Doctrinas que en general se corresponden con las limitaciones establecidas en STJCE C-364/93 *Marinari*.

En el caso señalado, la distinción entre víctimas directas y víctimas indirectas se justifica por referirse a una misma clase de daños: daños civiles. Sin embargo, cuando existen daños civiles y daños ambientales en juego, entonces debemos establecer algunas diferencias.

A modo de ejemplo, y a propósito de medidas provisionales, si consideramos las diferencias que existen entre el hecho generador y el resultado dañoso, entonces se pueden ilustrar distintas conexiones. En efecto, como se conoce, desde la perspectiva civil, las medidas provisionales y entre ellas las medidas cautelares civiles, no guardan relación con las medidas provisionales ni cautelares en materia ambiental. En efecto, serán medidas cautelares civiles: la prohibición de celebrar actos o contratos, secuestro de la cosa litigiosa, nombramiento de interventores o retención de bienes determinados, entre las más importantes. En tanto que serán medidas cautelares ambientales: la realización de un estudio previo de impacto ambiental, la elaboración de un plan de manejo ambiental preventivo, o la elaboración de un plan para una situación de crisis, entre los más importantes.

Como se observa las medidas cautelares ambientales corresponden en general corresponden a obligaciones de hacer o de no hacer. En general serán medidas de protección ambiental, aquellas que involucren la tutela y protección de: a) intereses económicos, políticos y sociales en el área; b) la funcionalidad y calidad de los elementos del ecosistema; c) el patrimonio cultural y arqueológico asociado; y d) el control de las especies vegetales y animales amenazadas; entre los más importantes.

Por estas razones, es conveniente plantearse las diferentes medidas provisionales que pueden reclamar competencia judicial ante tribunales de distintos países.

Hasta ahora, el TJUE han dado una amplia interpretación a las medidas cautelares, considerándolas obligaciones extracontractuales. De esta forma, las medidas cautelares han gozado del fuero especial señalado en el artículo 7.2 del

Reglamento (UE) No. 1215/2012. Así se desprende de la jurisprudencia del artículo predecesor, esto es, del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I <sup>(203)</sup>.

De todo lo anterior resulta que, no es necesario que un daño se materialice para que se comprenda que está incluido en la expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso”. El lugar donde se practicará una medida diferirá según si el daño es civil o ambiental, y aún si se ha materializado o es potencial. Por tanto, el tribunal ante el cual se solicita una orden cautelar civil no podría excusar su competencia a pretexto de que se acredite una relación de causa-efecto, entre un daño ambiental y un daño ambiental.

Finalmente, y no obstante la libre circulación de las resoluciones sobre medidas provisionales, el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 presenta un matiz en materia de medidas cautelares <sup>(204)</sup>. En el caso de las medidas cautelares se prohíbe la circulación de las medidas ordenadas por un tribunal distinto al que es competente para conocer sobre el fondo <sup>(205)</sup>. De otro modo, las medidas sólo producirán efecto en el lugar donde se hayan dictado, a objeto de evitar el *forum shopping*. Sin perjuicio de todo lo anterior, deberá primar el principio de

---

<sup>(203)</sup> Ver STJCE C-167/00, asunto *Verein für Konsumenteninformation y Karl Heinz (Henkel)*, apartado 50, en lo relativo a medidas preventivas, en la que señala que estas pueden ser formuladas aún en el marco de las cláusulas abusivas denunciadas por los consumidores.

<sup>(204)</sup> Asimismo se esbozó desde temprano en la Propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I. Ver exposición de motivos en la versión refundida de la Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I, en: Comisión Europea, documento COM (2010) 748, 2010. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. en materia civil y mercantil, p.10.

<sup>(205)</sup> Ver Artículo 2, literal a) inciso primero: “A los efectos del presente Reglamento: a.-) por «resolución» se entenderá cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso. Ver Artículo 2, literal a) inciso segundo que complementa señalando: “A los efectos del capítulo III, «resolución» engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares acordadas por un órgano jurisdiccional competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. No se incluyen las medidas provisionales y cautelares que el órgano jurisdiccional acuerde sin que el demandado sea citado a comparecer, a no ser que la resolución relativa a la medida haya sido notificada al demandado antes de su ejecución.”

cooperación judicial entre el tribunal de fondo y el tribunal llamado a ordenar una medida provisional y cautelar <sup>(206)</sup>.

## **2.- De la determinación del foro en razón de un delito o de un cuasidelito civil. Crítica desde la noción de “obligación extracontractual”.**

La naturaleza de la obligación extracontractual a la que hace referencia el fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 obedece a una mala opción por la noción clásica - establecida en las Institutas de Gayo - que distingue entre obligaciones *ex delicto* y *quasi ex delicto*. En efecto, tanto el Reglamento (UE) No. 1215/2012, como su predecesor el Reglamento 44/2001 Bruselas I, escogieron una nomenclatura que se utiliza para las fuentes de las obligaciones <sup>(207)</sup>; en circunstancias que se pudo haber optado otro criterio para la atribución de competencia basado en un modelo atributivo de responsabilidad, que distinguiera entre responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual.

Referirse a delitos y a cuasidelitos civiles significa haber optado por un modelo de responsabilidad francés <sup>(208)</sup> con influencias en la pandectística alemana del siglo XIX. Como resultado tenemos un tratamiento sistemático de la relación

---

<sup>(206)</sup> La propuesta de modificación al Reglamento 44/2001 Bruselas I señalaba en el inciso segundo del literal a), del artículo 2: “A los efectos del capítulo III el término «resolución» engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares ordenadas por un tribunal competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. Incluye asimismo las medidas ordenadas sin que el demandado fuere citado a comparecer y que estuvieren destinadas a ser ejecutadas sin necesidad de notificación previa al demandado, siempre que este tuviere derecho a impugnar posteriormente la medida en virtud del Derecho nacional del Estado miembro de origen”.

<sup>(207)</sup> Aedo Barrena, Cristian, “Los requisitos de la *lex aquilia*, con especial referencia al daño. Lecturas desde las distintas teorías sobre el capítulo tercero”, *Revista Ius et Praxis*, Vol. 15 número 1, 2009, pp.311-337. Medellín, Carlos, Lecciones elementales de Derecho Romano, Temis, Bogotá, 1966, pp.117-122.

<sup>(208)</sup> Mazeaud, Henri, Mazeaud, León, Mazeaud Jean, y Tunc, André, *Traité Théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, T.I., Montchrestien, 6º edición, Paris, 1965. Traducción castellana de la 5º edición francesa por L. Alcalá-Zamora, *Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1963.

contractual, dejando como categoría subsidiaria y remanente a la relación extracontractual, la cual es tratada exclusivamente desde sus elementos.

Consideramos que esta perspectiva también influye en la determinación del foro competente para obligaciones extracontractuales (o delictuales/cuasidelictuales en la nomenclatura del Reglamento (UE) No. 1215/2012) en la medida que la dinámica de la CJCI trabaja sobre vínculos de conexión que están íntimamente relacionados con los elementos de la responsabilidad de fondo, uno de los cuales es el daño.

Esta forma de abordar el fuero adolece de ciertos defectos. Tal es el caso de trasponer analógicamente la relación de causalidad que existe entre el acto y el daño extracontractual a las categorías competenciales de hecho generador y de resultado dañoso, en circunstancias que estas dos últimas no admiten relación que no sea para determinar la extensión de la competencia a los daños directos e indirectos.

En efecto, con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht que creó la UE en el año 1993 <sup>(209)</sup> concluyó un proceso iniciado en la década de los años 80 que vino a establecer un régimen de responsabilidad ambiental europeo basado en la prevención y en la reparación de los daños medioambientales o ecológicos. Este sistema que es de naturaleza administrativa y que se apoya en el Derecho Público dejó para el futuro la dictación de un instrumento comunitario en el que se trate la responsabilidad civil por daños a la salud, al patrimonio o a los intereses económicos de los particulares.

Por su parte, esta forma de separar el tratamiento de los daños, distinguiéndolos entre daños civiles y daños ambientales se evidencia en la Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación

---

<sup>(209)</sup> Aunque la personalidad jurídica internacional de la UE no se concretó sino hasta el Tratado de Lisboa de 2007 vigente desde el 1º de diciembre de 2009

con la prevención y reparación de daños medioambientales (<sup>210</sup>), que en su Considerando 14º señala:

*“No es posible subsanar todas las formas de daño medioambiental mediante el mecanismo de la responsabilidad. Para que ésta sea eficaz, es preciso que pueda identificarse a uno o más contaminantes, los daños deben ser concretos y cuantificables y es preciso establecer un vínculo causal entre los daños y los contaminantes identificados. Por consiguiente, la responsabilidad no es un instrumento adecuado para abordar la contaminación de carácter extendido y difuso, en la cual es imposible asociar los efectos medioambientales negativos con actos u omisiones de determinados agentes individuales”.*

Este razonamiento quizás viene a justificar el considerando siguiente (Considerando 15º ), que limitando el ámbito de competencia material de la Directiva, viene a excluir los daños patrimoniales, señalando:

---

(<sup>210</sup>) Para profundizar en el sistema europeo de responsabilidad ambiental establecido en la Directiva 2004/35/CE ver: Valencia Martín, Germán, “El impacto (favorable) de la Directiva 2004/35/CE en el sistema español actual de responsabilidad por daños ambientales”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005, pp. 109-183. Fogleman, Valerie, “The environmental liability directive”, *Environmental Liability*, número 3, 2004, pp. 101-114. González Vaqué, Luis “La responsabilidad medioambiental en la Unión Europea: la Directiva 2004/35/CE”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, número 11, 2006. [Disponible en: [http://www.reei.org/reei%2011/L.GonzalezVaque\(ree11\).pdf](http://www.reei.org/reei%2011/L.GonzalezVaque(ree11).pdf)] Revisado 23 de julio del 2012. Jordano Fraga, Jesús, “La responsabilidad por daños ambientales en el Derecho de la Unión Europea: análisis de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre Responsabilidad medioambiental”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005, pp. 13-49. Lozano Cutanda, Blanca, “La responsabilidad por daños ambientales: la situación actual y el nuevo sistema de responsabilidad de Derecho público que introduce la Directiva 2004/35/CE”, *Justicia Administrativa*, número 26, 2005, pp. 5-34. Micciché, Rosanna, “Nuova direttiva europea in materia di responsabilità ambientale”, *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, número 5, 2003, pp. 917-922. Orteu Berrocal, Eduardo y Márquez Molero, Rafael, “La transposición de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005, pp. 51-66. Ruiz de Apodaca Espinosa, Ángel, “Garantías financieras y de reparación del daño ambiental establecidas en la Directiva 2004/35/CE”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005, pp. 185-207. Ferreri, Andrea, “La direttiva n. 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale”, *Diritto comunitario e degli Scambi internazionali*, número 2, 2005, pp. 337-368. Pardo Leal, Marta, “La futura Directiva sobre responsabilidad ambiental de la responsabilidad civil a la responsabilidad administrativa”, *Gaceta Jurídica de la UE*, número 225, 2003, pp. 100-112.

*“La presente Directiva no se aplica a las lesiones causadas a las personas, a los daños causados a la propiedad privada o a ningún tipo de pérdida económica ni afecta a ningún derecho relativo a este tipo de daños.”*

No estamos de acuerdo con las aseveraciones del Considerando 14º de la Directiva 2004/35/CE; las consideramos de cuidado porque en materia de CJCI no existe una definición de hecho dañoso y porque la definición de daño ambiental nos obliga a remitirnos a la Directiva 2004/35/CE. Por lo anterior, debe considerarse que la hipótesis en la que se funda el Considerando 14º de la Directiva 2004/35/CE se refiere sólo al caso de “contaminación de carácter extendido y difuso”, al que se ha pretendido aplicar una teoría añeja de causalidad que no guarda relación con las nuevas teorías de causalidad. Por otro lado, no es cierto que la contaminación impida identificar al agente individual que la ha causado. La ciencia puede identificar hasta el elemento que contaminó originariamente un ecosistema. Aseverar que en la responsabilidad extracontractual los daños extendidos y difusos no permiten determinar al agente que los origina, equivale a decir que en la responsabilidad extracontractual el sistema arroja agentes impunes, cosa que no es real. La teoría de la responsabilidad extracontractual ha abordado desde antiguo el problema de la solidaridad en la comisión y en la reparación de los delitos, ha alterado la carga de la prueba estableciendo presunciones de culpabilidad y ha establecido categorías jurídicas para el daño a objeto de propender a una reparación integral. En suma, la mayor fiscalización estatal, el establecimiento de procedimientos administrativos participativos y la adopción de medidas preventivas y reparatorias, que son aportados por la Directiva 2004/35/CE, no pueden oponerse a la vía civil extracontractual, porque ambas deben ser *complementarias* en la reparación integral del daño <sup>(211)</sup>.

---

<sup>(211)</sup> Para complementar los estudios sobre el sentido y alcance de la Directiva 2004/35/CE Cfr.: Para complementar los estudios sobre el sentido y alcance de la Directiva 2004/35/CE Cfr.: Aguilera Rull, Ariadna y Azagra Malo, Albert “Transposición de la directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en Alemania y en España”, *InDret*, número 3, Barcelona, 2007, pp. 1-16. Alenza García, José Francisco, “El régimen público de responsabilidad por daños ambientales en la legislación española y en la Directiva de Responsabilidad Ambiental”. *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005, pp.67-107. Bauw, E., “Richtlijn 2004/35/EG: vernieuwend, maar ook uitvoerbaar?”. *Nederlands tijdschrift voor Europees recht*, Número 12, 2004,

Por otro lado, entender la responsabilidad civil como aquella que es “causada” en un daño ambiental, supondría un doble análisis de los vínculos de conexión y necesitaría de un doble juicio sobre los elementos de la responsabilidad, a saber: por una parte, los vínculos de la responsabilidad ambiental, e inmediatamente, los vínculos de la responsabilidad civil derivada. De esta forma, el tratamiento unificado a través del llamado “Derecho de daños” (en oposición al “derecho de las responsabilidades”) que ha seguido el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, puede inducir a errores <sup>(212)</sup>.

En efecto, el Derecho de daños es más propio de la responsabilidad de fondo que del Derecho Procesal. El Derecho de daños significó un aporte en la unificación del tratamiento de las responsabilidades, yendo más allá de la teoría de la antijuridicidad arribando en la teoría de la imputación objetiva (*objektive*

---

pp. 344-347. Betlem, Gerrit, “Scope and Defences of the 2004 Environmental Liability Directive: Who is Liable for What?”. *ERA – Forum*, número 3, 2005, 376-388. Buckens, Marie-Martine, “Responsabilité environnementale: les limites de la future directive communautaire”. *Europe Information Service*, Bruselas, 2003. Chamorro, Irene y Orteu Berrocal, Eduardo, “Un nuevo régimen de responsabilidad comunitario por daños al medio ambiente: la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales”, *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, número 65, 2004, pp. 19-28. Clarke, Chris, “The Proposed EC Liability Directive: Half-Way Through Co-Decision”, *Review of European Community & International Environmental Law*, Vol. 12 número 3, 2003, pp. 254-268. Doussan, Isabelle, “Le droit de la responsabilité civile français à l'épreuve de la responsabilité environnementale instaurée par la directive du 21 avril 2004”, *Les Petites affiches*, Vol. 394, número 169, 2005, pp. 3-14.

<sup>(212)</sup> Díez-Picazo y Ponce de León, *Derecho de Daños*, Civitas, Madrid, 1999. Trimarchi, Pietro, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Giuffrè, Milano 1961. Pantaleón Prieto, Fernando, “Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación”, *Centenario del Código Civil*, Ramón Areces, Madrid, 1990. Pantaleón Prieto, Fernando, “Comentario al art. 1902 C.C.”, *Comentarios del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993, págs. 1971 y ss. Posner, Richard, *Economic Analysis of Law*, 5th edition, Aspen Publishers, New York, 1998. Redja, George E., *Principles of Risk and Insurance*, 6th ed., Addison-Wesley. Reading, Menlo Park, Harlow, Don Mills, Sydney, México City, Madrid, Amsterdam, 1997. Vaughan, Emmet J. / Vaughan, Therese, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 8th edition, John Wiley & Sons Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Toronto, Singapore, 1999. Roca, Encarna, *Derecho de daños. Textos y materiales*. 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000. Sozzo, Gonzalo, “Riscos do desenvolvimento e sistema do direito de danos (para um Direito de Danos pluralista)”. *Direito, sociedade e riscos – a sociedade contemporânea vista a partir da idéia de risco*, UniCEUB, UNITAR, Brasília, 2006, p. 250-310. Salvador Coderch, Pablo y Fernández Crende, Antonio, “Causalidad y responsabilidad”, *Indret Revista para el Análisis del Derecho*, Tercera edición, 2006.



*Zurechnung*) (<sup>213</sup>). Asimismo, la teoría hace referencia a conceptos propios del Análisis Económico del Derecho (<sup>214</sup>). Sin embargo, en materia de CJCI debe abandonarse la pretensión de abordar todos los daños extracontractuales de igual manera. En efecto, el fundamento variará, según hablemos de daños civiles, daños ambientales, daños al consumidor, daños laborales, etc. (<sup>215</sup>)

Corroborando el criterio que ha seguido el TJUE al distinguir entre obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales, tenemos que, existiendo demandas con fundamentos distintos, esto es, siendo algunas de ellas de naturaleza jurídica contractual y otras en cambio de naturaleza jurídica extracontractual, nada impide que se haya aplicado la disposición del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en la medida que todas ellas han sido consideradas “conexas” en el momento de su presentación.

Por tanto, advertimos que la distinción entre el régimen aplicable a las obligaciones contractuales y el régimen aplicable a las obligaciones extracontractuales obedece en gran medida a criterios de funcionalidad procesal, más

---

(<sup>213</sup>) Desarrollo de la teoría, historia y contexto en: Díez- Picazo, Luis y Gullón, Antonio, *Sistema de Derecho Civil*, V. II, Tecnos, Madrid, 2001, p.550 y ss. Múrtula Lafuente, Virginia, *La Responsabilidad civil por los daños causados por un miembro indeterminado de un grupo*, Dykinson S.L., Madrid, 2005, pp.79-85. Salvador Coderch, Pablo y Fernández Crende, Antonio, “Causalidad y responsabilidad”, *Indret Revista para el Análisis del Derecho*, Tercera edición, número 329, Barcelona, 2006. Disponible en: [http://www.indret.com/pdf/329\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/329_es.pdf) [Revisado 24 de abril del 2012]. Coderch, Pablo Salvador, *Causalidad y responsabilidad*, Indret, 2da. Edición, Número 94, Barcelona, 2002. Citando a: a) Larenz, Hegel *Zurechnungslehre und der Begriff der objektiven Zurechnung*, p. 60 y b) Honig, *Kausalität und objektive Zurechnung*, en “Festgabe für Reinhard v. Frank”, T.I, p.174.

(<sup>214</sup>) Para profundizar este tema en concreto ver: Hinojosa Martínez, Luis Miguel, “A favor del análisis económico del derecho internacional y de la renovación metodológica”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009, pp. 407-426.

(<sup>215</sup>) No obstante lo anterior, Cfr. Las similitudes que existen en: Malcolm, Rosalind, “Integrated product policy: a new regulatory paradigm for a consumer society?”, *European Environmental Law Review*, Vol. 14, número 14, 2005, pp. 134-144. Short, Megan, “Taking back the trash: comparing European extended producer responsibility and take-back liability to US environmental policy and attitudes”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 37 número 4, 2004, pp. 1217-1254. Taschner, Hans Claudius, “Environmental Liability and Product Liability in the EU: a Comparison”. *Review of European Community & International Environmental Law*, Vol. 9, número 2, 2000, pp. 160-164.

que a criterios de justicia correctiva. El principal interés sigue siendo evitar un juicio que se desarrolle en forma separada, por el riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables <sup>(216)</sup>. Los costes de esta decisión podrían terminar afectando a la víctima.

Finalmente, quisiéramos haber encontrado argumentos jurisprudenciales en el TJUE que distingan entre ambas clases de obligaciones (contractuales y extracontractuales) “en razón de sus elementos”, sin embargo no ha sido así. Las obligaciones serán extracontractuales por ser “remanentes” o por estar en defecto de no haber sido clasificadas como contractuales. Por otro lado, la calificación de las obligaciones extracontractuales opera en razón del resultado, esto es, en razón del daño. De esta forma, el criterio definidor de la CJCI es el daño y así nos indica cuán importante es el elemento daño en las obligaciones extracontractuales y cuán lejano está el debate sobre el modelo de responsabilidad civil al momento de definir el vínculo de conexión con un tribunal determinado. Paradójicamente, el juicio sobre la extensión de la CJCI, es decir el debate sobre la calificación de los daños en directos o indirectos ha abandonado la teoría del daño para posicionarse en el problema de la causalidad.

### **3.- Cooperación judicial y cooperación administrativa para el ejercicio de acciones civiles internacionales por daño ambiental.**

En el año 2011, el Tribunal de Luxemburgo conoció de una docena de casos relacionados con problemas en la evaluación del impacto medioambiental <sup>(217)</sup>. En

---

<sup>(216)</sup> Sobre este tema, ver: STJCE C-98/06, asunto *Freeport plc*.

<sup>(217)</sup> Sentencia TJUE, 3 de enero, 2011, C- 50/09, asunto *Comisión vs. Irlanda*. Sentencia TJUE 17 de marzo del 2011, C-275/09 asunto *Brussels Hoofdstedelijk Gewest vs. Vlaam Gewest*. Sentencia TJUE 24 de marzo del 2011, C-435/09, asunto *Comisión vs. Bélgica*. Sentencia TJUE 12 de mayo del 2001 C-115/09, asunto *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland y otros vs. Bezirksregierung Arnsberg*. Sentencia TJUE 18 de octubre del 2011 C- 128/09 a C-131/09, C-134/09 y C- 135/09, asunto *Boxus*. Sentencia TJUE 17 de noviembre del 2011 C-177/09 a C-179/09, asunto *Le*

efecto, la Directiva 85/337 sobre la evaluación de los incidentes de proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, vino a imponer a los Estados miembros subordinar la autorización para la realización de estos proyectos a los resultados de estudios de impacto ambiental que se señalaban en la Directiva. Es destacable el hecho de que los asuntos que fueron conocidos por la Corte de Justicia se referían a aspectos muy diversos en relación con la trasposición y las modalidades de evaluación que estaban siendo objeto de aplicación en los Estados miembros.

La naturaleza administrativa que caracteriza a las acciones y a los recursos a los que tienen acceso los particulares en razón de la Directiva 2004/35/CE no debe ser obstáculo para que operen coordinadamente con acciones de prevención, reparación e indemnización por los daños ambientales en jurisdicciones civiles. En efecto, por una parte, tenemos un sistema de prevención y reparación establecido en razón de la Directiva 2004/35/CE y por otro lado está el sistema nacional de prevención y reparación.

En el primer caso, la Directiva 2004/35/CE encarga a la “autoridad competente” la facultad-deber de establecer qué operador ha causado el daño, evaluar el daño, determinar las medidas reparatorias de acuerdo con el Anexo II y determinar las medidas preventivas que resulten necesarias <sup>(218)</sup>. La Directiva no establece reglas adicionales de conflicto para asuntos internacionales porque supone que las autoridades competentes señaladas en la Directiva son de naturaleza administrativa y no judicial, como sí ocurre con las autoridades a las que alude la competencia del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(219)</sup>.

En el segundo caso, cada Estado tiene un sistema de control de responsabilidades administrativas y responsabilidades civiles frente a un asunto de daño ambiental.

---

*Poumon vert de la Hulpe vs. Région Wallone*. Sentencia TJUE 24 de noviembre del 2011 C- 560/08 asunto *Comisión vs. España*.

<sup>(218)</sup> Artículo 11 de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

<sup>(219)</sup> Considerando 10 de la Directiva 2004/35/CE.

En esta dualidad de sistemas, las víctimas de daño ambiental están obligadas a recurrir *prima facie* a la autoridad competente que ha sido establecida en razón de la Directiva 2004/35/CE. En caso de que su pretensión sea desestimada puede recurrir o bien a los tribunales contencioso administrativos o bien a la jurisdicción civil <sup>(220)</sup>. No obstante, algunos ordenamientos jurídicos nacionales, como ocurre en el español, que por gozar de un sólido contencioso administrativo confiere a esta vía la competencia exclusiva en la solución de conflictos ambientales, pueden oponerse a la forma como funcionan otros ordenamientos jurídicos -como el alemán- en los cuales la vía civil está abierta a la prevención y reparación de daños ecológicos puros, con independencia de que el bien afectado tenga titularidad colectiva o que sólo afecte a un interés privado.

Por estas razones, en los casos de conflictos internacionales, la solución parece necesitar una reinterpretación de principios. En efecto, cuando hablamos de un daño ambiental internacional estamos señalando que estando el hecho dañoso plurilocalizado es posible que sean competentes autoridades administrativas y autoridades judiciales de dos o más Estados. En este caso, la víctima civil de un daño ambiental deberá solucionar el problema de la competencia, de modo tal que no vulnere la competencia de la autoridad administrativa correspondiente según la Directiva 2004/35/CE.

En efecto, en un principio los daños civiles (llamados también “tradicionales” en la Directiva 2004/35/CE) están excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva <sup>(221)</sup>:

*“La presente Directiva tiene por objeto prevenir y reparar el daño medioambiental y no afecta a los derechos de compensación por daños ambientales tradicionales otorgados con*

---

<sup>(220)</sup> Cfr. con Bouza Vidal, Nuria y Vinaixa Miquel, Mónica, “La responsabilidad por daños ambientales transfronterizos: Propuesta de regulación europea y Derecho Internacional Privado”, en *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, T.III., Madrid, 2003, pp. 75-106.

<sup>(221)</sup> Considerando 11 de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

*arreglo a cualquiera de los acuerdos internacionales correspondientes que regulan la responsabilidad civil”.*

Por otra parte - y tal como se desprende la misma Directiva - perviven los “acuerdos internacionales” sobre responsabilidad civil celebrados entre los Estados parte. Los acuerdos destinados a mantener su eficacia son aquellos señalados en el artículo 4º de la Directiva en relación con los anexos IV y V, que se refieren principalmente a contaminación por hidrocarburos y daños nucleares <sup>(222)</sup>. En esta clase de daños, la reparación e indemnización civil se rigen por un sistema de responsabilidad sectorial que también está excluido de la aplicación del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Por tanto, excluidos los daños civiles regulados por normativa sectorial y considerando que la Directiva 2004/35/CE no regula la reparación e indemnización de daños civiles sufridos por particulares, resulta lógico que en los casos de daños civiles plurilocalizados se apliquen los sistemas de responsabilidad nacional y las reglas de distribución de competencia establecidas en el Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Sin embargo, resulta a lo menos curioso que en la práctica la víctima civil de un daño ambiental internacional deba resolver la “competencia judicial” del hecho dañoso plurilocalizado, considerando también la competencia de la autoridad

---

<sup>(222)</sup> Tales son: a) Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos. b) Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos. c) Convenio Internacional de 23 de marzo de 2001 sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos para Combustible de los Buques. d) Convenio Internacional de 3 de mayo de 1996 sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en Relación con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas. e) Convenio de 10 de octubre de 1989 sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados Durante el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, por Ferrocarril y por Vías Navegables, f) Convenio de París de 29 de julio de 1960 acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear y Convenio Complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963, g) Convención de Viena de 21 de mayo de 1963 sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares, h) Convención de 12 de septiembre de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares, i) Protocolo Común de 21 de septiembre de 1988 relativo a la Aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París, j) Convenio de Bruselas de 17 de diciembre de 1971 relativo a la Responsabilidad Civil en la Esfera de Transporte Marítimo de Sustancias Nucleares.

administrativa establecida en razón de la Directiva 2004/35/CE. La razón práctica de esta observancia radica en que la autoridad administrativa tendrá acceso a información y podrá ordenar diligencias que posteriormente servirán en el juicio civil. Asimismo, la autoridad administrativa competente habrá podido dictar medidas preventivas (con independencia de las medidas que correspondan en sede civil) que sean de interés para la víctima civil, como ocurre en el caso de las medidas de mitigación y cesación de actividades que tienden a disminuir los efectos del daño.

Lo anterior es sin perjuicio de que tanto particulares como ONGs ambientalistas del Estado afectado puedan dirigirse directamente a las autoridades del Estado de origen del perjuicio<sup>(223)</sup>.

Por otra parte, ante un daño ambiental plurilocalizado, la víctima civil, deberá tener en consideración la competencia judicial y la competencia de la autoridad administrativa establecida según la Directiva 2004/35/CE, según sea el lugar donde se encuentre localizado, tanto el hecho generador como también donde se encuentre localizado el daño.

Las consideraciones a las que aludimos, buscan asegurar dos cosas: a) la posibilidad de que las partes y especialmente la demandante pueda recurrir en caso de que su pretensión sea denegada, y b) el reconocimiento y cumplimiento de las medidas dictadas en otro país.

*En el primer caso*, la posibilidad de recurrir, no reviste dificultad cuando sólo nos referimos al principio de doble instancia. Sin embargo, cuando hablamos de la posibilidad de recurrir ante tribunales contencioso administrativos y ante tribunales civiles (por ilegalidad, falta de servicio, denegación, etc.) de las decisiones de la

---

<sup>(223)</sup> Artículo 12.1 de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales: “*con este fin, se considerará suficiente, a efectos de lo dispuesto en la letra b), el interés de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en la protección del medio ambiente y que cumplan los requisitos establecidos por su legislación nacional. Se considerará asimismo que dichas organizaciones tienen derechos que pueden ser vulnerados a efectos de lo dispuesto en la letra c)*”.

autoridad administrativa competente a la que se refiere la Directiva 2004/35/CE; entonces nos encontramos ante un problema: sólo puede recurrirse en contra de los actos de la autoridad competente ante los tribunales contencioso administrativos o ante los tribunales ordinarios de justicia del país donde dicha autoridad extiende su competencia (principio según el cual la impugnación de los actos de las autoridades públicas sólo puede formularse ante los tribunales del país en el que dichas autoridades son competentes) <sup>(224)</sup>.

De esta forma, el hecho dañoso -que por naturaleza es internacional y plurilocalizado- sufre una disección ficticia. En efecto, el hecho dañoso será considerado compuesto por dos hechos “no relacionados entre sí” para efectos el sólo efecto de poder recurrir la pretensión denegada por la autoridad administrativa competente a la que se refiere el artículo 11º de la Directiva 2004/35/CE. Esta disección se debe a que el hecho generador está bajo la competencia administrativa de un Estado, en circunstancias que el daño está bajo la competencia administrativa de un Estado distinto.

*En el segundo caso*, el reconocimiento y cumplimiento de las medidas dictadas en un país, no reviste dificultad, en la medida que sólo nos refiramos a medidas de protección, probatorias o de cumplimiento de sentencias, todas ellas emanadas de “tribunales de justicia”. Sin embargo, cuando hablamos del cumplimiento de ordenes, dictámenes y resoluciones emanadas de “autoridades administrativas” que deben reconocerse y/o cumplirse en otro país; entonces nos encontramos con la dificultad de tener que considerar que sólo podrán reconocerse en otro país los actos administrativos extranjeros considerados *iure gestionis* y no los actos administrativos considerados *iure imperii* <sup>(225)</sup>

---

<sup>(224)</sup> Garrido Falla, Fernando, Palomar Olmeda, Alberto y Losada González, Herminio, *Tratado de Derecho Administrativo, Vol. III. La Justicia Administrativa*, Tecnos, 2006. Escudero Herrera, Concepción, “La delimitación de la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales contencioso administrativos”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2004, pp. 30-57.

<sup>(225)</sup> Desantes Real, Manuel, *La competencia judicial en la Comunidad Europea*, Bosch, Barcelona, 1986, pp. 79 y 80.

En efecto, los *acta iure imperii* no entran en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012. Tampoco estuvieron considerados en el Reglamento 44/2001 Bruselas I, ni en el antecesor Convenio de Bruselas de 1968 (<sup>226</sup>). Asimismo, se encuentran excluidos del Reglamento 864/2007 Roma II (<sup>227</sup>) que señala:

“Las reclamaciones derivadas del ejercicio de la autoridad soberana (*acta iure imperii*) deben incluir reclamaciones contra el personal que actúe en nombre del Estado y la responsabilidad por actos de los poderes públicos, incluida la responsabilidad de los cargos públicos. Por ello, estos asuntos deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.”

Todo lo anterior constituye un problema para el caso de la víctima de daño ambiental sufrido en un Estado X que pretende conseguir de la autoridad competente del Estado X (lugar que generalmente coincidirá con el domicilio de la víctima) que se remedie el daño o evite que el daño se extienda, dictando una medida que cuyos efectos deberán reconocerse y aplicarse en un Estado Y, o lugar donde se localiza el hecho generador que ha provocado el daño sufrido en el Estado X.

Por su parte, los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos en materia de inmunidad de jurisdicción, impiden que un Estado pueda ser demandado ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado. Tal inmunidad de jurisdicción está reconocida en el Derecho internacional en base al principio *par in parem non habet imperium*, ya que un Estado no puede estar sujeto a la jurisdicción de otro Estado.

De aquí que nazca la pregunta: Cuándo reclamamos el reconocimiento de un acto administrativo que ha sido dictado por una autoridad administrativa de un Estado

---

(<sup>226</sup>) En el mismo sentido Conclusiones del abogado general Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto C-292/05, *Lechouritou y otros*, presentadas el 8 de noviembre de 2006.

(<sup>227</sup>) Considerando 9 del Reglamento 864/2007 de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, Roma II.



distinto a aquel donde producirá sus efectos, ¿estamos pidiendo el reconocimiento de *acta iuri imperii*?

Aunque determinar el límite entre *acta iure imperii* y *acta iure gestionis* es una tarea compleja, tenemos que la jurisprudencia del TJUE de julio del 2012 <sup>(228)</sup> ha sostenido que:

“[En] la situación actual de la práctica internacional, dicha inmunidad no tiene un valor absoluto, sino que se reconoce generalmente cuando el litigio se refiere a actos de soberanía realizados *iure imperii*. En cambio, puede excluirse si la acción judicial tiene por objeto actos realizados *iure gestionis*, que no pertenecen al ámbito del poder público.”

Por otra parte, el artículo 15º de la Directiva, abordando la Cooperación entre los Estados, establece un mecanismo que funciona en base a deberes de información, señalando:

“Artículo 15º

*Cooperación entre los Estados miembros.*

1. Cuando un daño medioambiental afecte o pueda afectar a varios Estados miembros, dichos Estados miembros colaborarán, entre otras cosas mediante un intercambio adecuado de información, para velar por que se adopten medidas preventivas y, en caso necesario, reparadoras, respecto de cualquier daño medioambiental de esta índole.
2. Cuando se haya producido un daño medioambiental, el Estado miembro en cuyo territorio se haya originado el daño proporcionará información suficiente a los Estados miembros que puedan verse afectados.
3. Cuando un Estado miembro identifique dentro de sus fronteras un daño que no se haya ocasionado dentro de ellas podrá informar de ello a la Comisión y a cualquier otro Estado miembro afectado; podrá formular recomendaciones para la adopción de medidas preventivas o reparadoras y podrá intentar, de conformidad con la presente Directiva, recuperar los costes que le haya supuesto la adopción de medidas preventivas o reparadoras.”

Este mecanismo, resulta insuficiente, en la medida que sólo se refiere a deberes de información y no a deberes de reconocimiento y cumplimiento de ordenes

---

<sup>(228)</sup> STJUE de 19 de julio de 2012, en el asunto C-154/11, *Ahmed Mahamdia vs. República Argelina Democrática y Popular*.

administrativas emanadas por autoridades con competencia ambiental sitas en otro Estado <sup>(229)</sup>).

En efecto, dejando de lado el reconocimiento de las ordenes judiciales promovidas en juicio de responsabilidad ambiental, las que si tienen pleno reconocimiento y efecto gracias a la aplicación del Reglamento (UE) No. 1215/2012; en el caso de las ordenes administrativas emanadas de otro Estado, en cambio, no ocurre de igual manera. La falta de un reconocimiento expreso a los efectos de este tipo de actos como *acta iure gestionis* ha obligado al TJUE, tal como lo señalamos anteriormente, a morigerar el principio *par in parem non habet imperium* señalando que los actos *iure imperii* se refieren, en principio, “a actos de soberanía”.

En nuestro caso, no está en entredicho que se esté juzgando a una autoridad administrativa extranjera por actos cometidos en ejercicio de su soberanía o de su poder de imperio. Por el contrario, nos referimos a un juicio que afecta exclusivamente a privados, en el cual un acto administrativo dictado en cumplimiento de su competencia y en tutela de un interés privado busca hacerse valer en otro Estado. En este caso, la cooperación que proponemos para los Estados, radica en el pleno reconocimiento del acto administrativo tendiente a obtener la mayor protección ambiental posible. En este caso el criterio que proponemos resulta mucho más objetivo de lo que parece a primera vista.

#### **4.- Lo “delictual y cuasidelictual” en el Reglamento (UE) No. 1215/2012.**

En la actualidad, el mayor avance conceptual sobre la responsabilidad extracontractual internacional, se encuentra positivada en los Reglamentos

---

<sup>(229)</sup> En el mismo sentido, pero con perspectivas distintas para abordar el problema Cfr.: Bouza Vidal, Nuria y Vinaixa Miquel, Mónica, “La responsabilidad por daños ambientales transfronterizos: Propuesta de regulación europea y Derecho Internacional Privado”, en *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, T.III., Madrid, 2003, pp. 75-106. Kadner Graziano, Thomas, “The law applicable to cross-border damage to the environment. A commentary on article 7 of the Rome II Regulation”, *Yearbook of Private International Law*, VOL. IX, Germany, 2007, pp. 71-86. Vinaixa Miquel, Mónica, “La unificación de las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en el reglamento de Roma II”, *Revista General de Derecho Europeo*, número 15, Salamanca, 2008.

comunitarios número 864/2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) y número 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. No obstante, tanto el Reglamento (UE) No. 1215/2012, como el Reglamento Roma II, no definen qué se entiende por materia delictual y materia cuasidelictual, esto es, no han definido qué se entiende por “obligación extracontractual”. Las definiciones autónomas son la vía ideal en toda clase de sistemas integrados de distribución de competencias; otorgan mayor uniformidad en los criterios para la determinación del tribunal competente. Con menor aproximación, el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 abre un foro competencial especial que nace de la distinción conceptual entre obligación contractual y obligación extracontractual.

El TJUE <sup>(230)</sup> ha optado por las definiciones autónomas, aún por sobre tesis jurídicamente impecables (como la conocida tesis TESSILI), conforme a las cuales el juez debía calificar, en primer lugar, la relación contractual para después determinar los límites con la obligación extracontractual. Tal proceso de calificación incidía, necesariamente, en las normas de conflicto de los ordenamientos comprometidos, haciéndolos más complejos. Como se puede advertir, tal complejidad desde la perspectiva contractual, puede trasladarse a la dimensión extracontractual. Por este motivo corresponde preguntarnos si no es más adecuado a la naturaleza de la obligación extracontractual acudir a sus elementos propios en lugar de insistir por la vía de remanente de las obligaciones contractuales.

Considerando que la opción del legislador comunitario ha sido establecer como tribunal competente aquél del lugar donde se produjo o pudiere producirse el hecho dañoso; resulta que nos ha posicionado, desde ya, en uno de los elementos de la obligación extracontractual: el daño. Desde esta perspectiva, el problema, se presenta, ya no con la definición de obligación extracontractual sino, con la definición de daño; porque su extensión determinará el o los tribunales competentes.

---

<sup>(230)</sup> Conclusiones del Abogado General, Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 16 de marzo de 1999, en asunto C-440/97, *G.I.E groupe Concorde y otros*.

Como se observa, nuevamente nos enfrentamos a las complejidades de la calificación jurídica <sup>(231)</sup>.

Es inevitable no recurrir a la interpretación autónoma. Los beneficios asociados se refieren a la uniformidad y especialmente al alejamiento del recurso a la ley aplicable en la relación jurídica. Así, se evitan las dificultades de aplicar la ley de fondo con las típicas peculiaridades que se dan en materia de conflicto de leyes. Dificultades que guardan relación, entre otros, con la calificación y la existencia de normas de orden público, entre las más importantes <sup>(232)</sup>. Por otro lado, tanto el artículo 7.1 como el artículo 7.2, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012, obedecen a la misma tradición procesal. Buscan, como garantía, establecer un tribunal competente más próximo al objeto de la *litis*. En efecto, comparativamente, en materia contractual el juez busca su legitimación en la voluntad de las partes, para lo cual, será de suma relevancia determinar el lugar del incumplimiento de la obligación <sup>(233)</sup>. Por esta razón, el lugar del daño que se establece por la sola

---

<sup>(231)</sup> Según la tesis Tessili (STJCE 12/76 Asunto *Tessili*), la determinación del tribunal competente, en casos de responsabilidad contractual, identifica al menos tres momentos: a) calificar jurídicamente el acto dentro de una categoría contractual, b) determinar la ley aplicable verificando la existencia de regímenes uniformes y normas de conflicto; y c) determinar el lugar de cumplimiento de la obligación. Ver también, conclusiones del Abogado General, Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 16 de marzo de 1999, en asunto C-440/97, *G.I.E groupe Concorde y otros* consid. 28-30. Veinte años en vigencia, confirmada por STJCE C 288/92 Asunto *Custom Made Commercial Ltd*, la tesis Tessili no ha sido aplicada uniformemente por los tribunales estatales.

<sup>(232)</sup> Ver STJCE C-125/92, asunto *Mulox IBC*, Rec. p. I-4075, apartado 11 y opinión del Abogado General Sr. Jacobs.

<sup>(233)</sup> Ejemplo en: STS 6937/2007. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid, número de Recurso: 3219/2000, número de Resolución: 1129/2007. Procedimiento: Casación. Interpuesto, por Oasis International Airlines, S.A. Recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había estimado procedente la declinatoria internacional promovida por la demandada. Tenía como fin determinar si los Tribunales españoles o los tribunales de EE.UU. era los competentes para conocer de daños extracontractuales por la toma de un motor de una aeronave perteneciente a Oasis Internacional Airlines, S.A., producido en el aeropuerto J.F.Kennedy de Nueva York, por parte de la sociedad norteamericana Delta Airlines, Inc. La recurrente alegó perjuicios extracontractuales tanto en España como en EE.UU. El Tribunal Supremo español desestimó el recurso de casación y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, basado en que la competencia del asunto correspondía a los tribunales estatales y federales con sede en los condados de Fulton y Clayton, Georgia, por existir una sumisión expresa de competencia entre las

proximidad de los hechos con el tribunal que conocerá de ellos, puede resultar un tanto antojadiza o al menos carente de justificación holística <sup>(234)</sup>. Cosa distinta ocurre en materia extracontractual, donde la legitimación de la competencia se busca en el hecho dañoso que es el eje central de la indemnización que se demanda y, además, es el elemento determinante de la relación extracontractual.

Finalmente, los otros elementos de la responsabilidad delictual o cuasidelictual, también cumplen un rol; sin embargo ese rol es subsidiario, informador, coadyuvador y secundario en la determinación del tribunal competente. Su importancia radica en aportar los criterios que asistirán al juez en un asunto con eventual amenaza de conflicto o inseguridad jurídica. Esto ocurrirá a menudo, cuando se enfrentan sistemas de Derecho Internacional Privado no integrados. En efecto, el TJUE, ha señalado que los conceptos “materia delictual y cuasidelictual”, son objeto de interpretación autónoma <sup>(235)</sup>. Asimismo, el Reglamento 864/2007 Roma II <sup>(236)</sup>, reiterando la idea de autonomía <sup>(237)</sup>, se ha limitado a señalar que la materia delictual

---

partes, en virtud de un asunto que el Tribunal Supremo calificó *iura novit curia* como de “responsabilidad contractual”.

<sup>(234)</sup> Cfr. Con la situación con el Derecho estadounidense en: Wilde, Mark, “Civil liability for environmental damage: a comparative analysis of law and policy in Europe and the United States”, *Kluwer Law International*, La Haya, 2002.

<sup>(235)</sup> Interpretaciones autónomas de “materia delictual y cuasidelictual” en: STJCE 189/87 Rec. p. 5565 asunto *Kalfelis* cuya doctrina fue adoptada por el legislador comunitario en el artículo 6.1. de Bruselas I. Comentarios a esta sentencia, entre otros: Pontier, Jannetje Adriana y Burg, Edwige, *EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters according to the case law of the European Court of Justice*, T.M.C. Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2004, pp. 181-184. Panagopoulos, George, *Restitution in Private International Law*, Hart Publishing Ltd, Oxford and Portland, Oregon, 2000, pp. 187- 197. Ratifican esta doctrina: STJCE 261/90 asunto *Reichert Kockler vs. Dresdner Bank (II)*, STJCE C-96/00, asunto *Gabriel*, STJCE C-167/00, asunto *Henkel*. STJCE C-51/97, Rec. p. I-6511, apartado 22, asunto *Réunion européenne* y otros.

<sup>(236)</sup> Considerando 7º del Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), que señala: “El ámbito de aplicación material y las disposiciones del presente Reglamento deben garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), y con los instrumentos que tratan sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales.”

<sup>(237)</sup> Considerando 11º del Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma

y cuasidelictual abarca cualquier modelo de responsabilidad, sin pronunciarse sobre los elementos constitutivos de la obligación extracontractual <sup>(238)</sup>.

El problema de los conceptos autónomos es de importancia, porque el Reglamento (UE) No. 1215/2012 se aplica a diferentes clases de obligaciones extracontractuales <sup>(239)</sup>. En efecto, la amplitud del precepto establecido en el artículo 7.2 Reglamento (UE) No. 1215/2012, abarca toda clase de delitos y cuasidelitos, sin rescatar las especialidades de cada una. Asimismo, el tratamiento conjunto de ambas clases de daños (civiles y ambientales) se extiende hasta el Reglamento 864/2007 Roma II <sup>(240)</sup>, en lo relativo al régimen aplicable <sup>(241)</sup>.

Más allá de la relación conceptual que pueda elaborarse en razón de la coherencia que debe existir entre los cuerpos normativos del Derecho Comunitario <sup>(242)</sup>, el principal problema se asocia a la interpretación restrictiva del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Lo restrictivo de la interpretación ha sido declarado expresamente por el TJUE <sup>(243)</sup>, apoyándose

---

II)), que señala: “*El concepto de obligación extracontractual varía de un Estado miembro a otro. Por ello, a efectos del presente Reglamento, la noción de obligación extracontractual deberá entenderse como un concepto autónomo. Las normas de conflicto de leyes contenidas en el presente Reglamento deben aplicarse también a las obligaciones extracontractuales basadas en la responsabilidad objetiva.*”

<sup>(238)</sup> En este mismo sentido, ver STJCE 261/90, asunto *Reichert vs. Dresdner Bank (II)*.

<sup>(239)</sup> Recordemos lo escueto del artículo 7.2. del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que aplica el mismo régimen para los distintos sistemas de obligaciones y modelos de responsabilidades.

<sup>(240)</sup> Reglamento Roma II. Artículo 7, en relación con los considerando 24) y 25).

<sup>(241)</sup> La relación entre ambos reglamentos comunitarios ha sido puesta de manifiesto en forma expresa en el preámbulo del Reglamento 864/2007 Roma II. En nuestro tema, resulta significativa la identidad que existe entre el derecho de opción en la elección del foro (por aplicación de la regla de ubicuidad establecida por el TJCE respecto del artículo 7.2. del Reglamento (UE) No. 1215/2012) y el derecho de opción que se entrega al demandante en materia de ley aplicable (por aplicación del artículo 7 del Reglamento 864/2007 Roma II).

<sup>(242)</sup> De Miguel Asensio, Pedro A., *ob cit*, p. 699.

<sup>(243)</sup> Ver STJCE C-98/06, asunto *Freeport plc y Olle Arnoldsson*, apartado 35, conforme a la cual ha señalado que “*es jurisprudencia reiterada que dichas reglas de competencia especial deben ser interpretadas de modo estricto, sin que quepa una interpretación de las mismas que vaya más allá de los supuestos explícitamente contemplados en el Reglamento nº 44/2001*”. En el mismo sentido STJCE C-103/05, caso *Reisch Montage AG* apartado 23.

principalmente en el considerando 15° del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012 <sup>(244)</sup>, que señala:

*“Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción”.*

Sin embargo, se advierte cierta paradoja cuando por un lado se declara una interpretación restrictiva de los fueros especiales, y por otra, se reconoce en el fuero del artículo 7.2 una amplitud tal, que se extiende a toda relación que no pueda calificarse de contractual en sentido estricto. El riesgo de esta paradoja consiste en aplicar las mismas conexiones en la verificación de un hecho que admite distintas categorías de daño. Tal es nuestro caso, en el cual un mismo hecho generador puede provocar distintas categorías de daños (civiles y ambientales). De aquí la importancia de abordar las distintas categorías de daños, para mayor distinción tanto de su realidad fenomenológica (daños ecológicos puros y daños ambientales) como de su realidad jurídica (daños civiles).

## **5.- La “proximidad razonable”: marco para la categorización de los fueros de competencia judicial internacional.**

Cuando la CJCI se refiere a los ilícitos ambientales, entonces hablamos de un foro de naturaleza patrimonial especial. No obstante, lo anterior, también goza de las

---

<sup>(244)</sup> Cfr. con el considerando 11 del Reglamento número 44/2001, que señalaba: *“Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción”.*

características generales que se atribuyen a los fueros de naturaleza patrimonial propios de un modelo de justicia privada. Autores como VIRGÓS SORIANO y GARCIMARTÍN ALFÉREZ <sup>(245)</sup> han señalado que las características de esta clase de foros son: a) que obedecen a un principio de proximidad razonable, b) que siguen una tipificación legal, y c) que tienen una relación de subsidiariedad formal respecto del foro general que corresponde al domicilio del demandado.

Por la relevancia y por la pertinencia en esta parte del desarrollo del marco teórico de nuestro trabajo, es que abordaremos el primero de ellos.

El *principio de proximidad razonable* no ha sido referido expresamente en el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. No obstante, este Reglamento, ha regulado la CJI en base a la conexidad, esto significa que ha establecido competencia judicial internacional para casos que presentan estrechos vínculos de naturaleza procesal. Asimismo, ha establecido criterios de economía procesal y ha justificado el conocimiento acumulado de los asuntos a objeto de evitar sentencias que resulten contradictorias. Es entonces que a partir de estos casos, nos encontramos con que la proximidad razonable, se configura como un principio del Derecho Internacional Privado.

Como principio, ha sido latamente desarrollado tanto a nivel doctrinal <sup>(246)</sup>, como a nivel jurisprudencial <sup>(247)</sup>. En el primer caso sobresalen los trabajos del

---

<sup>(245)</sup> Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, *ob cit*, p.131.

<sup>(246)</sup> Otero García-Castrillón, Carmen, “Problemas de aplicación de las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español y comunitario: reflexiones en torno a la doctrina del *forum non conveniens*”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, número94, 2000, pp 99-128. Calvo Caravaca, Alfonso-Luis, “El Derecho internacional privado en la comunidad europea”, *Anales del Derecho*, Universidad de Murcia, número 21, 2003, pp.49-69; Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Francisco, *ob cit*, p.55; Pérez Vera, Elisa y González Campos, Julio, *Derecho Internacional Privado*, Vol. I, UNED, España, UNED, 2001, p 291-317, Garau Sobrino, Federico, *Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacional*, España Universitat de les Illes Balears, 2003, p. 26. Rodríguez Jiménez, Sonia, *Competencia Judicial Internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 2009, pp.61-68; Rodríguez Jiménez, Sonia, *Conexidad y Litispendencia Internacional en el Derecho internacional privado mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 120-213.



profesor PAUL LAGARDE (<sup>248</sup>) y de sus discípulos, reconocido por TITO BALLARINO y CATHERINE KESSEDJIAN.

Por otro lado, para que el daño civil internacional extracontractual esté asociado a un daño ambiental, es necesario que también se recurra a los criterios que asisten en la determinación de los vínculos más estrechos que presenta el asunto con un Estado determinado. Para estos casos es necesario que nos preguntemos sobre la naturaleza y sobre las características de tales vínculos.

En efecto, el principio de proximidad razonable ofrece una invitación al análisis holístico de todos los vínculos de conexión. Si bien no cualquier vínculo es suficiente para determinar la competencia judicial de un tribunal, será ciertamente necesario conocer todos los vínculos que se encuentran envueltos en el asunto, para poder determinar cual o cuáles de ellos son determinantes. No debemos olvidar que la determinación del tribunal competente no sólo puede obedecer a una labor mecánica de descarte, sino al análisis de los factores que aseguren el mejor tribunal para la tutela judicial efectiva de los derechos envueltos. Así por ejemplo, en los casos en los cuales se encuentran envueltas jurisdicciones extracomunitarias, puede resultar no sólo conveniente sino acorde con la justicia del caso concreto, la apertura de un *forum neccessitatis*.

---

(<sup>247</sup>) STJCE 56/79, asunto *Zelger vs. Salinitri*. STJCE C-256/00, asunto *Besix SA*, apartados 31-35. STJCE C-167/00 caso *Henkel*. STJCE C-4/03, asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG y Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, apartado 21. STJCE C-343/04, asunto *Land Oberösterreich contra ČEZ*, apartados 27-29. STJCE C-73/04, asunto *Brigitte y Marcus Klein y Rhodos Management Ltd*, apartados 14-16. Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, de 18 de septiembre de 2003, C-18/02, Asunto *DFDS Torline A/S contra SEKO Sjöfolk Facket för Service og Kommunikation*. Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi, de 24 de mayo de 2007, C-98/06, asunto *Freeport plc contra Olle Arnoldson*. Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed de 31 de enero de 2002, C-334/00, asunto *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*, apartados 28-30.

(<sup>248</sup>) Lagarde, Paul, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, *Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, T. 196, 1986, p.150 y ss. Fallon Marc, *Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne*, en: Mélanges P. Lagarde, Paris, Dalloz, 2005, p. 241-262. Fallon Marc, “Les conditions d’un code européen de droit international privé”, en: *La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé?*, M. Fallon, P. Lagarde et S. Poillot-Peruzzetto ed.(s), Paris, Dalloz, 2009, p. 1-34.

En razón de lo anterior, consideramos oportuno realizar en este punto un esfuerzo sistemático sobre los criterios de conexión que se encuentran alrededor de todo asunto de CJCI. En efecto, existe multiplicidad de vínculos que deben considerarse al momento de determinar el foro competente; todos los cuales han sido abordados por la doctrina, pero que a falta de una sistematización compilatoria, nos animamos a proponer una, a saber:

i.-) Vínculos que estén relacionados con los elementos de la obligación extracontractual. En este grupo encontramos: a) los sujetos involucrados en el conflicto internacional (partes, terceros coadyuvantes e independientes), b) el daño ocasionado (como manifestación de una alteración, que según la alteración puede ser patrimonial, ecológica, etc.), c) la acción que causa el daño y la negligencia (según el modelo de responsabilidad ambiental que se trate). Estos dos últimos elementos, suelen ser desarrollados en una etapa posterior, más relacionada con el conocimiento del fondo del asunto. Sin embargo, como tendremos ocasión de analizar en la segunda parte de este trabajo, resulta que la extensión de los daños (y por tanto la determinación de la extensión de la competencia judicial) está determinada por un correcto juicio sobre la causalidad.

Por otra parte, para el legislador del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sólo uno de los elementos de la relación extracontractual ha sido el que definió el tribunal competente, tal elemento fue: el hecho dañoso.

Consideramos que el fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 es especial, y ha desplazado a los demás fueros de competencia, los que por dicha razón, ha supuesto un desplazamiento en el análisis de otros elementos de la relación extracontractual. Por su parte, si llevamos este análisis al terreno de los ilícitos ambientales y de ilícitos civiles directamente asociados a daños ambientales, tenemos que el posicionamiento del punto de conexión en base al daño es de suyo decisorio sobre la importancia que se asigna al resultado dañoso, lo que nos viene a definir claramente la prioridad que tuvo el legislador comunitario al momento de distribuir las cargas de la litigación internacional, en materia extracontractual y de

cómo debiera existir la misma proyección en caso de ocurrencia de daños ambientales. Sin desconocer esta importancia, pero anticipando un juicio sobre la extensión de los daños es que consideramos conveniente analizar igualmente la confluencia de otros vínculos de conexión.

ii.-) Vínculos que guardan relación con los elementos de la relación procesal internacional. En este grupo encontramos: a) el domicilio de ambas partes, b) la ley procesal aplicable en el lugar del foro, c) la ley de fondo aplicable, d) el lugar de ejecución de la sentencia, e) el lugar de producción de pruebas, y f) el lugar donde se practicarán medidas cautelares, preventivas y probatorias.

En este grupo nos encontramos con foros que aconsejan un criterio de economía procedimental. La jurisprudencia del TJUE se ha pronunciado sobre estos criterios <sup>(249)</sup>, de tal forma que como ocurrió en el caso *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg* da contenido al principio de proximidad razonable en consideración con el número de partes involucradas y con la naturaleza de las acciones formuladas señalando:

“debe interpretarse en el sentido de que no se aplica en el marco de un litigio por violación de patente europea en el que intervienen varias sociedades, establecidas en diferentes Estados contratantes, en relación con hechos cometidos en el territorio de uno o de varios de esos Estados, aun cuando dichas sociedades, pertenecientes a un mismo grupo, hubieran actuado de manera idéntica o similar, con arreglo a un plan de acción conjunta elaborado por una sola de ellas. En efecto, habida cuenta de que ni los actos de violación reprochados a los diferentes demandados ni la normativa nacional conforme a la que son apreciados dichos actos son los mismos, no existe riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables como consecuencia de acciones de violación de patente europea cometidas en diferentes Estados contratantes, ya que las posibles diferencias entre las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales de que se trata no se inscriben en el marco de una misma situación de hecho y de Derecho”.

De lo anterior, vemos que existen vínculos subyacentes en las normas del fuero especial 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, los que son capaces de contextualizar mucho mejor la situación. No obstante lo anterior, se advierte que el

---

<sup>(249)</sup> Sentencias que aluden a la economía procesal para fundar sus fallos en: STJCE C-116/02, asunto *Erich Gasser GmbH vs. MISAT Srl.*, apartado 38. STJCE C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*, apartado 36.

uso de estos criterios, que son de naturaleza procesal, y que *prima facie* se presentan claros y objetivos, resulta que analizados en su conjunto han servido para fundar una “interpretación restrictiva” de los fueros especiales. Todo lo cual ha estado motivado en la minimización tanto del *forum shopping* como del *law shopping*.

En nuestra materia, estimamos que la interpretación deberá ser restrictiva o extensiva, no tanto en consideración a la existencia de *forum shopping* o de *law shopping*, sino más bien en uso de principios de protección ambiental internacional.

iii.-) Vínculos que nacen de los criterios generales por la imputación de riesgos propios de una lógica del Derecho Internacional Privado, en este grupo encontramos: a) la prioridad reconocida a la autonomía de la voluntad, en el entendido de que las partes han podido pactar un arbitraje o determinar el foro competente con anterioridad, en la medida que no existan afectadas terceras personas, b) la valoración de la buena fe de los litigantes internacionales, tema que está asociado a la configuración de un *forum shopping malus*, c) el beneficio en las cargas de la prueba para una de las partes, tema que está asociado a la existencia de presunciones y alteraciones en la carga probatoria, y d) la protección de la apariencia de buen derecho.

Como se puede advertir, en estos casos hablamos de “imputación de los riesgos”, no para referir la negligencia o diligencia con la que han actuado las partes, sino más bien para atribuir en forma objetiva los efectos en la carga de la litigación internacional para todos aquellos casos en los cuales se advierte una clara intención de alterar los vínculos de conexión, con miras a la futura declaración de irresponsabilidad de una de las partes. En este sentido, la sistematización que ofrece este grupo está motivada por la búsqueda de la verdad material en el proceso.

Por su parte, el Reglamento (UE) No. 1215/2012, no es claro en la imputación de los riesgos que debe asumir una sola de las partes de la relación civil extracontractual internacional. En efecto, no consagra un *forum necessitatis* y tiende a apoyarse en reglas que propendan como fin superior en el sistema: la certeza y el efecto útil de la norma comunitaria. Sin desconocer la necesidad de alcanzar estos

objetivos, tenemos que la realidad y el alto tráfico de sentencias con países extracomunitarios puede obligar a establecer excepciones en la rigidez de los criterios utilizados hasta ahora.

En lo relacionado con criterios que establecen la carga de la internacionalidad, tenemos que el TJUE ha sido consistente en señalar que no existe un principio *favor laesi* en beneficio de la víctima de daño extracontractual. Tema relevante para nuestro objeto de investigación porque en el caso de los daños ambientales, es evidente que el juicio de reproche a la conducta del demandado que ha ocasionado un daño medioambiental, y las consecuencias económicas individuales y aún colectivas, si consideramos la economía de un país, vienen a verse alteradas sustancialmente si la carga de la internacionalidad se hace recaer en el demandado, por el riesgo que asumió al realizar una acción con resultado contaminante.

De esta forma, la “regla de la ubicuidad” del hecho dañoso, establecida por la sentencia *Bier vs Minas de Potasio de Alsacia*, hizo que la imputación de los riesgos se alterara recayendo en el demandado. Por esta razón, corresponderá analizar para cada caso concreto si la extensión de dicha regla es clara y si las limitaciones establecidas para los daños civiles por parte de la jurisprudencia del TJUE pueden aplicarse a los daños civiles asociados a un daño ambiental, así como la conveniencia de todo ello para el sistema comunitario de distribución de competencias <sup>(250)</sup>.

iv.-) Vínculos que operan como respuesta a la demanda de flexibilidad en el sistema. Estos vínculos se justifican por el derecho de tutela judicial efectiva. Tal es el caso del llamado: foro de necesidad. En materia de daños ambientales y en materia de daños civiles asociados a daños ambientales, encontramos que esta clase de foros no ha tenido consagración legal ni reconocimiento jurisprudencial. De esta forma, han sido las jurisprudencias nacionales las que han llevado la carga de dotar de contenido al derecho de tutela judicial efectiva para casos de daño ambiental y de daño civil

---

<sup>(250)</sup> Existe un debate que gravita sobre la importancia en la determinación del punto de conexión. Este debate también se extiende a la ley aplicable, según puede advertirse en el Reglamento Roma II, conforme al cual la *lex loci delicti* también reconoce una regla de *alternatividad*.

asociado, en todos aquellos casos en los cuales no existe un fuero establecido para la vinculación entre el tribunal y el asunto que se somete a conocimiento. Gran parte de ese peso es soportado por la jurisdicción civil extracontractual nacional. Por esta razón subsiste la importancia de que la jurisdicción que conoce de casos de responsabilidad civil por daño extracontractual esté dotada de criterios que le sirvan adecuadamente según los fines y propósitos de las disciplinas ambientales y al avance internacional que se experimente en la materia.

Por otra parte, y como se ha podido advertir en este esfuerzo por sistematizar los vínculos de jurisdicción en atención a sus criterios, encontramos que la cantidad y la variedad de vínculos existentes entre un caso hipotético y un tribunal determinado puede ser muy heterogénea y puede llegar a ser bastante compleja.

De aquí la necesidad de configurar un principio de proximidad razonable en materia de CJCI, que sea respetuoso de los principios ambientales internacionales aplicables.

Desde la perspectiva del sistema competencial europeo <sup>(251)</sup> puede dilucidarse la existencia de consenso sobre el “título de jurisdicción” para casos de daños extracontractuales civiles, sin embargo, en los casos de connotación ambiental subsiste la incertidumbre. En efecto, salvo el caso *Bier vs. Minas de Potasio de Alsacia*, no existen otros casos de connotación ambiental que hayan llegado a ser conocidos por el TJCE, actual TJUE. Más aún, en los casos de sistemas integrados de atribución de competencias, como ocurre en el ámbito europeo, nos encontramos con

---

<sup>(251)</sup> Cuerpos normativos: a) Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Modificado respectivamente por los Convenios de Adhesión; b) Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Amplía el ámbito de aplicación del Convenio de Bruselas de 1968 a determinados Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio; c) Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Sustituido por el Convenio de Bruselas de 1968 y firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005, d) Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), y finalmente Reglamento (UE) No. 1215/2012 del 12 de diciembre del 2012.

la posibilidad de que existan sendas diferencias en los modelos de Derecho Internacional Privado que se encuentran vigentes en cada Estado <sup>(252)</sup>. Por esta razón el principio de proximidad razonable debe ser revisado para casos de daños ambientales y civiles asociados atendida la especificidad que los criterios de protección ambiental aportan a la perspectiva de la víctima.

Un concepto relacionado con el principio de proximidad razonable es el de “previsibilidad” en el título de jurisdicción. Cuando hablamos de proximidad también realizamos un juicio sobre el grado de previsibilidad en el sistema. En efecto, el sistema de distribución de competencias jurisdiccionales debe ser previsible para las partes. En el sistema europeo, la asociación del vínculo de conexión por la definición del lugar del hecho dañoso. Hace que los riesgos por la comisión del delito sean atribuidos a la parte que comete el hecho dañoso. Los resultados esperados, son: reducción de los conflictos de competencia, uniformidad del sistema comunitario, e incluso la apertura de un mercado del riesgo asociado al funcionamiento de un sistema internacional de seguros. Estos beneficios son innegables para los casos de daño ambiental internacional.

Por su parte, la jurisprudencia del TJUE <sup>(253)</sup> y el Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(254)</sup>, se refieren a la “carga de la internacionalidad jurisdiccional”, íntimamente ligada con el juicio de “previsibilidad” que tuvo el demandado, tanto en la comisión del daño, como en su localización.

En efecto, en el caso *Jakob Handte vs. Mecano Chimiques*, el TJCE se apoyó en el Informe de expertos que fue presentado cuando se elaboró el Convenio de Bruselas de 1968 <sup>(255)</sup>. La sentencia subrayó que:

---

<sup>(252)</sup> Existen modelos de derecho Internacional privado vigentes en países europeos de naturaleza muy heterogénea. Unos están basados en la soberanía, otros en la justicia privada o en normas abstracto generales.

<sup>(253)</sup> STJCE C-26/91 asunto *Jakob Handte vs. Mecano Chimiques*. STJCE C-440/97 asunto *GIE Groupe Concorde y otros vs. Capitaine commandant le navire “Suhadiwarno Pnajan” y otros*. STJCE C-96/00 asunto Rudolf Gabriel. STJCE C-256/00 asunto Besix. STJCE C-334/00 asunto *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA*.

<sup>(254)</sup> Considerando 15º del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

<sup>(255)</sup> Publicado en el DO 1979, C-59, p. 1.

*"Al establecer las reglas de competencia comunes, el Convenio tiene [...] por finalidad garantizar, [...] en el ámbito que debe regular, un verdadero ordenamiento jurídico que debe llevar a la mayor seguridad. Con este espíritu, la codificación de las normas de competencia contenidas en el Título II define cuál es, teniendo en cuenta todos los intereses concurrentes, el Juez territorialmente más cualificado para conocer de un litigio" (traducción no oficial).*

La sentencia de 17 de junio de 1992, resolvió un problema de productos defectuosos señalando que aquello que una jurisdicción que no era previsible para las partes era incompatible con el principio de seguridad jurídica <sup>(256)</sup>.

Asimismo, en el caso *GIE Groupe Concorde y otros vs. Capitán del buque «Suhadiwarno Panjan» y otros*, el TJCE señaló tal como ya lo había hecho en el asunto *Owens Bank* <sup>(257)</sup> que:

*"En tales circunstancias, debe subrayarse que el principio de seguridad jurídica constituye uno de los objetivos del Convenio de Bruselas".*

Por su parte, en materia de daños ambientales internacionales, resulta de sumo interés la asociación que se hace sobre la carga de la internacionalidad procesal con el juicio de reproche que recae sobre el demandado en materia de previsibilidad del daño. En efecto, en materia ambiental, la previsibilidad está asociada al conocimiento científico disponible y es abordada desde la perspectiva de la negligencia, configurándose como uno más de los elementos de la obligación extracontractual.

En materia competencial en cambio, el juicio de reproche alude a la mediana previsibilidad que el demandado pudo tener en la comisión del resultado dañoso y de cómo este último terminó extendiéndose a otro Estado, afectando con ello el vínculo de conexión con la jurisdicción.

---

<sup>(256)</sup> STJCE C-26/91 asunto *Jakob Handte vs. Mecano Chimiques*, considerando 9: "(...) Hay que reconocer que, en una situación como la contemplada en el litigio principal, la aplicación de la regla de competencia especial, establecida en el punto 1 del artículo 5 del Convenio, al litigio entre el subadquirente de una cosa y el fabricante no es previsible por este último y, por ello, es incompatible con el principio de seguridad jurídica."

<sup>(257)</sup> STJCE C-129/92, asunto *Owens Bank*, sentencia de 20 de enero de 1994 Rec. p. I-117, apartado 32



Por su parte, el daño ambiental puede verificarse a distancia del lugar de origen o manifestar sus consecuencias mucho tiempo después de haber ocurrido el hecho principal. Así, todo lo anterior, viene a incidir en el juicio de previsibilidad y por ello estimamos indispensable que el juez realice el “juicio de razonabilidad”, en forma separada al de “previsibilidad”, considerando a este último como un vínculo distinto. Por su parte, siendo la previsibilidad parte del juicio de reproche sobre la conducta del demandado, se desarrollará mejor, si es asistida como elemento de la obligación extracontractual.

Finalmente, en la doctrina los profesores VIRGOS SORIANO y GARCIMARTÍN ALFÉREZ <sup>(258)</sup> denuncian el riesgo de apertura de foros basados en competencias limitadas, cuando el juicio de razonabilidad se entrega a “criterios materiales” fundados en la imputabilidad del caso en concreto. De esta forma, nace el riesgo de abrir foros especiales derivados de vínculos puntuales con un determinado Estado con competencias limitadas, los que obedecen, en general, a un fenómeno mayor: a los foros especiales en razón de la materia.

La proliferación de foros especiales en razón de la materia obliga al análisis en detalle de la extensión del vínculo que alega el demandante. En nuestro caso, existe un foro especial (lugar donde se produjo o pudiere producirse el hecho dañoso), cuyas competencias no están limitadas, teniendo la aptitud de desplazar al foro general (domicilio del demandado); y que, por tales motivos propende al conocimiento de todas las dimensiones del caso. De aquí la importancia de contar con la mayor certeza posible sobre el lugar donde se produjo o pudiere producirse el hecho dañoso <sup>(259)</sup>.

Por tanto, y atendidos los matices que se evidencian en materia de daños civiles asociados a daños ambientales internacionales, resulta que el principio de proximidad razonable, exige contar con ciertas características:

---

<sup>(258)</sup> Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Francisco, *ob, cit*, p.75.

<sup>(259)</sup> Riesgos asociados a la apertura de foros especiales en razón de la materia en Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Francisco, *ob, cit*, p. 132.

*En primer lugar*, desarrollar el principio de proximidad asegurando la neutralidad y la prudencia a fin de que pueda asegurarse el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, tanto para demandante como para demandado.

*En segundo lugar*, cuando hablamos de razonabilidad nos estamos refiriendo a evitar los extremos que se producen en las posiciones de competencia por exceso y de competencia por defecto. En dichos casos se evidencian efectos nocivos para el buen funcionamiento del sistema comunitario <sup>(260)</sup>. Sin embargo, la razonabilidad en el vínculo no sólo deberá obedecer al efecto útil del sistema de distribución de competencias <sup>(261)</sup>, sino además, a cumplir los fines de justicia ambiental señalados por el constituyente y por el legislador comunitario. Al respecto, el profesor FERNÁNDEZ ARROYO <sup>(262)</sup> ha señalado que el juicio de razonabilidad conforme al cual debiera inclinarse la balanza en la ponderación de los intereses de alguna de las partes de la relación jurídica internacional debe realmente obedecer a una política que esté asociada a los “valores superiores del ordenamiento”. Este argumento, puede justificar también en algunos casos a los denominados “foros de protección”. Por su parte, el Derecho Internacional Privado no es proclive a la apertura de foros especiales. De hecho, este es el principal conflicto con el que nos encontramos en los casos de juicios de indemnización por daño civil internacional asociado a un daño ambiental. Asimismo, y como lo señala el profesor ROMERO SEGUEL, el Derecho Internacional Privado tradicional tampoco es proclive a la creación de los llamados “foros exorbitantes” <sup>(263)</sup>.

---

<sup>(260)</sup> Perspectiva general sobre la previsión normativa y contextualizada de las reglas de competencia judicial internacional en la autora: Rodríguez Jiménez, Sonia, “La Competencia Judicial Internacional. Dos aspectos para reflexionar”, *Revista de la Facultad de Derecho de México*, número 251, 2009, pp. 313-350.

<sup>(261)</sup> En razón del efecto útil del sistema de distribución de competencias comunitario, tenemos que la jurisprudencia del TJUE ha rechazado sistemáticamente la doctrina del *forum non conveniens* propio del *Common Law* y ha prohibido las *antisuit-injunctions*.

<sup>(262)</sup> Ver: Fernández Arroyo, Diego, “Competencia internacional exclusiva y exorbitante de los jueces de los Estados miembros de la Unión Europea ¿hasta cuándo?”, *Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, número 34, 2004, p.61.

<sup>(263)</sup> Romero Seguel, Alejandro, “La falta de jurisdicción y la denuncia en el proceso: las excepciones procesales y materiales”, *Revista Chilena de Derecho*, Vol. 31, número 1 2004, p.187

## 6.- Conclusiones.

1.- Nos propusimos realizar un análisis y sistematización de los fueros para daños ambientales. Advertimos la cantidad y variedad de situaciones que pueden dar lugar a vínculos de conexión entre los hechos y un tribunal. Además de la cantidad las situaciones probables, advertimos heterogeneidad, que puede llevarnos a escenarios bastante complejos.

Consideramos que uno de los aportes más relevantes de esta investigación guarda relación con la sistematización de los vínculos de conexión por criterios. Consideramos también que este estudio constituye un aporte para la Teoría General de la Competencia Judicial Internacional. La propuesta de categorización presentada en el cuerpo de este estudio está fundada en base a un análisis “en abstracto” de los vínculos de conexión, que puede ser utilizada en forma general.

Del análisis de los fueros se proponen las siguientes categorías de vínculos:

i) *Vínculos que se relacionan con los elementos de la obligación extracontractual.* Aquí tenemos: a) los sujetos involucrados, b) el daño ocasionado, c) la acción causante del daño y d) la negligencia (según el modelo de responsabilidad ambiental que se trate).

ii.-) *Vínculos que se relacionan con los elementos de la relación procesal internacional.*

Aquí tenemos: a) el domicilio de las partes, b) la ley procesal aplicable, c) la ley de fondo aplicable, d) el lugar de ejecución de la sentencia, e) el lugar de producción de pruebas, y f) el lugar donde se practicarán medidas cautelares.

En suma, lugares que aconseja la economía procedimental.

iii.-) *Vínculos nacidos de criterios generales de imputación de riesgos dentro de la lógica del Derecho Internacional Privado.*

Aquí tenemos: a) la prioridad reconocida a la autonomía de la voluntad, b) la valoración de la buena fe de los litigantes internacionales, c) el beneficio de las cargas de la prueba para una de las partes, d) existencia de presunciones, y e) la protección de la apariencia de buen derecho.

iv.-) Finalmente *vínculos que son una respuesta a la demanda de flexibilidad del sistema*. Tales vínculos se justifican en base al derecho de tutela judicial efectiva. Es el caso del llamado: foro de necesidad.

2.- En este capítulo hemos presentado las diferencias que existen entre las obligaciones internacionales extracontractuales civiles y ambientales.

Del análisis, concluimos que no parece razonable insistir en el mismo tratamiento de las clases de obligaciones extracontractuales, en base a la aplicación del mismo fuero de competencia. En efecto, la falta de un fuero especial para obligaciones de naturaleza ambiental no es razón suficiente para utilizar los mismos criterios en la determinación del vínculo utilizado en casos de obligaciones civiles *strictu sensu*.

Por este motivo, hemos sentado las características que diferencian a ambos tipos de obligaciones (obligaciones civiles *strictu sensu* y obligaciones ambientales) a fin de fundar un sistema de distribución de competencia propio para las obligaciones civiles asociadas a un daño ambiental.

3.- Finalmente, atendida el sistema de responsabilidad ambiental instaurado por la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, nos encontramos con la necesidad de que los presupuestos de competencia, tanto para de la autoridad administrativa competente, como para la autoridad judicial competente (en los términos técnicos propios de la Directiva) sean unívocos al menos en sus principios.

Esto quiere decir que la víctima civil de daño ambiental debe gozar de los beneficios de una adecuada comunicación y coordinación entre autoridades administrativas y autoridades judiciales de los distintos Estados en los cuales se encuentre o bien el hecho generador o bien el daño.

El reconocimiento de los actos judiciales y de los actos administrativos emanados de autoridades de otro Estado debe estar inspirado en el resguardo al interés más importante: asegurar la mayor protección ambiental posible.

De esta forma, consideramos que los actos que provienen de otras autoridades extranjeras competentes deben ser considerados *acta iure gestionis* en el país en el que se pide que tengan efecto, debiendo asegurarse:

- a) la posibilidad de que los particulares recurran las resoluciones dictadas por las autoridades extranjeras y
- b) el reconocimiento y cumplimiento de las medidas dictadas en otro Estado.

## **SEGUNDA PARTE**

### **FOROS DE COMPETENCIA PARA DAÑOS CIVILES RELACIONADOS A UN DAÑO AMBIENTAL**



*“Si alguna vez hubiera un momento para actuar con un espíritu de multilateralismo renovado, un momento para crear unas Naciones Unidas de acción colectiva genuina, sería ahora”.*

Ban Ki-Moon

(Secretario General de Naciones Unidas. Sobre Cambio Climático. 2009)





## SEGUNDA PARTE

### **FOROS DE COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL PARA DAÑOS CIVILES RELACIONADOS A UN DAÑOS AMBIENTAL**

#### CAPÍTULO I

#### DEL HECHO DAÑOSO Y DE LA REGLA DE UBICUIDAD

##### *Sumario:*

1.- Antecedentes. 2.- Del foro general: domicilio del demandado. 3.- Del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. 4.- Concepto de hecho dañoso. 5.- La Regla de Ubicuidad. 6.- Problemas para aplicar la Regla de ubicuidad: concurrencia de daños civiles y daños ambientales. 7.- Regla de ubicuidad: evolución jurisprudencial en el TJUE. 8.- Pauta para determinar la extensión de los daños internacionales civiles y ambientales: la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo. 9.- Problemas ocasionados de la disociación espacial entre el hecho generador y el daño. 9.1.- Del riesgo del *forum shopping*. 9.2.- *Forum necessitatis* y foros de protección. 9.3.- Problemas con la doctrina del *forum non conveniens*. 9.4.- Prohibición de *anti-suit injunctions*. 10.- Interpretación extensiva del fuero especial para delitos y cuasidelitos. Principio *favor laesi*. 11.- La “parte más débil” de la relación internacional: jurisprudencia y análisis para daños ambientales. 11.1.- Asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV* (STJCE, C-463/06). 11.2.- Asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse* (STJC -347/08). 12.- Conclusiones.

---

#### **1.- Antecedentes.**

El artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012, señala:

*“Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: 3. En materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”.*

Por tanto, para determinar si un tribunal tiene CJCI sobre un caso de daño ambiental internacional, cuya naturaleza jurídica es de responsabilidad extracontractual, deberá comenzar con la determinación del más importante de los elementos de dicha relación

extracontractual: el lugar del hecho dañoso. En efecto, según el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 este elemento es el que condiciona la determinación del tribunal competente <sup>(264)</sup>.

La gran mayoría de los casos de responsabilidad extracontractual no presentan dificultades al momento de determinar el lugar donde se ha producido o pudiere producirse el hecho dañoso. En efecto, aun cuando la relación extracontractual internacional se caracteriza por tener los elementos del ilícito ubicados en distintos Estados, la determinación del lugar del hecho dañoso representa, por regla general, es una realidad constatable y acreditable; es decir, es un dato fáctico y reconocible que señala casi inmediatamente el lugar donde se encuentran ubicados los intereses, bienes y personas afectadas. Desde esta perspectiva, la identificación del tribunal con CJCI, no debiera significar ningún problema.

Sin embargo, existen casos en los cuales el lugar del daño está *plurilocalizado*; es decir, el lugar del hecho generador y el lugar donde se manifiestan las consecuencias se encuentran disociados espacialmente en más de un Estado <sup>(265)</sup>. El mismo hecho generador puede haber producido distintos daños que se extienden a otros Estados, en los cuales ha manifestado sus consecuencias <sup>(266)</sup>. Tales daños

---

<sup>(264)</sup> El Reglamento (UE) No. 1215/2012 del 12 de diciembre del 2012, reemplazó al Reglamento 44/2001 Bruselas I, el que a su vez sustituyó al Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Dicho Convenio señalaba: “Artículo 5. *Las personas domiciliadas en un Estado contratante podrán ser demandadas en otro Estado contratante: 3. En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso*”. Para leer el cuerpo del documento ver la versión consolidada del Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicado en el DOCE número 27 de fecha 26 de enero de 1998. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41998A0126:ES:NOT>

<sup>(265)</sup> Sobre este tema ver las primeras observaciones que se hicieron a la primera sentencia del entonces TJCE que establecía la Regla de Ubicuidad en: Bourel, Pierre, “Nota a la STJCE 30 noviembre 1976, *Bier/ Mines de Potasse d’Alsace*, asunto 21/76”, *Revue Critique de Droit International Privé*, T. III, 1977, p. 568.

<sup>(266)</sup> Fuentes y antecedentes sobre los debates en la adopción del artículo 5, apartado 3 del Reglamento 44/2001, Bruselas I, en relación con la propuesta para el Reglamento 864/2007 Roma II en: Fach Gómez, Katia, “Respuestas Jurídicas a la contaminación transfronteriza: iniciativas comunitarias”, *Comunicaciones Técnicas al VI Congreso Nacional del Medio Ambiente*, Ponencia

plurilocalizados pueden afectar a la más amplia gama de bienes e intereses. Por esta razón, y sin desconocer el amplio espectro de procedimientos que se aplican para tutelar tales intereses, nuestra aproximación corresponde a una perspectiva civil del daño ambiental. Ahora bien, escapa de nuestro análisis el objeto de la reparación, esto es, la indemnización civil; por considerar que tal aspecto de la responsabilidad extracontractual le corresponde a la legislación de fondo aplicable. Nuestro objeto de interés, en cambio, es la CJCI para conocer de los daños civiles asociados a daños ambientales internacionales. Este tema supone que tanto daños civiles, como daños ambientales son causados por un mismo hecho generador imputable a un privado y perseguible al amparo del Derecho Internacional Privado. De esta forma, en este capítulo se abordarán criterios aplicables a daños civiles asociados a daños ambientales. Criterios que no se aplican a otras clases de daños civiles extracontractuales y que provienen de la aplicación de la regla de ubicuidad. Asimismo, se tratará sobre la mayor o menor vinculación entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo de la acción.

Por otra parte, resulta complejo identificar un daño ambiental que por sí mismo pueda caracterizarse como plurilocalizado. En efecto, salvo los casos de contaminación más grave (generalmente por radiación atómica o contaminación marítima por hidrocarburos que corresponden a sectores especializados de la responsabilidad ambiental internacional y que escapan de este estudio) el daño ambiental internacional común (contaminación de un río internacional, vertimiento de líquidos percolados en napas subterráneas que cruzan la frontera, humo y gases tóxicos trasladados por el viento, etc.) en cambio, suele asociarse exclusivamente al daño transfronterizo. No obstante lo anterior, la evidencia científica nos demuestra cada día en forma más clara cómo existe una delicada relación sinérgica entre los

---

concluida el 15 de Septiembre de 2002, pp. 9-10. Disponible en [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/rome\\_ii/katia\\_fach\\_gomez\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/rome_ii/katia_fach_gomez_es.pdf) [revisado 24 de marzo 2010].

elementos de la naturaleza <sup>(267)</sup>, y cómo pueden resultar afectados bienes y personas a gran distancia del lugar donde se produjo el hecho generador <sup>(268)</sup>.

En este sentido, el concepto de “hecho dañoso”<sup>(269)</sup> pone de manifiesto la importancia que tienen los conceptos: hecho generador y resultado dañoso, para la caracterización de un daño plurilocalizado.

## 2.- Del foro general: domicilio del demandado.

El fuero territorial domicilio del demandado llamado también *actor rei forum sequitur* <sup>(270)</sup>, es un principio general recogido desde el Convenio de Bruselas de 1968 y consolidado en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 desde su antecesor, el

---

<sup>(267)</sup> Vgr. El Agujero de Ozono en la Antártida, se debe a causas climatológicas y químicas, (teoría dinámica), que permitieron en la zona acumulación de monóxido de cloro que, interactuando con rayos ultravioleta provenientes del espacio, provocan reacciones destructoras del ozono en las denominadas zonas químicamente perturbadas ubicadas solo en la Antártida. Sin embargo, el origen final de este fenómeno está asociado a la acumulación de clorofluorocarbonos en la atmósfera, que son expulsados a la atmósfera terrestre en su mayoría por los países más desarrollados. Perspectiva sistémica del daño en: Medina Ávila, Luis, “Calentamiento global antropogénico”, *Revista OIKOS*, año 13, número 27, 2009, pp. 125 – 145. Kriner, Alicia, Cerne, Bibiana Castorina, José Antonio, “El adelgazamiento de la Capa de Ozono: algunos obstáculos para su aprendizaje”, *Revista electrónica de enseñanza de las ciencias*, Vol. 2, número. 2, 2003, pp. 136-154.

<sup>(268)</sup> Sobre la extensión del daño Cfr.: Diamond, Jared , *Colapso*, Debate, Barcelona, 2006. Duarte, Carlos (coordinador), *Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra*. CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Madrid, 2006. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), *Working Group III Report: Mitigation of Climate Change*, in: *Climate Change 2007 IPCC, Fourth Assessment Report (AR4)*. Accesible en: <http://www.ipcc.ch/>. Lomborg, Bjorn, *The skeptical environmentalist. Measuring the Real State of the World*, Cambridge University Press, 2001. Sachs, Jeffrey, *Economía para un planeta abarrotado*, Debate, Barcelona, 2008 (Edición en inglés del mismo año titulada: *Common Wealth: Economics for a Crowded Planet*). Vilches, Amparo, Gil Pérez, Daniel, Toscano, Juan Carlos y Macías, Óscar, *21 Temas de acción clave que ofrecen una documentación puesta regularmente al día acerca de los problemas estrechamente vinculados a los que la humanidad ha de hacer frente hoy (como, entre otros, “Cambio climático”, “Contaminación sin fronteras”, “Biodiversidad”, etc.), sus causas y medidas necesarias para hacerles frente*, 2008. Disponible en [www.oei.es/decada](http://www.oei.es/decada) [revisado 27 de enero del 2012].

<sup>(269)</sup> Sobre ilícitos civiles a distancia ver: Gaudemet-Tallon, Hélène, “Note a la STJCE 11 de enero de 1990, Dumez France y Tracoba, C- 220/88”, *Revue Critique de Droit International Privé*, Vol. II, 1990, p. 372.

<sup>(270)</sup> Principio *Actor rei forum, sive in rem sive in personam sit actio, sequitur*. Del Corpus Iuris Civilis 3,19,3.

Reglamento 44/2001 Bruselas I <sup>(271)</sup>). En efecto, el Considerando 15º del Reglamento (UE) No. 1215/2012 señala:

*“Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.”*

Obliga al demandante a presentar la demanda ante el domicilio del demandado. Como principio, es garante de la previsibilidad en las reglas de competencia judicial internacional y propende a fines de seguridad jurídica en el título de jurisdicción establecidos por la propia jurisprudencia del TJUE <sup>(272)</sup>.

A modo de ejemplo, enunciemos el asunto *Shearson Lehman Hutton* <sup>(273)</sup>, que estableció que sólo por excepción al principio general establecido en el Convenio de Bruselas de 1968, en casos “enumerados de forma exhaustiva en las Secciones 2 a 6 del Título II”, el demandado domiciliado en un Estado contratante podía ser demandado ante los Tribunales de otro Estado. De tal forma que sólo las excepciones en base a reglas de competencia especial o en los casos en los cuales corresponde aplicar una regla de competencia exclusiva o de prórroga de competencia, procede alterar la regla general que ratifica el apartado 14 de la sentencia, que señala:

*“A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que, en el sistema del Convenio, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado contratante en el que el demandado*

---

<sup>(271)</sup> Este Principio está recogido en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 y en el Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988, Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, Convenio de 30 de octubre de 2007 y actualmente también se encuentra reconocido en el Reglamento (UE) No. 1215/2015 todos ellos relativos a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

<sup>(272)</sup> Ver el desarrollo del foro general domicilio del demandado en la jurisprudencia: STJCE C-265/02, Rec. p. I-1543, asunto *Frahuil*, apartado 23. STJCE C-103/05, Rec. p. I-6827, asunto *Reisch Montage*, apartado 22. STJCE C-98/06, Rec. p. I-8319, asunto *Freeport*, apartado 34.

<sup>(273)</sup> STJCE, C-89/91, Rec. p. I-139, asunto *Shearson Lehman Hutton*, apartado 14.

*tiene su domicilio constituye el principio general, enunciado en el primer párrafo de su artículo 2.”*

Por su parte el criterio del domicilio suele no estar consagrado en las normas internas de los Estados, como una norma de conflicto, sino como una norma que resuelve el fondo del asunto <sup>(274)</sup>. Así, el domicilio, que las leyes internas definen como: “la residencia con ánimo de permanencia” <sup>(275)</sup>, se refiere a un concepto que alude al asentamiento jurídico de máxima importancia a diferencia de la residencia, la que está despojada de toda consideración sobre las condiciones legales del asentamiento, o del animus de permanencia individual. De esta forma, mientras el domicilio reafirma la trascendencia del estatus de una persona respecto de un determinado territorio, en la residencia, se atiende al hecho físico <sup>(276)</sup>.

En el plano judicial encontramos el mismo planteamiento en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea <sup>(277)</sup> en sede de cooperación judicial en materia civil en materia matrimonial y de responsabilidad parental <sup>(278)</sup>.

Sin embargo, tal como se desprende del propio Reglamento (UE) No. 1215/2012 , existen excepciones en las cuales la materia del litigio o la autonomía de

---

<sup>(274)</sup> Rodríguez Benot, Andrés, “El criterio de conexión para determinar la ley personal: un renovado debate en derecho internacional privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número1, 2010, pp. 186-202.

<sup>(275)</sup> Cfr.: a) Code Civil Francés: Art. 102. “*El domicilio de los franceses en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles, es en el pueblo en que tengan su principal establecimiento*”. Art. 103. “*Se entenderá cambiado el domicilio, cuando realmente se habite en otro punto, con intención de fijar en él su principal establecimiento*”; b) Código Civil español: Art. 40, párr. 1º: “*el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual*”, c) Codice Civile italiano: Art. 43. “*Domicilio e residenza. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi (Cod. Proc. Civ. 139, constit. 14). La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale*”.

<sup>(276)</sup> Para profundizar sobre el concepto revisar las aportaciones del Profesor Espinar Vicente en: Espinar Vicente, José María, *Nacionalidad y Extranjería en Tratado Elemental de Derecho Internacional Privado*, Universidad de Alcalá, Madrid, 2008. Espinar Vicente, José María, *La nacionalidad y extranjería en el sistema jurídico español*, Madrid, Civitas, 1994.

<sup>(277)</sup> STJUE C-523/07, asunto *Korkein hallinto-oikeus*.

<sup>(278)</sup> Reglamento (CE) No 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000.

las partes, justifica otros vínculos de conexión distintos del domicilio del demandado. Según el Reglamento (UE) No. 1215/2012 los fueros que constituyen competencias especiales en razón de la materia, habilitan el actor para que ejerza su acción en un lugar distinto al domicilio del demandado.

En efecto, el Considerando 16 del Reglamento señala:

*“El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación”.*

Tal es el caso del fuero especial establecido en el artículo 7.2, que permite la presentación alternativa de una demanda en el lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso. Así ha sido entendido por la jurisprudencia <sup>(279)</sup>.

En nuestro caso, bajo la ocurrencia de un hecho generador que ha producido daños extracontractuales civiles y ambientales, la coherencia con el foro general domicilio del demandado, nos obliga a realizar interpretaciones restrictivas de los vínculos de conexión entre el lugar del daño y el tribunal llamado a conocer de ellos. Sin embargo, por el hecho de estar comprometidos daños civiles y daños ambientales, el análisis sobre el vínculo de conexión debe realizarse en forma separa para cada tipo de daño. Es decir, mal puede casarse la competencia judicial para el conocimiento de daños civiles a la eventual correspondencia con la competencia para daños ambientales. Una operación distintiva entre la competencia que corresponde a ambas clases de daños no afecta, en nada, al principio general *actor rei forum sequitur*.

En efecto, lo directo y restrictivo de la interpretación del vínculo especial de competencia en razón del daño, justificado en la previsibilidad del título de

---

<sup>(279)</sup> STJCE C-26/91, asunto *Handte*, Rec. p. I-3967, apartado 14. Asimismo, Informe del Abogado General Jenard relativo al Convenio de Bruselas de 1968, DO 1979, C 59, p. 18. Texto en español, DO 1990, C 189, p. 138.



jurisdicción no puede desconocer que el foro especial ha sido establecido precisamente en razón de la situación de la víctima de un resultado dañoso, y no en razón de la situación del demandado. Incluso, algunos autores han visto en la excepción al fuero domicilio del demandado una “defensa tuitiva que pretende facilitar la defensa procesal de los intereses aparentemente más débiles” <sup>(280)</sup>.

En este sentido los fueros de competencia especial presentan la característica de alternatividad <sup>(281)</sup> respecto del fuero domicilio del demandado y se caracterizan por otorgar un derecho de opción al demandante. En nuestro caso, por ser víctima de un hecho dañoso. Por su parte, establecer discriminaciones entre los hechos dañosos (máxime si son de distintas categorías) va más allá de la letra y espíritu del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que no ha establecido diferencias entre delitos y cuasidelitos regulados por el artículo 7.2.

Este aspecto caracteriza al modelo europeo y le imprime un carácter interpretativo sustancial; en oposición, por ejemplo, al modelo estadounidense de unificación de las reglas de competencia; en el que la cláusula del *due process of law* parte de la posición desfavorable del demandado, a quien presume en desventaja, par y acto seguido establece una vinculación entre el demandado y el foro; en el modelo europeo, en cambio, el vínculo determinante ha evolucionado hacia el lugar del

---

<sup>(280)</sup> Reinoso Barbero, Fernando, “Foro de conveniencia, derecho de conveniencia y nulidad”, *Revista de Derecho UNED*, número 4, 2009, p. 330.

<sup>(281)</sup> El problema de la alternatividad también se encuentra en otro fuero: el del artículo 8º del Reglamento (UE) No. 1215/2012, el que también justifica una excepción a la regla *actor rei forum sequitur*. Ver: Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger, presentadas el 8 de diciembre de 2005, C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros*, Considerando 95: “En efecto, la aplicación del artículo 6, punto 1, de dicho Convenio depende de una decisión sólo del demandante y no del juez. Además y correlativamente, aunque esta decisión puede descansar en principios de economía procesal, puede basarse también en consideraciones más discutibles, relativas a las exigencias derivadas de una buena administración de la justicia y de la sustanciación adecuada del proceso, que las que llevan a un demandante, en virtud del artículo 5, punto 3, de dicho Convenio, a presentar su demanda ante el tribunal del lugar del hecho dañoso o de materialización del daño, en lugar de ante un tribunal del Estado contratante del domicilio del demandado”.

hecho dañoso <sup>(282)</sup>. Por tanto, en el modelo europeo la coherencia debe buscarse respecto de los lugares donde se manifiesta el hecho dañoso y no en razón del domicilio del demandado, como algún sector de la doctrina ha pretendido hacer a objeto de justificar interpretaciones restrictivas de la regla de ubicuidad.

### **3.- Del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.**

El artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 supone dos dimensiones fundamentales para la comprensión del precepto: a) determinar qué se entiende por “materia delictual y cuasidelictual”; y b) qué se entiende por “lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”. A continuación abordaremos la segunda dimensión.

Previamente algunas consideraciones. Al no existir, en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 un concepto de obligación extracontractual, resulta que el énfasis que el intérprete debe poner en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 radica en la determinación del hecho dañoso, como punto de conexión definitorio de la CJCI de un tribunal. Por tanto, estarán al servicio del lugar del hecho dañoso, los criterios de: economía procesal, uniformidad en la aplicación del Derecho Comunitario, imputación de los riesgos e incluso la apertura de un foro de necesidad (*forum necessitatis*) especialmente en casos que involucren relaciones con países extracomunitarios <sup>(283)</sup>.

Por otra parte, determinar el lugar del hecho dañoso reviste gran importancia porque fija los puntos de conexión tanto con los tribunales de los lugares donde se

---

<sup>(282)</sup> Bajo ciertas circunstancias el modelo europeo podría ser inconstitucional a la luz del modelo estadounidense. Ver De Miguel Asensio, Pedro Alberto, *ob cit*, pp. 16-60; citando en este punto a Silberman, L, “Comparative Jurisdiction in the international context: will the proposed Haged Convention be Stalled”, *DePaul Law Review*, Vol. 52, 2002, p.331.

<sup>(283)</sup> El *forum necessitatis* garantiza que en los casos en los cuales ningún tribunal de un Estado miembro sea competente, entonces los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros puedan, en casos excepcionales, conocer del litigio si no cabe la posibilidad razonable de iniciar o tramitar una acción o ello resulta imposible en un tercer país con el cual el litigio guarda una estrecha relación. Cfr. Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) N° 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Bruselas, COM(2009) 175 final, 21 de abril del 2009.

originaron los daños como con los tribunales donde se manifestaron las consecuencias lesivas. Así, en materia de daños ambientales, el lugar del hecho dañoso puede estar situado en más de un Estado a la vez y, con la acción del tiempo, extender sus efectos a otros Estados no considerados inicialmente. Por su parte, el daño civil presenta características propias en cuanto a sus consecuencias y extensión sobre bienes futuros, puede referirse también a la pérdida de oportunidades de negocio y al lucro cesante.

Cuando un juez es llamado a determinar su competencia sobre un “hecho dañoso”, fundándose exclusivamente en un “daño” que reviste características civiles y ambientales, deberá tomar en consideración que tal daño es el conocido “hasta ese momento” y que nada obsta que la magnitud de las consecuencias posteriores motive ampliar la demanda o que intervengan otras víctimas presentando sus demandas ante otros foros, con igual o mejor derecho del que se arroja el primer tribunal que ha entrado a conocer del asunto. El primer tribunal que conoce del asunto será normalmente aquél que se pronuncia sobre medidas cautelares y sobre medidas de protección. Suele coincidir con el tribunal donde se originó la catástrofe ecológica. Sin embargo, esta circunstancia no quiere decir que por esta razón sea el único competente para conocer de todas las dimensiones del “hecho dañoso”.

Asimismo, la naturaleza del daño ambiental obliga a tener en consideración el fin preventivo que debe inspirar a las decisiones judiciales. En efecto, el juez, no sólo es llamado a evitar la proliferación injusta de foros de competencia, que van en contra de los principios que el Derecho Internacional Privado comunitario ha declarado; también es necesario que el juez llamado a pronunciarse sobre su competencia cumpla con un fin disuasivo de futuros daños ambientales.

Este fin disuasivo ha sido anticipado por los autores del análisis económico del Derecho (entre los que destacaremos a CALABRESI, POSNER y MALLOY) los que, en materia de responsabilidad extracontractual, señalan el desplazamiento del interés jurídico (de fondo y procesal), desde un fin indemnizatorio a un fin social

preventivo <sup>(284)</sup>). Por esta razón desde un punto de vista instrumental, las normas de la responsabilidad civil internacional, y con ellas las normas procesales accesorias, también tienen un carácter preventivo. Las normas de la responsabilidad extracontractual propenden (por la vía prescriptiva) que los costos del daño superen los costos de la prevención <sup>(285)</sup>. Todo lo anterior explica por qué al interpretar el alcance de la expresión “hecho dañoso”, tanto el legislador comunitario como posteriormente el TJUE hayan entregado al demandante de un daño extracontractual plurilocalizado, un derecho de opción, entre el lugar de origen del daño y el lugar donde el daño manifestó sus consecuencias.

El juez deberá tener en consideración que las normas de responsabilidad civil internacional tienen un objetivo preventivo y, por tanto, cuando le corresponda determinar su CJCI también deberá hacer un balance sobre la eficacia de la prevención <sup>(286)</sup>. Tal es la importancia del fin preventivo que va ínsito en las normas de responsabilidad (normas de fondo y normas procesales). En este sentido, la doctrina <sup>(287)</sup> ha señalado que en aquellos casos en los cuales el daño está repartido en incontables víctimas que no tienen incentivo para demandar será el demandado quien

---

<sup>(284)</sup> Tendencias sobre la ética de la responsabilidad social, desde la perspectiva del análisis económico del Derecho en: Calabresi, Guido, *El coste de los accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil*, Ariel, Barcelona, 1970, p. 35. Posner, Richard, “El análisis económico del Derecho en el *Common Law*, en el sistema romano-germánico, y en las naciones en desarrollo”, *Revista de Economía y Derecho*, Vol. 2, número 7, 2005. Barros Bourie, Enrique, “La responsabilidad civil como derecho privado: notas sugeridas por la reseña de C. Rosenkrantz al Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, *Estudios Públicos*, número 112, 2008, pp. 309-338. Malloy, Robin Paul, *Derecho y Economía de mercado. Una nueva interpretación de los valores del Derecho y la Economía*. Trad. Carmen Albaladejo, María Cristóbal, Esteban Flamini, Marcial Pons, 2007, pp. 138-150. Breyer, Stephen G., “Razonamiento Económico y Revisión Judicial”, *Estudios Públicos*, número. 109, 2008, pp.37-55.

<sup>(285)</sup> Posner, Richard, *El análisis económico del Derecho* (Trad. Eduardo Suárez), Fondo de cultura económica, México D.F., 1998, p. 435.

<sup>(286)</sup> Ver Del Pozo Pérez, Marta “Reflexiones sobre la Red judicial europea en materia civil y mercantil e Iber-Red”, *La Ley*, número 6717 de 21 de mayo del 2007, pp. 1-5 y Cienfuegos Mateo, Manuel, *Efectos Jurídicos de las sentencias prejudiciales interpretativas del TJCE y su aplicación judicial en los Estados miembros*, Tesis para obtener el título de Doctor en Derecho, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 1995.

<sup>(287)</sup> Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, pp. 216-219 y pp. 242-243. Cadiet, Loïc, *Les métamorphoses du prejudice, en les métamorphoses de la responsabilité*, Sixième Journées René Savatier, Presses Universitaires, París, 1997, p. 42.

asuma un costo mayor por cada denuncia, comparativamente con el costo que le hubiera correspondido en caso de haber sido demandado por una sola víctima a la vez. Así también, justificamos que la carga de la internacionalidad del proceso recaiga sobre el demandado de un daño ambiental transfronterizo o transnacional.

Por otra parte, el fin preventivo de la responsabilidad extracontractual por daño ambiental, consiste en una política comunitaria que cruza transversalmente la aplicación de la legislación ambiental en la Unión Europea, tanto a nivel legislativo-nacional, como a nivel de interpretación judicial <sup>(288)</sup>. Es más, el hecho que la Comisión haya previsto participar en el financiamiento de un programa de formación judicial en Derecho Ambiental, intercambiando información para la coordinación y cooperación de redes judiciales <sup>(289)</sup>, demuestra la importancia del rol judicial preventivo a nivel nacional, extensible también a la interpretación del foro competente para conocer de un daño ambiental. El fundamento se encuentra en dos artículos: a) el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE, y b) en la utilización por los jueces nacionales del artículo 234 de dicho Tratado, los cuales prescriben:

Artículo 258 (Antiguo artículo 226 TCE). *Si la Comisión estimare que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones.*

*Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.*

Artículo 267 (antiguo artículo 234 TCE). *El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:*

*a) sobre la interpretación de los Tratados;*

---

<sup>(288)</sup> ver Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las regiones, sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria Bruselas 18 de noviembre del 2008 COM (2008) 773 final. Disponible en [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004\\_2009/documents/dv/com\\_com\(2008\)0773\\_/com\\_com\(2008\)0773\\_es.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/com_com(2008)0773_/com_com(2008)0773_es.pdf) [revisado el 19 de marzo de 2009].

<sup>(289)</sup> Tal es el caso del Foro Europeo de Jueces para el Medio Ambiente y la Asociación de Jueces Europeos de Derecho Administrativo.

*b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;*

*Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.*

*Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.*

*Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.*

Por esta razón el foro especial señalado en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no sólo establece un vínculo objetivo entre el hecho dañoso y el tribunal del lugar donde se produce o pudiere producirse el hecho dañoso. El artículo 7.2, también entrega subliminalmente la carga de la internacionalidad al demandado del daño extracontractual, en tantos lugares como consecuencias se hayan manifestado.

Finalmente, el objetivo reparatorio e indemnizador de la responsabilidad extracontractual coexiste con un objetivo punitivo estrechamente vinculado a la prevención <sup>(290)</sup>. Si bien, esta materia será objeto del Derecho aplicable al fondo del asunto conviene considerar que para el demandante la elección del tribunal competente obedecerá a la especial consideración que tenga sobre la integridad de la indemnización y las garantías de no repetición que le ofrezca una jurisdicción determinada. Para dar eficacia a la política comunitaria de responsabilidad extracontractual por daño ambiental internacional deberá entenderse que las normas del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sobre responsabilidad delictual y cuasidelictual son disuasivas.

---

<sup>(290)</sup> Es lo que se ha denominado “daños punitivos”. Ver: Cane, Peter, *The Anatomy of Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, 1997, p. 102. García Matamoros; Laura y Herrera Lozano, María, “El concepto de los daños punitivos o punitive damages”, *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, Universidad del Rosario, Año 5, número 1, Bogotá, pp. 211-229. Ruiz García, Juan, “Otra vuelta de tuerca a los daños punitivos”, *Revista para el Análisis del Derecho*, disponible en [http://www.indret.com/pdf/438\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/438_es.pdf) [revisado 7 de marzo 2010].

Esta proposición disuasiva de la responsabilidad extracontractual, no debe confundirse con los criterios de la legislación aplicable al fondo del asunto. En efecto, la sentencia *Marinari* <sup>(291)</sup> indicó que:

*“No fue intención del Convenio (Convenio de Bruselas de 1968) vincular las normas de competencia territorial del artículo 5, número 3, a las disposiciones nacionales relativas a los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual. La razón de todo ello es que una interpretación del Tratado según la cual haya que tener en cuenta el Derecho aplicable en materia de responsabilidad extracontractual hace depender de circunstancias inciertas la determinación del órgano jurisdiccional competente. Tal interpretación resulta incompatible con el objetivo del Convenio, consistente en establecer atribuciones de competencias ciertas y previsibles”.*

Por nuestra parte consideramos que es lícito recurrir a los fines de justicia perseguidos por la responsabilidad extracontractual (fines de justicia preventiva, retributiva y distributiva) entre los cuales se encuentran medidas disuasivas, porque tales fines son de general conocimiento y no varían de país de país. Mal podría alegarse que por tratarse de materias de competencia judicial, los procedimientos pueden desentenderse la política comunitaria de prevención y protección ambiental.

#### **4.- Concepto de hecho dañoso.**

Si seguimos la nomenclatura del Reglamento (UE) No. 1215/2012, el hecho dañoso parece equivaler a daño. En efecto, algunos autores como el profesor PALAO MORENO <sup>(292)</sup> han denunciado tempranamente la ambigüedad “deliberada” con la que fue redactada el precepto. Por su parte, cuando el daño es plurilocalizado, resulta que el problema en la localización del *forum loci delicti commissi* se agrava. En nuestro

---

<sup>(291)</sup> STJCE de 19 de septiembre de 1995 (C-364/93, Rec. p. I-2719. Asunto *Marinari*. Apartado 18

<sup>(292)</sup> Comentando la indecisión deseada de los autores del Reglamento 44/2001, y en nuestra perspectiva con criterios que resultan aplicables al actual Reglamento (UE) No. 1215/2012 ver: Palao Moreno, Guillermo *La responsabilidad civil por daños al medio ambiente*, Tirant Lo Blanch, Monografías Universitat de València, 1998, p.57, citando el Informe de P. Jenard “Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”, D.O.C.E., número C189/122 de 18 de julio de 1990, p. 145.

caso, la territorialidad del daño ambiental, no puede ser extrapolada al lugar donde se sufren los daños civiles. En efecto, unos y otros pueden estar ubicados en territorios geográficos muy distintos.

Asimismo la jurisprudencia del TJUE sobre el Reglamento Bruselas I aplicado a materias civiles y mercantiles tradicionales, antecesor del actual Reglamento (UE) No. 1215/2012, entendió por hecho dañoso: “daño patrimonial de quien alega un perjuicio”. Por su parte, no existe un concepto de hecho dañoso ambiental, sino sólo una aproximación a la noción de hecho dañoso, exclusivamente civil. En efecto, en el Asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa* <sup>(293)</sup> las Conclusiones del Abogado General son esclarecedoras sobre el problema:

*“44. Puede suceder que el lugar en el que sobreviene el daño en materia delictual o cuasidelictual no coincida con el lugar en el que se produce el hecho dañoso. En la sentencia Bier, el Tribunal de Justicia declaró que ambos lugares pueden constituir una conexión relevante a efectos de la competencia judicial. Cada uno de ellos puede, según las circunstancias, proporcionar indicaciones útiles desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso. A ello el Tribunal de Justicia añadió que elegir únicamente el lugar del acontecimiento causal llevaría, en un número apreciable de casos, a una confusión entre los distintos criterios de competencia previstos por el artículo 2 y el número 3 del artículo 5 del Convenio, de modo que esta última disposición perdería, por dicha razón, su efecto útil.”*

Por otra parte, tampoco existe una definición autónoma de obligación extracontractual. No encontramos una definición de los elementos de la obligación extracontractual, y por esa razón, no tenemos una definición de aquél elemento que nos interesa: el daño. En este sentido, tanto el Reglamento (UE) No. 1215/2012 como también el Reglamento Roma II, han reconocido que el concepto de obligación extracontractual varía de Estado en Estado. Por tanto, así varían también el sentido y el alcance de los elementos de la obligación extracontractual. Este problema, ha

---

<sup>(293)</sup> Muchas sentencias se han referido al tema, pero consideramos que son más ilustrativas las Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 31 de enero de 2002, Asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*. Apartado 44.



podido ser solucionado en el reglamento Roma II <sup>(294)</sup>, por la vía de los conceptos autónomos:

Considerando 11. “*El concepto de obligación extracontractual varía de un Estado miembro a otro. Por ello, a efectos del presente Reglamento, la noción de obligación extracontractual deberá entenderse como un concepto autónomo. Las normas de conflicto de leyes contenidas en el presente Reglamento deben aplicarse también a las obligaciones extracontractuales basadas en la responsabilidad objetiva*”.

Sin embargo, la creación de conceptos autónomos supone que el TJUE identifique los elementos mínimos comunes en todos los sistemas jurídicos y que establezca la limitación del concepto en razón de los fines perseguidos por el Derecho Comunitario, en armonía con la certeza y con la previsibilidad del sistema. No obstante, y como lo han advertido los profesores DE MIGUEL ASENSIO y GÓMEZ LIGÜERRE<sup>(295)</sup>, este tema no es pacífico y ha generado debate en la doctrina especializada.

Tratando de encontrar una salida al problema de la falta de definiciones, encontramos que el entonces TJCE señaló en la sentencia *Marinari* <sup>(296)</sup> que en el Convenio de Bruselas de 1968 no hubo intención de vincular las normas de competencia territorial del artículo 7.2 a las disposiciones nacionales sobre responsabilidad civil extracontractual. De lo que resulta que interpretar el Convenio de Bruselas de 1968 en base al Derecho aplicable al fondo del asunto, hace depender la determinación de la competencia a “circunstancias inciertas” propias de las

---

<sup>(294)</sup> Reglamento CE 864/2007, Roma II .Considerando 11.

<sup>(295)</sup> De la precisión del hecho dañoso y debates en otros temas Cfr. : De Miguel Asensio, Pedro, “Competencia Judicial en materia d indicaciones geográficas y denominaciones de origen”, en Ubertazzi y Muniz Espada (Coords.), “Le Indicazioni di Qualità degli alimenti”, *Diritto Internazionale ed europeo*, Giuffrè Editore, Milán, 2009, pp.13-18. De Miguel Asensio, Pedro Alberto, “La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional”, Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008. Universidad del País Vasco, Bilbao, 2008, pp. 365-446. Gómez Ligüerre, Carlos Ignacio, “Problemas de jurisdicción competente y de Derecho aplicable en pleitos de responsabilidad civil extracontractual”, *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, número. 2, Barcelona, 2009.

<sup>(296)</sup> STJCE C-364/93, Rec. p. I-2719, asunto *Marinari*. Apartado 18. Ver también Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 31 de enero de 2002, en el asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*. Apartado 42.

especificidades de cada sistema nacional. De esta forma, el principal objetivo del Convenio, que consiste en establecer reglas de competencias ciertas y previsibles, se vería seriamente amenazado.

Sin embargo, la falta de definiciones autónomas hace que resulte un poco utópico evitar los conceptos que emanan de la legislación de fondo, propios de la responsabilidad civil extracontractual. Tal circunstancia ocurre en nuestro tema: el tribunal llamado a pronunciarse sobre su CJCI se enfrenta al concepto de daño civil debiendo sortear un doble desafío, primero, distinguir entre daño ambiental y, segundo, determinar el daño civil. Este desafío obliga a recurrir a categorías conceptuales jurídicas porque ambas clases de daños derivan del mismo hecho generador al que se refiere el artículo 7.2 del Reglamento.

Por otro lado, existen definiciones de daño ambiental, que son debido a su amplitud resultan vagas y poco funcionales para la determinación de la CJCI. Así por ejemplo tenemos la definición que entrega el Reglamento CE 864/2007 Roma II <sup>(297)</sup>, el que señala:

Considerando 24: “*Por «daño medioambiental» debe entenderse el cambio adverso de un recurso natural, como el agua, el suelo o el aire, el perjuicio a una función que desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público, o un perjuicio a la variabilidad entre los organismos vivos.*”

Estas definiciones arrojan más dudas aún sobre la extensión de los hechos dañosos civiles asociados. En efecto, el medio ambiente abarca elementos naturales, pero también abarca elementos socio-culturales y las permanentes interacciones entre todos los anteriores.

Cosa distinta ocurre con el daño patrimonial *strictu sensu*, conforme al cual el objeto de la indemnización, satisface plenamente el derecho subjetivo conculcado.

---

( <sup>297</sup> ) Reglamento CE 864/2007 Roma II. Considerando 24. Concepto que debe complementarse con la Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, artículo 2 y considerandos 4,5 y 8, principalmente.

Así, teniendo definido el derecho subjetivo podemos conocer cuál es ha sido el bien jurídico afectado, el cual siempre guardará relación con la propiedad. Todo lo cual, redundará en un beneficio para la limitación del daño.

Cuando nos referimos a daños ambientales y a daños civiles que son concurrentes en el mismo hecho generador; tenemos que la amplitud del daño ambiental “contamina” la noción de daño civil extracontractual. Es así como nacen los debates sobre la limitación del daño civil.

El problema que surge entonces es: para determinar el hecho dañoso civil ¿debemos asociarlo necesariamente a un daño ambiental?

Para responder esta pregunta echemos un vistazo a las codificaciones civiles <sup>(298)</sup>, en las cuales se advierten dos tendencias en la delimitación del concepto de daño civil.

*Por un lado*, existen sistemas jurídicos que coinciden con los sistemas herederos de tradición francesa (Derecho francés, español, italiano) y romano-germana, en los cuales el daño civil extracontractual está asociado a un “derecho subjetivo” <sup>(299)</sup>. En estos sistemas la antijuridicidad del daño es la que da lugar a la responsabilidad extracontractual. Por tanto, el juicio de reproche civil, supone asociar necesariamente el daño civil a un daño ambiental. Esta perspectiva es muy útil si

---

<sup>(298)</sup> Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, p. 220.

<sup>(299)</sup> Dos ejemplos en: a) STS 3591/1998, Sentencia del Tribunal Supremo español de 14 de marzo de 2005. Procedimiento: casación, declara que: “*la protección del medio ambiente y la responsabilidad en que incurre quien lo menoscaba como bien de la colectividad difícilmente puede ser objeto de consideración en el ámbito del Derecho civil. Sólo un aspecto de la protección del medio ambiente, el que se refiere a la protección específica de derechos subjetivos patrimoniales, ha sido objeto de una reiterada jurisprudencia civil, que contempla, sustancialmente, inmisiones en fincas o propiedades vecinas*”; y b) STS 882/98, sentencia del Tribunal Supremo español de 28 de enero de 2004. Procedimiento: casación, interpreta el artículo 1908 del Código Civil conforme con el artículo 45.1 de la Constitución, señalando que exceden la formulación del precepto “*las inmisiones intolerables y al medio ambiente*”. Asimismo, consideró que no era misión del Derecho civil proteger el medio ambiente, sino bajo la “*protección específica a derechos subjetivos patrimoniales*” por agresiones ambientales. Asimismo, declaró que “*el cumplimiento de normativa reglamentaria no impide la apreciación de responsabilidad cuando concurre la realidad del daño causado por la persona física o jurídica*”, como lo fueron daños a propietarios de fincas y de cabezas de ganado por una intensa contaminación a base de fluorosis.

queremos permear al daño civil de la lógica del daño ambiental, vgr. de un principio *favor laesi* en beneficio del demandante civil.

*En otros sistemas*, en cambio (coincidentes con los sistemas del *Common law*) la noción de daño no está asociada a un bien jurídico <sup>(300)</sup>. Estos sistemas obedecen principalmente a la realidad fenomenológica. En tales casos la noción de daño civil adquiere notable amplitud, porque mira más a los “intereses” patrimoniales y extrapatrimoniales en juego, que a los fines de justicia ambiental que se encuentran detrás. Esta última tendencia ha sido objeto de numerosas críticas debido a la elephantiasis que ha originado en la teoría de la responsabilidad civil extracontractual.

Como se puede observar, la relación daño ambiental – daño civil adolece de problemas de delimitación que como se verá, más adelante, inciden en la determinación del tribunal competente.

Considerando la opinión de autores como CARBONNIER y CADIET <sup>(301)</sup>, la tendencia en el Derecho Civil contemporáneo es a la expansión de los intereses que se protegen a través de las acciones civiles de responsabilidad extracontractual. Por esta razón, existe necesidad por establecer los límites del concepto de daño civil, máxime si de este concepto depende la determinación del tribunal competente. Al respecto, la imputación objetiva del daño (denominada también imputación normativa por basarse en el espíritu de la norma) esto es, la asociación a los fines de justicia preventiva, distributiva y retributiva establecidos en el sistema de responsabilidad extracontractual comunitario nos ayudan a limitar el concepto por medio de la justificación normativa a un interés jurídico. En efecto, ocurrido un daño ambiental, existen múltiples intereses involucrados. Entre ellos encontramos: intereses públicos de seguridad, de protección a los recursos naturales e intereses privados derivados del aprovechamiento de los recursos naturales. Desde la perspectiva de las partes

---

<sup>(300)</sup> Mención especial, para los sistemas que no siendo del Common Law, restringen los bienes jurídicos a aquellos tipificados por el legislador en un catálogo: BGB, artículo 823.

<sup>(301)</sup> Situación que se presenta especialmente en los sistemas de tradición francesa. Cfr.: Carbonnier, Jean, *Droit Civil Les Obligations*. T. IV, 22ª edición, Presses Universitaires de France, París 2000 p. 385. Cadet, LÖic, *La méthamorphoses du préjudice*, en *Les méthamorphoses de la responsabilité* – Sixièmes Journées René Savatier, Presses Universitaires de France, París 1997 p. 39.

involucradas, también existen intereses o derechos en juego, que entregan luces sobre la vinculación entre el hecho generador y el resultado lesivo. Por tanto, toda aproximación a una limitación del concepto daño civil (para efectos de determinar el tribunal competente), va más allá del análisis en solitario del concepto de hecho dañoso.

Por su parte, la relación entre el hecho generador y el resultado dañoso, va más allá de la mera relación de causalidad natural que existe entre ellos. Para el tribunal resulta de especial interés limitar la extensión del daño civil, respecto de la extensión del daño ambiental, porque así determina eficientemente el “hecho dañoso”. Para todo lo anterior, se recomienda al tribunal tener en consideración como elementos de juicio la imputación normativa en la relación que existe entre los dos hechos: el hecho generador y el hecho del resultado. Entiéndase por imputación normativa a una prescripción normativa objetiva que tiene en consideración los fines de la norma de CJCI y los fines de las normas de protección ambiental.

## **5.- La Regla de Ubicuidad.**

Cuando hablamos de daño ambiental internacional, entonces hablamos de un fenómeno caracterizado por la plurilocalización de los elementos de la obligación internacional extracontractual. De esta forma, el lugar donde se origina el daño y el lugar donde se verifican las consecuencias pueden estar ubicados en territorios jurisdiccionales distintos. Por su parte, el medio ambiente no conoce de fronteras. Han sido los convencionalismos estatales y las prácticas jurisprudenciales las que por razones de sistematización jurídica han tendido a fragmentar la realidad. Por otro lado, autores como KISS, el mexicano SIQUEIROS o en España la profesora CRESPO HERNÁNDEZ han conseguido acercamientos al fenómeno ambiental con una lógica estrictamente internacional <sup>(302)</sup>. En efecto, los ríos internacionales y los

---

<sup>(302)</sup> Cfr.: Kiss, Alexandre Charles, *Los principios generales del Derecho del Medio Ambiente*, Universidad de Valladolid, 1975.p.15. Siqueiros, José Luis, *ob. cit.*, pp.185-202. Martínez, Adriana N. y Rósenmele, Adriana. “Gender perspective in international juridical instruments for

estatutos especiales para su explotación, protección del cauce y conservación de la calidad de sus elementos responden a una manifestación -por la fuerza de la naturaleza- sobre la necesidad de articular un sistema de protección internacional que, en materia de responsabilidad, sea eficiente en la formación de la obligación civil internacional. Por esta razón, en materia de Derecho Internacional Privado, el *forum delicti commissi*, entendido como el lugar donde se cometió el ilícito civil, no resulta un concepto amigable en el caso de los daños a distancia y plurilocalizados (denominados por la doctrina alemana *Distanzdelikts*) porque la internacionalización de los elementos de la obligación extracontractual, hacen que el *forum delicti commissi* esté localizado en más de un Estado (<sup>303</sup>).

Cuando hablamos del lugar del hecho generador, en cambio, nos referimos al lugar donde se produce la acción lesiva. Este lugar coincidirá normalmente con el domicilio del demandado o agente contaminante; sin embargo, también existe un principio de acción en el domicilio de la matriz o de la empresa controladora transnacional. En efecto, en esta clase de formas organizacionales, ninguna decisión se ejecuta sin antes ser conocida y autorizada en la matriz. Por esta razón, decimos que el hecho generador se localiza allí donde ha podido representarse el resultado de la contaminación y aun cuando el resultado se haya debido a una acción negligente en otro país, incluso lejano, si el domicilio de la casa matriz determina el hecho generador.

En efecto, en los daños ecológicos puros, el hecho generador o hecho causal suele coincidir con el lugar del daño. De aquí que la regla de ubicuidad se justifique naturalmente para esta clase de daños por la idea de cercanía espacial que

---

environmental protection”. Aljaba [online]. 2005, vol.9, pp. 139-160. Prado Carrera, Gina, “La protección jurídica del Medio Ambiente”, Universitas, número 107, Pontificia Universidad Javeriana, 2004, pp. 85 -100. IOS, “Other International Developments”, *Environmental Policy and Law*, Vol. 39, número 1, IOS Press, 2009, pp. 36-62.

(<sup>303</sup>) Planteamiento sobre los problemas en la opción del Convenio de Bruselas de 1968 respecto al punto de conexión en Crespo Hernández, Ana, "Precisión del lugar del hecho dañoso en los supuestos de daños sobrevenidos", *Iniuria* 1995, pp. 99-111.

precisamente motivó el nacimiento de la Regla de ubicuidad en el asunto *Bien vs Minas de Potasio de Alsacia*.

Sin embargo, la idea de cercanía espacial que envuelve al hecho generador y al resultado dañoso, en el caso de los daños ecológicos, no puede extrapolarse al caso de los daños civiles en los cuales el daño puede localizarse en países no fronterizos, e incluso muy lejanos.

Por otra parte, la necesidad de establecer limitaciones a la extensión del vínculo, ha promovido una interpretación restrictiva de los fueros de competencia especial, concluyendo con una concepción estrecha y mezquina del principio de proximidad razonable <sup>(304)</sup>. Lo que resulta curioso, pues incluso la declaración de competencia externa de los tribunales de la UE, abordada en la jurisprudencia del TJUE en el asunto *Owusu* <sup>(305)</sup>, hizo aplicable el Convenio de Bruselas de 1968, al ámbito espacial del Convenio, aun cuando el hecho dañoso acusaba daños sufridos en un país extracomunitario, y con un asunto que, salvo por la aplicación del artículo 2º del Convenio, tenía en general una débil vinculación con el espacio comunitario. En este caso, primó como criterio el funcionamiento del mercado interior. Misma apelación de criterios que - para materias ambientales- exponemos en razón de los principios de protección ambiental ínsitos en el sistema comunitario, los que son permeables a los daños civiles.

De esta forma, se advierte el matiz personal con el que la jurisprudencia del TJUE ha querido matizar el fuero; exigiendo que al menos el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro v.gr. en aplicación de los artículos 4.1 y 6.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012:

---

<sup>(304)</sup> Sobre el tema Cfr.: Guzmán Zapater, Mónica, “Competencia de la unión europea para concluir tratados internacionales en materia de Derecho Internacional Privado (a propósito del Dictamen del TJCE 1/ 2003, de 7 febrero 2006)”, *Revista Electrónica De Estudios Internacionales*, número 14, 2007, p.10. De Miguel Asensio, Pedro, *ob. cit.*, p.701.

<sup>(305)</sup> STJCE C-281/02. Asunto *Owusu*.

Artículo 4.1. *Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.*

Artículo 6.1. *Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, el artículo 21, apartado 2, y los artículos 24 y 25.*

Comentario aparte, GARAU SOBRINO <sup>(306)</sup> nos ayuda a observar como el carácter personal del fuero difiere en los casos en los que existe acuerdos de jurisdicción. En tales acuerdos existe un ámbito personal específico. En los acuerdos de jurisdicción al menos una de las partes debe tener su domicilio en un Estado contratante:

Artículo 23.1. *Si las partes, cuando al menos una de ellas tuviere su domicilio en un Estado miembro, hubieren acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro fueren competentes para conocer de cualquier litigio que hubiere surgido o que pudiese surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes.*

No obstante lo anterior, esta norma sólo reconoce los acuerdos de jurisdicción para Estados miembros, y no para que tengan eficacia en terceros Estados <sup>(307)</sup>. En este último caso, será el Derecho Internacional Privado del tribunal que conozca del asunto, el que deberá determinar si es o no es competente <sup>(308)</sup>.

Así por ejemplo, algunas jurisdicciones como la inglesa, según ha sido declarado en el conocido caso *Provimi* <sup>(309)</sup> no se ha reconocido la aplicabilidad de

---

<sup>(306)</sup> Garau Sobrino, Federico F., “Los Acuerdos Atributivos de Jurisdicción en Derecho Procesal Civil Internacional Español”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 2, número 2, 2010, pp. 52-91.

<sup>(307)</sup> Suderow, Julia, “Cuestiones de Jurisdicción Internacional en torno a la aplicación privada del Derecho Antitrust: *Forum Shopping* y demandas torpedo”, *Revista de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, Madrid, 2010, pp. 315-331.

<sup>(308)</sup> Este criterio se deduce de: STJCE de 10 de marzo de 1992, C-214/89 asunto *Powell Duffryn vs. Petereit*, Rec 1992 1745.

<sup>(309)</sup> Ver asunto Sentencia de la Court of Appeal - Commercial Court, asunto *Roche Products Ltd. And others versus Provimi Ltd*, de mayo del 2003. Eu LR 517,[2003] ECC 29,[2003] 2 All ER (Comm) 683,[2003] UKCLR 493,[2003] EWHC 961 (Comm).



cláusulas de jurisdicción contractuales para reclamaciones extracontractuales delictuales asociadas al Derecho de la Competencia <sup>(310)</sup>. En este caso, la sentencia de la *High Court* inglesa declaró que las partes no han podido prever el comportamiento ilícito de la demandada al momento de celebrar el contrato de jurisdicción. De esta forma, el demandante asumió los costes de la litigación internacional por entenderse que la demandada había actuado de buena fe y no había participado en un cártel.

En todo caso, la nacionalidad de las partes continúa siendo irrelevante para efectos de determinar la jurisdicción competente (v.gr. artículo 4.1). Finalmente, en cuanto a los acuerdos de jurisdicción, la determinación del domicilio de las partes se realiza de conformidad con los artículos 62 y 63 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Por otra parte, tenemos la defensa enconada de la seguridad jurídica exclusivamente asociada a la previsibilidad del vínculo. Todo lo cual ha dado como resultado, la tendencia a considerar que el lugar donde se originó o causó el daño, es el que guarda mejores garantías para el sistema de distribución de competencias. Así se va dejando progresivamente relegado al lugar donde se verificó el daño. Cuestión que no se condice con los principios de protección ambiental y de reparación integral a los que obliga la política comunitaria ambiental.

En efecto, como lo señala DESANTES REAL <sup>(311)</sup> originariamente, las negociaciones para la adopción del Convenio de Bruselas de 1968, tuvieron en consideración la coincidencia entre el hecho generador y el domicilio del demandado. Este lugar ofrecía importantes ventajas procesales y coherencia con el fuero general.

Estamos parcialmente de acuerdo. Los beneficios para el demandante, están asociados a las práctica de medidas cautelares, medidas precautorias y medidas de

---

<sup>(310)</sup> Ashton, David y Vollrath, Christian, “Choice of court and applicable law in tortious actions for the breach of Community competition law”, *Journal of Competition Law (ZweR)*, Vol.1. 2006, pp.1-27.

<sup>(311)</sup> Las negociaciones sobre la coincidencia del hecho generador con el domicilio del demandado para el Convenio de Bruselas de 1989, en Desantes Real, Manuel, *La Competencia Judicial en la Comunidad Europea*, Boch, Barcelona, 1986, p. 288.

protección aplicadas a la fuente. Asimismo, una eventual sentencia condenatoria tendría inmediata aplicabilidad en el lugar del origen del perjuicio. Sin embargo, también existen desventajas para el demandante. Tales desventajas se refieren a los costes de asumir un juicio en territorio jurisdiccional distinto a su domicilio <sup>(312)</sup>.

Estas desventajas no han sido suficientes para que algunos autores hayan dejado de proponer que el foro coincidente con el lugar del hecho generador, sea la regla general en materia de CJCI para delitos y cuasidelitos civiles, de modo tal que el tribunal del lugar donde se manifiestan los daños sólo sería competente en subsidio y/o para el conocimiento de los daños ocurridos en su territorio <sup>(313)</sup>.

No compartimos estas aseveraciones, apoyados básicamente en la importancia que asignamos al factor “protección ambiental”, ínsito en la responsabilidad extracontractual y calificante del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del año 2012. Creemos necesaria la existencia de armonía entre fueros y principios/directrices comunitarias sobre la materia. Sin embargo, no podemos desconocer que la apertura de nuevos foros y la falta de previsibilidad en el sistema están estrechamente relacionadas con el exceso de flexibilidad en la adopción del foro competente <sup>(314)</sup>.

Por su parte, cuando hablamos del lugar donde se manifestó el daño, nos referimos al lugar donde se producen las consecuencias lesivas del acto. Cuando el demandante opta por apelar a este foro, se ve favorecido en lo relativo a los costes de la administración de justicia, lo que sucederá cada vez que el lugar del daño coincida con su domicilio. Además, el lugar donde se manifestó el daño es considerado un foro

---

<sup>(312)</sup> Palao Moreno, Guillermo, *ob cit*, pp.58-61.

<sup>(313)</sup> Cfr.: Bourel, Pierre, “Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé”, *Recueil des Cours*, Vol II, 1989, pp. 251-398. Ballarino, Tito, “Le Droit International Privé de l’Environnement-Questions de Procédure Civile et de Loi Applicable dans les États de l’Europe Occidentale”, en AA.VV., *Internationales Umwelthaftungsrecht I, Auf dem Wege zu einer Konvention über Fragen des Internationalen Umwelthaftungsrechts*, Köln, 1995, pp. 111-128.

<sup>(314)</sup> Comparar con argumentos sobre la rigidez y flexibilización en un sistema de responsabilidad extracontractual internacional en el debate y aprobación del Convenio de París de 1960 sobre responsabilidad civil en materia de energía nuclear, artículo 13, apartados b) y c).

idóneo para los casos en los cuales está en entredicho la determinación exacta de los límites territoriales o cuando se produce en espacios libres de soberanía <sup>(315)</sup>.

Las respuestas que la jurisprudencia del TJUE ha entregado para la determinación del tribunal competente en esta clase de daño han sido eclécticas y han dado nacimiento a la *Regla de la Ubicuidad*.

Nacida en el Derecho Penal y derivada de la teoría de la *alternatividad* o cúmulo electivo <sup>(316)</sup>, se habla de ubicuidad en materia delictual o cuasidelictual civil, cuando el lugar en el que se verifica el daño no coincide con el lugar en el que se origina el hecho dañoso. La sentencia *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* <sup>(317)</sup>, es el primer antecedente, conforme al cual el Tribunal de Justicia declaró que ambos lugares, lugar de origen y lugar de resultado, constituyen una conexión relevante de competencia judicial.

15. “ (...)la expresión “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso” del artículo 5.3 del Convenio debe ser entendida en el sentido de que hace a la vez alusión al lugar en donde el daño ha sobrevenido y al lugar del acontecimiento causal. De ello resulta que demandado puede ser sometido, a elección del demandante, ante el tribunal del lugar donde el daño ha sobrevenido o al del lugar del acontecimiento causal que es origen de ese daño”.

En este caso, el entonces TJCE, se pronunció sobre la contaminación transfronteriza, en cultivos agrícolas ubicados en Holanda por causa de minerales pesados en aguas contaminadas por faenas mineras ubicadas en Francia (Mulhouse) e imputables a la Sociedad Minas de Potasio de Alsacia. Según esta sentencia, el lugar

---

<sup>(315)</sup> Esta opción se encuentra ampliamente fundada en los debates que antecedieron la adopción del Convenio de Bruselas de 1969, sobre responsabilidad Civil por Contaminación con Hidrocarburos, artículo IX. Sin embargo, también los consideramos aplicables en nuestro caso. Asimismo, este foro fue defendido por el Abogado General F. Capotorti el 10 de noviembre de 1976, en el asunto 21/76, *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*.

<sup>(316)</sup> Palao Moreno Guillermo, “La aplicación de la Regla *forum delicti commissi* (el artículo 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por prensa (Comentario a la Sentencia del TJCE de 7 de marzo de 1995, en el asunto C-68/93 Fiona Shevill y otros c. Presse Alliance S.A.)”, *Noticias de la Unión Europea*, 1996, número 141, p.75.

<sup>(317)</sup> STJCE, de 30/11/1976, Asunto 21/76, *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, apartados 15 y siguientes.

de origen del daño y el lugar donde se manifiestan sus consecuencias eran útiles desde el punto de vista de la prueba y de la economía del proceso <sup>(318)</sup>.

Asimismo, el TJCE señaló que elegir únicamente el lugar donde se originó el daño amenazaba un claro riesgo de confusión con los criterios de competencia señalados en los artículos 2 y 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968, y del Reglamento 44/2001 Bruselas I, antecedentes del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. De este modo, podemos decir que el TJCE estimó que el entonces artículo 5.3 (hoy artículo 7.2) perdería su efecto útil, en comparación el foro del domicilio del demandado, pues ambas categorías coincidirían. Así nace la regla de ubicuidad.

Valorada positivamente por la doctrina especializada, de la cual escogemos a DESANTES REAL, BOUREL y HUET <sup>(319)</sup>, tenemos que la regla de ubicuidad no atribuye exclusivamente CJCI al lugar de origen del daño, y por tanto, hace que el responsable de un delito o cuasidelito civil, asuma los costes por las eventuales consecuencias internacionales que su acción negligente haya extendido a otros países. Debatida, por los efectos probables que origina hacia un principio *favor laesi*, la regla de ubicuidad, también puede ser considerada la manifestación de un principio de protección de la víctima, entendida como la parte más débil de la relación extracontractual <sup>(320)</sup>. Sin embargo, esta aseveración debe relativizarse.

---

<sup>(318)</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 31 de enero de 2002, Asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*, apartado 44.

<sup>(319)</sup> Ver: Desantes Real, Manuel, *ob cit*, p. 307. Bourel, Pierre, *ob cit*, pp. 563-576. Huet, M. André, “Observaciones a la STJCE 30 noviembre 1976, *Bier/ Mines de Potasse d’Alsace*, as. 21/76”, *Journal du Droit International*, T. III, 1977, pp. 733-734. Bourel, Pierre, “Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé”, *Recueil des Cours*, Vol II, 1989, pp. 368. Ballarino, Tito, *ob cit*, pp. 115. Rest, Alfred, “Plaintiff can choose his court”, *Environmental Policy and Law*, número 1, 1975, p.41-46.

<sup>(320)</sup> Sobre los fines perseguidos por la regla de ubicuidad, ver Carlón Ruiz, Matilde, *Competencia territorial y responsabilidad extracontractual. Perspectivas constitucional y comunitaria*, Ed. Cedecs, Barcelona, 1995, pp.133-139.

No obstante lo que se dirá más adelante acerca del principio *favor laesi*, debe advertirse, desde ya, que el legislador comunitario y el TJUE, reconocen limitadamente y para ciertas materias el principio *favor laesi* manifestado en un *optio fori* (derecho de opción) y/o en un *forum actoris* <sup>(321)</sup>. Esta cuestión ha sido observada y comentada latamente por la doctrina especializada <sup>(322)</sup>.

En nuestro caso, y a diferencia de la propuesta tradicional para la víctima de daño civil ordinario, consideramos que la víctima de un daño civil asociado a un daño ambiental se encuentra en condiciones distintas. En efecto la víctima civil de un daño ambiental sufre un accidente que le es inimputable, imposible de prever, y cuyo control recae completamente en el sujeto contaminante. Asimismo, la víctima puede haber sufrido la acumulación negligente de daños en el tiempo, puede haber visto incrementando riesgos de pérdida, devaluación de sus bienes, o aumentado el riesgo de mayores pérdida de oportunidades de negocios.

Si bien es comprensible que el TJUE no se haya pronunciado a favor del principio *favor laesi*; respecto de la víctima civil ordinaria, sin embargo, y puestos en la situación de un daño civil asociado a un daño ambiental, ¿hasta qué punto el

---

<sup>(321)</sup> Tema mayormente desarrollado para derechos de los consumidores. Para profundizar en los fundamentos esbozados para este colectivo, entonces revisar la siguiente documentación: a) Libro Verde sobre garantías de los bienes de consumo y los servicios postventa COM (93) 509, de noviembre de 1993; b) Libro Verde sobre Acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único COM(93) 576, de noviembre de 1993; c) Libro Verde sobre la responsabilidad civil por productos defectuosos COM(1999) 396, de julio de 1999; d) Libro verde sobre protección de los consumidores en la Unión Europea COM(2001) 531, de octubre de 2001; e) Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo COM(2006) 744, de febrero de 2007; f) Libro verde sobre recurso colectivo de los consumidores COM(2008) 794, de noviembre de 2008; g) Libro verde sobre opiniones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas.

<sup>(322)</sup> Cfr.: Droz, Georges.A.L., Recueil Dalloz Sirey, 1977, B 54, p. 613. Amores Conradi, Miguel Ángel, “Comentario al art. 10, apartado 9 del Código civil”, en Albaladejo, Manuel (Dir.), *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, Tomo I, Vol. 2, 2ª ed., EDERSA, Madrid, 1995, pp. 729-769. Seuba Torreblanca, Joan Carles, “Derecho de daños y Derecho internacional privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la Propuesta de Reglamento Roma II”, *Indret*, número 269, Barcelona, 2005, p.7. Pérez Vera, Elisa (coord.), *Derecho internacional privado*, Vol. II, Derecho civil internacional, UNED, Madrid, 1998, p. 311. Zabalo Escudero, Maria Elena, “La ley aplicable a la responsabilidad por daños derivados de los productos en el derecho internacional privado español”, *Revista Española de Derecho Internacional*, número 43, 1991, p. 77.

demandante civil debe soportar los costos de la contaminación ambiental? El derecho de *optio fori* reconocido al demandante ¿puede interpretarse como una manifestación del principio *favor laesi* en materia ambiental?

Referirnos al principio *favor laesi*, es considerar que la víctima del delito extracontractual se ve ampliamente beneficiada con la regla de ubicuidad. Así lo creemos, especialmente cuando el efecto directo de la regla de ubicuidad es la multiplicación de los eventuales foros competentes, según la mayor o menor localización de los daños (<sup>323</sup>). Tal beneficio, a elección de la víctima no debiera confundirse con el principio *favor laesi* recurrentemente proscrito por el TJUE porque, en nuestro caso, la protección ambiental permea al daño civil. Sin embargo, es difícil que no se asocie el domicilio del demandante con el principio *favor laesi*, al menos en lo relativo a la determinación del tribunal competente. Por otra parte, limitaciones a la apertura de foros en los lugares en los cuales la víctima civil ordinaria (aquella que no está asociada a un daño ambiental) tenga su patrimonio han sido consideradas como una clara señal de la proscripción del principio *favor laesi*. A nuestro juicio tales limitaciones sólo guardan relación con un vínculo más o menos lejano que existe entre el hecho generador y el resultado lesivo, y no han abordado un debate serio sobre el principio *favor laesi* para el caso de ciertas víctimas. Una de las cuales es la víctima ambiental.

Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la regla de ubicuidad presenta efectos perniciosos, que precisamente motivan este trabajo. En efecto, más allá de los beneficios que recaen en la administración de justicia por la cercanía del tribunal con los hechos; la regla de ubicuidad favorece la multiplicación de foros competentes. Esta circunstancia, aumenta la inseguridad jurídica por falta de previsibilidad en el sistema y genera problemas en la extensión de los daños o en la distinción entre

---

(<sup>323</sup>) En el mismo sentido, Gardeñes Santiago, Miguel, “La compétence spéciale en matière délictuelle et quasi délictuel dans la Convention de Bruxelles: á propos de l’arrêt Presse Alliance du 7 mars 1995”, *Revue Trimestrielle du Droit Européen*, 1995-3, p. 615; Desantes Real, Manuel, *ob cit*, p. 305.

daños directos y daños indirectos <sup>(324)</sup>. Por estas razones, en nuestro caso, es de suma importancia entender que los daños civiles están asociados a los daños ambientales y no son derivados, secundarios o indirectos.

#### **6.- Problemas para aplicar la Regla de ubicuidad: concurrencia de daños civiles y daños ambientales.**

Para determinar el foro competente en casos de daños ambientales transfronterizos, daños transnacionales y daños civiles derivados de la contaminación, nos encontramos frente a un doble desafío: *primero* determinar el vínculo que relaciona el hecho generador y el resultado lesivo; y *segundo*, determinar la relación que existe entre el daño civil y el daño ambiental. Esta última relación puede ser fuente de múltiples problemas si es que resultan competentes los tribunales ubicados en diferentes Estados. En efecto, normalmente el hecho generador es coincidente tanto para daños civiles como para daños ambientales. Sin embargo los daños pueden no estar ubicados en el mismo Estado, pueden afectar a personas distintas, referirse a bienes jurídicos distintos, o como veremos más adelante, ser considerados directos unos e indirectos otros. Así, por ejemplo, mientras en los daños civiles existe la tendencia por acumular el conocimiento de todos los daños al lugar donde se producen los daños directos, en el caso de los daños ambientales, en cambio, no podemos hablar de “daños ambientales indirectos” con el mismo parangón al de los daños civiles indirectos, tampoco podemos hablar de “daños ambientales por repercusión”, y categorías como los “daños morales ambientales” aún se encuentran en construcción. Por estas razones, cada daño que sea de significancia y certidumbre, será digno en sí mismo de tutela judicial.

No obstante la clara diferencia que existe entre ambas categorías de daños extracontractuales, el sistema europeo de reparto de competencias por daño

---

<sup>(324)</sup> Críticas a la regla de ubicuidad en: Desantes Real, Manuel, *ob cit*, p. 302. Blanco Morales Limones, Pilar “Art. 5.3” y “Art. 5.4”, en Calvo Caravaca (Edit.), *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, 1994, pp. 120-138.

extracontractual ha establecido el mismo sistema para toda clase de daños extracontractuales, sin distinción. Extraordinariamente, existen excepciones, establecidas en razón de la materia, entre cuyos casos no se encuentran los daños ambientales <sup>(325)</sup>.

Por otra parte ¿qué interés puede tener una víctima civil en tutelar la protección del medio ambiente como un bien colectivo, si la titularidad de las acciones suelen corresponder a las autoridades o a organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro?

Considerando que los daños civiles nacen del mismo hecho generador que el daño ambiental, resulta que la víctima civil perseguirá “indirectamente” la protección de bienes ecológicos, ya que su interés radica en la afectación a su patrimonio. Sin embargo, un interés mayor puede estar asociado a las prebendas y beneficios procesales que se le reconozcan como demandante de responsabilidad civil internacional extracontractual por daño ambiental. Criterio que reposiciona los riesgos en el sujeto contaminante.

Considerando que el TJUE ha establecido la doctrina de la *ubicuidad*, consagrando una *optio fori* en beneficio del demandante - sin distinción sobre la clase de daños extracontractuales a los que se aplica - , podríamos decir, *a priori*, que no existe interés para las víctimas civiles, sino sólo en lo que concierne a los daños en su

---

<sup>(325)</sup> Se refieren a las excepciones en otras materias los autores: Carballo Fidalgo, Marta, “Las cláusulas contractuales no negociadas ante la Propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores”, *Revista para el Análisis del Derecho*, número 1, Barcelona, 2010, p.7-9. Goñi Urriza, Natividad, “La concreción del lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el art. 5.3 del reglamento 44/2001: Nota a la STJCE de 16 de julio de 2009”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 3, número 1, 2011, pp. 290-295. Arenas García, Rafael, “Tratamiento jurisprudencial del ámbito de aplicación de los foros de protección en materia de contratos de consumidores en el Convenio de Bruselas de 1968», *Revista Española de Derecho Internacional (REDI)*, 1996, vol. XLVIII, núm. 1, p. 54. Arenas García, Rafael, “Competencia judicial internacional y acuerdos de sumisión en la contratación electrónica internacional”, *Estudios sobre Consumo*, número 85, 2008, pp.45-60. Palao Moreno, Guillermo, “La comunidad europea y el contrato individual de trabajo internacional: aspectos de jurisdicción competente y de ley aplicable”, *Revista Sequência*, número 52, 2006, pp. 35-54. Menéndez Sebastián, Paz, Competencia judicial y ley aplicable al contrato de trabajo con elemento extranjero, Lex Nova, España, 2006, pp.73-88.



propio patrimonio. Sin embargo, esta aseveración está llena de matices. De hecho, la denominada doctrina de la *ubicuidad* fue establecida por el entonces TJCE a propósito de daños extracontractuales ambientales por contaminación transfronteriza (<sup>326</sup>). Por tanto, ha sido en razón de esta clase de daños que, según la regla de la ubicuidad, son competentes tanto el tribunal del lugar donde ha ocurrido el hecho generador del daño, como también el tribunal del lugar donde se verifica el hecho lesivo.

Consideramos interesante constatar que las razones que justificaron la apertura de ambos foros, tanto en el lugar donde se causó el hecho dañoso como en el lugar donde se verificaron sus consecuencias, presentan los mismos fundamentos de justicia material, de justicia retributiva y de justicia preventiva que aquellos argumentos que establecieron el derecho de opción de la víctima para elegir la ley aplicable en el Reglamento CE 864/2007 Roma II. Sin embargo, cuando hablamos de ley aplicable, entonces sí encontramos una clara distinción entre el régimen aplicable a los daños extracontractuales comunes y el régimen para daños extracontractuales ambientales. Esto no ocurre en el Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Por esta razón, pensamos que la justificación normativa para la existencia de un derecho de opción de creación jurisprudencial en materia competencial, sólo puede estar asociada a casos de protección ambiental, evitando recurrir a la regla de ubicuidad en todos los demás casos que pueden resultar problemáticos cuando la relación entre el hecho generador del daño y el resultado dañoso no son directos.

En efecto, la doctrina de la ubicuidad, referida a los daños ambientales en relación con los daños civiles directos, puede fundarse en los siguientes argumentos:

a) asegura el mejor lugar para el desarrollo de los procedimientos judiciales, tales como: recolección de pruebas, peritajes, notificaciones, cumplimiento de las resoluciones, etc., pensado tanto en las víctimas de daño ambiental como en las víctimas del daño civil, máxime si coinciden unos y otros (justicia material y

---

(<sup>326</sup>) STJCE, de 30/11/1976, Asunto 21/76, *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* apartados 15-17.

economía procedimental), pero también si no coinciden pero el daño civil es igualmente calificable como directo.

b) establece criterios justos en la distribución de los costes por externalidades negativas y riesgos asumidos en el desarrollo de una actividad con efectos ambientales (justicia retributiva), y

c) asegura una tutela cautelar, por amenaza de daño, en caso de mantenerse el riesgo (justicia preventiva).

Por tanto, la posibilidad de un *optio fori*, en beneficio del demandante (civil y ambiental), está fundada en bases de justicia material, justicia retributiva y justicia preventiva, que habilita la protección a la “parte más débil”. En este caso, la parte más débil es la víctima del daño ecológico. Asimismo lo es la víctima civil asociada al daño ambiental <sup>(327)</sup>.

El resultado previsible será una mayor protección ambiental por la vía de la responsabilidad civil internacional y por la eficiencia ambiental de los sistemas de distribución de competencias judiciales y de legislación aplicable.

A continuación analicemos, qué ha señalado la jurisprudencia del TJCE, para los casos de disociación entre el lugar donde se originó el daño y el lugar donde manifiesta sus consecuencias lesivas, y si corresponde o no a la tesis que se propone.

La jurisprudencia del TJCE, ha sido bastante benévola con la extensión del derecho de opción en favor de la víctima de un daño, máxime si la víctima es considerada “la parte más débil” de la relación extracontractual <sup>(328)</sup>.

---

<sup>(327)</sup> El Convenio de Lugano, de 16 de septiembre de 1988, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y que amplió el ámbito de aplicación de las normas del Convenio de Bruselas de 1968 a determinados Estados miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, se refirió a la parte más débil – sin definirla - asociada a los consumidores y a los asegurados. Posteriormente el Reglamento 44/2201 Bruselas I, aumentaría la categoría a los trabajadores de contratos individuales de trabajo. Situación que pervive con el actual Reglamento (UE) No. 1215/2012. A nuestro juicio nada obsta que el demandante civil asociado a un daño ambiental pueda engrosar la categoría.

<sup>(328)</sup> Ver las sentencias STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV* y en STJC -347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*.

Sin perjuicio de lo anterior, el TJCE ha estado atento a las dificultades de la prueba de la causalidad en materia ambiental; y por esta razón, en lugar de trabajar sobre presunciones judiciales de causalidad, haya preferido consagrar una *optio fori* en favor de la parte más débil de la relación internacional (la víctima del daño). El objetivo perseguido ha sido entregar el derecho de elegir entre el tribunal del lugar donde se dio origen al daño y el tribunal del lugar donde efectivamente se han producido las consecuencias lesivas. Sin embargo, todo esto no significa que deba hacerse una distinción entre las víctimas (en nuestro caso civiles y ambientales), por el sólo hecho de no coincidir en la misma persona.

Las compensaciones e indemnizaciones reclamadas por particulares guardan relación con un daño ambiental, su objeto final (la indemnización) no es aplicado a fines de reparación, reconstitución o sustitución ambiental; pero forman parte de la “reparación integral” que debe el agente contaminante.

Por su parte, el TJCE, pronunciándose sobre el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* (<sup>329</sup>), ha resuelto un caso de responsabilidad extracontractual por contaminación internacional *simple*, esto es, un evento que involucra sólo a dos Estados: Holanda y Francia, por contaminación transfronteriza de campos holandeses producto de las externalidades negativas procedentes del beneficio de minerales realizado en Mulhouse (Francia) por la sociedad Minas de Potasio de Alsacia. Hemos denominado *evento simple*, a la disociación entre el hecho generador y el resultado dañoso, cuando sólo involucra a las jurisdicciones de dos Estados, en cuyo caso el principio de ubicuidad, está revestido de todos los caracteres de economía procesal y de justicia retributiva, distributiva y material, antes señalados.

Sin embargo, cuando un mismo hecho generador irradia varios resultados lesivos ubicados en distintos Estados, y si entre los resultados lesivos existe disparidad en cuanto a su intensidad, extensión, temporalidad y personas afectadas, o involucran en unos casos asuntos civiles y en otros ambientales; entonces tenemos

---

(<sup>329</sup>) STJCE C-21/76, asunto Bier vs Minas de potasio de Alsacia.

que el principio de la ubicuidad no es una solución eficiente por la falta de claridad y de certeza jurídica. De aquí, que el problema que se advierte con la adopción de la regla de ubicuidad es la falta de una adecuada teoría de causalidad entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo, para la determinación de los daños a los cuales se extiende. En efecto, ni el legislador ni el TJUE han optado por una teoría de causalidad definida o de relación entre los hechos generador y de resultado <sup>(330)</sup>, cuestión esencial en cualquier modelo de responsabilidad extracontractual, y que como vemos incide directamente en la determinación del tribunal competente.

Por otro lado, existe un lógico interés por determinar la diferencia entre ambas categorías de daños (civiles y ambientales), los cuales al verse confundidos, otorgan una perspectiva poco clara del principio de ubicuidad. Tampoco se puede negar que la acumulación en un solo foro competente, es conveniente por razones de economía procesal. Sin embargo, desconocer (o negar) los fines de la justicia ambiental vs los fines de la justicia patrimonial, que se encuentran ínsitos detrás de la pretensión civil, pueden arrojar notables diferencias entre el foro competente para conocer del daño ambiental y el foro competente para conocer el daño civil.

Creemos que es posible aplicar fines de justicia ambiental en beneficio del demandante civil, sin que se confundan los daños civiles con los daños ambientales, pues la confusión sólo perjudica a las víctimas civiles directas por daños ocurridos en Estados a los que no alcanza el daño ambiental, y por tanto, a situaciones donde la Regla de ubicuidad queda injustamente en entredicho.

La jurisprudencia del TJUE, no lo entiende así y ha optado por: acumular ambas clases de daños, sin distinguir entre las categorías de delitos y cuasidelitos a

---

<sup>(330)</sup> La STJCE C-364/93 de 19 septiembre de 1995 asunto *Marinari*, señala que una interpretación del lugar del hecho generador del daño basada en la “lex causae” era incompatible con el objetivo del Convenio, generando inseguridad jurídica, al hacer depender el vínculo del régimen de responsabilidad civil aplicable. Carrillo Carrillo, Beatriz, “El debate sobre los ilícitos a distancia: comentario a la STJCE (sala segunda) de 10 junio 2004, *Kronhofer*, C- 168/02.”, *Anales de Derecho*. Universidad de Murcia. Número 22, 2004, pp.358-359.

los que se refiere el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Por lógica consecuencia, no se ha abordado el problema de la disociación entre el hecho generador y el resultado lesivo, como un problema de causalidad. En lugar de ello, se ha optado por la vía de reconocer al demandante una *optio fori*, tal como señalamos anteriormente. Sin embargo, esta *optio fori*, fundada originalmente en un problema de causalidad entre dos categorías distintas de daños, ha ido evolucionando con el tiempo para incluir cualquier problema de causalidad extracontractual, sin que se relacionen necesariamente dos o más clases de daños (como ocurre entre daños ambientales y daños civiles) Con el tiempo ha bastado que la prueba de la causa sea compleja por la *plurilocalidad* de los daños.

En esta contexto conviene plantearse una nueva pregunta ¿en razón de qué criterios se pueden establecer limitaciones al derecho de *optio fori* del demandante reconocido para los casos del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012? La jurisprudencia del TJUE establece algunas limitaciones, que no distinguen en cuanto a la categoría de daño (civil o ambiental), sino que más bien, están establecidas en razón de las partes en el conflicto (demandante o demandado). En efecto, si bien el TJUE se pronuncia expresamente por proscribir el principio *favor laesi*, no puede desconocerse que el derecho de *optio fori* si está establecido a favor del demandante. Todo lo cual, es coincidente con el hecho de que la víctima de daño ambiental sea considerada la parte más débil de la relación internacional, por no haber podido prever medianamente los efectos de una acción.

Como veremos más adelante, al analizar la jurisprudencia del TJCE en torno a la regla de ubicuidad, sólo desde el año 2002 <sup>(331)</sup>, apreciamos claras limitaciones al

---

<sup>(331)</sup> Con anterioridad, la Sentencia de 11 de enero de 1990, en el asunto C-220/88, *Dumez France y Tracoba*, interpretó la STJCE de 30 noviembre 1976, as.21/76 (*Bier vs. Minas de Potasio de Alsacia*), señalando que no era aplicable en los casos en los cuales el daño alegado había sido sufrido por personas que tenían la calidad de víctimas *indirectas*. La discusión que estuvo presente fue el alcance del "*forum actoris*", que para el asunto *Dumez*, no consideraba a los demandantes. Se limitó a los demandantes indirectos de la posibilidad de optar en favor del lugar de verificación del daño, como sí ocurría respecto de las víctimas directas. Así la víctima indirecta no podía, con arreglo al art.5.3 del Convenio de Bruselas, acudir al foro donde sufrió perjuicio en su patrimonio.

derecho de *optio fori* del demandante *directo* <sup>(332)</sup>. Así, el demandante debe probar que el foro por el cual ha optado, cuando coincide con su propio domicilio, justifica además “otras razones” que no sean la sola ubicación de su propio patrimonio afectado.

Creemos que esas “otras razones” pueden ser “razones ambientales”. Tras un largo período de reconocimiento al derecho de opción a favor del demandante, las limitaciones a este derecho vuelven nuevamente a fundarse en razones de justicia material, retributiva y distributiva, que deberán ser consideradas por el juez, al momento de fijar su competencia. Este es precisamente el interés que tiene el demandante, y cada vez más en aumento, en relacionar su demanda civil a daños ambientales por los cuales efectivamente se persiga una reparación y compensación.

Por otro lado, el demandante de daños civiles que se originan en el mismo hecho que los daños ambientales arriesga que sus daños patrimoniales sean considerados “daños indirectos, secundarios o derivados”, con las consecuencias correspondientes, que esta clasificación acarrea en cuanto a la determinación del foro competente <sup>(333)</sup>. La jurisprudencia del TJUE ha señalado que los “daños financieros” sufridos en el domicilio del demandante, tales como los daños en el patrimonio son entendidos como “daños consecutivos” al daño principal, y por tanto no habilitan para la apertura de un foro especial según el artículo 5.3 del Convenio de Bruselas, el cual sólo se refería a “daños directos” <sup>(334)</sup>.

---

<sup>(332)</sup> STJCE C-168/02 asunto *Rudolf Kronhofer*.

<sup>(333)</sup> Según algunos autores los daños civiles siempre son indirectos porque medio ambiente es un bien común que por esta vía afecta a la comunidad y sólo indirectamente a su patrimonio. Cfr.: Crespo Hernández, Ana, *ob cit*, pp. 47-48, citando a Dalq, R.O., “La responsabilité civile et penales du pollueuer en droit belge”, *Actes du colloque de la section belge de l’institut international de droit de l’expression française, Les aspects juridiques de l’environnement*, Namur, 1975, p. 49 y Pacteau, B., “Les problèmes juridiques internationaux de la pollution”, *Actes du colloque de la section belge de l’institut international de droit de l’expression française, Les aspects juridiques de l’environnement*, Namur, 1975, p. 161.

<sup>(334)</sup> STJCE C-364/93 *Marinari*, apartado 15.

En este mismo sentido, y asociado al peligro de un *forum actoris* <sup>(335)</sup>, la profesora CARRILLO CARRILLO <sup>(336)</sup>, apoyada en el Informe P. JENARD y en el considerando N° 12 del Reglamento 44/2001 Bruselas I, ha desestimado tal riesgo, fundándose en la sentencia *Kronhofer*, C- 168/02. En la actualidad el considerando número 16 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 es más específico sobre la materia, pero mantiene el mismo criterio <sup>(337)</sup>.

En efecto, en la sentencia *Kronhofer*, C-168/02, se enfatiza la necesidad de un “nexo estrecho” entre el órgano jurisdiccional y el litigio, a fin de facilitar la buena administración de justicia, de modo que, el resultado dañoso debe ir más allá de la sola afectación del patrimonio del demandante. En nuestra opinión, tal “nexo estrecho”, entre el asunto y el tribunal, evita el *forum actoris*, pero poco aporta en la proliferación de los foros, porque con un criterio de mayor cercanía entre el resultado dañoso y el tribunal pueden proliferar igualmente foros potenciales sólo por las distintas categorías de daños involucrados.

## **7.- Regla de ubicuidad: evolución jurisprudencial en el TJUE.**

Veamos a continuación, en el desarrollo de la jurisprudencia del TJUE, el devenir de las interpretaciones que se han dado anteriormente.

---

<sup>(335)</sup> Bischoff, Jean-Marc., “Observaciones a la STJCE 19 septiembre 1995, *Marinari*, asunto C- 364/93”, *Journal du Droit International*, T.II., 1996, pp. 562-563; Huet, M. André, *ob cit*, p. 730; Crespo Hernández, Ana, *ob cit*, pp. 117-118.

<sup>(336)</sup> Carrillo Carrillo, Beatriz, *ob cit*, pp. 357-363.

<sup>(337)</sup> Efectivamente a diferencia del predecesor Considerando 12, el actual Considerando 16 del Reglamento (UE) 1215/2012 señala: “*El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación*”.

En el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* <sup>(338)</sup>, el entonces TJCE consideró que el lugar donde se causaron los hechos y el lugar donde se verificaron las consecuencias estaban íntimamente relacionados con el asunto, y por tanto, correspondía considerarlos en igualdad de condiciones. Nació de esta forma, un foro por *ubicuidad* en beneficio del demandante, que en principio fue muy criticado por la doctrina especializada, entre los que rescatamos las opiniones fundadas de CARRILLO CARRILLO, DESANTES REAL, CRESPO HERNÁNDEZ, BOUREL, HUET y BISCHOFF <sup>(339)</sup>. Sin embargo las críticas no aludieron a los efectos que arrojó el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, sino al uso abusivo que se hizo con posterioridad en base al criterio establecido por el TJCE. En efecto, se abrió un debate sobre un posible *forum actoris* o un pseudo principio *favor laesi* para casos de daños civiles ordinarios, todo lo cual contradecía la regla general establecida en el artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968 y que el propio TJUE había ratificado en sendas sentencias.

Sin embargo, este *optio fori*, ratificado por la jurisprudencia del entonces TJCE en los casos *Dumez France y Tracoba*, *Shevill y Marinari* <sup>(340)</sup>, se extendió a situaciones muy diversas de la hipótesis original a la que se refirió el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*. En efecto, el TJUE llegó a señalar que los “consumidores” víctimas de cláusulas abusivas, también son beneficiados por un derecho de opción emanado del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(341)</sup>. En la misma sentencia ha señalado <sup>(342)</sup> que:

---

<sup>(338)</sup> STJCE C-21/76, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* apartados 11 y 17. Bourel, Pierre, *ob cit*, pp. 563-576. Huet, M. André, *ob cit*, pp. 728-734.

<sup>(339)</sup> Carrillo Carrillo, Beatriz, *ob cit*, p. 360. Desantes Real, Manuel, *ob cit*, p. 302. Bourel, Pierre, *ob cit*, p. 568. Bischoff, Jean-Marc, “Observaciones a la STJCE 19 septiembre 1995, *Marinari*, asunto C- 364/93”, *Journal du Droit International Privé*, II, 1996, pp. 562-563; Huet, M. André, *ob cit*, p. 730, Crespo Hernández, Ana, *ob cit*, pp.117-118.

<sup>(340)</sup> STJCE C-220/88 asunto *Dumez France y Tracoba*, apartado 17; STJCE C- 68/93 asunto *Shevill y otros*, apartado 19, y STJCE C- 364/93 *Marinari*, apartado 10.

<sup>(341)</sup> Ver STJCE C-167/00 asunto *Henkel*, conforme al cual, “una acción judicial preventiva, entablada por una asociación para la protección de los consumidores con objeto de obtener la prohibición del uso por un comerciante de cláusulas consideradas abusivas en los contratos



*“lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso, debe entenderse en el sentido de que se refiere al mismo tiempo al lugar donde se ha producido el daño y al lugar del hecho causal, de modo que el demandado puede ser emplazado, a elección del demandante, ante el órgano jurisdiccional de cualquiera de esos dos lugares”.*

Posteriormente, la regla de *optio fori*, fue extendida para la práctica de medidas cautelares, por el hecho de que el tribunal donde se ha producido el hecho dañoso <sup>(343)</sup>:

*“es normalmente el más adecuado para conocer del asunto, sobre todo por motivos de proximidad del litigio y de facilidad para la práctica de la prueba. Pues bien, estas consideraciones son igualmente válidas tanto si el litigio tiene por objeto la reparación de un perjuicio que ya se ha producido como si el objeto de la acción se dirige a impedir que se produzca el daño”.*

En todos estos casos, el vínculo de causalidad generó problemas debido a las dificultades que ofrecía la prueba del vínculo entre el hecho generador y el daño. Por esta razón creemos que el TJCE, estableció un *optio fori*, por *ubicuidad* del daño disociado, a objeto de sortear los problemas de causalidad.

Por otra parte, la jurisprudencia del TJCE en los asuntos *Besix* y *Tacconi* <sup>(344)</sup>, ha sido consistente en señalar que uno de los principales objetivos del Convenio de Bruselas de 1968 (y por extensión de continuación el Reglamento (UE) No. 1215/2012), consiste en otorgar la mayor protección y seguridad jurídica en la determinación del tribunal competente; permitiendo a las partes, prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional pueden y deben comparecer. Sin embargo, como advertíamos, la existencia de un *optio fori*, a favor del demandante llevó al TJUE a señalar que bastaba probar una relación de causalidad entre el hecho generador y el daño resultante, para que exista un derecho de opción reconocido al

---

*celebrados con particulares, es de carácter delictual o cuasidelictual en el sentido del artículo 5, número 3”*, del Convenio de Bruselas de 1968.

<sup>(342)</sup> STJCE C-167/00 asunto Henkel, pár. 44.

<sup>(343)</sup> STJCE C-167/00 asunto Henkel, pár. 45.

<sup>(344)</sup> STJCE C-256/00, Rec. p. I-1699 asunto *Besix* apartados 25 y 26. STJCE C-334/00 asunto *Tacconi*, Rec. p. I-7357 apartado 20.

demandante. Esta idea se extendió, incluso, a las acciones solidarias en conflicto colectivo del asunto *DFDS Torline A/S* <sup>(345)</sup>, conforme al cual:

“En consecuencia, ha de responderse a la primera cuestión, letra b), que, para aplicar el artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas a una situación como la del litigio principal, basta con que la acción colectiva sea una condición necesaria para las acciones de solidaridad susceptibles de generar daños.”

Por tanto, en este sentido, la certeza jurídica, cedió a las mayores garantías para el demandante en los casos amparados bajo el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I (actual artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012) conforme a los cuales el vínculo de causalidad estaba claramente determinado.

En estos casos la relación de causalidad consiste en tener certeza sobre si los hechos generadores han sido o no “condición necesaria” del resultado lesivo; incluso para los casos en los cuales el hecho generador está representado por varias acciones o por una acción colectiva.

Finalmente, sentencias posteriores han introducido algunas limitaciones en el *optio fori* que beneficia al demandante. Es así como tenemos una reducción en el concepto “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”, de modo tal que el TJUE buscó que los daños producidos no dependieran exclusivamente de la alegación del demandante, de forma que fuera el demandante el que relacionando el lugar donde se encuentra el centro de su patrimonio abriera cualquier foro de competencia.

Esta manipulación en cuanto al lugar que determinaría el tribunal competente generó falta de certeza jurídica e hizo que con el tiempo se agregase un requisito adicional al demandante: probar que los perjuicios ocurridos en el domicilio del demandante obedecen a factores que van más allá del sólo hecho de tener el demandante el centro de su patrimonio. De lo contrario, se alteraría la regla general de la CJCI, que otorga competencia a los tribunales del domicilio del demandado <sup>(346)</sup>. En efecto, en el asunto *Rudolf Kronhofer* el TJCE <sup>(347)</sup>, señaló:

---

<sup>(345)</sup> STJCE C-18/02, asunto *DFDS Torline A/S*.

<sup>(346)</sup> Por una interpretación estricta del artículo 5.3 y 6.1. de Bruselas I, ver: STJCE C-364/93, Rec. p. I-2719, asunto *Marinari* apartado 13y 14. STJCE 189/87 Rec. p. 5565, asunto *Kalfelis* apartado 19. STJCE C-433/01, Rec. p. I-0000, asunto *Blijdenstein* apartado 25. STJCE C-51/97, Rec. p. I-6511

“A la vista de las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, número 3, del Convenio debe ser interpretado en el sentido de que la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» no comprende el lugar del domicilio del demandante en el que se localice el «centro de su patrimonio», *sólo por el hecho* de que el demandante haya sufrido en ese lugar un perjuicio económico como consecuencia de la pérdida de una parte de ese patrimonio acaecida y sufrida en otro Estado contratante”.

De lo anterior, corresponde preguntarse por “esos otros argumentos” que el demandante deberá presentar al tribunal a fin de poder radicar el asunto en el lugar donde tiene su domicilio. Uno de esos argumentos puede ser la concurrencia de daños civiles con daños ambientales en el mismo lugar. Si en cambio, los daños civiles y los daños ambientales no concurren en el mismo lugar, igualmente el demandante de daños civiles puede radicar el asunto en el lugar donde sufra daños civiles directos.

Para esto, planteamos dos argumentos, jurisprudencial y normativamente fundados respectivamente:

a.-) Es necesario que se establezca un vínculo de conexión entre el daño civil, el daño ambiental y el foro competente (<sup>348</sup>). En tal caso, sólo los daños civiles directos tienen tal mérito. Un daño civil es directo no necesariamente porque se produce en el mismo lugar del daño ambiental. En efecto, las víctimas de daño civil, suelen ser aquellas que experimentan personalmente el daño ambiental; sin embargo, pueden existir víctimas ubicadas en otros Estados que también relacionan directamente con el ecosistema dañado (por ejemplo vía turísticamente, mediante actividades de investigación, transporte, etc.), y que deben ser consideradas víctimas directas. ¿Prohibiremos a estas víctimas el beneficio de *optio fori* que da la regla de ubicuidad?

---

asunto Réunion européenne y otros apartado 29. STJCE C-168/02, Rec. p. I-6009 asunto Kronhofer apartados 13 y 14.

(<sup>347</sup>) STJCE C-168/02 asunto *Rudolf Kronhofer*.

(<sup>348</sup>) Fundado en los precedentes de: STJCE C-281/02 asunto *Andrew Owusu*. STJCE (56/79, Rec. p. 89), asunto *Zelger*, apartado 3; STJCE 21/76, Rec. p. 1735, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, apartado 11; STJCE 189/87, Rec. p. 5565, *Kalfelis*, apartado 11; STJCE C-365/88, Rec. p. I-1845 asunto *Hagen*, apartado 11.

b.-) Debe existir un interés de protección especial al “demandante de daños ambientales”, por su especial situación de “parte más débil” <sup>(349)</sup>. El propio legislador comunitario ha establecido regímenes de excepción en consideración a la situación de ciertas víctimas (consumidores y trabajadores entre los más relevantes).

Incluso más, el Reglamento (UE) No. 1215/2012, contiene limitaciones a la celebración de acuerdos atributivos de jurisdicción cuando existe la posibilidad de que intervenga una “parte más débil” en la relación jurídica. En estos casos, se pretende evitar que la parte más fuerte pueda aprovechar su posición para forzar la conclusión de acuerdos de jurisdicción más favorable a sus intereses.

Si bien no existe un régimen especial para las víctimas de daños ambientales (civiles y ecológicos), en caso de que existiera tal régimen, debiera estar en consonancia con el *optio fori* en materia de legislación aplicable establecida por el Reglamento 864/2007 Roma II, el cual sí reconoce al demandante de daños ambientales (y civiles asociados) como la parte más débil. Cuestión que proponemos de *lege ferenda*.

Mientras no exista una modificación en este sentido, nada exime al juez nacional de aplicar los criterios que informan los principios de protección de la víctima ambiental. Una de cuyas manifestaciones se actualiza en la regla de ubicuidad.

No olvidemos que la decisión de inhibición por parte del juez, supone haber ponderado la buena administración de justicia, la posible falta de coherencia entre las resoluciones judiciales dictadas en diferentes Estados, asegurar resoluciones conciliables entre sí con las emitidas por otros tribunales, velar por la ejecutabilidad de sus decisiones; y sobre todo, resolver el litigio con un fin de justicia si - y sólo si –

---

<sup>(349)</sup> La “parte más débil” ha sido reconocida normativamente en Bruselas I, en otros casos tales como: el acreedor de alimentos, a quien se le presume en estado de necesidad (artículo 5, número 2), el tomador de seguro (artículos 13 y 14), el consumidor (artículos 15-17), trabajadores (artículos 18-20). Asimismo, STJCE C-96/00, Rec. p. I-6367 asunto Gabriel, apartado 39.

como dijo el Abogado General Sr. PHILIPPE LÉGER <sup>(350)</sup> está “mejor situado” para conocer del asunto. Creemos que el juez del lugar donde se produce el daño civil directo (sea cual fuere dicho lugar y coincida o no con el lugar del daño ambiental) está tan bien posicionado como el juez del lugar donde se produce el hecho generador de dicho daño civil.

#### **8.- Pauta para determinar la extensión de los daños internacionales civiles y ambientales: la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo.**

En los casos de daños al medio ambiente, la prueba del nexo causal, entre el hecho generador y el daño resultante suele ser el mayor problema con el que se enfrenta el demandante. Las legislaciones nacionales de fondo, han recurrido a distintas fórmulas a objeto de atenuar esta dificultad. En efecto, la falta de una adecuada probanza de causalidad puede llegar a frustrar la responsabilidad que se reclama. Así tenemos que en algunos casos, enfrentados a daños directos cuyo nexo de causalidad con el hecho generador es poco claro al momento de la presentación de la demanda provocan resoluciones denegatorias de jurisdicción (por la vía incidental de declinatorias o inhibitorias de competencia), por considerarse que tales daños tiene la calidad de “daños indirectos” o de “daños por repercusión”. El problema de la causalidad, se extiende a su prueba, transmisibilidad, transferencia e incluso modelo de responsabilidad que el tribunal haya adoptado.

Considerando la disociación espacial entre el hecho generador y el daño (resultado lesivo) tenemos que la calificación del vínculo que existe entre ambos hechos, es capaz de determinar la extensión de los daños y por tanto incide en la calificación de daños directos e indirectos y en la calificación de víctimas directas e indirectas.

Para el tribunal llamado a pronunciarse sobre su competencia, las distinciones entre daños directos e indirectos y entre víctimas directas e indirectas otorgan una

---

<sup>(350)</sup> En el mismo sentido ver Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger presentadas el 8 de diciembre de 2005, C-539/03, asunto Roche Nederland BV y otros apartado 93.

perspectiva holística del asunto que se somete a su jurisdicción. De esta forma, el tribunal está en mejor posición para determinar hasta donde se extiende su competencia en un asunto, sin necesidad de recurrir a criterios externos al caso. En este punto recordemos los problemas y las críticas expuestas en GABUARDI, CARNEY, LITMAN o CHIRINO <sup>(351)</sup>, a las que se vieron expuestos los Estados extracomunitarios y algunos Estados comunitarios que en su momento pretendieron aplicar la doctrina del *forum non conveniens* estando en vigor el Convenio de Bruselas de 1968.

Tales Estados suelen recurrir a factores externos al caso (tales como el “interés público”), o a criterios para relaciones “directamente afiliantes e indirectamente afiliantes” <sup>(352)</sup>, en desmedro de un juicio crítico sobre los conceptos de daños directos e indirectos o de víctimas directas e indirectas.

En este sentido, concluimos que evitar la multiplicación de las jurisdicciones y propender a la buena administración de justicia, son objetivos complementarios entre sí, que pasan por la reinterpretación del fin previsto en la norma de CJCI <sup>(353)</sup>. Hasta ahora el fin de la norma de atribución de competencia, ha girado exclusivamente en torno a la idea de economía procesal, y por economía procesal se ha entendido al

---

<sup>(351)</sup> Cfr.: Gabuardi, Carlos, “Entre la jurisdicción, la competencia y el *forum non conveniens*”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLI, número 121, 2008, pp.69-115. Carney, Peter J., *International Forum non Conveniens*, Section 1404.5 – A proposal in the interest of Sovereignty, Comity and individual Justice”, *American Law Reviews*, número 45, 1995, p. 423. Litman, Harry, “Considerations of choice of law in the Doctrine of *forum non conveniens*”, *California Law Reviews*, número 74, 1986, pp. 565,572-573. Chirino, Frank, *Bussines Without borders: Tailoring American and Canadian personal Jurisdiction Principles to Provide Greater Certainty for online businesses*, *Southwestern Journald of Law and Trade in the Americas*, número 12, 2005, p.97.

<sup>(352)</sup> Para profundizar sobre los conceptos “directamente afiliantes e indirectamente afiliantes” ver: Von Mehrem, Arthur T. y Trautman, Donald T., “Jurisdiction to adjudicate: A suggested Analysis”, *Harvard Law Review*, número 79, 1966, p.1135.

<sup>(353)</sup> Sobre criterios seguidos por el TJUE para evitar la multiplicación de fueros Cfr.: Pontier, Jannetje Adriana y Burg Edwige, *EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters according to the case law of the European Court of Justice*, T.M.C., Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2004, pp. 101-105

mejor tribunal para la práctica de diligencias procesales, y no al mejor tribunal para la comprensión completa del problema.

Así, el tribunal llamado a pronunciarse sobre su competencia en un daño ambiental internacional, visto la disociación física en la que se encuentran los elementos de la relación extracontractual, puede optar entre hacer caso omiso a la vinculación entre el hecho generador y el resultado lesivo (conclusión a la que se tiende después del caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* y la ratificación jurisprudencial del principio de ubicuidad), o por el contrario, buscar cierta relación entre el hecho generador y el resultado lesivo, para así determinar la extensión de los daños sobre los cuales es competente. En principio, la regla general señala que sólo es competente para conocer de los daños indirectos, el tribunal de los daños directos (<sup>354</sup>). Así se desprende de la jurisprudencia del TJUE:

STJCE C-364/93, asunto Marinari. “14. Aunque se admita así que el concepto de “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”, en el sentido del número 3 del artículo 5 del Convenio, puede referirse a la vez al lugar en donde sobrevino el daño y al lugar del hecho causante, dicho concepto no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar.”

STJCE C-51/97, asunto Réunion européenne SA y otros. “30. En el apartado 14 de la citada sentencia, el Tribunal de Justicia dedujo de ello que, aunque se admita así que el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» en el sentido del número 3 del artículo 5 del Convenio, puede referirse a la vez al lugar donde sobrevino el daño y al lugar del hecho causante, sin embargo, dicho concepto no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que ya haya causado un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar.”

“31. Por las mismas razones, el Tribunal de Justicia estimó, en la sentencia *Dumez France y Tracoba*, antes citada, que la regla de competencia judicial enunciada en el número 3 del artículo 5 del Convenio no puede interpretarse de manera tal que autorice a un demandante que invoque un daño que afirme ser la consecuencia del perjuicio sufrido por otras personas, víctimas directas del hecho dañoso, para demandar al autor de este hecho ante los órganos

---

(<sup>354</sup>) Ver STJCE C-364/93, Rec. p. I-2719, asunto Marinari, apartado 14. Lo dicho respecto de los daños indirectos se extiende a las víctimas indirectas o por repercusión en: STJCE C-51/97, asunto Réunion européenne SA y otros. STJCE 220/88, asunto *Dumez Bâtiment y Tracoba*.

*jurisdiccional es del lugar en el que el propio demandante haya experimentado el daño en su patrimonio.”*

STJCE 220/88, asunto Dumez Bâtiment y Tracoba. “20. *Se deduce de lo expuesto que si bien es cierto que es jurisprudencia de este Tribunal (sentencia de 30 de noviembre de 1976, ya citada) que el concepto de «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», contemplado en el apartado 3 del artículo 5 del Convenio, puede hacer referencia al lugar en que haya sobrevenido el daño, no lo es menos que este último concepto sólo cabe entenderlo referido al lugar en el que el hecho causal generador de la responsabilidad delictual o cuasidelictual haya desplegado sus efectos dañosos respecto de quien sea su víctima inmediata.”*

Sin embargo, por aplicación de la regla especial de CJCI, del artículo 7.2 Reglamento (UE) No. 1215/2012, es competente el tribunal del lugar donde se ha producido o pudiere producirse el hecho dañoso; luego, habiéndose desplazado la regla de competencia del domicilio del demandado, ¿se desplaza también el criterio establecido para los daños indirectos?, en otras palabras, el tribunal del lugar donde se originó el hecho y el tribunal donde se manifiestan las consecuencias del daño ¿son también competentes para conocer de los daños indirectos?, y si así fuera ¿no se incentiva por esta vía la apertura de nuevos foros? ¿No se terminarían confundiendo daños directos y daños indirectos en materia extracontractual? A continuación, abordaremos las diferencias.

## **9.- Problemas ocasionados de la disociación espacial entre el hecho generador y el daño.**

Para la determinación de la extensión de la competencia judicial internacional debemos despejar antes aquellos problemas que existen en razón de la disociación entre el hecho generador y el resultado lesivo. Por su parte, la dinámica del sistema de distribución de competencias establecido por el Reglamento (UE) No. 1215/2012 y la interpretación restrictiva que el TJUE ha dado al artículo 7.2 de dicho reglamento en razón a la regla de ubicuidad, serán temas subyacentes en este acápite. El resultado previsible es un conjunto de problemas, que a modo enunciativo son: a) el fomento del *forum shopping*, b) la apertura de foros de necesidad (*forum necessitatis*), c)



problemas asociados a la doctrina del *forum non conveniens* <sup>(355)</sup>, y d) la prohibición de las *antisuit injunctions* <sup>(356)</sup>.

Si bien abordaremos todos estos problemas, nos interesará de sobremanera el primero de los enunciados (riesgo de *forum shopping*), porque la jurisprudencia del TJUE ha interpretado restrictivamente la regla de ubicuidad para daños civiles, fundándose en dicho aspecto de la dinámica internacional.

### 9.1.- Del riesgo del *forum shopping*.

Abordaremos el problema del *forum shopping*, según una reinterpretación en clave redistributiva de los costos ambientales y conforme al principio *quien contamina paga*. Consideramos que la necesidad de garantizar el efecto útil del Reglamento (UE) No. 1215/2012 es de suma importancia, sin embargo, no somos partícipes de restricciones en la interpretación de los fueros para los daños civiles directos asociados a daños ambientales. Por esta razón, buscaremos precisar el rol que juega la vinculación entre el hecho generador y el resultado.

---

<sup>(355)</sup> La doctrina de la STJCE en el asunto *Group Josi*, C-412/98, de fecha 16 de octubre del 2001, señaló que el Convenio de Bruselas de 1968 era aplicable a “todo litigio en que el demandado tenga su domicilio en el territorio de un Estado contratante”, rechazando expresamente la resolución de la Court of Appeal (Reino Unido) de 1992, en el asunto *Harrods (Buenos Aires) Ltd.*, que en caso similar, adoptó la doctrina del *forum non conveniens*, para declinar su jurisdicción. Asimismo, sobre carácter obligatorio de las reglas de competencias, ver: STJCE C-440/97, Rec. p. I-6307, asunto GIE Groupe Concorde y otros, apartado 23. STJCE C-256/00, Rec. p. I-1699, asunto Besix, apartado 24. Finalmente, sobre debate respecto de la excepción de competencia basada en *forum non conveniens*, a la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, en Informe Schlosser (DO 1979, C 59, p. 71, puntos 77 y 78).

<sup>(356)</sup> Sobre la prohibición de *antisuit injunctions* en la jurisprudencia del TJUE ver: Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 20 de noviembre de 2003, asunto C-159/02, Turner. Ver también, STJCE C-351/89, Rec. p. I-3317, caso Overseas Union Insurance y otros, apartado 24. Doctrina comentada en: Requejo Isidro, Marta, *Proceso en el extranjero y medidas anti proceso (antisuit injunctions)*, Universidad de Santiago de Compostela, España, 2000, p. 34. George. A., “The use of *antisuit injunction* in international litigation”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 28, 1990, pp. 630 y 631. Collins, Lawrence, *Essays in International Litigation on the conflict of Laws*, Clarendon Paperbacks, Oxford University Press, 1994, p. 112.

Según la definición presentada por el Abogado General del TJCE Sr. RUIZ-JARABO COLOMER, el *forum shopping* consiste en la “elección de un foro en función de las ventajas que puedan derivarse del derecho material (o, incluso, procesal) allí aplicado” <sup>(357)</sup>. Este concepto es propio del Derecho Internacional Privado, y conforme a él, quien tiene la iniciativa de presentar una acción judicial tiene la prerrogativa de elegir el tribunal competente que sea más conveniente para sus intereses. La elección de la que hablamos no se realiza arbitrariamente porque existen normas de conflicto aplicables <sup>(358)</sup>.

En principio, el *forum shopping* es estrategia lícita, reconocida al demandante o al solicitante. Esto es así porque está dirigida a obtener *the most favorable judgement or verdict* <sup>(359)</sup>. De esta forma, el *forum shopping* es una manifestación de la optimización de las posibilidades que tiene el actor, o incluso ambas partes, cuando actúan de común acuerdo. En este sentido, SLAUGHTER, MARTÍNEZ, WATERS y BELL advierten cómo el *forum shopping* se ha convertido en una respuesta lógica debido a la proliferación de jurisdicciones competentes y al lamentable incremento de riesgos de conflictos de jurisdicción o de competencia <sup>(360)</sup>.

---

<sup>(357)</sup> Ver conclusiones presentadas el 16 de marzo de 1999 en el asunto en que recayó la STJCE C-440/97, de 28 de septiembre de 1999, asunto GIE Groupe Concord y otros.

<sup>(358)</sup> Otra definición en: Checa Martínez, Miguel, “Fundamentos y límites del *forum shopping*: Modelos europeo y angloamericano”, *Revista di diritto internazionale privato e procesuale*, Vol. 34, número 3, 1998, p. 522. También ver Glosario elaborado por la Red Judicial europea en materia civil y mercantil. Disponible en [http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary\\_es.htm#ForumShop](http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_es.htm#ForumShop) [revisado el 07 de abril del 2010].

<sup>(359)</sup> Rodríguez Jiménez, Sonia, “Competencia Judicial ....” *ob cit*, p.192, Nafziger, James A.R, “Algunas consideraciones acerca de la elección de la ley según los tribunales y juristas norteamericanos”, *Jurídica Anuario*, Vol II, número 13, 1981, pp. 1017-1035, Silva Silva, Jorge Alberto, *ob.cit.*, p. 117.

<sup>(360)</sup> Sobre el aumento descoordinado de jurisdicciones internacionales, la cooperación judicial y el *forum shopping* Cfr.: Slaughter, Anne-Marie, “A Global Community of Courts”, *Harvard International Law Journal*, Vol. 44, n. 1, 1993, pp. 191-221, 2003. Martinez, Jenny S. “Toward an International Judicial System”, *Stanford Law Review*, Vol. 56, 2003, pp. 429-529. Waters, Melissa A., “Mediating Norms and Identity: The Role of Transnational Judicial Dialogue in Creating and Enforcing International Law”, *Georgetown Law Journal*, Vol. 3, número 2, 2005, pp. 487-574. Bell, Andrew, *Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation*, Oxford Private International Law Series, Oxford University Press, 2003, pp-49-132.

Sin embargo, la licitud del *forum shopping* queda en entredicho cuando la elección del foro contraviene alguna norma de justicia procesal <sup>(361)</sup>. Hablamos de justicia procesal, porque vamos más allá de la mera administración procedimental, para referirnos a la Buena Fe como un principio básico del derecho Internacional Privado y para descartar aquella conducta que ha venido a denominarse en cierta doctrina del TJUE como *forum shopping malus* <sup>(362)</sup>.

Como el profesor ROMERO SEGUEL, nosotros también proponemos hablar de *forum shopping malus* cuando nos referimos a una práctica que niegue el efecto útil y la aplicación uniforme del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En materias de protección ambiental, y habiéndose reconocido por la jurisprudencia del TJCE, en el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia* <sup>(363)</sup>, que el demandante de daño ambiental internacional tiene un derecho de opción para elegir entre el foro del lugar donde se originó el daño y el foro del lugar donde se manifestaron las consecuencias dañosas, resulta que podemos plantear serias dudas sobre la aceptación o sobre la convalidación de un *forum shopping malus* por parte del propio TJUE. En efecto, no habiéndose establecido límites al derecho de opción del demandante, mal puede configurarse una alegación de *forum shopping malus* por parte del demandado. Si bien sabemos que el TJUE ha establecido limitaciones a la regla de ubicuidad del daño para regular los vínculos de conexión con el tribunal competente, tales limitaciones han estado relacionadas, principalmente, con asuntos civiles “tradicionales” asociados a la ubicación del patrimonio del demandante; casos en los cuales se quiso hacer extensiva la regla de ubicuidad.

No obstante lo anterior, en materia de daños ambientales, y de daños civiles asociados a los anteriores, encontramos que no existen limitaciones al derecho de

---

<sup>(361)</sup> Ver Romero Seguel, Alejandro, “La Falta de Jurisdicción y su denuncia en el proceso: las excepciones procesales y materiales”, Comentario, *Revista Chilena del Derecho*, Vol. 31, número 1, 2004, pp.187-188.

<sup>(362)</sup> Nomenclatura que se usó en las Conclusiones del Abogado General, Sr. Paolo Mengozzi, presentadas el 24 de mayo de 2007, C-98/06, asunto *Freeport plc*.

<sup>(363)</sup> STJCE C-21/76, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, apartados 11 y 17.

opción que tendría el demandante. Desde esta perspectiva, existe un claro riesgo de *forum shopping* en el hecho que los daños civiles asociados a los daños ambientales, aprovechen la laxitud de interpretación del derecho de opción del demandante.

Por estas razones, resulta imperioso abordar el contenido del denominado *forum shopping malus*, para los casos de daños ambientales plurilocalizados, en los cuales la relación entre el hecho generador y el resultado dañoso no es clara.

Consideramos que la mejor aproximación a un concepto funcional de *forum shopping malus*, parte por determinar el grado de afectación en la “previsibilidad del título de jurisdicción”. Si bien el concepto “título de jurisdicción” necesita a su vez de mayor desarrollo, consideramos pertinente traerlo a comentario porque ha sido recogido por la jurisprudencia (<sup>364</sup>), tanto para temas asociados a las *anti-suit injunctions*, como para asuntos de litispendencia.

Para nuestros efectos, y según lo enunciamos en la primera parte de este trabajo, proponemos que el concepto de *forum shopping malus*, sea el siguiente: *abuso del derecho de opción por parte del demandante, quien funda su interés en un cambio en el vínculo de conexión existiendo eventual perjuicio para el demandado, cuando tal perjuicio genera una alteración en la previsibilidad del título de jurisdicción, y niega el efecto útil y la aplicación uniforme del Reglamento (UE) No. 1215/2012, bajo la interpretación teleológica de los fines previstos por el constituyente y por el legislador comunitario.*

Consideramos que la interpretación teleológica propuesta, supone incluir los principios y valores de protección ambiental aceptados y vigentes en la comunidad

---

(<sup>364</sup>) Encontramos una idea de “título de jurisdicción”, en la STJCE C-159/02, Rec. p. I-3565, asunto Turner sobre anti-suit injunctions, en la cual el Tribunal declaró: “ debe interpretarse en el sentido de que se opone a que se dicte una orden conminatoria mediante la cual un órgano jurisdiccional de un Estado contratante prohíba a una parte en el procedimiento en curso ante él iniciar o proseguir un procedimiento judicial ante un órgano jurisdiccional de otro Estado contratante, aun cuando dicha parte actúe de *mala fe* con la intención de obstaculizar el procedimiento en curso”. Por otra parte, para asuntos de litispendencia ver STJCE C- 116/02, Rec. p. I-14693, asunto Gasser sobre litispendencia.

europea, de modo tal que permeen los daños civiles directos, como otra manifestación más de la responsabilidad por daño ambiental.

Algunos autores como WEINBERG DE ROCA (<sup>365</sup>) han llegado a señalar que en los casos de cambio en el vínculo de conexión puede existir fraude, en la medida que se aplique el mismo Derecho que aquél que correspondería, en caso de que el asunto se conociera ante el tribunal competente. Consideramos que la asociación entre el foro competente y el Derecho aplicable puede llevar a equívocos, por lo que no creemos pertinente asociar el concepto de *forum shopping malus* al Derecho aplicable, pues ambos siguen una lógica distinta.

Por otra parte, la doctrina ha tratado de establecer criterios para distinguir cuándo estamos en presencia de *forum shopping malus*, lo cual resulta de suma utilidad en casos de daño civil asociado a un daño ambiental. Sin embargo, tales esfuerzos seguirán dependiendo de la extensión del derecho de opción que se reconozca al demandante.

De aquí que, resulta necesario determinar los límites de este derecho de opción; esto es, si corresponde o no a un “derecho con características de absoluto”.

El legislador y la jurisprudencia del TJUE deberán dar pautas sobre el criterio que se encuentra detrás del derecho de opción reconocido al demandante, a fin de que no exista esa falsa percepción asociada a la sola dificultad de la prueba del vínculo entre el hecho generador y el resultado dañoso. En efecto, la falta de teorías que asocien el hecho generador y el resultado dañoso se evidenciaron en el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, cuando el entonces TJCE señaló que tanto el lugar de origen como el lugar del resultado presentaban la misma importancia en lo relativo al establecimiento del punto de conexión. Consideramos que este criterio sólo puede aplicarse a casos simples de daños ambientales transfronterizos y no a los casos más

---

(<sup>365</sup>) Weinberg de Roca, Inés, *Competencia Internacional y Ejecución de sentencias extranjeras*, Astrea, Buenos Aires, 1994, p. 72.

complejos de daños plurilocalizados –como ocurre con el daño transnacional –, máxime si existen daños civiles y ambientales asociados.

Por estas razones, los criterios de justicia procesal que se encuentran detrás de la asignación de un derecho de opción al demandante, revisten un *humus* de beneficio a favor de “la parte más débil” de la relación extracontractual. Así, el TJUE que ha evitado caer en un *forum favor laesi*, se vería en el riesgo de promover un *forum shopping malus*, salvo que la apertura a una regla de ubicuidad haya estado fundada en base a interpretaciones teleológicas inclusivas de principios y valores de protección ambiental aceptados y vigentes por la comunidad europea.

En este sentido, el problema que generaría un “derecho de opción ilimitado” en beneficio del demandante civil por daños ambientales, queda claramente manifestado en los perjuicios que sufriría el demandado por la poca viabilidad en que prospere una declinatoria internacional presentada por el demandado y fundada en un *forum shopping malus*.

En efecto, normalmente la declinatoria internacional supone una prórroga de la competencia a favor de un tribunal extranjero. Esta prórroga de la competencia suele revestir la forma de un acuerdo adoptado por las partes *a priori* de la ocurrencia del hecho que motiva el pronunciamiento judicial, y tiene como objetivo privar de competencia al tribunal que hubiere resultado competente, en razón de la aplicación de las reglas generales sobre la materia (*derogatio fori*). Sin embargo, en materia de delitos y cuasidelitos civiles, no existe pacto anticipado de prórroga de la competencia judicial internacional. En este caso, la presentación de una declinatoria internacional tendrá por objeto debatir sobre el mérito que tiene el tribunal elegido por el demandante.

Por otra parte, desde la entrada en vigor del Reglamento 44/2001 Bruselas I, existió un control de oficio por parte del tribunal llamado a conocer del asunto, a fin de evaluar si tiene o no competencia judicial internacional a la luz de dicho Reglamento (<sup>366</sup>). Por tanto, la formulación de una declinatoria internacional supone

---

(<sup>366</sup>) Disposiciones pertinentes en: Reglamento CE 44/2001, sobre competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 22 de

ponderar el mérito de la competencia judicial internacional más allá de los casos en los cuales las partes han acordado expresamente una prórroga. En el mismo sentido tribunales nacionales, como ha ocurrido en el caso español, establecieron que la apreciación de la competencia judicial internacional a instancia de parte supone denunciar: a) la falta de competencia judicial internacional, b) la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional y c) haberse sometido la diferencia a un arbitraje <sup>(367)</sup>. De esta forma y sin perjuicio del control de oficio que realiza el tribunal; puede promoverse una declinatoria internacional a instancia de parte en casos de delitos y cuasidelitos civiles internacionales.

Otro problema que quedará a juicio del juez, está representado por los antecedentes que se acompañan a la denuncia de incompetencia por la vía de una declinatoria internacional. En efecto, aún en los casos en los cuales existe un pacto expreso de prórroga de la competencia entre las partes, se suscitan problemas por la calidad y mérito de los documentos o por los principios de prueba que son necesarios de acompañar con la solicitud de declinatoria, debido a los efectos que tiene este incidente (de previo y especial pronunciamiento), al suspender la substanciación del proceso, y obligar a adoptar medidas cautelares y/o de protección para asegurar las resultas del juicio <sup>(368)</sup>.

---

diciembre de 2000, artículos 24, 25 y 26. Antecedentes en: Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil artículos 18, 19 y 20.

<sup>(367)</sup> Ver para España, Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 del 7 de enero del 2000, BOE 007 de 08/01/2000, artículos 39 y 63- 65.

<sup>(368)</sup> Sobre Declinatoria internacional por sumisión expresa de las partes Cfr.: Santos Vijande, Jesús María, *Declinatoria y declinatoria internacional. Tratamiento procesal de la competencia internacional*, Serie Pensamiento Jurídico, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1991, pp. 239-243. Amores Conradi, Miguel, La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil, art. 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XLI, 1989, pp. 113-156. Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Carrascosa González, Javier, “Arts. 38 y 39 de la LEC 1/2000”, en *Legislación de Derecho Internacional Privado, Comentada y con jurisprudencia*, 1º Ed. Colex, Madrid, 2001, 192-193. Compte Guillemet, Nicole y Hernández Rodríguez, Aurora, “La ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y el Derecho Internacional Privado Español”, *Homenaje a Luis Rojo Ajuria*. Escritos Jurídicos, Universidad de Cantabria, 2002, pp. 231-256.

Con mayor razón, en los casos de delitos y cuasidelitos civiles por daño ambiental, el denunciante de incompetencia tiene la obligación de aportar documentos y principios de prueba más calificados por la complejidad que resulta del hecho de estar involucrados daños plurilocalizados. En efecto, la denuncia de falta de competencia no guarda relación con la acreditación de un hecho objetivo, como lo es la existencia de un acuerdo de sumisión de competencia válido y vigente entre las partes. En el caso del *forum shopping malus* la prueba de la falta de competencia, deberá guardar relación con un abuso por parte del demandante en el derecho de opción reconocido jurisprudencialmente y con la intención de eludir los efectos útiles y la aplicación uniforme del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

He aquí el valor instrumental que aporta la definición de *forum shopping malus* propuesta al inicio de este tema.

## **9.2.- *Forum necessitatis* y foros de protección.**

Existen vínculos de CJCI, establecidos en razón de una justicia material y de obediencia al derecho de tutela judicial efectiva. Tal es el caso del denominado: *foro de necesidad o forum necessitatis*. En este caso, hemos venido a denominar justicia material, al fin de justicia ambiental que debe inspirar o ser leit motiv en la determinación de la CJCI.

Desde esta perspectiva, y fundándose en el reconocimiento expreso que hacen ciertos cuerpos normativos <sup>(369)</sup>, algunos autores <sup>(370)</sup>, sostienen que la apertura de un

---

<sup>(369)</sup> Manifestaciones normativas en: Código Federal de Procedimientos Civiles, México, artículo 565. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en materia Civil y Mercantil, de 17 de abril de 1979, artículo 5°. Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de la República Argentina, artículo 19. Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay, artículo 54. Proyecto de Código Modelo de Derecho Internacional Privado Mexicano, artículo 157.

<sup>(370)</sup> Rodríguez Jiménez, Sonia, ob. cit., p. 129. Fernández Arroyo, Diego, *Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur*, Zavallía, Argentina, 2003, p. 142, Amores Conradi, Miguel Ángel, “La Nueva Estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: artículo 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XLI, número 1, 1989, p.117, Calvo Caravaca, Luis-Alfonso y Carrascosa González, Javier, *Derecho*



foro de necesidad obedece al riesgo de indefensión que recae sobre la víctima de un daño. Este riesgo existirá especialmente en los sistemas no integrados o en aquellos sistemas en los cuales no existe libre circulación de sentencias. Para nuestros efectos, el problema del *forum necessitatis* presenta plena aplicabilidad en casos de contaminación transnacional que involucran a Estados comunitarios y a Estados extracomunitarios. En estas circunstancias, consideramos de suma relevancia la ponderación de los principios de: tipicidad del foro y de tutela judicial efectiva de derechos ambientales.

La existencia de foros de necesidad, se plantea en los casos de conflictos negativos de competencia internacional, esto es, cuando existe el riesgo de que ningún tribunal acepte tener competencia legal sobre cierta clase de daños.

Tal puede ser el caso en el cual el demandante y el daño son extracomunitarios pero el demandado tiene su domicilio en algún Estado de los que aplican el Reglamento (UE) No. 1215/2012. En este caso, el TJUE <sup>(371)</sup> ha señalado que la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado en el tribunal comunitario que debía pronunciarse sobre su competencia en asuntos que involucraban a dos o más Estados de los cuales uno de ellos es extracomunitario, no eximía al tribunal del Estado comunitario de aplicar el Reglamento comunitario.

De esta forma, resulta imperativo para el tribunal del Estado comunitario ponderar su competencia aun cuando los hechos que dan lugar a un delito o cuasidelito civil han ocurrido en el tercer Estado extracomunitario. Para estos efectos, la base de jurisdicción del Estado comunitario radica en el artículo 4 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 y no en el artículo 7.2 del mismo Reglamento.

El TJUE ha considerado que el lugar donde el demandado tiene su domicilio es un foro capaz de desplazar al foro del daño.

---

*Internacional Privado*, 6da. Edición, Vol. II, Comares, Granada, 2005, p.126, Fernández Rosas, Juan Carlos y Sánchez Lorenzo, Sixto, *Derecho Internacional Privado*, Civitas, España, 1999, p. 87.

<sup>(371)</sup> STJCE C-281/02, asunto *Andrew Owusu*.

Todo lo cual es de enorme relevancia si nos referimos a países extracomunitarios en los cuales se producen daños ambientales ocasionados por empresas transnacionales domiciliadas en Estados de la Unión Europea que aprovechando la legislación ambiental feble de estos terceros países o los vacíos en materia de CJCI, ocasionan daños ambientales con consecuencias muy gravosas para la salud de las personas y para el equilibrio del ecosistema global.

Por otra parte, también hablamos de conflictos negativos de competencia cuando un país no comunitario considera que - de acuerdo a su Derecho Internacional Privado nacional- el tribunal competente para conocer del asunto es aquél donde el demandado tiene su domicilio, y por esta razón decide declinar su competencia. En este caso, el principio de tipicidad y el principio de tutela del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación pueden significar la diferencia en la interpretación de la extensión de los foros de competencia, arrastrando así la competencia de los asuntos civiles asociados.

En efecto, en el evento de que el demandado denuncie de incompetencia al tribunal que está conociendo del asunto, mediante la formulación de un incidente de declinatoria internacional, el tribunal que resuelve dicha declinatoria internacional deberá tener en consideración que su sentencia no deja en indefensión a la víctima de daño ambiental internacional.

Sin perjuicio de lo que se dirá sobre la doctrina del *forum non conveniens*, y de la doctrina que nos deja el caso *Owusu*, tenemos que el debate sobre los *forum necessitatis* se justifica en razón de garantizar el acceso a la justicia.

El acceso a la justicia en la UE puede ser de suyo insatisfactorio cuando los litigios envuelven a demandados domiciliados en terceros países. En este caso, y salvo algunas excepciones, de las cuales da cuenta la sentencia del caso *Owusu*, tenemos que por regla general el Reglamento (UE) No. 1215/2012, solo es aplicable a los demandados que están domiciliados en los países de la UE, a los cuales se aplica

el actual Reglamento. Cuando el demandado está domiciliado fuera de la UE la competencia judicial se rige por el Derecho nacional del demandado.

Esta situación puso en marcha la atención de la Comisión Europea en la Propuesta de Modificación al Reglamento Bruselas I <sup>(372)</sup>, de tal forma que ante la diversidad de ordenamientos jurídicos nacionales con los cuales se relacionan las empresas europeas, resulta necesario dotar a los negocios con personas domiciliadas en terceros Estados de las mismas posibilidades de acceso a la justicia que tendrían en caso de estar domiciliados en la UE, máxime cuando existe el riesgo de que no resulte competente ningún otro órgano jurisdiccional, arriesgándose no sólo el derecho de tutela judicial efectiva, sino además la eventual falta de ejecución de la sentencia en dichos terceros Estados y la eficacia parcial de la legislación europea.

La Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I <sup>(373)</sup> ahondó en las normas sobre competencia subsidiaria, creando dos foros para los conflictos en los cuales están involucrados demandados domiciliados en países no pertenecientes a la UE <sup>(374)</sup>. El actual Reglamento (UE) No. 1215/2012 es consecuente con este criterio y así lo ha establecido en sus considerandos 24 y 29 <sup>(375)</sup>, en relación con el artículo 33 y 34.

---

<sup>(372)</sup> Ver exposición de motivos en la versión refundida de la Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I, en: Comisión Europea, documento COM(2010) 748, 2010. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. en materia civil y mercantil, pp. 1-5.

<sup>(373)</sup> Ver exposición de motivos en la versión refundida de la Propuesta de modificación al Reglamento Bruselas I, en: Comisión Europea, documento COM(2010) 748, 2010. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones. en materia civil y mercantil, p. 9.

<sup>(374)</sup> Ver considerando 16 de la Propuesta de la Comisión Europea del 2010 sobre modificación al Reglamento Bruselas I: *“A fin de defender los intereses de los demandantes y los demandados y de favorecer una buena administración de la justicia en la Unión Europea, el hecho de que un demandado tenga su domicilio en un tercer Estado no debe excluir la aplicación de ciertas normas de la Unión sobre la competencia judicial y ya no debe haber remisión al Derecho nacional”*.

<sup>(375)</sup> Ver considerando 24 actual del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que señala sobre este tema: *“A la hora de apreciar la buena administración de justicia, el órgano jurisdiccional del Estado miembro de que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto de que conoce. Esta valoración puede incluir las conexiones entre los hechos del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate, la fase a la que se ha llegado en el procedimiento en el tercer Estado en el momento en que se inicia el procedimiento ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro, y si cabe esperar que el órgano jurisdiccional del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable. En esa*

Esta competencia comunitaria subsidiaria señala que los tribunales de un Estado miembro podrán ejercer su competencia “*si no existe ningún otro foro que garantice el derecho a un juicio justo y si el conflicto tiene una vinculación suficiente con el Estado miembro concernido (forum necessitatis)*”<sup>(376)</sup>.

De esta forma viene a compensar la eliminación de las jurisdicciones nacionales extracomunitarias, ocurrida por la aplicación universal de las normas europeas de competencia judicial. La armonización de la competencia subsidiaria busca garantizar:

- a) que ciudadanos y empresas estén en igualdad de condiciones respecto del acceso a los tribunales europeos,
- b) que existan condiciones más equitativas para las empresas que se desarrollan en el mercado interior europeo respecto de las empresas localizadas en Estados extracomunitarios,
- c) que se asegure la ejecución de las resoluciones judiciales, y
- d) que se propenda al diálogo y madurez de los ordenamientos jurídicos comunitarios y extracomunitarios.

Por otra parte, los antecedentes jurisprudenciales en los tribunales nacionales demuestran que en Italia, la Corte de Casación, ha considerado la posibilidad de fundar la jurisdicción del juez italiano en base a una norma de clausura que consiste en reconocer el *forum necessitatis* en el sistema italiano de distribución de

---

valoración se puede examinar asimismo si el órgano jurisdiccional del tercer Estado tiene competencia exclusiva para conocer del asunto concreto en circunstancias en las que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro tendría competencia exclusiva”.

<sup>(376)</sup> Cfr. con el considerando 17 de la Propuesta de la Comisión Europea del 2010 sobre modificación al Reglamento Bruselas I: “*Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer un corpus completo de normas en materia de competencia internacional de los tribunales de los Estados miembros. Las normas actuales en materia de competencia aseguran un estrecho nexo entre los procedimientos a los que se aplica el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros, lo que justifica su ampliación a los demandados con independencia de dónde estén domiciliados. Por otra parte, el presente Reglamento debe determinar los casos en que un tribunal de un Estado miembro puede ejercer una competencia subsidiaria*”.

competencias judiciales <sup>(377)</sup>. En este caso, la Corte italiana ha utilizado como fundamento *a fortiori* el artículo 6º de la Convención Europea de Derechos Humanos. De esta forma, aunque el asunto no cumplía con todas las condiciones legales para ser conocido por los tribunales italianos, resulta que tampoco reunía las condiciones para ser conocido por otros tribunales extranjeros. De esta forma, y a objeto de no dejar en indefensión la víctima, la Corte de Casación adoptó el criterio del *forum necessitatis*.

Esta sentencia indica que el sistema italiano de distribución de competencias judiciales, corresponde a “un sistema no flexible”, que para casos extremos de conflicto negativo de jurisdicción ha necesitado adoptar un instrumento que proteja el derecho de tutela judicial efectiva de un derecho cierto <sup>(378)</sup>.

Sobre este punto, podríamos preguntarnos si el sistema europeo es rígido o flexible y si, como ocurre en el caso italiano, sea necesario revisarlo con miras al reconocimiento de un *forum necessitatis* en casos de conflicto negativo de jurisdicciones.

Por su parte, el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del 2012, tiene como vocación cubrir e integrar todas las lagunas de jurisdicción. Sin embargo, el juego de convenios bilaterales sobre materias específicas entre Estados miembros y con terceros países puede llevar a conflictos de jurisdicción. En efecto, el TJUE ha sido consiste en declarar la primacía y eficacia directa del Derecho comunitario, así como el legislador comunitario ha establecido normas que armonizan los convenios de jurisdicción suscritos con anterioridad a la entrada en vigencia del Reglamento evitando en todo caso que se pierda el efecto útil de las normativa comunitaria con miras al cumplimiento de los fines del espacio común europeo.

Sin embargo, casos como el referido en la justicia italiana demuestran que la realidad puede superar las previsiones del legislador comunitario. Asimismo,

---

<sup>(377)</sup> Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza de fecha 17 de julio de 2008, número 19595, sobre *Diritto marittimo*, 2009, p. 144.

<sup>(378)</sup> Rossolillo, Giulia, *Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'unione europea*, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010, pp. 403-418.

demuestran que las normas generales de rango comunitario necesitan ser adecuadamente incorporadas en los Derechos nacionales, a fin de alcanzar el grado de desarrollo que existe a nivel estatal.

Por otro lado, desde una perspectiva funcional, la pertinencia del foro de necesidad puede discutirse *ab initio* del conocimiento del fondo, pero también puede discutirse *a posteriori*, esto es, al momento de ejecutar la sentencia en un territorio jurisdiccional determinado <sup>(379)</sup>. En ambos casos, el tribunal ante el cual se abre el foro no estaba conectado con el asunto, pero está en condiciones de advertir la amenaza cierta de denegación de justicia.

Sin perjuicio del cumplimiento del derecho de tutela judicial efectiva, la apertura de un foro de necesidad no está exenta del deber de respetar ciertos límites, entre los cuales los más importantes son:

- a) que el demandado no vea limitadas sus garantías de defensa, y
- b) que no existirán sentencias inconciliables con el asunto conocido por otro tribunal.

Encontramos ejemplos cotidianos de foros de necesidad en aquellos casos en los cuales es necesario practicar ciertas diligencias que de otra forma no podrían realizarse sin una autorización u orden judicial. Tales son los casos de levantamiento de pruebas y, en general, práctica de medidas cautelares, de protección y prejudiciales.

Sin perjuicio de lo anterior, y de la utilidad que representa el concepto de foro de necesidad en casos en los cuales existe un riesgo de vacío de competencias en materia ambiental, no podemos desconocer las desventajas que se producen en un sistema no integrado de distribución de competencias. En efecto, el foro de necesidad opera como un foro extraordinario y supletorio; por esta razón siempre será necesario

---

( <sup>379</sup> ) Rodríguez Jiménez, Sonia, *Competencia Judicial Internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 128-133.

que al menos uno de los tribunales involucrados se declare incompetente, para que así otro tribunal pueda declararse competente en razón de éste criterio.

Si por el contrario, el segundo tribunal también rechaza su competencia y no existe un tercer tribunal, entonces alguno de los dos primeros debería retractarse. Los problemas que se derivan en relación a la cosa juzgada son evidentes y constituyen fuertes argumentos en contra de la apertura de foros de necesidad.

Por otra parte, y como veremos más adelante, la figura del *forum non conveniens* funciona en países del *common law*, en base a una lógica similar a la que hemos presentado para el *forum necessitatis* en países del civil law. Con la diferencia de que la figura del *forum non conveniens* está ideada para casos de conflicto positivo de jurisdicción <sup>(380)</sup>.

En efecto, la diferencia entre el *forum necessitatis* y el *forum non conveniens*, consiste en que en éste último se busca garantizar la individualización del tribunal más apropiado para el conocimiento del asunto.

Sin embargo, en el caso del *forum non conveniens*, existe el riesgo de que disminuya el efecto útil de la normativa comunitaria, la que funciona en base a una vocación general. Así, considerando que el *forum necessitatis* supone un vacío de competencias judiciales y el riesgo de indefensión de la víctima, este criterio busca perfeccionar la relación procesal que existe con la jurisdicción cuyas normas de competencia no son claras, concluyentes o en las cuales se advierte un caso claro de vacío normativo.

En el caso del *forum non conveniens*, en cambio, existe mayor riesgo de interferir con las disposiciones comunitarias sobre distribución de competencias, dando lugar a la posibilidad de que existan mayores conflictos de competencia.

---

<sup>(380)</sup> Ver desarrollo comparado para el *forum necessitatis* en relación con el *forum non conveniens* en: Franzina, Pietro, “Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo”, *Revista de Derecho Internacional*, 2009, pp. 1121-1129. Chalas, Christelle, *L'exercice discrétionnaire de la compétence juridictionnelle en droit international privé*, Presses universitaires d'Aix-Marseille, Aix-Marseille, 2000.

Cosa distinta ocurre con el denominado *foro de protección*. Abierto para la parte que se considera más débil en la relación internacional, esta clase de foro necesita de tipificación previa. Por tanto, el legislador, debe establecer expresamente a cuál de las partes favorecerá, asignando a la otra la carga de la internacionalidad.

Las formas como dicha protección puede manifestarse son variadas, incluso cabe la posibilidad de un derecho de opción en la elección del foro, que se entrega a la parte más débil de la relación internacional.

Actualmente no existe un foro de protección tipificado para el demandante de daños ambientales o para el demandante de daños civiles asociados a daños ambientales. Todo lo cual es curioso, porque en el Derecho de fondo aplicable a las obligaciones extracontractuales derivadas de un daño ambiental encontramos que el demandante tiene expresamente reconocido un derecho de opción por la legislación del lugar del daño o por la legislación del lugar donde se origina el hecho. No encontramos una norma similar en el Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del 2012, la que en todo caso podría gozar de los mismos fundamentos, y tener una reglamentación en el acápite destinado a los foros de protección señalados en los artículo 10º al 23º del mencionado Reglamento.

### **9.3.- Problemas con la doctrina del *forum non conveniens*.**

Los tribunales del *common law*, determinan su jurisdicción en razón de un vínculo específico o de un vínculo general (según si se afectan bienes determinados del demandado o todo su patrimonio), *in personam* o *in rem* (según si se refieren a deudas respecto de una persona o a la declaración de derechos sobre una cosa) <sup>(381)</sup>. Por ésta razón, ante la eventual pluralidad de demandas vinculadas a distintos territorios jurisdiccionales, estos sistemas necesitan una doctrina como la del *forum*

---

( <sup>381</sup> ) Asimismo, se establecen criterios para relaciones “directamente afiliante e indirectamente afiliantes”, ver von Mehren, Arthur T. y Trautman, Donald T., “Jurisdiction to adjudicate: A suggested Analysis”, *Harvard Law Review*, número 79, 1966, p.1135.



*non conveniens* que, a falta de factores de competencia señalados en la ley, determine cuál de ellos tiene mayores vínculos con el asunto.

En la tradición romano-germánica, en cambio, los tribunales no sólo necesitan tener jurisdicción, sino también necesitan ser competentes de acuerdo a la ley para poder conocer y resolver un asunto determinado. En éste sentido, la jurisdicción se entiende como una función, y la competencia se entiende como una aptitud legal en el caso concreto. Sólo serán competentes, aquellos tribunales que en razón de criterios abstractos establecidos por el legislador (no relacionados con el fondo del asunto ni con la conveniencia pública), cumplan los factores de competencia, normalmente clasificados en factores de competencia absoluta (fuero, materia, cuantía y grado), y factores de competencia relativa (territorio).

En la doctrina del *forum non conveniens*, encontramos que los tribunales han recogido una variedad de criterios, que en algunos casos se fundan en razones prácticas y de economía procesal, más que en bases teórico-jurídicas, y que explican el ejercicio de la potestad jurisdiccional del Estado y los límites externos en el ejercicio de dicha potestad <sup>(382)</sup>. En ésta doctrina los factores considerados son de dos grandes clases: factores de interés privado y factores de interés público. Incluso en los factores de interés privado se encuentran aspectos de economía procesal, tales como: las facilidades para los medios de prueba, el acceso de partes que no están obligadas, rapidez y costos. En general hablamos de “factores considerados para asegurar que el litigio resulte práctico para las partes” <sup>(383)</sup>.

---

<sup>(382)</sup> Gabuardi, Carlos, “Entre la jurisdicción, la competencia y el *forum non conveniens*”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLI, número 121, 2008, pp. 69-115.

<sup>(383)</sup> Carney, Peter J., International Forum non Conveniens, Section 1404.5 – A proposal in the interest of Sovereignty, Comity and individual Justice”, *American Law Reviews*, número 45, 1995, p. 423. Litman, Harry, “Considerations of choice of law in the Doctrine of forum non conveniens”, *California Law Reviews*, número 74, 1986, pp. 565,572-573.

Los tribunales superiores de Canadá (<sup>384</sup>) establecieron factores que el juez debía analizar para determinar si existe un foro alternativo más idóneo. Tales factores—criterios pueden sintetizarse como: 1.- localización de las partes. 2.- localización de los medios de prueba. 3.- ley aplicable según el contrato, o acuerdos de jurisdicción. 4.- evitar multiplicidad de procedimientos. 5.- derecho aplicable. 6.- factores que sugieran un “foro natural”. 7.- posible privación a las partes de ventajas jurídicas legítimas, en caso de declararse *forum non conveniens* (<sup>385</sup>).

Todo lo anterior, plantea múltiples observaciones en casos de contaminación ambiental transfronteriza, y especialmente transnacional, porque la demanda puede presentarse en el domicilio del demandado, pero los demás factores de conexión apuntar a un foro distinto, en razón de la doctrina del *forum non conveniens*.

Considerando que la doctrina del *forum non conveniens*, tiene su origen en el *common law*, no podemos desconocer la influencia que ha ejercido en la determinación de la CJCI en los sistemas legalistas de occidente. Lo anterior, sería difícil de apreciar si sólo se consideraran las diferencias que existen entre ambos sistemas, especialmente por las nociones de jurisdicción y de competencia anteriormente señaladas. Sin embargo, debido al alto flujo de relaciones internacionales entre privados domiciliados en países donde se aplica el *common law*, resulta que existe permanente interacción entre las normas de CJCI.

En efecto, sea que los sistemas de Derecho Internacional Privado estén basados en un modelo de soberanía, o en un modelo de justicia privada; la determinación del foro competente siempre estará ordenada por normas unilaterales, o en el mejor de los casos, bajo criterios interestatales consensuados. Frente a un caso de conflicto de competencia, la CJCI no se resolverá por un tribunal de jerarquía

---

(<sup>384</sup>) Suprema Corte de Canadá, en el caso *Amchen products Inc vs. British Columbia* sobre Workers's compensation board y Corte de Apelaciones de Ontario en el caso *Frymer vs. Brettschneidermore* sobre Ministro Arbour.

(<sup>385</sup>) Chirino, Frank, *Bussines Without borders: Tailoring American and Canadian personal Jurisdiction Principles to Provide Greater Certainty for online businesses*, Southwestern Journald of Law and Trade in the Americas, número 12, 2005, p.97

superior, como sí ocurre en el derecho interno, a través de apelaciones en los incidentes por vía declinatoria o inhibitoria. Por estas razones, la necesidad de prevenir reglas de CJC que eviten vacíos, contradicciones, sean poco prácticas, inejecutables o desestimen los intereses que se entrega el Estado, han inclinado a establecer criterios de competencia. Prueba de ello es el propio Reglamento (UE) No. 1215/2012 de 12 de diciembre del 2012.

Por su parte, la doctrina del *forum non conveniens*, considera los mismos criterios de jurisdicción (entiéndase también competencia) pero conjugando intereses públicos e intereses privados envueltos en el asunto. Precisamente nos interesa la justicia de éstos criterios y su interpretación sistemática en materia de CJC por daños ambientales.

Agrava el consenso internacional sobre los factores de competencia, el hecho de que los vínculos de conexión varían según los intereses de cada Estado y por terminan afectando por repercusión a las relaciones que existen entre Estados que aplican la doctrina del *forum non conveniens* y Estados comunitarios. En efecto, en EE.UU., desde la década de los años cuarenta, y en Canadá desde la década de los noventa, existe amplio margen de apreciación respecto de la jurisdicción que sus tribunales pueden llegar a tener en casos con mínima vinculación. Hablamos de casos de personas no domiciliadas ni residentes o de transeúntes en el lugar foro. En estos casos, los tribunales de EE. UU. estimaron que el juez daba cumplimiento a la catorceava enmienda sobre igualdad y justicia <sup>(386)</sup>. Similar fundamento siguió Canadá <sup>(387)</sup>. De esta forma, la doctrina del *forum non conveniens*, dio paso a la

---

<sup>(386)</sup> Ver casos en: a) Corte Suprema de los Estados Unidos asunto *Shoe Co. vs. Washington Office of Unemployment Compensation & Placement*, et al., 326 US 310 (1945); b) Corte Suprema de los Estados Unidos asunto *Shaffer vs. Heitner*, Appeal from the Supreme Court of Delaware, 433 US 186 (1977); c) Corte Suprema de los Estados Unidos asunto *World-Wide Volkswagen Co. vs. Woodson* 444 US 286 (1980); d) Corte Suprema de los Estados Unidos asunto *Helicopteros Nacionales de Colombia S.A. vs. Hall* 466 US 408 (1984); e) Corte Suprema de los Estados Unidos asunto *Asahi Metal Industry Co. vs. Superior Court* 480 US 102 (1987).

<sup>(387)</sup> *Morguard Investment Ltd. vs. De Savoye*, Diciembre, 20 de 1990, Cour Suprême du Canada, dossier 21116.

doctrina del *long arm statute*. Esta última, ha sido resultado de una adecuación de la jurisdicción *in personam*.

Por su parte, en los sistemas integrados, como es el caso europeo, en los cuales existe reparto de competencias <sup>(388)</sup>, la libre circulación de sentencias judiciales se traduce en la igualdad de acceso para demandantes y demandados, sin distinción de nacionalidad, por daños ocurridos en uno o más Estados. Sin embargo, los daños que dan lugar al nacimiento de relaciones internacionales, en las cuales está presente la participación de Estados que recogen la doctrina del *forum non conveniens* <sup>(389)</sup> presentan una excepción a las reglas generales de competencia.

Según ésta la doctrina del *forum non conveniens* aplicada en Inglaterra los jueces tienen la facultad de negar a un demandante el acceso a su jurisdicción por considerar que el asunto reviste mayor vinculación con la jurisdicción de otro Estado <sup>(390)</sup>. Así, para el Derecho inglés, el *forum non conveniens* es una excepción que permite a “un órgano jurisdiccional de dicho país, oponerse inhibiendo su competencia a favor de un órgano jurisdiccional de otro Estado, considerado más adecuado para conocer del litigio, según los intereses de las partes y los objetivos de la justicia” <sup>(391)</sup>.

Para el TJCE, los efectos de la doctrina del *forum non conveniens* se asemejan a los efectos de las *anti-suit injunctions*, en la medida que la primera permite declinar el conocimiento de las acciones presentadas ante un foro que se considera inapropiado y las segundas consisten en mandamientos inhibitorios dirigidos a los

---

<sup>(388)</sup> Como ocurre con los países regidos por el Reglamento Bruselas de Bruselas I y los Reglamentos o Convenios relacionados.

<sup>(389)</sup> Recogida por los países del Commonwealth, y también EE.UU, la provincia canadiense de Québec y Japón.

<sup>(390)</sup> Gómez- Robledo Verduzco, Alonso y Witker Velázquez, Jorge (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, UNAM-Porrúa, 2001, p. 174.

<sup>(391)</sup> Sentencia de 1986, House of Lords, asunto *Spiliada Maritime Corporation vs Cansulex Ltd.* AC 460, p. 476.

tribunales de otros países. En ambos casos existe superposición de la competencia de un tribunal por sobre otro <sup>(392)</sup>.

La doctrina del *forum non conveniens*, ha sido objeto de varias críticas; tanto desde la perspectiva del Principio de igualdad de acceso a la jurisdicción extranjera, como desde los principios generales del Derecho Internacional Privado dirigidos a la determinación de la CJCI en un modelo de justicia privada europeo, a saber:

a.-) Los países cuya tradición se basa en el *common law*, y que recogen la doctrina del *forum non conveniens* pueden incurrir en denegación de justicia.

Tal denegación se produce, en los casos en los cuales se niega la jurisdicción, basados en argumentos de economía procedimental que están asociados a la interpretación de vínculos de conexión desde la perspectiva del “interés nacional” del tribunal que aplica la doctrina. Tales intereses terminan superponiéndose a la tutela judicial efectiva de los derechos de los particulares.

Hablamos de denegación de justicia, porque ante la misma hipótesis, otros tribunales han reclamado jurisdicción bajo un *long arm statute* (estatuto de brazo largo) sobre nacionales, domiciliados o residentes en su territorio jurisdiccional, por daños cometidos en el extranjero, que afecta a víctimas extranjeras. En la Unión Europea, tenemos un caso de similares características a la jurisdicción de *long arm statute* en el caso *Owusu* <sup>(393)</sup>. En efecto, en éste caso, el ciudadano británico Owusu, sufrió un accidente en playas de Jamaica, donde alquiló una casa de vacaciones al Sr. Jackson, a quien demandó de responsabilidad contractual por haber entendido implícitamente la seguridad de la playa privada cercana a la casa de vacaciones. Tanto el demandante como el demandado principal tenían su domicilio en el Reino Unido, sin perjuicio de lo cual, fueron traídos a juicio varias sociedades que explotaban servicios en la zona

---

<sup>(392)</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 20 de noviembre de 2003, asunto C-159/02, Turner. Ver también, STJCE C-351/89, Rec. p. I-3317, caso Overseas Union Insurance y otros, apartado 24.

<sup>(393)</sup> STJCE Asunto C-281/02 *Andrew Owusu*.

de Jamaica. La justicia inglesa decidió que tenía CICI para conocer del caso e hizo una aplicación extensiva del artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968 <sup>(394)</sup>. Consultado el TJUE, señaló que la doctrina del *forum non conveniens* era incompatible con las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968.

Siendo así las cosas en un caso de responsabilidad contractual, lógico es ponernos en el lugar de un caso de responsabilidad extracontractual, en el cual el daño se produce en un tercer Estado no comunitario, con demandado comunitario, y preguntarnos sobre el alcance del artículo 24 del Reglamento (UE) No. 1215/2012: ¿Ha optado el TJUE por una doctrina de *long arm statute* en casos en los cuales se encuentran involucrados daños en terceros Estados?

Si bien el TJUE declina pronunciarse sobre casos hipotéticos, y en el caso *Owusu* ambas partes tenían su domicilio en un Estado comunitario, no es menos cierto que la aplicación del artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968 y Reglamento Bruselas I (asimilable con el artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012) eleva a rango de principio y superpone la regla general de competencia por sobre la regla especial establecida en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En nuestro caso, daños ambientales extracontractuales causados en terceros Estados, pueden involucrar la responsabilidad de personas con domicilio comunitario. En estos casos, la relación entre el hecho generador y el domicilio del demandado resulta de importancia para la justificación normativa de casos como *Owusu*, esta vez para daños extracontractuales a distancia o plurilocalizados.

Por otro lado, tanto la doctrina del *forum non conveniens*, como la aplicación del *long arm statute*, realizan consideraciones de interés público para el asunto. Tales decisiones son unilaterales, y por tanto, pueden adolecer de falta de motivación en una

---

<sup>(394)</sup> Asimismo, se aplicó la doctrina de la STJCE en el asunto *Group Josi*, C-412/98, de fecha 16 de octubre del 2001, que señaló que el Convenio de Bruselas de 1968 era aplicable a “todo litigio en que el demandado tenga su domicilio en el territorio de un Estado contratante”. Se rechazó expresamente la resolución de la Court of Appeal (Reino Unido) de 1992, en el asunto *Harrods (Buenos Aires) Ltd.*, que en caso similar, adoptó la doctrina del *forum non conveniens*, para declinar su jurisdicción.

tutela judicial real y efectiva a los derechos de particulares. Así, en casos en los cuales, la víctima del daño no sea un nacional, o no esté domiciliada, residente, o no tenga el asiento principal de sus negocios en el Estado ante el cual se reclama el ejercicio de la jurisdicción; entonces el análisis de la CJCI, puede terminar haciéndose desde la perspectiva exclusiva del demandado.

El rechazo de la doctrina del *forum non conveniens* evita la paradoja que resulta en los casos en los cuales el Estado donde se produjo el daño no reconozca acción (por ejemplo, porque el Derecho Internacional Privado obliga a presentar la demanda en el domicilio del demandado), y a su vez, que los tribunales del Estado del demandado se declaren *forum non conveniens*, resultando entonces que el demandante se ha quedado sin la posibilidad de acceder a la justicia en ninguno de los Estados.

b.-) También se ha criticado la doctrina del *forum non conveniens* por confundir la ley aplicable con las normas sobre CJCI, incorporando las primeras en el análisis de los vínculos determinantes. En efecto, al realizar un juicio previo sobre los elementos internacionales que constituyen base para el ejercicio de la jurisdicción, en razón de su propia legislación, el tribunal que aplica la doctrina del *forum non conveniens* está determinando qué elementos son relevantes para configurar la responsabilidad.

c.-) La doctrina del *forum non conveniens* puede negar *a priori* la posibilidad de aplicar la ley extranjera en la jurisdicción nacional, autosatisfaciéndose con la ley nacional.

d.-) Desde la perspectiva de los países que no recogen la doctrina del *forum non conveniens*, como ocurre en el caso comunitario, puede constituir un acto discriminatorio, porque la jurisdicción es el ejercicio de una función pública del Estado, y por tanto, es el ejercicio de un poder-deber encomendado a los órganos judiciales para conocer todos los asuntos que les sean sometidos, resolver y ejecutar lo resuelto (<sup>395</sup>).

---

(<sup>395</sup>) Calamandrei Pimpinelli, Piero, *Instituciones de Derecho procesal civil, según el nuevo código*, ediciones jurídicas Europa-América, Vol. I, 1986, p.114.

En éste caso, existe un problema en los sistemas jurídicos internacionales de tradición romano-germánica, los cuales sí hacen una distinción entre jurisdicción y competencia, asignando a la primera la naturaleza de función, según acabamos de enunciar. En contraste los países del *common law*, sólo manejan el concepto de jurisdicción y no la distinguen del concepto de competencia, razón por la cual la jurisdicción en el *common law* puede entenderse como competencia. Por esta razón, al no existir los mismos factores de competencia entre ambos sistemas, el ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales del *common law*, es vista como un acto discrecional por parte de los tribunales de tradición romano germánica.

Por otra parte, la falta de correspondencia, entre los sistemas del *common law* y los sistemas hereditarios de la tradición romano-germánica, ha ocasionado que la *jurisdiction* (ing.) haya sido traducida por cuerpos normativos oficiales <sup>(396)</sup>, como *competencia* (Es.), *compétence* (Fr.) o *competência* (Pt.). Este afán homogeneizador, ha dado como resultado una fuerte influencia del concepto “vínculo más estrecho”, propio de la doctrina del *forum non conveniens*, en la determinación de la CJCI de los sistemas occidentales de Derecho Internacional Privado.

e.-) La doctrina del *forum non conveniens*, permite que las cortes del Estado ante el cual se presenta una demanda, realicen un análisis sobre la conveniencia, utilidad o el interés que el asunto representa para el Estado que ejerce la jurisdicción. Esto significa que el análisis se realiza en razón de criterios de utilidad y conveniencia pública; lo que constituye una interpretación “nacionalista” de los vínculos de conexión. Si el asunto no reviste interés público para el Estado, entonces él tribunal puede declinar su jurisdicción <sup>(397)</sup>.

---

<sup>(396)</sup> Ver por ejemplo traducciones hechas a: a) el artículo 1º de la Convención Interamericana, sobre Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencia extranjeras, suscrito en La Paz, 24 de mayo de 1984, o b) Convención de la Haya sobre ejecución de sentencias extranjeras del 11 de febrero de 1971.

<sup>(397)</sup> Caso Bhopal- India, lugar donde Union Carbide Corporation, planta estadounidense de pesticidas, causó grave contaminación por filtración de gas metil isocianato el 3 de diciembre de 1984, acabando de inmediato con 4.000 vidas humanas, 8.000 en una semana y 25.000 afectados en sus órganos vitales. Demandado Union Carbide en EE.UU., las cortes determinaron que: siendo los



Por tanto, ésta doctrina permitiría realizar un juicio político previo al ejercicio de la jurisdicción, con eventuales consecuencias políticas internacionales derivadas de dicha decisión y asociadas al principio de reciprocidad internacional. Sin perjuicio de lo anterior, la apreciación del interés público que han realizado las Cortes que aplican la doctrina del *forum non conveniens*, puede variar entre las jurisdicciones del *common law* <sup>(398)</sup>.

f.-) La doctrina del *forum non conveniens*, es incompatible con la Convención de Aarhus <sup>(399)</sup>, vigente en la comunidad europea y algunos países de Asia central, en lo relativo al derecho de audiencia justa, considerando que este derecho está fundado a su vez en Convenciones de Derechos Humanos <sup>(400)</sup>.

g.-) Finalmente, la jurisprudencia del TJUE <sup>(401)</sup>, pronunciándose sobre ésta doctrina ha señalado que la aplicación de las reglas de competencia del Convenio de Bruselas depende, en principio, de la localización de demandante y de demandado, bastando que el demandado tenga su domicilio en un Estado contratante, para que se aplique el artículo 2º del Convenio de Bruselas. No corresponde, entonces, que órganos jurisdiccionales renuncien al ejercicio de su competencia en virtud de la excepción de *forum non conveniens* <sup>(402)</sup>.

---

demandante indios, habiendo ocurrido el daño en India, encontrándose allí la mayor cantidad de la prueba, EE.UU era un *forum non conveniens*, no revistiendo el asunto de interés público. Los demandantes no tienen acción en India porque la empresa que compró Union Carbide (Dow Chemical) alegó no existir base de jurisdicción en India para empresa extranjera en sus condiciones. Víctimas sólo pudieron negociar favorablemente para Union Carbide Co., una indemnización de U\$150 dólares por enfermo y U\$5.000.- dólares por fallecido.

<sup>(398)</sup> En *Dagi con Broken Hill Proprietary Co. Ltd*, (Suprema Corte de Victoria, asunto *Dagi v Broken Hill Proprietary Company Limited*, sentencia 22 de septiembre de 1959) los indígenas de las Islas de Nueva Guinea, pudieron demandar en Australia, por daños ocasionados por empresas mineras australianas en Nueva Guinea, alegando imposibilidad de acceso en las Cortes de su país.

<sup>(399)</sup> Convención de Aarhus (Dinamarca) de 25 de junio de 1998, sobre Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

<sup>(400)</sup> Convención Europea de Derechos Humanos, art.6 y Convención Interamericana de Derechos Humanos, arts. 8 y 25.

<sup>(401)</sup> STJCE C-412/98, Rec. p. I-5925, asunto *Group Josi*, apartados 59 a 61.

<sup>(402)</sup> STJCE C-281/02 asunto *Owusu*.

Por todo lo anterior, entendemos que las normas de atribución de competencia, en el sistema europeo deben entenderse como de carácter imperativo; de modo que, las únicas excepciones son aquellas expresamente señaladas en el mismo Reglamento <sup>(403)</sup>.

Los autores del Convenio de Bruselas, como los autores del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no establecieron una excepción a las reglas de CJCI, en base a la teoría del *forum non conveniens* <sup>(404)</sup>, por considerarla una teoría que adolece de seguridad jurídica en el título de jurisdicción.

En efecto, la excepción de *forum non conveniens*, afecta la aplicación uniforme de las reglas de competencia señaladas por el Convenio de Bruselas, sus Convenios y Reglamentos herederos. Además, el hecho de estar reconocida por un limitado número de Estados parte del Convenio de Bruselas, ha favorecido al hecho de ser percibida como facultad “exorbitante” <sup>(405)</sup>. Es difícil medir el problema de la seguridad jurídica, a la que alude la jurisprudencia referida; de tal forma que si bien en la doctrina del *forum non conveniens* el juez tiene amplio margen de apreciación para resolver un conflicto, es innegable el afán del TJUE por propender a una “previsibilidad” en las normas de conflicto <sup>(406)</sup>. Sin embargo, y aun encontrándonos en un ámbito integrado como lo es el europeo, tal previsibilidad puede ser utópica, máxime cuando existen relaciones con Estados extracomunitarios en los cuales se aplica la doctrina del *forum non conveniens*.

---

<sup>(403)</sup> Sobre carácter obligatorio de las reglas de competencias, ver: STJCE C-440/97, Rec. p. I-6307, asunto GIE Groupe Concorde y otros, apartado 23. STJCE C-256/00, Rec. p. I-1699, asunto Besix, apartado 24.

<sup>(404)</sup> Debate sobre excepción de competencia basada en *forum non conveniens*, a la incorporación de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido, en Informe Schlosser (DO 1979, C 59, p. 71, puntos 77 y 78).

<sup>(405)</sup> STJCE C-281/02 asunto *Owusu*, par. 43.

<sup>(406)</sup> STJCE C-281/02 asunto *Owusu*, par. 41.

#### 9.4.- Prohibición de *anti-suit injunctions*.

Ordenamientos con tradición en el *common law* admiten que sus tribunales emanen órdenes conminatorias dirigidas a las personas sujetas a la jurisdicción de otro juez y cuyo objetivo es la cesación del procedimiento seguido ante otro tribunal; tales son las *anti-suit injunction* <sup>(407)</sup>.

Los tribunales ingleses han sido explícitos en señalar que las *anti-suit injunctions* no constituyen órdenes inhibitorias destinadas a juzgar unilateralmente la competencia de otro tribunal, sino que, prefiriendo la denominación de *restraining orders*, consisten en mandamientos restrictivos de no hacer dirigidas a los particulares que no han aceptado la competencia de un tribunal inglés.

Sin embargo, el TJUE ha señalado que las *anti-suit injunctions*, se oponen al Convenio de Bruselas de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil <sup>(408)</sup>, y ha ratificado éste criterio mientras estuvo vigente el Reglamento 44/2001 Bruselas I <sup>(409)</sup>. En éste último caso, el TJUE ha superpuesto el reconocimiento de la competencia extranjera a un tribunal inglés, por sobre un convenio de arbitraje y por tanto, de sumisión de competencia expresa, por considerar que dicha cláusula de arbitraje es nula, ineficaz o inaplicable en el sistema del Reglamento; en razón de afectar la confianza recíproca que debe existir entre los ordenamientos procesales civiles de los Estados a quienes se aplica. Por tanto, la existencia de una figura ajena a la tradición jurídica romano-germana, provocaría distorsiones en el sistema, pues permitiría que los tribunales de algunos

---

<sup>(407)</sup> Requejo Isidro, Marta, *Proceso en el extranjero y medidas anti proceso (antisuit injunctions)*, Universidad de Santiago de Compostela, España, 2000, p. 34.

<sup>(408)</sup> Conclusiones TJCE C-159/02, asunto *Turner*.

<sup>(409)</sup> STJCE C- 185/07, asunto *Allianz SpA y Generali Assicurazioni Generali SpA, con West Tankers Inc.*

países determinaran la distribución de competencias entre los posibles tribunales, a través de una suerte de mandamiento inhibitorio, sutilmente aludido (<sup>410</sup>).

Corresponde preguntarse ahora, cuál es límite al respeto del sistema de reconocimiento de la competencia de los tribunales establecido por el Reglamento (UE) No. 1215/2012, en los casos en los cuales existe sumisión expresa de competencia, mediante un pacto entre las partes en beneficio de la justicia arbitral. Conviene considerar aquí que el artículo 1º del Reglamento (UE) No. 1215/2012 excluye su aplicación a las materias de arbitraje y que los tribunales que reconocen las *antisuit injunctions*, pertenecen a Estados regulados por la Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, de 10 de junio de 1958.

En éste sentido, El TJUE (<sup>411</sup>) señaló que la sumisión al arbitraje opera como una “excepción”, al foro especial patrimonial señalado en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sólo en la medida que la cláusula de arbitraje sea válida. Sin embargo, la validez de la cláusula, supone que el tribunal naturalmente llamado a pronunciarse sobre el asunto, sea el que determine si la cláusula de arbitraje es o no válida (<sup>412</sup>).

Dicho de otra forma, un tribunal nacional distinto del que correspondiere según el Reglamento (UE) No. 1215/2012, no podría dictar una *anti-suit injunction* en contra del tribunal correspondiente según el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No.

---

(<sup>410</sup>) Coinciden en la sofisticación de la referida orden al tribunal detrás de la orden *in personam*: Bermann, George. A., “The use of antisuit injunction in international litigation”, Columbia Journal of Transnational Law, Vol. 28, 1990, pp. 630 y 631. Collins, Lawrence, Essays in International Litigation on the conflict of Laws, Clarendon Paperbacks, Oxford University Press, 1994, p. 112

(<sup>411</sup>) Conclusiones del abogado general, C- 185/07, asunto *Allianz SpA y Generali Assicurazioni Generali SpA, con West Tankers Inc.* Asimismo, ver numeral 27 de la sentencia que señala: “De ello se deduce que la excepción de incompetencia propuesta por West Tankers ante el Tribunale di Siracusa, basada en la existencia de un convenio arbitral, incluida la cuestión relativa a la validez de éste, está comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento N° 44/2001 y que, por tanto, corresponde exclusivamente a dicho órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la referida excepción y sobre su propia competencia (...)”.

(<sup>412</sup>) Cfr. con Gómez Jene, Miguel, “Propuestas de inclusión del arbitraje en el reglamento 44/2001”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010, pp. 339-358.

1215/2012, basado en la existencia de una cláusula arbitral hecha valer ante su jurisdicción, pendiente que estuviera la discusión sobre la validez de dicha cláusula. Finalmente, si la cláusula o el pacto de arbitraje fueren válidos, la competencia radica en el tribunal arbitral, no por efecto de una *anti-suit injunction* sino por aplicación de Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras.

Al respecto el Informe del Parlamento Europeo sobre aplicación y revisión del Reglamento (CE) número 44/2001 <sup>(413)</sup>, se opuso “enérgicamente” a que el arbitraje se incluyera en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Así declaró:

“9.- Se opone enérgicamente a la supresión, siquiera parcial, de la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento;

10.- Considera que el artículo 1, apartado 2, letra d), del Reglamento debe dejar claro que no solo los procedimientos de arbitraje están excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento, sino también los procedimientos judiciales que tengan por objeto principal, incidental o preliminar la validez o el alcance de la competencia arbitral; considera asimismo que debe añadirse un apartado al artículo 31 en el que se disponga que no se reconocerán las resoluciones cuando el tribunal del Estado miembro de origen, al decidir en su resolución sobre la validez o el alcance de una cláusula arbitral, haya infringido alguna norma de la legislación sobre arbitraje en el Estado miembro en que se solicita la ejecución, a no ser que la resolución de ese Estado miembro produzca el mismo resultado que se hubiera alcanzado de aplicarse la legislación sobre arbitraje del Estado en que se solicita la ejecución.”

Agregando matices, en el mismo año en el que se elaboró este Informe, la Comisión Europea presentó en el mes de diciembre del año 2010 una propuesta de modificación al entonces vigente Reglamento Bruselas I <sup>(414)</sup>. Esta propuesta se basó principalmente en los principios de subsidiariedad y proporcionalidad presentados en

---

<sup>(413)</sup> Informe del Parlamento Europeo de 9 de junio del 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 2009/2140 (INI).

<sup>(414)</sup> Comisión Europea, Bruselas, COM(2010) 748, 2010/0383 (COD) del 14 de diciembre del 2010, sobre Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida).

la misma propuesta de modificación. Uno de los aspectos presentados guardó relación con “mejorar la articulación” entre el arbitraje y la vía judicial. En efecto, el riesgo de juicios paralelos (unos seguidos en sede arbitral y otros en sede judicial) amenaza la ineficiencia del sistema, tanto por los costes y retrasos en los procedimientos, como también por el riesgo en resoluciones inconciliables <sup>(415)</sup>.

Las opiniones discrepantes (unos por la promoción activa de los convenios de arbitraje y otros por evitar en forma más amplia una declaración de competencia en el Reglamento) coinciden en el buen funcionamiento de la Convención de Nueva York de 1958 <sup>(416)</sup>, la que por esta razón, no debería verse afectada por el Derecho de la UE.

En la actualidad el Reglamento (UE) No. 1215/2012, resuelve la materia en un lato considerando 12, que se pronuncia sobre el ámbito de competencia del arbitraje, la nulidad, ineficacia o inaplicabilidad del convenio arbitral, procedimientos incidentales y ejecución del laudo arbitral.

#### **10.- Interpretación extensiva del fuero especial para delitos y cuasidelitos. Principio *favor laesi*.**

Cuando de daños ambientales se trata (y de daños civiles asociados a los anteriores) la regla de ubicuidad, que permite un *optio fori* a favor del demandante, puede ser considerada como una manifestación del principio *favor laesi*, cosa que no se justifica para cualquier otro daño civil ordinario.

---

<sup>(415)</sup> “Conviene mejorar la articulación entre el arbitraje y la vía judicial. El arbitraje está excluido del ámbito de aplicación del Reglamento. Sin embargo, al impugnar un convenio de arbitraje ante un tribunal, una parte puede desvirtuar efectivamente dicho convenio y crear un procedimiento judicial paralelo e ineficiente, que podría culminar en soluciones inconciliables. Ello genera costes y retrasos adicionales, socava la previsibilidad en la solución de conflictos y propicia las tácticas judiciales abusivas”.

<sup>(416)</sup> En relación la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) de 1958, en vigor desde el 7 de junio de 1959.

En efecto, la regla de ubicuidad que también ha sido recogida en el artículo 7 del Reglamento 864/2007 Roma II <sup>(417)</sup>, evidencia un desincentivo a los operadores a instalarse en países con legislación débil en materia de protección ambiental y con sistema judicial débil en materia de legitimación activa o con procedimientos anacrónicos e ineficientes para los fines de reparación e indemnización civil <sup>(418)</sup>. A *contrario sensu*, si los operadores están instalados en Estados que gozan de una fuerte protección ambiental, entonces se verían desincentivados de instalarse en la frontera con países de escasa protección ambiental, a sabiendas que los efectos finales de la contaminación se sentirán en ambas clases Estados. Por esta razón, la regla de ubicuidad tiene plena justificación sobre todo en materia ambiental; porque da contenido a una política comunitaria <sup>(419)</sup> que tiende a favorecer la prevención ambiental, y por tanto protege a la víctima de contaminación ambiental. Una de las facetas de protección es la que corresponde a la calidad de víctima civil de un daño ambiental. Así, la regla de ubicuidad es la instrumentalización del principio “quien contamina paga” adoptado por la Unión Europea en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de UE (antiguo artículo 95.3 del Tratado CE) <sup>(420)</sup>. Este artículo

---

<sup>(417)</sup> Ver asimismo, exposición de motivos del Reglamento 864/2007 Roma II, considerando 25: “En cuanto a los daños medioambientales, el artículo 174 del Tratado, que contempla un *elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción preventiva, en el principio de corrección en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga*, justifica plenamente el recurso al principio de *favorecer a la víctima*”.

<sup>(418)</sup> La Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, ha establecido mínimos de responsabilidad ambiental, los que, en todo caso, no se extienden a la regulación de la indemnización civil.

<sup>(419)</sup> López Ramón, Fernando, “Observatorio de políticas ambientales 1978-2006. Valoración general”, disponible en: [http://www.ecodes.org/docs/agenda/Valoracion\\_general.pdf](http://www.ecodes.org/docs/agenda/Valoracion_general.pdf) [revisado 29 de junio del 2010]. Crespo Hernández, Ana, *ob cit*, p.13.

<sup>(420)</sup> Art. 114 del Tratado de Funcionamiento de la UE (95.3 del TCE): “La Comisión, en sus propuestas previstas en el apartado 1 referentes a la aproximación de las legislaciones en materia de salud, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores, se basará en un *nivel de protección elevado*, teniendo en cuenta especialmente cualquier novedad basada en hechos científicos. En el marco de sus respectivas competencias, el Parlamento Europeo y el Consejo procurarán también alcanzar ese objetivo.

promueve la adopción de medidas preventivas <sup>(421)</sup> y distribuye los costos de la litigación internacional.

En otras palabras, ante el temor por la fragmentación de los sistemas jurídicos vs. el cumplimiento de un fin imperativo esbozado por el propio legislador en los considerandos del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(422)</sup> sobre unidad, coherencia y efecto útil del Derecho Comunitario, tenemos que no podemos dejar de señalar que tal fragmentación acusa un solo perfil: favorecer a la víctima del daño. Este es el *leit motiv* (o en palabras de CHABAS el “punto omega”) que redirigen los grandes principios de la responsabilidad extracontractual y que siguen abogando por la “*claosola generale*” a la que aludieron DOMAT, POTHIER y todos los autores que siguieron el Code Francés <sup>(423)</sup>.

Sin embargo, ¿pueden predicarse, de la forma que ocurre para la víctima de daños ambientales, los mismos fundamentos para la víctima de daños civiles asociados? Creemos que sí, en la medida que tales daños civiles sean daños directos.

En efecto, en materia de CJCI, el principio *favor laesi*, no envuelve el mismo debate que en materia de legislación aplicable. Cuando nos preguntamos por la legislación aplicable, entonces, tendemos a ver el *optio fori*, como un derecho de opción que tiene la víctima para elegir la legislación más favorable. En materia competencial, en cambio, la *optio fori* de la regla de ubicuidad supone coherencia entre el derecho de tutela judicial efectiva reconocido al demandante civil y la aplicación eficaz del sistema de competencias del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

---

<sup>(421)</sup> Medidas preventivas que también se encuentran recogidas por la jurisprudencia del TJUE, aplicando para ellas el art. 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

<sup>(422)</sup> Ver Considerando 15 del Reglamento (UE) No. 1215/2012: Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

<sup>(423)</sup> Chabas, François, *Cien años de responsabilidad civil en Francia*, Trad.: Mauricio Tapia Rodríguez, Flandes Indiano, colección “Derecho Francés contemporáneo”, Ed. Van Dieren, París, 2004, pp.71-74.



En este sentido el demandante civil directo mal entendido como un demandante indirecto del daño ambiental se puede ver perjudicado por la exclusión a su respecto del derecho de opción que establece la regla de ubicuidad y sufrir los costos de la litigación internacional, por el sólo hecho de ser considerado víctima derivada, secundaria, o indirecta del daño ambiental. Esta categorización secundaria a la que nos referimos está evidenciada en el artículo 7 del Reglamento 864/2007 Roma II, que distingue entre daños ambientales y daños civiles, señalando<sup>(424)</sup>:

*“La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de un daño medioambiental o de un daño sufrido por personas o bienes como consecuencia de dicho daño (...)”.*

No estamos de acuerdo con esta categorización. En efecto, tanto los daños ambientales como daños civiles obedecen al mismo fenómeno: comparten el mismo hecho generador. En otras palabras, “se causan” en el mismo hecho, aunque las consecuencias, intereses y fines sean distintos. De esta forma, no porque sus efectos sean diferentes deben serles aplicables políticas distintas. La protección ambiental eficaz debe tener funcionamiento práctico y requiere que ambas dimensiones del daño actúen coordinadamente.

La dificultad para los daños civiles directos es superior, porque estos pueden estar ubicados en cualquier Estado, sin que acompañen necesariamente las manifestaciones evidentes del daño ambiental, no obstante se hayan causado todos en el mismo hecho. En efecto, todo daño ambiental arrastra consigo un daño civil que le sigue como la misma “sombra” por donde se extienda la contaminación y a tantos países corresponda el mismo fenómeno.

Sin embargo también existen daños civiles directos, que se verifican a distancia del lugar de la contaminación, sin que los afectados hayan sufrido los efectos de la contaminación, en sus propias personas. Los demandantes civiles

---

<sup>(424)</sup> La función preventiva de la regla de ubicuidad está apoyada en el principio *favor laesi*, el que proponemos “sólo para los daños puramente ecológicos” sin justificarlo de igual manera para otra clase de daños a las personas o a los bienes. En este sentido ver: Amores Conradi, Miguel Ángel Y Torralba Mendiola, Elisa, “XI Tesis sobre el estatuto delictual”, *Revista Española de Estudios Internacionales*, número 8, 2004, pp. 29-30. Crespo Hernández, Ana, *ob cit*, p.15.

directos han sufrido daños en otros bienes: en su patrimonio, en su moral o conciencia ecológica (caso de las fundaciones y corporaciones internacionales), o en sus legítimos intereses culturales, de recreación, de investigación, de turismo, etc.

Así por ejemplo, la venta de servicios que se sirven del medio ambiente como polo de atracción (servicios turísticos, venta de pasajes, actividades de educación e investigación que requieren traslado del estudiante o del investigador, por mencionar algunos) se ven altamente perjudicados por un daño ambiental. En estos casos, los perjudicados han podido contratar con una empresa o institución (contratos con agencias de turismo, contratos de enseñanza con instituciones de investigación, contratos de transporte, etc.). Pero ocurre que esta responsabilidad contractual sólo alcanza a las partes en el contrato y no indemniza al agente o al operador de los servicios, el que sufre un daño extracontractual. En efecto, la ocurrencia del hecho generador le es inimputable, imprevisible y le genera un daño: imposibilidad de cumplir con contratos asumidos con terceros, pérdida de oportunidades de negocio (como ocurre con las pérdidas en la venta de servicios de turismo, hotelería y pasajes por mencionar los más evidentes) y el deber de indemnizar contractualmente a terceros afectados. En este caso, no hablamos de demandantes indirectos porque si bien mantienen relaciones contractuales con terceros, resulta que se sirven directamente del medio ambiente para realizar una actividad que ha resultado frustrada.

Por otro lado, las cláusulas de exención de la responsabilidad contractual que pudieron operar entre las vendedoras de servicios y los consumidores o entre estudiantes e investigadores y sus centros de investigación (por haber operado causales como: caso fortuito o fuerza mayor), sólo han venido a beneficiar al contaminante. En efecto, una interpretación contraria ¿obedece acaso al fin perseguido por la política comunitaria de protección ambiental? Creemos que no.

Por estas razones, es que proponemos una interpretación extensiva de la regla de ubicuidad en beneficio del “demandante civil directo” asociado a un daño ambiental, con independencia del lugar donde percibe el daño y bajo la única condición de que acredite que el demandante es víctima directa.

Todo lo cual, corresponde con la aplicación de los principios internacionales de protección ambiental que vimos en la primera parte de este trabajo <sup>(425)</sup>.

### **11.- La “parte más débil” de la relación internacional: jurisprudencia y análisis para daños ambientales.**

A primera vista el Derecho Internacional Privado parece ponerse del lado de la víctima, al reconocerle en los artículos 4 y 7.2 de Reglamento (UE) No. 1215/2012, el derecho de elegir entre tres posibles foros distintos: a) domicilio del demandado, b) lugar donde se originan los hechos y c) lugar del daño o del efecto.

En efecto, existe un contexto normativo según el cual la jurisprudencia del TJUE ha sido cada vez más consciente de las posibilidades que tienen las partes en la determinación del foro y de los beneficios que persiguen con la aplicación de la legislación más favorable.

Sin embargo, es necesario agregar algunos matices a la aseveración sobre los beneficios que están a favor de las víctimas. En efecto, si bien las víctimas han ido adquiriendo más opciones según la interpretación extensiva de algunos fueros; por otro lado en cambio, los infractores han aprovechado la existencia de normas sobre litispendencia internacional, con el fin de obstaculizar las eventuales reclamaciones por daños y perjuicios <sup>(426)</sup>. En tales casos, los eventuales infractores utilizan demandas declarativas “de no infracción” (denominadas también acciones declarativas negativas) ante jurisdicciones nacionales que se caracterizan por ser

---

<sup>(425)</sup> Son principios de protección del Medio ambiente y protección de parte: a) Principio de Soberanía sobre los Recursos Naturales y Responsabilidad de No Causar Daño al Medio Ambiente de otros Estados o de Zonas Fuera de la Jurisdicción nacional, b) Principio de Cooperación Internacional, c) Principio Contaminador Pagador, d) Principio de la Responsabilidad común pero diferenciada, e) Principio *favor laesi* y coherencia con el foro general domicilio del demandado.

<sup>(426)</sup> Estas demandas son habituales en litigios sobre propiedad industrial y Derecho de la Competencia.

lentas. Así ha sido denunciado por algunos autores en asuntos que fueron presentados ante tribunales belgas e italianos <sup>(427)</sup>.

De esta forma, si bien la víctima puede presentar una demanda ante la jurisdicción que estima más favorable, si resulta que presenta su demanda con posterioridad a la demanda declarativa del infractor, la demanda de la víctima podrá verse afectada por aplicación de los artículos 29 y 30 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que señalan:

*Artículo 29.1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31, apartado 2, cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera.*

*2. En los casos contemplados en el apartado 1, a instancia de un órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio, cualquier otro órgano jurisdiccional al que se haya sometido el litigio informará sin demora al primero de la fecha en que se interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.*

*3. Cuando el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la primera demanda se declare competente, el órgano jurisdiccional ante el que se interpuso la segunda se abstendrá en favor de aquel.*

*Artículo 30. 1. Cuando demandas conexas estén pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos, el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.*

*2. Cuando la demanda presentada en primer lugar esté pendiente en primera instancia, cualquier otro órgano jurisdiccional podrá de igual modo declinar su competencia, a instancia de una de las partes, a condición de que el órgano jurisdiccional ante el que se haya presentado la primera demanda sea competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.*

*3. Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si los asuntos fueran juzgados separadamente.*

Estos artículos regulan los procedimientos paralelos o simultáneos relacionados entre sí y desarrollados en distintos Estados miembros. Es así como resulta que las normas

---

<sup>(427)</sup> Un mayor análisis en base a la jurisprudencia del TJUE, y debate ante los tribunales ingleses en: Suderow, Julia, “Cuestiones de Jurisdicción Internacional en torno a la aplicación privada del Derecho Antitrust: *Forum Shopping* y demandas torpedo”, *Revista de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, Madrid, 2010, pp. 315-331.

sobre litispendencia y conexidad del Reglamento (UE) No. 1215/2012 pueden dar lugar a abusos y a proliferación de *forum shopping malus*.

Por otra parte, si bien el artículo 8.1 permite la acumulación de demandas relacionadas, esta opción sólo es posible para el demandante, quien es el que debe solicitarla. En los casos en los que el procedimiento ha sido iniciado a petición de una o varias víctimas de la infracción, la parte demandada no podrá solicitar la acumulación de otros posibles procedimientos que se hayan iniciado contra ella en otros Estados miembros; en su lugar deberá esperar a que sea el propio tribunal el que haga uso de los artículos 29 y 30 si resultan posible.

Si el procedimiento es iniciado por el eventual infractor, entonces el resultado es distinto: el infractor podrá solicitar la acumulación de todas las reclamaciones por daños y perjuicios al tribunal que ha elegido utilizando las normas de litispendencia. Así ocurre en el caso de las demandas conocidas como “demandas torpedo”, en las cuales el eventual infractor actúa a veces motivado por cambiar el lugar del foro.

Considerando las anteriores advertencias, a continuación, nos dedicaremos a dilucidar el sentido y alcance que el TJUE ha entregado sobre el concepto de “parte más débil” en la relación jurídica internacional, con el fin de determinar qué beneficios son susceptibles de ser reconocidos a la parte más débil en un conflicto ambiental. De esta forma, pretendemos determinar si las excepciones que establecen fueron especiales han sido interpretadas por el TJUE a la luz de un principio *favor laesi*, y/o si existe relación entre el *forum actoris* y una interpretación extensiva de la regla de ubicuidad. Todo lo cual, creemos relevante en materia de daños civiles asociados a daños ambientales, pues existe la tendencia de tratarlos según el régimen general restrictivo establecido para los daños civiles tradicionales, en circunstancias que se encuentran asociados a un bien de relevancia superior, que pone a víctima de un daño ambiental y de daños civiles directos, como la parte más débil de la relación internacional.

En efecto, no existe jurisprudencia del TJUE que establezca que el demandante por daño ambiental es la parte más débil, sin embargo, esta circunstancia puede explicarse en parte por el hecho de que salvo el caso *Bier vs. Minas de Potasio de Alsacia*, no han llegado asuntos al TJUE sobre materias de CJCI por daños ambientales. Por otro lado, no existe jurisprudencia del TJUE que establezca que el demandante de un daño “civil extracontractual tradicional”, sea la parte más débil de la relación internacional; es más, todas las declaraciones del TJUE apelan al sentido contrario.

Sin embargo, gracias a la jurisprudencia que recae sobre los fueros especiales establecidos en razón de la materia, regulados en el Capítulo II, sección II del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(428)</sup> y particularmente aquellos que establecen regímenes alternativos <sup>(429)</sup> es que creemos posible y conveniente extrapolar las conclusiones que tales sentencias arrojan sobre el demandante directo de daños civiles asociados a un daño ambiental. En efecto, si bien en la actualidad no existe un fuero especial en materia de daños ambientales, creemos que tal como actualmente ocurre en materia de consumidores, de trabajadores o de beneficiarios de seguros; nada obsta a que en el futuro los demandantes civiles por daños ambientales sigan el criterio establecido para la protección de la parte más débil recogida en los referidos casos especiales. De esta forma, constituyendo un fuero especial en razón de la materia y considerando que la víctima de daño ambiental (y de daño civil asociado) se encuentra en desmedro sobre el control de la acción dañosa, la que no puede evitar o tan siquiera prever, es que consideramos que ciertamente le corresponde gozar de un estatuto para una categoría de “parte más débil”.

Por otro lado, la principal aprehensión que puede tenerse sobre la interpretación extensiva de la regla de ubicuidad en beneficio de la parte más débil en materia ambiental obedece a la aprehensión que existe en el caso de que estén

---

<sup>(428)</sup> Fueros alternativos entre los que se encuentran en la sección 2 los delitos y cuasidelitos civiles.

<sup>(429)</sup> En cuyo caso nos encontramos con la sección 3 en materia de seguros y sección 4 en materia de contratos celebrados por consumidores.

involucradas gran cantidad de personas, cosa que suele ocurrir con los daños ambientales (caracterizados como masivos, catastróficos y plurilocalizados).

En esta clase de daños, existe el riesgo cierto de pluralidad de vínculos y de consecuente falta de previsibilidad en el título de jurisdicción. Sin embargo, el problema de la pluralidad de vínculos por la vía de pluralidad de legitimados activos ya se debatió a propósito del fuero especial reconocido a los consumidores. En este último caso el legislador comunitario reconoció para ellos un principio *favor laesi*, que se entiende como un *forum actoris*. Criterio que, como veremos más adelante, se ha extendido recientemente a los beneficiarios directos de seguros.

Un ejemplo de asociación entre la responsabilidad delictual y la protección de consumidores que han hecho los tribunales nacionales puede encontrarse en una sentencia del Tribunal Supremo español <sup>(430)</sup> que reproduciendo lo resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, de 14 febrero 2005, estimó parcialmente los recursos de apelación presentados en contra de Mundo Joven, S.A. y Winterthur Seguros Generales, Eurojet y Viajes Barceló, señalando:

*“esta Sala se adscribe decididamente por la tesis de estimar la responsabilidad solidaria entre organizador y detallista, pues ninguna duda ofrece que la Ley de Viajes Combinados como la Directiva que incorpora (entiéndase Directiva 90/314/CEE, de 13 junio relativa a viajes combinados, artículo 5) pretende una mayor protección a los consumidores y obviamente la solidaridad responde mejor a esa protección, con lo cual ya nos encontramos con un elemento interpretativo cual es el relativo al espíritu y finalidad de la norma que nos lleva a entender la solidaridad [...]”.*

En razón de lo anterior, el Tribunal Supremo español estableció como jurisprudencia que existían responsabilidades solidarias tanto de mayoristas como de minoristas <sup>(431)</sup> por un viaje combinado, que terminó en accidente en Turquía, teniendo en consideración la mayor protección al consumidor.

---

<sup>(430)</sup> Ver: STS 149/2010. Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid. número Recurso: 1165/2005 Sentencia de Casación de fecha 20/01/2010 que reproduce lo resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, de 14 febrero 2005.

<sup>(431)</sup> En el caso fueron condenadas Mundo Joven, S.A., Viajes Barceló, S.L. y Eurojet, S.A.

Luego de este ejemplo, nos preguntamos ¿qué obsta para la aplicación del mismo criterio extensivo del fuero que reconoce un derecho de opción (regla de ubicuidad) en beneficio del perjudicado civil directo por daño ambiental? Considerando que en materia de fueros también encontramos principios de protección de la parte más débil, creemos que nada obsta para aplicar la regla de ubicuidad a favor de un demandante de daño civil directo, en la medida de que dicho demandante es la “parte más débil” de la relación extracontractual internacional. Para demostrarlo, se analizarán dos sentencias del TJUE en los asuntos: a) *FBTO Schadeverzekeringen NV* de 13 de diciembre del 2007 y b) *Vorarlberger Gebietskrankenkasse* de 17 de septiembre de 2009.

#### **11.1.- Asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV* (STJCE, C-463/06).**

El litigio nace por la petición del Sr. Jack Odenbreit, con domicilio en Alemania, quien como víctima de un accidente de tráfico ocurrido en los Países Bajos demanda a la empresa aseguradora del responsable del accidente: la sociedad *FBTO Schadeverzekeringen NV*, ante el tribunal del domicilio del demandante (el *Amtsgericht Aachen*).

En este caso, se aplicó el artículo 9 apartado 1, letras a y b del entonces Reglamento Bruselas I en vigor (actual artículo 11 literales a y b del Reglamento No. 1215/2012) que señalaba:

*“1.- El asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:*

- a) ante los tribunales del Estado miembro donde tuviere su domicilio; o*
- b) en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante [...].”*

El TJUE trajo a colación el derecho de opción establecido en el artículo 9 del Reglamento 44/2001 Bruselas I (<sup>432</sup>), señalando:

---

(<sup>432</sup>) STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*, apartado 25: “*Procede señalar a este respecto que esta última disposición no se limita a atribuir competencia a los tribunales*



*“Procede señalar a este respecto que esta última disposición no se limita a atribuir competencia a los tribunales del domicilio de las personas que en ella se enumeran, sino que, por el contrario, enuncia la regla de competencia del domicilio del demandante, reconociendo de este modo a dichas personas la facultad de demandar al asegurador ante el tribunal del lugar de su propio domicilio”.*

Finalmente apoyó su razonamiento señalando la finalidad proteccionista que la jurisprudencia emitida por el propio tribunal ha señalado<sup>(433)</sup>. Así y según se desprende de las disposiciones aplicables al asunto principal, la jurisprudencia del TJUE se ha pronunciado, en todas ellas, a favor de un criterio extensivo en el derecho de *optio fori* a favor de la “parte más débil”, entendida como “la parte económicamente más débil”, señalando <sup>(434)</sup>:

(...) En efecto, conforme al decimotercer considerando del Reglamento nº 44/2001, este pretende garantizar a las *partes más débiles una protección más favorable* que la que proporcionan las reglas generales de competencia.

En razón de los casos especiales señalados por el propio TJUE, tenemos que si negáramos al demandante, la facultad de poder presentar su demanda ante el lugar de su propio domicilio, cuando se trata de daños directos sufridos en su domicilio, resulta que se le privaría de la protección que el Reglamento (UE) No. 1215/2012 reconoce a las partes más débiles (como ocurre en materia de seguros) Por lo que estimamos que estaría contraviniendo, el espíritu del Reglamento <sup>(435)</sup>.

De esta forma, el TJUE ha “ampliado el ámbito subjetivo” de posibles titulares con derecho de *optio fori*, incluso a *forum actoris* (para demandar ante el

---

*del domicilio de las personas que en ella se enumeran, sino que, por el contrario, enuncia la regla de competencia del domicilio del demandante, reconociendo de este modo a dichas personas la facultad de demandar al asegurador ante el tribunal del lugar de su propio domicilio”.*

<sup>(433)</sup> En cuyo caso se apoyó en las sentencias: STJCE C-412/98, Rec. p. I-5925, asunto *Group Josi*, apartado 64. STJCE C-112/03, Rec. p. I-3707, asunto *Société financière et industrielle du Peloux*, apartados 30-40. STJCE C-77/04, Rec. p. I-4509, asunto *GIE Réunion européenne* y otros, apartado 17. STJCE 201/82, Rec. p. 2503, asunto *Gerling Konzern Spezial Kreditversicherung* y otros.

<sup>(434)</sup> STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*, apartado 28.

<sup>(435)</sup> En efecto, la propia Comisión europea, vino a reforzar esta parte el Reglamento Bruselas I, mejorando la protección que establecía el Convenio de Bruselas de 1968.

propio domicilio del demandante) a otros demandantes distintos del tomador del seguro, del asegurado o del beneficiario del contrato de seguro, que pueden demandar al asegurador (<sup>436</sup>). En otras palabras, el TJUE ha aplicado una interpretación extensiva del fuero especial del artículo 11 en relación con el artículo 13º, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012, tomando para ello en exclusiva consideración el valor superior que resulta de la posición de la “parte más débil”.

Asimismo, es concluyente en pronunciarse a favor del “perjudicado” (evitando entrar en las calidades de asegurado, beneficiario, tomador, etc., del contrato de seguro), en la medida que tal perjudicado ejerza una “acción directa” en contra de la compañía aseguradora (<sup>437</sup>), señalando:

“A este respecto, la aplicación de esta regla de competencia a la acción directa entablada por el perjudicado no puede depender de que se le considere «beneficiario» en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001, ya que la remisión a esta disposición que opera el artículo 11, apartado 2, de este permite extender la regla de competencia a estos litigios con independencia de la clasificación del actor en alguna de las categorías que figuran en tal disposición”.

Finalmente sobre la calificación de la acción, tenemos que esta sentencia fue calificada en el Derecho alemán como de acción de responsabilidad delictual. Todo lo cual no impidió que el TJUE, aplicase las reglas de competencia previstas en el artículo 11, apartado 1, letra b) del Reglamento (UE) No. 1215/2012 (<sup>438</sup>):

“Por último, por lo que respecta a las consecuencias que se derivan de la calificación que reciba la acción directa del perjudicado contra el asegurador, que, conforme se desprende de la resolución de remisión, son objeto de controversia en Derecho alemán, procede señalar que el hecho de que en el Derecho nacional se califique tal acción de acción por responsabilidad delictual, relativa a un derecho ajeno a las relaciones jurídicas contractuales, no excluye que pueda aplicarse la regla de competencia prevista en el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 44/2001.”.

---

(<sup>436</sup>) STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*, apartados 25-26.

(<sup>437</sup>) STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*, apartado 24, en relación con el apartado 27.

(<sup>438</sup>) STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*, apartado 30.

De esta forma, el TJUE supeditó normas propias de materias contractuales a la aplicación de un beneficio establecido en favor del más débil cuando existe concurrencia de “acciones directas”.

#### **11.2.- Asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse* (STJC -347/08).**

El 10 de marzo de 2006, se produjo un accidente de tráfico en una autopista alemana, en el que participaron: la Sra. Gaukel, conductora de un vehículo, quien tenía contratado en Alemania un seguro de responsabilidad civil con WGV-SAV, y, por otra parte, la Sra. Kerti, conductora de otro vehículo. Ésta última sufrió una distensión cervical. Los tratamientos médicos y la incapacidad laboral de la Sra. Kerti (del 15 al 21 de marzo de 2006), fueron asumidos por la VGKK, organismo de la seguridad social. Al momento del accidente la Sra. Kerti tenía su domicilio en Bludenz (Austria), después cambió su residencia a Ubstadt-Weiher (Alemania). La VGKK ejercitó, el 13 de febrero de 2008, una acción de reembolso ante el Bezirksgericht Dornbirn (Austria) contra la empresa aseguradora WGV-SAV.

El TJUE concluyó que el organismo de seguridad social, subrogado *ex lege* en los derechos de la persona directamente perjudicada en el accidente, no podía entablar una acción directa ante los tribunales del Estado miembro en que está sito su establecimiento, contra la entidad aseguradora de la persona supuestamente responsable del accidente, la que tenía su domicilio en otro Estado miembro. El TJUE consideró que el organismo de seguridad social no reunía la calidad de “parte más débil”.

Con esta sentencia el entonces TJCE, ratifica el criterio establecido en la sentencia anterior (STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*) pero limita el ejercicio de la acción directa, eliminando la opción para el subrogado que tenga la calidad de organismo de seguridad social estatal, por no ser comprable con la cualidad de parte más débil exigible según el espíritu del artículo 11 en relación con el artículo 13º, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Para nuestros efectos, nos interesa profundizar en la noción de “parte más débil”, beneficiaria del *optio fori* del artículo 11º del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Para esto, analizaremos los considerandos 15º, 16º y 18º del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que vienen a reemplazar y complementar los artículos 11º, 12º y 13º del Reglamento Bruselas I, respectivamente.

Para ello, abordemos el caso *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*, donde el TJUE ha tenido a los considerandos 11º, 12º y 13º del Reglamento 44/2001 Bruselas I, como del mismo valor interpretativo.

Lo que es muy interesante, pues mientras el considerando 11º (actual considerando 15º), se refiere a los principios de previsibilidad, domicilio del demandado como base general de jurisdicción y a excepciones para “casos muy concretos” <sup>(439)</sup>; en el considerando 12º (actual considerando 16º), en cambio, se abren las posibilidades a los foros alternativos <sup>(440)</sup>, para concluir con el considerando 13º (actual considerando 18º) en el cual se señalan casos en los cuales la presencia de una “parte más débil” obliga a interpretar la competencia más “favorable a sus intereses” <sup>(441)</sup>.

---

<sup>(439)</sup> Reglamento 1215/2012: Considerando 15º: “Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regirse siempre por este principio, excepto en algunos casos muy concretos en los que el objeto del litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las normas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción”.

<sup>(440)</sup> Reglamento 1215/2012: Considerando 16º: “El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una estrecha conexión debe garantizar la seguridad jurídica y evitar la posibilidad de que una persona sea demandada ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de vulneraciones del derecho a la intimidad y de los derechos de la personalidad, incluida la difamación.”.

<sup>(441)</sup> Reglamento 1215/2012, Considerando 18º: “En lo que atañe a los contratos de seguro, los contratos celebrados por los consumidores o los contratos de trabajo, debe protegerse a la parte más débil mediante normas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las normas generales”.

En efecto, el TJUE llega a esta conclusión aplicando el precedente del caso *FBTO Schadeverzekeringen*, pero ha limitado a los legitimados activos, de modo tal, que no incluyó a la Seguridad Social de los Estados. Lo interesante de este caso es que el TJUE excluyó a la Seguridad Social, en razón de dos criterios: a) no era perjudicado directo, y b) en razón de la noción de “parte económicamente más débil”. El TJUE consideró como perjudicados directos a las víctimas por repercusión (herederos y sucesores universales no convencionales en el crédito), pero no a la Seguridad Social. En este punto se citó expresamente a la legislación de fondo de un Estado miembro: la legislación española <sup>(442)</sup>.

El TJUE confirmó así su propia jurisprudencia; esta vez relativa a los contratos de seguros. Anteriormente se había referido en el mismo sentido en materia de contratos de consumo <sup>(443)</sup>. En dicha oportunidad, conforme a las normas del Reglamento 44/2001 Bruselas I, la finalidad perseguida por el TJUE fue la protección del consumidor, al que consideró la “parte económicamente más débil” <sup>(444)</sup> de la relación internacional, señalando:

“Por lo demás, la conclusión que se sacó en el apartado 43 de la presente sentencia se confirma por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a las reglas especiales en materia de contratos de consumo previstas en la sección 4 del título II del Reglamento 44/2001, cuyo objetivo es también la protección de la parte más débil. En efecto, el Tribunal de Justicia ha establecido que un subrogado *ex lege* que, en el ejercicio de su actividad profesional, ejerce una acción judicial para reclamar el crédito del cedente resultante de un contrato celebrado por un consumidor no puede beneficiarse de las reglas de determinación de la competencia especiales previstas en materia de contratos celebrados por los consumidores, dado que la finalidad de estas es la protección de la parte económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada (sentencia)”.

Por tanto, habiendo establecido el TJUE, una interpretación extensiva del fuero del artículo 11º, en relación con el artículo 13º, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012, y basado exclusivamente en el valor que se asigna a la “parte más

---

<sup>(442)</sup> STJCE C-347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*, apartado 34.

<sup>(443)</sup> Cfr. con las restricciones a cesionarios de acciones reconocidas al consumidor en: STJCE C-89/91, Rec. p. I-139, asunto *Shearson Lehman Hutton*, apartados 20 a 24.

<sup>(444)</sup> STJCE C-269/95, asunto *Benincasa*, apartado 17 y STJCE C-464/01, asunto *Johann Gruber*, apartados 37-39. STJCE C-347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*, apartado 45.

débil”, resulta lógico preguntarnos, si la víctima directa de un daño civil asociado a un daño ambiental pueda gozar del mismo derecho de *optio fori* (regla de ubicuidad) esta vez establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Creemos que sí, tanto porque es perjudicado directo, como también porque es la parte más débil en la relación internacional. En efecto, la víctima civil de un daño ambiental no ha tenido control sobre un riesgo ambiental, no lo ha asumido y no debe pagar los costos de la litigación internacional.

Finalmente, la sentencia en comento, incluyó una referencia sobre qué debe entenderse por “persona damnificada” para efectos del derecho de *optio fori* establecido en el artículo 11 del Reglamento 44/2001 Bruselas I (actual artículo 13 del Reglamento (UE) No. 1215/2012). Al existir diferentes versiones lingüísticas del artículo 13.2 <sup>(445)</sup>, y distintas acepciones para “persona perjudicada” el TJUE optó por seguir su propia jurisprudencia atendiendo a una interpretación uniforme del derecho comunitario, y exigiendo que la interpretación de la expresión “persona damnificada” guarde relación con la acepción que tiene en otras legislaciones nacionales <sup>(446)</sup>. Así, el TJUE concluyó por hacer referencia no sólo a la persona que sufrió directamente el daño, sino también a la persona que “únicamente lo ha sufrido indirectamente”, en cuyo caso sigue una criterio distinto.

Todas estas consideraciones, arrojan luces sobre la extensión del daño en materia de víctimas consideradas “económicamente más débiles”.

---

<sup>(445)</sup> Vgr. la versión francesa emplea el término “victime”, como equivalente a persona que ha sufrido directamente el daño. La versión alemana, en cambio, utiliza la expresión “der Geschädigte”, en el sentido de “persona perjudicada”. La versión española “persona perjudicada”. Versión checa “poškozený”. La versión danesa “skadelidte”. Versión estonia “kahju kannatanud pool”. Versión italiana “persona lesa”. Versión polaca “poszkodowany”. Versión eslovaca “poškodený”, y versión sueca “skadelidande”. Ver STJCE C-347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*, apartado 25-27

<sup>(446)</sup> STJCE 9/79, Rec. p. 2717, asunto *Koschniske*, apartado 6. STJCE C-296/95, Rec. p. I-1605, asunto *EMU Tabac y otros*, apartado 36. STJCE C-174/05, Rec. p. I-2443, asunto *Zuid-Hollandse Milieufederatie y Natuur en Milieu*, apartado 20. STJCE 30/77, Rec. p. 1999, asunto *Bouchereau*, apartado 14.

## 12.- Conclusiones.

1.- En este primer capítulo, se abordó el lugar del hecho dañoso.

Entendemos por lugar del hecho dañoso aquél fuero de CJCI compuesto por dos elementos: lugar del hecho generador y lugar del daño.

Del análisis del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, se concluye la necesidad de que el tribunal ante el cual se reclama competencia, tome en consideración “la imputación normativa” que existe para estos dos hechos: el hecho generador y el daño.

Entendemos por imputación normativa a una prescripción objetiva de conducta que está establecida en la norma jurídica, que va dirigida al juez y a las partes y que toma su fundamento en los principios y fines de la CJCI y de protección ambiental.

2.- Como tuvimos ocasión de ver en base a la exposición de vasta jurisprudencia del TJUE citada, existe fuerte reticencia en la doctrina por los *forum actoris*. De igual modo, la doctrina está conteste en rechazar los foros que se fundan en el principio *favor laesi*. Sin embargo, y según se expuso, la mayor parte de las críticas se fundan en casos en los cuales el demandante es una víctima civil ordinaria. Es decir, cuando hablamos de víctimas civiles no relacionadas con un daño ambiental o que no están sujetas a un régimen especial (vgr. consumidores o trabajadores).

Desde esa perspectiva la limitación a la apertura de foros basados en el principio *favor laesi* parece razonable, porque privilegia la certeza jurídica y aboga por la previsibilidad del sistema de distribución de competencias..

Sin embargo, cuando hablamos de víctimas por daño ambiental, entonces se advierte la falta de un debate serio en torno a los alcances del principio *favor laesi* para esta clase de víctimas. En efecto, el principio *favor laesi* no sólo justifica la apertura de un foro en el domicilio de la víctima (cuando coincide con el lugar del daño directo) sino que además permite una interpretación extensiva de la regla de

ubicuidad (cuyo nacimiento a la vida del derecho se debe precisamente a un caso de contaminación ambiental internacional).

3.- Analizado el sentido y alcance de la regla de ubicuidad, concluimos que confiere un derecho de opción a la víctima para recurrir a su arbitrio al foro del lugar donde se produjo el hecho generador o al foro del lugar donde se produjo el daño. Este derecho de opción ha sido de creación jurisprudencial y constituye la base doctrinal para interpretar (y modificar de *lege ferenda*) el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Sin embargo, para el caso de CJCI por daños ambientales y por daños civiles directos al daño ambiental, consideramos que la doctrina de la ubicuidad debe satisfacer los siguientes fines:

a) Asegurar el mejor lugar para el desarrollo de los procedimientos judiciales: recolección de pruebas, peritajes, notificaciones, cumplimiento de resoluciones, etc., pensado tanto en las víctimas de daño ambiental como en las víctimas del daño civil directo (manifestación del principio de justicia material y economía procedimental analizados en la primera parte de este trabajo).

b) Establecer criterios justos en la distribución de los costes por externalidades negativas y riesgos asumidos en el desarrollo de una actividad empresarial con efectos ambientales (principio de justicia retributiva), y

c) Asegurar una tutela cautelar, por amenaza de daño ambiental o de daño civil directo, en caso de existir el riesgo (principio de justicia preventiva).

4.- Por otra parte, durante el transcurso de este capítulo denominamos *evento simple*, a la disociación entre el hecho generador y el resultado dañoso, cuando sólo están involucradas las jurisdicciones de dos Estados. En este caso (*evento simple*) el principio de ubicuidad está revestido de todos los caracteres de economía procesal y



de justicia retributiva, distributiva y material que la jurisprudencia señala que deben existir para toda clase de daños.

Sin embargo, cuando analizamos que un mismo hecho generador es capaz de irradiar varios resultados lesivos (daños) y que estos daños pueden estar ubicados en distintos Estados, entonces hablamos de un *evento complejo*. En esta última clase de eventos, existe disparidad de: intensidad, extensión, temporalidad, personas afectadas o materias involucradas (pudiendo ser en unos casos civiles y en otros casos ambientales).

En los eventos que denominamos *complejos* encontramos que la regla de ubicuidad, tal como se presenta tradicionalmente por la doctrina, se convierte en una solución poco eficiente por adolecer de: falta de claridad y de certeza jurídica.

Sin embargo, el verdadero problema en la forma como se expone la regla de ubicuidad para los daños ambientales y para los daños civiles asociados a un daño ambiental, realmente radica en la falta de una adecuada teoría de causalidad entre el hecho generador del daño y el hecho del resultado lesivo.

Este trabajo ha irradiado los beneficios de las modernas teorías de causalidad, para venir a aplicarlas entre ambos hechos.

En efecto, resulta innegable que existe una relación de causalidad entre el hecho generador y el daño.

La relación de causalidad a la que nos referimos debe ser capaz de determinar con certeza si el hecho generador ha sido o no “condición necesaria” del resultado lesivo (aún en los casos en los cuales el hecho generador está formado por varias acciones o por una acción colectiva).

De esta forma presentamos criterios que sirven para determinar la extensión de los daños con una perspectiva coherente con la protección ambiental internacional. Tales criterios son:

- 1.-Equivalencia de las condiciones,
- 2.- Vínculo de proximidad, y
- 3.- Riesgo incrementado.

Todos los anteriores, serán analizados en profundidad en el Capítulo III de esta parte.

5.- Según se desprende de la jurisprudencia que analizamos (principalmente en los casos: C-364/93, asunto *Marinari*; C-189/87 asunto *Kalfelis*; C-433/01 asunto *Blijdenstein*; C-51/97, asunto *Réunion européenne* y otros; C- 168/02, asunto *Kronhofer*) el demandante civil tiene una carga de prueba especial. Así sucede en todos aquellos casos en los cuales el foro que se alega como competente para conocer de un daño civil coincide con el domicilio del demandante.

En estos casos la jurisprudencia obliga al demandante a justificar que además del daño patrimonial sufrido existen “otras razones” que hacen plausible ubicar el foro en el lugar donde el demandante tiene su domicilio. Razones que complementen la sola ubicación del patrimonio del demandante.

La jurisprudencia no identifica cuáles deben ser esas “otras razones” y por esa razón confiere al juez una potestad-deber de ponderar las circunstancias que rodean el fuero.

En materia de daños civiles asociados aun daño ambiental, consideramos que esas “otras razones” deben ser “razones de eficacia ambiental” en la elección del fuero.

Entendemos por eficacia ambiental a la aptitud de radicar el asunto en un foro donde los costes de la litigación internacional sean asumidos por el demandado, cuando se ha probado razonablemente que existe un daño ambiental o el riesgo de un daño ambiental que genera o es capaz de generar un daño civil cierto.

6.- El juez que inhiba su competencia judicial o que la decline en favor de otro tribunal (ubicado en otro país, por estimarlo más competente sea en materia de daños ambientales o sea en materia de daños civiles internacionales) deberá ponderar la buena administración de justicia en el otro tribunal. Es decir, debe ponderar la posible falta de coherencia entre las resoluciones judiciales que se dicten en ambos Estados, asegurando resoluciones conciliables entre sí.

Si por el contrario, reclama competencia sobre un asunto de contaminación internacional, entonces, además de velar por la buena administración de la justicia deberá velar también por la ejecutabilidad de sus decisiones, resolviendo el litigio con fines de justicia ambiental.

Para lograr lo anterior, en nuestra opinión, el juez competente debe satisfacer dos criterios (uno señalado por la jurisprudencia y otro señalado por el Derecho comunitario), tales son:

Primero, proteger al “demandante de daños ambientales”, por tener calidad de “parte más débil”

Segundo, acreditar un vínculo de conexión entre el daño civil, el daño ambiental y el foro competente.

7.- Por otra parte, en este Capítulo, trabajamos un concepto: *forum shopping malus*. En este caso buscamos entregar herramientas al juez llamado a pronunciarse sobre su CJCI, de tal modo que esté en condiciones de evaluar la buena o mala fe con la que actúan las partes, y entre ellas muy especialmente la buena o mala fe del demandante.

Proponemos como concepto de *forum shopping malus*:

*“El abuso del derecho de opción por parte del demandante, quien funda su interés en un cambio en el vínculo de conexión con eventual perjuicio para el demandado, cuando tal perjuicio genera una alteración en la previsibilidad del título de jurisdicción y niega el efecto útil y la aplicación uniforme del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Todo lo anterior, de acuerdo a una interpretación teleológica de los fines previstos tanto por el constituyente, como por el legislador comunitario”.*

Cuando decimos, “los fines previstos por el constituyente y por legislador comunitario”, entendemos tanto a los fines y principios que son propios de la CJCI,

como también a los fines y principios que emanan del Derecho Ambiental Internacional.

8.- Finalmente, estamos seguros de que la víctima de daños ambientales y la víctima de daños civiles directos son dignas de la mayor protección posible que el ordenamiento y el juez son capaces de otorgar al momento de resolverse sobre cuál es el foro con CJCI. Sostiene este criterio, tanto los principios estudiados en la primera parte de esta investigación, como muy especialmente la jurisprudencia del TJUE analizados en este Capítulo.

Todos ellos sostienen que la “parte más débil” de la relación jurídica internacional es la beneficiaria de la mayor protección.

Para materias ambientales, sostenemos estos argumentos en base a las sentencias:

- 1.- STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV* y
- 2.- STJC - 347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*.



## CAPÍTULO II

### DEL HECHO GENERADOR

*Sumario:*

1.- Planteamiento del problema. Relación con la Regla de Ubicuidad. Importancia. 2.- De la atribución de responsabilidad para un demandado plurilocalizado. 3.- Artículo 8.1 Reglamento (UE) No. 1215/2012. Unidad de acción en empresas transnacionales. Diferencias con la simple conjunción de demandado múltiple. 4.- Sentido y alcance del Artículo 8.1 Reglamento (UE) No. 1215/2012 para demandado plurilocalizado y para demandado múltiple. 4.1.- Vinculación estrecha entre las demandas. 4.2.- Lo oportuno y lo conveniente en la tramitación y sentencia de demandas vinculadas. 5.- Pluralidad de Demandados. Jurisprudencia del TJUE. 6.- Grupos de sociedades. 6.1.- Hecho generador en los grupos de sociedades. 6.2.- Hecho generador y las relaciones de dominio, control e influencia en Grupos de Sociedades. 7.- Conclusiones.

---

#### **1.- Planteamiento del problema. Relación con la Regla de Ubicuidad.**

##### **Importancia.**

El artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, establece como foro de competencia para los delitos y cuasidelitos civiles el “lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso”. Este artículo declara:

*Artículo 5. “Las personas domiciliadas en un Estado miembro podrán ser demandadas en otro Estado miembro: 3. En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso”.*

Si bien, las expresiones “se hubiere producido” y “pudiese producirse”, parecieran introducir connotaciones alusivas al tiempo en la comisión del daño, tales sentidos han sido utilizados preferentemente en la argumentación de medidas provisionales y en particular medidas cautelares <sup>(447)</sup>.

---

<sup>(447)</sup> Desde la génesis del Reglamento (UE) No. 1215/2012, la propuesta de modificación del Reglamento Bruselas I estableció la libre circulación de medidas provisionales concedidas por un tribunal competente sobre el fondo del asunto, limitando el efecto de las medidas provisionales ordenadas por tribunales que no son competentes sobre el fondo, al territorio del Estado en el que se

Por su parte, el hecho dañoso también es un fenómeno que se desarrolla en el tiempo, sin embargo, es un problema que atiende más al *iter* del delito o del cuasidelito civil, que a un conflicto de jurisdicciones en el tiempo <sup>(448)</sup>. En nuestro caso, el problema tratará exclusivamente de los conflictos de competencias en el espacio. Por tanto, para nuestros efectos el “hecho dañoso futuro” es considerado como “inminente”.

Separado lo anterior, y considerando que el hecho dañoso al que se refiere el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 establece estas dos realidades ¿en qué contexto abordaremos el hecho dañoso? En adelante, el hecho dañoso alude tanto al lugar de origen del daño, como al lugar donde se han manifestado las consecuencias.

Dejaremos el estudio del lugar donde se manifiesta el daño y sus consecuencias para el Capítulo Tercero de esta parte. En este capítulo, en cambio, abordaremos el lugar donde se origina el daño. Para esto, es necesario establecer el contexto del problema y hacernos algunas preguntas útiles para resolverlo.

En efecto, el origen de la diferencia entre los conceptos hecho generador y resultado dañoso, se encuentra en el caso *Bier/Minas de Potasio de Alsacia*, oportunidad en la cual el entonces TJCE se pronunció sobre un caso de contaminación transfronteriza. En dicha oportunidad el Gerechtshof de la Haya planteó al Tribunal de Justicia, la siguiente cuestión:

*«La expresión "lugar dónde se hubiere producido el hecho dañoso" contenida en el número 3 del artículo 5 del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones*

---

concedieron. Para conocer la propuesta de modificación de Reglamento 44/2001 Bruselas I ver: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0748:FIN:ES:PDF#page=2>.

<sup>(448)</sup> Situación que difiere notablemente con los conflictos de leyes. Sobre conflictos de competencias (entiéndase de jurisdicción) en el tiempo, ver: Fernández Rozas, José Carlos, “Sucesión de normas y Derecho internacional privado: consideraciones en torno a la crisis de las soluciones unitarias en el Derecho intertemporal”. En *Hacia un nuevo Orden Internacional y europeo*. Estudios en homenaje al profesor Don Manuel Díez de Velasco, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 1349-1372. Desantes Real, Manuel, *La competencia judicial en la Comunidad Europea*, Barcelona, 1986, pp. 226 ss. Arellano García, Carlos, *Derecho Internacional Privado*, Ed. Porrúa, Universidad de Texas, 2007, pp.506 y ss. Jurisprudencia del TJUE: STJUE 25/79 asunto *Société Sanicentral vs Collin* de 10 de enero de 1979.

*judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, ¿debe interpretarse en el sentido de "lugar en el que se ha producido el daño (el lugar donde el daño ha sobrevenido o se ha manifestado)" o el "lugar donde se ha cometido el hecho que ha tenido consecuencias dañosas (el lugar donde la acción se ha realizado u omitido)"?»*

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, consideró:

*“que el sentido de esta expresión, en el contexto del Convenio, es incierto cuando el lugar en que se produce el hecho que ocasiona el daño está situado en un Estado distinto de aquél en el que sobreviene dicho daño, como ocurre especialmente en los casos de contaminación atmosférica o del medio acuático, más allá de las fronteras de un Estado” (considerando 13).*

Asimismo:

*“Que, por otra parte, elegir únicamente el lugar donde se ha materializado el daño ocasionaría, **en los casos en que el lugar del hecho causante no coincida con el domicilio de la persona responsable**, la exclusión de una conexión apropiada con la competencia de un órgano jurisdiccional **particularmente próximo a la causa del daño**”. (Considerando 21).*

Finalmente la sentencia señaló:

*“Que procede, pues, responder que, en el caso de que el lugar donde se origina el hecho del que puede derivar una responsabilidad delictual o cuasidelictual y el lugar en que este hecho haya ocasionado un daño no sean idénticos, la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso» del número 3 del artículo 5 del Convenio debe entenderse **en el sentido de que se refiere al mismo tiempo al lugar donde ha sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante**”(Considerando 24).*

*“Que, de ello resulta que la acción judicial frente al demandado puede ser entablada, **a elección del demandante**, ante el Tribunal o bien del lugar donde ha sobrevenido el daño, o bien del lugar donde se ha producido el hecho causante que ocasiona el daño” (Considerando 25).*

Finalmente, la sentencia declaró:

*“En el caso de que el lugar en el que se origina el hecho del que puede derivar una responsabilidad delictual o cuasidelictual, y el lugar en el que este hecho haya ocasionado un daño, no sean idénticos, la expresión «lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso», del número 3 del artículo 5 del Convenio, debe entenderse en el sentido de que se refiere, al mismo tiempo, al lugar donde ha sobrevenido el daño y al lugar del hecho causante. De ello resulta que la acción judicial frente al demandado puede ser entablada, a elección del demandante, ante el Tribunal o bien del lugar donde ha sobrevenido el daño, o bien del lugar donde se ha producido el hecho causante que ocasiona el daño.”*

De la anterior exposición podemos observar lo siguiente:



a.-) En los casos de ilícitos a distancia el hecho dañoso comprende tanto el lugar donde sobreviene el daño (lugar donde el daño ha manifestado sus consecuencias), como también el lugar del hecho causante (lugar donde se origina la acción o lugar del hecho generador).

b.-) De los antecedentes que fueron considerados en la sentencia *Bier vs Minas de Potasio de Alsacia*, se observa que el lugar del hecho causante coincidió con el domicilio del demandado. Por esta razón, la sentencia pudo dotar de unidad y coherencia al foro establecido en el artículo 5.3 del entonces Convenio de Bruselas, en relación con el foro establecido en el artículo 2º del mismo Convenio, hoy artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

c.-) La sentencia no definió qué se entiende por hecho causante (hecho generador).

La falta de definiciones unida a la creación, por vía jurisprudencial, de una regla de ubicuidad para ambos foros, motivó el crecimiento exponencial de los eventuales foros competentes. Consecuentemente, aumentó también la inseguridad jurídica. Con el tiempo, la aplicación de la regla de ubicuidad se extendió a toda clase de demandas civiles, aplicándose a demandas que no estaban necesariamente asociadas a un daño ambiental. Actualmente, la regla de ubicuidad se aplica a una amplia gama de posibilidades que exceden, con creces, el fenómeno de lo “transfronterizo”, para situarse en lo que podemos denominar la órbita de lo “transnacional”. A continuación, veamos algunos ejemplos del uso que se ha dado a la Regla de ubicuidad.

En la sentencia recaída sobre el asunto C-18/02, *DFDS Torline A/S, vs. LO Landsorganisationen i Sverige* (Torline) <sup>(449)</sup>, el entonces TJCE declaró que el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I debía interpretarse en el sentido que los daños ocasionados por una acción colectiva emprendida por un sindicato de trabajadores y producidos tales daños en un buque que estaba inscrito y tenía pabellón de otro Estado, no habilitaba por tal circunstancia a que los daños fuesen considerados como acaecidos en el Estado del pabellón. En este caso el lugar de origen y el lugar de resultado de los daños se determinaron por la situación geográfica de los hechos que los originaron y no por la existencia de una convención que eventualmente reconociera jurisdicción a un Estado distinto.

En otro caso, la STJCE en el asunto C-364/93, *Antonio Marinari vs. Lloyd's Bank plc* (Marinari) <sup>(450)</sup>, declaró que el concepto “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”, incluía el lugar en el que la víctima había sufrido un daño patrimonial. En este caso, se trataba de un inversionista con pérdidas financieras sufridas en dos Estados, de modo que unas eran causa de las otras.

Finalmente, y ejemplificando la variedad de hechos a los cuales se extendió el debate sobre la regla de ubicuidad, tenemos la STJCE en el asunto C-281/02, *Andrew Owusu vs. N.B. Jackson* (Owusu) <sup>(451)</sup> en virtud de la cual se aplicó el artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I, en relación con el artículo 2º del mismo Reglamento, a daños corporales sufridos en Jamaica, los que fueron demandados válidamente a una empresa de turismo domiciliada en Inglaterra. El TJCE declaró competente al tribunal inglés en razón del artículo 2º del Reglamento Bruselas I.

Por tanto, si la regla de ubicuidad se aplicó para hechos que no guardaban necesariamente proximidad física entre sí, y más aún, si consideramos que la sentencia del caso *Bier/Minas de Potasio de Alsacia*, que establece la regla de

---

<sup>(449)</sup> STJCE de 5 de febrero de 2004, asunto C-18/02, *Danmarks Rederiforening*, que actúa en nombre de *DFDS Torline A/S, vs. LO Landsorganisationen i Sverige*, actuando esta última en nombre de SEKO Sjöfolk Facket för Service og Kommunikation.

<sup>(450)</sup> STJCE 19 septiembre 1995, as. C-364/93, *Antonio Marinari vs. Lloyd's Bank plc*.

<sup>(451)</sup> STJCE de 1 de marzo de 2005, asunto C-281/02, *Andrew Owusu vs. N.B. Jackson*.

ubicuidad, no indica qué se entiende por “hecho causante” ni qué se entiende por “daño”; entonces, cuando el ilícito es a distancia: ¿Qué entenderemos por hecho generador y qué entenderemos por daño?

En el Capítulo III de esta Parte abordaremos con mayor profundidad qué entendemos por daño y el problema de lo directo y lo indirecto entre el daño ambiental y el daño civil. En este capítulo nos dedicaremos al hecho generador.

Para ello, es necesario comenzar señalando qué entendemos por hecho generador.

A diferencia del Reglamento 864/2007 Roma II, el Reglamento (UE) No. 1215/2012, como su antecesor, no lo define y tampoco hace mención al hecho generador <sup>(452)</sup>. El hecho generador es un concepto que se utiliza primero por la jurisprudencia del TJUE y que luego por extensión y utilidad de su uso se recogió en el Reglamento comunitario Roma II. Este último reglamento no sólo ha utilizado la expresión hecho generador <sup>(453)</sup>, sino que la ha contextualizado <sup>(454)</sup> y ha establecido una excepción en materia de daños ambientales en los artículos 7 en relación con el artículo 4.1<sup>(455)</sup>.

---

<sup>(452)</sup> Ballesteros Pinilla, Gabriel, “La Contaminación Transnacional en el Reglamento Roma II”, *Revista Electrónica de Derecho Ambiental*, número 21, 2010.

<sup>(453)</sup> Artículo 2.3 Reglamento 864/2007 Roma II: “*Toda referencia que en el presente Reglamento se haga a: a) un hecho generador del daño, incluirá los hechos que puedan producirse que den lugar a cualquier daño*”.

<sup>(454)</sup> Reglamento 864/2007 Roma II artículos: 11.2 en la gestión de negocios; 12.2.b) en la culpa in contrahendo; 14 en la libertad de elección o 23.1 sobre definiciones de residencia habitual.

<sup>(455)</sup> Artículo 4.1 Reglamento 864/2007 Roma II. Capítulo II. Hechos Dañosos. Norma general. “*Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión*”. Artículo 7 Reglamento 864/2007 Roma II. Daño medioambiental. “*La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de un daño medioambiental o de un daño sufrido por personas o bienes como consecuencia de dicho daño, será la ley determinada en virtud del artículo 4, apartado 1, a menos que la persona que reclama el resarcimiento de los daños elija basar sus pretensiones en la ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño*”.

Por otro lado, el hecho generador está íntimamente relacionado con el sujeto causante del ilícito. En efecto, el demandado es quien determina -por su actividad voluntaria o negligente- la comisión del daño, según hablemos de delitos o de cuasidelitos. El demandado se representa la posibilidad del daño, la acepta y en algunos casos puede llegar a preferirla frente a otras opciones menos gravosas para el afectado <sup>(456)</sup>.

Considerando que la regla general en materia de fueros patrimoniales es el domicilio del demandado, no es irrelevante que en los delitos y cuasidelitos civiles, la regla general se haya alterado por otra especial: el lugar donde se “*produce o pudiere producirse el hecho dañoso*” (artículo 7.2 Reglamento (UE) No. 1215/2012). Decimos que no es irrelevante, porque el principio fundamental señala que la jurisdicción competente es aquella que corresponde al Estado miembro donde el demandado tiene su domicilio, cualquiera sea su nacionalidad <sup>(457)</sup>.

Para las personas jurídicas y las sociedades el domicilio se determina en función del lugar donde se encuentra el domicilio social, la administración central o el establecimiento principal <sup>(458)</sup>. Para los grupos, en cambio, el domicilio se determina por el asiento del juez que conoce del asunto según las normas de su propio Derecho Internacional Privado <sup>(459)</sup>.

---

<sup>(456)</sup> Esteve Pardo, José, *El Derecho del Medio Ambiente como derecho de decisión y gestión de riesgos*, Conferencia transcrita del V Seminario Permanente de Profesores del Departamento de Derecho curso 2005/2006: «Derecho y Medio Ambiente», Sesión Inaugural. Disponible en: [http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/01\\_taciana\\_marconatto\\_damo\\_cervi2.html#27](http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/01_taciana_marconatto_damo_cervi2.html#27) [revisado 25 de abril 2012].

<sup>(457)</sup> En materia de Derecho Internacional Público, el caso “*Barcelona Traction Light and Power Company*” (*Bélgica vs. España*) alteró este principio. La CIJ en sentencia de 5 de febrero de 1970, desestimó la alegación del Gobierno Belga que sostenía que los Tribunales españoles no eran competentes en un asunto sobre quiebra de una sociedad constituida en Toronto, pero que funcionaba de hecho en España, donde no se había comprobado que tuviera un domicilio o sede social. La CIJ señaló que no había norma en el Derecho Internacional que prohibiera la jurisdicción de los tribunales españoles.

<sup>(458)</sup> Artículo 63 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

<sup>(459)</sup> Cfr. con artículo 4º y con artículo 6 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Cuando alguna de las partes no tiene domicilio en un Estado miembro cuyos tribunales están conociendo del asunto, el tribunal deberá aplicar la legislación de otro Estado miembro para determinar si dicha persona tiene un domicilio en dicho Estado miembro.

Todo lo cual está de acuerdo con el más alto grado de previsibilidad en el sistema. Sin embargo, el Reglamento (UE) No. 1215/2012 permite que en casos “muy concretos” <sup>(460)</sup> fundados en la materia del litigio o en la autonomía la voluntad de las partes existe otra vinculación. Por otra parte, si consideramos que el foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos (que existen en razón del nexo estrecho entre el órgano jurisdiccional y el litigio) tenemos que, por las razones expuestas por el propio legislador comunitario, el fuero especial establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 debe interpretarse de tal forma que resulten integrados tanto el lugar donde se originaron los daños como el domicilio del demandado. En otras palabras, fundados en razones de certeza jurídica y amparados en el principio fundamental y básico en materia de CJCI, resulta que la competencia del tribunal del domicilio del demandado, puede coincidir con lo que conocemos como “hecho generador”, elemento que junto con el daño forman el “hecho dañoso” al que se refiere el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En efecto, preguntarnos sobre el domicilio del demandado carecería de importancia siuviésemos claro y cierto cuál es el “lugar del hecho dañoso”. Sin embargo, como ya anticipamos el “hecho dañoso”, es un concepto que, según el

---

<sup>(460)</sup> Al respecto, recordemos el Considerando 11º del anterior Reglamento Bruselas I, el que señalaba: “*Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.*”

TJUE <sup>(461)</sup>, no sólo alude al “daño” (*strictu sensu*) sino también al lugar donde se originó el daño.

Por tanto, la pregunta sobre el domicilio del demandado sí tiene importancia, porque viene a esclarecer qué se entiende por lugar de origen del daño. En otras palabras, el problema es: ¿podemos asimilar el domicilio del demandado al lugar donde se originaron los daños? Esta pregunta constituye el hilo principal en éste Capítulo.

Como veremos más adelante, esta pregunta nos obligará a abordar el problema de la responsabilidad de la casa matriz en una sociedad transnacional, o el problema que suscita la pluralidad de demandados. Todo lo anterior considerando que no obstante las diferencias que existen entre daños civiles y daños ambientales, ambas clases de daño comparten un mismo hecho generador. En busca del tribunal competente para ese hecho generador es que abordamos la importancia de rescatar el fuero general: domicilio del demandado.

Por otra parte, y sin descuidar que nuestro objetivo principal se centra en la determinación del hecho generador, debemos considerar cómo confluyen dos perspectivas del daño: daños civiles, por una parte y daños ambientales, por otra. En este sentido no podemos reducir la perspectiva del “hecho dañoso” a una sola clase de los daños. En efecto, no podría alegarse que el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sólo se refiere a los daños ambientales, o sólo se refiere a los daños civiles, porque eso sería un error.

El daño internacional adquiere matices dependiendo si nos referimos exclusivamente a daños civiles o si nos referimos exclusivamente a daños ambientales. En el caso de los daños ambientales, estos sólo serán internacionales cuando sean transfronterizos o estén situados en espacios libre de soberanía.

En los daños civiles, en cambio, lo internacional pueden estar determinado por muchas razones: domicilio de las partes, lugar donde se produce el perjuicio y su relación con el lugar donde se originan tales perjuicios, multiplicidad de demandados,

---

<sup>(461)</sup> STJCE 30 noviembre 1976, as. 21/76, *Bier vs. Mines de Potasse d'Alsace*.

multiplicidad de demandantes, intervención de una empresa transnacional, lugares donde deban practicarse medidas cautelares, etc. Así, y máxime en nuestros días, cuando nos encontramos en un contexto histórico en el cual el flujo de personas, bienes, servicios y capitales hacen que la mayoría de las relaciones jurídicas tengan un elemento internacional, no podemos seccionar el fenómeno internacional en razón de categorías que han sido heredadas del siglo XVIII en materia de responsabilidad civil <sup>(462)</sup> o del siglo XVII en materia de Derecho Internacional <sup>(463)</sup>.

El elemento ambiental evidencia en forma clara la controversia sobre la extensión de los daños. En efecto, si el debate sobre la extensión del daño ambiental nacional sigue estando presente a nivel de los ordenamientos jurídicos estatales; con mayor razón existe un fuerte debate para determinar la extensión del daño ambiental internacional. En este contexto debemos situarnos en las dos dimensiones del daño: la del daño transfronterizo (civil o ambiental) y la del daño internacional no transfronterizo (exclusivamente de tipo civil).

En el *primer caso*, la sentencia recaída en el asunto *Bier/Minas de Potasio de Alsacia*, nos habla de un tipo de daño ambiental internacional, de carácter transfronterizo, en el cual el domicilio del demandado coincide con el hecho fenomenológico que da origen a la contaminación. Asimismo, el domicilio del demandante coincide con el hecho fenomenológico donde se verifica el daño ambiental por haberse extendido los contaminantes a través de un río internacional hasta el domicilio del demandante en el país vecino. Por tanto, para ambos,

---

<sup>(462)</sup> Hablamos de las teorías de Jean Domat del siglo XVIII estructuradas a partir de los documentos de Hugo Grocio del siglo XVII y de los trabajos realizados por la escuela de Salamanca sobre la Lex Aquilia del Derecho Romano. Inspiradores de los artículos del Code Civil napoleónico de 1804 (arts. 1382 y 1383).

<sup>(463)</sup> Son las teorías de Derecho Internacional Público, que comienza en la escuela de Salamanca con el Padre Francisco de Vitoria en el siglo XVI, pero que se desarrolla por los filósofos del Derecho del siglo XVII, cuando Hugo Groccio publica “Del Derecho de la Guerra y de la Paz”. Sin embargo sólo será una disciplina jurídica desde mediados del siglo XVII, con la primera cátedra de Derecho Internacional en 1661 en Alemania, de Samuel Puffendorf, denominada Derecho Natural y de Gentes (del derecho romano Ius Gentium). Para el Derecho Internacional Privado pasaría mucho tiempo para que los privatistas postrevolucionarios incursionaran en el estudio de los estatutos territoriales y personales (Savigny y Mancini).

demandante y demandado, los daños civiles coinciden con el lugar donde se verificó el daño ambiental y pueden determinarse fácilmente.

En el *segundo caso*, en cambio, cuando hablamos de daños transnacionales no fronterizos nos estamos refiriendo a ilícitos a distancia, en los cuales los países involucrados no son necesariamente vecinos. En estos casos, la determinación del daño ambiental es distinta a la determinación del daño civil. Mientras el daño ambiental obedece a un fenómeno constatable, medible, probabilístico y calculable “en un determinado territorio”; el daño civil, en cambio, puede extenderse a muchos otros territorios jurisdiccionales. No ahondaremos en este tema porque será tratado con mayor profundidad en el Capítulo III de esta misma parte.

En este Capítulo nos interesa señalar que tanto el daño civil como el daño ambiental pudieron haberse originado en un territorio distinto de aquél en el que se evidencia el daño ambiental y aún por muy lejano que fuere el lugar donde se verificaron los daños civiles. En efecto, los daños se originaron en el domicilio del demandado, que siendo persona jurídica o sociedad, se definirá en función del lugar en el que se encuentra el domicilio social, la administración central o el establecimiento principal.

¿Qué importancia tiene determinar el lugar del hecho generador en los ilícitos civiles a distancia? La principal importancia guarda relación con la aplicación de la Regla de Ubicuidad, abordada en el Capítulo I de esta parte. Esto es, el poder que la jurisprudencia del entonces TJCE reconoció al demandante como un derecho de opción a su arbitrio para demandar sea ante el foro del lugar donde se manifiestan los efectos del daño o sea ante el foro del lugar donde se originan los daños. En efecto, mientras debamos determinar la extensión del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, deberemos estar en condiciones de determinar la relación que existe entre el hecho generador y el resultado lesivo.



En los casos de daños al medio ambiente, el fenómeno del daño suele mantener cercanía espacial entre el hecho contaminante que origina el daño al ecosistema y el resultado lesivo. Sin embargo, esta cercanía espacial a la que nos referimos, sólo obedece a la dimensión del daño ambiental y no obedece necesariamente a la dimensión del daño civil. En efecto, los daños civiles pueden no coincidir geográficamente con el lugar donde se verifican los daños ambientales; sea porque existen relaciones contractuales entre la víctima del daño ambiental y terceros, o sea porque existen daños civiles extracontractuales directos asociados al daño ambiental.

En el mundo globalizado en el que nos desarrollamos, la complejidad de los fenómenos económicos y la organización con que se desenvuelven las empresas transnacionales, hacen prever que muchas de las decisiones se adoptan en territorios distintos del lugar donde se produce el daño ambiental, y muchas veces no se han previsto los alcances de los daños civiles.

Como hemos ido anticipando, el domicilio del demandado es un elemento relevante para determinar el lugar donde se adoptan esas decisiones. Si bien el domicilio del demandado puede o no coincidir con el lugar donde el daño manifiesta sus efectos, no podemos desconocer que en los casos de contaminación internacional, el domicilio del demandado es de vital importancia.

En efecto, el hecho generador puede coincidir con el lugar donde la empresa transnacional tiene su centro de operaciones, administra y gestiona las operaciones ubicadas en territorios de otros Estados. El hecho generador también puede coincidir con el lugar donde se ubica el autor principal en relación con otros coautores, cómplices o encubridores del daño ambiental. Finalmente, podrá ser demandado aquél que resulte civilmente responsable de hechos ajenos. En todos estos casos, salvo en el último (domicilio del civilmente responsable), encontramos que el hecho generador coincide con el lugar desde donde se han adoptado las decisiones, donde se han conocido las condiciones ambientales, normativas y económicas de la actividad

que contamina, lugar donde se han podido prever los resultados probables de dicha actividad y desde donde se han aceptado las consecuencias dañosas.

Esta conclusión, no debiera asombrarnos. En efecto, existe una diferencia con el “centro del patrimonio del demandante” <sup>(464)</sup>, lugar que genera incertidumbre de cara a la apertura de foros basados en este criterio; razón por la cual, la jurisprudencia del TJUE ha ido restringiendo en el hecho dañoso el concepto de “daño”, para referirlo exclusivamente a los daños directos que sufre el demandante <sup>(465)</sup>.

En el caso que planteamos, nos encontramos en la situación contraria. En efecto, nos encontramos en la hipótesis en la cual el demandado ha abierto filiales o funciona en base a sociedades sobre las cuales mantiene una dirección económica, las que están localizadas en diferentes Estados, a los cuales “extiende su domicilio”, sea porque funciona a través de sucursales o sea porque funciona a través de sociedades filiales, relacionadas o coligadas a través de las cuales despliega una política de producción, comercialización internacional o cumplimiento de la dirección económica unitaria de toda la empresa transnacional. Tales personas jurídicas pueden ser identificadas por el órgano jurisdiccional ante el cual se ejercita una acción, de modo que el demandado puede prever razonablemente y defenderse ante el tribunal del lugar donde se adoptaron las decisiones cuyas consecuencias ambientales se sufren en otro Estado <sup>(466)</sup>.

Por su parte, jurisprudencia del TJCE en el asunto *Somafer vs. Saar-Ferngas* <sup>(467)</sup> señaló en la sentencia de 22 de noviembre de 1978 que al tiempo de establecer garantías de jurisdicción para las personas que contrataban o para las que sufrían

---

<sup>(464)</sup> Sobre centro del patrimonio del demandante y aprehensiones a este foro ver: STJCE de 19 de febrero de 2002, asunto *Besix*, C-256/00, Rec. p. I-1699, apartados 25 y 26. STJCE asunto DFDS *Torline*, apartado 36.

<sup>(465)</sup> Cfr. con STJCE de 10 de junio de 2004 asunto C-168/02, asunto *Rudolf Kronhofer vs. Marianne Maier, Christian Möller, Wirich Hofius, Zeki Karan*.

<sup>(466)</sup> Sobre la posibilidad que la jurisprudencia ha entregado al demandado de prever razonablemente el foro donde puede ser demandado véanse STJCE de 20 de marzo de 1997, asunto *Farrell*, C-295/95, Rec. p. I-1683, apartado 13, STJCE de 19 de febrero de 2002, asunto *Besix*, C-256/00, Rec. p. I-1737, apartados 25 y 26) y STJCE de 17 de febrero del 2002, asunto *Tacconi SpA C-334/00*, apartado 20.

<sup>(467)</sup> STJCE 33/78 Asunto *Somafer vs. Saar-Ferngas*.

daños extracontractuales con “sucursales”, vino a establecer también una orden dirigida al tribunal jurisdiccional, a fin de que “*determine los indicios que permitan apreciar la existencia de un centro efectivo de operaciones*” <sup>(468)</sup>.

Este “centro efectivo de operaciones” se entiende como <sup>(469)</sup>:

“El concepto de sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento, supone un centro de operaciones, que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que éstos, aun sabiendo que eventualmente se establecerá un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente, y pueden realizar negocios en el centro operativo que constituye su prolongación.”

En este escenario, es posible encontrarse con una pluralidad de sujetos demandados, donde las posibilidades que ofrece el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 deben interpretarse también en relación con la regla de ubicuidad.

Por tanto, si en los casos de ilícitos a distancia fuera posible demandar civilmente en el domicilio del demandado (entendiendo por demandado a un sujeto amplio, como se expuso anteriormente) “a elección del demandante”; entonces resultaría que la regla de la ubicuidad adquiriría una notable amplitud e importancia. Cosa por la cual no debiéramos alarmarnos, porque la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en relación con los artículos 4 y 8.1 del mismo Reglamento, constituyen una base sólida para esta atribución de jurisdicción. Pero además, porque el debate sobre la previsibilidad y la certeza de los foros, debe pasar también –como ya lo anticipábamos en los Capítulos II y III de la Primera Parte - por el escrutinio de: a) los fines de justicia distributiva, correctiva y preventiva que se encuentran detrás de la responsabilidad ambiental <sup>(470)</sup>, b) la responsabilidad civil

---

<sup>(468)</sup> STJCE 33/78 Asunto Somafer vs. Saar-Ferngas. Parte resolutive, punto 4: “*En cada caso, corresponde al órgano jurisdiccional que conoce del asunto determinar los indicios que permitan apreciar la existencia de un centro efectivo de operaciones y calificar la relación jurídica controvertida respecto al concepto de «explotación», tal y como ha sido interpretado anteriormente*”.

<sup>(469)</sup> STJCE 33/78 Asunto Somafer vs. Saar-Ferngas. Parte resolutive, punto 2.

<sup>(470)</sup> Principios como: a) cautela y acción preventiva, b) corrección en la fuente misma y c) quien contamina paga a los que también hace referencia el considerando 25 del Reglamento 864/2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

asociada a un daño ambiental y c) de las directrices que ha establecido la política de responsabilidad ambiental comunitaria <sup>(471)</sup>.

Sobre estas posibilidades, sus alcances y consecuencias, es que se referirán los siguientes acápites.

## **2.- De la atribución de responsabilidad para un demandado plurilocalizado.**

La pregunta sobre el autor del daño está íntimamente relacionada con la pregunta sobre el lugar donde se adoptó la decisión del daño, en otras palabras, con el lugar donde se produjo el hecho originador. En efecto, todo aquello que se ha dicho sobre el domicilio del demandado, supone tener claro quien es el demandado. Por ejemplo, si el daño ambiental es producto de contaminación transfronteriza, y se ha verificado en Holanda pero el domicilio del demandado se encontraba en Francia (lugar desde donde se produjo el vertido de rieles escorias y desechos a un río internacional que afectó cultivos holandeses) entonces, decimos que el domicilio del demandado coincide con el hecho generador del daño, cual fue, la acción que se produjo en Francia de verter riles, escorias y desechos.

Tal es el caso *Bier/Minas de Potasio de Alsacia*. Como se puede observar en este ejemplo, es indiferente si en Francia fuera legal verter riles, escorias y desechos, lo determinante para señalar que nos encontramos frente a un caso de CJCI es que el

---

<sup>(471)</sup> Artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo 174 del TCE). Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo)» [COM (2001) 264], Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2005 relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible - Plataforma de acción [COM (2005) 658], Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 21 de febrero de 2002, «Hacia una asociación mundial para un desarrollo sostenible» [COM (2002) 82], Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2009: «Revisión de la Política de Medio Ambiente en 2008» [COM(2009) 304]. Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales. En 2008, progresos en la simplificación de la legislación medioambiental, tendieron a la aplicación del derecho comunitario en materia de medio ambiente, en armonía con el uso de herramientas para evitar infracciones, uso selectivo de los fondos de la UE e intensificación de las ayudas.

daño se ha producido en un Estado y el demandado se encontraba domiciliado en otro, en cuyo lugar se originó también la acción material de verter riles, escorias y otros desechos que se transportaron por las aguas de un río internacional.

Sin embargo, el demandado puede encontrarse en un lugar distinto de aquel donde se origina la acción material de contaminación, y ciertamente distinto al lugar donde se manifiestan las consecuencias del daño. Por ejemplo, sería el caso de una empresa transnacional, cuya casa matriz se encuentra en Londres pero cuyas faenas se desarrollan en España. En este caso, el domicilio del demandado no coincide con el lugar donde se inició la acción material de la contaminación y ciertamente no coincide con el lugar del daño. Sin embargo, ¿podría alguien desconocer que el demandado está en Inglaterra? ¿Acaso en Inglaterra no hubo también un principio de acción al aceptar las consecuencias de las acciones que realiza la filial española? Es probable que por diversas razones el demandante opte por interponer su demanda en Inglaterra ¿debería rechazarse esta posibilidad por una interpretación estricta del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento? o más bien ¿podrían conciliarse el fuero especial del artículo 7.2 con la regla general del artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012?

Por otra parte, y como vimos en el Capítulo I de esta Segunda Parte, la regla de ubicuidad ha sido latamente usada para los daños civiles, cuya realidad fenomenológica no coincide necesariamente con la realidad del daño ambiental internacional. Entonces, si la regla de ubicuidad, que ha sido de creación jurisprudencial fue tan ambiciosa en materias de contaminación ambiental internacional, ¿puede ser igualmente extensa si consideramos que el lugar del hecho generador del daño coincide con el domicilio del demandado?.

Creemos que sí. En este caso, y al contrario de lo que ocurría en el ejemplo descrito al inicio de este párrafo, será necesario determinar primero quien es el demandado para que, acto seguido, localicemos su domicilio. No podemos quedarnos con la huella material de la contaminación, cuya realidad sólo nos conduciría a la acción material del daño ambiental y no al origen jurídico de la acción; el que se

vincula con la decisión y aceptación de las consecuencias dañosas por parte de un demandado transnacional.

Para contextualizar la extensión del demandado internacional al que nos referimos, veamos qué entendemos por demandado para estos efectos.

En la teoría de la responsabilidad civil extracontractual encontramos latamente reproducidas las pretensiones de responsabilidad en contra de quien por un hecho negligente (en los casos de responsabilidad por culpa), o por su posición generadora de un riesgo (en los casos de responsabilidad estricta) ha causado un daño. Entonces, ¿quiénes son autores del daño? Son autores del daño:

a) las personas (naturales o jurídicas) que materialmente (en el caso de la responsabilidad por culpa o negligencia) o por detentar la actividad riesgosa (en el caso de la responsabilidad estricta) han contribuido a su producción. En el caso de las personas jurídicas hay responsabilidad por hecho propio en la medida que se configure un ilícito organizacional (con independencia de la responsabilidad de sus propietarios, directores y administradores),

b) también son responsables los continuadores legales de todos los anteriores,

c) los cómplices o encubridores (en la medida que su conducta ilícita resulta determinante para la materialización de los daños), y

d) los responsables civiles por hecho ajeno (sea que deba probarse culpa o sea por responsabilidad objetiva llamada también vicaria) <sup>(472)</sup>. Finalmente en el caso de

---

(<sup>472</sup>) Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, *Responsabilidad extracontractual*, Civitas - Thomson Reuters, Aranzadi, Madrid, 2010. Reglero Campos, Luis Fernando y otros, *Lecciones de responsabilidad civil*, Manuales Universitarios, Aranzadi, 2002. Rosenkrantz, Carlos F., “Tres Concepciones de la Justicia Correctiva y de la Responsabilidad Extracontractual”, *Lecciones y Ensayos*, Vol. 67/68, 1999. Rosenkrantz, Carlos F., “La Justicia Correctiva y la Responsabilidad Extracontractual: Donde la Filosofía, la Economía y el Derecho se Encuentran”, C. Rosenkrantz (comp.), *La Responsabilidad Extracontractual*. Barcelona: Ed. Gedisa, 2005. Rosenkrantz, Carlos F., “En defensa de la responsabilidad estricta una revisión crítica del tratado de responsabilidad extracontractual de Enrique Barros Bourie”, *Estudios Públicos*, Centro de Estudios Públicos, número 112, Chile, 2008. Disponible en: Revisado 24 de octubre 2011. Albaladejo García, Manuel, *La presunción de culpa en la responsabilidad extracontractual*. Discurso leído el día 10 de noviembre de 2003 en la sesión inaugural del curso académico 2003-2004, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2003. García Gil, F. Javier, *La responsabilidad extracontractual en la*

los grupos de sociedades la responsabilidad recae sobre la sociedad matriz, sociedad controladora o sobre aquella que detenta la dirección económica unitaria del grupo.

En efecto, si sólo abordásemos el problema de la responsabilidad civil extracontractual “por el hecho ajeno”, encontramos que una persona puede ser demandada por ilícitos civiles cometidos por una persona distinta. De lo anterior tenemos que el demandado será obligado sea que se le impute una acción u omisión propia <sup>(473)</sup>, o sea que responda por actos y omisiones de personas por las cuales quienes es civilmente responsable <sup>(474)</sup>.

En este último sentido, y siguiendo la línea de la responsabilidad por el hecho ajeno tenemos que los “dueños o directores” de un establecimiento o empresa responden de <sup>(475)</sup>:

“los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”.

Por otro lado, también en la legislación española, los “propietarios” responden “por acción u omisión propia” en los casos de daños causados <sup>(476)</sup>:

“1.- Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y adecuado. 2.- Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades. 3.- Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor. 4.- Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes”.

---

*jurisprudencia*, col. Ma. Carmen García Nicolás, DILEX, Madrid, 1997. Barceló Domenech, Javier, *Responsabilidad extracontractual del empresario por actividades de sus dependientes*, McGraw-Hill, Madrid, 1995. Carlón Ruiz, Matilde, *Competencia territorial y responsabilidad extracontractual: perspectivas constitucional y comunitaria*, Cedecs, Barcelona, 1995. Dall'Aquila, Enrico, *Ensayo comparativo de los principios básicos de la responsabilidad extracontractual en el Derecho Inglés*, Reus, Madrid, 1986.

<sup>(473)</sup> Artículo 1902 del Código Civil español. Artículo 1382 del Code Civil francés. Artículo 2043 del Codice Civile italiano.

<sup>(474)</sup> Por ejemplo: artículo 1903 del Código Civil español, inciso 1ero.

<sup>(475)</sup> Artículo 1903 del Código Civil español, inciso 4to. Artículo 1384 del Code Civil francés, incisos 1ero y 5to. Artículo 2049 del Código Civil italiano. Finalmente ver §§831 y 832 ambos del BGB.

<sup>(476)</sup> Artículo 1908 del Código Civil español.

Muy similar en el Codice Civile italiano:

*“Cualquier persona que cause daño a otros al llevar a cabo una actividad peligrosa, por su naturaleza o por la naturaleza de los medios utilizados, tendrá lugar una indemnización, si no se prueba haber adoptado todas las medidas razonables para prevenir el daño”.*

Como podemos observar de las normas del Código Civil español y del Codice Civile italiano antes referidas, existen normas que entregan plena responsabilidad por el hecho ajeno a: propietarios, dueños o directores de un establecimiento o empresa. En estos casos, la responsabilidad del dueño de un establecimiento o de los directores de una empresa por los daños causados por sus auxiliares sigue un régimen de responsabilidad vicaria y, por tanto, prescinde de la culpa. En el mismo sentido el artículo 6.102 de los Principles of European Tort Law, encontramos:

*“Una persona responde por el daño causado por sus auxiliares en el ejercicio de sus funciones siempre que éstos hayan violado el estándar de conducta exigible”.*

Solo se reconoce culpa para los dependientes, para el principal existe responsabilidad objetiva (<sup>477</sup>). Asimismo, tales dueños, propietarios o directores de un establecimiento o empresa son responsables por acción u omisión propia en todos los casos en los cuales la actividad que desarrollen sea riesgosa o no haya podido probarse que se han adoptado todas las medidas para poder evitar el daño (<sup>478</sup>).

Según lo anteriormente expuesto, el sujeto pasivo de una acción de responsabilidad extracontractual no sólo será la persona que realiza materialmente la

---

(<sup>477</sup>) Ver Miquel González, José María, “Observaciones en torno a la responsabilidad extracontractual por el hecho de un contrato independiente”, *Anuario de Derecho Civil*, ISSN 0210-301X, Vol. 36, número 4, 1983, págs. 1501-1514.

(<sup>478</sup>) En contraste con las tradiciones europeas continentales, basadas en la culpa, la responsabilidad objetiva, en cambio, es fundamento para que una persona responda por un daño causado por ella misma o por un elemento bajo su control. Swann, Stephen, “Bases conceptuales del derecho delictual propuestos por el Grupo de Estudio para un Código Civil Europeo”, *Indret*, Working Paper número 130, Barcelona, abril de 2003. Disponible en: [http://www.indret.com/pdf/130\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/130_es.pdf).  
Revisado: 5 de octubre 2011.



acción y que ocasiona un daño, sino que también serán responsables todos aquellos que deban responder por el hecho ajeno. El caso más importante de responsabilidad por el hecho ajeno es la responsabilidad vicaria, llamada también responsabilidad estricta por culpa ajena <sup>(479)</sup>.

Por otra parte, la responsabilidad por hechos de los dependientes a la que nos venimos refiriendo varía dependiendo si nos encontramos en el Common Law, o si en cambio, nos encontramos en el Derecho continental de origen germano-romano. Mientras el Common Law ha desarrollado la responsabilidad por hechos de los dependientes (responsabilidad vicaria) sin requerir culpa del empresario o principal; en el Derecho alemán <sup>(480)</sup>, francés, italiano y español, por el contrario, se responde por culpa, la que en algunos casos puede presumirse <sup>(481)</sup>. No obstante lo anterior, en el Derecho francés y más aún en el Derecho español, existe pluralidad de regímenes de responsabilidad por el hecho ajeno, en todos los cuales se advierte una clara tendencia a objetivar la responsabilidad <sup>(482)</sup>.

En suma, ante este panorama expuesto, y en razón del daño civil asociado a un daño ambiental, nos encontramos frente a una pluralidad de eventuales sujetos pasivos. ¿Debemos entender que para todos ellos el foro competente es el del lugar donde se produjo el daño ambiental?

Creemos que no. La responsabilidad extracontractual ambiental se diferencia de la responsabilidad extracontractual civil en cuanto a: los sujetos, la causa y el objeto de pedir. De esta forma, mientras el sujeto civilmente responsable puede

---

<sup>(479)</sup> Barros Bourie, Enrique, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2007. pp. 180-192.

<sup>(480)</sup> Ver por ejemplo §§ 831 y 832 BGB.

<sup>(481)</sup> Martín Casals, Miquel, “Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil”, Indret, *Observatori de dret privat europeu i comparat Universitat de Girona*, Núm. 284, 2005. p. 17 y ss. Ver también Fedtke, Jörg y Madnus Ulrich, “PTL Liability for Damage caused by others under German Law”, *Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others*, Ed. Koch, Kluwer International, The Hague, número 1, 2003, p. 105 y ss.

<sup>(482)</sup> Cavanillas Múgica, Santiago La transformación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia, Pamplona, Aranzadi, 1987, p. 86 y ss.)

coincidir con el autor material del daño; el responsable civil, en cambio, también puede tener otras calidades como por ejemplo: ser propietario del establecimiento o ser director en la sociedad controladora de un grupo de sociedades.

Es entonces cuando hablamos de daños que pueden ser atribuidos a varias personas a la vez. No nos referimos a daños consecuenciales, ni a acciones de terceros que posteriormente han agravado el daño. En este caso, nos referimos a una o varias acciones que son desarrolladas por una o varias personas distintas ubicadas o no en el mismo territorio, de tal forma que todas ellas son susceptibles de ser consideradas responsables de un ilícito a distancia.

En este sentido, la existencia de varios demandados con distinto grado de participación en la comisión del ilícito civil, y en ausencia de claridad en el grado de su participación, obliga a la víctima a demandar conjunta y solidariamente a todos ellos. El efecto inmediato, es que la víctima termine eligiendo a cualquiera de los eventuales responsables, esperando obtener de aquél la reparación completa. De esta forma las relaciones entre los propios demandados son relaciones de obligación y de contribución a la deuda, que poco importan a la víctima. Esta lógica se repite, sin importar el sistema jurídico en el que nos encontremos y aún sin importar el hecho de que estén envueltos varios sistemas jurídicos <sup>(483)</sup>.

A modo de ejemplo, en el asunto *Cooper Tire*, los tres demandados clave (o *Anchor Defendants*) tenían domicilio en Inglaterra, circunstancia que había servido para radicar el asunto en la jurisdicción inglesa. Sin embargo, estos demandados clave no habían participado en la conducta sancionada consistente en un acuerdo de colusión de precios. El Juez del caso señaló que el examen de admisibilidad de la demanda debía basarse en criterios flexibles de tal forma que se tuvieran en cuenta todas las circunstancias del caso

---

<sup>(483)</sup> Sobre este tema en materia de Derecho antitrust ver: Suderow, Julia, “Cuestiones de Jurisdicción Internacional en torno a la aplicación privada del Derecho Antitrust: *Forum Shopping* y demandas torpedeo”, *Revista de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, Madrid, 2010, pp. 315-331.

De esta forma, si bien los *Anchor Defendants* no participaron en el acuerdo, sí vendieron los productos objeto del cártel aunque fuese en cantidades muy pequeñas. Esta relación fue suficientemente estrecha a efecto de aplicar el artículo 6, sin entrar a analizar la responsabilidad de la conducta y/o los daños provocados <sup>(484)</sup>.

Incluso en los regímenes más estrictos (en relación con la obligación y la contribución solidaria a la responsabilidad por daño ambiental) encontramos que existe un problema en la distribución de los costes ambientales. Tal es el caso del Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act of 1980 (CERCLA), también denominado Régimen del Superfund <sup>(485)</sup>. Este régimen resulta muy práctico para garantizar la reparación integral del medio ambiente, pero resulta ineficiente en la distribución equitativa de las cargas derivadas de la responsabilidad. En efecto, por su carácter externo a la relación extracontractual civil entre víctima y responsables, diluye la responsabilidad entre terceros y el propio Estado, desincentivando la eficiencia ambiental.

Por tanto, si los sistemas nacionales mantienen pluralidad de modelos de distribución de costes ambientales y pervive el problema de la indeterminación en las causas; resulta lógico plantearse si el demandante internacional debe tener el derecho de elegir libremente entre todos los foros posibles por pluralidad de demandados,

---

<sup>(484)</sup> Esta conclusión fue confirmada en la sentencia de 23 de julio de 2010 de la Corte de Apelación inglesa, *Court of Appeal of England and Wales* (Sentencia de la High Court of England and Wales, de 27 de octubre de 2009 *Cooper Tire & Rubber company and others- and – Shell Chemicals uk limited and others*, [2009] EWHC 2609 (Comm), apartado 37. Court of Appeal of England and Wales, de 23 de Julio de 2010 *Cooper Tire & Rubber company europe limited & orsDow deutschland inc and others*: [2010] EWCA Civ 864 Case No: A3/2009/2487 & A3/2009/2489, apartado 44.

<sup>(485)</sup> Ver modelo sobre contribución al daño en pluralidad de responsables para Estados Unidos en: Young, Robert; Faure, Michael and Fenn, Paul (2007) "Multiple Tortfeasors: An Economic Analysis," *Review of Law & Economics*, Vol. 3, Iss. 1, Article 7. Disponible en: <http://www.bepress.com/rle/vol3/iss1/art7> [revisado el 11 de octubre de 2011]. Assaf, Jacob, "Disolution of Liability and Multiple Tortfeasors in the Context of Liability for Unrequested Precautions", Private Production of Public Goods: Liability for Unrequested Benefits, *Michigan Law Review*, número 108, 2009. Disponible en <http://www.michiganlawreview.org/assets/fi/108/jacob.pdf> [revisado el 11 de octubre del 2011].

aquél que coincida con el domicilio de cualquiera de ellos, sin que el fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, le condicione.

### **3.- Artículo 8.1 Reglamento (UE) No. 1215/2012. Unidad de acción en empresas transnacionales. Diferencias con la simple conjunción de demandado múltiple.**

La pluralidad de demandados tiene un fuero de competencia especial en el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que señala:

*Artículo 8. Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada: 1) si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente.*

Sin bien el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 se aplica a los casos de demandados múltiples, no debe confundirse con la situación que venimos presentando en relación con la aplicación del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. En efecto, mientras el artículo 8.1 se refiere a “varios demandados” el artículo 7.2 se refiere a un solo demandado. No obstante, en el caso de las empresas transnacionales el demandado, que es uno solo, está compuesto por varias sociedades distribuidas en distintos Estados; dichas sociedades actúan de tal forma que mantienen una unidad económica y obedecen a los mismos fines corporativos. Resulta lógico que también participen de las externalidades negativas de sus filiales o de sus sociedades relacionadas cuando hablamos de daño ambiental <sup>(486)</sup>.

Esta diferencia es importante. Porque en la práctica, las empresas transnacionales actúan bajo diferentes formas societarias según los países y según las

---

<sup>(486)</sup> En el mismo sentido ver: Clapp, Jennifer, “Global environmental governance for corporate responsibility and accountability”, *Global Environmental Politics*, Vol. 5 número 3, 2005, pp. 23-34.

actividades que desarrollan. Así, algunas empresas han distribuido los riesgos de las actividades que desarrollan en tantas sociedades como la actividad se los permite.<sup>(487)</sup> Si bien algunas empresas filiales, relacionadas o coligadas gozan de cierta autonomía en el desarrollo de sus funciones, o han externalizado algunas tareas, tenemos que su sistema tributario general y la distribución de las sociedades está en relación con las unidades productivas, comercializadoras o financieras<sup>(488)</sup>. Asimismo, se evidencia una “autonomía relativa”<sup>(489)</sup>. En efecto, los modelos organizativos identifican y se benefician de las ventajas comparativas y de las ventajas competitivas que ofrecen los distintos países. De esta forma, las corporaciones transnacionales, no funcionan en base a programas aislados, sino en base a estrategias internacionales de modo tal que construyen escenarios e incorporan acciones para la creación de riqueza. De esta forma, las acciones de la empresa están integradas y son capaces de articular segmentos de economía en países distintos<sup>(490)</sup>.

En tales casos hablamos de una misma empresa, que puede ser eventual demandado internacional. En otras palabra, no hablamos de varios demandados distintos, como sería en principio la hipótesis a la que se refiere el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

---

<sup>(487)</sup> Sólo a modo de ejemplo, el Grupo Enel está presente en 40 países de 4 continentes. Las empresas de Enel por países son: en España y Portugal, Endesa y Enel Green Power. En Norteamérica, Enel Green Power North America. En Latinoamérica, Enel Latin Green Power Latin America, Endesa, (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú). En Francia, Reactor Presurizado Evolucionado (EPR) y Enel Green Power. En Grecia, Enel Green Power. En Eslovaquia, Slovenské Elektrárne (SE). En Rumanía, Enel Energie, Enel Energie Muntenia, Enel Distributie Banat, Enel Distributie Dobrogea, Enel Distributie Muntenia y Enel Green Power. En Rusia, SeverEnergia, Enel OGK-5, RusEnergosbyt.

<sup>(488)</sup> A modo de ejemplo ver artículos 42-49 del Código de Comercio español, que recoge el sistema de cuentas, informes y balance en los grupos de sociedades.

<sup>(489)</sup> Ver trabajo sistematizador sobre grupos de sociedades en la Tesis de: Vázquez, María Fernanda, “Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)”. Resención Fuentes Naharro, M. Ed. Thomson-Civitas, colección estudios de Derecho Mercantil, 2007, en Revista *Ius et Praxis*, Vol. 13, número 2, Talca, Chile, 2007, pp. 453-460.

<sup>(490)</sup> De Venanzi, Augusto, *Globalización y Corporación: el orden social en el siglo XXI*, Anthropos, Barcelona 2002, pp. 82-88. Citando a: Morin, Edgar, *Introducción al pensamiento complejo*, Gedisa, Barcelona, 1997.

Desde nuestra perspectiva, la principal importancia en la distinción de la aplicación del fuero del artículo 7.3 en relación con el fuero del artículo 8.1, ambos del Reglamento (UE) No. 1215/2012, radica en la posibilidad de hacer aplicable la regla de ubicuidad. En efecto, la regla de ubicuidad confiere un derecho de opción en beneficio del demandante para elegir a su arbitrio el poder interponer una demanda en el lugar del hecho generador o en el lugar del daño. El lugar del daño coincidirá normalmente con el domicilio del demandante. El lugar del daño también puede coincidir con el domicilio de alguna de las sociedades filiales o sociedades pertenecientes al grupo y que forman parte de la empresa transnacional. Por otra parte, el hecho generador puede haber nacido en la sociedad matriz y esta circunstancia puede abrir o consolidar foros de competencia que de otra forma, por la sola aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, resultarían muy complejos.

Por estas razones, cuando hablamos de una empresa transnacional, constituida por varias sociedades, tenemos que la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no puede excluir la posibilidad de que el demandante presente su demanda en el lugar donde se ha producido el hecho generador o donde se han manifestado los daños directos. En tales casos, el concepto de hecho generador debe ser interpretado de tal forma que comprenda la casa matriz o la sociedad del grupo en la cual se aceptó el riesgo del daño ambiental a sabiendas de sus consecuencias.

Al respecto, no olvidemos que la Teoría del riesgo (proveniente de Italia pero difundida desde Francia gracias a la obra de: SALEILLES y JOSSERAND) nació con el propósito de eximir a los trabajadores víctima de un accidente del trabajo de la prueba casi imposible de la culpa del empleador. Cuestión que puede guardar un paralelismo con la prueba que le corresponde a la víctima de daño ambiental.

Con el nacimiento de la teoría del riesgo, se refuerza la importancia de la causa en la determinación del vínculo entre la acción y el daño. Posteriormente, esta

noción se extendería a otras áreas del Derecho, entre ellas la responsabilidad ambiental.

Para efectos de la jurisdicción internacional, la Teoría del Riesgo significa contar con el apoyo de la Teoría de la Causalidad (propia de la teoría de la responsabilidad civil extracontractual), en las materias de competencia judicial internacional.

No tenemos interés en abrir un epígrafe sobre la teoría de la causa <sup>(491)</sup>, ni sobre la responsabilidad objetiva, con sus partidarios, detractores y advertencias <sup>(492)</sup>. Nuestro objetivo consiste simplemente en poner de manifiesto que en la jurisdicción internacional los foros de competencia internacional, deben estar acordes con las presunciones de culpa, la responsabilidad por el hecho ajeno, e incluso, con la responsabilidad objetiva que pueda pronunciar el sentenciador.

En materia de prueba, encontramos que para aplicar la regla de ubicuidad, se deberían acreditar dos aspectos: *primero*, que los demandados mantienen una vinculación estrecha entre si y *segundo* que la tramitación y juicio conjunto son oportunos. Por su parte, la vinculación de las demandas debe considerar la extensión del hecho dañoso (tanto del hecho generador como del daño).

Es evidente que resulta mucho más sencillo aplicar la regla de ubicuidad a los casos en los que existe un solo demandado, pero la realidad de las empresas

---

<sup>(491)</sup> Desarrollo de la causalidad hasta la teoría del riesgo en: Chabas, François, *L'influence de la pluralité de causes sur le droit à réparation*, collection Bibliothèque de Droit Privé, T.LXXVIII, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1967. Mazeaud, Henri y León - tunc, André, *Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual*, trad. de la 5ª edic. francesa, de Luis Alcalá-Zamora y Casillo, Bs. As., Ejea, 1961, t 1, v. I, número 28, p. 44 y ss. Baraona González, Jorge, La causa del daño en la Jurisprudencia reciente, *Revista Chilena de Derecho*, Vol 30, número2, Santiago de Chile, 2003, pp. 245-379. Prevot, Juan Manuel, El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad civil, *Revista Chilena de Derecho Privado*, N° 15, Santiago de Chile, 2010, pp. 143-178.

<sup>(492)</sup> Referencias sobre este debate aún vigente en: López Mesa, Marcelo J., La culpa como factor de atribución de responsabilidad (Cénit, ocaso y resurgimiento de la culpa), *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, número 10, 2006, pp.641-673.

transnacionales obliga a considerar que una misma empresa tendrá unidades localizadas en distintos territorios.

De lo anterior deducimos que el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 podría ser aplicable a un demandado multinacional, entendiendo que los “varios demandados” a los que hace referencia el artículo son en realidad sociedades pertenecientes a una misma empresa. Entonces, podríamos señalar que la regla de ubicuidad también es aplicable para dichos demandados, con efectos vinculantes para todos los demás.

En cualquier caso, es necesario que la jurisprudencia señale los límites.

En estos casos, y siguiendo la línea presentada por algunos autores <sup>(493)</sup> la coautoría puede ser explicada en virtud del principio de la “causa necesaria”. En efecto, todas las acciones han sido condición necesaria para la producción del daño. Por tanto, todas las acciones han sido causa del daño <sup>(494)</sup>.

La solidaridad estaría determinada por lo ilícito de la colusión. Existe colusión: sea porque hubo unidad de acción concertada entre distintas empresas, o sea porque existen sociedades pertenecientes a una misma gran empresa transnacional ejecutando una acción ordenada o una estrategia mancomunada.

En estos casos se aplica claramente el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Sin embargo, sólo se aplica el artículo 7.2 del mismo Reglamento, en el caso de que el demandado sea la empresa transnacional.

---

<sup>(493)</sup> Chabas, François, *L'influence de la pluralité de causes sur le droit à réparation*, collection Bibliothèque de Droit Privé, T.LXXVIII, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1967. Mazeaud, Henri y León - tunc, André, *Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual*, trad. de la 5ª edic. francesa, de Luis Alcalá-Zamora y Casillo, Bs. As., Ejea, 1961, t 1, v. I, número 28, p. 44 y ss. Baraona González, Jorge, “La causa del daño en la Jurisprudencia reciente”, *Revista Chilena de Derecho*, Vol 30, número 2, Santiago de Chile, 2003, pp. 245-379. Prevot, Juan Manuel, “El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad civil”, *Revista Chilena de Derecho Privado*, N° 15, Santiago de Chile, 2010, pp. 143-178. Santos Ballesteros, José, *Instituciones de Responsabilidad Civil*, T.III, Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p.32 y ss.

<sup>(494)</sup>Valga en este punto todo lo señalado en el Epígrafe 5 del Capítulo III de la Segunda Parte de esta investigación sobre extensión del daño e imputación normativa.



De esta forma los efectos queridos por el demandante podrán satisfacerse generalmente con el sólo mérito de la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Sin embargo, la facultad que otorga la regla de ubicuidad establecida para el artículo 7.2 del mismo reglamento sólo beneficiará al “demandado singular plurilocalizado” pero no a “demandados simplemente múltiples”.

Por otro lado, para aplicar el artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, se deben excluir aquellos casos de daños ambientales internacionales en los cuales existe acumulación de causas provenientes de acciones distintas no coludidas. Tal es el caso por ejemplo, de la polución por acumulación de distintos emisores simples no concertados. En tales casos sólo existe “simple conjunción de acciones” y por tal razón mal podríamos aplicar la regla de ubicuidad recogida en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

A este respecto, tampoco es aplicable el artículo 8.1 del mismo Reglamento porque dichas acciones no tienen una vinculación estrecha entre si, y sólo se relacionan por el efecto: el daño ambiental. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de tribunales nacionales, ha ido más allá. Así ocurre en el caso español, que ha atribuido responsabilidad solidaria a los demandados no concertados por simple conjunción de acciones en caso de daños ambientales ocurridos dentro del territorio nacional <sup>(495)</sup>.

---

<sup>(495)</sup> STS 649/2001, Sala de lo Civil, Procedimiento: Casación, sentencia 02/02/2001. “(...)El Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Palencia, en su Sentencia de 4 de abril de 1995, estima en parte la demanda interpuesta por los actores frente a los demandados que constan, condenándoles a que, en concepto de daños y perjuicios abonen solidariamente la cantidad especificada, decisión que fue objeto de recurso de apelación por los actores con la correspondiente adhesión de los 328 demandados, (en cuya adhesión reproducían las excepciones articuladas de adverso que fueron rechazadas por el Juzgado de Primera Instancia), habiéndose dictado Sentencia por la Audiencia Provincial de Palencia con fecha 1 de diciembre de 1995, en la que se estimó en parte el recurso de apelación de los actores, no sólo elevando la cuantía declarada en la instancia, sino, también condenando solidariamente a los codemandados (...)”

#### **4.- Sentido y alcance del Artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 para demandado plurilocalizado y para demandado múltiple.**

Según el contexto referido anteriormente, analizaremos a continuación el sentido y alcance del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, desde dos grandes temas:

- a) la vinculación estrecha entre las demandas, y
- b) lo oportuno y lo eficaz en la tramitación y sentencia de demandas vinculadas.

##### **4.1.- Vinculación estrecha entre las demandas.**

Como se observa, el artículo 8.1 establece que en los casos de pluralidad de demandados, las demandas deben estar vinculadas entre sí.

Esta norma, casi textual del derecho procesal interno de países comunitarios <sup>(496)</sup>, obliga a hacer algunos matices en el contexto internacional. En efecto, en el Derecho interno encontramos que las demandas con sujeto pasivo plural, obligan a que exista una vinculación tal entre las demandas de modo que no se afecte la triple identidad de la cosa juzgada, y por tanto, que no existan sentencias inconciliables.

A nivel de jurisdicción internacional, en cambio, lo estrecho del vínculo tiene una triple perspectiva.

---

<sup>(496)</sup> Vgr. Ver Article 45 Code de Procedure Civile (France) “*La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.*”

*S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.*

*Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger”*. Cfr. Con el artículo 52, inciso 2do. Ley de Enjuiciamiento Civil española: “*Cuando hubiere varios demandados y, conforme a las reglas establecidas en este artículo y en los anteriores, pudiera corresponder la competencia territorial a los jueces de más de un lugar, la demanda podrá presentarse ante cualquiera de ellos, a elección del demandante*”.

En *primer lugar*, se alude a vínculos estrechos entre una demanda individualmente considerada y el territorio en el cual se presenta dicha demanda <sup>(497)</sup>. Por nuestra parte, ya abordamos el tema sobre la estrecha vinculación entre los hechos y el foro en el análisis del *Principio de Proximidad Razonable* para casos de demandas ambientales <sup>(498)</sup>.

En *segundo lugar*, nos encontramos con que existe una necesidad por abordar las vinculaciones de fondo que están detrás de las demandas a fin de poder determinar lo estrecho que existe entre ellas. Sólo así se puede concluir si lo resuelto en un foro es o no es inconciliable con lo que se resuelva en otro. En tal caso hablamos de conexidad.

El entonces TJCE, estableció criterios sobre conexidad en el asunto *Kalfelis* <sup>(499)</sup>. Posteriormente en el asunto *Réunion européenne y otros* <sup>(500)</sup> señaló que para aplicar el artículo 6º número 1 del Convenio de Bruselas para demandas diferentes formuladas por un mismo demandante en contra de distintos demandados debía

---

<sup>(497)</sup> Lagarde, Paul, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, *Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, T. 196, 1986, p.150 y ss. Fallon Marc, *Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne*, en: Mélanges P. Lagarde, Paris, Dalloz, 2005, p. 241-262. Fallon Marc, “Les conditions d’un code européen de droit international privé”, en: La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé?, M. Fallon, P. Lagarde et S. Poillot-Peruzzetto ed(s), Paris, Dalloz, 2009, p. 1-34. Otero García-Castrillón, Carmen, “Problemas de aplicación de las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español y comunitario: reflexiones en torno a la doctrina del *forum non conveniens*”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, número94, 2000, pp. 99-128. Calvo Caravaca, Alfonso-Luis, “El Derecho internacional privado en la comunidad europea”, *Anales del Derecho*, Universidad de Murcia, número 21, 2003, pp.49-69; Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Francisco, *ob cit*, p.55; Pérez Vera, Elisa y González Campos, Julio, *Derecho Internacional Privado*, Vol. I, UNED, España, UNED, 2001, p 291- 317, Garau Sobrino, Federico, *Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacional*, España Universitat de les Illes Balears, 2003, p. 26. Rodríguez Jiménez, Sonia, *Competencia Judicial Internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 2009, pp.61-68; Rodríguez Jiménez, Sonia, *Conexidad y Litispendencia Internacional en el Derecho internacional privado mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 120-213.

<sup>(498)</sup> Ver acápites 5 del Capítulo III de la Primera Parte de este trabajo, sobre el Principio de Proximidad Razonable.

<sup>(499)</sup> STJCE 189/87, de 27 de septiembre de 1988, asunto *Kalfelis* Rec. p. 5565.

<sup>(500)</sup> STJC C-51/97, Rec. p. I-6511, asunto *Réunion européenne y otros* apartado 48.

existir una conexión de tal naturaleza que existiera un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente a fin de evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los litigios se juzgaban por separado.

Esta exigencia no se desprendía del tenor del entonces artículo 6.1 del Convenio de Bruselas I, sin embargo el Tribunal de Justicia la dedujo para: *“evitar que la excepción al principio de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, establecida por dicha disposición, pueda cuestionar la existencia misma de ese principio”* <sup>(501)</sup>.

Jurisprudencia posterior en los asuntos *Tatry* <sup>(502)</sup> y *Hoffmann* <sup>(503)</sup> determinarían el concepto de qué se entiende por “inconciliable”.

En este aspecto, el artículo 30.3 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, haciéndose cargo sobre el tema <sup>(504)</sup>, ha venido a definir demandas conexas como:

*“Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”.*

Para este tipo de demandas, el tribunal ante el cual se hubiere presentado una demanda posterior está facultado para suspender el procedimiento o para inhibirse, cumpliéndose los requisitos establecidos en dicho artículo.

Finalmente, en *tercer lugar*, la vinculación entre las demandas también alude a la posibilidad de litispendencia entre las demandas. En este caso, el artículo 29.1 del

---

<sup>(501)</sup> STJCE C-539/03, de 13 de julio del 2006, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*, Considerando 21.

<sup>(502)</sup> STJCE C-406/92, asunto *Tantry*, Rec. p. I-5439, apartado 58.

<sup>(503)</sup> STJCE 145/86, asunto *Hoffmann*, Rec. p. 645, apartado 22.

<sup>(504)</sup> Cfr. El Artículo 28.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I con el artículo 22 inciso 3 del Convenio de Bruselas de 1968 que señala: *“Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente”.*

Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(505)</sup> se refiere a la litispendencia cuando se existe triple identidad en la cosa juzgada: sujetos, causa, y objeto. Dicho artículo señala:

*“Cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera”.*

Tribunales italianos también se han pronunciado sobre el sentido y alcance del artículo 29º del Reglamento (UE) No. 1215/2012 (entonces artículo 27º del Reglamento Bruselas I), señalando <sup>(506)</sup>:

*“Ai sensi dell’art. 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 susste litispendenza tra un procedimento previamente instaurato in Germania per la condanna al risarcimento del danno e un procedimento di accertamento partecipi, oltre alle parti del procedimento tedesco, una società fittizia appositamente costituita in Italia al fine di radicarvi il processo e attuare una strategia dilatoria”.*

En caso de existir litispendencia, el tribunal ante el cual se hubiere presentado una demanda posterior ya no está facultado, sino más bien se encuentra en el “deber de suspender el procedimiento o de inhibirse” a favor del tribunal en el que se presentó

---

<sup>(505)</sup> Cfr. con el Artículo 27 del anterior Reglamento 44/2001 Bruselas I, con el artículo 21 del Convenio de Bruselas de 1968, que señala: *“Artículo 21. Cuando se formulen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados contratantes distintos, el tribunal ante el que se formule la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.*

*Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá a favor de aquél.”*

<sup>(506)</sup> Ver jurisprudencia de la Corte di Cassazione relacionada con el artículo 27 del Reglamento (CE) 44/2001, Bruselas I en *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Edizioni CEDAM-PADOVA, Anno XLVIII, número 2, 2012, en los siguientes asuntos: Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 8 junio 2011, número 12410; asunto *Haus & Gruñid Deutschland-Zentravelband der Deutschen Haus y otros vs. Haus &Grundeigentum Marketing &Consulting s.r.l. y otros*. Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 6 de diciembre de 1994, causa C-406/92, *Rivista Corte di giustizia*, 1995, p.p. 485 y ss.; Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 19 de mayo del 2009, número 11532, *Rivista Corte di giustizia*, 2010, pp.128 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 15 de mayo del 2007, número 11185, *Rivista Corte di giustizia*, 2008, pp.224 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 17 de octubre del 2002, número 14769, *Rivista Corte di giustizia*, 2004, pp.245 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 24 de abril de 1999, número 274, *Rivista Corte di giustizia*, 1999, pp.619 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordenanza 29 de enero del 2001, número 37, *Rivista Corte di giustizia*, 2001, pp.440 y ss.

la primera demanda y que se declaró competente <sup>(507)</sup>. Por otra parte, y para el caso de que la segunda demanda recaiga en un foro con competencia especial, el Abogado General, Sr. Philippe Léger, en las Conclusiones Generales del asunto *Gasser* <sup>(508)</sup> propuso una interpretación del siguiente tenor:

*“debe interpretarse en el sentido de que el órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la segunda demanda y que tiene competencia exclusiva en virtud de un convenio atributivo de competencia, no obstante lo dispuesto en dicho artículo, puede pronunciarse sobre el litigio sin esperar a que el órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la primera demanda haya declarado su falta de competencia, siempre que la competencia del órgano jurisdiccional ante el que se ha interpuesto la segunda demanda no deje lugar a ninguna duda”.*

Como se puede observar de las normas y jurisprudencia señaladas, en un sistema judicial integrado, o de libre circulación y reconocimiento de sentencias judiciales, existe el deber de considerar los efectos que una sentencia tendrá en otro país distinto al lugar del foro, especialmente cuando existe demandado múltiple o cuando una demanda se encuentra estrechamente vinculada a otra <sup>(509)</sup>.

En el caso que nos venimos ocupando, esto es, el caso de un demandado transnacional, no podemos desconocer la importancia de la vinculación entre las demandas cuando éstas se refieren a la misma acción concertada o en ejecución de una estrategia mancomunada (como ocurre en una empresa transnacional) que ocasiona un daño ambiental <sup>(510)</sup>.

---

<sup>(507)</sup> Para profundizar la relación de litispendencia entre asuntos de naturaleza contractual y no contractual ver: STJCE de 14 de octubre de 2004 asunto *Mærsk Olie & Gas A/S vs. Firma M. de Haan en W. de Boer*, C-39/02, en la que se declara inexistencia de litispendencia.

<sup>(508)</sup> Cfr. El artículo 27 (anterior artículo 21 del Convenio de Bruselas de 1968) con las Conclusiones del Abogado General, Sr. Philippe Léger presentadas el 9 de septiembre de 2003 en el asunto *Gasser*, C-116/02 I-14720.

<sup>(509)</sup> Ver: COM(2009) 174 final, Bruselas, 21.4.2009, Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico Y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, pp.8 y ss.

<sup>(510)</sup> Para profundizar ver: Pigrau i Solé, Antoni, “La responsabilidad de las empresas transnacionales por daños graves al medio ambiente explorando la vía de la Alien Tort Claims Act”, *Derecho internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo. Homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*. Coord. Por Ana Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé y Andreu Olesti Rayo,

Por otra parte, fuera de la Unión Europea, las sentencias dictadas en el Estado del foro tendrán primacía sobre las sentencias dictadas en otro Estado extranjero. En este aspecto, no sólo juega un rol muy importante la prevención temporal, sino también el reconocimiento que se haga de la jurisdicción del tribunal extranjero. Hablamos de prevención temporal, cuando entre causas inconciliables una de ellas ha obtenido sentencia antes y pretende ejecutarla en otro país, en el cual ya existe otro juicio sobre la misma materia, entre las mismas partes.

En cuanto al reconocimiento de la sentencia extranjera, jurisdicciones con un procedimiento de control de legalidad muy estricto o jurisdicciones con facultades para pronunciarse sobre la competencia *ex post* a la solicitud de ejecución que reciben, pueden causar graves inconvenientes para determinar “lo conciliable” en sentencias con pluralidad de demandados, y por consecuencia para la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

#### **4.2.- Lo oportuno y lo conveniente en la tramitación y sentencia de demandas vinculadas.**

El artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, hace referencia a lo oportuno de la tramitación de demandas vinculadas. Al respecto, si bien la norma se refiere a lo “oportuno”, el considerando 15 del Reglamento Bruselas I se refería a lo “conveniente” de un mecanismo que evite sentencias inconciliables señalando:

“El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. *Es conveniente* prever un mecanismo claro y eficaz con objeto de resolver los casos de litispendencia y conexidad y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esta fecha de manera autónoma”. <sup>(511)</sup>

---

Vol. 1, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009, pp. 517-570. Sánchez-Bayón, António, *Introducción al Derecho Comparado y Global. Teorías, Formas y Prácticas*, Delta publicaciones, Madrid, 2001.

<sup>(511)</sup> Lo puesto en cursivas es nuestro, para resaltar el aspecto que nos interesa.

Sin embargo, entre lo “oportuno” y lo “conveniente” optamos por lo “ambientalmente eficaz”.

Así ha sido recogido en la reforma al Reglamento Bruselas I, establecida en el Reglamento (UE) No. 1215/2012, que en su considerando 21º, reemplaza al considerando 15º del Reglamento Bruselas I, señalando:

“El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en Estados miembros distintos resoluciones contradictorias. *Se ha de prever* un mecanismo claro y eficaz que permita resolver los casos de litispendencia y conexidad, y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales por lo que respecta a la determinación de la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esa fecha de manera autónoma.”<sup>(512)</sup>

En efecto, el sistema europeo de distribución de competencias, basado en la pluralidad normativa y en la homogeneidad interpretativa de las normas de remisión de competencias, se encuentra en la necesidad de dotar de estabilidad y de seguridad jurídica al sistema. Tal certeza jurídica radica tanto en la previsibilidad del foro competente y de la legislación aplicable, como también, radica en el efecto útil de una interpretación normativa uniforme por parte del TJUE<sup>(513)</sup>. Sin embargo, en materia de daños ambientales, la “eficacia” del fuero también guarda relación con poder otorgar a la víctima de daño ambiental el más alto grado de protección. Esto significa que el sistema debe estar en condiciones de reconocer a la víctima de daño ambiental “derechos efectivos, no ilusorios o teóricos”<sup>(514)</sup>.

---

<sup>(512)</sup> Lo puesto en cursivas es nuestro, para resaltar el aspecto que nos interesa.

<sup>(513)</sup> Sobre Litispendencia y conexidad ver: COM(2009) 175 final, Bruselas, 21.4.2009, Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) N° 44/2001, Relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

<sup>(514)</sup> Tales son las expresiones que utilizan sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos: STEDH número 1994/496, de 9 de diciembre de 1994, caso *López Ostra contra Reino de España*. STEDH número 1998/875, de 19 de febrero de 1998, caso *Guerra contra Italia*. STEDH número 2001/567, de 2 de octubre de 2001, caso *varios contra Reino Unido, aeropuerto de Heathrow*. STEDH número 4143/02 de 16 de noviembre de 2004, caso *Moreno Gómez contra el reino de España*.



Por esta razón, el sistema de distribución de competencias judiciales internacionales debe tomar en consideración la influencia de los derechos ambientales reconocidos a la víctima, al momento de interpretar el vínculo de conexión. En efecto, esta forma de interpretar el fuero del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, puede arrojar la necesidad de flexibilización.

Cabe recordar que cuando hablamos del artículo 7.2 ó del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no estamos frente a fueros exorbitantes <sup>(515)</sup>, sino más bien frente a fueros de interpretación restrictiva, en los cuales deben cumplirse ciertos estándares mínimos. A nuestro juicio entre esos estándares debe incorporarse la más alta protección de la víctima de daño ambiental.

## **5.- Pluralidad de Demandados. Jurisprudencia del TJUE.**

En el asunto *Kalfelis* <sup>(516)</sup>, el TJCE declaró que para aplicar el Artículo 6 número 1 del Convenio de Bruselas (actual artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012) contra distintos demandados debía existir una conexión estrecha, de tal forma que exista interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente, a fin de evitar soluciones que pudieran ser inconciliables si los juicios se desarrollaran por separado.

Ésta exigencia de existir una conexión estrecha, no se desprendía del tenor literal del entonces artículo 6.1 del Convenio de Bruselas de 1968 <sup>(517)</sup>. Sin embargo

---

<sup>(515)</sup> Propios del *Common Law* y en principio inaplicables según el Reglamento (UE) No. 1215/2012.

<sup>(516)</sup> STJCE 189/87 de 27 de septiembre de 1988, Asunto *Kalfelis* (Athanasios Kalfelis, peletero vs. Banco Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. razón social HEMA, Beteiligungsgesellschaft mbH KG en liquidación, Banco Schröder, Münchmeyer Hengst International SA, Luxemburgo y Ernst Markgraf.) Rec. p. 5565, apartado 12.

<sup>(517)</sup> Convenio de Bruselas de 1968. Artículo 6: “*Las personas a las que se refiere el artículo anterior podrán también ser demandadas: 1. si hubiere varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos*”.

el TJCE (<sup>518</sup>) preocupado por el contenido y finalidad del artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968, señaló:

*“evitar que la excepción al principio de la competencia de los tribunales del Estado del domicilio del demandado, establecida por dicha disposición, pueda cuestionar la existencia misma de ese principio”.*

Es decir, la importancia del principio básico de la CJCI establecido en el artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968, que establecía la competencia de órganos jurisdiccionales del Estado del domicilio del demandado, no debía vaciarse de contenido ni de finalidad (<sup>519</sup>).

Con el tiempo, la jurisprudencia del TJCE estableció matices, entregó prioridad a la interpretación de los fueros especiales y estableció competencias exclusivas (<sup>520</sup>). Uno de los casos más emblemáticos de esta creación autónoma esté en el asunto *Bien vs. Minas de Potasio de Alsacia* (<sup>521</sup>).

No obstante lo anterior, para nuestros efectos, la consagración de un deber de vinculación estrecha entre las demandas reviste importancia por la conciliación en la ejecución de las sentencias, economía procesal internacional, armonía y coherencia

---

(<sup>518</sup>) STJCE C-539/03, de 13 de julio del 2006, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*, considerando 21.

(<sup>519</sup>) Así también se protege la importancia del principio básico del artículo 2 en la STJCE C-412/98, de 13 de julio del 2000, asunto *Group Josi Reinsurance Company SA vs. Universal General Insurance Company (UGIC)*, en el cual el TJCE señaló que el domicilio del demandado natural o domicilio social de la persona jurídica debía estar en el territorio de un Estado contratante del Convenio de Bruselas de 1968, aunque el demandante esté domiciliado en un tercer país.

(<sup>520</sup>) Ejemplo de interpretación de fuero especial, competencia exclusiva y principio de proximidad en: Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed presentadas el 7 de abril de 2005, sobre medida prejudicial presentada por el Oberlandesgericht Hamm para la interpretación del artículo 16, número 1, letra a) del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 en el cual se planteó si la disposición era aplicable a un procedimiento relativo a contratos “a tiempo compartido”. En este caso la proximidad se determinó por el lugar donde se ubicaba el inmueble, con independencia del lugar donde se celebraron contratos o donde se produjo el enriquecimiento injustificado.

(<sup>521</sup>) Este desarrollo se encuentra en el epígrafe 6 del Capítulo I de la Segunda Parte de esta investigación, sobre evolución jurisprudencial de la regla de ubicación.

en el funcionamiento del sistema. Todo lo cual viene a elevar a la *vinculación estrecha entre las demandas* al rango de principio de la CJCI.

De esta forma, existe una clara diferencia en los casos en los cuales existe un demandado singular, en cuyo caso hablamos de *principio de proximidad razonable* (<sup>522</sup>), de aquellos casos en los cuales existe un demandado múltiple, en donde hablamos de *principio de vinculación estrecha*.

Este *principio de vinculación estrecha*, se refiere tanto a la relación entre los hechos y el foro que conocerá de ellos, como también a la relación entre las demandas entre sí. Pero, ¿cómo es posible que participando distintos demandados domiciliados en distintos Estados, pueda atribuirse competencia a cualquier de dichos foros en base a este principio? ¿Qué entendemos por vinculación estrecha?

La jurisprudencia del TJCE nos ha ido entregando pautas para comprender en qué consiste esta vinculación estrecha entre los hechos y las demandas.

En efecto, la citada sentencia *Kalfelis* (<sup>523</sup>) estableció:

“Así pues, la norma prescrita por el apartado 1 del artículo 6 se aplica cuando las demandas formuladas contra los distintos demandados son conexas desde el momento de su presentación, es decir, cuando exista un interés en tramitarlas y juzgarlas conjuntamente para evitar soluciones que pudieran ser contradictorias si los litigios se juzgaran por separado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar, en cada caso concreto, si se cumple este requisito”.

De esta forma vino a poner énfasis en el interés de la tramitación y juicio conjunto en el caso de que existan varios demandados con riesgo de soluciones contradictorias.

Jurisprudencia posterior, que ratificó el criterio establecido en la sentencia *Kalfelis* vino a determinar la necesidad de una conexión entre las demandas (en el sentido del artículo 22 del entonces Convenio de Bruselas de 1968) o que se pruebe la

---

(<sup>522</sup>) Remitirse al epígrafe 5, del Capítulo I de la Primera Parte de este trabajo.

(<sup>523</sup>) STJCE 189/87 de 27 de septiembre de 1988, Asunto *Kalfelis*, apartado 12.

existencia de un vínculo suficiente entre dichas demandas que ponga de manifiesto la inexistencia de una desviación de fuero general establecido en el artículo 2º de dicho Convenio.

Tal fue una de las cuestiones prejudiciales por las que el TJCE se pronunció en el asunto *Réunion européenne y otros* (<sup>524</sup>), señalando:

“Corresponde al juez nacional que conoce de la demanda principal comprobar si existe tal vínculo, en el sentido de que debe asegurarse de que la demanda sobre obligaciones de garantía no persigue únicamente emplazar al demandado ante un tribunal distinto del que le corresponde”.

Sin embargo, tanto *Kalfelis* como *Réunion européenne y otros*, envolvían asuntos que se referían a competencias exclusivas en las cuales había ausencia de positivización del fuero, como si ocurrió posteriormente con el Reglamento 44/2001 Bruselas I y como se mantiene con el actual Reglamento (UE) No. 1215/2012. Hasta entonces, el valor interpretativo estaba dado por la primacía del principio establecido en el artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968, que se refería al domicilio del demandado.

Por esta razón la vinculación que debía existir entre las demandas debía justificar también “la finalidad” por la cual se podría presentar una demanda dirigida a varios demandados en el domicilio de cualquiera de ellos. Tal finalidad era evitar sentencias inconciliables.

El contenido de lo que se entendería por “inconciliable” fue precisado posteriormente en los asuntos *Tatry* (<sup>525</sup>) y *Hoffmann* (<sup>526</sup>), que señalaron:

Asunto *Tantry*. Apartado 55. [...] “El número 3 del artículo 27 del Convenio reconoce al órgano jurisdiccional la posibilidad de denegar el reconocimiento de una resolución

---

(<sup>524</sup>) STJCE C-77/04, de 26 de mayo de 2005, asunto *Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne y otros vs. Zurich España, Société pyrénéenne de transit d'automobiles (Soptrans)*.

(<sup>525</sup>) STJCE C-406/92, Asunto *Tantry*, Rec. p. I-5439, apartados, 55 y 58.

(<sup>526</sup>) STJCE 145/86, Asunto *Hoffmann*, Rec. p. 645, apartado 22.

*extranjera, introduciendo una excepción a los principios y objetivos del Convenio. Por consiguiente, el concepto de “resolución inconciliable” que en él figura se debe interpretar en función de dicho objetivo. Por el contrario, el párrafo tercero del artículo 22 de Convenio tiene por objeto, tal como lo señaló el Abogado General en sus conclusiones (punto 28) llevar a cabo una mejor coordinación del ejercicio de la función jurisdiccional dentro de la Comunidad y evitar la incoherencia y la contradicción de las resoluciones, aun cuando estas últimas puedan ser objeto de ejecución separada”.*

*Asunto Hoffmann. Apartado 21. “Por lo que respecta a la segunda parte de la tercera cuestión, procede señalar que, dentro del sistema del Convenio, el recurso a la cláusula de orden público, que “únicamente debe actuar en casos excepcionales” (Informe sobre el Convenio, citado anteriormente, p. 44), queda excluido en todo caso cuando, como ocurre en el presente, el problema planteado es el de la compatibilidad de una resolución extranjera con una resolución nacional, problema que debe zanjarse con arreglo a la disposición específica recogida en el apartado 3 del artículo 27, que se refiere al caso de que la resolución extranjera sea inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado requerido.”*

*Apartado 22: “Para determinar si son inconciliables en el sentido de dicha disposición, ha de examinarse si las resoluciones de que se trata implican consecuencias jurídicas que se excluyan recíprocamente”.*

Por otra parte, en el asunto *Gantner Electronic GmbH* <sup>(527)</sup> El TJCE señaló que lo conciliable entre las demandas guardaba relación con las pretensiones presentadas “en la demanda” y no con las defensas ni con las oposiciones invocados por el demandado; las que no venían a determinar el objeto para fines de CJCI. De esta forma la conexidad a la que se refería el artículo 21 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968 debía interpretarse en el sentido de que las demandas formuladas entre las mismas partes ante órganos jurisdiccionales de Estados distintos debían tener el mismo objeto. Para ello bastaban las pretensiones señaladas en el libelo de la demanda (cosa que en el caso *sub lite* ocurrió aun cuando los demandantes fueren varios y el demandado sólo era uno).

En el asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg* <sup>(528)</sup>, se resolvió que el artículo 6 número 1 del entonces Convenio de

---

<sup>(527)</sup> STJCE de mayo del 2003, C-111/01, 8 Asunto *Gantner Electronic GmbH vs. Basch Exploitatie Maatschappij BV*.

<sup>(528)</sup> STJCE de 13 de julio de 2006, C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*.

Bruselas no era aplicable a violaciones de patente europea en las que intervinieron sociedades establecidas en diferentes Estados contratantes. El actual artículo 24.4 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(529)</sup>, ha ratificado este criterio estableciendo una competencia exclusiva en materia de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos <sup>(530)</sup>.

Si bien estamos hablando de competencias exclusivas, la importancia de este asunto radica en que las sociedades demandadas pertenecían a un mismo grupo y actuaron de igual manera o con arreglo a un plan de acción conjunto elaborado por una sola de ellas. La presentación de la medida prejudicial ante el TJCE buscaba establecer una excepción a la norma de principio establecida en el artículo 2º del Convenio de Bruselas, conforme a la cual el asunto debía conocerse por los tribunales del domiciliado de cada demandado. En su lugar se consultaba la aplicación del artículo 6.1 (actual artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012) a fin de emplazar a los demandados en cualquier Estado contratante en el que cualquiera de los demandados tuviera su domicilio.

De lo anterior, resulta lógico plantearse: si no hubiésemos hablado de competencias exclusivas (como ocurre en materia de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos) ¿podríamos aplicar el artículo 8.1 a sociedades que pertenecen al mismo grupo, que actúan de igual manera o con arreglo a un plan de acción elaborado por una de dichas sociedades?

Nuestra respuesta para daños ambientales es sí, por las siguientes razones:

En *primer lugar*, porque en materia de daños ambientales no hablamos de competencias exclusivas, sino de fueros especiales para obligaciones extracontractuales, los que deben interpretarse en forma restrictiva porque

---

<sup>(529)</sup> Equivalente al artículo 22.4 del Reglamento 44/2001 Bruselas I.

<sup>(530)</sup> Reglamento (UE) No. 1215/2012. Artículo 24.4 “*en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional*”.

constituyen una excepción al principio básico establecido en el artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En *segundo lugar*, por razones de economía procesal que abogan por la concentración de las demandas en un mismo tribunal. En efecto, nos encontramos ante un demandado plural, cuyas acciones son coordinadas no en razón de una simple conjunción de acciones, sino en razón de existir unidad de causa, acción y objeto. El riesgo de resoluciones contradictorias resulta bastante alto.

En *tercer lugar*, porque si bien existiría un aumento en los eventuales foros competentes, no por ello se altera la previsibilidad de las reglas de competencia ni se afectaría el principio de seguridad jurídica al que se ha venido refiriendo la jurisprudencia del TJUE (<sup>531</sup>) porque el Reglamento (UE) No. 1215/2012 (a diferencia del antepasado Convenio de Bruselas de 1968) también ha incorporado otros principios interpretativos de los fueros que deben tenerse en consideración para la interpretación armónica con el principio de seguridad jurídica (<sup>532</sup>). En efecto, el constituyente del artículo 114.4 del TUE (anterior artículo 95.4 del TCE) destacó la protección al medio ambiente. Por tanto, la seguridad jurídica no se opone a protección del medio ambiente. Precisamente la previsibilidad de la seguridad jurídica radica en el hecho de que siempre exista una interpretación favorable a la máxima protección ambiental posible, lo que en nuestro caso equivale a favorecer a la víctima de daño ambiental de empresa transnacional.

En *cuarto lugar*, la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no puede considerarse per sé, favorecedor de *forum shopping*, como ha

---

(<sup>531</sup>) Argumentos en contra basados en el riesgo de *forum shopping* y falta de previsibilidad en el sistema en: STJCE de 13 de julio de 2006, C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*. STJCE 19 de febrero del 2002 asunto *Besix*, C-256/00, Rec.p.I-1699, apartado 24-26. STJCE de 1 de marzo del 2005 *Owusu* C-281/02, Rec. P. I-1383, apartado 41 y la STJCE de 13 de julio del 2006 asunto *GAT*, C-4/03, Rec. p. I-6509, apartado 28.

(<sup>532</sup>) Ver Capítulo II de la Primera Parte sobre Principios de protección del medio ambiente y protección de parte.

querido señalarse en cierta jurisprudencia (<sup>533</sup>). La consagración del artículo 6.1 en el Convenio de Bruselas del año 1968 y su ampliación y especificación hasta alcanzar la redacción actual en el Reglamento (UE) No. 1215/2012, proponen evitar precisamente sentencias contradictorias, en un contexto en el cual no se puede desconocer la realidad internacional, en la cual actúan pluralidad de demandados, concertados, pertenecientes a la misma empresa, con unidad de acción, causa, interés y finalidad.

En *quinto lugar*, el daño ambiental se caracteriza por ser colectivo, catastrófico y afectar intereses de distinta naturaleza. Los altos costes de la recuperación ambiental motivan a las empresas a distribuir el riesgo en tantas sociedades como sea posible. Sin embargo, esta distribución de costes no puede ser soportada exclusivamente por la víctima, máxime cuando el *iter* del delito se causa en una decisión tomada consciente y voluntariamente en otro Estado a sabiendas de la vulnerabilidad jurídica, económica, y cultural que posiblemente exista en el lugar del daño. Con mayor razón aún, la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no debiera encontrar óbice si nos encontramos en un ámbito comunitario, en el cual exista armonización de instrumentos jurídicos aplicables.

En *sexto lugar*, alguna jurisprudencia (<sup>534</sup>) ha señalado que al comprobar los criterios que señala el artículo 8.1 del Reglamento, la prueba - que incumbe al demandante - termina obligando al tribunal que conoce el asunto a resolver sobre el fondo antes de poder determinar su competencia.

No estamos de acuerdo con esa conclusión. Si bien el examen previo del fondo puede ser causa de costes adicionales y de extensión en el procedimiento, esa

---

(<sup>533</sup>) STJCE de 13 de julio de 2006, C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*, apartado 38. STJCE 189/87 de 27 de septiembre de 1988, Asunto *Kalfelis* Rec. p. 5565, apartado 9.

(<sup>534</sup>) STJCE de 13 de julio de 2006, C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*, apartado 39.



tarea es inexcusable. Es la víctima la que debe decidir si está o no dispuesta a asumir el riesgo del coste o si debe trasladarse al domicilio del demandado cuando está ubicado en otro país. Por otra parte, cuando el tribunal debe pronunciarse sobre una medida precautoria, cautelar o sobre cualquier medida prejudicial entra en los mismos presupuestos, genera los mismos costes y debe realizar el mismo juicio anticipatorio de la sentencia tanto para determinar la cuantía, para dictar medidas prejudiciales o para establecer garantías de cumplimiento de la sentencia <sup>(535)</sup>. En efecto, el TJUE declaró que el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 era aplicable sin que su aplicación debiera supeditarse a la existencia de un daño; como podía desprenderse del tenor literal del fuero “hecho dañoso”. Sin embargo, exigir la acreditación de un daño no sólo es contradictorio con el objeto de las medidas cautelares sino también con el objeto mismo de ciertas demandas que tienen por objeto obtener la cesación de un comportamiento. Así fue como en el asunto *Henkel* <sup>(536)</sup> el entonces TJCE declaró:

“Por tanto, no puede acogerse la interpretación del artículo 5, número 3, del Convenio de Bruselas según la cual la aplicación de dicha disposición está subordinada a que se produzca efectivamente el daño. Además, resultaría contradictorio exigir que una acción de cesación de un comportamiento que se considera ilícito, como la que se ha ejercitado en el litigio principal, cuyo objeto consiste precisamente en evitar el perjuicio, pueda entablarse únicamente después de que éste se haya producido”.

En estos casos, si el juez debe pronunciarse anticipadamente en casos como la dictación de medidas prejudiciales, o para el otorgamiento de cauciones, estando incluso pendiente de que se acredite la ocurrencia del daño, nada obsta a que se aplique el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sobre delitos y cuasidelitos, o que el tribunal deba declararse competente aplicando el artículo 8.1 del mismo Reglamento, en cualquiera de los domicilios de los demandados. No por esto disminuye la aptitud de defensa del demandado, porque los costes y riesgos los asume

---

<sup>(535)</sup> Sobre medidas provisionales y consideraciones entre órgano remitente y órgano remitente, ver Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 9 de septiembre de 2004 Asunto *St. Paul Dairy* C-104/03.

<sup>(536)</sup> STJCE de 1 de octubre de 2002, asunto *Verein für Konsumenteninformation vs. Karl Heinz Henkel (Henkel)*, C-167/00 apartado 48.

libremente el demandante, con razones plausibles para sostener la competencia que impetra.

Por otro lado, este tema no debe movernos a confundir el ámbito material del Reglamento (UE) No. 1215/2012. En efecto, el artículo 1.2.d) excluye al arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento.

No obstante, esta cuestión no es pacífica porque el TJUE ha debido distinguir entre “procedimientos de aplicación” de un arbitraje (p.ej., la designación judicial de un árbitro) los que están excluidos del Reglamento; de los “procedimientos de apoyo de un arbitraje” (p.ej., la adopción de una medida cautelar que tiene por objeto una cuestión comprendida en el ámbito del Reglamento y que ha sido sometida a arbitraje) que sí están incluidos en el ámbito del Reglamento.

Como la línea divisoria entre procedimientos de aplicación y procedimientos de apoyo de un arbitraje es muy débil, resulta que la cuestión debe evaluarse caso a caso (<sup>537</sup>).

En *séptimo lugar*, porque como señalamos anteriormente, lo conciliable de las sentencias guarda relación con la “finalidad” y con el “objeto” de las demandas que se presentan. Y la similitud de objetos y causa será una circunstancia que debe ser analizada por el juez caso a caso. Así sucedió en el caso *Drouot assurances SA*. (<sup>538</sup>) En el cual el TJCE señaló:

“El artículo 21 del Convenio de 27 de septiembre de 1968 (...) no es aplicable en el caso de dos demandas sobre contribución a averías comunes, la primera de ellas interpuesta por el asegurador del buque contra el propietario del cargamento que se encontraba a bordo en momento del naufragio y el asegurador de dicho cargamento, y la segunda interpuesta por estos dos últimos contra el propietario del buque y su fletador, salvo que, en relación con el

---

(<sup>537</sup>) Garau Sobrino, Federico F., “Los Acuerdos Atributivos de Jurisdicción en Derecho Procesal Civil Internacional Español”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, 2010, pp. 52-91.

(<sup>538</sup>) Asunto *Drouot assurances SA vs. Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance, Groupement d'intérêt économique (GIE) Reunion européenne* C-351/96, de 19 de mayo de 1998.

objeto de los dos litigios se acredite que son idénticos e indisociables los intereses del asegurador del buque, por una parte y los de sus asegurados, a saber, el propietario y el fletador del mismo buque, por otra parte.”

De lo que se concluye que el TJCE entregó al juez la facultad de determinar caso a caso la relación del objeto entre los litigios a fin de determinar si eran idénticos e indisociables, de modo tal que no resultasen sentencias contradictorias.

## **6.- Grupos de Sociedades.**

Nos interesa resaltar la responsabilidad de los grupos de sociedades, no porque sean objeto de este trabajo - el cual no versa sobre la responsabilidad extracontractual de fondo- sino porque consideramos que el foro competente debe guardar coherencia con la realidad de la actividad empresarial internacional.

Para ilustrar este fenómeno, sirva la definición de empresa transnacional que entrega el ECOSOC (<sup>539</sup>) a fin de confrontarla con el concepto jurídico de grupo de empresas:

*“[Empresas transnacionales son] empresas (sea cual sea el país de origen o la titularidad, es decir que se trate de empresas privadas, públicas o mixtas) que se componen de entidades económicas que operan en dos o más países (sea cual sea su estructura jurídica y el sector de actividad), según un sistema de toma de decisiones (en uno o varios centros) que permite la elaboración de políticas coherentes y de una estrategia común, y en base al cual están unidas por vínculos de propiedad u otros vínculos, de tal forma que una o varias de ellas puedan ejercer una influencia importante en las actividades de otras y, en especial, compartir con estas otras entidades informaciones, recursos y responsabilidades.”*

En efecto, las personas jurídicas que desarrollan su actividad empresarial a nivel internacional se desenvuelven a través de sociedades ubicadas en multiplicidad de lugares según se encuentre localizada las necesidades de la producción, la extracción, el procesamiento, la manufactura, el depósito, la venta y/o la financiación

---

(<sup>539</sup>) Comisión de Empresas Transnacionales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) creada por resolución 1913 (LVIII) de 1974.

(<sup>540</sup>). A esta forma de organización internacional que suele denominarse “empresa transnacional”, es la que corresponde llamar en forma más precisa: “grupo de sociedades”.

Por su parte, la realización del mercado interior europeo y la mejoría de la situación económica y social de los Estados europeos obliga a fomentar la eliminación de obstáculos a los intercambios, de tal modo que las empresas no se limiten a satisfacer necesidades puramente locales, y en su lugar, se desarrollen a escala comunitaria (<sup>541</sup>).

### **6.1.- Hecho generador en los grupos de sociedades.**

La configuración de un ilícito civil internacional adquiere mayor probabilidad, cuanto más dispersa se encuentre la actividad empresarial. Dicho de otra forma, a menor autonomía y menor concentración de funciones en una sociedad (sea porque no controla la decisión, la gestión, la producción, la comercialización y/o la inversión) entonces existirá mayor dispersión internacional de la actividad capaz de configurar un ilícito civil internacional.

En este acápite, hablamos de empresas internacionales (<sup>542</sup>) en las que existe una alteración en la estructura patrimonial, como consecuencia del ejercicio de una “dirección económica unitaria”. De esta forma, el patrimonio de cada sociedad se

---

(<sup>540</sup>) Sobre operación y organización de los grupos de sociedades para alcanzar cuotas de mercado ver: Duque Domínguez, Justino, "El Derecho de las empresas vinculadas", *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, número 35, año IX, 1989, pp. 465 y ss. y Sánchez Calero, Francisco, "De nuevo sobre la regulación de los grupos de sociedades", *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, año 19, número 77, 2000, pp. 7-64.

(<sup>541</sup>) Considerando 1 del Reglamento (CE) No. 2157/2001 Del Consejo de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE).

(<sup>542</sup>) El fenómeno del grupo de sociedades se inserta en uno más amplio denominado: concentración de empresas. Diferencias de conceptos en: Antonio-Carmelo, Agustín Torres, “Grupos de sociedades en Derecho español. Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado en el día 25 de abril de 1991”, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, Tomo XXXI, 1992.

administra como parte de un patrimonio global del grupo (<sup>543</sup>). Si una de las sociedades no cumple con sus obligaciones, suele adoptarse una estrategia que protege sólo a aquellas sociedades filiales que interesan al grupo o que están sometidas a una relación jurídico-contractual de dependencia; en circunstancias que, en la mayoría de los casos, tal dependencia jurídica es muy difícil de probar o funciona en los hechos como una dirección económica, más que como una relación contractual (<sup>544</sup>).

Según vimos anteriormente, la sociedad es “responsable por el hecho propio” y es “responsable por el hecho de sus dependientes”. Sin embargo, si consideramos que la sociedad pertenece a un grupo internacional, entonces la responsabilidad puede extenderse a filiales con las cuales no existe una relación de dependencia en el sentido tradicional de la teoría de la responsabilidad contractual o extracontractual, pero con la cual si existe una relación de dirección y obediencia económica.

Por estas razones, y en la medida de que el legislador europeo va conceptualizando el fenómeno en base al carácter económico de la dirección, entonces nace el postulado sobre la responsabilidad del grupo empresarial extensivo por todas las sociedades que forman parte del mismo. De esta forma, resulta indiferente que el daño se haya localizado en uno de los países, si la decisión se adoptó en otro.

Desde esta perspectiva, el ilícito civil internacional, explica su internacionalidad por la estructura de la empresa. Esto quiere decir que, con independencia de las personas naturales que resulten responsables del daño, o de las

---

(<sup>543</sup>) La Ley Alemana (aktiengesetz) del 6 de septiembre de 1965, artículo 18 y en general países de origen germano (Alemania, Austria, Suiza u Holanda) tienen un vocablo específico que designa el fenómeno: “Konzern”. Asimismo, el Código das Sociedades Comerciais portugués de 2 de septiembre de 1986, contiene normas societarias especiales para los grupos de sociedades.

(<sup>544</sup>) Embid Irujo, J.M., “Los grupos de sociedades en el Derecho Comunitario y español”, *Revista Crítica de Derecho inmobiliario*, 1990, Vol. 67, pp.31-54. Sobre grupos de empresa con base contractual ver: Fernández de Araoz y Gómez Acebo, Alejandro, “Grupos de empresas de base contractual y derecho de la competencia”, *Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 5, 2002, pp. 5357-5424.

sociedades que están relacionadas en situación contractual de dependencia, es la empresa-grupo la que en su totalidad es responsable de los daños.

Directrices de la OECD están de acuerdo en este punto (<sup>545</sup>):

*“Commentary on General Policies: 9.- The Principles extend to enterprise groups, although boards of subsidiary enterprises might have obligations under the law of their jurisdiction of incorporation. Compliance and control systems should extend where possible to these subsidiaries. Furthermore, the board’s monitoring of governance includes continuous review of internal structures to ensure clear lines of management accountability throughout the group.”*

En lo que a nosotros interesa, el grupo de sociedades debe asumir los costos de la litigación internacional tanto en el lugar donde se han producido los daños, como también y muy especialmente, asumir el costo de la opción del demandante a dirigir su acción ante el juez del lugar donde se encuentra la sociedad que mantiene la dirección económica del grupo y donde se adoptaron las decisiones a sabiendas o no pudiendo menos que prever las consecuencias ambientales que se generaría en otro Estado (en el de la sociedad filial u otro).

Entonces, entendemos por juez competente, aquél del lugar donde la empresa-grupo tiene la dirección económica, como aquél del lugar donde se han manifestado los daños de una acción que obedeció a la política y estrategia del grupo.

Al respecto, no olvidemos que el foro del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, no ha definido qué se entiende por hecho dañoso y que la jurisprudencia del TJUE ha sido consistente en ubicar el “hecho generador” (elemento del hecho dañoso) en el lugar donde se ubica la causa del daño.

Por otra parte, si bien el foro del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 ha sido establecido como un foro especial en relación al del artículo 4º del

---

(<sup>545</sup>) OECD, *Guidelines for Multinational Enterprises*. 2011 Edition. Asimismo, ver: II. General Policies.- “Enterprises should take fully into account established policies in the countries in which they operate, and consider the views of other stakeholders. In this regard: A.- Enterprises should: 6. Support and uphold good corporate governance principles and develop and apply good corporate governance practices, including throughout enterprise groups”.

mismo Reglamento (que se refiere al domicilio del demandado). Sin embargo, esta especialidad del foro, no debe hacernos perder de vista que el domicilio del demandado es un foro que se aplica por defecto y aún con prioridad en ciertos casos al artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, especialmente aquellos en los que el daño extracontractual se ubica en un país extracomunitario.

De esta forma, en los casos en los cuales una empresa está formada por un grupo de sociedades, el hecho generador pudo localizarse en la sociedad controladora, sociedad matriz o sociedad con influencia determinante en la acción cuyas consecuencias arrojan un daño ambiental.

El apoyo normativo para sostener este argumento se encuentra en los siguientes artículos: artículo 63.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 y artículo 7 del Reglamento comunitario que aprueba el estatuto de la sociedad anónima europea. El primero señala:

*Artículo 63. 1. “A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre:*

- a) su sede estatutaria;*
- b) su administración central;*
- c) su centro de actividad principal.”*

Por su parte, el artículo 7 del Reglamento comunitario que aprueba el estatuto de la sociedad anónima europea (SE) <sup>(546)</sup>, establece:

*Artículo 7. “El domicilio social de la SE deberá estar situado dentro de la Comunidad, en el mismo Estado miembro que su administración central. Además, los Estados miembros podrán imponer a las SE registradas en su territorio la obligación de situar la administración central y el domicilio social en el mismo lugar”.*

---

<sup>(546)</sup> Sobre el domicilio en la sociedad europea, ver Reglamento (CE) No 2157/2001 del Consejo de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).

Por tanto, es posible que en los grupos de sociedades el hecho generador esté ubicado en la sociedad matriz, o en aquella sociedad que mantiene la dirección económica del grupo.

Detractores de este postulado podrían argumentar la multiplicidad de foros que se abrirían en caso de que se entregara un derecho de opción al demandante para presentar su demanda a su arbitrio ante: el lugar donde la empresa tiene la sociedad que ha ocasionado materialmente el daño ambiental y el lugar donde la empresa tiene la sociedad controladora, matriz o con influencia dominante. Sin embargo, no podemos desconocer que la empresa transnacional existe porque actúa valiéndose de las ventajas comparativas que le ofrecen los Estados y sus mercados. Algunas de estas ventajas radican en menores costes en caso de daño ambiental o menor responsabilidad civil asociada a un daño ambiental. Razones de justicia distributiva y la necesidad de evitar el dumping ambiental nos motivan a promover como lugar del “hecho generador” aquél donde se encuentra la sociedad controladora, matriz o sociedad con influencia dominante en la dirección económica de una empresa transnacional.

Por otro lado, el conocido problema de la prueba del daño ambiental puede motivar a radicar el asunto en la jurisdicción más cercana a los daños. Sin embargo, este interés sólo puede ser absoluto en dos casos: a) respecto de las medidas cautelares que pueden frenar el daño ambiental y b) respecto de las medidas tendientes a acreditar un daño ambiental. Sin embargo, no es necesariamente cierto respecto de la prueba del daño civil, tampoco es absolutamente eficaz respecto de las medidas cautelares patrimoniales que puedan recaer sobre los bienes de la empresa que se encuentren sitos en otros Estados.

Como la correspondencia de los fines señalados anteriormente puede arrojar como resultado que el asunto entregue competencia exclusiva a jueces de distintos Estados, resulta entonces, que la extensión del foro establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, debe considerar no sólo la extensión de los daños



(tema que abordaremos en el Capítulo III de esta misma Parte), sino que debe abordar también la extensión de la acción. Dicho en otros términos, la CJCI debe determinar a qué Estados se extiende la acción dolosa o culpable que originó el daño y que se entiende como “hecho generador”.

Finalmente, los beneficios de la homogeneización judicial internacional y los alcances mundiales que el Reglamento (UE) No. 1215/2012 puede aportar en una aplicación extracomunitaria, son motivos que justifican ampliamente esta perspectiva ya que abren la aplicación universal de dicho Reglamento.

## **6.2.- Hecho generador y las relaciones de dominio, control e influencia en Grupos de Sociedades.**

La noción de grupo de sociedades se asocia a una técnica de organización de la empresa moderna, que se opone a los modelos societarios tradicionales. Surge como una estrategia de crecimiento “externo” para alcanzar mercados internacionales. En la actualidad se ha consolidado como una forma de organización en base a la unificación del control en los operadores económicos <sup>(547)</sup>. Hablamos de

---

<sup>(547)</sup> Sobre organización, teoría y clases de grupos de sociedades ver: Agustín Torres, A.C., “Grupo de sociedades en Derecho español”, AAMN, 1992, p. 233. Arriba Fernández, M.L., *Derecho de los Grupos de Sociedades*, Madrid, 2009. Blázquez Lidoy, A., *El régimen de los grupos de sociedades en la Ley 43/1995*, Madrid, 1999. Cano López, A., “El fenómeno de las uniones de empresas en el ámbito de la economía social: los grupos de sociedades laborales”, en *Derecho de Sociedad*. Libro Homenaje al Prof. Fernando Sánchez Calero, Vol. V, Madrid, 2002, p. 5229. Córdoz López V. Y Pina Martínez, V., “Los grupos de sociedades en la legislación mercantil”, *Actualidad Financiera*, número 30, p. 1849. Duque Domínguez, J.F., “El concepto de grupo de sociedades y su desarrollo en el Derecho español”, en *Derecho de Sociedad*. Libro Homenaje al Prof. Fernando Sánchez Calero, Vol. V, Madrid, 2002, p. 5303. Embid Irujo, J.M., *Introducción al Derecho de los grupos de sociedades*, Granada, 2003. Embid Irujo, J.M., *Grupos de Sociedades y Derecho concursal, Estudios sobre la ley concursal*, Libro Homenaje a Manuel Olivencia, T.II., Madrid, 2005, p. 1885. Fernandez Markaida, I., *Los Grupos de sociedades como forma de organización empresarial*, Madrid, 2001. Fuentes Naharro, M., *Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)*, Madrid, 2007. Fuentes Naharro, M., Conflicto de intereses en grupos de sociedades: reflexiones a propósito de la STS de 12 de abril de 2007, *Revista de Derecho de Sociedades*, número 30, 2008, p. 401. Rafael Sarazá, Jimena, “Responsabilidad concursal y grupos de sociedades”, *Anuario de Derecho concursal*, número 10, 2007, pp. 229-264. Ramírez Otero, Lorena, “El control y los grupos de sociedades”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, número 5, 2001, pp.

la “dirección económica unitaria” que caracteriza al grupo de sociedades y que actualmente utilizan todas las empresas transnacionales. En este acápite profundizaremos en la noción de “dirección unitaria” a efecto de ubicar el hecho generador en la sociedad que mantiene el dominio, el control o la influencia dominante en el grupo de sociedades.

La dirección unificada, a la que nos referimos, opera a través de un sistema jerarquizado en el cual las sociedades filiales son controladas por órganos de administración que obedecen a políticas, estrategias, planes y hasta a programas elaborados por la sociedad matriz o sociedad titular de la dirección unitaria. De esta forma, las sociedades filiales (usualmente aquellas que concentran la producción y están más expuestas a ocasionar un daño ambiental) sólo mantienen una relativa autonomía o una autonomía “de papel”. Este fenómeno se evidencia aun en aquellas sociedades filiales que están organizadas como sociedades anónimas y que exhiben órganos de poder descentralizado tales como Juntas de Accionistas, comités de Vigilancia o Controles de Auditoría internos (<sup>548</sup>). Esta particular forma organizativa explica el funcionamiento del grupo y viene a cambiar el postulado tradicional sobre separación de poderes dentro de una sociedad. En suma, la autonomía de la filial es relativa porque se subordina a una dirección externa.

En los grupos de sociedades, el accionariado difundido y la presencia de sociedades con alto grado de autonomía en la ejecución, nos conduce a hablar en sentido más propio de grupo de sociedades por subordinación (<sup>549</sup>).

---

629-663. Sánchez-Calero Guilarte, Juan, “Algunas cuestiones concursales relativas a los grupos de sociedades”, *Anuario de Derecho Concursal*, número 5, 2005, pp. 7-60. Vázquez, María Fernanda, “Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)”. en Fuentes Naharro, M. Thomson-Civitas, Colección Estudios de Derecho Mercantil, 2007, 546 p. Recensión en *Revista Ius et Praxis*, Año 13, número 2, Talca, Chile, pp. 453 – 460.

(<sup>548</sup>) Engrácia Antunes, José A., *Os grupos de sociedades*, Almedina, Coimbra, 2002, p. 52.

(<sup>549</sup>) Aproximación al concepto de subordinación en: Duque, Justino F, y Ruiz Peris Juan Ignacio, *Los Grupos en el Ordenamiento Jurídico: Grupos de sociedades, cooperativas y grupos por subordinación integrados por entidades de economía social, en grupos empresariales de la Economía Social en España*, Valencia, 1999.

En los grupos de sociedades por subordinación, la dirección económica unificada se puede expresar a través de diversas técnicas de control. En otras palabras, existiendo pluralidad de sociedades jurídicamente independientes entre sí, pervive entre ellas una relación de dependencia en la gestión económica que puede adoptar múltiples formas según el negocio del que se trate <sup>(550)</sup>.

En todos los casos, determinar la forma de control que se ha adoptado el grupo obliga a hacer un estudio sobre los órganos de administración de las sociedades que forman parte del grupo a objeto de determinar cual de dichas sociedades posee el poder de dirección e influencia sobre el resto <sup>(551)</sup>. En efecto, las sociedades anónimas (y en general todas las formas societarias de capital y aún las sociedades de responsabilidad limitada que se organizan en base a Juntas generales y Directorio) han desplazado el poder de la Junta General de socios a los órganos de administración y gerencia <sup>(552)</sup>, en los cuales también han depositado la dirección económica de la sociedad.

De esta forma, el grupo resulta ser dirigido por intereses que exceden a los intereses de las sociedades individualmente consideradas que forman parte de él. La prosperidad y el prestigio de la empresa priman por sobre el beneficio distribuible entre los socios. Cuestión que resulta especialmente clara desde la perspectiva de los socios de sociedades filiales.

---

<sup>(550)</sup> En los grupos de sociedades de base contractual las directrices están determinadas por el contrato de dominación y por la legislación. Formas contractuales de grupos de sociedades en: Embid Irujo, José Miguel, “El contrato de constitución del grupo en el derecho español”, *Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 5, 2002, pp.5323-5356. Fernández de Araoz y Gómez Acebo, Alejandro, “Grupos de empresas de base contractual y derecho de la competencia”, *Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 5, 2002, pp. 5357-5424.

<sup>(551)</sup> Domínguez Ruiz de Huidobro, Adolfo, “Cuestiones sobre la responsabilidad de los administradores en los grupos de sociedades. Particular referencia a la teoría del administrador de hecho”, *Libro Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 2, 2002, pp. 1299-1321

<sup>(552)</sup> A modo de ejemplo, la reforma de 1971 a la Ley holandesa de sociedades, vino a desautorizar a la Junta General en el nombramiento de los administradores, a objeto de dar legalidad al poder de los administradores y de hacerles responsables por sus actos de gestión. Otros efectos en: Ruiz-Rico Ruiz, Catalina, “La autocontratación en el grupo de sociedades”, *Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 5, 2002, pp.5443-5464.

De esta forma, el control que se ejerce en los grupos de sociedades respeta la forma jurídica de cada sociedad y su organización interna, pero influye sustancialmente en las decisiones económicas de la sociedad que pertenece al grupo. Por esta razón, el control económico del grupo debe explorarse en los órganos societarios que tienen el poder real de decisión en la marcha económica de la sociedad, y entre ellos muy especialmente en los órganos de administración.

En razón de lo anterior y aunque el proceso societario es - en principio - unitario, resulta que existen etapas en la gestión que por su carácter de estratégicas son capaces de ilustrar si la sociedad es tributaria o no de una dirección económica externa.

Por estas razones la producción de un daño obedece en realidad a un proceso cuyo hecho generador pudo estar ubicado en un tiempo y en un lugar muy distinto al lugar donde se manifiestan los daños ambientales.

En efecto, en este tipo de sociedades, la gestión admite distintas etapas (programación, dirección, ejecución y control). De dichas etapas, dos de ellas son estratégicas para el establecimiento de una unidad económica, son: la programación y la dirección. Estas etapas definen qué sociedad tiene el poder de decisión <sup>(553)</sup>. Asimismo definen el lugar donde se adoptan las decisiones.

Por otro lado, el control es un concepto que no ha sido definido o limitado por el legislador <sup>(554)</sup>. El control opera como presupuesto para la formación del grupo; pero existen relaciones de control que no necesariamente hablan de la existencia de un grupo de sociedades. Por esta razón, más que control, es necesario que exista “la aptitud” de dirección en la gestión de otra sociedad. En esto consiste la diferencia

---

<sup>(553)</sup> El control en cambio, juega un rol en la formación, pero en los grupos de sociedades hablaremos más de influencia y de dirección unificada. Concepto unitario de control en: Ramírez Otero, Lorena, “El Control y los Grupos de Sociedades”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, Número 5, 2001, pp. 650-663.

<sup>(554)</sup> Vgr. El artículo 42.1 del Código de Comercio español no establece un concepto de control. Pero enumera supuestos de hecho en los cuáles parece considerar que entre las sociedades existe una relación de dominio.

entre control e influencia dominante. Para que exista un grupo de sociedades basta con que exista influencia dominante, porque el ejercicio del control es potencial y permanente.

Esto viene a explicar en parte, porqué existe escaso desarrollo de definiciones legales sobre los grupos de sociedades. En efecto, suele entenderse que ha operado una presunción que consiste en probar la existencia de influencia dominante de una sociedad sobre las otras, para que se presuma que dicha sociedad tiene la dirección unitaria del grupo<sup>(555)</sup>. Sin embargo, el escaso desarrollo de definiciones legales sobre los grupos de sociedades, no debería impedir a la jurisprudencia estar en condiciones de comprender el fenómeno, determinar sus alcances y proteger los derechos de los demandantes que se encuentren en situación cualitativamente desprotegida en relación con el poder de anticipación y previsión que es exigible de un grupo de sociedades o empresa transnacional.

Finalmente, una de las sociedades del grupo puede tener el control en el desarrollo de un proyecto internacional que vincula a varias sociedades del grupo. En este caso, si se prueba que ese control es planificado y estable en el tiempo (de tal modo que no se refiera solamente a un negocio en concreto o a una situación puntual) entonces estaremos frente a un grupo de sociedades que obedece a una dirección unitaria, conforme a la cual se produce un hecho generador que influye sustancialmente en el acto material que tiene como resultado un daño ambiental.

---

(<sup>555</sup>) Sobre influencia dominante ver: Franch Fluxà, Juan, Grupo de sociedades como institución jurídica, J.M.Bosch editor, Barcelona, 2009. Fuentes Naharro, Mónica, “Accionistas externos de grupos de sociedades: una primera aproximación a la necesidad de extender la perspectiva tuitiva a la sociedad matriz”, *Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil*, Universidad Complutense, 2008. Aylwin Chiorrini, Andrés y Rojas Miño, Irene, “Los grupos de empresas y sus efectos jurídico laborales en el Derecho comparado”, *Ius et Praxis*, V. 11, número 2, Talca, 2005. Arriba Fernández, María Luiza, *Derecho de grupos de sociedades*, Civitas, 2009. Montiel Fuentes, Carlos Mario, “Acercamiento al concepto de grupos empresariales: concurrencia de elementos para su existencia”, *Revista e-Mercatoria*, Vol. 8, número 1, 2009.

## **7.- Conclusiones.**

En este Capítulo se abordó el lugar del hecho generador. Nos planteamos el sentido y alcance del fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En efecto, el foro general es aquel donde el demandado tiene su domicilio.

Sin embargo, el foro general debe completarse con los foros alternativos; los que hayan su existencia por el nexo entre el órgano jurisdiccional y el asunto. Según vimos, el mismo legislador comunitario ha señalado que el fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 debe interpretarse de tal forma que resulten integrados: tanto el lugar donde se originaron los daños como el domicilio del demandado.

1.- En éste Capítulo dimos respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de asimilar el lugar del domicilio del demandado con el lugar del “hecho generador”.

Para responder esta pregunta, partimos de la hipótesis que los daños civiles no son una consecuencia de los daños ambientales, sino que unos y otros “comparten el mismo hecho generador”. De aquí que el tribunal competente para conocer de los daños ambientales resulta también ser competente para conocer de los daños civiles directos.

De aquí concluimos que el tribunal que es competente para conocer del hecho generador de los daños ambientales es también competente para conocer del hecho generador de los daños civiles directos.

Tanto para personas naturales o físicas como también para personas jurídicas o morales, el lugar del hecho generador de un daño es aquél donde se ha dado inicio a la acción cuyas consecuencias son un daño ambiental.

2.- Es posible que una demanda civil por daño ambiental se radique en el domicilio del demandado. En este caso, la demanda no queda radicada por aplicación del fuero establecido en el artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sino por aplicación del fuero especial del artículo 7.2 del mismo Reglamento. En efecto, la

demanda presentada en el domicilio del demandado puede ser objeto de una interpretación extensiva del fuero “lugar del hecho generador”. Por esta vía, la aplicación de la regla de ubicuidad permitiría al demandante de daños ambientales (y de daños civiles directos) presentar la demanda a su arbitrio: o en el lugar donde se manifestaron los daños o en el lugar del domicilio del demandado.

Todo lo anterior, no debiera generar alarma porque la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en relación con el artículo 4º y 8.1 del mismo Reglamento, constituyen una base jurídica para esta atribución de competencia.

En efecto, el debate sobre la previsibilidad y la certeza en los fueros debe pasar también –como ya lo anticipábamos en los Capítulos II y III de la Primera Parte - por el cumplimiento de:

a.-) Fines de justicia distributiva, correctiva y preventiva propios de la responsabilidad ambiental (cautela y acción preventiva, corrección en la fuente misma y principio quien contamina paga).

b.-) Reparación integral de los daños civiles asociados a un daño ambiental y

c.-) Armonía en la interpretación de directrices y política de responsabilidad ambiental de todos los cuerpos normativos comunitarios.

Por otra parte, en materia de daños ambientales no hablamos de competencias exclusivas, sino de fueros especiales para obligaciones extracontractuales, los que si bien deben interpretarse en forma restrictiva deben guardar coherencia con el principio básico de competencia establecido en el artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

3.- En el caso de las personas jurídicas, el lugar del hecho generador coincide con el lugar donde la empresa tiene su centro de operaciones, administra y gestiona las operaciones. Esto significa que el lugar del hecho generador no sólo obedece a la

realidad fenomenológica del daño ambiental, sino que jurídicamente obedece al lugar donde se adoptaron las decisiones y se gestionaron las operaciones cuyas consecuencias son un daño ambiental previsible a distancia.

En efecto, el daño ambiental internacional al que nos referimos se diferencia de aquél que tradicionalmente ha sido abordado por la doctrina y que para nosotros está reducido al “daño ambiental transfronterizo”. En nuestro caso, el lugar del hecho generador resulta de una operación que busca la causa real de la contaminación. Según esta operación, el hecho generador coincide con el lugar desde donde se han adoptado las decisiones, donde se han conocido las condiciones ambientales, normativas y económicas de la actividad que contamina; lugar desde donde se han podido prever los resultados probables de dicha actividad y donde se han aceptado las consecuencias dañosas.

Sólo así se entiende el funcionamiento de una empresa internacional y se responsabiliza al verdadero causante de un daño ambiental e incluso promovedor de dumping ambiental.

4.- En armonía con el punto anterior, cuando el demandado es una persona jurídica internacional, es probable que nos encontremos con pluralidad de demandados según estemos frente a sociedades que forman parte de una empresa transnacional o de un grupo de sociedades. Todas estas sociedades tienen distinto grado de participación en la comisión del ilícito internacional. En ausencia de claridad sobre el grado de participación, y apoyados en la doctrina clásica de la responsabilidad extracontractual, tenemos que la víctima está facultada para demandar conjunta y solidariamente a todas las sociedades. Esta posibilidad es resultado de la misma lógica señalada en el párrafo anterior.

Esto es, en el caso de que el demandado no sea una sola sociedad, sino un grupo de sociedades o empresa transnacional con varias sociedades, entonces, el demandante de daños civiles directos puede presentar su demanda a su arbitrio: o en el lugar donde se manifestaron los daños o en el lugar del domicilio de la sociedad donde se adoptaron las decisiones que aceptaron el riesgo de daño ambiental



(generalmente la sociedad matriz, pero la prueba puede arrojar también a: la propietaria, la controladora o a la sociedad que lleva la dirección económica unitaria del grupo).

5.- En los casos de demandado múltiple, la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 no debe confundirse con la situación del demandado singular que está compuesto por una sola empresa formada por una sociedad propietaria, controladora o con dirección económica unitaria sobre varias sociedades filiales. En este caso aplicamos el artículo 7.3 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. En efecto, mientras el artículo 8.1 se refiere a “varios demandados” el artículo 7.2 se refiere a un solo demandado. En el caso de las empresas transnacionales el demandado, que es uno solo, está compuesto por varias sociedades distribuidas en distintos Estados; dichas sociedades actúan de tal forma que mantienen una unidad económica y obedecen a los mismos fines corporativos.

Por tanto, nos encontramos frente a una alteración en la estructura patrimonial como consecuencia del ejercicio de una “dirección económica unitaria”. El legislador europeo ha ido conceptualizando el fenómeno de los grupos de sociedades en base al carácter económico de la dirección.

En nuestro caso, resulta lógico que la matriz, propietaria, controladora o sociedad con dirección económica unitaria también participe de la responsabilidad en las externalidades negativas de sus filiales o sociedades relacionadas en caso de daño ambiental. De esta forma una empresa transnacional, constituida por varias sociedades, no podría eludir la posibilidad de que el demandante presente su demanda en el lugar donde se ha producido el hecho generador, entendiendo en este caso como lugar del hecho generador, el lugar donde está domiciliada la matriz, sociedad controladora o sociedad que lleva la dirección económica del grupo de sociedades.

Si bien, es necesario que la jurisprudencia señale los límites, esta aproximación pone de manifiesto que en la jurisdicción internacional los fueros de competencia internacional, deben estar acorde con las presunciones de culpa, la

responsabilidad por el hecho ajeno, e incluso, con la responsabilidad objetiva que pueda pronunciar el sentenciador en el asunto de fondo.

Finalmente, la coherencia que se pide al sistema de distribución de competencias busca la realización del mercado interior europeo y la mejoría de la situación económica y social de los Estados europeos, de tal forma que no sólo se eliminen los obstáculos a los intercambios, sino que también exista desarrollo a escala comunitaria.

6.- En los casos de grupos de sociedades existe responsabilidad solidaria, la que está determinada por lo ilícito de la colusión.

Existe colusión: cuando hay unidad de acción concertada entre las distintas sociedades pertenecientes al grupo o a la misma empresa transnacional. De este modo todas las sociedades involucradas que ejecutan una acción ordenada son obedientes a una estrategia mancomunada.

Los efectos queridos por el demandante podrán satisfacerse generalmente con el sólo mérito de la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Sin embargo, la facultad que otorga la regla de ubicuidad establecida para el artículo 7.2 del mismo Reglamento beneficiará al demandante que actúa contra un “demandado singular plurilocalizado” pero no cuando actúa contra “demandados simplemente múltiples”.

De todo lo anterior se colegie que cuando existe “simple conjunción de acciones” mal podríamos aplicar la regla de ubicuidad establecida para el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

## CAPITULO III

### DEL DAÑO

#### SUMARIO:

1.- Antecedentes. 2.- Distinción entre daños ambientales, daños ecológicos y daños civiles. 3.- Del daño civil transnacional. 4.- Diferencias entre daño civil y daño ambiental. 4. 1.- Daño significativo. Matices entre daños ambientales y daños civiles. 4. 2.- Certidumbre del daño. 5.- De la extensión del daño. Daños directos y daños indirectos. 5. 1.- Criterio de la equivalencia de las condiciones. 5. 2.- Criterio del vínculo de proximidad. 5. 3.- Criterio según el riesgo incrementado. 6.- Conclusiones.

---

#### 1.- Antecedentes.

Al comenzar este capítulo, debemos hacer una advertencia que está dirigida al juez que debe pronunciarse sobre su competencia judicial internacional: tiene el deber de no incurrir en el error de analizar la competencia judicial internacional en base a criterios que se aplican para solucionar el fondo del asunto. *A contrario sensu*, no debe analizar el asunto de fondo de acuerdo a los criterios procesales que utilizó para determinar la atribución de competencia. Esta advertencia, que *a priori* parece obvia, en realidad no lo es, porque resulta que entre el Derecho aplicable al fondo y el Derecho Procesal existen vasos comunicantes que involucran dos clases de riesgos:

El *primer riesgo*, se produce en la tarea de determinar el tribunal competente, con pre-juzgamiento del derecho de las partes, por la vía de haber definido *a priori* a qué hechos se extiende la competencia y a qué hechos no.

Existe un *segundo riesgo* de pre-juicio por la vía de clasificar algunos daños de directos y otros daños de indirectos para fines de CJCI, y posteriormente continuar considerándolos así al aplicar el Derecho de fondo; cuando, en realidad, los criterios

para clasificarlos han obedecido a fines estrictamente procesales. En este último caso, abordaremos la determinación del tribunal competente para daños directos e indirectos tomando en consideración que buena parte de lo directo o indirecto de un daño, guarda relación con el problema de la vinculación entre el hecho generador y el resultado lesivo.

Así, conforme la necesidad que existe en distinguir la dimensión procesal de la dimensión del Derecho de fondo aplicable al asunto internacional, y a propósito de la falta de escisión absoluta entre tales, nos encontramos con que, el estatuto normativo aplicable al fondo de las obligaciones extracontractuales (Reglamento comunitario 864/2007 Roma II) trata conjuntamente los daños ambientales y los daños civiles asociados. Este esfuerzo del legislador comunitario puede parecer algo utópico, pues al unificar regímenes de responsabilidad pasó por alto que ambos tienen finalidades muy distintas.

La idea de unificación es más útil en materia procesal que en materia del régimen de fondo aplicable al asunto. En efecto, la unificación de los procedimientos para determinar el tribunal competente de daños extracontractuales civiles y de daños ambientales puede resultar de mucha utilidad por los avances teórico-jurídicos desarrollados en el área civil. Por otro lado, existe el riesgo de unificar criterios que, sin duda, son distintos en materias ambientales que aquellos que inspiran las materias civiles. Por ejemplo, la noción de medidas cautelares, precautorias y de protección; todos los cuales tienen finalidades y procedimientos muy distintos en materia civil del que tienen en materia ambiental.

Es así que la determinación del daño ambiental presenta notable importancia, no sólo por su complejidad sino por la relación que establecerá con el daño civil. En este sentido, las distinciones que la jurisprudencia ha querido establecer para determinar el lugar del hecho dañoso en materia civil no pueden aplicarse para la determinación del lugar del hecho dañoso en materia ambiental ni viceversa. Lamentablemente así ha ocurrido. La forma de abordar ambos daños ha sido

conjunta, y el TJUE ha permeado ambas dimensiones. Hoy, nos encontramos con que un pronunciamiento del TJUE sobre la CJCI de un tribunal para un caso de contaminación transfronteriza, también se aplica a los daños sufridos por consumidores o a los daños que se refieren a la imagen o al crédito de una persona.

Por estas razones, consideramos que, a efecto de no desvirtuar la pureza de los criterios en la determinación del tribunal competente, el análisis que se haga sobre el elemento daño en la relación extracontractual internacional debe considerar que en el modelo de responsabilidad extracontractual imperante en Europa y en la mayoría de los países de tradición franco-germana, el elemento daño es el principal punto de conexión con una jurisdicción, por tanto, ambas categorías de daños (civiles y ambientales) deben analizarse por separado.

No obstante lo señalado anteriormente el daño, como elemento de la obligación extracontractual internacional, no obedece a una realidad desvinculada de los otros elementos de la relación extracontractual, todos los cuales inciden en la determinación del tribunal competente. Entre los otros elementos relacionados con el daño sobresalen: a) el elemento personal (los sujetos involucrados), y b) la relación entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo (usualmente denominado relación de causalidad entre la acción y el daño). En este punto del trabajo ponemos énfasis en la relación que existe entre el hecho generador y el resultado dañoso. Tal relación que es abordada desde el Derecho de fondo a través de la teoría de la causalidad, en nuestro caso viene a aportar criterios que ayudarán al juez a determinar la extensión de los daños que entran dentro de la esfera de su competencia. En otras palabras determinar la extensión de la CJCI consiste en determinar la relación que existe entre dos hechos: el hecho generador y el daño.

Habiéndose reconocido por la jurisprudencia del TJUE, en interpretación del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, que existe un *optio fori* a favor de la víctima del daño, tal derecho consiste en la facultad de recurrir a una de las dos jurisdicciones: a) la del lugar donde se hubiere producido o la del lugar donde pudiese

producirse el daño, y b) la del lugar donde se originó el daño. Para el juez, esta dualidad no se manifiesta como un derecho de opción; para el juez será un problema que consiste en determinar la extensión de su jurisdicción sobre los daños que se alegan. Determinar cuáles son los daños directos es, precisamente, una vía para solucionar el problema de la vinculación entre los hechos generador y de resultado.

Por otra parte, en los casos de daños ambientales, se reproduce la misma estructura básica descrita para los daños civiles. Los elementos de la relación extracontractual principalmente involucrados serán: sujetos, hecho dañoso, y el vínculo que existe entre una acción generadora y un resultado lesivo.

Por esta razón, tanto el hecho generador como el resultado daño, hacen que convivan daños civiles y daños ambientales en estrecha armonía. Tan estrecha es la relación entre daños civiles y daños ambientales, que ninguno de ellos existe sin un hecho generador común estrictamente ecológico. Por ejemplo, el vertido de riles, escoria, líquidos percolados, derrame de aliviaderos o sustancias peligrosas a un río internacional, constituye un hecho que puede estar localizado originariamente en un Estado, pero que afecta potencialmente a dos o más Estados, tanto desde la perspectiva ambiental (afectación de ecosistemas), como desde la perspectiva civil (daño emergente y lucro cesante de la actividad comercial de explotación del río por parte de propietarios riberaños de otro Estado, afectación del turismo contratado en otros países, etc.)

Sin perjuicio de la estrecha relación que existe entre ambas clases de daños, no existe una simetría entre los daños ambientales y los daños civiles. En efecto, la diferencia no sólo obedece a los distintos fines que persigue la reparación y la indemnización en cada uno de ellos, para nuestros efectos existe un interés adicional.

Si analizamos los daños civiles y los ambientales en sí mismos, como realidades separadas o desvinculadas entre sí, podemos llegar a una multiplicidad de situaciones, todas las cuales demandarían un foro competente especial. De aquí que, podríamos preguntarnos si es conveniente o no condicionar los daños civiles a la

ocurrencia de daños ambientales. Este debate, no es nuestro objeto directo, sin embargo, durante el desarrollo de este trabajo, presentamos un aspecto sustancial de dicho debate: resolver adecuadamente la relación que existe entre el hecho generador y el daño, permite concluir que es posible que coexistan separadamente ambas clases de daños, sin que exista necesidad de que la existencia de los daños civiles esté condicionada por la prueba de la existencia de un daño ambiental; porque compartir el mismo hecho generador no equivale a asociar ambas clases de daño. Incluso más, el demandado puede resultar responsable sólo de algunos de los daños civiles, mientras que puede resultar responsable de todos los daños ambientales, según el Derecho de fondo aplicable. El tribunal, en cambio, deberá considerar “todos los daños”, civiles y ambientales, para determinar la extensión de su competencia.

La importancia de esta aproximación, está justificada por la incorporación que hace el Reglamento 864/2007 (Roma II), en su artículo 7º, sobre el derecho de opción que se aplica en similar régimen para los daños medioambientales como para los “daños sufridos por personas o bienes como consecuencia de dicho daño”. Si puede o no existir relación entre el artículo 7º del Reglamento 864/2007 Roma II y el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, es un debate que pasa por los criterios de interpretación del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, para daños ambientales. En nuestro caso, un tribunal será competente si ha logrado resolver su vinculación con los hechos que se alegan, distinguiendo entre daños civiles y daños ambientales, no obstante el régimen de fondo que le corresponda aplicar.

Esta cuestión, fue abordada, sólo en parte por el TJUE, y guarda enorme complejidad para asuntos de contaminación internacional. En efecto, algunos autores como FACH GÓMEZ (<sup>556</sup>) vieron en el artículo 7 del Reglamento 864/2007 Roma II

---

(<sup>556</sup>) Fach Gómez, Katia, “La Prevención de catástrofes, la Unión Europea y el Derecho Internacional Privado”, Comunicación presentada en la *Jornada Técnica sobre Aspectos Jurídicos, Económicos, y Sociales de las catástrofes*, Foro Euromediterráneo para prevención de Desastres, disponible en [http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/Informacion\\_y\\_documentacion/catalogo/carpeta04/cd1987-2003/doc/b5/Juridica/3aCom\\_KatiaFach.pdf](http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/Informacion_y_documentacion/catalogo/carpeta04/cd1987-2003/doc/b5/Juridica/3aCom_KatiaFach.pdf) [Revisado 25 de marzo del 2010]. Fach Gómez, Katia, ob cit. Palao Moreno, Guillermo, “Hacia la unificación de las normas de conflicto en materia de

supuestos que pueden relacionarse con la jurisprudencia del TJUE en torno al artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en lo referente a los daños directos y a los daños indirectos. En su opinión, la Comisión que trabajó para el Reglamento 864/2007 Roma II habría acudido a criterios ya existentes para los puntos de conexión, que en su momento se causaron en el principio de responsabilidad objetiva y en el principio de prevención. Al respecto, el anteproyecto de propuesta del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, señalaba:

“The law applicable to a non-contractual obligation shall be the law of the country in which the damage arises or is likely to arise, irrespective of the country in which the event giving rise to the damage occurred and irrespective of the country or countries in which the indirect consequences of that event arise”.

No obstante la validez que reconocemos a la justificación señalada para el artículo 7 del Reglamento 864/2007 Roma II, esto es fundarse en los principios preventivo y de responsabilidad objetiva; consideramos que no es posible determinar el Derecho aplicable en base a los mismos puntos de conexión que se utilizan para determinar la jurisdicción competente. En efecto, el legislador del Reglamento Roma II pudo señalar en su día que el Derecho aplicable se determinará con independencia del lugar donde el evento se originó o donde el daño ocurrió, porque en este caso - al contrario de lo que ocurre cuando el juez debe determinar la extensión de su competencia - el juez no necesita establecer una relación entre ambos hechos como si es necesario para determinar la extensión de la competencia. Lo curioso es que en la mayoría de los Estados con tradición francesa o germana el Derecho aplicable exige que el demandante acredite igualmente todo el *iter criminis* del delito civil para alcanzar una indemnización. Postergar o anticipar el cumplimiento de este deber quedará en manos de la estrategia que elija el demandante.

---

obligaciones extracontractuales en Europa (una visión crítica del Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II)”, en AA. VV. Derecho Patrimonial Europeo, España, 2003, p. 293.



Finalmente, y como señalábamos anteriormente, el elemento personal, también guarda interés con nuestro tema, en la medida que la extensión del daño clasifica también a las partes. En efecto, las partes sean demandantes o demandados, serán civiles y ambientales, directas e indirectas, singulares o colectivas. No obstante, el punto de conexión para todas ellas no estará establecido en razón del elemento personal, sino por su relación con el elemento objetivo de la relación jurídica internacional: el daño.

Así, en las obligaciones extracontractuales internacionales la aplicación del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 señala que el tribunal tiene CJCI especial, no en razón de la vinculación con los sujetos que intervienen en el foro, sino en exclusiva consideración al lugar donde se produce o pudiere producirse el hecho dañoso. De todo lo anterior resulta que el elemento personal se encuentra “al servicio del hecho dañoso”, en los delitos y cuasidelitos civiles. De aquí que, la carga de la internacionalidad jurisdiccional será asignada al demandado, por ser presunto responsable del daño, y con el objetivo de que sea una de las partes, quien internalice los costes por la falta de cuidado, previsión o riesgo asumido.

Por otra parte, cuando el daño patrimonial se ha originado en un daño ambiental, se abrirán tantos foros como lugares hayan verificado un hecho dañoso. Sin embargo, esta aseveración que ha sido objeto de limitaciones, también ha incidido en los sujetos de la relación extracontractual, de modo tal que existe la necesidad de que el demandante sea calificado como víctima directa, y que demande la reparación e indemnización de daños directos. Por tanto, a falta de un concepto autónomo de “parte directa”, tenemos que la extensión de los daños y su vinculación con el foro competente, también calificará de directas o indirectas a las propias partes.

Comentario especial corresponde a la irrelevancia que presenta para el juez que está determinando su competencia, la circunstancia de que el modelo de responsabilidad que se sigue en el lugar del foro o el modelo de responsabilidad que corresponda según la ley aplicable, sea subjetivo (o basado en la culpa del autor del

daño), o sea objetivo (también denominado estricto o calificado por el riesgo). En ningún caso el juicio de CJCI pasa por los sujetos, sino que pasa exclusivamente por el lugar donde se produce o pudiere producirse el hecho dañoso. Por esta razón, la subjetividad o grado de voluntariedad en la acción del demandado, no juega ningún rol en la determinación del foro competente, aunque la acción deba ser analizada para determinar el grado de participación del demandado en el hecho generador del daño.

## 2.- Distinciones entre daños ambientales, daños ecológicos y daños civiles.

Como lo señala VINAIXA MIQUEL no existe un tratamiento uniforme que distinga conceptualmente entre daños ambientales, daños ecológicos y daños tradicionales (cuando los daños civiles están asociados a daños ambientales) <sup>(557)</sup>. Si bien tenemos antecedentes que desde el año 1991, el profesor PRIEUR, ya había establecido esta clasificación <sup>(558)</sup>, resulta que hasta el día de hoy la nomenclatura: “daños ambientales”, daños “ecológicos” y “daños tradicionales” sigue siendo utilizada indistintamente en la doctrina.

Algunos autores <sup>(559)</sup> se refieren a “daño ecológico”, para referirse a aquél tipo de daño al medio ambiente cuya titularidad es colectiva, entendiendo el medio

---

<sup>(557)</sup> Críticas a la pluralidad de acepciones y connotaciones en: Vinaixa Miquel, Mónica, *La responsabilidad civil por contaminación transfronteriza derivada de residuos*, Universidad de Santiago de Compostela, 2006, pp.33 - 66.

<sup>(558)</sup> Prieur, Michel, *Droit de l'environnement*, Paris, Dalloz, 1991, p. 729.

<sup>(559)</sup> Ruda González, Albert, *El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medioambiente*. Tesis Doctoral. Facultad de Dret. Universidad de Girona, 2005. Prieur, Michel, *Droit de l'environnement*, París, Dalloz, 1991, p. 729. Ángel Yagüez, Ricardo, “La responsabilidad por los desastres ecológicos”, I y II, *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, número 1601 y 1602, 1991. Díez-Picazo Giménez, “La responsabilidad civil derivada de los daños al medio ambiente”, *La Ley*, número 4125, 1996, pp.1-3. Sánchez - Fiera González, María, *La responsabilidad civil del empresario por deterioro del medio ambiente*, Barcelona, Boch, 1994, pp.189 y 133. Reh binder, “Evaluation et reparation du dommage écologique. Raport Général”, *Le dommage écologique en droit interne communautaire et comparé*, Actes du Colloque organisé les 21 et 22 mars 1991 à la Faculté de Droit d'Economie et Gestion de Nice Sophia-Antipolis, Economica, 1991, pp.109-121. Uliescu, Marilena, “La responsabilité pour les dommages écologiques”, *Revue internationale de droit comparé*, Vol. 45, número 2, 1993, pp. 387-394. Calais-Auloy, Jean, “Les délits à grande échelle en droit civil français”, *Revue internationale de droit comparé*, Vol 46, número 2, 1994, pp. 379-387. Martin, G.J.,

ambiente como *res nullius*. Otros autores <sup>(560)</sup> prefieren hablar de “daño ambiental” para referirse a aquél daño producido al medio ambiente pero que afecta la salud o el patrimonio de las personas físicas, en esta perspectiva el daño afecta bienes de titularidad privada. Este último grupo, parece confundir los daños civiles y los daños ambientales, pero prefiere tratarlos conjuntamente, sea por razones de sistematicidad, por razones de procedimiento, o por entender que esta es la forma de abordar la reparación integral del daño. Finalmente están aquellos <sup>(561)</sup> que hacen un tratamiento

---

“Réflexion sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage écologique pur”, *Droit et environnement*, PUAM 1995, p. 115 y ss. Viney, Geneviève, “Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français”, *JCP*, ed. G, I, 1996, p. 3900. Hermon, Carole, “La réparation du dommage écologique, les perspectives ouvertes par la directive du 21 avril 2004”, *Actualité juridique. Droit administratif*, N° 32, 2004, pp. 1792-1800. Pernas Romani, Ana, “Libro verde sobre reparación del daño ecológico”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, número 83, Madrid, 1993-1994, pp. 179-194.

<sup>(560)</sup> Cabanillas Sánchez, Antonio, “La responsabilidad por inmisiones y daños ambientales: el problema de la relación de causalidad”, *Revista de Derecho Ambiental*, número 15, 1995, pp.31-49. Bianchi, Andrea, “The harmonization of Law son Liability for environmental damage in Europe: an italian perspective”, *Journal of environmental law*, Vol. 6, número 1, 1994, pp.21-42. Bonet Rull, Laia, “¿Quién contamina pagará? Algunas reflexiones acerca de la próxima adopción de un régimen de responsabilidad ambiental”, *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, Vol. 5 número 20, 2003, pp. 21-30. Boyle, Alan, “State responsibility and International liability for injurious consequences of acts not prohibited by international: a necessary distinction?”, *International and Comparative Law Quartely*, Vol. 39, Part. 1, 1990, pp. 1-26. Cane, Peter, “Indemnización por daños medioambientales”, *Anuario de Derecho Civil*, número 3, 2000, pp. 825-848. Orrego Vicuña, Francisco, “La Responsabilidad por daño al medio ambiente en Derecho internacional”, *Cursos euromediterráneos*, Bancaja de Derecho Internacional, Vol, 1, 1997, pp. 279-314

<sup>(561)</sup> Auger Liñán, Clemente, “Problemática de la Responsabilidad Civil en materia ambiental”, *Poder Judicial*, número especial IV, 1988, pp-114. Ballarino, Tito, “Azioni di Diritto privato per il resarcimento di danni da inquinamento transfrontaliero”, *Revista de Diritto Internazionale*, 1990, pp849-873. Bernasconi, Christopher, “La responsabilité civile pour le dommages resultant d’une atteinte transfrontière à l’environnement: un cas pour la Conférence de La Haye?”, *Documento Preliminar de la Conferencia de la haya de Derecho Internacional Privado*, número 8, 2000. Betlem, Guerit, ob cit .Crespo Hernández, Ana, La responsabilidad civil derivada de la contaminación transfronteriza ante la jurisdicción estatal, *Eurolex*, Madrid, 1999. Díez-Picazo Giménez, Gema, “La responsabilidad derivada de los daños al medioambiente (una duda acerca de su existencia)”, *La Ley*, número 4125, 1996, pp. 1-3. Fach Gómez, Katia, *La contaminación transfronteriza en el derecho internacional privado*, Boch, Barcelona, 2002. Vinaixa Miquel, Mónica, ob cit, pp.31-37. Huet, Jérôme, “Le développement de la responsabilité civile en Droit de l’environnement en France”, *Journées de la Societé de législation comparé*, *Revue de Droit international en Droit comparé*, 1993, pp.225 y ss. Larroumet, Christian, “La responsabilité civile en matière d’environnement. Le Project de Convention du Conseil de l’Europe et le libre vert de la Comission des Communautés européennes”, *Recueil Dalloz Sirey*, 1994, 101-107, Larroumet et Fabry,

diferenciado entre daños civiles, por una parte, y daños ambientales y ecológicos, por otra.

Pertenece a este último grupo, básicamente porque seguimos la línea establecida en cuerpos normativos comunitarios europeos. En efecto, la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales (<sup>562</sup>), se refiere indistintamente a daños, sin aludir específicamente a “daños ecológicos puros”, pues en la noción de daño incluye los hábitats de todas las especies y entiende que el ser humano también es tributario de dichos hábitats. El objetivo de la Directiva 2004/35/CE es prevenir y obtener la reparación del daño ambiental, sin consideración de los daños civiles asociados. En razón de lo anterior, ha hecho la distinción entre “daños ambientales” y “daños tradicionales” (<sup>563</sup>) señalando.

“La presente Directiva tiene por objeto prevenir y reparar el daño medioambiental y no afecta a los derechos de compensación por *daños tradicionales* otorgados con arreglo a cualquiera de los acuerdos internacionales correspondientes que regulan la responsabilidad civil”.

Esta última nomenclatura (daños tradicionales) ha sido utilizada como sinónimo de daño civil, excluyéndose del ámbito material de la competencia de la Directiva 2004/35/CE, a los daños civiles asociados a un daño ambiental. Finalmente, la Directiva no establece reglas adicionales en materia de conflicto de normas ni en materia de conflicto de jurisdicción. En este aspecto rige plenamente el Reglamento

---

“Le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant de l’exercice d’activités dangereuses pour l’environnement”, *Gazette du Palais*, 1994, pp. 554-557. Aristegui, Juan Pablo, “Competencia judicial y ley aplicable en materia de responsabilidad por daños al ambiente transfronterizos: el régimen de la unión europea”, *Revista Chilena de Derecho Privado*, número 16, 2001, pp.45-74.

(<sup>562</sup>) La Directiva 2004/35/CE [adopción codecisión COD/2002/0021], en vigor desde el 30.4.2004. Plazo de trasposición para los Estados miembros 30.4.2007. DO L 143 de 30.4.2004. Modificada por Directiva 2006/21/CE que entró en vigor el 1.5.2006. Plazo de trasposición 1.5.2008. DO L 102 de 11.4.2006.

(<sup>563</sup>) Considerando 11. La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales.

(UE) No. 1215/2012. No obstante lo anterior, la Directiva 2004/35/CE introduce criterios interpretativos que nos permiten diferenciar entre las distintas categorías de daños determinadores de la extensión de la CJCI.

Por otra parte, y consistente con la diferencia entre daños ambientales y daños civiles, establecidos por la Directiva 2004/35/CE, tenemos la Directriz 3. 2, del Proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (<sup>564</sup>). Este proyecto establece definiciones de daños, señalando:

“2. Por “daños” se entiende:

- a) Muerte o lesiones corporales derivadas de daños ambientales;*
- b) Daños o perjuicios materiales derivados de daños ambientales;*
- c) Pérdida económica pura;*
- d) Costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse;*
- e) Costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas;*
- f) Daño ambiental.”*

El trato diferenciado viene a aportar sistematización dogmática al permitirnos diferenciar el hecho generador de los resultados dañosos. En efecto, tanto daño ambiental como daño civil comparten un mismo hecho generador, pero esta circunstancia no los convierte en la misma categoría de daños. Por otra parte, consideramos que la diferenciación por el objeto (indemnización), no es una forma apropiada de abordar el problema, porque aún en los casos de daño ecológico puro, la reparación ambiental se solucionará sólo en contados casos mediante obligaciones de

---

(<sup>564</sup>) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Informe de la reunión intergubernamental encargada del examen y ulterior desarrollo del proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009, UNEP/Env.Law/IGM.Lia/1/3.

hacer, siendo la regla general la búsqueda de una indemnización que permite realizar las acciones de recuperación y de reparación ambiental necesarias.

Por otra parte, abordar ambas clases de daño en forma conjunta ha generado problemas debidos a la confusión entre ambas categorías; al punto de incidir tanto en la determinación del vínculo (<sup>565</sup>) como en la determinación de la ley aplicable (<sup>566</sup>). En efecto, sirva a modo de ejemplo en el tratamiento conjunto de ambas categorías en el artículo 7º del Reglamento Roma II, el cual señala:

“La ley aplicable a la obligación extracontractual que se derive de un *daño medioambiental o de un daño sufrido por personas o bienes* como consecuencia de dicho daño, será la ley determinada en virtud del artículo 4º, apartado 1, a menos que la persona que reclama el resarcimiento de los daños elija basar sus pretensiones en la ley del país en el cual se produjo el hecho generador del daño”.

Con similar resultado en el Derecho comparado (<sup>567</sup>) se ha favorecido el trato conjunto de ambas categorías de daño, dando como resultado la necesidad de abordar el problema sobre la extensión de los daños civiles como derivados o no de los daños ambientales. En el primer caso, también surge la necesidad de determinar cuál es la relación entre ambas clases de daño (<sup>568</sup>).

A objeto de no caer en las confusiones descritas, preferimos hablar de daños civiles “asociados” a un daño ambiental y no de daños “derivados”. La asociación de los conceptos referidos explica el uso semántico, pero también la denotación y connotación con la cual son usados en el presente trabajo. Asimismo abordamos la realidad jurídica del daño civil y dejamos de lado la compleja realidad

---

(<sup>565</sup>) Escueta redacción del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, y tratamiento paralelo en el desarrollo jurisprudencial en *Bier vs. Minas de Potasio de Alsacia*.

(<sup>566</sup>) Resultados evidentes en Art. 7 del Reglamento 867 /2007, Roma II.

(<sup>567</sup>) Anteproyecto de Convención Interamericana sobre Ley aplicable y jurisdicción internacional competente en casos de responsabilidad civil por contaminación transfronteriza. Anexo a comunicación enviada la OEA por el Ministro de Relaciones Exteriores Uruguayas, 2 de octubre del 2001.

(<sup>568</sup>) Ejemplo de una propuesta de responsabilidad objetiva motivada por la necesidad de establecer presunciones entre el daño ambiental y el daño civil en: Narváez Álvarez, María José, *La responsabilidad civil extracontractual por daños ambientales y las instituciones del Código Civil ecuatoriano*. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar, 2008.

fenomenológica del daño ambiental (y del daño ecológico puro), considerando que entre unos y otros sólo existe un elemento común: el hecho generador. Nuestro tema será la extensión del daño civil y la distinción entre daños directos e indirectos para la determinación de la CJCI.

### **3.- Del daño civil transnacional.**

La noción de daño transnacional tampoco es pacífica. Normalmente usada como sinónimo de “daño internacional” (<sup>569</sup>), nos encontramos con que pocos autores atribuyen características particulares al daño transnacional (<sup>570</sup>). Por nuestra parte, adherimos a este último grupo. Entenderemos por daño civil transnacional: aquella clase de daño al patrimonio de las personas cuyos elementos internacionales posicionan el principio de acción del hecho generador en un Estado y las consecuencias en otro, sean estos Estados fronterizos o no.

Por otra parte, la simplificación jurídica que suele hacerse del fenómeno transnacional, no guarda relación con la realidad (<sup>571</sup>). Más aún en materia ambiental, las jurisdicciones se ven compelidas por la comunidad internacional a tener una vocación internacional máxime si existe detrás una empresa transnacional. Así ha sucedido, por ejemplo, al momento de abordar los casos de contaminación marítima

---

(<sup>569</sup>) Siqueiros, José Luis, “Ley aplicable y Jurisdicción competente”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. II, 2002, p. 187. Vinaixa Miquel, Mónica, *ob cit*, p.76.

(<sup>570</sup>) Ballarino, Tito y Ubertazzi, Benedetta, “On Avello and Other Judgments: A New Point of Departure in the Conflict of Laws?”, *Yearbook of Private International Law*, Vol. VI, 2004, pp.85-129. Ballarino, Tito, *ob cit*, pp.849-873. Moreno Molina, Ángel Manuel, *Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma legal*, Fundación Alternativas, 2005, pp.10-11.

(<sup>571</sup>) Simplificación que no condice con la realidad, ver las 5 mayores Transnacionales con la misma capacidad económica comparada con el P.I.B de 5 países, son: 1.- Wall-Mart Stores (256,3), 2.- Bélgica (245,4), 3.- Suecia (240,0), 4.- BP (232,6), 5.- Exxon Mobil (222,9), 6.- Austria (204,1), 7.- Noruega (190,5), 8.- Polonia (189,0), 9.- Arabia Saudita (188,5), 10.- General Motors (185,5). (Fuentes: Revista Forbes, Banco mundial, Atlasco 2004, Business Week y el Informe sobre desarrollo humano 2004 del PNUD).

por derrame de hidrocarburos en los casos: *Prestige* <sup>(572)</sup>, *Erika* <sup>(573)</sup>, *Amoco Cádiz* <sup>(574)</sup>, *Mar Egeo* <sup>(575)</sup> o *Golfo de México* <sup>(576)</sup>.

En efecto, la realidad económica nos muestra empresas, corporaciones, holdings, conglomerados, trust, cártel, etc., que reclaman hoy más que antes en el Derecho Internacional Privado, la intervención decisiva del Derecho de Empresa.

Así, nos encontramos con que una sola empresa puede haber dividido su negocio en tantas particiones como desee, controlando empresas menores que desarrollan órganos de administración propios. Con esto se logra un control más especializado, pero corporativamente sigue siendo la sociedad matriz la que decide el conjunto de políticas de producción, comercialización, tributación e inversión. Por esta razón, debe considerarse que en estos casos la creación de nuevas empresas (*offshoring*) obedece a la necesidad de limitar la responsabilidad según el riesgo que envuelve la operación, proteger la inversión, beneficiarse de los distintos regímenes tributarios o incluso establecer una estrategia ante fluctuaciones en la bolsa. En efecto, tanto el país de origen como la estrategia de inversión extranjera directa y la transferencia tecnológica asociada determinan buena parte del desarrollo de los países huéspedes, llegando incluso a fortalecer ciertas áreas de la industria local y a marginar o hacer desaparecer otras <sup>(577)</sup>.

En el plano jurídico, encontramos normas y estándares globales, políticas corporativas y sistemas de gestión que viabilizan el funcionamiento de la empresa

---

<sup>(572)</sup> Sentencia del Tribunal federal del Distrito sur de Nueva York, asunto *Prestige* 2/1/2008.

<sup>(573)</sup> Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, asunto *Erika* 16/1/2008.

<sup>(574)</sup> Sentencia del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois asunto *Amoco Cadiz* 11/01/1988.

<sup>(575)</sup> Transacción en el Real Decreto-Ley 6/2002, asunto *Mar Egeo* víctimas contra Estado español y otros de 4 de octubre del 2002.

<sup>(576)</sup> Aún en proceso ante the New Orleans federal Court, I.S. District Judge Carl Barbier.

<sup>(577)</sup> Mortimore, Michael, Las transnacionales y la industria en los países en desarrollo, *Revista Cepal*, número 51, LC/G.1792-P/E, 1993, pp.15-36. Bielschowsky, Ricardo y Stumpo, Giovanni, Empresas transnacionales y cambios estructurales en la industria de Argentina, Brasil, Chile y México, *Revista Cepal*, LC/G.1858-P/E, número 55, 1995, pp.139-164.



transnacional. Mientras tanto, el Derecho de la responsabilidad extracontractual se ha mantenido deficitario de una noción de daño transnacional, de modo tal que el tema de la responsabilidad de las empresas transnacionales ha sido preferentemente abordado desde la perspectiva de la imputabilidad de los gestores. Consideramos que uno de los aportes de este trabajo consiste precisamente en abordar el tema transnacional desde la perspectiva del daño y su dinámica.

En efecto, en el Derecho Internacional existe un punto de quiebre en el tratamiento del fenómeno internacional desde el año 2003. En dicho año, se aprobaron por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, un conjunto de Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos (<sup>578</sup>). Entre las responsabilidades que se incluyeron se encontraban daños a derechos ambientales. La parte considerativa del documento aludió a la capacidad de las empresas transnacionales al señalar:

*“Observando que las empresas transnacionales y otras empresas comerciales tienen capacidad para promover el bienestar y el desarrollo económicos, el perfeccionamiento tecnológico y la riqueza, así como causar perjuicio a los derechos humanos y a la vida de las personas con sus prácticas y actividades comerciales básicas, incluidas las prácticas de empleo, sus políticas ambientales, sus relaciones con los proveedores y los consumidores, sus interacciones con los gobiernos y demás actividades.”*

Por su parte, el literal G. párrafo 14 del documento sobre obligaciones en materia de protección del medio ambiente, estableció:

*“14. Las empresas transnacionales y otras empresas comerciales realizarán sus actividades de conformidad con las leyes, los reglamentos, las prácticas administrativas y las políticas nacionales relativos a la conservación del medio ambiente de los países en que realicen sus actividades, así como de conformidad con los acuerdos, principios, objetivos, responsabilidades y normas internacionales pertinentes relacionados con el medio ambiente y los derechos humanos, la salud pública y la seguridad, la bioética y el principio de*

---

(<sup>578</sup>) Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, E/CN.4/Sub.2/2003/L.8 del 7 de agosto del 2003, sobre Responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos.

*precaución y, en general, realizarán sus actividades de forma que contribuyan al logro del objetivo más amplio del desarrollo sostenible.”*

Estas normas exponen como los eventuales efectos contaminantes de las actividades de empresas transnacionales afectan a los derechos humanos, demostrando así que existe una tendencia en el fenómeno transnacional en materia medioambiental que se encuentra en una fase definitoria de modelos de responsabilidad internacional <sup>(579)</sup>.

Sobre este mismo punto, encontramos el Proyecto de Directrices para la elaboración de Legislación nacional sobre Responsabilidad, Medidas de respuesta e Indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente. Este proyecto nace en el seno del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en reunión intergubernamental en Nairobi el año 2009 <sup>(580)</sup>. Estableció la Directriz 13 sobre demandas que incluyen componentes extranjeros (Derecho aplicable), y al igual que el camino abierto por el Convenio de Lugano <sup>(581)</sup> y seguido por la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales <sup>(582)</sup>, incorpora disposiciones

---

<sup>(579)</sup> Otros acercamientos al fenómeno transnacional en: Fach Gómez, Katia, “La protección del medio ambiente y el comercio internacional: ¿Hay que “*pensar en verde*” el arbitraje de inversiones?”, en González García, Julio V. (Dir.), *Comercio Exterior*, Iustel, VIII, 2009.

<sup>(580)</sup> PNUMA, Reunión intergubernamental encargada del examen y ulterior desarrollo del proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (UNEP/Env. Law/IGM. Lia/2/2. Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009).

<sup>(581)</sup> Convenio sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (Convenio de Lugano). Anexo I (sustancias peligrosas) y Anexo II (instalaciones o sitios de incineración, tratamiento, manipulación o reciclado de desechos). Abierto a la firma en Lugano el 21 de junio de 1993, pero suscrito por pocos países y considerado por el Libro Blanco de Responsabilidad Ambiental (Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2000) 66 final. Bruselas, 9 de febrero del 2000) una alternativa poco eficiente en comparación con la Directiva 2004/35/CE.

<sup>(582)</sup> Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, adoptada el 21 de abril de 2004. Ver anexo III.

relativas a la producción de daños ambientales en un contexto “transnacional” (<sup>583</sup>), incluyendo supuestos de actividades peligrosas.

Como se advierte en todos estos cuerpos normativos se ha distinguido entre daños civiles (“daños tradicionales”) por un lado y daños ambientales, por otro, no obstante lo anterior, se ha seguido un tratamiento conjunto (<sup>584</sup>).

Por su parte, los daños civiles a los que nos referimos, afectan exclusivamente intereses patrimoniales entre privados. A modo enunciativo tenemos: a) daños a la salud e integridad física, incluyendo la salud psíquica no sólo por eventuales trastornos mentales asociados a contaminantes, sino también por ocurrencia del denominado “daño moral ambiental” (<sup>585</sup>), b) daños emergentes en actividades que se sirven directamente del medio ambiente (pérdida de cosechas, pérdida de animales, pérdida del valor paisajístico, pérdida del valor patrimonial) y c) lucro cesante de las actividades anteriores.

La existencia de “elementos internacionales” en la comisión de un daño ambiental es condición suficiente para elevar el daño a la dimensión internacional, así lo ha señalado la doctrina del TJUE (<sup>586</sup>).

---

(<sup>583</sup>) Moreno Molina, Ángel Manuel, *Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma legal*, Fundación Alternativas, 2005, p.13.

(<sup>584</sup>) Trato conjunto aparece de manifiesto en la asociación de las Directrices número 3 (Conceptos) y número 5 (Responsabilidad) del Proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (UNEP/Env. Law/IGM. Lia/2/2. Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009).

(<sup>585</sup>) Una referencia interesante sobre la integridad de la reparación en relación con el daño moral ambiental en: Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994 número 1994/496, caso *López Ostra contra Reino de España*, fijó una indemnización de 4 millones de pesetas, a favor de la demandante por “daño moral innegable”, soportado tanto por “*molestias provocadas por las emanaciones de gas, los ruidos y los olores procedente de la depuradora*” como “*la angustia y la ansiedad propias de ver cómo la situación se prolongaba en el tiempo y la salud de su hija se resentía*” (parágrafo 65).

(<sup>586</sup>) Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger, presentadas el 14 de diciembre de 2004, Asunto C-281/02 *Andrew Owusu*. Considerando 75.

En efecto, para hablar de responsabilidad internacional, basta que la relación extracontractual tenga algún elemento internacional. Así se entendió desde el Informe Jenard sobre el Convenio de Bruselas de 1968 <sup>(587)</sup>, que señaló <sup>(588)</sup>:

“[El Convenio de Bruselas] sólo modifica las normas de competencia vigentes en cada uno de los Estados contratantes si se revela un elemento de extranjería. *Esta noción no está definida, por poder depender el carácter internacional de la relación jurídica de circunstancias que son propias del litigio presentado ante el tribunal.*

Si se trata de un proceso presentado ante un tribunal de un Estado miembro de la Unión europea y que se refiere únicamente a personas domiciliadas en dicho Estado, en principio, el Convenio, como el actual Reglamento en vigor, no deberían desempeñar papel alguno; el artículo 2º sólo hace un reenvío a las reglas de competencia vigentes en dicho Estado. No obstante, podría ocurrir que un litigio de este tipo presente un aspecto internacional. Ello ocurriría, por ejemplo, en el caso de que el demandado fuera extranjero, hipótesis en la cual se podría aplicar el principio de asimilación previsto en el párrafo 2 del artículo 2º, o si el litigio se refiriera a una materia para la cual existe una competencia exclusiva en otro Estado (como ocurre en materia de consumidores en el artículo 16) o también si hubiera litispendencia o conexidad con una demanda presentada ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado (artículos 21 a 23)”.

Por tanto, lo que califica de internacional a un asunto dependerá de las características del caso en concreto. En el mismo sentido el precepto del enunciado del artículo 7 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 señala:

“Una persona *domiciliada en un Estado* miembro *podrá* ser demandada *en otro Estado* miembro [...]”.

Es decir, basta que se hayan comprometido intereses sitos en dos o más Estados, aunque ambas partes tengan domicilio en el mismo Estado. Así por ejemplo, si ambas partes en un conflicto están domiciliadas en el mismo Estado, pero los efectos del delito o cuasidelito civil que las vincula se extienden a otro Estado parte, tenemos que, por aplicación del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, resultará que el demandante tendrá la opción de demandar tanto en el lugar de su

---

<sup>(587)</sup> Informe Jenard sobre el Convenio de Bruselas, DO 1979, C 59, p. 1.

<sup>(588)</sup> Lo puesto en cursivas es nuestro.

domicilio (que coincide con el domicilio del demandado), como también podrá demandar ante los tribunales del Estado donde se manifestaron los daños.

Incluso más, la jurisprudencia del TJUE (<sup>589</sup>) ha señalado que por aplicación del artículo 2º del Reglamento 44/2001 Bruselas I (actual artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012): “cuando demandante y demandado tienen su domicilio en el mismo Estado parte, y el litigio entre ellos, presenta *determinados puntos de conexión* con un tercer Estado, que no es otro Estado contratante”, entonces, el artículo 2º del Reglamento 44/2001 Bruselas I no debe entenderse restringidamente de modo que sólo se aplique a relaciones intracomunitarias.

Por otra parte, el TJUE señaló que la aplicación del artículo 2º del Convenio de Bruselas de 1968, se extendía a los casos en los cuales el demandante tenía o no su domicilio en un Estado contratante coincidente con el domicilio del demandado (<sup>590</sup>).

Asimismo ha señalado que no correspondería hacer diferencias entre las relaciones internas y las relaciones internacionales (refiriéndose a las relaciones comunitarias y a las relaciones extracomunitarias). Incluso más, extendió el mismo criterio a las reglas de competencia exclusiva formuladas en el artículo 16 del Convenio de Bruselas de 1968 (<sup>591</sup>).

De todo lo anterior se deduce un amplio espectro de posibilidades susceptible de ser calificadas como internacionales, para efectos de aplicar el Reglamento (UE) No. 1215/2012, por el hecho de contar con algún “elemento internacional”. Así,

---

(<sup>589</sup>) STJCE C-281/02 asunto *Andrew Owusu*. Asimismo Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger, presentadas el 14 de diciembre de 2004, en el mismo asunto, considerando 75.

(<sup>590</sup>) Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 14 de marzo de 2006, Asunto C-103/05, *Reisch Montage AG*. Conclusiones Del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 8 de noviembre de 2006 Asunto C-292/05, *E. Lechouritou y otros*.

(<sup>591</sup>) Considerar que la conclusiones doctrinarias del TJUE derivan de la tesis de Droz, Georges, “Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968), Librairie Dalloz, 1972, pp. 23 a 25.

considerando que las relaciones extracontractuales a las que nos referimos involucran daños civiles asociados a daños ambientales, entonces las posibilidades de internacionalización se multiplican exponencialmente.

Por su parte, los daños civiles a los que nos referimos son daños transfronterizos o daños transnacionales dependiendo de la disociación geográfica entre el hecho generador y el resultado dañoso.

En este sentido el daño puede estar plurilocalizado <sup>(592)</sup>. En efecto, el daño civil no sólo coincide con el lugar del daño ambiental, el daño civil puede encontrarse a distancia. En este último caso no nos referimos a la ubicación del patrimonio del afectado, sino al lugar donde se celebraron compromisos o ventas de servicios cuyo cumplimiento tenía en consideración las condiciones naturales del lugar donde se produjo el daño ambiental. Tal es el caso, de la venta de servicios turísticos, venta de servicios educativos, científicos o de investigación, venta de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales y marítimos), como los más evidentes. Todos los cuales, pueden haber sido contratados desde países no necesariamente fronterizos, cuyo perjuicio no puede imputarse a responsabilidad contractual y que está asociado directamente al hecho generador del daño ambiental.

---

<sup>(592)</sup> Sobre daños plurilocalizados ver: a) necesidad de tratamiento uniforme previa revisión del Reglamento Roma II, para daños plurilocalizados que constituyen daños a la intimidad o a los derechos de la personalidad y primacía de intereses en De Miguel Asensio, Pedro, *ob cit*, pp.724-726; b) previsibilidad de la ley aplicable y conexión más adecuada en materia ambiental en Crespo Hernández, Ana, “Daños al Medio Ambiente y Regla de la ubicuidad en el art. 8 del futuro Reglamento Roma II”, *Revista para el Análisis del Derecho*, número 366, 2006, p. 16-17; y c) sobre la *Lex Loci Protectionis* pensada para daños en países concretos y no diseñada para “ilícitos de masas” plurilocalizados en varios países en Fernández Rozas, José Carlos y Sánchez Lorenzo, Sixto, *Derecho internacional privado*, 2001, p. 565. Virgós Soriano, Miguel, *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1992, pp. 134-136. Carrascosa González, Javier, “Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional Privado español”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, número 19, 2001, pp.38-39.

#### **4.- Diferencias entre daño civil y daño ambiental.**

Sin perjuicio de los fundamentos que el principio *favor laesi* le otorga al demandante civil de daños directos para presentar su demanda a su arbitrio en el lugar donde se producen estos daños y especialmente en el lugar de su propio domicilio; es que nos preguntamos, si cualquier daño civil - por el sólo hecho de estar asociado a un daño ecológico - puede abrir un foro especial de competencia.

Apoyados en la opinión del Abogado General F.G. JACOBS <sup>(593)</sup>, somos de la idea que no, que sólo el “daño civil directo” puede abrir un foro de competencia en el domicilio del demandante. En prueba de ello, tenemos las notables diferencias de extensión que arrojan los daños civiles en relación con los daños ambientales, cuando son abordados separadamente. A continuación, abordaremos estos temas teniendo en cuenta la necesidad de criterios para determinar la extensión del daño civil por el cual resulta competente un determinado tribunal.

##### **4. 1.- Daño significativo. Matices entre daños ambientales y daños civiles.**

Por regla general, los problemas de daño civil significativo están relacionados con la determinación del valor de la cosa que se solicita reparar o con el monto de la indemnización. En este sentido un tribunal se verá obligado a justificar muy bien la declinación de su competencia, si cientos de personas se ven perjudicadas extracontractualmente, por un hecho ocurrido en otro Estado, pero cuyos efectos se sienten en la jurisdicción del primero vgr., pérdida de una importante cuota de mercado, imposibilidad de cumplimiento de gran cantidad de obligaciones contractuales, etc., motivadas todas por la ocurrencia de una catástrofe ambiental ocurrida en otro Estado.

---

<sup>(593)</sup> Sobre la extensión del concepto daño ver razonamiento en Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs presentadas el 18 de septiembre de 2003, Asunto C-18/02, Danmarks Rederiforening, en nombre de *DFDS Torline A/S*. Apartados 38 – 40.

En materia de daños ambientales lo significativo se eleva a “condición” para el nacimiento de la obligación extracontractual (<sup>594</sup>) ¿debe exigirse la misma “condición” para abrir nuevo foro civil?

El artículo 2º Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, ha definido daño medioambiental como:

“a) los daños a las especies y hábitats naturales protegidos, es decir, cualquier daño que produzca *efectos adversos significativos* en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de dichos hábitats o especies”.

Asimismo, ha señalado que “el carácter significativo” de dichos efectos se evaluará en relación con el estado básico, y conforme los criterios del Anexo I (<sup>595</sup>).

Más explicativo es el Proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (<sup>596</sup>), que señala que el daño ambiental envuelve un efecto adverso en el medio ambiente “mensurable” y “significativo”, entendiendo por significativo:

“b) *Significativo, lo cual se determinará sobre la base de factores como:*

*i) El cambio a largo plazo o permanente, que se ha de entender como el cambio que no podría repararse mediante la recuperación natural en un plazo razonable;*

---

(<sup>594</sup>) Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, p.227.

(<sup>595</sup>) Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004 sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, idea que se reproduce en: art. 2.1 incisos b) y c), 2.15, y Anexo 1. En el mismo sentido, encontramos que el daño debe ser significativo en: Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, art. 12. Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa, (Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981), art. 6. Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, art. 5.

(<sup>596</sup>) Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Informe de la reunión intergubernamental encargada del examen y ulterior desarrollo del proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009, UNEP/Env.Law/IGM.Lia/1/3.



- ii) La magnitud de los cambios cualitativos o cuantitativos que afecten adversa o negativamente el medio ambiente;*
- iii) La disminución o pérdida de la capacidad del medio ambiente para proporcionar bienes y servicios, ya sea con carácter permanente o provisional;*
- iv) La magnitud de cualquier efecto o repercusión, o ambos, adverso o negativo en la salud humana;*
- v) El valor estético, científico y recreativo de los parques, zonas silvestres y otras tierras.”*

Por tanto, siendo una condición para el nacimiento de la obligación extracontractual que el daño ambiental sea significativo; entonces el juez podría declararse incompetente sobre un delito o cuasidelito civil que no existe. Sin perjuicio de lo anterior, podría llegar a la misma conclusión defiriendo el problema hasta la sentencia definitiva que se pronuncia sobre el fondo del asunto. En este último caso, los daños no significativos podrían ser conocidos en forma acumulada con los daños mayores y significativos, por razones de pertinencia, y economía procesal.

Por otro lado, un mismo hecho dañoso puede representar distinta valoración significativa en materia civil y en materia ambiental. En materia ambiental, el TJUE ha señalado que el artículo 5 de la Directiva 2004/35, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, busca (<sup>597</sup>):

“evitar daños previsibles a especies protegidas cuando produzcan efectos adversos significativos en la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de dichas especies”.

Esta misma doctrina jurisprudencial ha señalado que lo “significativo”, dependerá de las circunstancias, y así, tenemos que, en algunos casos será “significativa” la afectación a un gran número de ejemplares de una especie (por aplicación de la Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales), mientras que en otros casos, serán significativos efectos cuantitativamente menores pero si afectan a

---

(<sup>597</sup>) STJCE de fecha 18 de mayo del 2006, asunto C-221/04, *Comisión contra Reino de España*.

ejemplares singulares (por aplicación de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres).

A propósito del daño significativo, conviene preguntarse también si existen “molestias” que la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual haya calificado como de “excesivas”, por lo “anormal” del daño, y si existen daños menos relevantes, normales o que obedecen al tráfico normal de relaciones internacionales (<sup>598</sup>).

Como vemos, la significación del daño no es baladí, y dependerá si hablamos de daños civiles o de daños ambientales, pudiendo variar, incluso, la atribución de competencia.

Por ejemplo, las relaciones de vecindad entre los Estados imponen servidumbres que dependiendo del lugar y condiciones pueden afectar un determinado ecosistema del Estado sirviente; las actividades en un Estado pueden afectar la migraciones de ciertas especies en Estados vecinos; la calidad de los ríos internacionales puede verse alterada por actividades en un lado de la frontera; los mismos ríos internacionales pueden verse objeto de crecidas o disminuciones que obedezcan en parte a la intervención humana y en parte a fenómenos naturales periódicos; la desertificación de algunas zonas limítrofes de un país puede deberse al mal manejo del recurso hídrico o agotamiento de napas subterráneas en el país vecino, etc. En los casos anteriores, algunos de los problemas expuestos pueden no tener suficiente significación para constituir un daño civil en el momento en el que se requiere la intervención judicial. Todo lo cual, afecta al daño civil asociado, por la

---

(<sup>598</sup>) Von Bar, Christian, *Gemeineuropäisches Deliktsrecht*, T.II, Beck, München, 1996, p. 5 citado por: Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, p.227. Díez-Picazo, Luis, *Derecho de Daños*, Civitas, Madrid, 1999, p. 307. Viney. Geneviève y Jourdain, Patrice, “Les conditions de la responsabilité”, en Jacques Ghestin, *Traité de Droit Civil*, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 2da. Ed., París, 1998, p. 1063. Le Tourneau, Phillippe y Cadet, Lœic, *Droit de la Responsabilité et des Contrats*, Dalloz Action, París, 2002, p. 1295. Domínguez Águila, Ramón, “Consideraciones en torno a la noción en la responsabilidad. Una visión comparatista”, *Revista de Derecho de la Universidad de Concepción*, 1990, p. 128.

disminución progresiva de actividades económicamente dependientes directas del recurso natural en proceso de agotamiento.

Si bien, muchas de estas circunstancias se analizan durante el curso del juicio y se ponderan según el Derecho aplicable al fondo del asunto, existen problemas que se asocian a las medidas cautelares y a las medidas preventivas o de protección, las que se analizan en sede prejudicial. No ahondaremos sobre este tema, sino para ilustrar que el daño ambiental, por naturaleza acumulativo, tendrá mayor gravedad según la evidencia del paso del tiempo. Por tanto, la gravedad del daño ambiental tendrá una ponderación cronológicamente distinta al daño civil. Muchos de los efectos civiles del hecho dañoso se caracterizan por ser inmediatos, y a diferencia de los daños ambientales que se explicitan y manifiestan más claramente con el tiempo, los daños civiles sufren el efecto contrario. El tiempo conspira contra la prueba del daño civil y puede desvirtuar su gravedad <sup>(599)</sup>.

---

<sup>(599)</sup> Un ejemplo del reconocimiento evolutivo de las ciencias ambientales y de la función preventiva de la responsabilidad civil “infrautilizada” en: STS 3625/2007. Sentencia del Tribunal Supremo español. número de Recurso: 2300/2000. número de Resolución: 589/2007. Procedimiento: casación. Ha señalado: “Especialistas de la doctrina científica han destacado cómo ya las sentencias del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1866 y 12 de mayo de 1891 rechazaron, en el ámbito del Derecho civil, el principio o teoría de la denominada “pre-ocupación”, en virtud de la cual se negaba la indemnización por actividad contaminante a quien se estableciera en el lugar después de haberse iniciado tal actividad. Aunque en el siglo XIX no se hubiera acuñado todavía ese término, lo cierto es que la sentencia de 1866 rechazó la aplicabilidad al caso de la Ley 22, título 8, partida 5 , a favor de una compañía minera demandada por humos y vertidos perjudiciales para la finca y ganado del vecino, razonando que la adquisición de la dehesa por el perjudicado después de haberse iniciado parte de la actividad minera no suponía consentimiento de los perjuicios ni renuncia a reclamar por ellos; y la sentencia de 1891 negó que constituyera enriquecimiento injusto la pretensión indemnizatoria de quien había construido cerca de una escombrera perteneciente a una compañía de ferrocarriles, la cual acabó derrumbándose y causando daños a la construcción del demandante. Y como quiera que en el siglo XX fueron frecuentes los pronunciamientos del orden jurisdiccional civil que satisfacían las pretensiones de quienes se consideraban perjudicados por actividades contaminantes, *existe hoy una importante corriente en la doctrina científica que propugna una potenciación de la vía civil como especialmente idónea para la tutela de los intereses medioambientales, a partir de la idea de que hasta ahora está infrautilizada sobre todo en la vertiente preventiva.*” (lo puesto en cursiva es nuestro)

Por las razones señaladas anteriormente, el juez llamado a pronunciarse sobre su competencia, por ejemplo, para medidas cautelares o de protección, deberá considerar la gravedad potencial del daño civil. Como vimos la gravedad del daño ambiental difiere de la gravedad del daño civil, por tanto, proponemos que la gravedad o significancia del daño civil esté ligada a la afectación de un bien, de un interés o de un derecho, más que analizar aspectos cuantitativos relacionados con la ocurrencia de un daño ecológico.

#### 4. 2.- Certidumbre del daño.

La jurisprudencia del TJUE en los casos a) *Somafer vs. Saar-Feerngas*, b) *Jakob Handte vs. Mecano Chimoques*, c) *IE Groupe Concorde y otros vs. Capitaine commandant le navire “Suhadiwarno Pnajan” y otros*, d) *Gabriel*, e) *Besix* y f) *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi* <sup>(600)</sup>, así como el Reglamento CE 44/2001 Bruselas I <sup>(601)</sup>, se refieren a la “carga de la internacionalidad jurisdiccional”, íntimamente ligada al juicio de “previsibilidad”. Cuando hablamos de juicio de previsibilidad, nos referimos al deber que recae sobre el demandado en la representación de la localización del resultado dañoso. Este tema se relaciona con la previsibilidad la que desea dotarse al título de jurisdicción mediante la determinación de vínculo de conexión unívocos.

Para evitar caer en equivocaciones, en este epígrafe abordamos la “certidumbre”, como un concepto distinto al de previsibilidad, esto es, no abordaremos el problema del vínculo sino que abordaremos el problema del conocimiento y disposición que el demandado ha demostrado debió tener al momento de asumir un daño ambiental como probable, aceptando tácitamente las consecuencias civiles del mismo.

---

<sup>(600)</sup> STJCE 33/78 asunto *Somafer vs. Saar-Feerngas*, STJCE C-26/91 asunto *Jakob Handte vs. Mecano Chimoques*, STJCE C-440/97 asunto *IE Groupe Concorde y otros vs. Capitaine commandant le navire “Suhadiwarno Pnajan” y otros*, STJCE C-96/00 asunto *Gabriel*, STJCE C-256/00 asunto *Besix*, STJCE C-334/00 asunto *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi*.

<sup>(601)</sup> Considerando 15º del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

En este sentido, gozamos del auxilio de la jurisprudencia de los tribunales nacionales, la que ha señalado que la certidumbre del daño está asociada al conocimiento científico disponible, y al grado de anticipación del resultado que es exigible del demandado <sup>(602)</sup>.

Este tema ha sido tratado por la teoría de la responsabilidad de fondo, cuando aborda uno de los elementos de la obligación extracontractual: la negligencia.

Sin embargo, desde la perspectiva de la CJCI, el lugar donde “pudiere producirse el hecho dañoso civil” no es un problema de negligencia, sino que es un problema de relación directa entre el daño y el hecho generador del daño ecológico. En efecto, el daño ecológico puede verificarse a distancia del lugar de origen o manifestar sus consecuencias mucho tiempo después de haber ocurrido el hecho principal. Todo lo cual puede influir en la determinación del daño civil, porque el daño civil debe ser cierto, esto es, deber ser real actualmente o en el futuro <sup>(603)</sup>.

Por tanto, el problema con la certidumbre del daño afecta en mayor medida al daño ambiental y no al daño civil. En otras palabras, el daño civil siempre es cierto, el daño ambiental en cambio, está en permanente evolución.

De aquí que encadenar ambas clases de daños puede presentar algunos inconvenientes. Mientras la certidumbre del daño civil guarda relación con la idea de actualidad al momento de la presentación de la demanda (tanto en los daños

---

<sup>(602)</sup> Ver STS 5541/2008, número de Recurso: 942/2003 Madrid dictada con fecha 29 de octubre del 2008, citando la STS de 19 de mayo de 2003, la cual se pronunció sobre una demanda de perjuicios por daño ambiental en razón de un vertedero ilegal en una propiedad comprada, declarándose a favor de acciones de responsabilidad extracontractual, en lugar de acciones de saneamiento derivadas de la compraventa propuestas por el demandado. “*Esta Sala ha declarado que sería enormemente injusta la aplicación del artículo 1484 (sobre saneamiento de vicios redhibitorios) a unos vicios que está probado que se ponen de relieve con el tiempo, no dentro del reducido plazo de seis meses que concede el Código Civil para la acción de saneamiento*”.

<sup>(603)</sup> Sobre las características del daño civil extracontractual ver la doctrina clásica en: Mazeaud, Henri, Mazeaud, Léon, Mazeaud, Jean y Chabas, François, *Leçons de droit civil. Obligation Théorie Générale*, T. II, Montchrestien, 9º edición, París, 1998, p. 416. Carbonier, Jean, *Droit Civil. Les Obligations*, T. IV, Presses Universitaires de France, París, 2000 p. 378. Viney. Geneviève y Jourdain, Patrice, *ob cit*, p. 66. Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, pp. 236-240.

emergentes como con el lucro cesante); en el daño ambiental, en cambio, la certidumbre del daño depende de la prueba, la que es esencialmente probabilística.

Por otro lado, no existen presunciones de daño ambiental, porque el daño ambiental se clarifica e intensifica con el tiempo. Por tanto determinar el daño futuro supone tener la capacidad de asegurar razonablemente su ocurrencia. Pero aun así el no deja de ser una probabilidad. Tal es el caso de las enfermedades cancerígenas causadas por agentes contaminantes que pueden manifestar sus consecuencias en algunas personas pero en otras no, pudiendo saltar incluso una generación. En estos casos la víctima no puede esperar a que se materialice el daño para demandar una indemnización, pues normalmente los problemas de la prueba civil se agravan con el paso del tiempo.

Sobre el daño futuro, quizás convenga recurrir a la vieja fórmula de la jurisprudencia francesa que el profesor BARROS BOURIE <sup>(604)</sup> señala, de modo tal que el daño futuro sea la “prolongación directa y probable de un estado actual de cosas, susceptible de una evaluación inmediata”.

Para el caso de los daños ambientales, dicha prolongación supone un cálculo probabilístico razonable, que esté fundado en antecedentes científicos, que aconseje la economía procesal, y que evite una sucesión de juicios que se desencadenen en el tiempo, por derivación del mismo hecho generador.

La víctima es ajena a este juicio de participación en la ocurrencia del daño, de modo que en sede de CJCI la víctima no interviene en el análisis sobre la pérdida de una oportunidad en la prevención del daño y en general en cualquier circunstancia que atienda a su culpabilidad en la ocurrencia del daño. En efecto, el daño pudo haberse ocasionado no sólo por la ocurrencia del hecho generador, sino que pudo haberse agravado por la intervención posterior de algunas de las partes. Pero este

---

<sup>(604)</sup> Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, pp. 236-240. Alessandri Bessa, Arturo, *De la Responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno*, Imprenta universitaria, Santiago, 1943, p. 214. Domínguez Águila, Ramón, “Consideraciones en torno a la noción en la responsabilidad. Una visión comparatista”, *Revista de Derecho de la Universidad de Concepción*, 1990, p. 148.

problema será analizado en el juicio de fondo, y no corresponde analizarlo al momento de determinar la competencia judicial. No obstante lo anterior, este problema puede ser de interés en la determinación de la competencia judicial cuando se planteen conexiones entre el hecho generador y el daño, para determinar la extensión de la competencia judicial cuando la prueba obliga a analizar la intervención de varias causas en la producción del daño final.

La certidumbre del daño civil también ha sido objeto de controversia en el TJUE, llegando a usarse el mismo concepto de daño tanto para materias contractuales como para materias extracontractuales. En el asunto *Petra Engler*, el Abogado General F.G. JACOBS <sup>(605)</sup>, ha señalado que los daños extracontractuales civiles deben ser ciertos de tal forma que si la demandante no ha soportado un “daño específico”, no hay lugar para una demanda subsidiaria de responsabilidad a título extracontractual, de modo que todos los perjuicios se entendieron contractuales.

En suma, la certidumbre del daño es un criterio que limita la extensión del daño y por tanto entrega contenido al concepto hecho dañoso. Considerando que el TJUE ha tratado de precisar la extensión del lugar del hecho dañoso civil, tenemos que, a mayor certeza sobre la magnitud del daño ecológico, mayor certeza sobre los lugares a los que se extiende el daño civil.

## **5.- De la extensión del daño. Daños directos y daños indirectos.**

El análisis de la vinculación entre el hecho generador y el resultado lesivo civil opera como límite de la responsabilidad y como límite a la jurisdicción del juez. Buena parte del debate de la doctrina sobre este punto obedece a la confusión que existe entre las perspectivas que ofrece la causalidad. En efecto, la causalidad es un fenómeno de la naturaleza entre dos hechos, que en sí misma es un elemento relevante para el juicio de responsabilidad de fondo. Sin embargo, la vinculación a la

---

<sup>(605)</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, presentadas el 8 de julio de 2004, Asunto C-27/02, *Petra Engler*.

que nosotros nos referimos consiste en un concepto jurídico que se basa en la imputación normativa de un daño en razón de la vinculación que ese daño tiene con el lugar del juicio <sup>(606)</sup>.

A nuestro juicio, este debate supone abordar dos temas:

El *primer tema*, es la relación entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo, y busca responder la pregunta sobre la extensión de los daños civiles por los cuales un tribunal debe declararse competente. Es decir, responde la pregunta sobre qué daños quedan sometidos a la jurisdicción del tribunal, en razón de la regla de *ubicuidad*, establecida por el TJUE, respecto del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 <sup>(607)</sup>.

La jurisprudencia del TJUE <sup>(608)</sup> ha señalado que los daños a los que se refiere el foro especial de competencia del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I (actual artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012) son daños que requieren una relación particularmente estrecha con el lugar del hecho generador. Sólo así se ha querido justificar que el daño al patrimonio del demandante ubicado en otro Estado sea considerado un “daño indirecto”, y por tanto se le ha considerado no digno *per se* para abrir un foro distinto. Circunstancia que, como sabemos, contradice absolutamente el “criterio extensivo” que el TJUE ha tenido respecto de otros fueros

---

<sup>(606)</sup> Aspectos de la imputación normativa asociados a la responsabilidad extracontractual en STS 7826/1992. Sentencia del Tribunal Supremo español. número de Recurso: 1492/90. número de Resolución: 880. Procedimiento: casación. El Tribunal Supremo, entra a pronunciarse en un recurso de casación, sobre un aspecto de la prueba del daño y la prueba de la causalidad señalando que ambos pertenecen al ámbito de una “*quaestio iuris*”. Así, el Tribunal hace revisable la sentencia en casación, lo que a nuestro juicio es una clara manifestación de la necesidad de fundamentación en la “finalidad normativa” en los preceptos sobre responsabilidad extracontractual. Lo cual consideramos extrapolable a la finalidad normativa de los preceptos de CJCI.

<sup>(607)</sup> En este sentido, criticamos la STS 6937/2007. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid, número de Recurso: 3219/2000, número de Resolución: 1129/2007. Procedimiento: Casación. Interpuesto, por Oasis International Airlines, S.A. En virtud del cual el Tribunal Supremo *iura novit curia* que el asunto era de responsabilidad contractual internacional y declinó competencia a favor de los tribunales estatales y federales con sede en los condados de Fulton y Clayton, Georgia, EE.UU. Así, el Tribunal Supremo español confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo ninguno de ellos se pronuncia sobre: a) extensión del vínculo de competencia y b) perjuicios no contractuales sufridos en España. Lo que deja sin pronunciamiento a temas que habían sido alegados por el recurrente Oasis International Airlines, S.A.

<sup>(608)</sup> STJCE C-168/02, Rec. p. I-6009 asunto Kronhofer apartados 15-20.



especiales que también consagran un derecho de *optio fori*, similar al de la regla de ubicuidad a favor de la “parte más débil” <sup>(609)</sup>.

En materia de extensión del fuero, el Tribunal de Justicia <sup>(610)</sup>, ha señalado que el concepto “lugar donde se hubiere producido el hecho dañoso”:

“no puede interpretarse de una manera extensiva hasta el punto de englobar cualquier lugar donde puedan experimentarse las consecuencias perjudiciales de un hecho que haya causado ya, un daño efectivamente sobrevenido en otro lugar”.

En el mismo sentido <sup>(611)</sup>:

“45. *Por otra parte, ni uno ni otro implican que por lugar del hecho dañoso se entienda cualquier lugar en el que se produzcan las consecuencias dañosas de un hecho que anteriormente ya haya producido daños efectivos. Lo dispuesto en el artículo 5, número 3, únicamente indica el lugar en el que el hecho dañoso ha producido directamente las consecuencias dañosas.*”

Esto significa que el TJUE, bajo la falsa ilusión de una omisión sobre el tema de la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo, y presentándose como contrario a las “interpretaciones extensivas” en el vínculo, en realidad lo que está haciendo es señalar una “relación directa” entre el hecho generador y el resultado lesivo. Lamentablemente, el TJUE, no ha dotado de contenido a la idea de relación directa entre ambos hechos, en su lugar prefiere acudir a la regla de ubicuidad, sin necesidad de entrar en el problema de la causalidad. Sin embargo la diferencia entre daños directos y daños indirectos “exige” que entremos en el problema de la causalidad.

Por otra parte, el *segundo tema* de la relación entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo responde la pregunta por aquellos daños que, sin perjuicio

---

<sup>(609)</sup> Ver criterio extensivo sobre protección a favor de la “parte más débil” en: STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV* y en STJC -347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*.

<sup>(610)</sup> STJCE C-364/93, Rec. p. I-2719, asunto *Marinari*, apartado 14.

<sup>(611)</sup> Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 31 de enero de 2002, Asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*. Apartado 44.

de la relación de causalidad, se imputarán necesariamente a una misma jurisdicción. En este caso, nos referimos a aquellos daños que existen, ya no en razón de una relación natural (casi aristotélica) de causalidad, sino en razón del fin previsto en la norma de CJCI.

Si el TJUE ha recogido limitaciones a la proliferación de foros competentes, para casos civiles, creemos que puestos en las mismas circunstancias para casos de daños civiles asociados a daños ambientales el resultado puede ser distinto. Por ejemplo, no es la misma situación que un daño civil se produzca en el Estado A e irradie sus consecuencias en los Estados B y C, sólo porque el demandante de daños civiles tiene en los Estados B y C su patrimonio o centros de interés, que el caso de un daño ambiental producido en A, que irradia daños ambientales en B y C, y daños civiles directos en B, C, D y E; ¿acaso las víctimas civiles de D y E, que también son víctimas directas, tienen menor derecho a la regla de ubicuidad, por no coincidir su daño civil con el lugar donde se manifestaron los daños ambientales?

El TJUE, ha señalado que sólo será competente el tribunal de uno de los Estados, considerando especialmente que sea el lugar “donde se produjo el daño”. En la práctica en cambio, la mayoría de los casos se orientará al hecho generador, lugar que suele coincidir con el domicilio del demandado <sup>(612)</sup>. En efecto, a fin de que no se considere la norma del artículo 5.3 del Reglamento 44/2001 Bruselas I (actual artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012) como carente de finalidad respecto de la regla general establecida en el artículo 2º (actual artículo 4º), también se reconoció competente al tribunal del lugar donde se producían las consecuencias “directas” de hecho generador,. Para esto debe acreditarse que los perjuicios – en caso

---

<sup>(612)</sup> Ver STJCE C-364/93, Rec. p. I-2719, asunto Marinari, apartado 14, conforme a la cual por primera vez el TJCE, declara que “hecho dañoso” debe interpretarse en el sentido que no se refiere al lugar en el que la víctima ha sufrido un perjuicio patrimonial debido a un daño sobrevenido en otro Estado contratante. En el mismo sentido jurisprudencia posterior en: Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 31 de enero de 2002, Asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*, apartado 45. STJCE C-51/97, asunto Réunion européenne SA y otros, apartados 29 y 34. STJCE C-167/00 asunto Verein für Konsumenteninformation (Henkel) apartados 44 y 46. STJCE C-18/02 asunto DFDS Torline A/S apartados 74-76. STJCE C-168/02, asunto Rudolf Kronhofer, apartado 19. STJCE C-189/08 asunto Zuid-Chemie BV, apartado 24.

de coincidir con el domicilio del demandante - exceden el solo criterio de “ubicación del patrimonio” del demandante.

Para daños ambientales en cambio, ¿podría el TJUE señalar que las víctimas civiles de los Estados Dy E, deberán recurrir ante el Estado A, sólo porque en el Estado A se han manifestado las primeras consecuencias del daño ambiental? ¿No ha sido precisamente el fin de la política comunitaria que el demandado por un daño ambiental sufra los costes de la internacionalidad por los daños y amenazas de daños que se extienden más allá del lugar de sus actividades?

Si el TJUE no ha manejado un adecuado concepto de daños directos y de daños indirectos ha sido porque no ha resuelto el problema de la vinculación entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo (daño en sentido estricto). En efecto, no basta con decir que la vinculación entre ambos hechos es una relación de causa efecto, porque este elemento de la relación jurídica extracontractual no está exento de debate.

Como advertíamos anteriormente, el problema de la causalidad, ha sido abordado por el Derecho de fondo al momento de resolver el conflicto, sin embargo, no ha sido abordado por el Derecho competencial. En esta última disciplina, el objetivo ha consistido en encontrar el tribunal que, de acuerdo al principio de proximidad razonable, sea el más cercano “a los hechos” que se juzgan. Sin embargo, analizados por separado, tanto el hecho generador del daño como el resultado mismo, ambos aportan los mismos argumentos de proximidad para radicar el asunto en cualquiera de las jurisdicciones, entonces ¿por qué establecer distinciones entre daños directos y daños indirectos en materia de CJCI?

Porque por regla general el daño indemnizable deberá ser daño directo. Esta cualidad no sólo es predicable en sede de responsabilidad, sino que debe mantenerse en coherencia al momento de determinar la competencia de un tribunal.

Concretamente, el problema del daño directo está determinado por la configuración de una relación suficientemente estrecha entre el hecho generador del

daño y el resultado. Este problema, que tradicionalmente ha sido tratado como un problema de causalidad, también incide en la competencia del tribunal.

En efecto, después de la doctrina establecida por el TJUE en el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, tenemos que será competente aquel tribunal del lugar donde se ubica el hecho generador o aquel del lugar donde se verifican las consecuencias. De esta forma, el tribunal competente juzgará los hechos que sucedieron más allá de su jurisdicción territorial. Si los hechos están suficientemente vinculados, o si por el contrario requieren la apertura de un foro especial, será una cuestión a determinar dependiendo de si existe o no existe una relación estrecha entre el hecho generador y el hecho daño.

La vinculación entre el hecho generador y el daño, es una exigencia común en cualquier modelo de responsabilidad extracontractual( sea un modelo basado en la culpa o un modelo de responsabilidad objetiva), por esta razón, el análisis sobre la competencia judicial viene a superar el debate que existe a nivel de los ordenamientos internos en materia de ley aplicable, el que en nuestro caso sólo es abordado por su incidencia tangencial en la extensión de los daños.

En la actualidad los tribunales nacionales han internalizado estos conceptos demostrando la utilidad que prestan al momento de determinar la extensión de la competencia judicial. Como prueba, tenemos evolución jurisprudencial en la Corte di Cassazione italiana (<sup>613</sup>), que da cuenta de:

“Non sussiste la giurisdizione italiana in relazione a una controversia promossa da una società italiana nei confronti dell’incaricato di una società assicuratrice lussemburghese per il risarcimento dei danni futuri che la stessa potrebbe subire come conseguenza della conclusione in Gran Bretagna, per opera di quest’ultimo, di una “transazione rovinosa”, in quanto

---

(<sup>613</sup>) Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 5 de julio del 2011, número 14654, asunto, *Hume vs. Micoperi s.r.l. y otro*, *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Edizioni CEDAM-PADOVA, anno XLVIII, número 2, 2012. Antecedentes jurisprudenciales en : Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 7 de marzo de 1995, causa C-68/93, *Rivista Corte di giustizia*, 1995, p.p. 763 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 19 de septiembre de 1995, causa C-364/93, *Rivista Corte di giustizia*, 1996, pp.589 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 10 de junio del 2004, causa C-168/02, *Rivista Corte di giustizia*, 2004, pp.1090 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 16 de julio 2009, causa C-189/08, *Rivista Corte di giustizia*, 2010, pp.187 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 30 de noviembre de 1976, causa 21/76, *Rivista Corte di giustizia*, 1977, pp.187 y ss. Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 15 de mayo 1990, causa 365/88, *Rivista Corte di giustizia*, 1991, pp.1076 y ss.

l'art.5n.3 del regolamento (CE) número 44/2001 del 22 de diciembre del 2000, il quale stabilisce che in materia di illecito è competente il giudice del luogo in cui “l'evento dannoso è avvenuto”, debe essere interpretato nel senso che tale luogo è quello in cui si è verificata la lesione immediata e diretta del bene protetto, senza alcun riguardo al diverso luogo in cui si siano eventualmente verificate o si verificheranno le ulteriori conseguenze di natura patrimoniali della condotta illecita”.

Por otra parte, y parafraseando a tratadistas de la responsabilidad extracontractual como PANTALEÓN o BARROS BOURIE (<sup>614</sup>), tenemos que en materia de competencia judicial también existe un fundamento de justicia material que se encuentra detrás de la relación procesal que vincula al hecho generador con el resultado daño. Por esta razón, la responsabilidad del demandado no se puede extender a hechos que no guardan conexión con el hecho generador que le es imputable, o cuya relación no es lo suficientemente estrecha para escapar de la regla general que existe en materia de competencia. En efecto, la relación entre el hecho generador y el resultado daño constituye un elemento de la obligación extracontractual internacional que debe probarse. Si no se acredita la relación entre ambos, no se ha cumplido con una condición para el nacimiento de la obligación extracontractual internacional, y por tanto, tampoco puede existir jurisdicción para el conocimiento de hechos que en sí mismos no representan un juicio de reproche, por estar desvinculados de una obligación internacional extracontractual. Lo contrario, significaría conferir competencia para la “investigación” de hechos que, por muy lamentables que estos fueren, no tienen reproche jurídico asociado a una acción concreta. A diferencia del juez penal, al juez civil no le corresponde realizar una investigación sobre la existencia o no de hechos, sino que le corresponde pronunciarse sobre los hechos que se le acreditan. Asimismo, el hecho de que el daño patrimonial o perjuicio financiero, sea considerado como secundario, sucesivo o

---

(<sup>614</sup>) Mayor análisis sobre la causalidad en Pantaleón, Fernando, *ob cit.*, Barros Bourie, Enrique, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, 2007, Santiago, p. 373.

indirecto (<sup>615</sup>) abre múltiples dudas sobre las diferencias que pueden existir entre daños indirectos civiles y daños indirectos ambientales.

Por otro lado, consideramos de mayor utilidad distinguir entre daños civiles directos y daños civiles indirectos recurriendo a la “imputación normativa del daño”, es decir, al fin de la norma de CJCI. Así entonces, el conocimiento de los daños puede quedar radicado en la esfera competencial de un tribunal, según sea la categoría del daño. Por lo demás los tribunales nacionales fundan sus fallos en los criterios finalistas y de protección envueltos en las normas de responsabilidad civil extracontractual (<sup>616</sup>).

En efecto, el criterio causalista no es el que debe animar la distinción entre daños directos y daños indirectos en materia competencial. Es más, la causalidad, es percibida como un elemento sustantivo que “contamina” la determinación del foro competente. La exégesis del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, obliga a considerar estrictamente el lugar del “hecho dañoso”.

La causalidad a la que se denuesta por inutilidad en la determinación del foro competente, no es más que aquella vieja noción cuasi aristotélica de causa y efecto, que, envuelve toda realidad fenomenológica. Esta causalidad, no es suficiente, en sí misma, para construir un concepto de vinculación razonable entre un hecho dañoso y

---

(<sup>615</sup>) Sobre lo que debe entenderse como directo o indirecto ver: Carrillo Carrillo, Beatriz, *ob cit*, p. 362. Bischoff, Jean-Marc, “Observaciones a la STJCE 16 diciembre 1980, *État néerlandais contre Reinhold Rüffler*, as. 814/79”, *Journal du Droit International*, 1982, Vol. II, p. 472; Gothot, Pierre et Holleaux, Dominique, *La Convention de Bruxelles de 27 septembre 1968*, ed. Jupiter, 1985, n° 89-90; Gaudemet-Tallon, Hélène, *ob cit*, p. 374; Huet, André, “Observaciones a la STJCE 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, C-220/88”, *Journal du Droit International*, T. II, 1990, p.502.

(<sup>616</sup>) STS 149/2010. Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, ciudad de Madrid. Número de Recurso: 1165/2005 Sentencia de Casación de fecha 20/01/2010 que reproduce lo resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, de 14 febrero 2005. STS 646/2001. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid. número de Recurso: 72/1996. número de Resolución: 70/2001. Recurso de casación, que establece el quantum indemnizatorio de acuerdo a una interpretación a favor de la protección ambiental y protección de afectados, en relación con la tutela judicial efectiva. STS número 5568/2002. Tribunal Supremo español. número de Recurso: 619/1997. número de Resolución: 805/2002. Procedimiento: casación.

un tribunal determinado, porque sólo se refiere a la relación material que existe entre los hechos y no al juicio normativo que exige la norma de atribución de competencia. En efecto, la misma norma (artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012), puede variar su fundamento normativo si se aplica a daños civiles asociados a un daño ambiental, en lugar de aplicarse a daños puramente civiles. En el primer caso (daños civiles asociados a daños ambientales) permite el nacimiento de la regla de ubicuidad, sin que tengamos límites declarados para los daños ecológicos producidos en más de dos Estados y con serias dudas sobre los daños civiles directamente asociados. En el segundo caso en cambio (daño puramente civil), la aplicación de la teoría de la ubicuidad encuentra inmediata aprehensión y obliga a establecer límites. Como fuere, siempre es posible evitar un abuso apelando al “fin de la norma de competencia”, es decir, a la búsqueda de la imputación normativa de atribución de CJCI.

Por tanto, si el tribunal se encuentra en la necesidad de establecer límites a la proliferación de foros especiales competenciales según el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, se encuentra en mejor pie de hacerlo para daños civiles *strictu sensu*, que para daños civiles asociados a daños ambientales. En esta lógica de daño civil *strictu sensu*, el TJUE ha limitado los daños civiles, a “daños directos”, y según la jurisprudencia del TJUE, ya mencionada, deja que los “daños indirectos” sean conocidos en el foro del daño directo. De este modo las víctimas de daños indirectos son las que sufren la carga de la internacionalidad. Por esta razón nos negamos a que la víctima de daño civil asociado a un daño ambiental, sea considerada - en forma anticipada -, víctima de un daño indirecto, y apelamos a un juicio separado para ambas categorías de daños.

Por su parte, los daños ambientales, no son susceptibles de clasificarse como directos o indirectos según las categorías jurídicas clásicas. Los impactos ambientales, se potencian unos a otros, de modo que, después del impacto por una actividad no sostenible, se genera “vulnerabilidad ambiental” en otros ecosistemas y

ciclos naturales, aumentando la predisposición intrínseca de los elementos a sufrir un daño o una pérdida (<sup>617</sup>).

Por tanto, lo directo o indirecto de un daño civil, está en estricta relación con la amplitud del daño ambiental. Al respecto, y sin perjuicio de lo señalado anteriormente, a propósito del concepto de daño, recordemos que la Directiva 2004/35/CE de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales, señala en su artículo 2.2: A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 2. "daños":

“el cambio adverso mensurable de un recurso natural o el perjuicio mensurable a un servicio de recursos naturales, tanto si se producen *directa como indirectamente*”.

De lo anterior resulta que:

a) la Directiva 2004/35/CE de responsabilidad ambiental, no establece diferencias entre daños ambientales directos e indirectos, y

b) el Reglamento (UE) No. 1215/2012, no ha definido qué se entiende por daños y la jurisprudencia del TJUE no ha dado definiciones autónomas. Todo lo cual nos hace concluir que los daños civiles “indirectos” adquieren mayor protección cuando el hecho generador está asociado a un daño ambiental.

¿Significa lo anterior una aplicación sin límites del principio de ubicuidad en materia ambiental?

A continuación daremos respuesta a esta pregunta, abordando las formas de enfrentar el problema de la extensión de los daños civiles asociados a daños ambientales, en un escenario de disociación entre el lugar del hecho generador del daño y el lugar del resultado lesivo. Para ello, abordaremos criterios - no excluyentes entre sí - que nos permitirán distinguir entre daños civiles directos y daños civiles indirectos.

---

(<sup>617</sup>) United Nation Disaster Relief Organisation (UNDRO) y United Nation Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), *Natural disasters and vulnerability Analysis*, Report of Expert Group Meeting (9-12 July 1979), Boston Public Library. Definió y estandarizó los conceptos de: amenaza, peligro o peligrosidad (hazard-H), vulnerabilidad (vulnerability-V), Riesgo específico (Specific Risk-Rs), Elementos en riesgo (Elements at Risk-E), Riesgo total (Total risk- Rt).



## 5. 1.- Criterio de la equivalencia de las condiciones.

La Teoría de la Equivalencia de las condiciones ha sido la vía que tradicionalmente se ha utilizado para abordar el problema de la relación entre la acción y el daño, o lo que equivale en nuestro tema a la relación entre el hecho generador del daño y el resultado lesivo propiamente tal. En efecto, no nos referimos a un problema de fondo sino a un problema relacionado con la determinación de la extensión de competencia judicial. De esta forma, el juez llamado a pronunciarse sobre su competencia deberá discernir a qué personas y a qué hechos se extiende su competencia. Si algunos de estos hechos o algunas de estas personas están domiciliados en otro Estado, entonces hablamos de competencia judicial internacional. Por esta razón, nos apoyaremos en tratadistas y en doctrinas relacionadas con la teoría civil extracontractual. Conforme a PANTALEÓN, BARROS BOURIE o ABELIK MANASEVIC <sup>(618)</sup> la teoría de la equivalencia de las condiciones el hecho generador es condición necesaria del daño. Esta condición necesaria, puesta en análisis con la concurrencia de otras condiciones concurrentes debe revestir una importancia tal que en caso de supresión hipotética, el daño civil no hubiera ocurrido.

La sola circunstancia de existir una vinculación entre el hecho generador y el daño, no significa necesariamente que tal vinculación sea lo suficientemente estrecha como para calificar a los daños civiles de directos, porque en algunas ocasiones ni siquiera habrá nacimiento de una obligación extracontractual <sup>(619)</sup>. En efecto, lo directo o indirecto del daño determinará la extensión de la competencia civil. Por su parte, la realidad fenomenológica es capaz de explicar aristotélicamente cómo todas las cosas tienen una causa. Sin embargo, para que dos hechos puedan constituir una obligación extracontractual el vínculo que existe entre ambos hechos debe ser particularmente estrecho. De esta forma, cuando el vínculo es estrecho es irrelevante

---

<sup>(618)</sup> Ver a tratadistas de la responsabilidad civil extracontractual : Pantaleón, Fernando, *ob cit*, p. 1561. Barros Bourie, Enrique, *ob. cit.*, pp. 383-384. Abeliuk Manasevic, René, *Las obligaciones*, 3era. Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993, p. 209.

<sup>(619)</sup> Tal es el problema de la certidumbre del daño, referido anteriormente.

cuál es el tribunal que conoce del asunto, porque cualquiera de los tribunales (aquel del hecho generador o aquel del resultado dañoso) será competente, por la “cercanía razonable con el asunto”.

¿Cuándo los daños civiles revestirán tal cercanía con el hecho generador, como para que sean calificados daños civiles directos?

Según la teoría de la equivalencia de las condiciones, cuando el vínculo entre el hecho generador y el daño civil sea particularmente estrecho. La determinación de lo estrecho de la relación entre el hecho generador y el daño civil está entregado al criterio del juez.

Cuando el vínculo entre el hecho generador y el daño civil es más tenue, o habiendo mediado otras concausas en la producción del daño civil, o cuando el resultado dañoso que se reclama sólo puede explicarse por la concurrencia de otros daños, entonces se debilitan las bases de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Así por ejemplo, tenemos un caso planteado ante el Tribunal Supremo español <sup>(620)</sup>, en el cual el Tribunal Supremo no manejó criterios probabilísticos en la prueba de la relación extracontractual –cosa que resulta esencial en la prueba del daño ambiental y en el daño civil asociado -, exigiendo en cambio la prueba de una “causa eficiente” de tal rigor, que llegó a concluir falta de causa, y a afectar la existencia real de los daños alegados, por no poder ser atribuidos “lógicamente” al demandado. En este caso, la teoría de la equivalencia de las condiciones, sumada a una inadecuada teoría de causa eficiente y un vínculo tenue entre el hecho generador (abordado como causa) y el resultado lesivo (daño), pudieron conspirar en el resultado.

---

<sup>(620)</sup> STS 7826/1992. Sentencia del Tribunal Supremo español. número de Recurso: 1492/90. número de Resolución: 880. Procedimiento: casación. Señaló : *“al no haberse probado la existencia del efecto (daño), resulta ocioso plantearse el tema de la relación o nexo con la causa que hubiera podido producirlo, aunque en el terreno de la mera hipótesis se considerara probada su realidad o existencia, no aparece lógica su atribución, como causa eficiente del mismo”*.

Por estas mismas razones, una inadecuada teoría de causa eficiente puede debilitar los fundamentos para acoger la Regla de Ubicuidad. En efecto, ante un evento plurilocalizado aparecerán varios tribunales competentes para conocer de los daños, comenzarán las distinciones entre los daños y el tribunal llamado a pronunciarse sobre su competencia, adoptará una interpretación estricta del fuero, reduciendo su competencia a los daños ocasionados dentro de su jurisdicción, con exclusión de los daños civiles indirectos. Sin embargo, ante la falta de claridad conceptual en la relación que debe existir entre el hecho generador y el resultado dañoso, se terminará con interpretaciones restrictivas del fuero, que pueden negar el derecho de opción establecido en la regla de ubicuidad a favor de algunas víctimas civiles, por el hecho considerárseles erróneamente “víctimas indirectas”.

De esta forma, en la opción por la redistribución de las cargas procesales, el tribunal llamado a conocer del asunto, podría adoptar la redistribución de los costes procesales en contra del demandado en razón de una política comunitaria de protección, prevención y responsabilidad por daño ambiental, en la medida que mantenga una interpretación más amplia del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, para daños civiles asociados a daños ambientales.

En este último escenario, bastaría mantener la doctrina de la ubicuidad, establecida a propósito del caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, a casos en los cuales los daños civiles exceden a dos Estados, sin asociar lo directo o indirecto del daño civil a la “causalidad” que exista con los daños ambientales. En otras palabras, el daño ambiental sigue su propio derrotero, sólo el hecho generador del daño ambiental se relaciona con el daño civil, y por esa razón lo directo o indirecto del daño civil sólo se debe analizar en razón del hecho generador.

Llegamos al mismo resultando adoptando un concepto amplio de daño ambiental, que incluya los perjuicios patrimoniales, de modo tal que “el lugar del hecho dañoso” no distingan el grado de impacto ambiental, sino que busque la “integridad” de la indemnización de las víctimas. Una de cuyas facetas es la integridad civil.

En materia de daños civiles extracontractuales *strictu sensu* (para nosotros aquellos no asociados a un daño ambiental), el TJUE ha hecho un análisis de los hechos dañosos, individualmente considerados. Así fue como el TJUE llegó a la conclusión de que el sólo mérito de afectarse el patrimonio de una persona no era razón suficiente para abrir en ese lugar un nuevo foro competente. Sin embargo, cuando hablamos de daños civiles asociados a un daño ambiental, y a diferencia de lo que ocurre en materia de daño civil *strictu sensu*, el bien jurídico que se encuentra detrás no es de fácil individualización. Como lo señaló POTHIER <sup>(621)</sup> el daño civil *strictu sensu* tiene como bien afectado es la propiedad en su actualidad y en su legítima expectativa de ganancia futura (daño emergente y lucro cesante). En el daño civil ambiental, la especial naturaleza del hecho generador, influirá en el daño civil en lo referente a la prueba en el transcurso del tiempo, la existencia de concausas o la prueba probabilística.

Por esta razón cuando el demandante de daño civil, alega una afectación a su patrimonio, asociado a un daño ambiental, en realidad, estamos hablando de un asunto que tiene mayores ribetes de *forum actoris*. No por ello se deslegitima la aplicación del foro especial por delito o cuasidelito previsto en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, sino que, por el contrario, alcanza su justo sentido en esta clase de delitos y cuasidelitos.

Por otro lado, en materia ambiental, y salvo ciertos elementos endémicos, lo normal será que los “bienes comunes”, agua y aire sean el vector de múltiples daños civiles, pero de distinta gravedad y lugar de ubicación. Algunos de ellos, incluso, se pueden manifestar con años de diferencia y no obstante la distancia en el tiempo o en el espacio, representar tanta o mayor gravedad que el daño original.

Por estas razones el criterio tradicional, llamado de equivalencia de las condiciones, no puede restringirse a una idea de causalidad, porque entonces es

---

<sup>(621)</sup> Pothier, Robert Joseph, *Tratado de las Obligaciones*, Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal, Dirección general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, 2002, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM, disponible en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?1=1389> [revisado 14 de marzo del 2010].

inidóneo para identificar los daños civiles indirectos. Este criterio supondría que todos los hechos estén relacionados entre sí y, en principio, no podemos establecer una jerarquía entre ellos.

Finalmente, el concepto “lugar del hecho dañoso” es poco amigable con el concepto de “víctima indirecta”, pues esta última supone la existencia de “daños por repercusión”, cuya identificación se dificulta según un criterio clásico *causalista* de equivalencia en las condiciones (<sup>622</sup>).

## **5. 2.- Criterio del vínculo de proximidad.**

Cuando en este acápite hablamos de “proximidad” nos estamos refiriendo al vínculo entre los hechos (generador y de resultado), de tal forma que podamos determinar a qué hechos se extiende la competencia de un tribunal. En este caso, el acercamiento al vínculo de proximidad ha hecho un análisis de los hechos individualmente considerados y muchas veces con prescindencia del delito o cuasidelito civil que funda la responsabilidad extracontractual. No abogamos por un análisis de los elementos de la responsabilidad extracontractual, porque ellos sólo podrán determinarse en la sentencia definitiva que recaiga sobre el fondo del asunto. Pero es necesario reconocer que el fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 está establecido en razón de “delitos y cuasidelitos civiles”, no de “hechos individualmente considerados”, porque los hechos por sí solos no son suficientes para fundar un delito o cuasidelito, en el que intervienen también: la determinación de los sujetos que han intervenido en los hechos y la relación entre los hechos. Sólo cuando hemos cubierto estos aspectos del fuero, entonces estamos en condiciones de determinar la existencia o no de una conexión suficientemente estrecha con un tribunal determinado. Esta forma de abordar el criterio de proximidad ha sido elevado por la doctrina al rango de Principio.

---

(<sup>622</sup>) Otros problemas en la noción de víctimas directas e indirectas en Pontier, Jannetje Adriana y Burg Edwige, *EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters according to the case law of the European Court of Justice*, T.M.C., Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2004, pp.184-186.

La perspectiva tradicional de interpretar el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 refiere un daño *plurilocalizado* con disociación espacial entre el hecho generador o causal y el resultado lesivo. En el caso *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, el TJUE estableció las bases jurisprudenciales para un concepto de “hecho dañoso” <sup>(623)</sup>. En tal sentencia, el TJUE no se pronunció sobre la relación que podía existir entre el hecho generador y el hecho del resultado. Por esta razón, el criterio de proximidad constituye un fundamento para el principio de *ubicuidad* en materia de CJCI.

Por su parte, el Reglamento (UE) No. 1215/2012, ha desarrollado el principio de proximidad para casos de CJCI por conexidad, cosa que contrasta con la situación de los foros especiales para delitos y cuasidelitos civiles. Esto significa que el legislador comunitario ha dado mayor contenido al principio de proximidad en aquellos casos en los cuales la competencia está establecida en razón de vínculos de naturaleza procesal que aconsejan el conocimiento acumulado de los casos, a objeto de evitar sentencias contradictorias actuando en pro de criterios de economía procesal.

Sin perjuicio de lo anterior, el ejemplo de LAGARDE, FALLON, MÉLANGES, en Francia, o de OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, VIRGÓS SORIANO, GARCIMARTÍN ALFEREZ y CALVO CARAVACA en España y RODRÍGUEZ JIMÉNEZ en México y varios otros <sup>(624)</sup>, evidencian que la

---

<sup>(623)</sup> Ver desarrollo de la perspectiva tradicional del principio de proximidad en materia de CJCI para daños ambientales en: Bourel, Pierre, *ob cit*, p. 568.

<sup>(624)</sup> Lagarde, Paul, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, *Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, T. 196, 1986, p.150 y ss. Fallon Marc, *Le principe de proximité dans le droit de l’Union européenne*, en: Mélanges P. Lagarde, París, Dalloz, 2005, p. 241-262. Fallon Marc, “Les conditions d’un code européen de droit international privé”, en: *La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé?*, M. Fallon, P. Lagarde et S. Poillot-Peruzzetto ed(s), París, Dalloz, 2009, p. 1-34. Otero García-Castrillón, Carmen, “Problemas de aplicación de las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español y comunitario: reflexiones en torno a la doctrina del *forum non conveniens*”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, número94, 2000, pp. 99-128. Calvo Caravaca, Alfonso-Luis, *ob cit*, pp.49-69; Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alferez, Francisco, *ob. cit.*, p.55; Pérez Vera, Elisa y González Campos, Julio, *Derecho Internacional Privado*, Vol. I, UNED, España, UNED, 2001, p 291- 317, Garau Sobrino, Federico, *Lecciones de Derecho Procesal Civil*

“proximidad razonable”, es un principio que ha alcanzado un desarrollo más completo a nivel doctrinal que a nivel jurisprudencial, especialmente si nos referimos a la jurisprudencia de tribunales nacionales. Por esta razón, consideramos posible que sea la vía doctrinal la que siga irradiando el principio de proximidad, esta vez, desde la perspectiva de los daños entre sí, con miras a poder distinguir entre daños directos y daños indirectos. En efecto, el juicio de proximidad entre los hechos y el tribunal adquiere un nuevo elemento de juicio: la vinculación entre los propios hechos. Por una parte el tribunal está en condiciones de hacer un análisis sobre la proximidad de la ocurrencia de un hecho dentro de su jurisdicción; pero, por otra parte, carece de argumentos cuando el hecho que se somete a su conocimiento no está localizado en su jurisdicción, y en razón del imperativo jurisprudencial emanado de la regla de *ubicuidad*, se encuentra en el deber de pronunciarse sobre dicho daño.

El juez tendrá legítimas dudas sobre la extensión de su competencia respecto de aquellos hechos localizados fuera de su jurisdicción. Por lo anterior, y sin que signifique prejuzgar el asunto de fondo, la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo debe ser acreditada y ponderada por el juez, al momento de pronunciarse sobre su CJCI. El efecto de este análisis no busca determinar la responsabilidad, sino configurar el delito o cuasidelito civil que da nacimiento a la regla de *ubicuidad*.

Por otro lado, el ideal de proximidad entre los hechos, puede ser una exigencia superlativa que no se predica para la CJCI, en general. En efecto, si comparamos los puntos de conexión que exigen la CJCI, con aquellos que se exigen para el Derecho aplicable, encontramos que en el último caso, se pide la máxima proximidad, mientras que en la CJCI, sólo se exige una cercanía razonable, aquella que el profesor PAUL LAGARDE <sup>(625)</sup> nominó desde 1986: *principe de proximité*.

---

*Internacional*, España Universitat de les Illes Balears, 2003, p. 26. Rodríguez Jiménez, Sonia, “Competencia Judicial Internacional.....” *ob cit*, pp.61-68; Rodríguez Jiménez, Sonia, “Conexidad y Litispendencia Internacional .....” *ob cit*, pp. 120-213;

<sup>(625)</sup> Lagarde, Paul, “Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, *Recueil des cours de l’Académie de Droit International de La Haye*, T. 196, 1986, p.150 y ss.

Desde las afirmaciones de LAGARDE y analizada la doctrina que se ha pronunciado sobre el tema <sup>(626)</sup>, encontramos que hasta el día de hoy el principio de “proximidad razonable”, sigue siendo abordada bajo la utopía de que los daños están ubicados en un solo territorio (o máximo en dos Estados fronterizos).

Decimos que es una utopía, porque en la mayoría de los casos de daños civiles internacionales no es así. De aquí que las exigencias que se hacen para la determinación de la CJCI, no guardan relación con los requisitos que se usan para determinar la legislación aplicable. En efecto, a diferencia de la importancia que reviste para las pretensiones de las partes, que sus derechos estén o no estén reconocidos en una determinada legislación; en materia de CJCI, en cambio, las exigencias que se hacen al tribunal guardan más relación con el cumplimiento de condiciones de economía procesal <sup>(627)</sup>.

Así, la adopción de medidas de protección, la práctica de diligencias probatorias, y aún en algunos casos, la cantidad de demandas presentadas en una jurisdicción <sup>(628)</sup> pueden ser ordenadas por tribunales en los cuales no se ha

---

<sup>(626)</sup> Lagarde, Paul, “le principe de proximité dans le droit international privé contemporain”, *Revue des Cours*, T. 196, 1986-I, pp. 129-130. Von Overbeck, Alfred, “De quelques règles générales de conflits de lois dans les codifications récentes”, *Private law in the international arena, Liber amicorum Kurt Siehr*, T.M.C. Asser, The Hague, Netherlands, 2000, p.550. Juenger, Friedrich K., “The problem with private international law”, *Private law in the international arena, Liber amicorum Kurt Siehr*, T.M.C. Asser, The Hague, Netherlands, 2000, p.297. Crespo Hernández, Ana, *ob. cit.*, pp.105-109. Amores Conradi, Miguel Ángel, “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XLI, 1989, pp.124 y ss.

<sup>(627)</sup> Los foros especiales del Reglamento (UE) No. 1215/2012, dan contenido al principio de proximidad razonable desde la economía procesal. En el mismo sentido y desde el foro especial para el contrato individual de trabajo internacional: Palao Moreno, Guillermo, *ob cit* , pp.35-54. También, Esteve González, Lidia, *Aspectos internacionales de las infracciones de derecho de autor en internet*, Comares, 2006.

<sup>(628)</sup> La interpretación del principio de proximidad razonable ha seguido amplios derroteros que se extienden más allá de las materias civiles, ejemplo de ellos, es el contenido del principio en la Sentencia del Tribunal Constitucional español 140/1995. Críticas en: Esposito Massicci, Carlos y Garcimartín Alférez, Francisco, “El artículo 24 de la Constitución y la Inmunidad de los agentes diplomáticos extranjeros (a propósito de la STC 140/1995)”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, año 16, número 47, 1996, p.289.



manifestado el daño, pero si el hecho generador. En este último caso, el *forum delicti commissi*, se ve fuertemente influenciado por el lugar de origen causal del daño, más que por el lugar del daño, siendo que este último califica en *strictu sensu* al *forum delicti commissi*. A *contrario sensu*, la ocurrencia de nuevos daños, cronológicamente posteriores a la fecha de ocurrencia del hecho generador, puede inclinar a que el asunto se promueva ante el tribunal más cercano a estos últimos hechos, por las mismas razones de economía procesal señaladas anteriormente, y que en este caso coinciden más con el lugar donde se manifestó el daño que con el lugar donde se originó el mismo. Por lo anterior, en materia de CJCI, no existe un único foro, y la flexibilidad en la determinación del foro competente, permite, que un mayor tráfico de personas, bienes y capitales ponga al Derecho Internacional al servicio de las relaciones privadas y no al revés.

En este sentido el límite jurisdiccional está dado por la razonabilidad, más que por la proximidad. Por tanto, es en la razonabilidad donde pesan los criterios jurídicos de legalidad en la determinación del foro competente <sup>(629)</sup>. En nuestro caso, la razonabilidad pasará por establecer una relación entre el hecho generador y el resultado lesivo lo más estrecha posible, al menos para que no existan dudas sobre la competencia del tribunal sobre ambos hechos. Sin perjuicio de lo anterior, y más allá del contenido al principio de proximidad, que pretendemos aportar desde la vinculación de los daños entre sí, creemos que este concepto seguirá siendo vago e impreciso, mientras no se defina un concepto de daño directo <sup>(630)</sup>.

---

<sup>(629)</sup> Otero García-Castrillón, Carmen, “Problemas de aplicación de las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español y comunitario: Reflexiones en torno al *forum non conveniens*”, *Revista de la Facultad de derecho de la Universidad Complutense*, número 24, 2000, pp. 16 y 32.

<sup>(630)</sup> Sobre la noción de daño directo, ver también Fuentes Camacho, Víctor, “Principio de proximidad y precisión del *forum delicti commissi* en las hipótesis de pluralidad de daños sobrevenidos en distintos Estados”, [Comentario a la Sent. T.J.C.E. de 11 de enero de 1990. Asunto C-220/88 (*Société Dumez France et Société Oth Infrastructure c. Société Hessiche Landesbank et autres*)], *La Ley. Comunidades Europeas*, año XIII, núm. 77, 27 noviembre 1992, pp. 1-8.

### 5. 3.- Criterio según el riesgo incrementado.

Desde la perspectiva del tribunal que conoce del hecho generador, y puestos en la necesidad de determinar si su competencia se extiende o no a otros daños que han sido consecuencia del primero, encontramos el criterio del riesgo incrementado, el que se presenta como un apoyo idóneo para la distinción entre daños directos e indirectos. La teoría del riesgo incrementado se puede complementar mejor con la idea de riesgo ambiental al que se refiere la Escuela de Ecología Humana <sup>(631)</sup>. En efecto, desde la perspectiva del riesgo, el juez analizará si el resultado dañoso por el cual se le reclama competencia es consecuencia del riesgo asumido por el hecho generador. En otras palabras, el hecho generador, pudo haber aumentado la probabilidad de ocurrencia del daño resultante <sup>(632)</sup>.

La intensidad de esa probabilidad es la que fundamenta la noción de daño directo. Y la que a nuestro juicio no distingue entre daños civiles y daños ambientales.

Hasta que nació el criterio del riesgo incrementado, el juez debió analizar si los daños ambientales (y los daños civiles asociados a un daño ambiental) tienen suficiente vinculación con su jurisdicción, sin más antecedentes que una “posible relación” entre el hecho generador de un daño y el hecho lesivo resultante. Es precisamente por esta “posible relación” entre ambos hechos, que en el juego de los intereses contrapuestos que exponen las partes en base a la aplicación de la regla de

---

<sup>(631)</sup> Aportes conceptuales a la noción del riesgo ambiental en la Escuela de la Ecología Humana, con: White, Gilbert F., “La investigación de los riesgos naturales”, en R.J., Chorley (ed), *Nuevas Tendencias en Geografía*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1975. White, Gilbert F., *Natural Hazard*, Oxford University Press, New York, 1974. Kates, Robert W, “The Human environment: the road not taken, the road still beckoning”, *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 77, 1987, pp. -525-537. Kates, Robert W, *Hazard of Choice perception in Flood Plain Management*, The University of Chicago, Chicago, Department of Geography, Research Paper número 78. Burton Ian, White Gilbert F. and Kates Robert, *The environment as Hazard*, New York Oxford University Press, 1978.

<sup>(632)</sup> Esta aproximación ha sido analizada desde la teoría de la responsabilidad civil en: Barros Bourie, Enrique, *ob. Cit.*, p. 401-405. Paz-Ares, Cándido; Díez-Picazo, Luis; Berkovitz Rodrigo y Salvador Pablo, *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 1987.

ubicuidad, donde el juez puede advertir la necesidad de considerar circunstancias probabilísticas en la verificación del daño. Por esta razón la teoría del riesgo incrementado, presenta la ventaja de ayudar a discernir si el hecho generador incrementó probabilísticamente el peligro de ocurrencia de los daños. Estos daños podrán ser tanto daños ambientales, como también daños civiles; en efecto, ambas categorías de daños nacen del riesgo que ha asumido el agente contaminante. Por esta razón podemos decir que el criterio del riesgo incrementado, es eficaz, tanto para determinar los daños ambientales directos, como para determinar los daños civiles directos.

Si el TJUE no se ha pronunciado sobre el vínculo existente entre el hecho generador y el hecho del resultado lesivo, esto ocurre por problemas de certeza en la relación de causalidad que existe entre ambos hechos; llegamos a la conclusión que con un criterio de riesgo incrementado, en cambio, el juez podrá discriminar entre los daños que corresponden a un curso normal de sucesos, de aquellos que ocurrieron por haberse incrementado un riesgo. En esta etapa de la determinación de CJCI, el juez no necesita de gran prueba sobre la “probabilidad de un daño”, basta con que realice el juicio contrario. Es decir, el juez solo deberá analizar cuál es la situación normal de causa-efecto que se produce en el mundo de las relaciones civiles, para que a *contrario sensu*, un cambio manifiesto en los resultados, denote una intervención que al menos pueda calificarse de “probable intervención” de un hecho, que debe coincidir con el hecho generador.

Por su parte, existen antecedentes en la jurisprudencia de tribunales nacionales, acogiendo la noción de “probabilidad del daño civil”, asociado a daños ambientales. En algunos casos acogiendo un criterio preventivo abierto (<sup>633</sup>), y otras promoviendo la necesidad de probar el riesgo (<sup>634</sup>).

---

(<sup>633</sup>) Sentencia Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 30 de junio de 2001. Rollo número 3208/2000. Procedimiento: apelación. Confirmó la sentencia de primera instancia estimando: “La Audiencia Provincial confirmó esta sentencia por estimar, en síntesis, que: a) la demandada, cuando era la propietaria, había enterrado residuos de manera irregular en un solar propiedad de la entidad actora, utilizándolo como vertedero incontrolado de peligrosos productos tóxicos como metales de

En suma, la relación entre hecho generador y resultado lesivo, no sólo funda la CJCI de un tribunal, sino que limita la extensión de dicha jurisdicción. Constituye un parámetro de justicia procedimental y a la vez entrega contenido a la regla de ubicuidad para determinar qué daños son directos y qué daños son indirectos.

Por otro lado, siendo escasa la doctrina de tribunales nacionales, en la que se pronuncien sobre una teoría que vincule el hecho generador con el resultado lesivo, contrasta con el hecho de que si encontramos pronunciamiento sobre uno de los

---

cobre y plaguicidas organoclorados, como aldrín y dieldrín, con potencia para causar la muerte de cualquier afectado; b) que se habían causado daños y perjuicios a la entidad propietaria del terreno determinantes de la responsabilidad de la entidad demandada integrada exclusivamente en el ámbito de la culpa extracontractual de los artículos 1902 ss. CC en relación con la infracción de disposiciones administrativas, y no en el terreno contractual ni por referencia a los anteriores propietarios de la parcela donde se realizó el enterramiento ilegal de productos tóxicos, por cuanto el vertedero tóxico afectaba a todos y a cualquier titular del terreno perjudicaba el uso y disfrute del mismo conforme a su destino. c) La sentencia hacía una referencia a la doctrina jurisprudencial sobre los daños continuados o de producción sucesiva hasta el definitivo resultado y a la responsabilidad cuasi objetiva por la actividad peligrosa, «incluso mediante la aplicación del artículo 1908 CC por *razón de riesgo creado*» (lo puesto en cursiva es nuestro).

(<sup>634</sup>) A modo de ejemplo dos sentencias: a) STS 7354/2008. Sentencia del Tribunal Supremo español. número de Recurso: 3992/2001. número de Resolución: 1135/2008. Procedimiento: Casación.: “El vertido continuado en la finca de propiedad de la recurrente de sustancias gravemente tóxicas y peligrosas puede no afectar únicamente al solar que se utiliza ilícitamente como vertedero, pues los daños causados pueden revestir un alcance superior a la existencia y subsistencia del inmueble que constituye el sustento de los expresados vertidos. No puede rechazarse de manera absoluta que puedan resultar afectados no solamente aquellas terceras personas que por razón de la titularidad de fincas próximas al lugar del vertido o por hallarse físicamente en situación de ser contaminados por ellos puedan sufrir perjuicios, sino también los sucesivos propietarios que se encuentren en la misma situación. Pero *la consideración como terceros perjudicados de estos sucesivos titulares exige demostrar que han sido víctima de daños distintos de los consistentes en perjuicios económicos dimanantes de los defectos sufridos por la cosa vendida* (lo puesto en cursiva es nuestro), pues, en caso de no ser así, sólo las acciones relacionadas con el incumplimiento del contrato o con el saneamiento de la cosa vendida pueden ser utilizadas para el resarcimiento, en el marco de las acciones contractuales”; b) STS de 13 de julio de 2005. Recurso nº 2390/00. Señala: “en tal contexto es evidente que aunque la finca de litigio se halle matemáticamente fuera de los límites de la zona de afección de la línea de ferrocarril construida por la entidad demandada, *queda seriamente expuesta a daños y riesgos concretos derivados del funcionamiento de la misma* (lo puesto en cursiva es nuestro), en la forma que se describe en la resolución recurrida, produciéndose una situación de inmisión concreta que en atención a la serie de factores que concurren en el caso que nos ocupa crea un perjuicio que por la Sala de instancia se declara probado, a través de una argumentación que debe calificarse de coherente y razonada”.

elementos de la relación extracontractual: la causa. En este caso, se ha adoptado la Teoría de la Causa Adecuada (<sup>635</sup>). En efecto, la Teoría de la Causa Adecuada, es más cercana a la responsabilidad extracontractual por culpa, que a la responsabilidad objetiva o estricta (que suele asociarse a la responsabilidad ambiental) Esta última se acomoda mejor a un razonamiento en base a la Teoría de Riesgo creado. La teoría de la causa adecuada, en cambio, ha encontrado mayor acogida en la jurisprudencia nacional (<sup>636</sup>).

Razones que motivan a buscar una “causa adecuada” se fundan en la necesidad de establecer los límites de la responsabilidad (<sup>637</sup>) y en la necesidad de distinguir entre daños directos y daños indirectos (<sup>638</sup>).

---

(<sup>635</sup>) STS número 5568/2002. Tribunal Supremo español. número de Recurso: 619/1997. número de Resolución: 805/2002. Procedimiento: casación. Ha señalado: “Es cierto que la Sra. Cecilia tenía la obligación de efectuar la reparación del muro, y contribuir al coste correspondiente (art. 575 CC), pero tal apreciación no es suficiente para deducir una concurrencia causal en cuanto al evento del caso, porque no todas las "condiciones" que integran el nexo físico (secuencia de causalidad material) forman parte del reproche objetivo (juicio de imputación, causalidad "jurídica"), pues no cabe confundir lo que incide o facilita, con lo que produce o determina; y por otra parte el resultado del caso está objetivamente "fuera del ámbito de protección de la norma" civil expresada, por lo que no cabe extender su operatividad jurídica a resultados que son ajenos a su previsión normativa”. Más adelante señala: “Por todo lo razonado resulta procedente acoger el motivo en los términos que se dirán, pues el criterio seguido por la resolución recurrida no solo ha realizado una valoración desproporcionada de la entidad de las respectivas causas, que se traduce en una infracción de la doctrina jurisprudencial que establece la distribución proporcional del "quantum" en función de la influencia respectiva de las conductas culposas en la causación del daño (Sentencias, entre otras, 13 y 14 abril 1.998, 15 marzo y 8 julio 1.999), sino que incluso ha atribuido a la conducta de la Sra. Santiago una eficacia causal indebida, porque no puede considerarse causa concurrente, en el sentido de preparar, condicionar o completar la causa eficiente ("única") de la entidad demandada HIDALPA S.A.”

(<sup>636</sup>) Sentencias del Tribunal Supremo español, consistentes con la misma doctrina son las siguientes: a) sobre daños derivados de demoliciones o derribos de edificios contiguos: STS de 19 diciembre 1.987, STS de 9 y 10 marzo 1.989 y STS 30 septiembre 1.992; b) sobre daños por excavaciones o cimentaciones en finca colindante: STS de 24 febrero y 25 junio 1.986 y STS de 10 diciembre 1.992; c) sobre daños por causa de obras de reparación en inmueble adyacente: STS de 2 febrero 1.989 y STS 1 junio 1.994; d) por daños por diligencia exigible en la prevención de contaminación por agentes atmosféricos: STS de 25 septiembre 1.986 y 28 febrero 1.991; e) sobre daños debido a falta de adopción de medidas precautorias oportunas para evitar daños en inmuebles vecinos por derrumbe: STS de 26 diciembre 1.995.

(<sup>637</sup>) STS 5541/2008, Sentencia del Tribunal Supremo español de fecha 29 de octubre del 2008. número de Recurso: 942/2003. Asimismo, la STS 3752/1999. Sentencia del Tribunal Supremo español de 29 de mayo de 1999. número de Recurso: 2962/1994. número de Resolución: 470/1999. Procedimiento: casación. *Realizó una declaración general sobre la relación de causalidad directa,*

Para nuestros efectos, las sentencias referidas anteriormente tienen en común:

a) la necesidad de probar la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo, evitando así, los problemas generados por el sentido y alcance de la regla de ubicuidad,

---

*señalando: “Para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión - causa- y el daño o perjuicio resultante efecto-, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de la causalidad adecuada”. Más adelante señala: “(...) deberá valorarse en cada caso concreto, si el acto es antecedente del que se presenta como consecuencia necesaria, el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que por una mera coincidencia induzcan a pensar en un interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que se haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo” (lo puesto en cursiva es nuestro).*

<sup>(638)</sup> A modo de ejemplo dos sentencias: a) STS 12507/1992 Sentencia del Tribunal Supremo español de 31 de enero de 1992. También se pronuncia sobre la relación entre la acción y el daño por la Teoría de la causalidad adecuada señalando: “la determinación de si la conducta del autor del acto, concretamente la conducta generadora del daño, es generalmente aceptada para producir un resultado de la clase dada, de tal manera que si la apreciación es afirmativa, cabe estimar la existencia de un nexo causal que da paso a la existencia de responsabilidad, así como que la orientación jurisprudencial viene progresiva y reiteradamente decantándose por la aceptación de la teoría de la causalidad adecuada, consecuencia de la expresión de una necesaria conexión entre el antecedente (causa) y una consecuencia (efecto), también es de apreciar que tales doctrina y orientación jurisprudencial sólo afectan al módulo cuantitativo responsabilizador *cuando la causa originaria alcance tal trascendencia que haga inoperante cualquier otra incidencia*, así como esta no sea generante de una causa independiente” (lo puesto en cursiva es nuestro); y b) STS 3752/1999. Sentencia del Tribunal Supremo español. número de Recurso: 2962/1994. número de Resolución: 470/1999. Procedimiento: casación. Se pronuncia sobre la extensión del daño, señalando: “De otra parte para la determinación de la existencia de la relación o enlace preciso y directo entre la acción u omisión -causa y el daño o perjuicio resultante -efecto-, la doctrina jurisprudencial viene aplicando el principio de la causalidad adecuada que, dice la sentencia de 31 de enero de 1992, “exige la determinación de si la conducta del autor del acto, concretamente la conducta generadora del daño, *es generalmente apropiada para producir un resultado de la clase dada, de tal manera que si la apreciación es afirmativa, cabe estimar la existencia de un nexo causal que da paso a la exigencia de responsabilidad*, así como que la orientación jurisprudencial viene progresiva y reiteradamente decantándose por la aceptación de la teoría de la causalidad adecuada, consecuencia de la expresión de una necesaria conexión entre un antecedente (causa) y una consecuencia (efecto), también es de apreciar que tales doctrina y orientación jurisprudencial solo afectan al módulo cuantitativo responsabilizador cuando la causa originaria alcance tal trascendencia que haga inoperante cualquier otra incidencia, así como esta no sea generante de una causa independiente”; *deberá valorarse en cada caso concreto, si el acto antecedente del que se presenta como consecuencia necesaria , el efecto lesivo producido, no siendo suficientes las simples conjeturas o la existencia de datos fácticos que por una mera coincidencia, induzcan a pensar en una interrelación de esos acontecimientos, sino que es preciso la existencia de una prueba terminante relativa al nexo entre la conducta del agente y la producción del daño, de tal forma que se haga patente la culpabilidad que obliga a repararlo”* (lo puesto en cursiva es nuestro).

b) la perspectiva en cálculo probabilístico, lo que se encuentra en sintonía con el criterio de riesgo incrementado, y

c) la noción de previsibilidad (que en el Derecho de fondo gira en torno a la noción de la culpa), y que en materia competencial significa alterar la carga de la prueba en contra del demandado.

Todo lo cual, también constituyen criterios útiles para la determinación de la extensión del daño civil asociado a un daño ambiental. También es coherente con sentencias nacionales como la del Tribunal Supremo español de fecha 29 de octubre del 2008 <sup>(639)</sup>, que estableció “los criterios de la responsabilidad civil”, señalando a propósito de la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo:

*“2º.- Cuando no se puede probar con exactitud la causa del daño (causa adecuada), es el agente quién debe acreditar su propia diligencia (imputación normativa de los riesgos).”* (lo puesto entre paréntesis es nuestro).

Vistos los problemas que existen sobre la certeza en la relación de causalidad entre el hecho generador y el resultado lesivo; consideramos que los tribunales debieran adoptar la Teoría de Riesgo Incrementado, descrita anteriormente. Así, el juez podrá discriminar su competencia, en base a “criterios preventivos”, de modo tal que el daño se entienda como un resultado del incremento en el riesgo aceptado por el demandado, según un curso normal de sucesos.

El hecho de que tribunales nacionales estén fundando sus fallos en base a la prueba probabilística, es indicativo de que con el tiempo la jurisprudencia cambiará de la Teoría de la Causalidad Adecuada a la Teoría del Riesgo Incrementado. En ese sentido debiera girar también la CJCI.

Finalmente, y a modo de corolario sobre este tema, algunos apuntes sobre la evolución de teorías probabilísticas en el Derecho Penal nos motivas a presentar la consistencia de esta teoría en materias ambientales.

---

<sup>(639)</sup> STS 5541/2008, número de Recurso: 942/2003 Madrid dictada con fecha 29 de octubre del 2008 en relación con STS de 19 de diciembre de 1986.

En efecto, en materia penal también existen importantes avances que respondiendo al problema de la prueba del dolo abogan por tesis probabilísticas <sup>(640)</sup>. De esta forma, el aspecto subjetivo que en el ilícito penal constituye el punto más importante en la aplicación del juicio de reproche, resulta estar cediendo paso a las teorías probabilísticas.

Mientras en materia civil, el juicio moral sobre la negligencia del actor resulta sufrir un desplazamiento hacia la objetivación y acoge cada vez más a las teorías causalistas; en materia penal, en cambio, el debate sobre el aspecto subjetivo (dolo, culpa), ha superado las teorías de la voluntad para desplazarse desde las teorías del conocimiento a las teorías de la representación. Todo lo cual, constituye un antecedente importante para la dogmática civil, porque viene a constituir un aporte en materia de teorías sobre probabilidades. Si bien el juicio de la responsabilidad civil se diferencia del juicio que recae sobre la responsabilidad penal, no podemos obviar que ambos ilícitos tienen importantes puntos de contacto ampliamente explotados en la responsabilidad ambiental <sup>(641)</sup>.

---

<sup>(640)</sup> Sobre concepto, prueba del dolo penal y tendencias hacia las teorías de conocimiento ver: Ragués i Vallès, Ramón, “Consideraciones sobre la Prueba del Dolo”, *Revista de Estudios de la Justicia*, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, número 4, 2004.

<sup>(641)</sup> Matus Acuña, Jean Pierre; Orellana Cruz, Marcos; Castillo Sánchez, Marcelo y Ramírez Guzmán, M. Cecilia, “Análisis dogmático del Derecho Penal Ambiental chileno, a la luz del derecho comparado y las obligaciones contraídas por Chile en el ámbito del Derecho Internacional: conclusiones y propuesta legislativa fundada para una nueva protección penal del medio ambiente en Chile”, *Ius et praxis* [online], Universidad de Taca, Vol.9, N.2, 2003, pp. 11-57. [Revisado 25 de octubre del 2011]. Disponible en: <[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=s0718-00122003000200002&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-00122003000200002&lng=es&nrm=iso)>. issn 0718-0012. doi: 10.4067/s0718-00122003000200002. Rodas Monsalve, Julio César, *Responsabilidad penal y administrativa en Derecho Ambiental Colombiano*, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, edición 1, volumen 1, Número 167, agosto 2005. De la Cuesta Arzamendi, “Cuestiones dogmáticas relativas al delito de contaminación ambiental”, *Revista Penal*, 4, 1999. Ramírez Bastidas, Yesid, “El Delito Ecológico”, *Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación*, Ponencia presentada en las XII Jornadas Internacionales de Derecho Penal realizadas en octubre de 1990, en la Universidad Externado de Colombia, San Juan, Volumen I, Número 2, 1989, p. 261 y ss. Villamizar, Julieta, Medio Ambiente y Derecho Penal, *Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación*, Ponencia presentada en el Seminario sobre Actualización en materia Penal, celebrado en la Universidad Externado de Colombia, entre el 29 de mayo y 27 de junio de 1990., en la Universidad Externado de Colombia, San Juan, Volumen I, Número 2, 1989, p. 291 y ss. Abordado desde la perspectiva de la responsabilidad penal ambiental empresarial: Regis Prado, Luiz, La cuestión de la



Esto significa que, habiendo ocurrido en materia penal y con mayor razón en materias civiles, existe una -cada vez mayor- apertura al reconocimiento de la realidad y complejidad en la prueba del dolo.

En efecto, veamos el caso español. El Tribunal Supremo ha señalado <sup>(642)</sup>:

*“quien se pone en situación de ignorancia deliberada, sin querer saber aquello que puede y debe saberse, y sin embargo se beneficia de la situación (como en el caso consistía en cobrar un millón de pesetas) está asumiendo y aceptando todas las consecuencias del ilícito negocio en el que voluntariamente participa”.*

Esta sentencia trajo el mismo razonamiento que otra del Tribunal Supremo español de 1992 que abogaba por una Teoría basada en la “probabilidad” (como evolución al dolo eventual), en lugar de las teorías que postulaban el conocimiento, en el juicio de imputabilidad penal. Las primeras (teorías de la probabilidad) se exponen como una evolución dentro de las teorías del dolo eventual y constituyen variantes más extendidas de la teoría de la representación. La sentencia señaló <sup>(643)</sup>:

*“En la Doctrina se ha demostrado convincentemente en los últimos tiempos que a pesar de declaraciones programáticas que parecen acentuar las existencias de la teoría del consentimiento, el Tribunal Supremo desde hace tiempo se acerca en sus pronunciamientos, de manera cada vez más notable, a las consecuencias de la teoría de la probabilidad. Ello no puede llamar la atención, pues esta evolución se percibe en la teoría del dolo eventual”.*

---

responsabilidad penal de la persona jurídica en Derecho Brasileño, Revista de Derecho Penal y Criminología, 2da. Epoca, Número 6, 2000. Prats Canut, Josep Miquel, “Responsabilidad penal de la autoridades y funcionarios municipales en materia ambiental”, *Derecho del medio ambiente y administración local*, Coord. Por José Esteve Pardo, 1995, pp. 519-551. Finalmente desde el Derecho Penal Humanitario: Domínguez Matés, Rosario, *La Protección del Medio Ambiente en el Derecho Internacional Humanitario*, Tirant Lo Blanch. 2005.

<sup>(642)</sup> Sentencia del Tribunal Supremo español ROJ STS 7363/2000, sala de lo penal, de 16 de octubre de 2000, Madrid, Ponente Joaquín Giménez García. Número Recurso: 509/1999. Mismo razonamiento en Sentencia del Tribunal Supremo español ROJ STS 16/2000, sala de lo penal, de 10 de enero de 2000, Madrid, Ponente Joaquín Giménez García. Número Recurso: 3968/1997.

<sup>(643)</sup> Sentencia del Tribunal Supremo español ROJ STS 20999/1992, sala de lo penal, de 23 de abril de 1992, Madrid, Ponente Enrique Bacigalupo Zapater. Número Recurso: 3654/1992.

## 6.- Conclusiones.

1.- Entre los daños internacionales, distinguimos aquellos daños que son transfronterizos de los daños que son transnacionales.

Entendimos por daño civil transnacional: *aquella clase de daño al patrimonio cuyos elementos internacionales posicionan el principio de acción del hecho generador en un Estado y las consecuencias en otro, sean estos Estados fronterizos o no.*

Por su parte, el daño transnacional ha sido abordado por la doctrina desde la perspectiva de la imputabilidad de los gestores. En nuestro caso abordamos los fueros de competencia judicial internacional desde la perspectiva del daño transnacional, su naturaleza y alcances, cuando están relacionados daños civiles y daños ambientales.

Asimismo, en este capítulo nos referimos a la conveniencia de no condicionar la existencia de los daños civiles a la existencia de los daños ambientales. Este debate fue abordado porque trabajamos sobre un aspecto sustancial: la relación entre el hecho generador y el daño indican que el daño ambiental y el daño civil tienen existencias separadas y sólo se relacionan por el hecho generador.

2.- En materia competencial, no debe primar el criterio causalista, ni para establecer una relación entre daños civiles y daños ambientales, ni para distinguir entre daños civiles directos y daños indirectos. Es más, la causalidad es un elemento que “contamina” la determinación del foro competente, en la medida de que la exégesis del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 obliga a considerar estrictamente el lugar del “hecho dañoso”.

Sin perjuicio de lo anterior, el hecho dañoso es un concepto que está formado por dos elementos: el hecho generador y el daño.

Cuando determinamos el hecho generador material, entonces podemos determinar también la probabilidad del daño resultante.

A diferencia de la teoría clásica de causalidad, consideramos que “la intensidad de la probabilidad” es la que fundamenta la noción de daño directo. Por su parte, la probabilidad no distingue entre daños civiles y daños ambientales.

3.- Si bien el TJUE no se ha pronunciado sobre el vínculo existente entre el hecho generador y el hecho del daño (o resultado lesivo) esto ocurre porque existe un problema de certeza que gira en torno a la relación de causalidad entre ambos hechos.

Sin embargo, cuando utilizamos como criterio el “riesgo incrementado”, entonces el juez puede discriminar entre los daños que corresponden a un curso normal de sucesos, de aquellos daños que ocurren por haberse incrementado un riesgo. En la etapa de determinación de CJCI, el juez no necesita gran prueba sobre la “probabilidad de un daño” y basta con que realice el juicio hipotético contrario. Es decir, el juez solo debe analizar cuál es la situación normal de causa-efecto que se produce en el mundo de las relaciones civiles, para que a *contrario sensu*, un cambio manifiesto en los resultados arroje una intervención que al menos pueda calificarse como de “probable intervención” de un hecho que debe coincidir con el hecho generador.

En suma, la relación entre hecho generador y resultado lesivo, no sólo funda la CJCI de un tribunal, sino que también limita la extensión de dicha jurisdicción. Asimismo, constituye un parámetro de justicia procedimental y entrega contenido a la regla de ubicuidad para determinar qué daños son directos y qué daños son indirectos.

De esta forma, y vistos los problemas de certeza que existen en la relación de causalidad entre el hecho generador y el hecho del resultado lesivo o daño, consideramos que los tribunales debieran adoptar la Teoría de Riesgo Incrementado descrita anteriormente. De esta forma, el juez podrá determinar su competencia en base a “criterios preventivos”, de modo tal que el daño viene a ser considerado como resultado del incremento en el riesgo que ha sido aceptado por el demandado.

## CAPÍTULO FINAL

### CONCLUSIONES GENERALES

#### *Sumario:*

1.- Síntesis descriptiva. 2.- Hallazgos y valoraciones finales. 3.- Propuesta para una modificación al Reglamento (UE) No. 1215/2012.

---

#### **1.- Síntesis descriptiva.**

1.- Según fue presentado en la introducción de este trabajo, nuestro tema abordó la interpretación judicial, de tal forma que el tema principal de investigación fue: *La interpretación judicial del hecho dañoso (con sus vis hecho generador y daño) para la determinación de la competencia judicial civil internacional por daño ambiental ¿sistema a favor o en contra de la víctima de daño ambiental?*

En razón de lo anterior, y en forma paralela, nos hemos imbuido en análisis comparativos según las reglas que existen para la determinación de la legislación de fondo aplicable al caso concreto. De esta forma hemos buscado dotar de suficiencia y de coherencia a todo el sistema de Derecho Internacional Privado a nivel comunitario para el conocimiento de asuntos ambientales. Hemos analizado comparativa y analógicamente casos de demandas civiles internacionales, con énfasis en los criterios de competencia judicial civil internacional conocidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2.- Hemos desarrollado nuestro cometido considerando de suma relevancia incorporar en el juicio sobre competencia judicial a los modernos principios del Derecho Ambiental Internacional subyacentes en la política comunitaria. Hemos

desarrollado los principios de CJCI y los principios de protección ambiental en directrices que informan la eficiencia del sistema de Derecho Internacional Privado.

Este trabajo abordó – como antes no lo había hecho la doctrina - la aplicación instrumental de los principios de protección del medio ambiente y protección de parte a las reglas de competencia judicial civil internacional.

3.- Nos hemos hecho cargo de un tema sensible, como es la “finalidad de la norma atributiva de competencia judicial civil internacional”. Asimismo nos planteamos problemas relacionados con los fines de justicia retributiva, distributiva y preventiva que se encuentran ínsitos en el sistema comunitario de protección ambiental. Nuestro objetivo fue analizar la compatibilidad de los principios de protección ambiental con los principios procesales internacionales de: seguridad jurídica, buena fe y proximidad razonable.

En suma, considerando principalmente el principio de seguridad jurídica hemos buscado un título previsible de jurisdicción que responda eficientemente al derecho de tutela judicial efectiva para daños ambientales. Para ello establecimos criterios a fin de estar en condiciones de determinar qué foros están comprendidos en la expresión “hecho generador y qué foros están comprendidos en la expresión “daño”.

## **2.- Hallazgos y valoraciones finales.**

1.- Como señalamos en la primera parte de este trabajo - a propósito de la exposición del problema fáctico - existe un problema de hecho que se encuentra detrás de la determinación de la competencia judicial civil internacional por daño ambiental. El problema es la relación de causalidad con la que pretende relacionarse al daño civil y al daño ambiental. Ha quedado de manifiesto que la jurisprudencia del TJUE que creó “la regla de ubicuidad” tuvo por objetivo solucionar dos situaciones: *la primera*, determinar el hecho dañoso sin entrar en el debate de la causalidad entre el hecho generador y el daño, y *la segunda*, abordar el problema desde una

perspectiva fenomenológica (la del daño ambiental) sin entrar a pronunciarse sobre la relación entre el daño ambiental y el daño civil.

A lo largo de esta investigación hemos podido acreditar cómo esta forma de abordar este problema ha resultado ser ineficiente para la protección de las víctimas civiles por daño ambiental internacional.

En efecto, es ineficiente porque hasta nuestros días, y salvo la sentencia recaída en el caso *Bier vs Minas de Potasio de Alsacia* del año 1976, no existen otros asuntos sobre competencia civil y que involucren daños ambientales que hayan llegado al conocimiento del Tribunal de Luxemburgo. Todo lo cual, no corresponde con la realidad del tráfico internacional -cada vez mayor- de bienes, personas, servicios y capitales. En efecto, incluso las relaciones contractuales internacionales dependen de factores ambientales que pueden estar localizados en otros países.

Por su parte, los casos de desastres ambientales y grandes pérdidas económicas están siendo asumidos tanto por los Estados que desarrollan las labores de limpieza, como los particulares afectados. Las sociedades filiales de empresas internacionales que amenazan alto riesgo ambiental se constituyen jurídicamente como sociedades de responsabilidad limitada de bajo capital con el fin de asegurar la menor responsabilidad civil posible, según lo permita la legislación nacional aplicable. Así también tenemos que el debate sobre la competencia de tribunales extranjeros se reduce en la medida que la empresa internacional se ha ido “atomizando” en varias sociedades de responsabilidad limitada con diferentes domicilios.

Por otra parte, la razón para la falta de demandas civiles internacionales asociadas a un daño ambiental obedece al hecho de haberse reducido la realidad jurídica del daño ambiental internacional. En efecto, nos encontramos frente a un tratamiento jurídico “de compartimentos”, que no guardan relación con la complejidad internacional; sino que además, encontramos que el daño ambiental internacional ha sido reducido a la categoría de “daño transfronterizo”, y por tanto, encontramos carencia de conceptos y categorías que se hagan cargo del “daño civil

transnacional”. Por su parte, la realidad internacional demuestra que el daño civil es cada vez más “transnacional” y no necesariamente trasfronterizo. El daño ambiental puede ser transfronterizo o simplemente nacional, pero aun en ambos casos, puede producir efectos que exceden los intereses de un solo Estado.

Parte de esta fragmentación se debe al hecho de haber considerado que los daños civiles son una categoría de daño “derivada” del daño ambiental.

Por estas razones, consideramos que agregar condiciones para el establecimiento de la competencia judicial civil a la ya difícil prueba del daño ambiental, resulta del todo ineficiente para la obtención de los fines perseguidos por el legislador y por el constituyente comunitario en materia de protección ambiental.

2.- Defensores, - según señalamos desde el Primer Capítulo -, de las vías privadas internacionales para dar eficiencia a los derechos de tutela y protección ambiental, es que, consideramos imperativo que se reconozca a las partes del proceso civil internacional el acceso pleno a la jurisdicción, especialmente por la vía activa cuando se encuentra involucrado un daño ambiental.

La opción por un proceso internacional “dispositivo y posible” para el demandante civil obliga también a considerar sus intereses directamente involucrados en el proceso. Esto implica especialmente, que el juez llamado a pronunciarse sobre su competencia judicial internacional no deberá traer los intereses públicos del Estado donde se sitúa el foro.

Es posible abordar eficientemente la protección de un bien colectivo (como lo es el medio ambiente) por la vía de la prevención y de la reparación integral conocidas por la judicatura ordinaria, porque esta vía otorga mayor estabilidad, certeza y alto desarrollo dogmático. En efecto, tanto la teoría de la responsabilidad internacional civil extracontractual como el desarrollo dogmático del derecho de tutela judicial efectiva apoyan la protección de bienes colectivos.

De aquí resulta que un alto grado de protección ambiental no pueden coexistir con una interpretación restrictiva del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Estimamos necesario que toda interpretación sobre la competencia judicial internacional debe guardar relación con el más alto estándar de protección ambiental.

Finalmente, en materias ambientales, la priorización de la noción de “hecho dañoso” por sobre la noción de “ilícito”, hace que el Derecho Internacional Privado se haga cargo de este problema “desde sus efectos” más que desde el juicio de reproche que merezca una acción imputable.

3.- En el ámbito europeo ha sido posible constatar la falta de un régimen competencial internacional especial en materia ambiental. En efecto, salvo la normativa especial sectorial que rige a materias relativas a la contaminación por hidrocarburos, energía nuclear o aún por el transporte de sustancias peligrosas, tenemos que el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, aplicable a delitos y cuasidelitos civiles es el régimen general y supletorio.

Hemos abordado ese vacío con la perspectiva de los principios de protección ambiental, de modo tal que tales principios actúen instrumentalizados en reglas de competencia judicial.

De aquí tenemos que, los principios ambientales si están recogidos en cuerpos normativos comunitarios y por tanto si intervienen en la interpretación de normas de Derecho Internacional Privado, tales como el Reglamento (UE) No. 1215/2012 y el Reglamento 864/2007 Roma II.

De todos los principios ambientales que se expusieron en esta investigación, tres de ellos están positivizados en el Reglamento (UE) No. 1215/2012:

- a) principio de cautela y acción preventiva,
- b) principio de corrección en la fuente misma y
- c) principio quien contamina paga.

Sin perjuicio de esto, todos los principios analizados en el Capítulo II de la Primera parte de esta investigación están recogidos en Tratados bilaterales y multilaterales que han sido suscritos por los Estados europeos. Asimismo, han pasado



a ser materias de competencia de la Unión Europea y a estar protegidos por la Convención Europea de Derechos Humanos. El desarrollo normativo de la protección ambiental alcanza a cuerpos comunitarios con la jerarquía del Tratado Constitutivo de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

A nivel reglamentario, esta positivización se encuentra recogida en los considerandos 24º y 25º, como también en el artículo 7º todos del Reglamento 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II). No existe un reconocimiento similar en el Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Por estas razones y aun cuando no existe una norma expresa que establezca un fuero especial para delitos y cuasidelitos ambientales, es posible y es coherente con el sistema de protección ambiental que se ha dado la Unión Europea, el hecho de mantener una interpretación del fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 en el sentido de promover la mayor protección ambiental posible.

De la misma forma, y tal como predicamos el favorecimiento a la protección de la víctima de un daño ambiental; estimamos conveniente comprender que la víctima del daño civil también está protegida por la interpretación beneficiosa de los principios ambientales. Existen dos razones para llegar a esta conclusión:

- a) Los principios señalados en las normas comunitarias no hacen diferencias, y
- b) Entendemos como protección ambiental el cumplimiento del fin de reparación integral en la que ciertamente están envueltos los daños civiles directamente asociados.

4.- El Derecho Ambiental Internacional es de carácter programático y está compuesto -en buena parte- por normas de *soft law*. Esta característica hace que suela reclamársele adolecer de garantías jurisdiccionales para un adecuado juicio de responsabilidad. Por esta situación nos hemos visto en la necesidad de asociar el análisis de los principios del Derecho Internacional Ambiental con el análisis del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En efecto, este derecho civil y

político nos permite entrar en el amplio paraguas de la protección normativa de los cuerpos comunitarios.

Este derecho-principio es capaz de influir en la interpretación de los principios ambientales internacionales, dotándoles de mayor concreción. Por esta razón, es posible recurrir a él, en la interpretación teleológica de principios ambientales internacionales tales como:

- a) principio de interdependencia ecológica,
- b) principio de equidad,
- c) principio de responsabilidad común pero diferenciada y
- c) principio de recursos fronterizos compartidos.

Todos los cuales fueron desarrollados en este trabajo.

Por su parte, la interacción entre el derecho de tutela judicial efectiva y el derecho de acceso igualitario a la justicia hacen que el demandante de daños ambientales internacionales (y de daños civiles asociados al daño ambiental) se vea motivado a buscar la jurisdicción que mejor satisfaga sus pretensiones.

Por esta razón, el sistema de distribución de competencias judiciales internacionales debe tomar en consideración la influencia de los derechos constitucionales, y en especial el derecho de tutela judicial efectiva, al momento de interpretar el vínculo de conexión que otorga competencia a un tribunal. La flexibilización del fuero estará en estricto cumplimiento con el respeto al derecho de tutela judicial efectiva.

5.- En línea con el estudio de los principios ambientales y con los principios de competencia judicial internacional, tenemos que este trabajo se ha hecho cargo del debate que genera en la doctrina el principio *favor laesi*, cuando está establecido en beneficio de la víctima civil de un daño ambiental.

Falsos problemas de coherencia con el fuero general (domicilio del demandado) o con fueros especiales para delitos y cuasidelitos civiles nos señalan que, en la interpretación de los fueros especiales para daños ambientales, existe un

interés superior: “la defensa tuitiva que facilita la defensa procesal internacional de los intereses de los más débiles”.

Si bien la jurisprudencia del TJUE no ha acogido expresamente el principio *favor laesi*, concluimos que no puede desconocerse que el derecho de *optio fori* que el TJUE ha establecido a favor del demandante – por aplicación de la regla de ubicuidad-, ha nacido precisamente por considerar al demandante como “la parte más débil” de la relación internacional.

Por otra parte, el legislador comunitario ha venido a establecer un *forum actoris* para otros casos de relaciones extracontractuales, como ocurre con los derechos del consumidor, los derechos del trabajador o los derechos del asegurado.

Por estas razones, y recogiendo las limitaciones que el TJUE ha establecido para los *forum actoris*, consideramos que, sea por la vía de dar aplicabilidad al principio *favor laesi* o sea por la vía de la creación de un *forum actoris*, es posible y es conveniente establecer un fuero especial para casos de daño ambiental.

6.- La experiencia de los tribunales nacionales, ha demostrado:

a) Necesidad de probar la relación entre el hecho generador y el resultado lesivo, evitando así, los problemas generados por el sentido y alcance de la regla de ubicuidad,

b) Utilizar perspectiva en cálculo probabilístico, para vincular el hecho generador con el resultado dañoso. Lo cual se encuentra en sintonía con el criterio utilizado por la teoría del riesgo incrementado. No obstante lo anterior, existen antecedentes en la jurisprudencia nacional en el uso de criterios propios de la Teoría de la causalidad adecuada,

c) Inclinación por adoptar un juicio de reproche mayor cuando se acredita la “previsibilidad” con la que pudo haber actuado el demandado.

Todos estos antecedentes demuestran que los tribunales nacionales han aumentado el juicio de reproche por conductas exigibles a los demandados civiles asociados a un daño ambiental. Extrapolando esta situación, y advirtiendo la tendencia en el Derecho de fondo en torno a elevar el juicio de reproche en base a la noción de la culpa; tenemos que en materia competencial, se altera la “carga de la internacionalidad” en contra del demandado, propendiendo a entender que el demandante de daños ambientales es “la parte más débil” de la relación internacional, y por tanto, es susceptible de una mayor protección.

7.- Después de que el TJUE, se pronunciase sobre el primero y más importante caso de contaminación transfronteriza - caso *Bier/Minas de Potasio de Alsacia* - se estableció una regla de ubicuidad, que permitió la concurrencia de dos foros, a saber: el foro del lugar del hecho generador y el foro del lugar del resultado dañoso. La regla de ubicuidad nace en el amplio paraguas que le otorga el fuero “lugar del hecho dañoso” señalado en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

Consideramos que la solución que el TJUE dio al caso *Bier/Minas de Potasio de Alsacia*, es aplicable a los “asuntos simples” de responsabilidad ambiental internacional, esto es, a casos de “contaminación transfronteriza” en la que coinciden en un mismo lugar, tanto daños civiles como daños ambientales.

En efecto, aplicar la regla de ubicuidad establecida en el caso *Bier/Minas de Potasio de Alsacia* a casos de contaminación internacional sólo resulta eficiente para las hipótesis de daño internacional de carácter fronterizo, porque en estos casos solamente están involucradas las jurisdicciones de Estados vecinos, los que, por compartir frontera común, presentan un daño ambiental con “unidad de acción y unidad de consecuencias”.

En estos casos, la regla de ubicuidad es coherente con la lógica del sistema comunitario de distribución de competencias judiciales y, asimismo, es coherente con los fines de justicia ambiental perseguidos por el legislador comunitario.

Sin embargo, la regla de ubicuidad aplicada a casos complejos de contaminación internacional (al que denominamos “daño transnacional”) plantea serias interrogantes. Nos referimos a casos complejos cuando existen daños civiles que pueden no coincidir con el lugar donde se manifiestan los daños ambientales.

En estas circunstancias las interrogantes asociadas a la regla de ubicuidad guardan relación con dos grandes temas:

- a) La distinción entre delitos y cuasidelitos civiles, por una parte, y delitos y cuasidelitos ambientales, por otra; y
- b) La distinción entre daños civiles directos y daños civiles indirectos.

Durante el desarrollo de esta investigación nos hemos hecho cargo de ambos temas; y concluimos que la mayor o menor flexibilización en la interpretación del vínculo incide en los dos grandes temas referidos anteriormente.

8.- Habiendo presentado las diferencias que existen entre la obligación internacional extracontractual civil y la obligación internacional extracontractual ambiental, resulta que no parece razonable insistir en un tratamiento fundado en el mismo criterio que se utiliza para los daños civiles *strictu sensu*, por el sólo hecho de que no exista un fuero de competencia judicial internacional especial para daños ambientales.

En efecto, el fuero del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 ha sido ideado para materias civiles. De ahí que toda aplicación a regímenes sectoriales o especiales termina obligando al intérprete a realizar matices, incluir excepciones y sentar limitaciones de interpretación restringida. Precisamente, la identificación de este problema ha sido una de las razones fundamentales para la elaboración de este trabajo de investigación.

Por este motivo, hemos venido a establecer las características que diferencian ambos tipos de daños (daños civiles *strictu sensu* y daños ambientales) a fin de fundar un sistema de distribución de competencia propio para los daños civiles que están asociados a un daño ambiental.

La utilidad de este propósito puede apreciarse claramente en materia de medidas provisionales y medidas cautelares. En efecto, en materia de competencia judicial internacional las medidas cautelares son consideradas obligaciones extracontractuales.

Sin embargo, considerando que las obligaciones nacidas en daños civiles y las obligaciones nacidas en daños ambientales son diferentes en cuanto a su naturaleza y finalidad, resulta que nos encontramos con que el fuero “hecho dañoso” no es lo suficientemente claro para dar cobertura a las necesidades que presentan las obligaciones extracontractuales nacidas de un daño ambiental, como tampoco para sus correspondientes obligaciones preventivas y cautelares.

Así por ejemplo, las medidas cautelares de naturaleza ambiental (que por regla general son obligaciones de no hacer) deberán promoverse en el lugar donde se origina el daño ambiental o bien en el lugar donde se manifiestan las consecuencias dañosas de la acción. Por otra parte, en cambio, las medidas cautelares estrictamente civiles, pueden necesitar practicarse exclusivamente en el domicilio del demandado.

Por todo lo anterior, y en razón del principio de cooperación judicial y de cooperación administrativa, tenemos que no es necesario que un daño se materialice para que se entienda incluido en la expresión “lugar donde se hubiere producido o pudiese producirse el hecho dañoso” que utiliza el artículo 7.2 anteriormente referido. El lugar donde se practicará una medida diferirá según si el daño es civil o ambiental, y también diferirá si el daño se ha materializado o si es potencial.

Por tanto, el tribunal ante el cual se solicita una orden prejudicial precautoria o cautelar civil no puede excusar su competencia a pretexto de que:

a) otro tribunal está mejor situado para conocer del asunto y por tanto de las medidas precautorias que se le solicitan, porque ello puede no ser absolutamente cierto;

b) que alegue que el fuero “hecho dañoso” para medidas precautorias solo corresponde al lugar donde se verifica el “daño”, porque los daños civiles son diferentes a los daños ambientales, o

c) que ordene que se le acredite una relación de causa-efecto, entre un daño ambiental y un daño civil, porque este requisito sería inexigible para los fines perseguidos por las medidas precautorias o cautelares.

9.- Habiendo propuesto una interpretación extensiva del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, para casos de daño ambiental internacional, nos hicimos cargo del riesgo que señalan los defensores de tesis restrictivas de interpretación de los fueros, basados en el riesgo de un *forum shopping*.

Puestos ante la pregunta sobre si el derecho de *optio fori* que proponemos a favor del demandante civil directo, constituye o no un derecho abusivo, concluimos que tal derecho de *optio fori* es absoluto. Sin embargo, este derecho absoluto será “abusivo” en la medida que se configure un *forum shopping malus*.

Llegando más allá de nuestros propios objetivos, hemos propuesto un concepto instrumental de *forum shopping malus* que sea capaz de ilustrar al juez sobre las posibles razones para una negativa de declinatoria internacional. Así es que proponemos como concepto de *forum shopping malus*:

*“Un abuso del derecho de opción por parte del demandante, quien funda su interés en un cambio en el vínculo de conexión existiendo eventual perjuicio para el demandado, cuando tal perjuicio genera una alteración en la previsibilidad del título de jurisdicción, y niega el efecto útil y la aplicación uniforme del Reglamento (UE) No. 1215/2012, bajo la interpretación teleológica de los fines previstos por el constituyente y por el legislador comunitario”.*

La interpretación teleológica a la que nos referimos en este concepto supone incluir los principios y valores de protección ambiental aceptados y vigentes en la comunidad europea. Tales principios también deben aplicarse a la interpretación de los daños civiles directos.

10.- El problema sobre la determinación del “hecho generador”, nos ha llevado a analizar si es posible entender por hecho generador, no sólo al lugar donde se ha realizado la acción material que dio origen físico a la contaminación, sino ir más allá y resolver si es posible asociar el hecho generador al domicilio del demandado.

Para abordar esta pregunta, partimos de una hipótesis: los daños civiles no son una consecuencia de los daños ambientales, sino que unos y otros “comparten el mismo hecho generador”. De aquí concluimos que el tribunal que es competente para conocer del hecho generador de los daños ambientales también es competente para conocer del hecho generador de los daños civiles directos.

Tanto para personas naturales o físicas como también para personas jurídicas o morales, el lugar del hecho generador de un daño es aquél donde se ha dado inicio a la acción cuyas consecuencias han desencadenado un daño ambiental.

El lugar donde se da inicio a la acción, puede estar determinado por la realidad fenomenológica de los hechos materiales o, como ocurre en nuestro caso, puede obedecer a la realidad jurídica del funcionamiento de la empresa transnacional.

En el segundo caso, tenemos que el inicio de la acción ha obedecido a una orden, que representándose el resultado dañoso ha aceptado sus consecuencias como probables y no ha adoptado las medidas necesarias para evitarlo.

Tal situación ocurre claramente con las órdenes corporativas que se imparten por vía telemática en oficinas localizadas a miles de kilómetros de distancia del lugar del daño, proveniente de personas con poder de dirección unitaria en la sociedad o en el grupo de sociedades que pertenecen a la misma empresa.

De otra forma estaríamos desconociendo el funcionamiento de la empresa en la escala global. Asimismo, estaríamos desconociendo la evolución de las categorías jurídicas sobre relaciones internacionales, situaciones jurídicas y obligaciones internacionales entre privados, todas las cuales dieron nacimiento al propio Derecho Internacional Privado.



Son los albores del Derecho Global, caracterizado por la deslocalización de las personas y de los bienes; y nos enfrentamos a los riesgos de la *praxis* del Derecho internacional tradicional, nacionalista y compartimentalizado.

Si bien en materia extracontractual, la obligación gira en torno al daño, tenemos que la sumisión de competencia no puede conformarse con la realidad fenomenológica del daño, y menos aún en materia ambiental, porque genera el riesgo de favorecer implícitamente una especie de *dumping ambiental* por aceptar que los costes de la contaminación (entre ellos los costes de la litigación internacional) sólo queden radicados en el lugar del daño, el que suele coincidir con un lugar que tiene legislación ambiental feble.

El discurso sobre la protección de la víctima de daño ambiental debe estar en condiciones de entregar las herramientas para que la víctima del daño pueda optar por la jurisdicción que estime más conveniente para sus intereses. Una de cuyas jurisdicciones puede ser la del domicilio del demandado transnacional.

De esta forma, la interpretación del fuero especial del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 debe entender que el “lugar del hecho dañoso” integra: tanto el lugar donde se originaron los daños como el lugar del domicilio del demandado.

Finalmente, cuando una empresa está constituida por varias sociedades, la determinación del domicilio es materia de prueba y de definición autónoma según los considerando 15 y 16 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

11.- En los casos de contaminación producida por empresas transnacionales, la demanda queda radicada en el domicilio del demandado por aplicación del fuero establecido en el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, en relación con:

- a) el artículo 4,
- b) artículo 8.1 y
- c) artículo 63, todos del mismo Reglamento.

De esta forma, la aplicación de la regla de ubicuidad permitirá al demandante de daños ambientales (y de daños civiles directos) presentar la demanda a su arbitrio:

o en el lugar donde se manifestaron los daños o en el lugar del domicilio del demandado.

En efecto, el debate sobre la previsibilidad y la certeza en los fueros debe pasar también –como lo señalamos en los Capítulos II y III de la Primera Parte de esta investigación - por el cumplimiento de:

a.-) Fines de justicia distributiva, correctiva y preventiva propios de la responsabilidad ambiental (cautela y acción preventiva, corrección en la fuente misma y principio quien contamina paga).

b.-) Reparación integral de los daños civiles asociados a un daño ambiental y

c.-) Armonía en la interpretación de las directrices y de la política de responsabilidad ambiental de todos los cuerpos normativos comunitarios.

Así, en materia de daños ambientales al no encontrarnos en un ámbito de competencias exclusivas, sino de fueros especiales, tenemos que, si bien los fueros se interpretan en forma restrictiva, no por ello están exentos de guardar coherencia con el principio básico de competencia general establecido en el artículo 4º del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

12.- Cuando el demandado es una persona jurídica internacional, es probable que nos encontremos con pluralidad de sociedades que forman parte de una empresa transnacional o de un grupo internacional de sociedades.

Todas estas sociedades pueden tener distinto grado de participación en la comisión del ilícito civil internacional. En ausencia de claridad sobre el grado de participación, y apoyados en la doctrina clásica de la responsabilidad extracontractual, tenemos que la víctima está facultada para demandar conjunta y solidariamente a todas las sociedades participantes.

En efecto, si el demandado es un grupo de sociedades pudo haber más de un lugar donde se adoptaron las decisiones que aceptaron el riesgo de daño ambiental. Lo normal será que, en razón de la política corporativa jerarquizada sólo una de ellas

(la sociedad controladora o la que lleva la dirección económica unitaria del grupo) sea responsable de la decisión cuya acción permitió la ocurrencia de un daño ambiental.

El legislador europeo ha ido conceptualizando el fenómeno de los grupos de sociedades en base al carácter económico de la dirección, porque dicho carácter económico es el que determina donde, cómo y cuando se asumen los riesgos de una inversión.

Si queremos distinguir el sentido y alcance del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 en contraste con el artículo 7.2 del mismo Reglamento, debemos considerar que el artículo 8.1 se refiere a “varios demandados”, mientras que el artículo 7.2 se refiere a un solo demandado. En el caso de las empresas transnacionales el demandado es uno solo, pero está compuesto por varias sociedades distribuidas en distintos Estados; dichas sociedades actúan de tal forma que mantienen una unidad económica y obedecen a los mismos fines corporativos.

En este caso, la utilidad práctica de considerar a la empresa transnacional como demandado singular, radica en la posibilidad de aplicar el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012 y en concreto en la posibilidad de aplicar la regla de ubicuidad.

Consideramos que en los casos de grupos de sociedades existe responsabilidad solidaria entre las sociedades que forman parte del grupo porque todas ellas han contribuido a conformar un ilícito, siendo posible probar colusión.

Existe colusión cuando hay unidad de acción concertada entre las distintas sociedades pertenecientes al grupo o a la misma empresa transnacional. De este modo todas las sociedades involucradas que ejecutan una acción ordenada son obedientes a una estrategia mancomunada.

Por todas estas razones, tenemos que los efectos perseguidos por el demandante podrán satisfacerse *prima facie* con el sólo mérito de la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento (UE) No. 1215/2012. Sin embargo, la facultad que otorga la regla de ubicuidad establecida para el artículo 7.2 del mismo Reglamento

beneficiará al demandante que actúa contra un “demandado singular plurilocalizado”, más no cuando actúa contra “demandados simplemente múltiples”.

De todo lo anterior se colige que cuando existe “simple conjunción de acciones” no podríamos aplicar la regla de ubicuidad establecida para el artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

13.- Cuando nos encontramos frente a varias sociedades que operan en base a una alteración en la estructura organizacional que evidencia el ejercicio de una “dirección económica unitaria”, entonces tenemos que el lugar donde se toman las decisiones puede o no coincidir con el lugar donde se sufre el siniestro.

La matriz, propietaria, controladora o sociedad que lleva la dirección económica unitaria participa de la responsabilidad en las externalidades negativas de sus filiales o sociedades relacionadas en caso de verificarse un daño ambiental.

La empresa transnacional, o grupo de sociedades no puede eludir la posibilidad de que el demandante presente su demanda en el lugar donde se ha producido el hecho generador, entendiendo que el lugar del hecho generador ha sido aquél donde la empresa está domiciliada por tener allí la matriz, la sociedad controladora o la sociedad que lleva la dirección económica del grupo internacional de sociedades.

Si bien, la prueba del lugar del hecho generador, parece presentarse como aséptica de los aspectos relacionados con el fondo del asunto, resulta que ello no es tan tajante, porque para llegar a determinar el lugar del hecho generador, hemos debido pasar también por la identificación de la persona del demandado, y así, hemos debido aplicar consideraciones que guardan relación con el fondo del asunto, tales como: existencia o no de presunciones de culpa, verificación de responsabilidades por el hecho ajeno e incluso existencia de responsabilidades objetivas. Todas las cuales deberán –a lo menos – informar la prueba sobre el lugar donde se encuentra localizado el hecho generador del daño.

14.- Cuando un mismo hecho generador irradia varios resultados dañosos ubicados en distintos Estados, y cuando tales resultados dañosos demuestran disparidad en cuanto a su intensidad, extensión, temporalidad y personas afectadas (involucrando en unos casos asuntos civiles y en otros asuntos ambientales); entonces tenemos que, la regla de ubicuidad no es una solución eficiente por falta de claridad y de certeza jurídica.

De aquí que, el problema que se advierte con la adopción de la regla de ubicuidad para la víctima civil radica en la falta de una adecuada teoría que relacione el hecho generador del daño y el resultado dañoso. Esta teoría debiera estar en condiciones de determinar la extensión de los daños civiles por los cuales un determinado tribunal tiene CJCI.

En efecto, ni el legislador, ni el TJUE han optado por una teoría que defina o relacione el hecho generador con el resultado, cuestión que es esencial en cualquier modelo de atribución de competencia. Tal falencia incide directamente en la determinación del tribunal competente.

Habiéndonos puesto a la labor de reconocer los límites de la regla de ubicuidad para las víctimas civiles asociadas a un daño ambiental, observamos como los daños civiles han sido tratados como “derivados” de los daños ambientales. En tal sentido la víctima civil ha sufrido los costos de asumir la carga de la litigación internacional, al tener que concurrir al foro del daño directo, entendiendo a este último como el lugar donde se produjo el daño ambiental.

No compartimos el juicio apriorístico sobre la naturaleza indirecta del daño civil en relación con el daño ambiental. Estimamos que tanto el daño civil como el daño ambiental derivan de un mismo hecho generador; y que, en tal razón, la regla de ubicuidad beneficia a las víctimas directas de daño ambiental y a las víctimas directas de daño civil.

En efecto, la víctima de daño civil internacional asociada a un daño ambiental no debiera estar expuesta a las mismas limitaciones que la víctima civil internacional ordinaria. La causa del perjuicio es la afectación de un bien (el medio ambiente) que tiene la naturaleza de condición para el desarrollo de todas las actividades humanas. La protección de ese bien superior será más eficiente, desde la perspectiva civil, en la medida que la jurisdicción civil se haga cargo de la interpretación finalista de las normas de protección ambiental.

Para ello proponemos no traspasar a la víctima civil, los costos de la litigación internacional, permitiéndole abrir un foro de competencia en el lugar donde experimente un daño directo, sea cual fuere dicho lugar y coincida o no con el lugar del daño ambiental.

Asimismo, proponemos diferenciar ambas categorías de víctimas (civiles y ambientales), a fin de que el juicio sobre lo directo y lo indirecto del vínculo se realice en forma separada.

Por otro lado, creemos necesario abrir un debate sobre un concepto cuyo contenido no está suficientemente esclarecido: el concepto de “daño civil transnacional”.

Al respecto, abordando el daño civil transnacional asociado a un daño ambiental y siguiendo la doctrina del TJUE, creemos que la existencia de “elementos internacionales” en la comisión de un daño es condición suficiente para poder elevar el daño a la dimensión internacional.

15.- Centrando nuestra atención en los daños civiles y en las limitaciones que la doctrina jurisprudencial del TJUE ha ido estableciendo con los años; nos preguntamos por la extensión que debía darse a los daños civiles asociados a un daño ambiental, de modo que pueda determinarse si la víctima civil directa de un daño transnacional goza o no del mismo estatus que goza la víctima de daño ambiental, cuando ambas categorías no coinciden en la misma persona.

Hemos concluido que existe interés por sentar las diferencias entre ambas categorías de daños (civiles y ambientales); porque cuando están confundidas otorgan una perspectiva poco clara para la regla de ubicuidad.

Por otro lado, no podemos negar que la acumulación en un solo foro competente, es conveniente por razones de economía procesal. Sin embargo, desconocer (o negar) los fines de la justicia ambiental vs los fines de la justicia patrimonial, que se encuentran ínsitos en la pretensión civil, puede arrojar notables diferencias entre el foro competente para conocer del daño ambiental y el foro competente para conocer del daño civil.

Creemos que es posible aplicar los fines de justicia ambiental en beneficio del demandante civil, sin que se confunda el tratamiento de los daños civiles con el tratamiento de los daños ambientales. La confusión sólo perjudica a las víctimas civiles directas por los daños sufridos en Estados a los que no alcanza el daño ambiental, y por tanto, a situaciones donde la regla de ubicuidad queda injustamente en entredicho.

16.- Proponemos una interpretación extensiva de la regla de ubicuidad, de modo tal que abarque los “daños civiles directos” y asegure el cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Asegurar el mejor lugar para el desarrollo de los procedimientos judiciales promovidos por demandantes civiles. La economía procesal internacional en casos que involucran daños ambientales, guarda relación con: la recolección de pruebas, peritajes, notificaciones, cumplimiento de las resoluciones, etc. Todo lo cual supone una carga especialmente dura para las víctimas de daño civil, máxime cuando la calidad de víctima civil no coincide con la calidad de víctima ambiental en la misma persona.

b) Establecer criterios justos en la distribución de los costes por externalidades negativas y riesgos asumidos en el desarrollo de una actividad con efectos ambientales perjudiciales (justicia retributiva), no queridos ni asumidos por las víctimas civiles, y

c) Asegurar una tutela cautelar, por amenaza de daño civil internacional, en caso de que exista riesgo (justicia preventiva).

Así, el derecho de *optio fori*, en beneficio del demandante civil (fundado en la regla de ubicuidad), recogerá bases de justicia material, justicia retributiva y justicia preventiva.

Los descritos fines de justicia están a favor de la “parte más débil” y en ese sentido consideramos que la víctima civil internacional por contaminación es la parte más débil de la relación internacional.

17.- Para efectos de interpretar extensivamente la regla de ubicuidad en favor de la víctima civil, y configurar un *forum actoris* en cualquier lugar donde la víctima civil experimente un “daño directo”, hemos considerado necesario que se acompañe prueba que sirva para:

a.-) Establecer *un vínculo de conexión entre el daño civil, el daño ambiental y el foro competente*, de tal forma que sólo los “daños civiles directos” se beneficien del *forum actoris*.

Un daño civil será directo no necesariamente porque se haya producido en el mismo lugar del daño ambiental.

Las víctimas de daño civil, son aquellas que experimentan personalmente el daño ambiental; sin embargo, también existen víctimas ubicadas en otros Estados que igualmente se relacionan en forma directa con el ecosistema dañado (por ejemplo por vía turística, mediante actividades de investigación, transporte de pasajeros, ONGs, etc.), y por tanto, también deberán ser consideradas víctimas directas.



A tales víctimas no se les puede prohibir el beneficio de *optio fori* que da la regla de ubicuidad.

Hemos fundado este criterio principalmente en el análisis analógico de las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o TJCE según la fecha de dictación de la sentencia): STJCE C-281/02 asunto *Andrew Owusu*. STJCE (56/79, Rec. p. 89), *Zelger*, apartado 3; STJCE 21/76, Rec. p. 1735, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*, apartado 11; STJCE 189/87, Rec. p. 5565, *Kalfelis*, apartado 11, y STJCE C-365/88, Rec. p. I-1845 asunto *Hagen*, apartado 11.

b.-) *Asegurar la protección al demandante de daños civiles ambientales, en razón de considerársele la “parte más débil”*. El propio legislador del Reglamento (UE) No. 1215/2012 ha establecido con anterioridad regímenes de excepción, en consideración a la situación de ciertas víctimas: consumidores (artículos 17-19), trabajadores (artículos 20-23) y asegurados (artículos 15 y 16), entre los más relevantes.

En nuestro caso proponemos un régimen especial para las víctimas de daño ambiental.

Hemos fundado este criterio principalmente en el análisis analógico de las siguientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (o TJCE según la fecha de dictación de la sentencia): STJCE C-96/00, Rec. p. I-6367 asunto *Gabriel*, apartado 39, STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*, y STJCE C-347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*.

18.- Si bien no existe un régimen especial para las víctimas de daños civiles y de daños ambientales puros (llamados también ecológicos), en caso de que existiera tal régimen, debiera estar en consonancia con el *optio legis* establecido en materia de legislación aplicable por el Reglamento 864/2007 Roma II. Este Reglamento sí reconoce al demandante de daños ambientales y de daños civiles asociados, como la parte más débil.

Cosa que proponemos interpretar coherentemente de *lege ferenda*.

Mientras no exista una modificación, en este sentido, al Reglamento (UE) No. 1215/2012 nada impide al juez nacional aplicar los criterios que derivan de principios de protección de la víctima civil ambiental, cuando es requerido de competencia, por la vía activa, aplicando la regla de ubicuidad.

Promovida que fuere una declinatoria internacional, según el TJUE, la decisión del juez, debe ponderar:

- a) La buena administración de justicia,
- b) La posible falta de coherencia entre las resoluciones judiciales dictadas en diferentes Estados, asegurando resoluciones conciliables entre sí con las emitidas por otros tribunales,
- c) Velar por la ejecutabilidad de sus decisiones; y sobre todo,
- d) Resolver el litigio con un fin de justicia si - y sólo si - está “jurídicamente mejor situado” para conocer del asunto.

Creemos que el juez del lugar donde se produce el daño civil directo (sea cual fuere dicho lugar y coincida o no con el lugar del daño ambiental) está tan bien posicionado, como el juez del lugar donde se produce el hecho generador del daño civil.

### **3.- Propuesta para una modificación al Reglamento (UE) No. 1215/2012.**

Siendo posible extraer líneas prácticas en base al desarrollo analítico de los foros de competencia judicial internacional para daños ambientales, nos proponemos establecer con precisión una propuesta de modificación al artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Los conocimientos adquiridos en base a la investigación, expuestos a la luz de las conclusiones generales y de las conclusiones específicas de cada uno de los

capítulos, son capaces de ilustrar metas y valores que guardan relación con la tutela ambiental en base a la protección de la libertad de elección que pueda reconocerse a la víctima de daño ambiental y a la víctima de daño civil asociado a un daño ambiental.

De esta forma, nuestro estudio se propuso realizar exploración, descripción, análisis y conceptualización de los fueros, de forma tal que se encaminó a resolver problemas cognoscitivos y de interpretación. Sin embargo, resulta que nos encontramos en la posibilidad de presentar una vía práctica de acción en dirección a una nueva reforma del artículo 7.2 del Reglamento (UE) No. 1215/2012.

De esta forma, la evolución de los fueros de competencia podrá estar en sintonía con la evolución que ha experimentado la legislación aplicable para casos de daños ambientales internacionales y para daños civiles internacionales relacionados con un daño ambiental.

Nuestra **Propuesta de Modificación al** Reglamento (UE) No. 1215/2012 en materia de tribunal competente para daños ambientales es la siguiente:

**Agregar Considerando 42:**

“En cuanto a los daños medioambientales, el artículo 191° del Tratado de Funcionamiento de la UE, contempla un elevado nivel de protección, basado en los principios de cautela y acción preventiva, principio de corrección en la fuente misma y en el principio de quien contamina paga; todos los cuales favorecen el recurso al principio *favor laesi* en materia ambiental, por considerar a la víctima de daño ambiental y a la víctima de daño civil directo como “la parte más débil” de la relación jurídica internacional.”

**Agregar considerando 43:**

“Por *daño medioambiental* debe entenderse al cambio adverso de un recurso natural, como el agua, el suelo o el aire, el perjuicio a una función que desempeña ese recurso natural en beneficio de otro recurso natural o del público, o un perjuicio a la

variabilidad entre los organismos vivos, tanto si se produce *directa como indirectamente*.”

**Agregar Considerando 44:**

“Por *daño civil asociado a un daño ambiental* debe entenderse a un *daño patrimonial directo*, cuyo hecho generador coincide con el hecho generador del daño medioambiental y cuyas consecuencias se manifiestan en los bienes y en las personas.”

**Agregar Considerando 45:**

“Por *lugar del hecho generador de un daño ambiental* debe entenderse: a) el lugar donde se ha dado inicio a una acción material que causa un daño ambiental o b) el lugar donde se tomó la decisión que pudo representarse el daño ambiental en otro Estado, aceptándolo como probable y sin tomar las medidas pertinentes conducentes a evitarlo, a disminuir el riesgo y/o atenuar los efectos.”

**Agregar Considerando 46:**

“Por *forum shopping malus* debe entenderse: Un abuso del derecho de opción por parte del demandante, quien funda su interés en un cambio en el vínculo de conexión existiendo eventual perjuicio para el demandado, cuando tal perjuicio genera una alteración en la previsibilidad del título de jurisdicción, y niega el efecto útil y la aplicación uniforme del Reglamento, bajo la interpretación teleológica de los fines previstos por el constituyente y por el legislador comunitario”.

**Agregar Considerando 47:**

“A fin de remediar situaciones de denegación de justicia en materia de daños ambientales, se introduce en el presente Reglamento un *forum necessitatis* que permite, en casos excepcionales, que el órgano jurisdiccional de un Estado miembro conozca de un litigio que guarda una estrecha conexión con un Estado tercero. Uno de esos casos excepcionales puede darse cuando en el Estado tercero de que se trate

resulte imposible un procedimiento, por ejemplo debido a una guerra civil, a una situación de catástrofe o cuando en el Estado tercero no está contemplado un procedimiento o no existen las garantías judiciales que sí existen en un Estado miembro.

Esta competencia sólo podrá ejercerse si el litigio guarda una conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional requerido, como por ejemplo, el domicilio de una de las partes, el domicilio de la casa matriz, el domicilio de la sociedad con dirección económica unitaria de un grupo de sociedades, o haber verificado daños directos en dicho Estado”.

## **Sección 2**

### **COMPETENCIAS ESPECIALES**

#### **Artículo 7**

“Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro.”

#### **Agregar numeral 8.**

8) “En materia de daño medioambiental o de daño civil asociado a un daño medioambiental; el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el daño o el hecho generador del daño; al arbitrio del demandante o solicitante.”

#### **Agregar numeral 9.**

9) *Forum necessitatis*. “Cuando ningún órgano jurisdiccional de un Estado miembro sea competente con arreglo al artículo 8, los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro podrán, en casos excepcionales, fundar el conocimiento del asunto cuando un procedimiento es imposible o cuando no se puede garantizar el acceso a la justicia o asegurar el derecho de tutela judicial efectiva de las partes en un Estado tercero con el cual el litigio tiene estrecha conexión.

No obstante, el litigio deberá tener conexión suficiente con el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conocerá de él”.



## BIBLIOGRAFÍA.

### 1.- Libros.

Abeliuk Manasevic, René, *Las obligaciones*, 3era. Edición, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1993.

Aguilar Benítez, Lugo, *Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacional*, Universidad de Sevilla, España, 2002.

Aguilar Grieder, Hilda, *Acumulación de procesos en los litigios internacionales*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004.

Aguiló Regla, Joseph, *Teoría general de las fuentes del Derecho (y del orden jurídico)*, Ariel, Barcelona, 2000.

Alessandri Bessa, Arturo, *De la Responsabilidad extracontractual en el Derecho Civil chileno*, Imprenta universitaria, Santiago, 1943.

Álvarez Rubio, Juan José, *Los foros de competencia judicial internacional en materia marítima (Estudio de las relaciones entre los diversos bloques normativos)*, San Sebastián, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1993.

Alzate Monroy, Patricia, *Nociones de Derecho Internacional Privado*, disponible en [http://www.am-abogados.com/archivos/derecho\\_internacional.pdf](http://www.am-abogados.com/archivos/derecho_internacional.pdf) [revisado 18 de marzo del 2010]

Arellano García, Carlos, *Derecho Internacional Privado*, Ed. Porrúa, Universidad de Texas, 2007.

Arnaud, André-Jean, *Entre modernidad y globalización: siete lecciones de historia de la filosofía del Derecho y del Estado*, Nathalie González Lajoie (trad.), Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2000, 290 p.

Austin, John, *The Province of Jurisprudence Determined*, Londres, 1861.

Barceló Domenech, Javier, *Responsabilidad extracontractual del empresario por actividades de sus dependientes*, McGraw-Hill, Madrid, 1995.



- Barros Bourie, Enrique, *Tratado de Responsabilidad Extracontractual*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2007.
- Bell, Andrew, *Forum Shopping and Venue in Transnational Litigation*, Oxford Private International Law Series, Oxford University Press, 2003.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, *Responsabilidad extracontractual*, Civitas - Thomson Reuters, Aranzadi, Madrid, 2010.
- Betlem, Guerrit, *Civil Liability for Transfrontier Pollution. Dutch Environmental Tort Law in International cases in the light of Community Law*, Londres y otros, Graham & Trotman Martinus Nijhoff, 1993.
- Blanco Morales Limones, Pilar “Art. 5.3” y “Art. 5.4”, en Calvo Caravaca (Edit.), *Comentario al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil*, Madrid, 1994.
- Blázquez Lidoy, A., *El régimen de los grupos de sociedades en la Ley 43/1995*, Madrid, 1999.
- Boggiano, Antonio, *Curso de Derecho Internacional Privado*, De las relaciones privadas internacionales, Abeledo-Perrot, Argentina, 2001.
- Brañes, Raúl, *Manual de Derecho Ambiental mexicano*. México, FCE, 2000.
- Burton Ian, White Gilbert F. and Kates Robert, *The environment as Hazard*, New York Oxford University Press, 1978.
- Cadiet, Loïc, *Les métamorphoses du prejudice, en les métamorphoses de la responsabilité*, Sixième Journées René Savatier, Presses Universitaires, París, 1997.
- Calabresi, Guido, *El coste de los accidentes: análisis económico y jurídico de la responsabilidad civil*, Ariel, Barcelona, 1970.
- Cane, Peter, *The Anatomy of Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, 1997.
- Carbonnier, Jean, *Droit Civil Les Obligations*. T. IV, 22º edición, Presses Universitaires de France, París 2000.
- Carlón Ruiz, Matilde, *Competencia territorial y responsabilidad extracontractual: perspectivas constitucional y comunitaria*, Cedecs, Barcelona, 1995.
- Calamandrei Pimpinelli, Piero, *Instituciones de Derecho procesal civil, según el nuevo código*, ediciones jurídicas Europa-América, Vol. I, 1986.

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Castellanos Ruiz, Esperanza (Dir.), *La Unión Europea ante el Derecho de la Globalización*, Madrid, 2008.

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Carrascosa González, Javier, *Derecho Internacional Privado*, 6ta. Ed., Vol. I, Comares, España, 2005.

\_\_\_\_\_, *Derecho Internacional Privado*, 6da. Edición, Vol. II, Comares, Granada, 2005.

\_\_\_\_\_, *Práctica Procesal Civil Internacional*, Comares, España, 2003.

Cane, Peter, *The Anatomy of Tort Law*, Hart Publishing, Oxford, 1997.

Carbonnier, Jean, *Droit Civil Les Obligations*. T. IV, 22º edición, Presses Universitaires de France, París 2000.

Carlón Ruiz, Matilde, *Competencia territorial y responsabilidad extracontractual. Perspectivas constitucional y comunitaria*, Ed. Cedecs, Barcelona, 1995.

Carney, Peter J., International *Forum non Conveniens*, Section 1404.5 – A proposal in the interest of Sovereignty, Comity and individual Justice”, *American Law Reviews*, número 45, 1995.

\_\_\_\_\_, *Curso de Derecho Internacional Público*, Ed. Tecnos, Madrid 2001.

\_\_\_\_\_, *Derecho Internacional Privado*, 3ed., Tecnos, Madrid, 1983.

Cavanillas Múgica, Santiago, *La transformación de la responsabilidad civil en la jurisprudencia*, Pamplona, Aranzadi, 1987.

Chicharro Lezaro, Alicia, *El principio de subsidiariedad en la Unión Europea*, Pamplona, 2002.

Cienfuegos Mateo, Manuel, *Efectos Jurídicos de las sentencias prejudiciales interpretativas del TJCE y su aplicación judicial en los Estados miembros*, Tesis para obtener el título de Doctor en Derecho, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 1995.

Collins, Lawrence, *Essays in International Litigation on the conflict of Laws*, Clarendon Paperbacks, Oxford University Press, 1994.

- Crawford, James, *Los artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad internacional del Estado*. Introducción, textos y comentario, Cambridge University Press, Dykinson, Madrid, 2003.
- Crespo Hernández, Ana, *La Responsabilidad Civil derivada de la contaminación transfronteriza ante la jurisdicción estatal*, Eurolex, Madrid, 1999.
- Chabas, François, *Cien años de responsabilidad civil en Francia*, Trad.: Mauricio Tapia Rodríguez, Flandes Indiano, colección “Derecho Francés contemporáneo”, Ed. Van Dieren, París, 2004.
- \_\_\_\_\_, *L'influence de la pluralité de causes sur le droit à réparation*, collection Bibliothèque de Droit Privé, T.LXXVIII, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1967.
- Chirino, Frank, *Business Without borders: Tailoring American and Canadian personal Jurisdiction Principles to Provide Greater Certainty for online businesses*, Southwestern Journal of Law and Trade in the Americas, número 12, 2005.
- Dall'Aquila, Enrico, *Ensayo comparativo de los principios básicos de la responsabilidad extracontractual en el Derecho Inglés*, Reus, Madrid, 1986.
- De Burca, G. y SCOTT, J., *Law and New Governance in the EU and the US*, Oxford & Portland, 2006.
- De Venanzi, Augusto, *Globalización y Corporación: el orden social en el siglo XXI*, Anthropos, Barcelona 2002.
- Desantes Real, Manuel, *La Competencia Judicial en la Comunidad Europea*, Boch, Barcelona, 1986.
- Diamond, Jared , *Colapso*, Debate, Barcelona, 2006. Duarte, Carlos (coordinador), *Cambio Global. Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra*. CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Madrid, 2006.
- Diez-Picazo, Luis y Ponce de León, *Derecho de Daños*, Civitas, Madrid, 1999.
- Díez- Picazo, Luis y Gullón, Antonio, *Sistema de Derecho Civil*, V. II, Tecnos, Madrid, 2001.
- Domingo, Ortega, Rodríguez-Antolín, y Zambrana, *Principios de derecho global. 1000 reglas y aforismos jurídicos comentados*, Navarra, 2006.

- Domínguez Matés, Rosario, *La Protección del Medio Ambiente en el Derecho Internacional Humanitario*, Tirant Lo Blanch. 2005.
- Droz, Georges, *Compétence judiciaire et effets des jugements dans le marché commun (Étude de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968)*, Librairie Dalloz, 1972.
- Droz, Georges.A.L., *Recueil Dalloz Sirey*, 1977, B 54.
- Dupuy, Pierre Marie, *La responsabilité internationale des Etats pour les dommages d'origine technologique et industrielle*, Pedone, París, 1976.
- Eco, Umberto, *Como se hace una Tesis: Técnicas y Procedimientos de estudio, investigación y escritura*, Gedisa, 6ª ed. 2001
- Embid Irujo, José Miguel, *Grupos de Sociedades y Derecho concursal, Estudios sobre la ley concursal*, Libro Homenaje a Manuel Olivencia, T.II., Madrid, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Introducción al Derecho de los grupos de sociedades*, Granada, 2003.
- Engracia Antunes, José A., *Os grupos de sociedades*, Almedina, Coimbra, 2002.
- Enríquez Rosas, José David, *Derecho Internacional Económico. Instituciones y críticas contemporáneas*, México, Porrúa, 2006.
- Espinar Vicente, José María, *Tratado Elemental de Derecho Internacional Privado*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, Madrid, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Nacionalidad y Extranjería en Tratado Elemental de Derecho Internacional Privado*, Universidad de Alcalá, Madrid, 2008.
- \_\_\_\_\_, *La nacionalidad y extranjería en el sistema jurídico español*, Madrid, Civitas, 1994.
- Estella de Noriega, Antonio, *El dilema de Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ante el principio de subsidiariedad*, Centro de Estudios Ramón Areces, 2000.
- Esteve González, Lidia, *Aspectos internacionales de las infracciones de derecho de autor en internet*, Comares, 2006.

Esteve Pardo, José, *El Derecho del Medio Ambiente como derecho de decisión y gestión de riesgos*, Conferencia transcrita del V Seminario Permanente de Profesores del Departamento de Derecho curso 2005/2006: «Derecho y Medio Ambiente», Sesión Inaugural. Disponible en: [http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/01\\_taciana\\_marconatto\\_damo\\_cervi\\_2.html#27](http://huespedes.cica.es/aliens/gimadus/21/01_taciana_marconatto_damo_cervi_2.html#27) [revisado 25 de abril 2012].

Fach Gómez, Katia, *La contaminación transfronteriza en el derecho internacional privado*, Boch, Barcelona, 2002.

Fallon Marc, Le principe de proximité dans le droit de l'Union européenne, en: Mélanges P. Lagarde, París, Dalloz, 2005.

Fernández Arroyo, Diego, *Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur*, Zavalía, Argentina, 2003.

Fernández Fernández, Javier, *El futuro del transporte fluvial en Europa*. Documento de Trabajo, Col. Constatino Martínez Caveno, Ed. Parlamento Europeo, número 12, Luxemburgo, 1993.

Fernández Markaida, I., *Los Grupos de sociedades como forma de organización empresarial*, Madrid, 2001. Fuentes Naharro, M., *Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)*, Madrid, 2007.

Fernández Rosas, Juan Carlos y Sánchez Lorenzo, Sixto, *Derecho Internacional Privado*, Civitas, España, 2001.

Franch Fluxà, Juan, Grupo de sociedades como institución jurídica, J.M.Bosch editor, Barcelona, 2009.

Friedman, Thomas L., *La tierra es plana: breve historia del mundo globalizado del siglo XXI*, Ediciones Martínez Roca, 2006.

Fuentes Naharro, Mónica, Conflicto de intereses en grupos de sociedades: reflexiones a propósito de la STS de 12 de abril de 2007, *Revista de Derecho de Sociedades*, número 30, 2008.

Garau Sobrino, Federico, *Lecciones de Derecho Procesal Civil Internacional*, España Universitat de les Illes Balears, 2003.

García Gil, F. Javier, *La responsabilidad extracontractual en la jurisprudencia*, col. Ma. Carmen García Nicolás, DILEX, Madrid, 1997.

- García, Guillermo, *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, Euro-Mediterranean University Institute, Universidad Complutense de Madrid, número 33, 2012.
- Garrido Falla, Fernando, Palomar Olmeda, Alberto y Losada González, Herminio, *Tratado de Derecho Administrativo, Vol. III. La Justicia Administrativa*, Tecnos, 2006.
- Gerhard, Kegel, *Derecho Internacional Privado*, Vol. 1. 4ta. Ed.1982.
- Gómez-Robledo Verduzco, Alonso y Witker Velázquez, Jorge (coords.), *Diccionario de Derecho Internacional*, México, UNAM-Porrúa, 2001.
- González Campos, Julio, *Derecho Internacional Privado*. Parte especial, en colaboración con J.C.Fernández Rozas et al., 6ª edición rev., Eurolex, Madrid, 1995.
- Gothot, Pierre et Holleaux, Dominique, *La Convention de Bruxelles de 27 septembre 1968*, número 89-90, ed. Jupiter, 1985.
- Huerta Viesca, María Isabel y Rodríguez Ruiz de Villa, Daniel, *Responsabilidad Civil por Contaminación marina por vertido de hidrocarburos a propósito del Prestige*, Universidad de Oviedo, 2004.
- Kadner Graziano, Thomas, "The law applicable to cross-border damage to the environment. A commentary on article 7 of the Rome II Regulation", in *Yearbook of Private International Law*, Vol. IX, Germany, 2007.
- Kates, Robert W, *Hazard of Choice perception in Flood Plain Management*, The University of Chicago, Chicago, Department of Geography, Research Paper número 78.
- Kiss, Alexandre y Shelton, Dinah, *International Environmental Law*, New York, Transnational Publishers y Graham & Trotman, 1991.
- Kiss, Alexandre-Charles, *Droit international de l'environnement*, Pedone, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Los principios generales del Derecho del Medio Ambiente*, Universidad de Valladolid, 1975.
- Larenz Karl, *Metodología de la Ciencia del Derecho*, Biblioteca de Ciencia Jurídica, Editorial Ariel, Primera Edición española, España, 1980.
- Le Tourneau, Phillippe y Cadiet, Löic, *Droit de la Responsabilité et des Contrats*, Dalloz Action, París, 2002.

- Lomborg, Bjorn, *The skeptical environmentalist. Measuring the Real State of the World*, Cambridge University Press, 2001.
- López Mesa, Marcelo J., La culpa como factor de atribución de responsabilidad (Cénit, ocaso y resurgimiento de la culpa), *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, número 10, 2006.
- MacCormick, Neil, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Oxford, Clarendon, 1978.
- Malloy, Robin Paul, *Derecho y Economía de mercado. Una nueva interpretación de los valores del Derecho y la Economía*. Trad. Carmen Albaladejo, María Cristóbal, Esteban Flamini, Marcial Pons, 2007.
- Martin Mateo, Ramón, *Tratado de Derecho Ambiental*, Vol. I., Trivium, Madrid, 1991.
- Mazeaud, Henri, Mazeaud, Léon, Mazeaud, Jean y Chabas, François, *Leçons de droit civil. Obligation Théorie Générale*, T. II, Montchrestien, 9º edición, París, 1998.
- Mazeaud, Henri, Mazeaud, León, Mazeaud Jean, y Tunc, André, *Traité Théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, T.I., Montchrestien, 6º edición, Paris, 1965. Traducción castellana de la 5º edición francesa por L. Alcalá-Zamora, *Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual*, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1963.
- Mazeaud, Henri y León - tunc, André, *Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual*, trad. de la 5ª edic. francesa, de Luis Alcalá-Zamora y Casillo, Bs. As., Ejea, 1961, T. 1, V. I, número 28.
- Medellín, Carlos, *Lecciones elementales de Derecho Romano*, Temis, Bogotá, 1966.
- Menéndez Sebastián, Paz, *Competencia judicial y ley aplicable al contrato de trabajo con elemento extranjero*, Lex Nova, España, 2006.
- Mesa-Moles Martel, María Paz, *Génesis y Formación del Derecho Internacional Privado (Una Aproximación Histórica)*. Tesis Doctoral, Facultad de Ciencias jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2007.
- Montenegro Arriagada, Sergio, Hervé, Dominique y Durán Medina, Valentina . *Los Tratados Ambientales: principios y aplicación en Chile*. Edic. Edición: Marie Claude Plumer Bodin. 1a. ed. Santiago de Chile: CONAMA, 2001.

- Morales y Sancho, *Manual Práctico de Responsabilidad Civil*, Comares, Granada, 1995.
- Moreno Molina, Ángel Manuel, *Responsabilidad patrimonial por daño ambiental: propuestas de reforma legal*, Fundación Alternativas, 2005.
- Morin, Edgar, *Introducción al pensamiento complejo*, Gedisa, Barcelona, 1997.
- Mortimore, Michael, Las transnacionales y la industria en los países en desarrollo, *Revista Cepal*, número 51, LC/G.1792-P/E, 1993.
- Munro y Lammers, *Environmental Protection and Sustainable Development: Legal Principles and Recommendations*, Vol. XXI, Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, Grupo de Expertos sobre la Legislación Ambiental, Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff Publishers, Londres/Boston, 1986.
- Múrtula Lafuente, Virginia, La Responsabilidad civil por los daños causados por un miembro indeterminado de un grupo, Dykinson S.L., Madrid, 2005.
- Narváez Álvarez, María José, *La responsabilidad civil extracontractual por daños ambientales y las instituciones del Código Civil ecuatoriano*. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar, 2008.
- Palao Moreno, Guillermo, *La responsabilidad civil por daños al medio ambiente*, Tirant Lo Blanch, Monografías Universitat de València, 1998.
- Panagopoulos, George, *Restitution in Private International Law*, Hart Publishing Ltd, Oxford and Portland, Oregon, 2000.
- Paz-Ares, Cándido, Díez-Picazo, Luis; Berkovitz Rodrigo y Salvador Pablo, *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991.
- Pecourt García, Enrique, *Programa de Derecho Internacional Privado*, Valencia, 1979.
- Pérez Vera, Elisa (coord.), *Derecho internacional privado*, Vol. II, Derecho civil internacional, UNED, Madrid, 1998.
- Pérez Vera, Elisa y González Campos, Julio, *Derecho Internacional Privado*, Vol. I, UNED, España, UNED, 2001.
- Polinsky, Michell, Introducción al análisis económico del Derecho, Trad. Español J.M. Álvarez Flores, Ed. Ariel, Barcelona, 1985.



- Pontier, Jannetje Adriana y Burg Edwige, *EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters according to the case law of the European Court of Justice*, T.M.C., Asser Press, The Hague, The Netherlands, 2004.
- Popper, Kart, *La Sociedad Abierta y sus enemigos*, Buenos Aires, Paidós, 1957.
- Posner, Richard, *El análisis económico del Derecho* (Trad. Eduardo Suárez), Fondo de cultura económica, México D.F., 1998.
- \_\_\_\_\_, *Economic Analysis of Law*, 5th edition, Aspen Publishers, New York, 1998.
- Prieur, Michel, *Droit de l'environnement*, París, Dalloz, 1991.
- Redja, George E., *Principles of Risk and Insurance*, 6th ed., Addison-Wesley. Reading, Menlo Park, Harlow, Don Mills, Sydney, México City, Madrid, Amsterdam, 1997.
- Reglero Campos, Luis Fernando y otros, *Lecciones de responsabilidad civil*, Manuales Universitarios, Aranzadi, 2002. Rosenkrantz, Carlos F., “Tres Concepciones de la Justicia Correctiva y de la Responsabilidad Extracontractual”, *Lecciones y Ensayos*, Vol. 67/68, 1999.
- Requejo Isidro, Marta, *Proceso en el extranjero y medidas anti proceso (antisuit injunctions)*, Universidad de Santiago de Compostela, España, 2000.
- Reuter, Paul, *Droit International Publique*, Presses Universitaires de France, París, 1963.
- Robertson, Robbie, *Tres olas de globalización historia de una conciencia global*, Alianza editorial, España, 2005.
- Roca, Encarna, *Derecho de daños. Textos y materiales*. 3ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
- Rodas Monsalve, Julio César, *Responsabilidad penal y administrativa en Derecho Ambiental Colombiano*, Universidad Externado de Colombia, Facultad de Derecho, edición 1, volumen 1, número 167, agosto 2005.
- Rodríguez de Santiago, José María, *Los Convenios entre Administraciones Públicas*, Marcial Pons, Madrid, 1998.

Rodríguez Jiménez, Sonia, *Competencia Judicial Internacional*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México 2009.

\_\_\_\_\_, *Conexidad y Litispendencia Internacional en el Derecho internacional privado mexicano*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.

Rondo Cameron, Larry Neal, *Historia económica mundial Desde el Paleolítico hasta el presente*, Miguel Ángel Coll Rodríguez (trad.), Ed. Alianza, 4ta. Edición, España, 2005.

Rosenkrantz, Carlos F., *La Justicia Correctiva y la Responsabilidad Extracontractual: Donde la Filosofía, la Economía y el Derecho se Encuentran*, Biblioteca Yale de estudios Jurídicos, Ed. Gedisa, 2005.

\_\_\_\_\_, *La Responsabilidad Extracontractual*. Barcelona: Ed. Gedisa, 2005.

Rossolillo, Giulia, Forum necessitatis e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'unione europea, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010.

Ruda González, Albert, *El daño ecológico puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medioambiente*. Tesis Doctoral. Facultad de Dret. Universidad de Girona, 2005.

Sachs, Jeffrey, *Economía para un planeta abarrotado*, Debate, Barcelona, 2008 (Edición en inglés del mismo año titulada: *Common Wealth: Economics for a Crowded Planet*).

Salas, Minor E., Debate sobre la utilidad de la metodología jurídica: Una reconstrucción crítica de las actuales corrientes metodológicas en la Teoría del Derecho, *Isonomía Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*, No. 27, Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2007.

Sampedro, José, *El Mercado y la Globalización*, Madrid, 2002.

Sánchez-Bayón, António, *Introducción al Derecho Comparado y Global. Teorías, Formas y Prácticas*, Delta publicaciones, Madrid, 2001.

Sánchez- Fiera González, María, *La responsabilidad civil del empresario por deterioro del medio ambiente*, Barcelona, Boch, 1994.

Sánchez Lorenzo, Sixto, Estado democrático, postmodernismo y Derecho Internacional Privado, *Revista de Estudios Jurídicos*, Número 10, Segunda Época, Universidad de Jaén, 2010.

\_\_\_\_\_, *Derecho Privado Europeo*, Ed. Comares, Granada, 2002.

Sands, Philippe, *Principles of International Environmental Law. Frameworks, Standards and Implementation*, Publisher: Cambridge University Press, Vol. I, 1995.

Santos Ballesteros, José, Instituciones de Responsabilidad Civil, T.III, Ciencias Jurídicas. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1996.

Santos Vijande, Jesús María, *Declinatoria y declinatoria internacional. Tratamiento procesal de la competencia internacional*, Serie Pensamiento Jurídico, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 1991.

Savigny, M de F.C., *Sistema del Derecho romano actual*, M.Ch. Guenoux (trad. del alemán), Comares, 1º ed., Granada, 2005, 1882.

Silva Silva, Jorge Alberto, *Derecho Internacional sobre el proceso. Procesos civil y comercial*, MacGraw-Hill, México, 1997.

Trimarchi, Pietro, *Rischio e responsabilità oggettiva*, Giuffrè, Milano 1961.

Vaughan, Emmet J. / Vaughan, Therese, *Fundamentals of Risk and Insurance*, 8<sup>th</sup> edition, John Wiley & Sons Inc., New York, Chichester, Weinheim, Brisbane, Toronto, Singapore, 1999.

Verdeguer Puig, Enrique, Álvarez Alonso, Leticia, *La globalización*, Acento Editorial, Madrid, 2001.

Villamizar, Julieta, Medio Ambiente y Derecho Penal, *Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación*, Ponencia presentada en el Seminario sobre Actualización en materia Penal, celebrado en la Universidad Externado de Colombia, entre el 29 de mayo y 27 de junio de 1990., en la Universidad Externado de Colombia, San Juan, Volumen I, Número 2, 1989.

Vilches, Amparo, Gil Pérez, Daniel, Toscano, Juan Carlos y Macías, Óscar, *21 Temas de acción clave que ofrecen una documentación puesta regularmente al día acerca de los problemas estrechamente vinculados a los que la humanidad ha de hacer frente hoy (como, entre otros, “Cambio climático”, “Contaminación sin fronteras”, “Biodiversidad”, etc.), sus causas y medidas necesarias para hacerles frente*, 2008. Disponible en [www.oei.es/decada](http://www.oei.es/decada) [revisado 27 de junio del 2010].

Vinaixa Miquel, Mónica, *La Responsabilidad Civil por Contaminación Transfronteriza Derivada de Residuos*, Universidad de Santiago de Compostela, 2006.

Virgós Soriano, Miguel y Garcimartín Alférez, Francisco, *Derecho Procesal Civil Internacional*, 2da. Edición, Thomson Civitas, 2007.

Virgós Soriano, Miguel, *El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1992.

Von Bar, Christian, *Gemeineuropäisches Deliktsrecht*, T.II, Beck, München, 1996.

Weinberg de Roca, Inés, *Competencia Internacional y Ejecución de sentencias extranjeras*, Astrea, Buenos Aires, 1994.

\_\_\_\_\_, *Natural Hazard*, Oxford University Press, New York, 1974.

Zeitlin, J. y Trubek, D. (eds.) *Governing Work and Welfare in a New Economy: European and American Experiments*, Oxford, 2003.

Zeitlin, J. y Pochet, P. (eds.), *The Open Method of Coordination in Action: The European Employment and Social Inclusion Strategies*, Bruselas, 2003.

Zimmer-Man, Reinhard, *Estudios de Derecho Privado*, Civitas, Madrid, 2000.

## **2.- Artículos de Revistas.**

Aedo Barrera, Cristian, “Los requisitos de la lex aquilia, con especial referencia al daño. Lecturas desde las distintas teorías sobre el capítulo tercero”, *Revista Ius et Praxis*, Vol. 15 número 1, 2009.

Aguilar Grieder, Hilda, “La cooperación judicial internacional en materia civil en el tratado de Lisboa”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010.

Aguilera Rull, Ariadna y Azagra Malo, Albert “Transposición de la directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad ambiental en Alemania y en España”, *InDret*, número 3, Barcelona, 2007.

Agustín Torres, A.C., “Grupo de sociedades en Derecho español”, AAMN, 1992.

Albaladejo García, Manuel, *La presunción de culpa en la responsabilidad extracontractual*. Discurso leído el día 10 de noviembre de 2003 en la sesión inaugural del curso académico 2003-2004, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 2003.

Alenza García, José Francisco, “El régimen público de responsabilidad por daños ambientales en la legislación española y en la Directiva de Responsabilidad Ambiental”. *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005.

Amores Conradi, Miguel Ángel Y Torralba Mendiola, Elisa, “XI Tesis sobre el estatuto delictual”, *Revista Española de Estudios Internacionales*, número 8, 2004.

Amores Conradi, Miguel Ángel, “Comentario al art. 10, apartado 9 del Código civil”, en Albaladejo, Manuel (Dir.), *Comentarios al Código civil y Compilaciones forales*, Tomo I, Vol. 2, 2ª ed., EDERSA, Madrid, 1995.

---

\_\_\_\_\_, “La nueva estructura del sistema español de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. XLI, 1989.

Ángel Yagüez, Ricardo, “La responsabilidad por los desastres ecológicos”, I y II, *Boletín Informativo del Ministerio de Justicia*, número 1601 y 1602, 1991.

Antonio-Carmelo, Agustín Torres, “Grupos de sociedades en Derecho español. Conferencia pronunciada en la Academia Matritense del Notariado en el día 25 de abril de 1991”, *Anales de la Academia Matritense del Notariado*, Tomo XXXI, 1992.

Arenas García, Rafael, “Competencia judicial internacional y acuerdos de sumisión en la contratación electrónica internacional”, *Estudios sobre Consumo*, número 85, 2008.

---

\_\_\_\_\_, “Tratamiento jurisprudencial del ámbito de aplicación de los foros de protección en materia de contratos de consumidores en el Convenio de Bruselas de 1968», *Revista Española de Derecho Internacional (REDI)*, vol. XLVIII, núm. 1, 1996.

Aristegui, Juan Pablo, “Competencia judicial y ley aplicable en materia de responsabilidad por daños al ambiente transfronterizos: el régimen de la unión europea”, *Revista Chilena de Derecho Privado*, número 16, 2001.

Arriba Fernández, María Luiza, *Derecho de grupos de sociedades*, Civitas, 2009.  
Montiel Fuentes, Carlos Mario, “Acercamiento al concepto de grupos

- empresariales: concurrencia de elementos para su existencia”, *Revista e-Mercatoria*, Vol. 8, número 1, 2009.
- Arroyo, Ignacio: “Problemas jurídicos relativos a la seguridad de la navegación marítima (referencia especial al caso Prestige)”, *Anuario de Derecho Marítimo*, Vol. XX, 2003.
- Assaf, Jacob, “Disolution of Liability and Multiple Tortfeasors in the Context of Liability for Unrequested Precautions”, Private Production of Public Goods: Liability for Unrequested Benefits, *Michigan Law Review*, número 108, 2009. Disponible en <http://www.michiganlawreview.org/assets/fi/108/jacob.pdf> [revisado el 11 de octubre del 2011].
- Ashton, David y Vollrath, Christian, “Choice of court and applicable law in tortious actions for the breach of Community competition law”, *Journal of Competition Law (ZweR)*, Vol.1. 2006.
- Atienza, Manuel, “El Derecho como argumentación”, en *Isegoría*, número 21, 1999.
- Auger Liñán, Clemente, “Problemática de la Responsabilidad Civil en materia ambiental”, Poder Judicial, número especial IV, 1988.
- Aylwin Chiorrini, Andrés y Rojas Miño, Irene, “Los grupos de empresas y sus efectos jurídico laborales en el Derecho comparado”, *Ius et Praxis*, V. 11, número 2, Talca, 2005.
- Ballarino, Tito y Ubertazzi, Benedetta, “On Avello and Other Judgments: A New Point of Departure in the Conflict of Laws?”, *Yearbook of Private International Law*, Vol. VI, 2004.
- Ballarino, Tito, “Le Droit International Privé de l’Environnement-Questions de Procédure Civile et de Loi Applicable dans les États de l’Europe Occidentale”, en AA.VV., *InternationalesUmwelthaftungsrecht I, Auf dem Wege zu einer Konvention über Fragen des InternationalenUmwelthaftungsrechts*, Köln, 1995.
- \_\_\_\_\_, “Questions de droit international privé et dommages catastrophiques”, *Recueil des Cours*, Vol. 220, T.I, 1990.
- \_\_\_\_\_, “Azioni di Diritto privato per il resarcimento di danni da inquinamento transfrontaliero”, *Revista de Diritto Internazionale*, 1990.
- Ballesteros Pinilla, Gabriel, “La Contaminación Transnacional en el Reglamento Roma II”, *Revista Electrónica de Derecho Ambiental*, número 21, 2010.

- Baraona González, Jorge, “La causa del daño en la Jurisprudencia reciente”, *Revista Chilena de Derecho*, Vol 30, número2, Santiago de Chile, 2003.
- Baroni, Leonardo y D’Ancona, Stefano, “La Convenzione di Árhús nella giurisprudenza della Corte di giustizia U.E. del 2011”, *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, diretta da Mario P. Chiti e Guido Greco, Giuffrè Editore, 3-4, 2012.
- Barros Bourie, Enrique, “La responsabilidad civil como derecho privado: notas sugeridas por la reseña de C. Rosenkrantz al Tratado de Responsabilidad Extracontractual”, *Estudios Públicos*, número112, 2008.
- Bauw, E., “Richtlijn 2004/35/EG: vernieuwend, maar ook uitvoerbaar?”. *Nederlands tijdschrift voor Europees recht*, Núemro° 12, 2004.
- Bergkamp, Lucas, “The proposed environmental liability directive. 1st part”. *European Environmental Law Review*, Vol. 11, número 11, 2002.
- \_\_\_\_\_, “The Commission's White Paper on Environmental Liability: A Weak Case for an EC Strict Liability Regime”. *European Environmental Law Review*, número 9, 2000.
- Bermann, George. A., “The use of antisuit injunction in international litigation”, *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 28, 1990.
- Bernasconi, Christopher, “La responsabilité civile pour le dommages resultant d’une atteinte transfrontière à l’environnement: un cas pour la Conférence de La Haye?”, *Documento Preliminar de la Conferencia de la haya de Derecho Internacional Privado*, número 8, 2000.
- Betlem, Guerit y Hondius Ewoud, “European Private Law after the Treaty of Amsterdam”, *European Review of Private Law*, Netherlands, 2001.
- Betlem, Gerrit, “Scope and Defences of the 2004 Environmental Liability Directive: Who is Liable for What?”. *ERA – Forum*, número 3, 2005.
- Bianchi, Andrea, “The harmonization of Law son Liability for environmental damage in Europe: an italian perspective”, *Journal of environmental law*, Vol 6, número 1, 1994
- Bielschowsky, Ricardo y Stumpo, Giovanni, “Empresas transnacionales y cambios estructurales en la industria de Argentina, Brasil, Chile y México”, *Revista Cepal*, LC/G.1858-P/E, número 55, 1995.

Bischoff, Jean-Marc., “Observaciones a la STJCE 19 septiembre 1995, *Marinari*, asunto C- 364/93”, *Journal du Droit International*, T.II., 1996.

\_\_\_\_\_, “Observaciones a la STJCE 16 diciembre 1980, *État néerlandais contre Reinhold Rüffer*, as. 814/79”, *Journal du Droit International*, Vol. II, 1982.

Bonet Rull, Laia, “¿Quién contamina pagará? Algunas reflexiones acerca de la próxima adopción de un régimen de responsabilidad ambiental”, *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, Vol. 5 número 20, 2003.

Bourel, Pierre, “Du rattachement de quelques délits spéciaux en droit international privé”, *Recueil des Cours*, Vol II, 1989.

\_\_\_\_\_, “Nota a la STJCE 30 noviembre 1976, *Bier/ Mines de Potasse d’Alsace*, as. 21/76”, *Revue Critique de Droit International Privé*, T. III, 1977.

Bouza Vidal, Nuria y Vinaixa Miquel, Mónica “La responsabilidad por daños ambientales transfronterizos: Propuesta de regulación europea y Derecho Internacional Privado”, en *Anuario Español de Derecho Internacional Privado*, Tomo III, Madrid, 2003.

Buckens, Marie-Martine, “Responsabilité environnementale: les limites de la future directive communautaire”. *Europe Information Service*, Bruselas, 2003.

Breyer, Stephen G., “Razonamiento Económico y Revisión Judicial”, *Estudios Públicos*, número. 109, 2008.

Brunnée, Jutta, “Of sense and sensibility: reflections on international liability regimes as tools for environmental protection”. *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 53, número 2, 2004.

Burgos Silva, Germán, “Derecho y Desarrollo Económico: de la Teoría de la modernización a la nueva economía institucional”, *Revista de Economía Institucional*, segundo semestre, Año 4, número 007, Universidad Externado, Colombia.

Boyle, Alan, “Los derechos ambientales y el Derecho Internacional”, en *Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Ambiental*, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, noviembre 2001.



\_\_\_\_\_, “State responsibility and International liability for injurious consequences of acts not prohibited by international: a necessary distinction?”, *International and Comparative Law Quartely*, vol. 39, Part. 1.1990.

Cabanillas Sánchez, Antonio, “La responsabilidad por inmisiones y daños ambientales: el problema de la relación de causalidad”, *Revista de Derecho Ambiental*, número 15, 1995.

Cane, Peter, “Indemnización por daños medioambientales”, *Anuario de Derecho Civil*, número 3, 2000.

Carballo Fidalgo, Marta, “Las cláusulas contractuales no negociadas ante la Propuesta de Directiva sobre derechos de los consumidores”, *Revista para el Análisis del Derecho*, número 1, Barcelona, 2010.

Calais-Auloy, Jean, “Les délits à grande échelle en droit civil français”, *Revue internationale de droit comparé*, Vol 46, número 2, 1994.

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis y Carrascosa González, Javier, “Arts. 38 y 39 de la LEC 1/2000”, *Legislación de Derecho Internacional Privado, Comentada y con Jurisprudencia*, 1º Ed. Colex, Madrid, 2001.

Calvo Caravaca, Alfonso-Luis, “El Derecho internacional privado en la comunidad europea”, *Anales del Derecho*, Universidad de Murcia, número 21, 2003.

Cano López, A., “El fenómeno de las uniones de empresas en el ámbito de la economía social: los grupos de sociedades laborales”, en *Derecho de Sociedad*. Libro Homenaje al Prof. Fernando Sánchez Calero, Vol. V, Madrid, 2002.

Carrascosa González, Javier, “Globalización y Derecho Internacional Privado en el s. XXI”, *Anales de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia*, número 22, 2004.

\_\_\_\_\_, “Ley aplicable a las patentes en Derecho Internacional Privado español”, *Anales de Derecho*, Universidad de Murcia, número 19, 2001.

Carrillo Carrillo, Beatriz, “El debate sobre los ilícitos a distancia: Comentario a la STJCE (Sala Segunda) de 10 Junio 2004, Kronhofer, C- 168/02”, *Anales de Derecho*. Universidad de Murcia. Número 22, 2004.

- Castells, Manuel, “Globalización, Estado y sociedad civil: el nuevo contexto histórico de los derechos humanos”, *Isegoría*, número 22, 2000.
- Castroviejo Bolívar, Miguel “Quien contamina paga: un paso decisivo en su aplicación con la Directiva sobre responsabilidad ambiental”, *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, número 65, 2004.
- Chalmers, D. y Lodge, M., “The OMC and the European Welfare State”, *LSE Discussion Paper*, número 11, 2003.
- Chamorro, Irene y Orteu Berrocal, Eduardo, “Un nuevo régimen de responsabilidad comunitario por daños al medio ambiente: la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales”, *Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental*, número 65, 2004.
- Clapp, Jennifer, “Global environmental governance for corporate responsibility and accountability”, *Global Environmental Politics*, Vol. 5 número 3, 2005.
- Clarke, Chris, “The Proposed EC Liability Directive: Half-Way Through Co-Decision”, *Review of European Community & International Environmental Law*, Vol. 12 número 3, 2003.
- Cóndor López V. Y Pina Martínez, V., “Los grupos de sociedades en la legislación mercantil”, *Actualidad Financiera*, número 30.
- Contreras Vaca, Francisco, “La Competencia Judicial en México y en la esfera internacional a nivel interamericano”, *JUS*, Ciudad Juárez, México, 1986.
- Cornut, Étienne, “*Forum shopping et abus du choix du for en droit international privé*” (Forum Shopping and Abuse of the Choice of Venue in International Private Law), *Journal du Droit International*, número 1, 2007.
- Compte Guillemet, Nicole y Hernández Rodríguez, Aurora, “La ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil y el Derecho Internacional Privado Español”, *Homenaje a Luis Rojo Ajuria*. Escritos Jurídicos, Universidad de Cantabria, 2002.
- Crespo Hernández, Ana, “Daños al Medio Ambiente y Regla de la ubicuidad en el art. 8 del futuro Reglamento Roma II”, *Revista para el Análisis del Derecho*, número 366, 2006.

Crespo Hernández, Ana, "Precisión del lugar del hecho dañoso en los supuestos de daños sobrevenidos", *Iniuria*, 1995.

Checa Martínez, Miguel, "Fundamentos y límites del forum shopping: Modelos europeo y angloamericano", *Revista di diritto internazionale privato e procesuale*, Vol. 34, número 3, 1998.

Dalq, R.O., "La responsabilité civile et penales du pollueuer en droit belge", *Actes du colloque de la seccion belge de línstitut international de droit de léxpression française, Les aspectos juridiques de l'environnemet*, Namur, 1975.

De Faramiñán Gilbert, Juan Manuel, "Luces y sombras de la Globalización", en *Derecho Internacional y Counitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*. coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, Marcial Pons, España, 2009.

De la Cuesta Arzamendi, "Cuestiones dogmáticas relativas al delito de contaminación ambiental", *Revista Penal*, 4, 1999.

Del Olmo García, Pedro y Pintos Ager, Jesús: "Responsabilidad Civil por vertido de hidrocarburos. ¿Quiénes deberían pagar los daños causados por el Prestige?", *InDret*, número 111, 2003.

Del Pozo Pérez, Marta "Reflexiones sobre la Red judicial europea en materia civil y mercantil e Iber-Red", *La Ley*, número 6717 de 21 de mayo del 2007.

De Miguel Asensio, Pedro, "Competencia Judicial en materia d indicaciones geográficas y denominaciones de origen", en Ubertazzi y Muniz Espada (Coords.), "Le Indicazoni di Qualitá degli alimenti", *Diritto Internazionale ed europeo*, Giuffrè Editore, Milán, 2009.

---

\_\_\_\_\_, "El régimen comunitario relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales", *Revista Española de Seguros*, número 140, 2009.

---

\_\_\_\_\_, "La protección transfronteriza de los bienes inmateriales en el comercio internacional", *Cursos de Derecho internacional y relaciones internacionales de Vitoria-Gasteiz 2008*. Universidad del País Vasco, Bilbao, 2008.

---

\_\_\_\_\_, "Pluralidad de Jurisdicciones y Unificación de las Reglas de Competencia: una visión trasatlántica", *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. LVIII, 2006.

\_\_\_\_\_, “El futuro del Derecho Privado uniforme en la unión europea: Nuevas tendencias y retos, *Spanish Yearbook of International Law*, Vol. XI, 2005.

\_\_\_\_\_, “La evolución del Derecho internacional privado comunitario en el Tratado de Ámsterdam”, *Revista española de Derecho Internacional*, Vol. L, número 1, 1998.

De Sadeleer, Nicolas, “Les déchets, les résidus et les sous-produits: une trilogie ambiguë”, *Revue du droit de l'Union européenne*, número 3, 2004.

Díez-Picazo Giménez, Gema, “La responsabilidad civil derivada de los daños al medio ambiente”, *La Ley*, número 4125, 1996.

Domínguez Águila, Ramón, “Consideraciones en torno a la noción en la responsabilidad. Una visión comparatista”, *Revista de Derecho de la Universidad de Concepción*, 1990.

Domínguez Ruiz de Huidobro, Adolfo, “Cuestiones sobre la responsabilidad de los administradores en los grupos de sociedades. Particular referencia a la teoría del administrador de hecho”, *Libro Homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 2, 2002.

Doussan, Isabelle, “Le droit de la responsabilité civile français à l'épreuve de la responsabilité environnementale instaurée par la directive du 21 avril 2004”, *Les Petites affiches*, Vol. 394, número 169, 2005.

Drnas de Clément, Zlata, “Responsabilidad Internacional de los estados por violaciones a normas imperativas de Derecho Internacional General”, en Llanos Mansilla, H. y Picánd Albónico, Eduardo (coordinadores académicos) *Libro Homenaje al Profesor Santiago Benadava*, Ed. Librotecnia, Santiago de Chile, 2008. [Disponible en: <http://cl.vlex.com/vid/libro-homenaje-profesor-santiago-benadava-51184938> . Revisado 17 de enero del 2012].

Duque Domínguez, Justino F., “El concepto de grupo de sociedades y su desarrollo en el Derecho español”, en *Derecho de Sociedad*. Libro Homenaje al Prof. Fernando Sánchez Calero, Vol. V, Madrid, 2002.

\_\_\_\_\_, “El Derecho de las empresas vinculadas”, *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, número 35, año IX, 1989.

Duque Domínguez, Justino F, y Ruiz Peris Juan Ignacio, “Los Grupos en el Ordenamiento Jurídico: Grupos de sociedades, cooperativas y grupos por subordinación integrados por entidades de economía social”, en *grupos empresariales de la Economía Social en España*, Valencia, 1999.

Embid Irujo, José Miguel, “El contrato de constitución del grupo en el derecho español”, Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero, Vol. 5, 2002.

\_\_\_\_\_, “Los grupos de sociedades en el Derecho Comunitario y español”, *Revista Crítica de Derecho inmobiliario*, 1990, Vol. 67.

Escudero Herrera, Concepción, “La delimitación de la competencia objetiva de los órganos jurisdiccionales contencioso administrativos”, *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá*, 2004.

Esposito Massicci, Carlos y Garcimartín Alférez, Francisco, “El artículo 24 de la Constitución y la Inmunidad de los agentes diplomáticos extranjeros (a propósito de la STC 140/1995)”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, año 16, número 47, 1996.

Estella de Noriega, Antonio, “La paradoja de la subsidiariedad: reflexiones en torno a la jurisprudencia comunitaria relativa al artículo 3B(2) del Tratado de la Comunidad Europea”, *Revista española de Derecho Administrativo*, número 101, 1999.

Ezeizabarrena, Xabier: “El naufragio del buque Prestige: algunas perspectivas jurídicas”, *Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 4, 2003.

Fach Gómez, Katia, “La Prevención de catástrofes, la Unión Europea y el Derecho Internacional Privado”, Comunicación presentada en la *Jornada Técnica sobre Aspectos Jurídicos, Económicos, y Sociales de las catástrofes*, Foro Euromediterráneo para prevención de Desastres, disponible en [http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/Informacion\\_y\\_documentacion/catalogo/carpeta04/cd1987-2003/doc/b5/Juridica/3aCom\\_KatiaFach.pdf](http://www.proteccioncivil.org/es/DGPCE/Informacion_y_documentacion/catalogo/carpeta04/cd1987-2003/doc/b5/Juridica/3aCom_KatiaFach.pdf) [Revisado 25 de marzo del 2010].

Fach Gómez, Katia, “Respuestas Jurídicas a la contaminación transfronteriza: iniciativas comunitarias”, *Comunicaciones Técnicas al VI Congreso Nacional del Medio Ambiente*, Ponencia concluida el 15 de Septiembre de 2002. Disponible en [http://ec.europa.eu/justice\\_home/news/consulting\\_public/rome\\_ii/katia\\_fach\\_gomez\\_es.pdf](http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/rome_ii/katia_fach_gomez_es.pdf) [revisado 24 de marzo 2010].

\_\_\_\_\_, “La protección del medio ambiente y el comercio internacional: ¿Hay que “pensar en verde” el arbitraje de inversiones?”, en González García, Julio V. (Dir.), *Comercio Exterior*, Iustel, VIII, 2009.

- \_\_\_\_\_, “The Law Applicable to Cross-Border Environmental Damage: From the European National Systems to Rome II”, en *Yearbook of Private International Law*, vol. 6, 2004.
- \_\_\_\_\_, “Hacia la unificación de las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en Europa (una visión crítica del Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II)”, en AA. VV. *Derecho Patrimonial Europeo*, España, 2003.
- \_\_\_\_\_, "Acciones preventivas en supuestos de contaminación transfronteriza y aplicabilidad del artículo 5.3 CB", *Zeitschrift für Europarechtliche Studien*, 1999.
- Fallon Marc, “Les conditions d’un code européen de droit international privé” en: *La matière civile et commerciale, socle d’un code européen de droit international privé?*, M. Fallon, P. Lagarde et S. Poillot-Peruzzetto ed(s), Paris, Dalloz, 2009.
- Farnsworth, Nick, “Subsidiarity – A Conventional Industry Defence. Is the Directive on Environmental Liability with Regard to Prevention and Remedying of Environmental Damage Justified under the Subsidiarity Principle?”, *European Environmental Law Review*, número 13, 2004.
- Fedtke, Jörg y Madnus Ulrich, “PTL Liability for Damage caused by others under German Law”, *Unification of Tort Law: Liability for Damage Caused by Others*, Ed. Koch, Kluwer International, The Hague, número 1, 2003.
- Fernández Arroyo, Diego, “Competencia internacional exclusiva y exorbitante de los jueces de los Estados miembros de la Unión Europea ¿hasta cuándo?”, *Jurídica: Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana*, número 34, 2004.
- Fernández de Araoz y Gómez Acebo, Alejandro, “Grupos de empresas de base contractual y derecho de la competencia”, *Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 5, 2002.
- Fernández González, Miguel Ángel, “Globalización: Rol del Derecho Público y Transformación del Estado”, *Revista Chilena de Derecho*, Número especial, Facultad de Derecho, Universidad Católica de Chile, Santiago, 1998.
- Fernández Pons, Xavier, “El Derecho Internacional público ante el "trilema" de la globalización”, en *Derecho Internacional y Cunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*. coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, Marcial Pons, España, 2009.

Fernández Rozas, José Carlos, “Autorregulación y unificación del derecho de los Negocios internacionales”, *Comercio exterior* (J.V. González García, Dir.), Madrid, Iustel, 2009.

\_\_\_\_\_, “Comunitarización del Derecho internacional privado y Derecho aplicable a las obligaciones contractuales”, *Revista Española de Seguros*, número 140, 2009.

\_\_\_\_\_, “Sucesión de normas y Derecho internacional privado: consideraciones en torno a la crisis de las soluciones unitarias en el Derecho intertemporal”. En *Hacia un nuevo Orden Internacional y europeo. Estudios en homenaje al profesor Don Manuel Díez de Velasco*, Tecnos, Madrid, 1993.

\_\_\_\_\_, “Sobre el Contenido del Derecho Internacional”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Vol. 38, 1986.

Fernández Tomás, Antonio Francisco, “El principio de la soberanía permanente sobre los recursos y riquezas naturales entre la invocación retórica y la inaplicación judicial”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009.

Ferrera, M., Matsaganis, M. y Sacchi, S., “Open Coordination Against Poverty: The New EU Social Inclusion Process”, *Journal of European Social Policy*, número 12, 2002.

Ferreri, Andrea, "La direttiva n. 2004/35/CE sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale", *Diritto comunitario e degli Scambi internazionali*, número 2, 2005.

Fitzmaurice-Lachs, Malgosia, *Contemporary Issues in International Environmental Law*, Edward Elgar, Cheltenham, 2009.

\_\_\_\_\_, “Environmental Protection and the International Court of Justice”, en *Fifty Years of International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings*, Eds. Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, 1996.

\_\_\_\_\_, “The contribution of environmental law to the development of modern international law”, en *Theory of international law at the threshold of the 27<sup>th</sup> century: essays in honour of Krzysztof Skubiszewski*, Kluwer Law International, The Hague, Boston, Mass., 1996.

Fogleman, Valerie, “The environmental liability directive”, *Environmental Liability*, número 3, 2004.

Franzina, Pietro, “Sul forum necessitatis nello spazio giudiziario europeo”, *Revista de Derecho Internacional*, 2009.

Francq, Stephanie, “Les champs d'application (matériel et spatial) dans les textes de référence. De la cohérence terminologique à la cohérence systémique. Faillon, Lagarde, Poillot (dirs.), *La matière civile et commerciale socle d' un code européen de droit international privé*, París, 2009.

Fuentes Camacho, Víctor, “Principio de proximidad y precisión del *forum delicti comissi* en las hipótesis de pluralidad de daños sobrevenidos en distintos Estados”, [Comentario a la Sent. T.J.C.E. de 11 de enero de 1990. Asunto C-220/88 (*Société Dumez France et Société Oth Infrastructure c. Société Hessiche Landesbank et autres*)], *La Ley. Comunidades Europeas*, año XIII, núm. 77, 27 noviembre 1992.

Fuentes Naharro, Mónica, “Accionistas externos de grupos de sociedades: una primera aproximación a la necesidad de extender la perspectiva tuitiva a la sociedad matriz”, *Documentos de Trabajo del Departamento de Derecho Mercantil*, Universidad Complutense, 2008.

Gabuardi, Carlos, “Entre la jurisdicción, la competencia y el *forum non conveniens*”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, nueva serie, año XLI, número 121, 2008.

Gardeñes Santiago, Miguel, “La compétence spéciale en matière délictuelle et quasi délictuel dans la Convention de Bruxelles: á propos de l'arrêt Presse Alliance du 7 mars 1995”, *Revue Trimestielle du Droit Européen*, 1995.

Garau Sobrino, Federico, “La Literalidad Interpretada desde la coherencia del Sistema. Las relaciones entre el Reglamento Bruselas I y los Convenios sobre materias particulares según el TJUE”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 3, número 1, 2011.

\_\_\_\_\_, “Los Acuerdos Atributivos de Jurisdicción en Derecho Procesal Civil Internacional Español”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, 2010.

García Cobaleda, Manuel, “Libro Blanco sobre responsabilidad ambiental, 9 de febrero de 2000 COM(2000) 66 final”, *Gestión Ambiental*, número 19, 2000.

Gomis Catalá, Lucía, “Estrategia comunitaria en materia de responsabilidad por daños al medio ambiente”. *Gestión Ambiental*, número 19, 2000.

García Figueroa, Alfonso, “El Derecho como argumentación y el Derecho para la argumentación”, *Cuadernos de Filosofía del Derecho DOXA*, Departamento de



Filosofía del Derecho Universidad de Alicante, edición electrónica Espagrafic, 1989.

García Matamoros; Laura y Herrera Lozano, María, “El concepto de los daños punitivos o punitive damages”, *Revista Estudios Socio-Jurídicos*, Universidad del Rosario, Año 5, número 1, Bogotá, 2003.

García Menendez, José Ramón, “Globalización de la Economía Internacional”, *Revista de Estudos Sociais*, Año 5, número 9, 2003.

García Rubio, María Paz, “Los daños causados por el *Prestige*. Un largo y tortuoso camino en el logro de su reparación”, en *Derecho de Daños. Práctica*, No 24, Madrid, 2005.

Gaudemet-Tallon, Hélène, “Note a la STJCE 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, C-220/88”, *Revue Critique de Droit International Privé*, Vol. II, 1990.

George. A., “The use of antisuit injunction in international litigation”, *Columbia Journal of Transnational Law*, Vol. 28, 1990.

Gómez Jene, Miguel, “Propuestas de inclusión del arbitraje en el reglamento 44/2001”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010.

Gómez Ligüerre, Carlos Ignacio, “Problemas de jurisdicción competente y de Derecho aplicable en pleitos de responsabilidad civil extracontractual”, *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, número. 2, Barcelona, 2009.

González Beilfuss, Cristina, “Relaciones e interacciones entre Derecho comunitario, Derecho internacional privado y derecho de familia europeo en la construcción de un espacio judicial común”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, T.IV, 2004.

González Campos, Julio, “Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en droit international privé”, *Recueil des Cours de l'Académie de Droit international de la Haye*, T. 156, 1977-III.

González Vaqué, Luis “La responsabilidad medioambiental en la Unión Europea: la Directiva 2004/35/CE”, *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*, número 11, 2006. [Disponible en: [http://www.reei.org/reei%2011/L.GonzalezVaque\(ree11\).pdf](http://www.reei.org/reei%2011/L.GonzalezVaque(ree11).pdf)] Revisado 23 de julio del 2012.

- Goñi Urriza, Natividad, “La concreción del lugar donde se ha producido el hecho dañoso en el art. 5.3 del reglamento 44/2001: Nota a la STJCE de 16 de julio de 2009”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 3, número 1, 2011.
- Guzmán Zapater, Mónica, “Competencia de la unión europea para concluir tratados internacionales en materia de Derecho Internacional Privado (a propósito del Dictamen del TJCE 1/ 2003, de 7 febrero 2006)”, *Revista Electrónica De Estudios Internacionales*, número 14, 2007.
- Hatzimijail, N. y Nuyts, A., “Judicial cooperation between the United States and Europe in Civil and Commercial matters: an overview of issues”, Nuyts, A. y Watté, N., (Eds.) *International Civil Ligation in Europe with third States*, Bruselas, 2005.
- Hermon, Carole, “La réparation du dommage écologique, les perspectives ouvertes par la directive du 21 avril 2004”, *Actualité juridique. Droit administratif*, N° 32, 2004.
- Hinojosa Martínez, Luis Miguel, “A favor del análisis económico del derecho internacional y de la renovación metodológica”, *Derecho Internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo: homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*, coord. Por Ana María Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé, Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, 2009.
- Huet, M. André, “Observaciones a la STJCE 30 noviembre 1976, *Bier/ Mines de Potasse d’Alsace*, as. 21/76”, *Journal du Droit International*, T. III, 1977.
- \_\_\_\_\_, “Observaciones a la STJCE 11 de enero de 1990, *Dumez France y Tracoba*, C-220/88”, *Journal du Droit International*, T. II, 1990.
- Huet, Jérôme, “Le développement de la responsabilité civile en Droit de l’environnement en France”, *Journées de la Societé de législation comparé, Revue de Droit international en Droit comparé*, 1993.
- Ianni, Ronald W., “International and Private Actions in Transboundary Pollution”, *Canadian Yearbook of International Law*, 1973.
- Iglesias Vila, Marisa, “Justicia global y derechos humanos: hacia una ética de las prioridades”, *Anuario de la Facultad de Derecho. Globalización y Derecho de la UAM*, número 9, 2005.
- Illescas Rafael, “Derecho mercantil y globalización”, *Anuario de la Facultad de Derecho. Globalización y Derecho de la UAM*, número 9, 2005.

- IOS, "Other International Developments", *Environmental Policy and Law*, Vol. 39, número 1, IOS Press, 2009.
- Iriarte Ángel, José Luis, "La armonización del Derecho internacional privado por la Unión europea", *Boletín de la Academia Vasca de Derecho*, Año 4, número 9, 2006.
- Izquierdo Sans, Cristina, "Algunas respuestas del Derecho internacional a la globalización", *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005.
- Jayme, E, "Haftung bei Grenzüberschreitenden" (Responsabilidad transfronteriza por contaminación ambiental), en Nicklisch, F., (ed.) *Prävention in Umweltrecht* (Prevención en el Derecho del Medio Ambiente), Heidelberg, C.F., Müller, 1988.
- Jordano Fraga, Jesús, "La responsabilidad por daños ambientales en el Derecho de la Unión Europea: análisis de la Directiva 2004/35/CE, de 21 de abril, sobre Responsabilidad medioambiental", *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005.
- Juenger, Friedrich K., "The problem with private international law", *Private law in the international arena, Liber amicorum Kurt Siehr*, T.M.C. Asser, The Hague, Netherlands, 2000.
- Juste Ruiz, José, "El accidente del Prestige y el derecho internacional: de la prevención fallida a la reparación insuficiente", *Revista española de derecho Internacional*, número LV-1, 2003.
- Kates, Robert W, "The Human environment: the road not taken, the road still beckoning", *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 77, 1987.
- Kriner, Alicia, Cerne Bibiana y Castorina José Antonio, "El adelgazamiento de la Capa de Ozono: algunos obstáculos para su aprendizaje", *Revista electrónica de enseñanza de las ciencias*, Vol. 2, número. 2, 2003.
- Lagarde, Paul, "le principe de proximité dans le droit international privé contemporain", *Revue des Cours*, T. 196, 1986.
- Laporta, Francisco J., "Globalización e Imperio de la ley. Algunas dudas Westfalias", *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid*, Número 9, 2005.

- Larroumet, Christian, “La responsabilité civile en matière d’environnement. Le Project de Convention du Conseil de l’Europe et le libre vert de la Comisión des Communautés européennes”, *Recueil Dalloz Sirey*, 1994.
- Larroumet et Fabry, “Le projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant de l’exercice d’activités dangereuses pour l’environnement”, *Gazzete du Palais*, 1994.
- Lerman Alperstein, Aída, “Globalización-Regionalización. El debate actual”, *Producción Económica 2005*, UAM-Xochimilco, México, 2010.
- Litman, Harry, “Considerations of choice of law in the Doctrine of forum non conveniens”, *California Law Reviews*, número 74, 1986.
- López Ramón, Fernando, “Observatorio de políticas ambientales 1978-2006. Valoración general”, disponible en: [http://www.ecodes.org/docs/agenda/Valoracion\\_general.pdf](http://www.ecodes.org/docs/agenda/Valoracion_general.pdf) [revisado 29 de junio del 2010].
- Martín Casals, Miquel, “Principios de Derecho europeo de la responsabilidad civil”, Indret, Observatori de dret privat europeu i comparat Universitat de Girona, Núm. 284, 2005.
- Lozano Cutanda, Blanca, “La responsabilidad por daños ambientales: la situación actual y el nuevo sistema de *responsabilidad de Derecho público* que introduce la Directiva 2004/35/CE”, *Justicia Administrativa*, número 26, 2005.
- Malcolm, Rosalind, “Integrated product policy: a new regulatory paradigm for a consumer society?”, *European Environmental Law Review*, Vol. 14, número 14, 2005.
- Martin, G.J., “Réflexion sur la définition du dommage à l’environnement : le dommage écologique pur”, *Droit et environnement*, PUAM 1995.
- Martínez, Adriana, N y Rosenfeld, Adriana, “Gender perspective in international juridical instruments for environmental protection”. Aljaba [online]. Vol.9, 2005.
- Martínez Gonzalez-Tablas, Angel, “Economía de la globalización”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005.
- Martinez, Jenny S., “Toward an International Judicial System”, *Stanford Law Review*, Vol. 56, 2003.

- Matus Acuña, Jean Pierre; Orellana Cruz, Marcos; Castillo Sánchez, Marcelo y Ramírez Guzmán, M. Cecilia, “Análisis dogmático del Derecho Penal Ambiental chileno, a la luz del derecho comparado y las obligaciones contraídas por Chile en el ámbito del Derecho Internacional: conclusiones y propuesta legislativa fundada para una nueva protección penal del medio ambiente en Chile”, *Ius et praxis* [online], Universidad de Taca, Vol.9, N.2, 2003. [Revisado 25 de octubre del 2011]. Disponible en: <[http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=s0718-00122003000200002&lng=es&nrm=iso](http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0718-00122003000200002&lng=es&nrm=iso)>. issn 0718-0012. doi: 10.4067/s0718-00122003000200002.
- Medina Ávila, Luis, "Calentamiento global antropogénico", *Revista OIKOS*, año 13, número 27, 2009.
- Mercado Pacheco, Pedro, “Estado y globalización. ¿Crisis o redefinición del espacio político estatal?”, *Anuario de la Facultad de Derecho*. Globalización y Derecho de la UAM, número 9, 2005.
- Micciché, Rosanna, “Nuova direttiva europea in materia di responsabilità ambientale”, *Rivista Giuridica dell’Ambiente*, número 5, 2003.
- Miquel González, José María, “Observaciones en torno a la responsabilidad extracontractual por el hecho de un contrato independiente”, *Anuario de Derecho Civil*, ISSN 0210-301X, Vol. 36, número 4, 1983, págs. 1501-1514.
- Nafziger, James A.R, “Algunas consideraciones acerca de la elección de la ley según los tribunales y juristas norteamericanos”, *Jurídica Anuario*, Vol II, número 13, 1981.
- Orrego Vicuña, Francisco, “La Responsabilidad por daño al medio ambiente en Derecho internacional”, *Cursos euromediterráneos*, Bancaja de Derecho Internacional, Vol. 1, 1997.
- Orteu Berrocal, Eduardo y Márquez Molero, Rafael, “La transposición de la Directiva 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños ambientales”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005.
- Otero García-Castrillón, Carmen, “El alcance extraterritorial del derecho de la competencia y su utilización como medida comercial”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, Marzo-Abril, número 212, 2001.

\_\_\_\_\_, “Problemas de aplicación de las normas de competencia judicial internacional en el Derecho español y comunitario: reflexiones en torno a la doctrina del *forum non conveniens*”, *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, número 94, 2000.

Ortiz Vidal, María Dolores, “Espacio Judicial Europeo y Tratado de Lisboa: Hacia un nuevo Derecho Internacional Privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010.

Ovalle Favela, José, “Teoría General del Proceso”, *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, número 73, Mexico, 1992.

Özden, Malik, “Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. Situación actual y desafíos de los debates de la ONU en torno a las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos”, *Programa Derechos Humanos del Centro Europa-Tercer Mundo* (CETIM), disponible en: <http://www.cetim.ch/es/documents/bro2-stn-A4-es.pdf> [revisado 31 de julio del 2012].

Pacteau, B., “Les problèmes juridiques internationaux de la pollution”, *Actes du colloque de la section belge de l’institut international de droit de l’expression française, Les aspects juridiques de l’environnement*, Namur, 1975.

Pagh, Peter, “EU-direktiv om miljøansvar”, *Juristen*, n° 1, 2005.

Palao Moreno, Guillermo, “La Comunidad europea y el contrato individual de trabajo internacional: aspectos de jurisdicción competente y legislación aplicable”, *Revista Sequência*, número 52, 2006.

\_\_\_\_\_, “Hacia la unificación de las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en Europa (una visión crítica del Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II)”, en AA. VV. *Derecho Patrimonial Europeo*, España, 2003.

\_\_\_\_\_, “La aplicación de la Regla *forum delicti commissi* (el artículo 5.3 del Convenio de Bruselas de 1968) en supuestos de difamación por prensa (Comentario a la Sentencia del TJCE de 7 de marzo de 1995, en el asunto C-68/93 Fiona Shevill y otros c. Presse Alliance S.A.)”, *Noticias de la Unión Europea*, número 141, 1996.

Pantaleón Prieto, Fernando, “Comentario al art. 1902 C.C.”, *Comentarios del Código Civil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1993.

- \_\_\_\_\_, “Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación”, *Centenario del Código Civil (1889-1989)*, T. II, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990.
- Pardo Leal, Marta, "La futura Directiva sobre responsabilidad ambiental de la responsabilidad civil a la responsabilidad administrativa", *Gaceta Jurídica de la UE*, número 225, 2003.
- Pascale Steichen, “La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux”, *Revue juridique de l'environnement*, número 2, 2003.
- Paz-Ares, Cándido, “Principio de eficiencia y Derecho Privado”, *Estudios de Derecho Mercantil* en homenaje al profesor M. Broseta Pont, T.III, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1995.
- Pérez Carrillo, Elena, “Protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento comunitario europeo actual”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. VII, 2007.
- Pernas Romani, Ana, “Libro verde sobre reparación del daño ecológico”, en *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, número 83, Madrid, 1993-1994.
- Pigrau i Solé, Antoni, “La responsabilidad de las empresas transnacionales por daños graves al medio ambiente explorando la vía de la Alien Tort Claims Act”, *Derecho internacional y comunitario ante los retos de nuestro tiempo. Homenaje a la profesora Victoria Abellán Honrubia*. Coord. Por Ana Badia Martí, Antoni Pigrau i Solé y Andreu Olesti Rayo, Vol. 1, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 2009.
- Pirotte, Charles, “La directive 2004/35/CE sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux”, *L'Observateur de Bruxelles*, número 61, 2005.
- Pocar, Fausto, “Le lieu fu fair illicite dans les conflicts des lois et de jurisdictions”, *Travaux du Comité français de droit international privé*, 1985-1986.
- Posner, Richard, “El análisis económico del Derecho en el *Common Law*, en el sistema romano-germánico, y en las naciones en desarrollo”, *Revista de Economía y Derecho*, Vol. 2, número 7, 2005.

- Pothier, Robert Joseph, *Tratado de las Obligaciones*, Tribunal Superior de Justicia del Distrito federal, Dirección general de Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial, 2002, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM, disponible en: <http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1389> [revisado 14 de marzo del 2010].
- Potier, Michel y Tébar Less, Cristina, “Trade and environment at the OECD: Key issues since 1991”. *Working Paper on Trade and Environment*, número 2008-01, 2008.
- Pozzo, Barbara, “Verso una responsabilità civile per danni in Europa: il nuovo *Libro Bianco* della Commissione delle Comunità europee”, *Rivista giuridica dell’ambiente*, Vol. 15, número 5, 2000.
- Prado Carrera, Gina, “La protección jurídica del Medio Ambiente”, *Universitas*, número 107, Pontificia Universidad Javeriana, 2004.
- Prats Canut, Josep Miquel, “Responsabilidad penal de la autoridades y funcionarios municipales en materia ambiental”, *Derecho del medio ambiente y administración local*, Coord. Por José Esteve Pardo, 1995.
- Prevot, Juan Manuel, “El problema de la relación de causalidad en el derecho de la responsabilidad civil”, *Revista Chilena de Derecho Privado*, N° 15, Santiago de Chile, 2010.
- Pueyo Losa, Jorge, Lirola Delgado, Isabel, y Jorge Urbina, Julio: “En torno a la revisión del régimen jurídico internacional de seguridad marítima y protección del medio marino a la luz del accidente del Prestige”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Número 1, Vol. LV, 2003.
- Rafael Sarazá, Jimena, “Responsabilidad concursal y grupos de sociedades”, *Anuario de Derecho concursal*, número 10, 2007.
- Ragués i Vallès, Ramón, “Consideraciones sobre la Prueba del Dolo”, *Revista de Estudios de la Justicia*, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, número 4, 2004.
- Ramírez Bastidas, Yesid, “El Delito Ecológico”, *Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación*, Ponencia presentada en las XII Jornadas Internacionales de Derecho Penal realizadas en octubre de 1990, en la Universidad Externado de Colombia, San Juan, Volumen I, Número 2, 1989.



- Ramírez Otero, Lorena, “El Control y los Grupos de Sociedades”, *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, Número 5, 2001.
- Rams Ramos, Leonor: “El reparto competencial en los casos de catástrofes marítimas por vertido de hidrocarburos: el caso del Prestige”, *Revista General de Legislación y Jurisprudencia*, Año CXLIX, Número 4, 2002.
- Regis Prado, Luiz, “La cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica en Derecho Brasileño”, *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 2da. Epoca, Número 6, 2000.
- Rehbinder Eckart, “Evaluation et reparation du dommage écologique. Raport Général”, *Le dommage écologique en droit interne communautaire et comparé*, Actes du Colloque organisé les 21 et 22 mars 1991 à la Faculté de Droit d’Economie et Gestion de Nice Sophia-Antipolis, Economica, 1991.
- Reinoso Barbero, Fernando, “Foro de conveniencia, derecho de conveniencia y nulidad”, *Revista de Derecho UNED*, número 4, 2009.
- Rest, Alfred, “Plaintiff can choose his court”, *Environmental Policy and Law*, número 1, 1975.
- Rodiles, Alejandro, “ La fragmentación del Derecho internacional. ¿riesgos u oportunidades para México?”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, IX, 2009. Disponible en : <http://www.bibliojuridica.org/estrev/derint/cont/9/art/art12.htm#P117> [revisado 27 de diciembre del 2011].
- Rodrigo Hernández, Ángel, “El principio de Integración de los aspectos económicos, sociales y medioambientales del desarrollo sostenible”, *Revista Española de Derecho Internacional*, Marcial Pons, Vol. LXIV, 2, 2012.
- Rodríguez Benot, Andrés, “El criterio de conexión para determinar la ley personal: un renovado debate en derecho internacional privado”, *Cuadernos de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 1, 2010.
- Romero Seguel, Alejandro, “La Falta de Jurisdicción y su denuncia en el proceso: las excepciones procesales y materiales”, Comentario, *Revista Chilena del Derecho*, Vol. 31, número 1, 2004.
- Rosenkrantz, Carlos F., “En defensa de la responsabilidad estricta una revisión crítica del tratado de responsabilidad extracontractual de Enrique Barros Bourie”, *Estudios Públicos*, Centro de Estudios Públicos, número 112, Chile, 2008. Disponible en: Revisado 24 de octubre 2011.

- Ruiz de Apodaca Espinosa, Ángel, “Garantías financieras y de reparación del daño ambiental establecidas en la Directiva 2004/35/CE”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005.
- Ruiz García, Juan, “Otra vuelta de tuerca a los daños punitivos”, *Revista para el Análisis del Derecho*, disponible en [http://www.indret.com/pdf/438\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/438_es.pdf) [revisado 7 de marzo 2010].
- Ruiz-Rico Ruiz, Catalina, “La autocontratación en el grupo de sociedades”, *Libro homenaje al profesor Fernando Sánchez Calero*, Vol. 5, 2002.
- Salvador Coderch, Pablo y Fernández Crende, Antonio, “Causalidad y responsabilidad”, *Indret Revista para el Análisis del Derecho*, Tercera edición, número 329, Barcelona, 2006. Disponible en: [http://www.indret.com/pdf/329\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/329_es.pdf) [Revisado 24 de abril del 2012].
- Sánchez-Calero, Francisco, "De nuevo sobre la regulación de los grupos de sociedades", *Revista de Derecho Bancario y Bursátil*, año 19, número 77, 2000.
- Sánchez-Calero Guilarte, Juan, “Algunas cuestiones concursales relativas a los grupos de sociedades”, *Anuario de Derecho Concursal*, número 5, 2005.
- Sarmiento, Daniel, “La Autoridad del Derecho y la Naturaleza del Soft Law”, *Cuadernos de Derecho Público*, número. 21, 2007.
- Seuba Torreblanca, Joan Carles, “Derecho de daños y Derecho internacional privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la Propuesta de Reglamento Roma II”, *Indret*, número 269, Barcelona, 2005.
- Silberman, L, “Comparative Jurisdiction in the international context: will the proposed Haged Convention be Stalled”, *DePaul Law Review*, Vol. 52, 2002.
- Siqueiros, José Luis, “La Ley aplicable y Jurisdicción Competente en casos de responsabilidad civil por contaminación transfronteriza”, *Anuario Mexicano de Derecho Internacional*, Vol. II, 2002.
- Short, Megan, “Taking back the trash: comparing European extended producer responsibility and take-back liability to US environmental policy and attitudes”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 37 número 4, 2004.
- Slaughter, Anne-Marie, “A Global Community of Courts”, *Harvard International Law Journal*, Vol. 44, n. 1, 1993.

Schlosser, Peter, "Jurisdiction in International. Litigation. The Issue of Human Rights in Relation to National Law and to Brussels", *Revista di Diritto Internazionale*, Vol LXXIV, 1991.

Smets, Henri, "Les exceptions admises au principe pollueur payeur The exceptions to the polluter-payer principle", en *Droit et Pratique du Commerce International*, T. 20, número2, 1994.

\_\_\_\_\_, "Legal Principles Adopted by the OECD Council", *Environmental Policy and Law*, número9, Bonn, 1982.

Sobrino Heredia, José Manuel, "Una Aproximación desde el Derecho Comunitario a la catástrofe del *Prestige*", Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, número 8, 2004. Disponible en: <http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2337/1/AD-8-47.pdf> [revisado 23 de julio del 2012].

\_\_\_\_\_, "La aportación jurisprudencial de los Dictámenes del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas", *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade de A Coruña*, 2007.

Sorensen, Max, "Principes de Droit International Publique", *Recueil des cours de l'Academie de Droit International*, T.III., 1960.

Sozzo, Gonzalo, "Riscos do desenvolvemento e sistema do direito de danos (para um Direito de Danos pluralista)". *Direito, sociedade e riscos – a sociedade contemporânea vista a partir da idéia de risco*, UniCEUB, UNITAR, Brasília, 2006.

Suderow, Julia, "Cuestiones de Jurisdicción Internacional en torno a la aplicación privada del Derecho Antitrust: *Forum Shopping* y demandas torpedo", *Revista de Derecho Transnacional*, Vol. 2, número 2, Madrid, 2010.

Swann, Stephen, "Bases conceptuales del derecho delictual propuestos por el Grupo de Estudio para un Código Civil Europeo", *Indret*, Working Paper número 130, Barcelona, abril de 2003. Disponible en: [http://www.indret.com/pdf/130\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/130_es.pdf). Revisado: 5 de octubre 2011.

Taschner, Hans Claudius, "Environmental Liability and Product Liability in the EU: a Comparison". *Review of European Community & International Environmental Law*, Vol. 9, número 2, 2000.

- Teitelbaum, Alejandro, “El problema de la impunidad. Las violaciones de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, *El derecho a la equidad. Ética y mundialización social*, Terre des Hommes, Barcelona, Icaria, 1997.
- Teubner, Gunther, “Globalización y constitucionalismo social: alternativas a la teoría constitucional centrada en el Estado”, *Anuario de la Facultad de Derecho. Globalización y Derecho de la UAM*, número 9, 2005.
- Thieffry, Patrick, “Responsabilité environnementale des entreprises: les projets européens se précisent”, *Les Petites affiches*, Vol. 392, número 38, 2003.
- Thomas, Christopher y Tereposky, Greg “The Evolving Relationship Between Trade and Environmental Regulation”, *Journal of World Trade*, 1993.
- Thomas Larson, Eric, “Why environmental liability regimes in the United States, the European Community and Japan have grown synonymous with the polluter pays principle”, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 38, número 2, 2004.
- Trubek, D. y Trubek, L., “Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: The Role of the Open Method of Coordination”, *European Law Journal*, número 11, 2005.
- Uliescu, Marilena, “La responsabilité pour les dommages écologiques”, *Revue internationale de droit comparé*, Vol. 45, número 2, 1993.
- Urbina, Julio Jorge, Lirola Delgado, Isabel, Pueyo Losa Jorge Antonio, “En torno a la revisión del régimen jurídico internacional de seguridad marítima y protección del medio marino a la luz del accidente del *Prestige*”, *Revista española de Derecho Internacional*, Vol. 55, número 1, 2003.
- Valencia Martín, Germán, “El impacto (favorable) de la Directiva 2004/35/CE en el sistema español actual de responsabilidad por daños ambientales”, *Monografía de la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental*, número 7, 2005.
- Vázquez, María Fernanda, “Grupos de sociedades y protección de acreedores (una perspectiva societaria)”. Resención Fuentes Naharro, M. Ed. Thomson-Civitas, colección estudios de Derecho Mercantil, 2007, en Revista *Ius et Praxis*, Vol. 13, número 2, Talca, Chile, 2007.
- Velázquez Becerril, César y Pérez Pérez, Gabriel, “Las transformaciones del Estado-nación en el contexto de la globalización”, *Política y Cultura*, 2010, número 34.

- Vinaixa Miquel, Mónica, “La unificación de las normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en el reglamento de Roma II”, *Revista General de Derecho Europeo*, número 15, Salamanca, 2008.
- Viney, Geneviève y Jourdain, Patrice, “Les conditions de la responsabilité”, en Jacques Ghestin, *Traité de Droit Civil*, Librairie Générale de droit et de jurisprudence, 2da. Ed., París, 1998.
- \_\_\_\_\_, “Les principaux aspects de la responsabilité civile des entreprises pour atteinte à l’environnement en droit français”, *La Semaine Juridique JCP*, ed. G, I, 1996.
- Viñuales, Jorge E., “The contribution of International Court of Justice to the Development of International Environmental Law: a contemporary assessment”, *Fordham International Law Journal*, número 32, Fordham University School of Law, 2008.
- Von Mehrem, Arthur T. y Trautman, Donald T., “Jurisdiction to adjudicate: A suggested Analysis”, *Harvard Law Review*, número 79, 1966.
- Von Overbeck, Alfred, “De vuelques règles générales de conflits de lois dans les codifications récentes”, *Private law in the international arena, Liber amicorum Kurt Siehr*, T.M.C. Asser, The Hague, Netherlands, 2000.
- Waters, Melissa A., “Mediating Norms and Identity: The Role of Transnational Judicial Dialogue in Creating and Enforcing International Law”, *Georgetown Law Journal*, Vol. 3, n. 2, enero de 2005.
- White, Gilbert F., “La investigación de los riesgos naturales”, en R.J., Chorley (ed), *Nuevas Tendencias en Geografía*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1975.
- Wilde, Mark, “Civil liability for environmental damage: a comparative analysis of law and policy in Europe and the United States”, *Kluwer Law International*, La Haya, 2002.
- \_\_\_\_\_, “The EC Commission's White Paper on environmental liability: issues and implications”, *Journal of Environmental Law*, Vol. 13, número 1, 2001.
- Wilhelmsson, Thomas, “Private Law in the EU: Harmonised or Fragmented europeanization”, *European Review of Private Law*, 2002.
- Young, Robert; Faure, Michael and Fenn, Paul (2007) "Multiple Tortfeasors: An Economic Analysis," *Review of Law & Economics*, Vol. 3, Iss. 1, Article 7.

Disponible en: <http://www.bepress.com/rle/vol3/iss1/art7> [revisado el 11 de octubre de 2011].

Zabalo Escudero, Maria Elena, “La ley aplicable a la responsabilidad por daños derivados de los productos en el derecho internacional privado español”, *Revista Española de Derecho Internacional*, número 43, 1991.

### **3.- Documentación.**

#### **3.1.- Convenios de Derechos Humanos seleccionados.**

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de Noviembre de 1950. Modificado por los Protocolos nos. 11 y 14 completado por el Protocolo adicional y los Protocolos nos. 4, 6, 7, 12 y 13.

Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969.

Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 52º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 187 (1994).

Observación General número 24, del Comité de Derechos Humanos, sobre cuestiones relacionadas con las reservas formuladas con ocasión de la ratificación del Pacto o de sus Protocolos Facultativos o de la adhesión a ellos, o en relación con las declaraciones hechas de conformidad con el artículo 41 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. 52º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 187 (1994).

#### **3.2.- Tratados multilaterales de origen no comunitario sobre Derecho Internacional Privado.**

Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Convención de Nueva York) de 1958, en vigor desde el 7 de junio de 1959.

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en materia Civil y Mercantil, de 17 de abril de 1979.

Convención Interamericana, sobre Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencia extranjeras. La Paz, 24 de mayo de 1984.

Convención Interamericana, sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, Uruguay 8 de mayo de 1979.

Convención de la Haya sobre ejecución de sentencias extranjeras. 1 de febrero de 1971.

Convención (Anteproyecto) Interamericana sobre Ley aplicable y jurisdicción internacional competente en casos de responsabilidad civil por contaminación transfronteriza. Anexo a comunicación enviada la OEA por el Ministro de Relaciones Exteriores Uruguayas, 2 de octubre del 2001.

### **3.3.- Convenios multilaterales de origen comunitario y no comunitario con incidencia en la protección del medio ambiente.**

Convención para la Protección de la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de América, de Washington 1940.

Convención que Reglamenta la caza de la ballena de Washington 1946.

Convención que regula el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de Washington, 1973.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992 y sus Protocolos.

Convenios sobre Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (Protocolo de Montreal de 1990).

Convenio de Viena para la protección de la Capa de Ozono de 1985.

Convención de Aarhus (Dinamarca) de 25 de junio de 1998, sobre Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

Protocolo de Montreal sobre Sustancias que agotan la capa de ozono de 1987.

Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente (EAE) de Kyev (Ucrania) 21 de mayo de 2003.

Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de Berna). Incorporado mediante Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981.

Protocolo sobre agua y salud de Londres del 17 de junio de 1999.

Convenio sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza de 14 de noviembre de 1979. Incorporación del Convenio mediante Decisión 81/462/CEE: Decisión del Consejo, de 11 de junio de 1981, relativa a la celebración del Convenio sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia.

Protocolo sobre evaluación estratégica del medio ambiente de la convención de Espoo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo, COM/2008/0132 final - CNS 2008/0052 de 11 de marzo del 2008.

Convenio revisado para la navegación del Rin, celebrado en Mannheim el 17 de octubre de 1868, Protocolo de 17 de octubre de 1979.

### **3.4.- Tratados multilaterales sectoriales de responsabilidad civil por daño nuclear, hidrocarburos y sustancias peligrosas.**

#### **3.4.1.- Tratados multilaterales en materia nuclear.**

Convención de Viena de 21 de mayo de 1963 sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares.

Convención de 12 de septiembre de 1997 sobre Indemnización Suplementaria por Daños Nucleares.

Convenios de la International Atomic Energy Agency (IAEA) de Viena 1963 y 1997.

Convenio de la responsabilidad civil en materia de energía nuclear, de París 1960, Protocolo de 1982, Convenio suplementario, de Bruselas 1963 y Protocolo de 2004.

Convenio de Bruselas de 17 de diciembre de 1971 relativo a la Responsabilidad Civil en la Esfera de Transporte Marítimo de Sustancias Nucleares.

Convenio de París de 29 de julio de 1960 acerca de la Responsabilidad Civil en Materia de Energía Nuclear y Convenio Complementario de Bruselas de 31 de enero de 1963. Publicado en BOE español, número 28, Madrid, el 2 de febrero de 1967.



Convenios de la International Atomic Energy Agency (IAEA) de Viena 1963 y 1997.

Protocolo Común de 21 de septiembre de 1988 relativo a la Aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de París sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares

### **3.4.2.- Tratados multilaterales en materia de hidrocarburos.**

Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos de 1977.

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a la Contaminación por hidrocarburos, de Bruselas 1969, sustituido por el Convenio de 1992.

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques, de Londres 2001 (BUNKERS 2001).

Convenio internacional de constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños causados por contaminación por hidrocarburos, de Bruselas 1971 y sus Protocolos de 1992 y de 2003.

Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos.

Convenio internacional de 27 de noviembre de 1992 de Constitución de un Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos.

Convenio Internacional de 23 de marzo de 2001 sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos para Combustible de los Buques.

Convenio internacional de constitución de un Fondo internacional de indemnización de daños causados por contaminación por hidrocarburos, de Bruselas 1971 y sus Protocolos de 1992 y de 2003.

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños debidos a contaminación por hidrocarburos para combustible de los buques, de Londres 2001 (BUNKERS 2001).

Convenio de Bruselas de 1969, sobre responsabilidad Civil por Contaminación con Hidrocarburos, artículo IX.

Convenio Internacional para prevenir la contaminación de las aguas de mar por hidrocarburos de 1977.

Convenio de Bruselas de 1969 y el de 1971 sobre constitución de un fondo internacional de indemnización de daños causados por la contaminación de hidrocarburos, publicado en el BOE, No 60, Madrid, 11 de marzo de 1982.

### **3.4.3.- Tratados multilaterales en materia de sustancias peligrosas.**

Convención de Lugano de 1993, sobre de 1993 sobre responsabilidad civil por los daños resultantes de actividades peligrosas para el medio ambiente.

Convenio de 10 de octubre de 1989 sobre Responsabilidad Civil por Daños Causados Durante el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, por Ferrocarril y por Vías Navegables.

Convenio internacional de 3 de mayo de 1996 sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en Relación con el Transporte Marítimo de Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas.

Convenio de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación de Basilea 1989.

Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación de 1992.

Convenio sobre responsabilidad civil por los daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (Convenio de Lugano). Anexo I (sustancias peligrosas) y Anexo II (instalaciones o sitios de incineración, tratamiento, manipulación o reciclado de desechos). Abierto a la firma en Lugano el 21 de junio de 1993.

Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas de 1996.

### **3.5.- Tratados comunitarios.**

#### **3.5.1.- Tratados constitutivos de la Unión Europea.**

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado de Maastricht de 7 de febrero de 1992 y Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997), modificado por el Tratado de Niza firmado el día 26 de febrero de 2001 (Ley Orgánica 3/2001, de 6 de noviembre, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza día 26 de febrero de 2001. Modificado por acta de 23 de septiembre de 2003 (DO número 1236).

Tratado de Funcionamiento de la Unión, publicado en el Diario oficial de la UE el 30 de marzo de 2010.

Versión consolidada del Tratado constitutivo la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Este documento contiene la última actualización teniendo en cuenta la modificación aportada por el Reglamento (UE, Euratom) n.º 741/2012 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de agosto de 2012, por el que se modifican el Protocolo sobre el estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I.

Tratado de Lisboa, publicado en el Diario oficial de las comunidades europeas número 306, con fecha 17 de diciembre del 2007. En vigencia desde el 1º de diciembre de 2009.

Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Este documento contiene las últimas actualizaciones teniendo en cuenta la modificación aportada por el Reglamento (UE, Euratom) n.º 741/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de agosto de 2012, por el que se modifican el Protocolo sobre el estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su anexo I, así como las modificaciones aportadas mediante las Decisiones 2010/718/UE y 2012/419/UE del Consejo Europeo, de 29 de octubre de 2010 y de 11 de julio de 2012, que modifican el estatuto respecto de la Unión Europea de la isla de San Bartolomé y de Mayotte, respectivamente.

#### **3.5.2.- Convenios comunitarios sobre Competencia Judicial Internacional.**

Acuerdo CE/Dinamarca sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil del 23 de marzo de 2006.

Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Sustituido por el Convenio de Bruselas de 1968 y firmado en Bruselas el 19 de octubre de 2005.

Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, publicado en el DOCE número 27 de fecha 26 de enero de 1998.

Convenio de Lugano del 16 de septiembre de 1988, celebrado entre Estados miembros y Estados de la Asociación europea de libre comercio (AELC) relativo a la competencia judicial y al reconocimiento de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

### **3.6.- Directivas comunitarias citadas.**

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, art. 12.

Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres, art. 5.

Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales. [adopción codecisión COD/2002/0021] en vigor desde el 30.4.2004. Plazo de trasposición para los Estados miembros 30.4.2007. DO L 143 de 30.4.2004. Modificada por Directiva 2006/21/CE que entró en vigor el 1.5.2006. Plazo de trasposición 1.5.2008. DO L 102 de 11.4.2006.

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, art. 12.

### **3.7.- Reglamentos comunitarios citados.**

Reglamento (CE) Número 4/2009 del Consejo de 18 de diciembre de 2008 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos.

Reglamento (CE) No 2201/2003 del Consejo de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1347/2000.

Reglamento (CE) N° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I).

Reglamento (CE) N° 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II).

Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio de 1993, por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales.

Reglamento (CE) No 2157/2001 del Consejo de 8 de octubre de 2001 por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001).

### **3.8.- Documentación oficial de organismos internacionales.**

#### **3.8.1.- Documentación oficial de organismos comunitarios.**

Comunicación de la Comisión de 15 de mayo de 2001 «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible (Propuesta de la Comisión ante el Consejo Europeo de Gotemburgo)» [COM (2001) 264].

Comunicación de la Comisión de 13 de diciembre de 2005 relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible - Plataforma de acción [COM (2005) 658].

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, de 21 de febrero de 2002, «Hacia una asociación mundial para un desarrollo sostenible» [COM (2002) 82].

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2009: «Revisión de la Política de Medio Ambiente en 2008» [COM(2009) 304].

Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las regiones, sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria Bruselas 18 de noviembre del 2008 COM (2008) 773 final. Disponible en

[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004\\_2009/documents/dv/com\\_com\(2008\)0773\\_/com\\_com\(2008\)0773\\_es.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/com_com(2008)0773_/com_com(2008)0773_es.pdf) [revisado el 19 de marzo de 2009].

Comisión Europea, Bruselas, COM(2010) 748, 2010/0383 (COD) del 14 de diciembre del 2010, sobre Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida).

Comisión Europea, Red Judicial Europea en Materia Civil y Mercantil, *Glosario*, disponible en: [http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary\\_es.htm#ObligNonContr](http://ec.europa.eu/civiljustice/glossary/glossary_es.htm#ObligNonContr) visitado 19 de abril de 2010.

Informe del Parlamento Europeo de 9 de junio del 2010, sobre la aplicación y revisión del Reglamento (CE) número 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil 2009/2140 (INI).

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico Y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, COM(2009) 174 final, Bruselas, 21.4.2009.

Informe de *P. Jenard* “Informe sobre el Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil”, D.O.C.E., número C189/122 de 18 de julio de 1990.

Informe del Abogado General *P. Jenard* relativo al Convenio de Bruselas de 1968, DO 1979, C 59, p. 18. Texto en español, DO 1990, C 189, p. 138.

Informe *Schlosser* sobre el Convenio relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia. DO. 1979, C 59, pp. 71 y ss.

### **3.8.2.- Documentación oficial de organismos internacionales no comunitarios.**

Anteproyecto de Convención Interamericana sobre Ley aplicable y jurisdicción internacional competente en casos de responsabilidad civil por contaminación transfronteriza. Anexo a comunicación enviada la OEA por el Ministro de Relaciones Exteriores Uruguayas, 2 de octubre del 2001.

Coloquio “Hacia una Convención de Derecho Internacional privado sobre daños al medio ambiente”, dio como resultado los “Diez puntos de Osnabrück”, organizado por la Universidad de Osnabrück y la Conferencia de La Haya, abril de 1994.

Comisión Económica para Europa, Comité de Política Ambiental. Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. ECE/CEP/INFORMAL/1999/1. De fecha 15 de enero de 1999.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano reunida en Estocolmo en junio de 1972 (Declaración de Estocolmo de 1972).

Conference on Private International Law, The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters, *Annual Report 2008*, La Haya.

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, reunida en Estocolmo en junio de 1972.

Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro en junio de 1992.

Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de Nueva Delhi en DOC. A/57/329 de 31 de agosto del 2002.

Directrices N°3 (Conceptos) y N° 5 (Responsabilidad) del Proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (UNEP/Env. Law/IGM. Lia/2/2. Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009).

ECOSOC (Comisión de Empresas Transnacionales del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas) creada por resolución 1913 (LVIII) de 1974.

ECOSOC (Naciones Unidas, Consejo Económico y Social), E/CN.4/Sub.2/2003/L.8 del 7 de agosto del 2003, sobre Responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos.

Informe *Brundtland*. Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de ONU de 1987.

Informe *Martti Koskenniemi*, Fragmentación del Derecho internacional: dificultades derivadas de la diversificación y expansión del Derecho Internacional. del

Grupo de Estudio de la Comisión de Derecho Internacional. A/CN.4/L.682. 13 de abril de 2006.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), *Working Group III Report: Mitigation of Climate Change*, in: *Climate Change 2007 IPCC, Fourth Assessment Report (AR4)*. Accesible en: <http://www.ipcc.ch/>

OECD *Legal Aspects of Transfrontier Pollution*, Paris, 1977.

OECD, “II. General Policies”, *Guidelines for Multinational Enterprises*. 2011 Edition.

ONU, Consejo Económico y Social, E/CN.4/Sub.2/2003/L.8 del 7 de agosto del 2003, sobre Responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en la esfera de los derechos humanos.

PNUMA, Reunión intergubernamental encargada del examen y ulterior desarrollo del proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente (UNEP/Env. Law/IGM. Lia/2/2. Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009).

PNUMA, Informe de la reunión intergubernamental encargada del examen y ulterior desarrollo del proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente, Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009, UNEP/Env.Law/IGM.Lia/1/3.

UNCC (United Nation Comission Compensation). Constituida por Resolución N° 687 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

UNDRO (United Nation Disaster Relief Organisation) y United Nation Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), *Natural disasters and vulnerability Analisis*, Report of Expert Group Meeting (9-12 July 1979), Boston Public Library.

UNEP/Env. Law/IGM. Lia/2/2. Nairobi, 9 a 11 de noviembre de 2009. Trato conjunto aparece de manifiesto en la asociación de las Directrices número3 (Conceptos) y número 5 (Responsabilidad) del Proyecto de directrices para la elaboración de legislación nacional sobre responsabilidad, medidas de respuesta e indemnización por daños causados por actividades peligrosas para el medio ambiente.



UNRISD, *Mains visibles: assumer la responsabilité du développement social*, United Nations Research Institute for Social Development, Genève 2000.

### **3.9.- Libros Verdes de convenios y reglamentos comunitarios.**

Libro Verde sobre la revisión del Reglamento (CE) N° 44/2001, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Bruselas, COM(2009) 175 final, 21 de abril del 2009.

Libro Verde sobre reparación del daño ecológico de 1988 y el Libro Blanco sobre responsabilidad civil ambiental, COM (2000) 66 final, Bruselas, 9 de febrero de 2000.

Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización COM 2002, 654 final.

Libro Verde sobre garantías de los bienes de consumo y los servicios postventa COM (93) 509, de noviembre de 1993.

Libro Verde sobre Acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único COM (93) 576, de noviembre de 1993.

Libro Verde sobre la responsabilidad civil por productos defectuosos COM(1999) 396, de julio de 1999.

Libro Blanco de Responsabilidad Ambiental (Comisión de las Comunidades Europeas, COM (2000) 66 final. Bruselas, 9 de febrero del 2000).

Libro verde sobre protección de los consumidores en la Unión Europea COM(2001) 531, de octubre de 2001.

Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumo COM(2006) 744, de febrero de 2007.

Libro verde sobre recurso colectivo de los consumidores COM(2008) 794, de noviembre de 2008.

Libro verde sobre opiniones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas. Bruselas, 1 de julio del 2010 COM(2010)348 final.

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Bruselas, COM(2010) 748 , 2010.

### **3.10.- Leyes nacionales de Estados europeos y no europeos citadas.**

Código Civil de Alemania (Bürgerliches Gesetzbuch o *BGB*): §§831 y 832

Code Civil Francés: Art. 102, artículo 1382, artículo 1384

Código Civil español: Art. 40, artículo 1902, artículo 1903, artículo 1908

Codice Civile italiano: Art. 43, artículo 2043, artículo 2049

Code Civil napoleónico de 1804 : Arts. 1382 y 1383.

Código de Comercio español: artículo 42.1.

Code de Procedure Civile Frances : article 45.

Código Federal de Procedimientos Civiles, México: artículo 565.

Código das Sociedades Comerciais português de 1986.

Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000 del 7 de enero del 2000, BOE 007 de 08/01/2000, artículos 39 y 63- 65.

Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay.

Ley holandesa de sociedades. Reforma de 1971.

Código Civil Holandes. Burgerlijk Wetboek.

La Ley Alemana (Aktiengesetz) del 6 de septiembre de 1965, artículo 18.

Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/2000 del 7 de enero del 2000, BOE 007 de 08/01/2000, artículos 39 y 63- 65.

Ley General de Derecho Internacional Privado de Uruguay, artículo 54.

Proyecto de Código Modelo de Derecho Internacional Privado Mexicano: artículo 157.

Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de la República Argentina: artículo 19.

#### **4.- Jurisprudencia.**

##### **4.1.- Corte Permanente de Justicia Internacional.**

Asunto *Factory at Chorzów*, 1927, Series A, número 9, p. 21 y número 17.

##### **4.2.- Corte Internacional de Justicia.**

Asunto Proyecto *Gabčíkovo-Nagymaros, Hungría vs. Checoslovaquia*. 25 de septiembre de 1997.

CIJ , asunto *Barcelona Traction Light and Power Company, Bélgica vs. España*, sentencia de 5 de febrero de 1970.

##### **4.3.- Tribunal Europeo de Derechos Humanos.**

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 9 de diciembre de 1994 número 1994/496, caso *López Ostra contra Reino de España*.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 1998/875, de 19 de febrero de 1998, caso *Guerra contra Italia*.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 2001/567, de 2 de octubre de 2001, caso *varios contra Reino Unido, aeropuerto de Heathrow*.

Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos número 4143/02 de 16 de noviembre de 2004, caso *Moreno Gómez contra el reino de España*.

##### **4.4.- Jurisprudencia y conclusiones del Tribunal de Justicia europeo.**

###### **4.4.1.- Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.**

STJCE, 21/72 a 24/72, asunto *International Fruit Company y otros*, Rec. 1972, p. 1219, aps. 10-18.

STJCE, 181/73, asunto *Haegemann*, Rec. 1974, p. 449, aps. 3 a 6.

STJCE 12/76 Asunto *Tessili*.

STJCE 21/76, Rec. p. 1735, asunto *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*.

STJCE 30/77, Rec. p. 1999, asunto *Bouchereau*.

STJCE 33/78 Asunto *Somafer vs. Saar-Feerngas*.

STJCE 9/79, Rec. p. 2717, asunto *Koschniske*, apartado 6.

STJCE 25/79, asunto *Société Sanicentral vs Collin* de 10 de enero de 1979.

STJCE 56/79, asunto *Zelger vs. Salinitri*.

STJCE 9/79, Rec. p. 2717, asunto *Koschniske*.

STJCE 201/82, Rec. p. 2503, asunto *Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung y otros*.

STJCE 339/86 Rec. 1991, asunto *Alsthom Atlantique SA. And Compagnie de ConstructionMécanique Sulzer SA*.

STJCE 286/86, asunto *Deserbais*, Rec. 1988, p. 4907, ap. 18.

STJCE 145/86, Asunto *Hoffmann*, Rec. p. 645, apartado 22.

STJUE 12/86, asunto *Demirel*, Rec. 1987, p. 3719, ap. 7.

STJCE, C-189/87, asunto *Athanasios Kalfelis c. Banque Schröder, Münchemeyer, Hengst y Cía. y otros*.

STJCE C-220/88 asunto *Société Dumez France et Société Oth Infrastructure c. Société Hessiche Landesbank et autres*.

STJCE C-365/88, Rec. p. I-1845 asunto *Hagen*

STJCE C-190/89, asunto *Rich*, Rec. p. I-3855.

STJCE C-214/89 de 10 de marzo de 1992, asunto *Powell Duffryn vs. Petereit*, Rec 1992.

STJCE C-351/89, Rec. p. I-3317, caso *Overseas Union Insurance* y otros.

STJCE C-261/90 asunto *Reichert vs. Dresdner Bank*

STJCE 261/90 asunto *Reichert Kockler vs. Dresdner Bank (II)*.

STJCE C-261/90, Rec. p. I-2149, asunto *Reichert y Kockler*.

STJCE C-26/91 asunto *Jakob Handte vs. Mecano Chimiques*.

STJUE C-241/91 P y C-242/91 P, asunto *RTE e ITP*, Rec. 1995, p. I-743, ap. 84.

STJCE C-89/91, Rec. p. I-139, asunto *Shearson Lehman Hutton*.

STJCE C 288/92 Asunto *Custom Made Commercial Ltd*.

STJCE C-125/92, asunto *Mulox IBC*, Rec. p. I-4075.

STJCE, C-379/92, asunto *Peralta*, Rec. 1994, p. I-3453, ap. 16.

STJCE C-406/92, Asunto *Tantry*, Rec. p. I-5439, apartado 58.

STJCE C-364/93 asunto *Marinari*.

STJCE C- 68/93 asunto *Shevill y otros*.

STJCE, C-473/93, asunto *Comisión/Luxemburgo*, Rec. p. I-3207, apartado 40.

STJCE C-296/95, Rec. p. I-1605, asunto *EMU Tabac y otros*

STJCE C-269/95, asunto *Benincasa*, apartado 17.

STJCE C-295/95 de 20 de marzo de 1997, asunto *Farrell*, Rec. p. I-1683, apartado 13.

STJCE C-351/96, de 19 de mayo de 1998, asunto *Drouot assurances SA vs. Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites), Protea assurance, Groupement d'intérêt économique (GIE) Reunion européenne*.

STJCE C-51/97 Rec. p. I-6511 asunto *Réunion européenne y otros vs. Consolidated Metallurgical Industries y otros*.

STJCE C-440/97 asunto *IE Groupe Concorde y otros vs. Capitaine commandant le navire "Suhadiwarno Pnajan" y otros*.

STJCE, C-321/97, asunto *Andersson y Wåkerås-Andersson*, Rec. 1999, p. I-3551, ap. 26.

STJCE C-412/98, Rec. p. I-5925, asunto *Group Josi*.

STJCE C-96/00, asunto *Rudolf Gabriel*.

STJCE C-334/00 asunto *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA*.

STJCE C-167/00, asunto *Verein für Konsumenteninformation y Karl Heinz (Henkel)*.

STJCE C-256/00 Rec. p. I-1699 asunto *Besix*.

STJCE C-96/00, Rec. p. I-6367 asunto *Rudolf Gabriel*.

STJCE C-111/01, Asunto *Gantner Electronic GmbH vs. Basch Exploitation Maatschappij BV*.

STJCE C-433/01, Rec. p. I-0000, asunto *Blijdenstein*.

STJCE C-464/01, asunto *Johann Gruber*.

STJCE C-168/02, Rec. p. I-6009 asunto *Kronhofer*.

STJCE C-18/02 asunto *DFDS Torline A/S*.

STJCE C-281/02 asunto *Andrew Owusu*.

STJCE C-116/02, asunto *Erich Gasser GmbH vs. MISAT Srl*.

STJCE C-159/02, Rec. p. I-3565, asunto *Turner sobre anti-suit injunctions*,

STJCE C-18/02, asunto *DFDS Torline A/S*.

STJCE C-39/02, de 14 de octubre de 2004 asunto *Mærsk Olie & Gas A/S vs. Firma M. de Haan en W. de Boer*.

STJCE C-265/02, Rec. p. I-1543, asunto *Frahuil*.

STJCE C-112/03, Rec. p. I-3707, asunto *Société financière et industrielle du Peloux*, apartados 30-40.

STJCE C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros vs. Frederick Primus, Milton Goldenberg*.

STJCE C-4/03, asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT)*.

STJCE C-112/03, Rec. p. I-3707, asunto *Société financière et industrielle du Peloux*.

STJCE C-4/03, asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG y Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG*, apartado 21.

STJCE C-77/04 asunto *Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne y otros*.

STJCE C-221/04, asunto *Comisión contra Reino de España*.

STJCE C-221/04, de fecha 18 de mayo del 2006, Asunto *Comisión contra Reino de España*.

STJCE, C-308/06, asunto *Intertanko y otros*, Rec. 2008, p. I-4057, ap. 48.

STJCE C-343/04, asunto *Land Oberösterreich contra ČEZ*, apartados 27-29.

STJCE C-73/04, asunto *Brigitte y Marcus Klein y Rhodos Management Ltd*, apartados 14-16.

STJCE C-103/05 asunto *Reisch Montage*.

STJCE C-174/05, Rec. p. I-2443, asunto *Zuid-Hollandse Milieufederatie y Natuur en Milieu*.

STJCE C-174/05, Rec. p. I-2443, asunto *Zuid-Hollandse Milieufederatie y Natuur en Milieu*, apartado 20.

STJCE, C-431/05, asunto *Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos*, Rec. 2007, p. I-7001, ap. 31.

STJCE C-98/06, asunto *Freeport plc*.

STJCE, C-463/06, asunto *FBTO Schadeverzekeringen NV*

STJCE C- 185/07, asunto *Allianz SpA y Generali Assicurazioni Generali SpA, con West Tankers Inc*.

STJCE C-523/07, asunto *Korkein hallinto-oikeus*.

#### **4.4.2.- Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.**

STJUE C-189/08 asunto *Zuid-Chemie BV*, apartado 24.

STJUE 4 C-533/08, asunto *TNT Express Nederland*

STJUE, C-301/08, asunto *Bogiatzi* (de Casada Ventouras), Rec. 2009, p. I-10185, ap. 19.

STJUE C-189/08 asunto *Zuid-Chemie BV*.

STJUE C-347/08, asunto *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*.

STJUE C- 560/08 asunto *Comisión vs. España*.

STJUE, C- 50/09, asunto *Comisión vs. Irlanda*.

STJUE C-275/09 asunto *Brussels Hoofdstedelijk Gewest vs. Vlaam Gewest*.

STJUE C-435/09, asunto *Comisión vs. Bélgica*.

STJUE C-115/09, asunto *Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland y otros vs. Bezirksregierung Arnsberg*.

STJUE C- 128/09 a C-131/09, C-134/09 y C- 135/09, asunto *Boxus*.

STJUE C-177/09 a C-179/09, asunto *Le Poumon vert de la Hulpe vs. Région Wallone*.

STJUE C- 560/08 asunto *Comisión vs. España*.

STJUE C-154/11, asunto *Ahmed Mahamdia vs. República Argelina Democrática y Popular*.

#### **4.4.3.- Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas.**

Conclusiones del Abogado General F. Capotorti el 10 de noviembre de 1976, en el asunto 21/76, *Bier vs Minas de potasio de Alsacia*.

Conclusiones del Abogado General, Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 16 de marzo de 1999 en el asunto en que recayó la STJCE C-440/97, de 28 de septiembre de 1999, asunto *GIE Groupe Concord y otros*.

Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, presentadas el 31 de enero de 2002, Asunto C-334/00, *Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa*.

Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 20 de noviembre de 2003, asunto C-159/02, *Turner*.



Conclusiones del Abogado General, Sr. Philippe Léger presentadas el 9 de septiembre de 2003 en el asunto *Gasser*, C-116/02 I-14720.

Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, de 18 de septiembre de 2003, C-18/02, Asunto *DFDS Torline A/S contra SEKO Sjöfolk Facket för Service og Kommunikation*.

Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed, C-4/03, Asunto *Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (GAT)* (extracto): “Considerando 5.

Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 9 de septiembre de 2004 Asunto *St. Paul Dairy* C-104/03.

Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, presentadas el 8 de julio de 2004, asunto C-27/02, *Petra Engler*.

Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger, presentadas el 14 de diciembre de 2004, Asunto C-281/02 *Andrew Owusu*. Considerando 75.

Conclusiones del Abogado General Sr. L.A. Geelhoed presentadas el 7 de abril de 2005, sobre medida prejudicial presentada por el Oberlandesgericht Hamm para la interpretación del artículo 16, número 1, letra a) del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968.

Conclusiones del Abogado General Sr. Philippe Léger presentadas el 8 de diciembre de 2005, C-539/03, asunto *Roche Nederland BV y otros*.

Conclusiones del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 14 de marzo de 2006, Asunto C-103/05, *Reisch Montage AG*.

Conclusiones Del Abogado General Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer presentadas el 8 de noviembre de 2006 Asunto C-292/05, *E. Lechouritou y otros*.

Conclusiones del abogado general, C- 185/07, asunto *Allianz SpA y Generali Assicurazioni Generali SpA, con West Tankers Inc*. Asimismo, ver numeral 27.

Conclusiones del Abogado General Sr. Paolo Mengozzi, de 24 de mayo de 2007, C-98/06, asunto *Freeport plc contra Olle Arnoldson*.

#### **4.5.- Tribunales arbitrales internacionales.**

Sentencia USA/Canadá, de 11 de marzo de 1941, asunto *Trail Smelter Arbitration*, R.S.A, Vol III, p. 1965.

Sentencia New Zealand/France, asunto *Rainbow Warrior*, U.N.R.I.A.A., vol. XX, 1990.

#### **4.6.- Jurisprudencia de Tribunales nacionales.**

##### **4.6.1.- Tribunales españoles.**

Sentencia Tribunal Constitucional español asunto C-140/1995, sobre inmunidad de jurisdicción.

STS 7826/1992. Sentencia del Tribunal Supremo español número de Recurso: 1492/90 número de Resolución: 880. Procedimiento: casación.

STS 20999/1992, sala de lo penal, de 23 de abril de 1992, Madrid, Ponente Enrique Bacigalupo Zapater. Nº Recurso: 3654/1992.

STS 12507/1992 Sentencia del Tribunal Supremo español de 31 de enero de 1992.

STS 3591/1998, Sentencia del Tribunal Supremo español de 14 de marzo de 2005. Procedimiento: casación.

STS 882/1998, sentencia del Tribunal Supremo español de 28 de enero de 2004. Procedimiento: casación.

STS 3752/1999. Sentencia del Tribunal Supremo español de 29 de mayo de 1999. número de Recurso: 2962/1994 número de Resolución: 470/1999. Procedimiento: casación.

STS 7363/2000, sala de lo penal, de 16 de octubre de 2000, Madrid, Ponente Joaquín Giménez García. Nº Recurso: 509/1999.

STS 16/2000, sala de lo penal, de 10 de enero de 2000, Madrid, Ponente Joaquín Giménez García. Nº Recurso: 3968/1997.

STS 646/2001. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid. número de Recurso: 72/1996 número de Resolución: 70/2001. Recurso de casación.

STS número 5568/2002. Tribunal Supremo español número de Recurso: 619/1997 número de Resolución: 805/2002. Procedimiento: casación.

STS 6937/2007. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid, número de Recurso: 3219/2000, número de Resolución: 1129/2007. Procedimiento: Casación.

STS 3625/2007. Sentencia del Tribunal Supremo español número de Recurso: 2300/2000. número de Resolución: 589/2007. Procedimiento: casación.

STS 5541/2008. Sentencia del Tribunal Supremo español número de Recurso: 942/2003 Madrid dictada con fecha 29 de octubre del 2008.

STS 7354/2008. Sentencia del Tribunal Supremo español número de Recurso: 3992/2001. número de Resolución: 1135/2008. Procedimiento: Casación.

STS 149/2010. Sentencia del Tribunal Supremo español. Sala de lo Civil, Madrid. número Recurso: 1165/2005 Sentencia de Casación de fecha 20/01/2010.

Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, sección 19, de 14 febrero 2005, asunto *Mundo Joven, S.A. y Winterthur Seguros Generales, Eurojet y Viajes Barceló*.

Sentencia Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 30 de junio de 2001. Rollo número 3208/2000. Procedimiento: apelación.

#### **4.6.2.- Tribunales de Estados comunitarios sin incluir a España.**

Sentencia de House of Lords, asunto *Spiliada Maritime Corporation vs Cansulex Ltd.*, 1986, AC 460, p. 476.

Sentencia de la Court of Appeal, Reino Unido, 1992, en el asunto *Harrods (Buenos Aires) Ltd.*

Sentencia de la Court of Appeal - Commercial Court, 2003, asunto *Roche Products Ltd. And others versus Provimi Ltd.*

Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París, asunto *Erika*, 16/1/2008.

Sentencia de la Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentencia de fecha 17 de julio de 2008, número 19595, sobre *Diritto marittimo*, 2009, p. 144.

Court of Appeal of England and Wales, de 23 de Julio de 2010 asunto *Cooper Tire & Rubber company and others- and – Shell Chemicals uk limited and others*

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 8 junio 2011, número 12410. Asunto *Haus & Gruñid Deutschland-Zen-travelband der Deutschen Haus y otros vs. Haus &Grundeigentum Marketing &Consulting s.r.l. y otros, Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, Edizioni CEDAM-PADOVA, Anno XLVIII, número 2, 2012

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 6 de diciembre de 1994, causa C-406/92, *Rivista Corte di giustizia*, 1995.

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 19 de mayo del 2009, número 11532, *Rivista Corte di giustizia*, Edizioni CEDAM-PADOVA, 2010.

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 15 de mayo del 2007, número 11185, *Rivista Corte di giustizia*, Edizioni CEDAM-PADOVA, 2008.

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 17 de octubre del 2002, número 14769, *Rivista Corte di giustizia*, Edizioni CEDAM-PADOVA, 2004.

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 24 de abril de 1999, número 274, *Rivista Corte di giustizia*, Edizioni CEDAM-PADOVA, 1999.

Corte di Cassazione (s.u) ordinanza 29 de enero del 2001, número 37, *Rivista Corte di giustizia*, Edizioni CEDAM-PADOVA, 2001.

#### **4.6.3.- Tribunales de Estados extracomunitarios.**

Corte de Apelaciones de Ontario, caso *Frymer vs. Brettschneider*-more sobre burden of proof en Antisuit-injunctions. Caso número 3275 de 1994.

Corte de Apelaciones, Manhattan, US Court of Appeals enero 1987, asunto *Bhopal*-Union Carbide.

Corte Suprema de Canadá, caso *Amchen products Inc vs. British Columbia* sobre Workers's compensation board.

Corte Suprema de Canadá, asunto *Morguard Investment Ltd. vs. De Savoye*, Diciembre, 20 de 1990, dossier 21116.

Corte Suprema de los Estados Unidos de América asunto *Shoe Co. vs. Washington Office of Unemployment Compensation & Placement et al*, 326 US 310 (1945).

Corte Suprema de los Estados Unidos de América asunto *Shaffer vs. Heitner*, Appeal from the Supreme Court of Delaware, 433 US 186 (1977).

Corte Suprema de los Estados Unidos de América asunto *World-Wide Volkswagen Co. vs. Woodson* 444 US 286 (1980).

Corte Suprema de los Estados Unidos de América asunto *Helicopteros Nacionales de Colombia S.A. vs. Hall* 466 US 408 (1984).

Corte Suprema de los Estados Unidos de América asunto *Asahi Metal Industry Co. vs. Superior Court* 480 US 102 (1987).

Corte Suprema de Victoria, asunto *Dagi v Broken Hill Proprietary Company Limited*, sentencia 22 de septiembre de 1995.

Sentencia del Tribunal Federal del Distrito sur de Nueva York, asunto *Prestige* 2/1/2008.

Sentencia del Tribunal Federal del Distrito Norte de Illinois asunto *Amoco Cadiz* 11/01/1988.

#### **4.7.- Acuerdos extrajudiciales.**

Transacción en el Real Decreto-Ley 6/2002, asunto *Mar Egeo* víctimas contra Estado español y otros de 4 de octubre del 2002.